

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN
DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECONOMÍA Y DOCUMENTACIÓN

**Política documental en España en el siglo XIX. La acción del
Estado en la promoción de archivos y bibliotecas**

Trabajo de investigación que presenta
la licenciada María Teresa Fernández Bajón
para la obtención del título de Doctora en Ciencias de la Información
bajo la dirección de los Profesores Doctores José López Yepes y Juan Ros García

María Teresa Fernández Bajón
C.I. 123456789
1980-01-01

Se recuerda al lector no hacer más
uso de esta obra que el que
permiten las disposiciones Vigentes
sobre los Derechos de Propiedad
Intelectual del autor. La Biblioteca
queda exenta de toda responsabilidad.

MADRID

2000

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
DE MADRID
FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA INFORMACION
REGISTROS DE LIBROS
BIBLIOTECA GENERAL
Nº Registro T.D. 609

Índices

1. Capítulo I. Objeto. Método. Estado de la cuestión: Fuentes y bibliografía	15
1.2. Objeto de la investigación.....	15
1.3. Método de la investigación	18
1.4. Estado de la cuestión: Fuentes y bibliografía	19
2. Capítulo II. Desarrollo legislativo y estructuras administrativas en materia de archivos y bibliotecas en el siglo XIX.....	24
2.1. Introducción	24
2.2. Las Cortes de Cádiz y la vuelta de Fernando VII	26
2.3. El trienio liberal (1820-1823) y la década absolutista (1823-1833)	36
2.4. La regencia de la reina gobernadora M ^a Cristina.....	41
2.5. El reinado de Isabel II.....	53
2.5.1. La revolución de 1854	65
2.6. De la caída del reinado de Isabel II a la Restauración de la Dinastía Borbónica.....	72
2.6.1. El rey Amadeo I de Saboya	77
2.6.2. La I República.....	81
2.7. La Restauración Borbónica.....	84
2.7.1. El reinado de Alfonso XII.....	91
2.7.2. La reina regente M ^a Cristina	97
3. Capítulo III. El Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios.....	105
3.1. Creación del Cuerpo: escalafón, categorías, ingreso y ascensos	105

3.1.1. Nacimiento, formación y clasificación de sus miembros	105
3.1.2. Nueva denominación del Cuerpo por Real Decreto de 12 de junio de 1867: la sección de Anticuarios.	110
3.1.2.1. El escalafón general del Cuerpo: secciones, categorías, grados, ingreso y ascenso	113
3.1.2.2. Decreto de 10 de noviembre de 1868 derogando el Real Decreto de 12 de junio de 1867	116
3.1.2.3. Reestructuración del Cuerpo por Real Decreto de 5 de julio de 1871	117
3.1.2.4. Reorganización del Cuerpo mediante el Real Decreto de 12 de junio de 1867	121
3.1.3. Supresión de las plazas de gracia y nuevas formas de ingreso y ascenso.	122
3.1.3.1. Real Decreto de 12 de octubre de 1884 reorganizando el personal del Cuerpo	125
3.1.3.1.1. Reglamento de desarrollo del Real Decreto de 12 de octubre de 1884	128
3.1.3.2. Reformas en el modo de ingresar y ascender en el Cuerpo	130
3.1.3.3. Las primeras oposiciones a ingreso en el Cuerpo	137
3.2. Los Reglamentos orgánicos del Cuerpo	141
3.2.1. Real Decreto de 5 de julio de 1871	141
3.2.2. Real Decreto de 25 de marzo de 1881	147
3.2.3. Real Decreto de 19 de junio de 1885	152
3.2.4. Real Decreto de 18 de noviembre de 1887	157
3.3. La Junta Consultiva del Cuerpo	165
3.3.1. La Junta Superior Directiva de Archivos y Bibliotecas del Reino	165
3.3.2. La Junta Consultiva de Archivos, Bibliotecas y Museos	167
3.3.3. La Junta Facultativa de Bibliotecas, Archivos y Museos	171

3.4. Incorporación de los Establecimientos documentarios públicos y su personal al Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios bajo la dependencia de la Dirección general de Instrucción pública.....	179
3.4.1. Establecimientos ministeriales.....	180
3.4.2. Establecimientos universitarios	188
3.4.3. Establecimientos de ámbito provincial.....	189
3.5. Proyecto de Reglamento de la Sociedad de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios 1883.....	194
 4. Capítulo IV. Actuaciones legislativas en materia de educación y enseñanza pública.....	 204
4.1. La educación y la enseñanza en los primeros años del reinado de Fernando VII. La Constitución de 1812	204
4.2. La incorporación de las disciplinas documentarias en los Reglamentos generales de Instrucción pública y los Planes de Estudio del siglo XIX.....	211
4.2.1. El Reglamento general de Instrucción pública del trienio liberal (1820-1823)	211
4.2.2. El Plan general de Estudios de 1824.....	217
4.2.3. El Plan de Estudios de 4 de agosto de 1836	220
4.2.4. El Plan de Estudios de 29 de octubre de 1836.....	223
4.2.5. El Plan de Estudios de 1845	224
4.2.5.1. El Reglamento de desarrollo del Plan de Estudios de 1845	230
4.2.6. El Plan de Estudios de 1847	233
4.2.6.1. El Reglamento de desarrollo para la ejecución del Plan de 1847..	234
4.2.7. El Plan de Estudios de 1850	236
4.2.7.1. El Reglamento de desarrollo para la ejecución del Plan de 1851 ...	238
4.2.8. Reglamento de Estudios de 1852.....	239
4.2.9. Programas de la Facultad de Teología.....	241
4.2.10. Programas de las carreras de Diplomática y Notariado	242

4.3 La Ley de Instrucción pública de 9 de septiembre de 1857: El proyecto de ley de Instrucción Pública de 9 de diciembre de 1855.....	243
4.3.1. El proyecto de Instrucción pública de 9 de diciembre de 1855	243
4.3.2. Ley de 17 de julio de 1857.....	245
4.3.3. Ley de Instrucción pública de 1857.....	246
4.3.4. Modificaciones de la Ley de Instrucción pública	251
4.4. Reorganización de la enseñanza superior: las Facultades de Filosofía y Letras, Derecho y Farmacia	255
4.4.1. Los estudios de Filosofía y Letras	255
4.4.2. Los Planes de estudio de la Facultad de Derecho	255
4.4.3. Los planes de estudio de la Facultad de Farmacia.....	260
4.5. Cuerpos consultivos y de inspección en asuntos de enseñanza	261
4.5.1. Creación de la Dirección general de Estudios	261
4.5.2. Supresión de la Dirección general de Estudios y creación de la Inspección general de Instrucción pública (1825-1834).....	263
4.5.3. Desaparición de la Inspección general de Instrucción Pública y creación de la Dirección general de Estudios (1834-1836)	265
4.5.4. Creación del Consejo de Instrucción Pública en 1836	267
4.5.5. Restablecimiento de la Dirección general de Estudios (1836-1843).....	270
4.5.6. Supresión de la Dirección general de Estudios y creación del Consejo de Instrucción pública (1843-1857) y de una Sección de Instrucción pública.....	271
4.5.6.1. Reestructuración de Consejo de Instrucción pública en el año 1845	273
4.5.6.2. El Consejo de Instrucción pública bajo la dependencia del.....	276
Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras públicas	276
4.5.6.3. El Consejo de Instrucción pública bajo la dependencia del Ministerio de Gracia y Justicia y del Ministerio de Fomento.....	281
4.5.7. La Ley de Instrucción pública y el Real Consejo de Instrucción pública.....	283

4.5.7.1. Adaptación del Consejo de Instrucción pública a la Ley de Instrucción pública.....	286
4.5.8. La nueva reorganización del Real Consejo de Instrucción Pública en el año 1866.....	294
4.5.9. Sustitución del Consejo de Instrucción pública por la Junta Consultiva de Instrucción pública.....	298
4.5.10. Disolución de la Junta de Instrucción pública e implantación del Consejo de Instrucción pública.....	299
4.5.11. El Consejo de Instrucción pública en la última década del siglo XIX.....	303
5. Capítulo VI. La Escuela Superior de Diplomática	311
5.1. La creación de la Escuela Superior de Diplomática y sus Reglamentos de desarrollo.....	311
5.1.1. El primer Reglamento de la Escuela de Diplomática aprobado por Real Decreto de 11 de febrero de 1857.....	317
5.1.2. El Reglamento de la Escuela de Diplomática aprobado por Real Decreto de 31 de mayo de 1860.....	320
5.2. De la denominación superior a especial de la Escuela de Diplomática.....	323
5.3. Desaparición de la Escuela Superior de Diplomática.....	326
5.3.1. Reorganización de la enseñanza de las Facultades.....	326
5.3.2. La supresión de la Escuela en el año 1900	328
5.4. Sobre el Título académico expedido por la Escuela	330
5.4.1. Denominación.....	330
5.4.2. Facultades privativas del título	333
5.4.3. Reconocimiento oficial del título de los estudios privados de Diplomática.....	336
5.5. Programas y contenidos de los estudios de la carrera de Diplomática	337
5.5.1. Programas de los cursos académicos impartidos en el período 1860-1870	341

5.5.2. Programas de los cursos académicos impartidos en el período 1870-1880	349
5.5.3. Programas de los cursos académicos impartidos en el período 1880-1900	352
5.6. Relación de la Escuela con el Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios.	358
5.6.1. Incorporación de los Catedráticos de la Escuela al Cuerpo.....	358
5.6.2. Procedimiento de oposiciones para la provisión de las plazas de catedráticos y profesores auxiliares de la Escuela	363
6. Capítulo VI. Las Instituciones documentales en el siglo XIX.....	373
6.1. La creación de la Biblioteca del Congreso y la Biblioteca del Senado	373
6.1.1. La Biblioteca del Congreso.....	373
6.1.1.1. Primera etapa: Constitución de la Biblioteca de Cortes y su Comisión.....	373
6.1.1.1.1. Proyecto del Reglamento Nacional de Bibliotecas provinciales y de la Planta fundamental de la Biblioteca Nacional Española de Cortes de 8 de noviembre de 1813	377
6.1.1.2. Segunda etapa de la Biblioteca de Cortes.....	379
6.1.1.3. Tercera etapa. Fase final de la Biblioteca de Cortes.....	380
6.1.1.4. La Ley de 19 de mayo de 1838: Supresión de la Biblioteca de Cortes.....	382
6.1.1.5. La Biblioteca del Congreso.....	383
6.1.2 La Biblioteca del Senado	387
6.1.2.1. La formación de la Biblioteca del Senado: El Estatuto Real de 1837 y la Biblioteca del Infante Carlos María Isidro de Borbón.....	387
6.1.2.2. El Reglamento de Régimen interno de la Biblioteca de 1851	390
6.1.2.3. La Comisión de Fomento y Conservación de la Biblioteca.....	393
6.2. Bibliotecas Públicas	396
6.2.1. Origen de las Bibliotecas Públicas.....	396

6.2.2. La desamortización de Mendizábal como contribución a la creación de las Bibliotecas Públicas.....	400
6.2.3. La Ley de Instrucción Pública de 1857 y la organización bibliotecaria	404
6.2.4. Los Depósitos de libros.....	409
6.3. Bibliotecas populares.....	410
6.3.1. La creación de las Bibliotecas escolares.....	410
6.3.2. Instrucciones que han de regir en las Bibliotecas populares	413
6.4. La Biblioteca Nacional	417
6.4.1. De la Real Librería Pública a la Biblioteca Nacional	417
6.4.2. Reglamento de la Biblioteca Nacional de 1857.....	420
6.4.3. La incidencia del Cuerpo Facultativo en la Biblioteca Nacional.....	423
6.4.4. Los traslados de la Biblioteca Nacional.....	424
6.4.5. Fondos Bibliográficos de la Biblioteca Nacional	425
6.4.6. El estado de la Biblioteca en los años 1881 y 1882.....	426
6.5. Biblioteca de la Universidad Central de Madrid	428
6.5.1. La Universidad Central de Madrid	428
6.5.2. La Biblioteca de la Universidad Central de Madrid	432
6.6. Bibliotecas de los Ministerios.....	436
6.7. El Archivo de Cortes: El Archivo del Congreso de los Diputados y el Archivo del Senado.....	438
6.7.1. El Archivo del Congreso de los Diputados.....	438
6.7.2. El Archivo del Senado	442
6.8. Los Archivos Ministeriales.....	445
6.8.1. Archivo del Ministerio de Fomento.....	448
6.8.2. Archivos dependientes del Ministerio de Gracia y Justicia.....	449
6.8.2.1. Archivos Notariales	449
6.8.2.2. Archivos Judiciales	454

6.8.3. Archivo del Ministerio de Hacienda.....	456
6.8.3.1. Archivo General del Ministerio de Hacienda	456
6.8.3.2. Archivos generales de Hacienda pública de las provincias	457
6.8.3.3. Incorporación de los Archivos provinciales y del Archivo general de Hacienda al Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios	460
6.9. Archivo General de Alcalá de Henares.....	461
6.9.1. Memoria anual recogida en el Anuario del Cuerpo del año 1882	464
6.10. Archivo Histórico Nacional	466
6.10.1. Antecedentes y origen del Archivo Histórico Nacional	466
6.10.2. La creación del Archivo Histórico Nacional	468
6.11. Organización Archivística	471
6.11.1. La organización de los Archivos a partir de la Ley de Instrucción Pública de 1857.....	474
6.12. Gobiernos civiles	477
6.13. Diputaciones Provinciales.....	477
6.14. Consejo de Estado.....	478
6.15. Universidad Central	478
6.16. Presidencia del Gobierno	479
 7. Capítulo VII. Conclusiones.....	 482
 1. Apéndice I.....	 489
1.1. Fuentes inéditas.....	489
1.2. Fuentes publicadas	499
1.2.1. Anuarios, catálogos, diarios de sesiones, diccionarios, guías y memorias.....	499
1.2.2. Fuentes legislativas	505

2. Apéndice II	511
2.1. Bibliografía	512
2.1.1. Obras generales.....	512
2.1.2. Estructura administrativa, legislación, política de archivos y bibliotecas en el siglo XIX.....	513
2.1.3. El Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios	521
2.1.4. La enseñanza de las disciplinas documentarias	523
2.1.5. La Escuela Superior de Diplomática	525
2.1.6. Archivos y Bibliotecas en el siglo XIX	527
2.2. Disposiciones legislativas.....	540
2.2.1. Disposiciones generales.....	538
2.2.2. Estructura administrativa, legislación, política de archivos y bibliotecas en el siglo XIX.....	540
2.2.3. El Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios	555
2.2.4. La enseñanza de las disciplinas documentarias	564
2.2.5. La Escuela Superior de Diplomática	573
2.2.6. Archivos y bibliotecas en el siglo XIX.....	577

CAPÍTULO I

Objeto. Método. Estado de la cuestión: Fuentes y bibliografía

1. Objeto. Método. Estado de la cuestión: Fuentes y bibliografía

1.2. Objeto de la investigación

La presente investigación, como es preceptivo en actividades de esta índole, trata de resolver un problema científico inscrito en un tema que lo comprende y que, a su vez, cabe disgregar en problemas específicos. Digamos de entrada que la presente investigación no se plantea de modo aislado sino que, como es de doctrina, se inscribe dentro de las líneas de investigación de un Departamento concreto, a saber, el de Biblioteconomía y Documentación de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, el más antiguo de la Universidad española y, por consiguiente, el primero que se planteó la resolución de aquellos problemas cuya resolución daba lugar a los fundamentos del nuevo campo del saber que se iniciaba en 1975 y que se conoce de modo genérico como Documentación.

La línea de investigación a la que nos referimos es la constituida por el intento de conocimiento profundo de las denominadas *políticas de información y documentación*, es decir, del estudio de las decisiones políticas en nuestro campo del saber, de sus motivaciones y de sus consecuencias, en suma. El precedente de esta tesis doctoral es el libro de los profesores Ros y López Yepes (*Políticas de Información y Documentación*. Madrid, Síntesis, 1994) y ellos son, precisamente, los directores de la tesis doctoral que ahora se presenta a la consideración del tribunal. Nuestro intento es una continuación retrospectiva del primer esfuerzo desplegado por ellos hacia el siglo pasado y éste es, de modo paladino, el objeto esencial de nuestra investigación, a saber, analizar las medidas políticas desplegadas por los poderes

públicos a lo largo del siglo XIX en materia de documentación, o - de acuerdo con el lenguaje de la época, aún vigente- en materia de archivos y bibliotecas y ello desde una doble perspectiva: desde los esfuerzos de la propia Administración por dotarse de organismos documentarios para su más eficaz funcionamiento y desde los esfuerzos en beneficio directo de la sociedad española. Todo ello comporta, por consiguiente, el estudio de dicha política en el campo de la enseñanza, en la proliferación de instituciones documentarias y en la promoción de funcionarios especialistas en el manejo eficaz de dichas instituciones.

La justificación del tema es evidente. La escasa bibliografía sobre el mismo, dispersa y fragmentaria por lo demás, hacía necesario un estudio de conjunto que contribuyera al conocimiento de la política española en la materia y, en consecuencia, supusiera una aportación al conocimiento de la historia de la Documentación en España, disciplina que todavía adolece de innumerables lagunas (Véase López Yepes, José. *La Documentación como disciplina. Teoría e historia*. Pamplona, Eunsa, 1995).

Como decíamos, el objeto de esta tesis doctoral -que responde al problema científico general enunciado- debe desmenuzarse en problemas específicos que son estudiados en todos y cada uno de los distintos capítulos. De modo concreto procede presentarlos como sigue:

- 1) En primer lugar, no debemos olvidar las especiales características políticas, sociales y económicas que configuran el escenario en que se desarrolló la vida española a lo largo de la centuria decimonónica. De ahí que la primera cuestión que ha sido forzoso abordar ha sido la correspondiente al análisis de las estructuras administrativo-políticas del siglo sobre la base del preceptivo desarrollo legislativo y siempre en relación con las actuaciones en materia de archivos y bibliotecas.

2) El siguiente objetivo concreto de estudio ha tratado de perseguir la figura e importancia de los sujetos protagonistas del cambio documentario en nuestro siglo XIX, a saber, la creación del Cuerpo de funcionarios archiveros, bibliotecarios y anticuarios, medida que se nos antoja especialmente relevante y que ha merecido el tratamiento que le corresponde en las páginas siguientes.

3) Sin duda, la misión científica y de divulgación cultural que persiguen las instituciones documentarias se ciernen de modo decisivo en el ámbito de las instituciones docentes como coadyuvadoras de la elevada misión de las mismas. El capítulo cuarto, por ello mismo, estudia todas las acciones legislativas que se sucedieron en el siglo XIX a fin de que sirvan de marco de la política propiamente documental.

4) A su vez, para llevar a cabo estos objetivos, el Cuerpo facultativo antes aludido desempeñó y todavía desempeña en nuestros días un papel estelar pero la formación de los profesionales del documento tuvo que imbuirse de rango universitario y como resultado de esta inquietud se produjo la creación de la Escuela Superior de Diplomática. Este centro es el auténtico precedente institucional de los estudios reglados de Documentación y su estudio se aborda en el capítulo quinto en el que, por lo demás, se hace hincapié en aquellos aspectos docentes más vinculados al tema que nos ocupa.

5) Finalmente, y como corolario final, esta tesis doctoral ha tratado de conocer el impacto que las realizaciones anteriores han tenido en el ámbito concreto del funcionamiento de las más importantes instituciones documentarias de la época como la Biblioteca del Congreso y del Senado, la Biblioteca Nacional, las bibliotecas de los departamentos ministeriales, las bibliotecas públicas, las bibliotecas populares y diversos archivos como el de las Cortes, el del Senado, el Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares y el prototípico Archivo Histórico Nacional.

1.3. Método de la investigación

Como se sabe, el uso acertado de los procedimientos metodológicos sabiamente adecuados al tema de la investigación garantizan en gran medida el éxito de la investigación de modo paralelo a la adecuación que debe producirse entre el tema y el propio investigador. En nuestro caso, y tratándose de una investigación de carácter teórico y de análisis de la aplicación de los contenidos teóricos a las actuaciones institucionales y sociales, los procedimientos metodológicos de que nos hemos valido han sido los siguientes:

- a) Distribución coherente -en el índice de la tesis doctoral- de la materia estudiada de tal manera que, a partir de la legislación se observa aquélla que promueve o establece políticas de archivos y bibliotecas para seguir con el estudio de los funcionarios encargados de la misma, el estudio de su centro de formación y el impacto de su actuación en una serie de instituciones documentales notables.
- b) Investigación en las fuentes -institucionales, documentales y personales- y bibliografía que tratasen del objeto de nuestra investigación. Es obvio que, en una investigación de políticas, ha sido el derecho positivo y la fuente legislativa los factores que hemos considerado como la documentación primordial de punto de partida.
- c) Comparación, en la medida de lo conveniente, entre la materia legislada y la repercusión de la misma en el campo práctico.
- d) Investigación en archivos a fin de buscar y estudiar los documentos inéditos que han servido de base fidedigna para el análisis de determinados aspectos de la investigación.

1.4. Estado de la cuestión: Fuentes y bibliografía

Decíamos al principio de este capítulo que la bibliografía existente sobre nuestro tema era escasa y fragmentaria. Esta ha sido, lógicamente, una de las motivaciones que nos han conducido a abordar el estudio. Como se sabe, son numerosas las lagunas existentes en el ámbito de la historia española de las Ciencias de la Documentación tanto en los aspectos doctrinales como institucionales. La reciente tesis doctoral leída por nuestra compañera la profesora Esperanza Martínez Montalvo sobre la vida y la obra de Javier Lasso de la Vega ha iluminado uno de los períodos más interesantes de nuestra historia documental, precisamente el que coincide con la entrada en nuestro país de las nuevas doctrinas propuestas por Paul Otlet, el fundador de la disciplina documental. Sin embargo, las conclusiones a que ha llegado la citada profesora deben enriquecerse con el conocimiento básico que ahora deseamos ofrecer de la política documental realizada en el siglo pasado.

Para ello, como ya se indicaba en el epígrafe anterior, ha sido necesario consultar de modo pormenorizado la documentación siguiente:

a) Las colecciones legislativas, muy abundantes, dados los cambios políticos que se operaban sin cesar en el período de nuestro interés.

b) Los trabajos generales de historia de España y de historia institucional. Las instituciones políticas como las Cortes o sus dimanentes -Congreso y Senado- han sido estudiadas al igual que los frecuentes textos constitucionales. Junto a los trabajos clásicos de historia general de la España del período, se han tenido en cuenta los estudios sobre estructura y legislación administrativas como los de Barrero García, Cos Gayón, Fernández y Santamaría Pastor, García Madaria, Sánchez Arcilla o aquellos otros que estudiaban la estructura de determinados departamentos ministeriales como el de Bermejo Cabrero para el Consejo de Ministros y la

Presidencia del Gobierno o el de Garijo Ayestarán para el Ministerio de la Gobernación. Otros aspectos de la bibliografía de este capítulo se han referido a la evolución de los textos constitucionales (Sánchez Agesta, Tomás Villarroya, etc.) o a la propia legislación sobre archivos y bibliotecas del período recogida por Villa Serra.

c) Las vicisitudes de la creación del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, así como sus asociaciones profesionales, han sido estudiadas en algunos trabajos aunque se requería un estudio de conjunto completo que hemos tratado de llevar a cabo en la presente investigación.

La formación de estos funcionarios ha sido un tema recurrente y ha sido considerado en las obras de Bordonau y las aportaciones de los mismos así como sus semblanzas biográficas aparecen en el trabajo clásico de Ruiz Cabriada; la legislación sobre el cuerpo ha sido recopilada en reciente trabajo de Torreblanca.

d) El capítulo dedicado a la enseñanza y a sus instituciones, como marco de ubicación y aplicación de las bibliotecas, no ha dispuesto de excesiva bibliografía. Son, desde luego, también importantes las lagunas que todavía aquejan al panorama histórico educativo del siglo XIX. Sin embargo, algunos trabajos constituyen investigación muy importante como los de Peiró para la época de la Restauración y el de Aurora M. Alonso en cuanto relación de una biblioteca -la de los reales Estudios de San Isidro- con el ámbito universitario o el panorama bibliotecario tan amplio descrito por San Segundo.

e) Para el capítulo referido a la formación de los profesionales del documento -nueva terminología para los archiveros, bibliotecarios y anticuarios del siglo pasado- las fuentes y la bibliografía se circunscriben esencialmente al estudio de la creación y desarrollo de la Escuela Superior de Diplomática con especial atención al sector de los archiveros. Los trabajos de Allende Salazar, Godín Gómez y Monlau Roca atienden los aspectos generales. Los de Peiró y Pasamar, Sotelo Martín y

Torreblanca se ocupan más de la formación de los archiveros. Para la formación de los bibliotecarios sigue vigente el importante trabajo de García Ejarque y el sector de los bibliógrafos está representado en la investigación biográfica que, sobre Cayetano Rosell, publicó Alicia Moreno en el Homenaje a José Simón Díaz.

f) Sin duda, es más abundante la bibliografía básica sobre las instituciones documentarias que nos ha tocado tratar en el último capítulo de nuestra investigación, sin perjuicio de que los contenidos de mayor interés para nosotros -la aplicación de la legislación en el desarrollo de las mismas- no haya sido, como es obvio, suficientemente tratado por los investigadores que nos han precedido. En este caso, la bibliografía ha respondido a la selección previa de las instituciones más representativas reflejadas en el trabajo general de San Segundo, hemos tenido en cuenta antecedentes doctrinales como las *Reflexiones literarias* que redactó el Padre Sarmiento para formular una Biblioteca Real y unas bibliotecas públicas. García Morales ha trabajado sobre la Biblioteca Real y también Hipólito Escolar del que, asimismo, hemos consultado sus trabajos sobre historia de las bibliotecas. La Biblioteca Nacional ha sido examinada con la ayuda de los trabajos de Vaca, Bretón y Orozco, Paz Espeso, Crespo Tobarra y Carrión. La bibliografía sobre el resto de las bibliotecas cabe agruparlas en los siguientes grupos:

- 1) Las bibliotecas de Cortes, Congreso y Senado se encuentran estudiadas en Ortiz de Burgos, Rosario Herrero, Alicia Martín, García Ejarque y Salavert.
- 2) El estudio de las bibliotecas universitarias se ha iniciado a partir del elenco bibliográfico de Mateu Ibars, Cecilia Fernández y Aurora Miguel para la de los Reales Estudios de San Isidro, más arriba citada.
- 3) Las bibliotecas populares y públicas han sido estudiadas, desde la vertiente pedagógica, por Viñao, y sus antecedentes en trabajos contemporáneos de Castellanos y Picatoste junto a otros textos que recogemos en el repertorio bibliográfico final.

- 4) El sector de los archivos se mueve en un amplio abanico que recoge, entre otras que citamos en su lugar, aportaciones sobre los archivos de la Administración (Alvarez García), departamentos ministeriales (Salas Larrazábal), Archivo Histórico Nacional (*Anuario del Cuerpo Facultativo* de 1881 y 1882, Vignau , Contel y Crespo Noguera), Archivo General de la Administración (*RABM* 1881, Pescador del Hoyo y Conde Villaverde) y Archivos de Cortes, Congreso y Senado (Gandarias y Valle de Juan).

Pero, como se observará en las páginas de los capítulo siguientes, aunque la bibliografía existente ha sido de inestimable ayuda en nuestra tarea se ha considerado necesario requerir el concurso de las fuentes de archivo que, como se sabe, no solo sirven para apuntalar de modo mas riguroso las argumentaciones del investigador sino que, con mucha frecuencia, se utilizan, como ha sido nuestro caso, para desvelar aspectos desconocidos de la materia a investigar. Las referencias tanto de las fuentes como de la bibliografía se encuentran reunidas en el repertorio bibliográfico que insertamos en el apéndice 1.

CAPÍTULO II

Desarrollo legislativo y estructuras administrativas en materia de archivos y bibliotecas en el siglo XIX

2. Desarrollo legislativo y estructuras administrativas en materia de archivos y bibliotecas en el siglo XIX

2.1. Introducción

En el presente capítulo pretendemos llevar a cabo el estudio de las transformaciones introducidas, en la Administración central del Estado¹ y en sus estructuras orgánicas, por los Gobiernos que se sucedieron en España a lo largo del siglo XIX y, más concretamente, a partir del período histórico que se inicia con la proclamación de las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812, al objeto de conocer las dependencias ministeriales competentes en funciones relativas a la materia que nos ocupa de Políticas de Información y Documentación. Por ello, junto al análisis de las disposiciones legislativas que proponen y regulan estos cambios, abordaremos, sin hacer historia de todos los acontecimientos, aquellos que tengan especial relevancia con el *cómo* y el *porqué* de la aparición de las sucesivas Constituciones, por considerar a estas leyes fundamentales, fuente de donde emana el principio de la división de poderes que rigen el funcionamiento del Estado.

El siglo XIX se inicia con los acontecimientos que van a determinar, tras las abdicaciones de Bayona y la invasión napoleónica, la fragmentación del Estado y la coexistencia y confluencia de tres centros de poder, que el profesor Julio Aróstegui define como:

[...] primero, el que derivaba de las instituciones preexistentes, sobre las que se colocaría ahora la Junta de Gobierno que Fernando VII dejó

¹ Refiriéndonos a la Administración central, hay que destacar, el trabajo de José María GARCÍA MADARIA, *Estructura de la Administración central (1808-1931)*. Madrid: Instituto Nacional de Administración Pública, 1982. (Colección Estudios de Historia de la Administración), pp. 357; así como ESCUDERO, J. A., *Los Secretarios de Estado y del Despacho*, 4 vols., 2ª ed., Madrid, 1976, y BERMEJO, José Luis y otros *Estudios de Historia del Derecho y de las Instituciones*. Alcalá de Henares: Universidad, 1989.

establecida al partir al encuentro de Napoleón, y que comprendían los consejos -el de Castilla como más poderoso-, las Audiencias y capitanías generales y organismos de menor rango. Surgió luego un poder creado por el hecho mismo del alzamiento anti francés, materializado en las Juntas Provinciales, la Central, la Regencia y, por fin, las Cortes. Por último, el aparato estatal que intentaron crear el emperador y su hermano José con la colaboración de los españoles que aceptaron el hecho de Bayona, es decir, los afrancesados².

El carácter fundamental de la administración josefina en España fue la intención reformista que tuvo su origen en la llamada *Constitución de Bayona*³ cuando Napoleón decidió dotar a los españoles de un texto constitucional que plasmase sus deseos reformadores.

La Constitución de Bayona, de fecha 8 de julio de 1808, consagra un sistema político bastante autoritario basado en cuerpos colegiados -Senado, Cortes, Consejo de Estado- sin coordinación entre ellos y sin iniciativa legal. Divide en nueve los ministerios; Justicia, Negocios Eclesiásticos, Negocios Extranjeros, lo Interior, Hacienda, Guerra, Marina, Indias y de Política General con una vigencia teórica que finaliza con el reinado de José Bonaparte de 1813. La estructura ministerial que declara fue aplicada por el Decreto del Gobierno de José Bonaparte de 6 de febrero de 1809 en el que se señalaban las atribuciones de la Secretaría de Estado y demás

² ARÓSTEGUI SÁNCHEZ, J. *Un nuevo sistema político*. En *Historia de España*. Madrid: Historia 16, 1986, pp. 769. Consúltense además, PALACIO ATARD, Vicente. *Fin de la sociedad española del Antiguo Régimen*. Madrid, 1962.

³ Muy debatida ha sido por historiadores y constitucionalistas la cuestión de si debe o no considerarse como española la Constitución de Bayona de 1808, texto elaborado y promulgado en territorio extranjero bajo las directrices de Napoleón Bonaparte. Sin embargo, pudo haber sido un camino hacia una España más liberal y moderna y aunque parezca paradójico, va a ser esta Constitución la que sirva formalmente de modelo a la Constitución que se promulgue en Cádiz en 1812.

Ministerios confiando al Ministerio de Interior⁴ las cuestiones relativas a la administración civil del reino y fomento absorbiendo las funciones administrativas y políticas del Consejo de Castilla. Este Ministerio estaba integrado en tres divisiones, siendo la segunda la encargada de la Instrucción pública.

2.2. Las Cortes de Cádiz y la vuelta de Fernando VII

La Junta Suprema Central Gubernativa del Reino, que había asumido los poderes transmitidos por la Juntas Provinciales, pasa a cedérselos a un Consejo de Regencia que convoca Cortes constituidas en Cádiz y cuya labor final será la Constitución promulgada el 19 de marzo de 1812⁵, una vez Constituidas las Cortes generales y extraordinarias⁶, sobre las que reside la soberanía nacional, se reconoce y proclaman como único Rey a Fernando VII de Borbón por *Decreto I de 24 de septiembre de 1810*⁷.

⁴ Sobre el Ministerio del Interior en la ocupación francesa, ver MERCADER RIBA: *José Bonaparte, rey de España (1808-1813). Estructura del Estado español bonapartista*. Madrid, 1983, pp. 115-134. También véase SUÁREZ VERDAGUER, Federico. *La creación del Ministerio del Interior en España*. "AHDE" 19 (1948-1949), pp. 15-56.

⁵ Ángel MARTÍNEZ DE VELASCO. *España, 1808-1833*. En *Manual de Historia de España. Siglo XIX*. Madrid: Historia 16, 1990, pp. 18-80, describe cómo se presentó la sesión de apertura de las Cortes en el Teatro Cómico de la ciudad de Isla de León, actual San Fernando, en Cádiz. Para este autor la improvisación parece ser la nota dominante debido a la falta de un programa político claro y delimitativo de la Regencia. No estaba previsto, añade, ni siquiera la composición de la mesa presidencial y el orden del día que debía ser debatido.

⁶ Las sesiones de las Cortes de Cádiz han sido recogidas en los Diarios de Sesiones de las Cortes de Cádiz que transcriben los contenidos de las mismas a partir de manuscritos de los taquígrafos. También debe consultarse los tomos 1 y 2 de FERNÁNDEZ MARTÍN, Manuel. *Derecho Parlamentario Español*. Madrid: Congreso de los Diputados. Dirección de Estudios y Documentación de la Secretaría General, 1992. 3t. y el artículo de FIESTAS LOZA, Alicia. *El diario de sesiones de las Cortes: 1810-1814*. Anuario de historia del Derecho español. T. 65 (1995), pp. 533-558. También han trabajado en esta línea, CASTRO, Adolfo de, *Cortes de Cádiz. Complementos de las sesiones*. Madrid: Imp. Prudencio Pérez de Velasco, 1913, 2 vols. y MADRAZO, Francisco, *Las Cortes Españolas...* Madrid: Imp. D. A. Rubí, 1857.

⁷ Las disposiciones legislativas reseñadas en el presente epígrafe están publicadas en *Colección de los Decretos y Ordenes que han expedido las Cortes Generales y extraordinarias desde su instalación, de 24 de septiembre hasta igual fecha de 1811*. Madrid, 1820, t. I.

En este sentido se viene considerando que el punto de partida de la proliferación de disposiciones sobre organización y funcionamiento de la Administración Central en España arranca con las Cortes de Cádiz, en 1812⁸.

Las Cortes, tal y como recoge el historiador Julio Aróstegui, desarrollaron una multiforme obra de gobierno a través de numerosos decretos que afectaron a todos los niveles legislativos intentando poner en marcha la mecánica gubernativa del nuevo modelo de Estado⁹.

El conjunto de reformas políticas que conlleva este nuevo modelo establece la división de los tres poderes; por un lado el poder legislativo se reserva a las Cortes para que lo ejerzan en toda su extensión; por lo que respecta al poder ejecutivo las Cortes lo destinan a un Consejo de Regencia que lo ejerza, interinamente, hasta que se elija el gobierno que más convenga; al mismo tiempo se reconoce la soberanía nacional de las Cortes jurando obediencia a las leyes y decretos que de ellas emanan. En este sentido, las Cortes generales y extraordinarias fijan por *Decreto de 16 de enero de 1811* el Reglamento provisional del Poder ejecutivo con los límites de la potestad ejecutiva que han confiado al Consejo de Regencia y determinan las facultades que convienen para su debido desempeño.

El Reglamento regula por una parte, la composición y características de los miembros del Consejo de Regencia, estableciendo que el Poder ejecutivo tendrá el nombre de Consejo de Regencia. Este Consejo nombrará los Secretarios de Estado y del Despacho universal, haciéndolo saber a las Cortes antes de su publicación. La duración del Consejo permanecerá hasta la vuelta del Rey, o hasta que se forme o sancione la constitución del reino. Por otra parte, también recoge la relación que ha de tener el Consejo de Regencia con respecto al Congreso Nacional, al Poder judicial, a la Hacienda Nacional, al Gobierno interior, etc.

⁸ Véase FERNÁNDEZ, Tomás Ramón y SANTAMARÍA PASTOR, Juan Alfonso. *Legislación Administrativa española del siglo XIX*. Madrid: Instituto de Estudios Administrativos, 1977; y GÓMEZ DE LA SERNA, Gaspar. *Las Cortes Españolas*. Madrid: Aguilar, 1970.

⁹ Op. cit., pp. 771.

La primera medida tomada por los Constituyentes se va a concretar en la creación por *Decreto de 17 de diciembre de 1811* de una Secretaría de Estado de vida efímera; se trata de la Secretaría de Estado de las Cortes encargada de dar a éstas la estabilidad y apoyo burocrático del que hasta entonces había carecido¹⁰. Esta Secretaría estaba compuesta por cinco Oficiales, con graduación desde primero hasta quinto, y de un Archivero, todos ellos con las mismas prerrogativas que los Oficiales y Archivero de la Secretaría de Estado y del Despacho de Gracia y Justicia.

En esta línea, por *Decreto de 21 de enero de 1812*¹¹, se crea el Consejo de Estado conforme al proyecto de Constitución que se estaba sancionando. Unos días después, el 26 de enero, se suprime y vuelve a crearse por *Decreto de 20 de febrero del mismo año*¹². A su vez, convencidas las Cortes de la necesidad de establecer el Gobierno de la Monarquía Española con arreglo a la Constitución, por *Decreto de 22 de enero de 1812* se decide crear una Regencia con un nuevo reglamento aprobado por *Decreto de 26 de enero de 1812* que deroga el publicado con anterioridad.

El gran suceso político de este mismo año, referido a la vida de las Cortes de Cádiz¹³, fue la terminación y publicación de la obra que había sido objeto principal de los trabajos y deliberaciones de las Cortes: la Constitución que había de regir la Monarquía, proyecto llevado a cabo por una comisión que se creó al efecto y que desde agosto del año 1811 estuvo trabajando hasta su publicación. La fecha de su promulgación, el 19 de marzo, se hizo coincidir con el aniversario de la abdicación

¹⁰ GARCÍA MADARIA, J.M., op. cit., p. 32.

¹¹ *Colección de Decretos y Ordenes que han expedido las Cortes generales y extraordinarias desde su instalación*. Madrid, 1813, t. II.

¹² El Consejo de Estado, como cuerpo supremo consultivo del Gobierno en los asuntos de gobernación y administración, encuentra sus precedentes en el Consejo Real o de Castilla. La Constitución de 1812, al suprimir este, creó en su lugar un Tribunal Supremo de Justicia y un Consejo de Estado, aunque éste no llegó a organizarse definitivamente hasta 1845 con el nombre de Consejo Real, que cambiará por el actual, Consejo de Estado en 1858, siendo reorganizado por la Ley de 1860.

¹³ ARRIAZU, Isabel y otros. *Estudio sobre las Cortes de Cádiz*. Pamplona: Universidad de Navarra, 1967, llevan a cabo un análisis de lo que fueron estas Cortes desde sus inicios. También consúltese

de Carlos IV y la subida al trono de Fernando VII. Publicada por *Decreto de 19 de marzo de 1812* el texto inspiraba una Monarquía liberal y parlamentaria basada en los principios de la soberanía nacional y de la separación de poderes¹⁴.

La Constitución de 1812 consta de 384 artículos agrupados en diez títulos. Los títulos III, IV y V, estructuran el poder entre las Cortes, con potestad legislativa, el monarca, que posee *la potestad de hacer ejecutar las leyes* y, los tribunales de justicia de los que se predica la exclusividad de *aplicar las leyes en las causas civiles y criminales*.

Por lo que respecta al poder ejecutivo¹⁵, la Constitución institucionaliza la figura del Secretario del Despacho¹⁶ configurándola como un verdadero Ministro. Dentro del Título IV, el Capítulo VI bajo el epígrafe: *De los secretarios de Estado y del despacho*, establece siete Secretarías de Despacho, a saber: *de Estado, de la Gobernación del Reino para la Península e Islas adyacentes, de Gracia y Justicia, de Hacienda, de Guerra, de Marina*.

Una consecuencia más de la reforma política, tal y como señala el profesor Ángel Martínez de Velasco en la obra anteriormente mencionada, viene dada por los cambios administrativos reflejados en la desaparición de los seculares Consejos, a excepción del Consejo de Estado¹⁷.

BOFARULL Y ROMAÑA, Manuel. *Las antiguas Cortes, el moderno parlamento, el régimen representativo orgánico*. Madrid: Tip. de la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1912.

¹⁴ Fue el primer eslabón en la cadena constitucional de nuestra nación, y se la reputó como modelo para todas las Constituciones de signo liberal a lo largo del siglo XIX.

¹⁵ Como ya anotaremos más adelante, las sucesivas Constituciones españolas se limitarán, al regular el ejecutivo, a señalar la responsabilidad ministerial y en consecuencia, la necesidad de refrendo dejando la determinación del número y denominación de los ministerios a normas de inferior rango, cuya modificación o derogación ofrece muchas menos dificultades que la del texto fundamental.

¹⁶ El *Secretario del Despacho* se concibe como el órgano inmediato al Rey, en el que era necesario hacer efectiva la responsabilidad del Gobierno para asegurar el buen desempeño de la inmensa autoridad depositada en el monarca.

¹⁷ Op. cit., pp. 65-67.

En este sentido la Constitución dedica, dentro del mismo Título IV, el Capítulo VII sobre: “*Del Consejo de Estado*” destacado como el único Consejo del Rey, que oirá su dictamen en asuntos graves gubernativos, y a su vez, el artículo 238 establece que el Rey formará un reglamento para el gobierno del Consejo de Estado, presentándose a las Cortes para su aprobación. Este reglamento del Consejo de Estado que fue aprobado por *Decreto de 8 de junio de 1812* establece que el Consejo, como órgano consultivo, se distribuirá en tantas comisiones como Secretarías del Despacho existan a fin de que los negocios de cada uno de estos ramos de la Administración pública puedan ser preparados en su respectiva comisión.

El Consejo tendrá dos Secretarios, uno que estará encargado de los negocios relativos a Estado, Guerra, Marina y Hacienda; y el otro de los respectivos a Gracia y Justicia, Propuestas y Gobernación. Según la *Orden de 28 de julio de 1812*, que aprueba la planta de las Secretarías del Consejo de Estado, ambas Secretarías se compondrán de los Oficiales necesarios, entre ocho y diez, y de un Archivero general con dos Oficiales.

Por otra parte la Constitución en el Título IX recoge, en un único capítulo, sobre *De la instrucción pública*. Son pocos los artículos que lo integran pero todos ellos esenciales. Se ordena el establecimiento de centros objeto de la instrucción pública, y por ello crearán Universidades y establecimientos de instrucción que se juzguen convenientes para la enseñanza, se llevará a cabo un plan general de enseñanza uniforme en todo el reino y existirá, una Dirección General de Estudios que llevará a cabo la inspección de la enseñanza pública.

En cumplimiento de lo estipulado en el artículo 224 del Capítulo VI del Título IV de la Constitución¹⁸, las Cortes generales y extraordinarias, queriendo evitar la compatibilidad de los asuntos de cada Secretaría, publican el *Decreto de 6 de abril de 1812* sobre clasificación de los negocios que corresponden a las Secretarías del Despacho¹⁹, por ello, la Secretaría del Despacho de la Gobernación del Reino para la Península²⁰ entenderá en todo lo perteneciente a la instrucción pública, como escuelas, colegios, universidades, academias y demás establecimientos de ciencias y bellas artes, conforme al plan y reglamento que establezcan las Cortes. Esta Secretaría de Estado y del Despacho de la Gobernación de la Península quedará estructurada por *Decreto de 10 de abril de 1814*.

Del análisis de los organigramas que adoptan las distintas Secretarías desde 1813, se observa la implantación de las figuras de Archivero, Oficiales de Archivo y Escribientes como puestos comunes a todas ellas, y definen al archivero como *la persona a cuyo cargo está la custodia y arreglo de los documentos del Archivo, cuidará y celará en suministrar a los Oficiales lo que éstos pidiesen para evacuar los negocios, cuidando de recogerlos luego que ya no sean necesarios; y estará a su cargo la clasificación de negocios para el mejor orden y facilidad en encontrarlos. Los oficiales del Archivo estarán a las ordenes del Archivero en cuanto éste les mandase relativo al oficio, observando las mismas reglas dentro del Archivo que las prescritas para la Secretaría para el despacho de expedientes*.

¹⁸ Este artículo establece lo siguiente: *Un reglamento particular aprobado por las Cortes señalará a cada secretaría los negocios que deban pertenecerle*.

¹⁹ Este aspecto ha sido tratado por COS GAYÓN, Fernando, *Historia de la Administración pública en España*. Madrid: Ediciones Rialp, S.A., 1995 y MARTÍN- RETORTILLO, S.; ARGULLOL, E.: *Descentralización administrativa y organización política. Aproximación histórica (1812-1931)*. Madrid, 1982.

²⁰ El Ministerio de la Gobernación de la Península se crea al desaparecer el Consejo de Castilla.

Las obligaciones de los miembros del Archivo son las siguientes:

1. *Cuidar el archivero, del arreglo y colocación metódica de todos los expedientes, documentos, papeles, libros, etc., en los términos que prevenga el Reglamento.*
2. *Tendrá siempre expedito y a mano para el más fácil manejo del Archivo un índice general e instructivo de todos los expedientes y papeles, bien sea alfabético o por materias y negociados, según se considere mejor. No podrá entregar ningún papel del Archivo, sino en la forma en que se establezca en el Reglamento.*
3. *Los Oficiales del Archivo estarán a las ordenes del Archivero, y él será el responsable del cumplimiento de sus obligaciones.*
4. *Los Escribientes, Porteros y Mozos de oficio estarán a las órdenes inmediatas del Oficial primero, y la distribución de sus ocupaciones se expresará en el reglamento interior.*

En el mes de marzo de 1814, después de seis años de invasión Napoleónica, regresa el rey Fernando VII a España en virtud del Tratado de Valençay, momento en que la regencia y las Cortes ordinarias, que habían reemplazado a las extraordinarias en octubre de 1813, reúnen la máxima instancia política del país instaladas en Madrid. Todos estos acontecimientos marcarían la tónica común del reinado personal de Fernando VII con la imposición del sistema absolutista, tanto en la conformación social como en el aparato estatal, como propósito del rey y los grupos que le iban a apoyar en los veinte años siguientes, y este propósito fue un hecho, con excepción del intervalo de tiempo llamado *Trienio Liberal o Constitucional* que se desarrolló entre 1820 y 1823²¹. El desenlace vendría dado por el *Decreto de 4 de mayo de 1814* que, entre otras cosas;

Declaraba por nula y de ningún valor ni efecto la Constitución de las llamadas Cortes generales y extraordinarias de la nación, disponiendo al mismo tiempo lo que ha de observarse, a fin de que no se interrumpa la administración de justicia, el orden político y gubernativo de los pueblos. Una vez publicado y comunicado al Presidente de las Cortes, éstas cesarán en sus sesiones y que las actas y expedientes que hubiere en su archivo y secretarías, se recojan por la persona encargada de la ejecución de este Real Decreto, y se depositen en la casa de Ayuntamiento de la Villa de Madrid, cerrando y sellando la pieza donde se coloque. Los libros de su Biblioteca se pasarán a la Biblioteca Real.

Por lo tanto, la vuelta del Rey Fernando VII a Madrid supuso la anulación de las medidas tomadas por el Gobierno Constitucional procediendo a restaurar el orden de cosas anterior a 1808 y por ello se disuelven el Consejo Real y las Cortes *por Real Decreto de 27 de mayo de 1814* y *por Real Decreto de 5 de junio de 1814*, respectivamente, implantando el sistema que se hallaba en el año 1808²¹. En la misma línea, el Rey expidió un Decreto nombrando los ministros para los despachos de las Secretarías de Estado, con los días y horas que han de celebrarse. La disposición incluye, en la relación, la Secretaría de Estado de la Gobernación de la Península aunque sin nombramiento de Ministros ni competencias atribuidas. Esta medida puede interpretarse por el rechazo que sentía Fernando VII a los modelos de Administración de Gobiernos anteriores, y por ello el *Real Decreto de 20 de julio de*

²¹ Así lo describe Julio Aróstegui. Op. cit. pp. 772-773. Consúltase GARIJO AYESTARÁN, María Josefa. *El Ministerio de la Gobernación: materiales para el estudio de su evolución histórica hasta 1937*. Madrid: Ministerio de la Gobernación, Secretaría General Técnica, 1977.

²² Véase las obras de ARTOLA, Miguel. *Los orígenes de la España contemporánea*. 2º ed. Madrid: Alianza, 1976. En esta obra el autor destruye a golpe de documentación inédita y de análisis los mitos reaccionarios en torno a las Cortes de Cádiz. Sobre la persona de Fernando VII es interesante ver, del mismo autor, la obra titulada: *La España de Fernando VII*. Introducción por Carlos Seco Serrano. Madrid: Espasa, (e) Forum. Ensayo y Pensamiento, 1999, 788 p., donde hace un auténtico estudio histórico sobre el absolutismo borbónico.

1814, comunica que habiéndose determinado que corran por las Secretarías de Estado los negocios que se despachaban en el año de 1808, se suprima la del Despacho de la Gobernación de la Península por quedarse sin ninguna atribución.

Entramos en un período histórico que, referido a algunos aspectos de interés en nuestro objeto de estudio es bastante desconcertante por lo poco claro y transparente en la continuidad y seguimiento de las competencias ministeriales y estructuras orgánicas reflejadas en las disposiciones legislativas. Si el Decreto de supresión de la Secretaría de Estado de la Gobernación de la Península, como bien dice el texto, desaparece *por quedarse sin ninguna atribución* como en 1808, ¿Quién asume las competencias atribuidas a la desaparecida Secretaría de Estado?

Refiriéndonos a esta cuestión, Ana María Barreo, sostiene que *para los períodos del reinado de Fernando VII, no se cuenta con textos que de forma general fijen las competencias de cada Secretaría. De ahí el haber acudido para realizar el estudio que nos proponemos a la Colección de Decretos de este reinado que, por recoger las normas que habían de aplicarse a través de los diferentes organismos que intervenían en la administración, reflejan en mayor o menor medida, no sólo la actuación de éstos, sino también el intento de poner en ejecución unos principios teóricos que informaban esta gestión. Pero, al mismo tiempo, añade la autora, la índole casuística de esta documentación, lo concreto de los temas sobre los que versa, lo variable de la frecuencia en el tratamiento de uno u otro tipo de asuntos, determina que la información que proporcionan sea limitada y dispersa, lo que dificulta el llegar a conclusiones. No obstante esta limitación, el análisis de los textos permite llegar a unos resultados susceptibles de ser completados o cotejados con los procedentes de otro tipo de documentación como los Memoriales*²³.

²³ BARRERO, A. *La materia Administrativa y su Gestión en el Reinado de Fernando VII*. Comunicación publicada con el mismo título en *Anuario de historia del Derecho Español*. Madrid, 1983, pp. 395-421.

La confusión se agudiza cuando encontramos disposiciones como la *Real Orden de 27 de enero de 1815*, donde el Rey a consulta personal del Consejo de 27 del mismo mes, se ha servido mandar que se restablezca la Universidad de Orihuela, previniéndola observe el plan de estudios establecido en el año de 1807, o el que se establezca de nuevo para lo sucesivo. Sin embargo, otras disposiciones nos hacen pensar que es la Secretaría de Estado y del Despacho quien entre otras muchas atribuciones, tenía asumidas éstas competencias así, la *Real Orden de 31 de enero de 1815* expedida por la Secretaría de Estado y del Despacho, manda establecer en diferentes provincias del reino seis cátedras de agricultura para dar gratuitamente la enseñanza teórica y práctica de esta ciencia.

Con fecha 1 de febrero de 1815, encontramos dos Reales Decretos rubricados por el Rey y comunicados por el Ministro de Gracia y Justicia, Tomás Moyano, donde el primero, manda crear una Junta encargada de formar un plan de estudios para asegurar la educación y la instrucción pública y, el segundo, nombra a los miembros que van a constituir esa Junta.

A su vez, el primero de octubre del mismo año aparece una Circular de la primera Secretaría de Estado y del Despacho donde se manda observar el adjunto plan para la enseñanza de ciencias naturales en un solo establecimiento público que se llamará Real Museo de Ciencias Naturales y atendiendo al artículo dos, *el primer Secretario de Estado y del Despacho, bajo cuya protección han estado hasta aquí todos aquellos establecimientos, será el Protector del Museo*. El plan expresa el número de profesores que ha de haber y las atribuciones de cada uno.

Por todo esto, en opinión de Martínez Velasco, hay que destacar la falsa idea que dan las disposiciones legislativas de los periodos del Reinado de Fernando VII regulando las numerosas medidas tendentes a reorganizar la situación del país que, de hecho, la lentitud burocrática hizo que todo quedara en meros deseos de reforma.

Observamos como caso representativo la creación, en febrero de 1815, de una Junta encargada de redactar un plan general de estudios para todas las Universidades de acuerdo con la tendencia uniformadora del reinado de Carlos III y que se plasmó en el proyecto de *arreglo general de la enseñanza pública*, presentado a las Cortes de Cádiz por la Comisión de Instrucción pública. La labor de la Junta no se vio por ninguna parte, lo que ha llevado a la historiografía liberal, a afirmar que su creación tuvo más bien por objeto impedir las reformas que promoverlas²⁴.

2.3. El trienio liberal (1820-1823) y la década absolutista (1823-1833)

El pronunciamiento de Riego y la restauración del régimen liberal en España conllevaron movimientos, de la misma naturaleza, en Portugal, Nápoles y Piamonte, que sorprendieron a las potencias legitimistas europeas²⁵. Así, el 1 de enero de 1820, Rafael Riego proclamó solemnemente la Constitución de 1812, y por *Orden de 6 de julio de 1820* se instalan las Cortes ordinarias para los años de 1820 y 1821²⁶ en su primera legislatura y por *Decreto de 9 de julio de 1820* el Rey jura pública y solemnemente la Constitución en las Cortes Generales. En este período los nuevos modelos políticos y culturales parten y se proyectan desde la Constitución de 1812. Como ha puesto de relieve Aróstegui Sánchez [...] *en cuanto al aparato estatal, al imponer la Constitución de 1812, el Trienio Liberal no presenta novedades de interés, si bien debe destacarse que ya entonces sonaron las primeras voces que pedían una reforma constitucional*²⁷.

²⁴ Ángel MARTÍNEZ VELASCO. Op. cit., p. 98.

²⁵ Consúltase GIL NOVALES, A. *Trienio Liberal. De 1821-1823*. Madrid: Siglo XXI, 1980; y ROURA Lluís, MORAL, Joaquín del; y GIL, Alberto. *El Trienio Liberal 1821-1823*. Cuadernos de Historia 16, n. 19.

²⁶ Para la consulta a los Diarios de Sesiones de esta época es importante indicar el gran cambio que sufren con respecto a los de las Cortes de Cádiz. La legislatura de 1821-1822 tiene dos ediciones y la legislatura de 1823 no tiene edición, únicamente disponemos de los extractos. Datos tomados de ALGUACIL PRIETO, María; MACIÁ, Mateo y MARTÍNEZ-CAÑAVATE, M^a del Rosario. *El Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados (1810-1977)*. Madrid: Congreso de los Diputados. Dirección de Estudios y Documentación de la Secretaría General, 1996, p. 38.

²⁷ Op. cit., pp. 776.

Una nueva estructura de las Secretarías de Estado se implanta creando de nuevo la Secretaría de Estado y del Despacho de la Gobernación de la Península con las competencias establecidas en 1812 y, por *Decreto de 14 de agosto de 1820*, las Cortes aprueban la planta de esta Secretaría de Estado y la nueva modificación del curso de sus negocios, dividiéndola en cinco Secciones, y aumentando las plazas del archivo con tres Oficiales y tres Escribientes.²⁸

Bajo esta situación el panorama político del *trienio liberal* empezaba a desestabilizarse cuando Fernando VII, con la perspectiva de que cambiara en breve su situación, decidió el 19 de febrero de 1823 cesar a sus ministros para reemplazarlos por otros más afines a sus intenciones sin poder conseguirlo por la situación popular²⁹. Pero los propósitos del Rey siguieron su curso hasta entrar en la etapa que los historiadores han denominado como *década ominosa*, que abarca los diez últimos años del reinado de Fernando VII, de 1823 a 1833, así se cerraba el

²⁸Dependiendo de esta Secretaría de Estado se encuentra la Dirección general de estudios regulada por el *Decreto de 29 de junio de 1821* que en su Título VIII recoge, de los artículos 92 al 107, todo lo concerniente, *De la Dirección general de estudios*. El artículo 92 establece que, de acuerdo con el artículo 369 de la Constitución de 1812, se creará una Dirección general de Estudios competente en la inspección y arreglo de la enseñanza pública. A su vez, el artículo 93 regula la composición de esta Dirección general integrada por siete individuos siendo Presidente el más antiguo por el orden de su nombramiento. Para ser nombrado Director se requiere haber dado pruebas positivas de saber, haber enseñado en los establecimientos públicos por espacio de seis años, o haber publicado una obra que acredite su sólida instrucción. El cargo de Director será vitalicio e incompatible con otro destino. El artículo 101 regula las facultades de la Dirección general de estudios, a saber:

1. *Velar sobre la enseñanza pública y cuidar de que se observen los reglamentos establecidos.*
2. *Recibir las solicitudes, propuestas y reclamaciones de todos los cuerpos literarios y escuelas de la Monarquía para pasarlas al Gobierno con su informe.*
3. *Cuidar de la formación de los diferentes planes y reglamentos necesarios para el arreglo de la instrucción pública, valiéndose de las personas y medios que crea necesario y oyendo en lo perteneciente a la parte científica a la Academia nacional, antes de presentar el reglamento al Gobierno.*
4. *Promover la mejora de los métodos de enseñanza y la formación y publicación de tratados elementales por medio de premios a sus autores.*
5. *Presentar las alteraciones que puedan convenir en la parte científica de los estudios, siempre a propuesta de la Academia nacional.*
6. *Cuidar de la conservación y aumento de todas las bibliotecas públicas del reino.*
7. *Dar cuenta anualmente a las Cortes del estado de la enseñanza pública en una memoria.*
8. *Ejercer todas las demás facultades que se le señalen en su respectivo reglamento.*

²⁹Según los acuerdos tomados por la Santa Alianza en el Congreso de Verona (1822), la intervención francesa lanzó, en abril de 1823, sobre España un ejército, *los Cien mil hijos de San Luis*, cuya misión era derrocar al régimen liberal y restablecer en el trono a Fernando VII.

segundo capítulo del constitucionalismo español, restableciéndose, en esta fecha de 1 de octubre de 1823, un régimen de despotismo absolutista más cruento, si cabe, que el que le había precedido de 1814 a 1820.

Abolida de nuevo la Constitución, desaparecieron las Secretarías de Gobernación de la Península y Ultramar creándose, en su lugar, la Secretaría del Interior por *Decreto de 27 de mayo de 1823*. La permanencia de esta recién nacida Secretaría no fue excesivamente dilatada ya que, cinco meses más tarde, un Decreto de 18 de octubre del mismo año ordenaba su extinción.

Una de las primeras medidas tomadas por Fernando VII fue la creación del Consejo de Ministros³⁰, con origen en la antigua Junta de Estado. Por *Real Decreto de 19 de noviembre de 1823* el Rey ordena la formación de un Consejo de Ministros, integrado por los Secretarios de Estado y del Despacho, donde se tratarán todos los asuntos de utilidad general y donde cada Ministro dará cuenta de los negocios correspondientes a la Secretaría de su cargo, nombrando posteriormente a los Secretarios de Estado y del Despacho en cada uno de los Ministerios por *Real Decreto de 2 de diciembre de 1823*.

Durante este período, y hasta la creación del Ministerio de Fomento puede afirmarse, tal y como lo expresa Pilar Serra, *que era la Secretaría de Estado la que ocupaba un lugar preeminente, pues, además de las relaciones con otros Estados, asumía buena parte de la administración civil, acrecentando su importancia por la vinculación consuetudinaria con la Secretaría de la Presidencia del recién creado Consejo de Ministros. Al establecerse el nuevo Ministerio se le atribuye todo lo relativo al gobierno interior, quedando la Secretaría de Estado reducida a las*

³⁰ Sobre este tema ha trabajado BERMEJO CABRERO, J.L. 1812-1992. *El arte de gobernar. Historia del Consejo de Ministros y de la Presidencia del Gobierno*. Madrid: Tecnos, 1992.

*relaciones exteriores, también pasan a la esfera de su actuación asuntos anteriormente vinculados a Gracia y Justicia como la enseñanza. El nuevo departamento asume un papel preponderante que no abandonará a lo largo del siglo XIX*³¹. Esta idea se puede observar en distintas disposiciones en materia de instrucción pública³².

El profesor Aurelio Guaita, al abordar el estudio sobre *el Ministerio de Fomento*, señala que el Rey Fernando VII, más o menos convencido pero sin duda influido por las exposiciones dirigidas por alguno de sus Ministros decidió dar *luz verde* al nuevo departamento, por *Real Decreto de 5 de noviembre de 1830*, que más adelante se denominaría Ministerio de Fomento. Sin embargo este decreto no se ejecutó por la oposición que encontró entre sus consejeros³³; sin embargo dos años más tarde el *Real Decreto de 5 de noviembre de 1832*, manda establecer la Secretaría de Estado y del Despacho del Fomento General del Reino y en la exposición de motivos recoge que la creación del Ministerio de Fomento -como se ha indicado- había sido ya acordada por Fernando VII en su *Decreto de 5 de noviembre de 1830*, disposición que no llegó a ver la luz por las divergencias surgidas respecto a la creación del nuevo Ministerio y por el informe desfavorable del Consejo de Estado.

La denominación de Fomento tenía su antecedente cercano en la Dirección de Fomento creada por Carlos IV el 6 de junio de 1797 dependiente de la Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda. Así lo refleja la disposición: *Al igual que Carlos IV dio al Fomento el preferente lugar y la verdadera importancia, estimó*

³¹ SERRA NAVARRO, Pilar. *Ministerio del Interior Guía del Archivo Central*. Madrid: Ministerio de Cultura, 1983, pp. 24-25.

³² Un ejemplo es la publicación de dos *Reales Decretos con fecha de 18 de febrero de 1824* comunicados al Consejo Real dirigidos, uno de ellos, a restablecer la Junta de Ministros, tal y como se proyectó el 1 de febrero de 1815, y el otro, a delimitar las bases de un plan general de estudios y arreglo de las Universidades.

³³ GUAITA, Aurelio. *El Ministerio de Fomento 1832-1931*. Madrid: Instituto de Estudios de Administración Local, 1984, 126 p.

oportuno la creación de un Departamento especial en el Ministerio de Hacienda y se sirvió designar los diferentes objetos en que había de ocuparse para desempeño de sus funciones. De la misma manera nuestro Rey implanta este Ministerio bajo la denominación de Secretaría de Estado y del Despacho del Fomento General del Reino, cuya creación serviría como instrumento de la reforma administrativa.

El Decreto fue expedido por la Reina y lo presentó como una ejecución de lo ya dispuesto dos años antes. La Reina comunicó al Ministro de Hacienda, que sin duda había intervenido en su redacción, la aprobación del Decreto y la propuesta de planificación y organización del Ministerio, por este motivo se publica simultáneamente otro Real Decreto con la misma fecha mandando que el Secretario del Despacho de Hacienda proponga a S. M. la planta, forma, atribuciones y diferentes ramos de su competencia que ha de tener la del Fomento General del Reino y finalmente por *Real Decreto de 9 de noviembre de 1832* se fija la forma y atribuciones que ha de tener la Secretaría del Despacho de Estado del Fomento General del Reino.

La planta de la Secretaría constará de un Secretario de Estado y del Despacho, de un Oficial mayor, de dos segundos, de tres terceros, de cuatro cuartos, de cinco quintos, de un Oficial archivero y de los subalternos necesarios tanto en la Secretaría como en el Archivo. Posteriormente por un *Real Decreto de 23 de noviembre de 1832* se aprueba los empleados subalternos de la Secretaría del Despacho de Fomento, dotaciones y ascensos, afectando sobre todo al Archivo de la Secretaría donde habrá seis Oficiales, cuatro escribientes, un portero y dos mozos.

Esta Secretaría tendrá, entre otras competencias, las de la instrucción pública: las universidades, colegios, sociedades, academias y escuelas de primera enseñanza, la imprenta y periódicos, bien sean del Gobierno o de particulares, los correos, postas, los Conservatorios de artes y de música, la Inspección general de Instrucción

pública, el Real Conservatorio de Artes, el Juzgado de imprentas y librerías del Reino, las Reales Academias creadas en la Corte, el Real Conservatorio de música, el Real Colegio de Sordo-mudos, el Real Museo de Ciencias naturales, la Imprenta Real y la Redacción de la Gaceta, los Reales Archivos de Simancas, Sevilla, Barcelona y Valencia y finalmente todas las demás corporaciones, establecimientos y cuerpos directivos de la misma o semejante naturaleza.

2.4. La regencia de la reina gobernadora M^a Cristina

La Real Provisión de 29 de septiembre de 1833 da la noticia del fallecimiento del Rey Fernando VII y de la Regencia de S. M. la Reina Gobernadora en nombre y durante la minoridad de su heredera Isabel II³⁴.

La muerte de Fernando VII desencadenará una reforma de la Administración Central del Estado³⁵ con cambios sustanciales en los organismos administrativos y una larga serie de disposiciones tendentes a configurar el nuevo Estado. La primera medida tomada por la reina María Cristina de Borbón fue confirmar, en sus cargos, a los Secretarios de Estado y del Despacho y nombrar, posteriormente, Ministro del Fomento General del Reino a D. Francisco Javier de Burgos, que renuncia unos meses después y es sustituido por D. José María Moscoso de Altamira que había sido Decano de la sección de Fomento del Consejo Real de España e Indias.

³⁴ Este período ha sido tratado por LAFUENTE ZAMALLOA, Modesto. *Historia General de España desde los tiempos primitivos hasta la muerte de Fernando VII*. Por Modesto Lafuente, continuada desde dicha época hasta nuestros días por Juan Varela, Andrés Borrego y Antonio Pirala. Barcelona: Montaner y Simón, editores, 1877-1882, 6 vols.

³⁵ Para estas cuestiones resulta ilustrativo consultar la obra de ESCUDERO, José Antonio Escudero. *Administración y Estado en la España moderna*. Valladolid: Junta de Castilla y León. Consejería de Cultura, 1993, 638 p. y PÉREZ-BUSTAMANTE, Rogelio. *Historia de las Instituciones Públicas de España*. Madrid: Servicio de Publicaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, 1995.

En este sentido, el Presidente del Consejo de Ministros con Fernando VII, Cea Bermúdez, en su manifiesto de 1833 declara que dedicará todos sus esfuerzos a llevar a cabo la reforma administrativa, y dice textualmente: ... *procuraré estudiar mejor los vicios que el tiempo y los hombres han introducido en los varios ramos de la Administración Pública y me esforzaré por corregirlos. Las reformas administrativas, únicas que producen inmediatamente la prosperidad y la dicha, que son el solo bien de valor positivo para el pueblo, serán materia permanente de mis desvelos.* En estas palabras del Presidente se ha podido ver el embrión de la magna reforma administrativa que se estaba gestando; sin embargo no será Cea Bermúdez quien inicie los actos administrativos que conformarán la nueva estructura de las instituciones estatales.

Cuando Cea Bermúdez dimite como Presidente, el hombre que se considera más indicado para iniciar la transición política es Francisco Martínez de la Rosa³⁶ quien, a partir de enero de 1834, elabora una ley política fundamental que no es más que la institucionalización de unas Cortes distintas de las del Antiguo Régimen, pero que tampoco son representativas de la nación. La ley se denominó *Estatuto Real* y fue promulgado el 10 de abril de 1834 la Norma no emanaba de reconocimiento alguno de la soberanía nacional, sino que era una concesión del trono y, en sus 50 artículos, definía la estructura de esas nuevas Cortes, la forma y tiempo de su reunión, sus atribuciones y limitaciones³⁷. El régimen del Estatuto pervivió hasta los sucesos del verano de 1836 que culminó en el golpe de Estado obligando a la reina poner en vigor la Constitución de 1812.

Como refleja Luis Sánchez Belda, ... *el Estatuto no hace sino recoger y adaptar a las nuevas corrientes lo existente en los años anteriores, sancionando la*

³⁶ COMELLAS, José Luis. *Historia de España Contemporánea*. Madrid: Ediciones Rialp, S.A., 1995, pp. 143-145

³⁷ SEVILLA ANDRÉS, D. *Constituciones y otras leyes y proyectos políticos de España*. Madrid, 1969,

evolución experimentada en el Trienio Constitucional, que transformó en Ministerios las antiguas Secretarías del despacho, de tanta raigambre en la organización administrativa española de la Edad Moderna [...]. Al frente de cada uno de ellos había un ministro que funcionan de forma colegiada reunidos en el Consejo de Ministros que a través de un Presidente se coordinaban las carteras [...].

La primera vez que aparece perfectamente definida con significado moderno la Presidencia del Consejo de Ministros es en 9 de marzo de 1820³⁸.

Sin embargo, de acuerdo con lo expuesto por Ismael Sánchez Bella, las ideas que pone en marcha el Presidente Francisco Martínez de la Rosa le vienen de su Ministro de Fomento, Javier de Burgos, que es el verdadero promotor y hacedor de esta nueva era administrativa³⁹.

El cambio de dirección en la persona de José M^a Moscoso de Altamira como Secretario de Estado de Fomento el Ministerio trae un cambio de denominación y, por *Real Decreto de 13 de mayo de 1834*, se manda que el Ministerio de Fomento se denomine en adelante Secretaría de Estado y del Despacho del Interior; este cambio de titulación viene justificado por las diversas y dispersas competencias que tenía en ese momento puesto que no sólo le compete el fomento de la riqueza general del Reino sino también los negocios relativos al gobierno civil y a la administración interior de las provincias de la Monarquía, tal como describe el decreto, *pretendiéndose que el título con que sea conocido no deje duda sobre el objeto y carácter de sus atribuciones, que son las mismas que veíamos en el Real Decreto del día 9 de noviembre de 1832.*

vol. I, pp. 290. Véase del mismo autor *Historia política de España (1800-1967)*, Madrid, 1968, pp. 86.

³⁸ SÁNCHEZ BELDA, L. *Presidencia del Gobierno*. En *Guía de los Archivos de Madrid. Archivos de la Administración Pública*. Madrid: Dirección general de Archivos y Bibliotecas. Servicio de publicaciones del Ministerio de Educación Nacional, 1952, pp. 12-13.

³⁹ SÁNCHEZ BELLA, I. *La reforma de la Administración central en 1834*. En *Actas del III Symposium de Historia de la Administración*. Instituto de Estudios Administrativos. Madrid, 1874, pp. 659-688.

A su vez, estas modificaciones trascienden a la Sección del Consejo Real de España e Indias que pasará a denominarse en lo sucesivo Sección del Interior dando lugar a la figura de los Subdelegados de Fomento que se encargarán en las provincias de las competencias que tiene el Ministerio. Los Subdelegados principales de Fomento tendrán el título de Gobernadores civiles de las provincias⁴⁰. Por *Real Orden de 20 de marzo de 1834* se fijan las facultades de los Subdelegados de Fomento, a saber:

1. *Cuidarán de que en las Bibliotecas públicas, Colegios de humanidades, Academias de nobles artes y de bellas letras, en Escuelas, Corporaciones, etc. se cumplan los reglamentos vigentes y las ordenes del Gobierno.*
2. *Se exceptúa de lo dispuesto en el punto precedente las Universidades literarias, que continuarán dependiendo única y directamente de la Inspección general de Instrucción pública.*
3. *También cuidarán de que no se desvíen ni malversen los fondos y rentas aplicados a los Establecimientos literarios y de enseñanza de todas clases.*
4. *Propondrán a la Inspección general de Instrucción pública y a cualesquiera otras Corporaciones superiores de que los mismos Establecimientos dependan las reformas y mejoras de que les consideren susceptibles y dirigirán informadas al Gobierno sus solicitudes.*
5. *Por último, protegerán y promoverán la enseñanza en todos sus ramos y con especialidad el de las primeras letras, comunicando para ello las ordenes que estén dentro del círculo de sus atribuciones como Jefes*

⁴⁰ El origen inmediato de los Gobernadores civiles, como autoridad de la confianza del Gobierno en cada una de las provincias en que aparece dividido el territorio nacional, está en la Constitución de 1812: *El Gobierno político de las provincias residirá en el Jefe Superior, nombrado por el Rey en cada una de ellas*. En 1833 se le califica como subdelegados del Gobierno, y en 1834 como Gobernadores civiles, siendo la primera autoridad en el régimen y administración de la provincia.

principales en las provincias, o acudiendo al Gobierno en solicitud de la correspondiente autorización en los casos de que los reglamentos vigentes lo estimen necesario.

Las importantes reformas que se plantean en la Administración, en este momento, convienen en dar una nueva planta a las Secretarías del Despacho que proporcione una clasificación más metódica de los negocios y facilite su pronta expedición descargando a los Ministros de los asuntos de leve cuantía, o reduciendo los expedientes a meros trámites de instrucción para llevar a cabo los cambios y poder asistir a las sesiones de las Cortes generales del Reino con la frecuencia que el Estado reclame⁴¹. Estas medidas suponen una reestructuración en los órganos y competencias de los mismos que delimitan y agilizan el funcionamiento de los Ministerios (*Real Decreto de 16 de junio de 1834*).

Una de las modificaciones más relevante es el nombramiento Real, en cada Secretaría del Despacho, de un Subsecretario a propuesta del respectivo Secretario de Estado, dicho Subsecretario firmará, de orden del Ministro, todas las comunicaciones preparatorias relativas a la instrucción de los expedientes *hasta que estos se hallen en estado de resolución*⁴².

La estructura departamental de la Secretaría del Despacho del Interior, se ve modificada por *Real Decreto de 25 de septiembre de 1834* que suprime la Inspección General de Instrucción Pública y crea en su lugar una Dirección General de

⁴¹ SÁNCHEZ BELLA, I.: *La reforma de la Administración central en 1834*. En *Actas del III Symposium de Historia de la Administración*. Instituto de Estudios Administrativos. Madrid, 1974, pp. 659-688.

⁴² El primer nombramiento de subsecretario en este Ministerio, fue por Real Decreto de 2 de abril de 1835.

Estudios, que seguirá teniendo las mismas atribuciones y facultades que estaban cometidas a la suprimida Inspección, hasta la publicación de un nuevo decreto donde se designen las obligaciones⁴³.

Como respuesta al *Real Decreto de 16 de junio de 1834*, donde se mandaba arreglar la planta de la Secretaría del Ministerio de lo Interior, se publica el 9 de abril de 1835 una Exposición del Secretario de este Despacho justificando los motivos que son ratificados por un Real Decreto que contiene la planta y arreglo del mismo Ministerio.

El artículo 1º de esta disposición establece que la Secretaría de Estado y del Despacho de lo Interior se compondrá de seis secciones y cada una de ellas de un Jefe de sección, un primer Oficial, un segundo y un tercero. Los Jefes de sección serán los responsables del trabajo de cada una de ellas conforme a las comunicaciones que les hagan los Subsecretarios; estos Jefes serán nombrados por Real Decreto a propuesta del Secretario de Estado y del Despacho de lo Interior. Habrá un Archivero con el carácter de primer Oficial.

De las seis secciones que componen la Secretaría de Estado y del Despacho de lo Interior, la Sección de Instrucción Pública entenderá de lo relativo a escuelas primarias, universidades, academias, imprenta y periódicos, archivos y bibliotecas, museos, etc.

En el año 1835 comienza a gobernar Juan Álvarez y Mendizábal que, tras la promesa de mantener el Estatuto Real, disolvió las Cortes y consiguió la firma de un

⁴³ Véase RODRÍGUEZ CAMALEÑO, Luis. *Consideraciones sobre el nuevo Ministerio de lo Interior...* Madrid: Imprenta de Don Luis Palacios, 1835.

Decreto con fecha de 11 de octubre del mismo año, que declaraba extinguidos en todo el reino los monasterios y conventos de hombres con excepción de los dedicados a la enseñanza de niños pobres y de asistencia de enfermos, así fue como por *Real Decreto de 8 de marzo de 1836* suprime monasterios, conventos y demás congregaciones religiosas. Al mismo tiempo sacaba a pública subasta las riquezas que en el transcurso de los siglos había acumulado la Iglesia.

El profesor Comellas apunta, muy acertadamente, *que la desamortización eclesiástica por las polémicas que suscitó -y que aún no han terminado-, es la que ha merecido la mayor atención de los españoles*⁴⁴.

Por *Real Decreto de 4 de diciembre de 1835* se manda que este Ministerio se denomine en adelante Secretaría de Estado y del Despacho de la Gobernación del Reino conviniendo que, para la mejor y más propia significación de las atribuciones del Ministerio de lo Interior, se le dé un nombre análogo explicando su extensión a las provincias ultramarinas de la Monarquía. Por ello, el artículo 1º establece:

El Ministerio creado por Real Decreto de 5 de noviembre de 1832 con la denominación de Secretaría de Estado y del Despacho del Fomento general del Reino; y que por otro de 13 de mayo del año próximo pasado obtuvo la de Interior, llevará en adelante la de Secretaría de Estado y del Despacho de la Gobernación del Reino.

Las atribuciones serán las mismas que le fueron declaradas en los referidos Reales Decretos. Sin embargo se introducen algunas variaciones a la planta por *Real Decreto de 9 de abril del mismo año 1835* al considerar que son necesarias para el

⁴⁴ Op. cit., pp. 146-150.

mejor funcionamiento de la Secretaría. Constará de: Subsecretario, cinco jefes de sección, cinco oficiales primeros de sección, cinco segundos, cinco terceros y dos oficiales más destinados a la Subsecretaría; además integrará un archivero con las mismas prerrogativas que los oficiales, nombrado por Real Decreto, y cuatro oficiales del archivo nombrados por el Secretario del Despacho en virtud de Real orden, que serán considerados como auxiliares en lo tocante a su salida. El número de escribientes, porteros y demás dependientes de la Secretaría y archivo será el preciso para el servicio, y el orden de ascensos en las respectivas clases será el mismo que existe.

En el ámbito político, y como consecuencia de las actuaciones de Álvarez Mendizábal, la Reina Gobernadora le retiró su confianza y encargó a Francisco Javier de Istúriz la formación de un nuevo gabinete el 15 de mayo de 1836. El gobierno de Istúriz no deseaba, ni resucitar sin más la Constitución de 1812 ni quería limitarse a reformar con nuevos retoques el Estatuto Real y por ello, redactó un Proyecto de Constitución formal con la finalidad de presentarlo a las Cortes, sin embargo no llegó a tramitarse puesto que, antes de reunirse las Cortes, estalló el motín de La Granja obligando a la Reina Regente a firmar el decreto de restablecimiento de la Constitución de 1812 con fecha de 13 de agosto de 1836.

Con el propósito de conseguir una mayor economía y armonía en los cambios políticos producidos, aparece un *Real Decreto* *fechado el 2 de octubre de 1836* que reorganiza la Secretaría de Estado y del Despacho de la Gobernación de la Península reduciendo su composición a cuatro secciones: [...] *siendo el número de empleados proporcionado a los negocios que se les señalen en el nuevo arreglo y haciendo el jefe de la primera las veces de Subsecretario sin aumento de sueldo*. A su vez, otro Real Decreto con la misma fecha aprueba la planta que organiza la Secretaría. Esta planta se va a reformar por *Real Decreto de 8 de junio de 1837* suprimiendo las plazas de oficiales auxiliares, así como la última plaza de oficial del archivo por considerar que disminuían las tareas archivísticas.

Ante el deseo de dar a la enseñanza pública el impulso y uniformidad que le conviene, el ministro de la Gobernación, Joaquín María López, pide que se restablezca, interinamente, la Dirección General de Estudios conforme al artículo 369 de la Constitución y al 93 del *Reglamento de las Cortes de 29 de junio de 1821*, por ello, se publica el *Real Decreto de 8 de octubre 1836* restableciendo interinamente la Dirección General de Estudios.

Según el artículo seis, *la Dirección informará sobre la conveniencia o inconveniencia del traslado de la Universidad de Alcalá a la ciudad de Madrid, y todos los extremos que conduzcan a mejorar el sistema de enseñanza para el inmediato curso*⁴⁵.

Reemplazado Istúriz y nombrado José María Calatrava en su lugar, se propuso redactar un nuevo texto fundamental al iniciarse el año 1837 ya que desde mediados de agosto de 1836 se estaba gobernando con la Constitución de 1812 que era inoperante en muchos aspectos y desajustada a los nuevos tiempos. La nueva Constitución promulgada el 18 de junio trató de encontrar un término medio entre la Constitución de 1812 y el Estatuto Real para ser aceptada tanto por progresistas como por moderados⁴⁶. Es una Constitución que establece una España liberal ofreciendo una legalidad común a progresistas y conservadores⁴⁷. Sus principios estriban en la soberanía nacional, -consagraba que la Monarquía era inviolable, el Rey estaba exento de responsabilidad, y a él correspondía la sanción y promulgación de las leyes- y en la división de poderes. Los cuerpos legisladores se correspondían

⁴⁵ Decisión tomada por la *Real orden de 29 de octubre de 1836* que dispone el traslado a Madrid de esta Universidad, dando a sus estudios la extensión correspondiente para que sea un establecimiento digno de la capital de la Monarquía.

⁴⁶ Véase TOMÁS VILLARROYA, Joaquín. *El Estatuto Real de 1834 y la Constitución de 1837*. Madrid: Fundación Santa María, 1985

⁴⁷ Consúltese MARICHAL, Carlos. *La revolución liberal y los primeros partidos políticos en España: 1834-1844*. Madrid: Cátedra, 1980.

con dos cámaras: Senado y Congreso. El profesor José Luis Comellas, califica la Constitución de 1837 como *breve (sólo 77 artículos), directa y práctica, que no se pierde en frases retóricas. En este sentido, es lo más contrario a la de 1812*⁴⁸.

Pues bien, ante la situación señalada y con el cambio de Secretario de la Gobernación de la Península se propone una nueva organización de la Secretaría. La exposición presentada a S. M., por el Ministro de la Gobernación, acerca de la organización de la Secretaría del Despacho de su cargo, es aprobada el 31 de agosto de 1837. La planta vuelve a restablecer los cinco jefes de sección que el ministro anterior había suprimido y a incluir algunos cambios en los niveles del personal del archivo fijando un Archivero, un Oficial primero y dos segundos. Tras varias dimisiones y nombramientos de Secretarios de Estado del Despacho de la Gobernación se presentan nuevas plantas de la Secretaría y, por *Real Decreto de 15 de enero de 1838*, se conforma una nueva planta para la secretaría, archivo y contaduría del Ministerio de la Gobernación de la Península.

Una vez más, ante la idea del gobierno de impulsar el ramo de la Instrucción pública, entiende necesario modificar la organización de la actual Dirección general de Estudios para planificar la reorganización de las universidades y demás establecimientos de enseñanza y proceder a un nuevo plan de estudios. Por *Real Decreto de 1 de septiembre de 1838* se da nueva organización a la Dirección General de Estudios que, con arreglo a lo dispuesto en el Real Decreto último de 8 de octubre de 1836 que estaba formada por siete miembros, en lo sucesivo aumentará y se compondrá de doce.

En el mismo mes de septiembre de 1838 la Reina Regente convoca, con fecha de 8 de noviembre del presente año, celebrar Cortes ordinarias para discutir y

⁴⁸ Op. cit. pp.161-162.

aprobar leyes importantes para adoptar medios orientados a la pronta terminación de la guerra civil, ya que la situación del país era muy delicada y políticamente se estaban sucediendo muchos cambios en el gobierno que llevó a la Reina a pensar en aunar tendencias y conseguir una coalición entre moderados y progresistas que pronto se rompió.

En opinión de José María García Madaria, *la poca estabilidad de los gobiernos de este período se explica no sólo por las especiales circunstancias de la política, sino también, por la preponderancia que había adquirido el General Espartero, que tenía a su lado a las principales figuras del liberalismo y al ejército*⁴⁹.

La decisión de la Regente fue tomada, en octubre de 1839, al encargar al General Espartero la Presidencia del Gobierno después de firmar el Convenio de Vergara el 31 de agosto de 1839 que puso término a una guerra que había durado siete años, sin embargo y a pesar del nombramiento, la Regencia de M^a Cristina no tuvo buen final porque la ambición del Presidente le llevó a la regencia de la Corona conspirando y generando, en ausencia de la reina, un movimiento de insurrección en Madrid el 1 de septiembre de 1840 que desembocó, el día 12 de octubre de 1840, en la renuncia de D^a M^a Cristina.

Durante el período de regencia del general Espartero y hasta la proclamación de Isabel II como Reina el 8 de noviembre de 1843, las estructuras ministeriales continuaron sin cambios⁵⁰. Por lo que respecta a la Secretaría de Estado y del

⁴⁹ Op. cit. p.113.

⁵⁰ Véase SÁNCHEZ-ARCILLA, José. *Historia de las Instituciones Político-Administrativas contemporáneas (1812-1845)*. Madrid: Dykinson, 1994.

Despacho de la Gobernación de la Península, seguirá con las mismas competencias y sufrirá como única modificación la supresión de la Dirección General de Estudios regulado por *Decreto de 1 de junio de 1843*.

Las atribuciones ejecutivas que hasta este momento ha tenido la Dirección General se incorporarán al Consejo de Instrucción Pública que crea el Ministerio de la Gobernación de la Península al efecto, compuesto de un presidente y de doce a veinte consejeros nombrados en ambos casos, por el Gobierno. El Consejo, según lo describe el artículo 5º del Decreto, examinará y dará su dictamen cuando sea consultado por el Gobierno en asuntos sobre la creación, conservación y supresión de los establecimientos literarios; sobre los métodos de estudio, los reglamentos de los establecimientos de instrucción pública; sobre provisión y remoción de rectores y catedráticos y sobre todos los puntos relativos a la enseñanza, siempre que el Gobierno tenga por conveniente oírle.

Debiendo incorporarse a este Ministerio las atribuciones gubernativas de la suprimida Dirección General de Estudios, conforme al artículo dos del *Decreto de 1 de junio de 1843*, así como, encargarse de la centralización de los fondos propios de los establecimientos de instrucción pública a una junta compuesta de cinco vocales, - como previene el artículo siete del expresado decreto-, el Regente del reino por *Resolución de 2 de junio de 1843*, crea en el Ministerio de la Gobernación de la Península una Sección denominada de Instrucción Pública. Esta sección estará a cargo de un Oficial del ministerio, sin embargo, todos los jefes de los establecimientos literarios y científicos se entenderán directamente con el Gobierno.

2.5. El reinado de Isabel II

Con fecha 8 de noviembre de 1843 se proclama a Isabel II mayor de edad y comienza su reinado poniéndose fin a la regencia que ha desempeñado el General Espartero. Tras jurar la Reina la Constitución de 1837⁵¹, estructurar los Ministerios y nombrar a los distintos Secretarios de Despacho, el Ministro de la Gobernación de la Península, Marqués de Peñaflorida expone, el 29 de diciembre de 1843, a S. M. que viendo la necesidad de poner la planta de este Ministerio en armonía con las demás clases de administración observa que el mismo abraza dos ramos enteramente distintos; uno el del gobierno interior de la monarquía, y otro el del fomento intelectual y material de la misma. Ambos exigen para el despacho de los negocios hombres especiales versados en la teoría y en la práctica de la administración así como brazos auxiliares.

De tan obvios fundamentos se infiere, claramente, la necesidad de dividir la Secretaría del Ministerio en dos secciones, y la conveniencia de tener en cada una de ellas, oficiales elegidos entre los funcionarios más capaces de las respectivas carreras ayudados con auxiliares, de manera que el trabajo de los primeros se reduzca al estudio de los negocios y a proponer lo que juzguen más conveniente.

Dividida la Secretaría en dos Secciones, la de Gobierno y la de Fomento, se confía la dirección de cada una de ellas al Oficial más antiguo, independientemente de ocupar el negociado que le corresponda. Las modificaciones que introduce en el número de empleados no vienen a cambiar sustancialmente la anterior planta, quedando el Archivo integrado por un archivero y cinco oficiales.

⁵¹ Para el estudio del período de sesiones en la época isabelina resulta relevante el trabajo de MARCUELLO BENEDICTO, Juan Ignacio. *La práctica parlamentaria en el reinado de Isabel II*. Madrid: Congreso de los Diputados, 1986, 308 p.

Hay que destacar, en estos momentos, que con la apertura de los Archivos del reino a los investigadores, por *Real Orden circular de 20 de abril de 1844*, el Ministerio de Gracia y Justicia regula administrativamente el funcionamiento de estos Archivos puestos a disposición de los estudiosos, y para ello crea la Dirección general de los Archivos de España y Ultramar por *Real Orden de 1 de diciembre de 1848*⁵² publicando un Reglamento por *Real Decreto de 24 de mayo de 1849*.

El 3 de mayo de 1844 asume Narváez la presidencia del gobierno y plantea la conveniencia de reformar la Constitución de 1837. Un año después, el 23 de mayo de 1845, se otorgó una nueva Constitución que, en opinión de Julio Aróstegui, *diseña un nuevo modelo de Estado llamado a perdurar a través, incluso, del futuro régimen de la Restauración*⁵³. Consta de trece títulos y setenta y nueve artículos, como aspectos novedosos podemos destacar:

- Deroga el principio de soberanía nacional.
- El Senado pasaba a ser designado íntegramente por la Corona y,
- La convocatoria de Cortes se reservaba al monarca.

Por tanto, era una Constitución conservadora de régimen moderado que vendría a regir todo el reinado de D^a Isabel II hasta su destronamiento en 1868, si bien con proyectos intermedios de reforma que no llegaron a ser realidad.

⁵² CRUZ HERRANZ, Luis Miguel de la. *Panorama de los archivos durante el siglo XIX y primer tercio del siglo XX*. En: GENERELO, Juan José y MORENO LÓPEZ, Ángeles, coordinadores. *Historia de los Archivos y de la Archivística en España*. Valladolid: Secretariado de Publicaciones e Intercambio Científico, Universidad de Valladolid, 1998, p.121, considera que ésta Dirección general sustituyó a la Junta Superior Directiva de Archivos que había sido creada por el Real Decreto de 5 de noviembre de 1847 del Ministerio de Gracia y Justicia y reglamentada por Real Orden de 26 de abril de 1848.

Con el nombramiento y la llegada del nuevo Ministro de Estado y del Despacho de la Gobernación de la Península Pedro José Pidal, la planta del Ministerio sufre algunos cambios por *Real Decreto de 28 de agosto de 1844* que permanecen hasta el año 1847.

Estos cambios pueden apreciarse en el *Real Decreto de 17 de septiembre de 1845* que aprueba el Plan de Estudios relativo a las enseñanzas secundaria y superior y que hacen referencia *al gobierno general y particular de los establecimientos de enseñanza*, tanto en la parte administrativa, como en la disciplinaria y económica. Dentro de esta sección del *Gobierno de la Instrucción pública*, el Título I *Administración general*, regula en el artículo 131 que la dirección y gobierno de la instrucción pública en todos los ramos corresponde al Rey por el Ministerio de la Gobernación de la Península.

El artículo 132 establece que habrá un Consejo de Instrucción pública cuyos vocales serán nombrados por el Rey entre las personas mas distinguidas en las carreras científicas y literarias. El Consejo podrá en casos especiales oír a las facultades o simplemente a los profesores. Por otra parte el artículo 134 estipula que el Consejo de Instrucción pública dará su dictamen cuando sea consultado por el Gobierno en cuestiones relativas a:

1. *Sobre creación, conservación y supresión de establecimientos de instrucción pública.*
2. *Sobre métodos de enseñanza y libros de texto.*
3. *Sobre los reglamentos de toda clase de escuelas.*
4. *Sobre la provisión de cátedras.*

⁵³ Op. cit., pp. 792-793.

5. *Sobre la antigüedad y clasificación de los profesores.*
6. *Sobre remoción de los catedráticos propietarios.*
7. *Sobre las cuestiones que se susciten relativas al gobierno interior de los establecimientos y penas académicas.*
8. *Sobre los demás puntos relativos a la enseñanza en que el Gobierno tenga por conveniente oírle.*

El artículo 135 señala que el Consejo de Instrucción pública tendrá un secretario de nombramiento Real con voz pero sin voto. Por último el artículo 137 establece que los Jefes políticos tendrán también derecho de inspección sobre todos los establecimientos de instrucción pública de sus respectivas provincias.

El 12 de febrero de 1846 dimite Narváez y le sucede el marqués de Miraflores, de nuevo vuelve Narváez, y pasa a ser sustituido, días después, por Istúriz. Pese a la poca duración del segundo gabinete de Narváez, el Gobierno, elabora un manifiesto que consigna los principios que se propone seguir en la administración general del Estado⁵⁴. La dimisión de Istúriz se provoca el último día del año 1846 al abrirse las Cortes y perder el Gobierno la votación presentada encabezada por el mismo, a partir de esta dimisión le sucede el duque de Sotomayor.

La labor más importante del Gobierno de estos momentos puede centrarse, desde nuestro punto de vista, en la creación, por *Real Decreto de 28 de enero de 1847* del nuevo Ministerio denominado Secretaría de Estado y del Despacho de Comercio, Instrucción y Obras Públicas, incorporándole la Dirección de Instrucción

⁵⁴ Consúltense FONTANA Y LÁZARO, Josep. *Cambio económico y actitudes políticas en la España del siglo XIX*. Barcelona: Ariel, 1973.

Pública y las Secciones de Beneficencia, Obras Públicas y Comercio, hasta entonces adscritas a las Secretarías de Gobernación y Marina. El mismo Decreto insta al Ministro para que, en un plazo breve, elabore un proyecto de Decreto determinando la forma, atribuciones y planta del nuevo Ministerio para someterlo al Consejo de Ministros.

Como respuesta a la petición anterior, por *Real Decreto de 5 de febrero de 1847*, se designan las atribuciones y ramos que abraza el nuevo Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras Públicas. Las competencias en materia de Instrucción Pública comprenden lo relativo a Universidades, Institutos de segunda enseñanza, Colegios de humanidades, Colegios de sordo mudos, Colegios de ciegos, Instrucción primaria, Veterinaria, Academias y demás sociedades literarias y científicas, Escuelas de Bellas Artes, Bibliotecas, Archivos, Museos, conservatorio de música, conservatorio de artes y escuelas industriales, Propiedad literaria, Premios a literatos y artistas, Comisión de monumentos históricos y artísticos. A su vez, la Dirección de Instrucción pública amplía el número de oficiales aprovechando la reforma de la planta de Secretaría del Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras Públicas.

En el último trimestre del año, el 4 de octubre de 1847, se encargaba nuevamente Narváez del poder entrando, en el año 1848, en una revolución que el gobierno no intentó evitar. El 10 de enero de 1851, dimite Narváez encargándose Juan Bravo Murillo del nuevo ministerio hasta 14 de diciembre de 1852. Bravo Murillo proyectó una reforma constitucional que restringía, en su totalidad, los principios del régimen representativo que, de haber prosperado, hubiera significado una vuelta de las estructuras políticas a moldes absolutistas⁵⁵.

⁵⁵ ARÓSTEGUI SÁNCHEZ, Julio. Op. cit., pp 794-795.

Con la aprobación del Plan de estudios de 1850 el Reglamento de desarrollo regulado, por *Real orden de 10 de septiembre de 1851*, recoge los siguientes aspectos a que pasamos a destacar. La Sección primera titulada *Del gobierno general de la Instrucción pública*, contiene, en el Título primero, *Del Ministerio y de la Dirección general*, el artículo 1º que establece:

Que en todo lo relativo a la enseñanza, gobierno interior de los establecimientos, disciplina escolástica, administración y demás puntos que abrace la instrucción pública en España, las ordenes de S. M. se comunicarán directamente a quienes corresponda por el Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras públicas.

Por su parte el artículo 2º estipula; *para el mas pronto despacho de los negocios, la Dirección general de Instrucción pública tendrá las atribuciones siguientes:*

- 1. Trasladar las instrucciones, ordenes y reglamentos que le comunique el Ministro, haciendo las oportunas prevenciones para facilitar su ejecución e inteligencia.*
- 2. Disponer cuanto sea necesario para la completa instrucción de los expedientes.*
- 3. Acordar las resoluciones forzosas en todo caso previsto por las leyes, Reales decretos y reglamentos vigentes.*
- 4. Dictar las disposiciones necesarias para llevar a debido efecto lo mandado por las mismas disposiciones.*
- 5. Proponer las mejoras que estime oportunas y las variaciones que la experiencia acredite ser necesarias en las disposiciones y reglamentos vigentes.*

6. *Formar la estadística del ramo, pidiendo todas las noticias y datos necesarios al efecto.*
7. *Proponer para todas las plazas que sean de Real nombramiento, con sujeción a las condiciones y trámites establecidos para sus respectivos casos.*
8. *Suspender, con sueldo o sin él, a todos los profesores y empleados , dando inmediatamente cuenta al Minsitro.*
9. *Nombrar bedeles, porteros y demás dependientes cuyo sueldo no supere la cantidad estipulada.*
10. *Conceder licencia hasta por dos meses a los profesores y empleados, excepto a los jefes de los establecimientos.*
11. *Resolver todos los expedientes relativos a validez de cursos, exámenes, matrículas y faltas de asistencia siempre que no exijan una gracia especial.*
12. *Aprobar los expedientes de títulos para las diferentes carreras y expedir dichos documentos en nombre del Ministro, menos los de doctor.*
13. *Autorizar ciertos gastos.*
14. *Aprobar los presupuestos mensuales de los establecimientos, siempre que se hallen contenidos dentro del presupuesto votado por las Cortes y de la cantidad señalada en la distribución del mes por el Ministro.*
15. *Aprobar las cuentas de los gastos mensuales de dichos establecimientos, pasándolas después donde corresponda, para los demás trámites que exijan las leyes.*

Siguiendo la línea que pretendía Bravo Murillo de vigorizar la Administración pública, en el otoño de ese mismo año se va a producir una nueva

organización de la Administración central⁵⁶. Una primera medida se publica por *Real Decreto de 20 de octubre de 1851* que crea el *Ministerio de Fomento* sustituyendo al de Comercio, Instrucción Pública y Obras públicas, agregando al de Gracia y Justicia la Dirección General de Instrucción Pública y varios negociados que antes dependían de otros Ministerios, es el caso del Negociado de Instrucción pública que, en opinión del Consejo de Ministros, *conviene que pase al de Gracia y Justicia, no solo por afinidad en sus competencias sino por ser el menos cargado de atribuciones*.

Las razones que justificaron, hace cinco años, la división del antiguo Ministerio de la Gobernación del Reino eran tan fundadas como las que ahora argumentan la necesidad de las nuevas variaciones del mismo Ministerio. El motivo fundamental se apoya en la gran cantidad de materias inconexas que el Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras Públicas debía de atender considerando la imposibilidad de que el Ministro alcance a despachar debidamente todos los asuntos.

El Real Decreto que aprueba la Reina reza de la siguiente manera:

Artículo 1º. *El Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras Públicas se denominará Ministerio de Fomento.*

Artículo 2º: *El negociado de caminos vecinales, el de construcción de torres telegráficas y cualquier otro relativo a la ejecución de obras públicas, pasarán al Ministerio de Fomento.*

Artículo 3º: *Los negociados de escuelas especiales de ingenieros de caminos, canales y puertos, de escuelas especiales de ingenieros de minas, de escuelas o academias de arquitectura, de comercio y de institutos y escuelas industriales, subsistirán en el Ministerio de Fomento.*

Artículo 4º: *Los negocios de instrucción pública con sus incidencias y*

conexiones, no especificadas en el artículo anterior, pasarán al Ministerio de Gracia y Justicia. Por último, pasarán al Ministerio de Gracia y Justicia la Dirección y Consejo de Instrucción pública y los negociados respectivos con sus dependencias en lo personal y material.

El *Real Decreto de 12 de noviembre de 1851* suprime la Dirección General de Instrucción Pública y dispone que el Subsecretario del Ministerio de Gracia y Justicia desempeñe las funciones que por las leyes, decretos y Reales órdenes vigentes estaban a cargo del Director de la misma. A su vez, por *Real Decreto de 5 de diciembre de 1851* se aumenta, en el Ministerio de Gracia y Justicia, cuatro plazas de jefes de sección y seis de oficiales de sección para el despacho del Negociado de Instrucción Pública. Esta medida pretende armonizar este Negociado con los demás del Ministerio de Gracia y Justicia, haciendo extensivo el Real Decreto de 10 de junio del mismo año, que arreglaba la planta de la Secretaría del Ministerio de Gracia y Justicia.

El Negociado de Instrucción Pública se divide en cuatro secciones que se titularán: *De Instrucción superior, de Filosofía e Instrucción secundaria, de Instrucción primaria y de Asuntos generales, Academias y Corporaciones científicas*. Al frente de cada una de estas secciones habrá un Jefe con el correspondiente número de oficiales. Según el artículo ocho del mismo Decreto, para ser Jefes de sección se necesitan o las cualidades que determina el citado Real Decreto de 10 de junio, o haber desempeñado el profesorado en las Universidades por un número de años igual al que se exige en la carrera judicial para ser Magistrado de la Audiencia de Madrid.

⁵⁶ Refiriéndonos a este asunto consúltese MARTÍN-RETORTILLO, Sebastián, y ARGULLOL, E.: *Descentralización administrativa y organización política. Aproximación histórica (1812-1931)*. Madrid, 1982

Cuando se reorganiza la planta y los auxiliares del Ministerio, *por Real Decreto de 21 de enero de 1852*, aparece especificado como parte de la misma, los Museos y Academias artísticas, Biblioteca, Archivo general, Colegio de Sordomudos y Boletín.

Con el cambio de Ministerio se propone mejorar la Instrucción pública y para ello se nombra una comisión que revise el plan de estudios vigente y que examine el reglamento. En realidad son pocas las novedades que introduce el Reglamento de estudios aprobado por *Real Decreto de 10 de septiembre de 1852* que aparece estructurado en cinco Secciones.

Por lo que respecta a la Sección primera *Del gobierno general de Instrucción pública*. En el Título I *Del Ministro y de la Dirección general* regula en el artículo 1º que el Ministro de Gracia y Justicia comunicará directamente, a quien corresponda, las órdenes del Gobierno relativas a la enseñanza al gobierno y administración de la Instrucción pública.

El artículo 2º regula las atribuciones del Subsecretario coincidiendo con las que tenía atribuidas la Dirección General de Instrucción Pública salvo tres de ellas que pasamos a relacionar:

1. *Suspender con sueldo o sin él, a todos los profesores y empleados, dando inmediatamente cuenta al Ministro.*
2. *Nombrar bedeles, porteros, y demás dependientes, cuyo sueldo no sobrepase la cantidad estipulada.*
3. *Conceder licencia hasta por dos meses a los profesores y empleados, excepto a los jefes de los establecimientos.*

Por *Real Orden 30 de octubre de 1852* se dictan reglas para que tenga efecto en el Ministerio de Gracia y Justicia, lo dispuesto en el Real Decreto de 18 de junio del mismo año, acerca de las categorías de los empleados de la Administración activa. Según el artículo dos: *no se introducirá por ahora mas novedad en el personal de la Secretaría del Despacho, que la de separar el ramo de archivos para formar una sección independiente de las demás, cuya sección estará a cargo del archivero. También pertenece a esta sección la Cancillería.*

El artículo cuarto del mismo decreto detalla el ámbito del ramo de archivos y establece: *Constituirán el ramo especial de Archivos los empleados en los de la Secretaría del Despacho y sus agregados, en los generales de Aragón, Galicia, Simancas, Valencia e islas Baleares, el Archivo del Tribunal especial de las Ordenes, y los oficiales de Archivos de las Audiencias, y el artículo cinco designa la categoría de las personas que trabajan en este ramo: El archivero de la Secretaría del Despacho es Jefe de Administración. Son Jefes de negociado: los archiveros de los Archivos generales de Aragón, Galicia, Simancas y Valencia; el oficial de sección encargado de la Cancillería del Ministerio; los encargados de los archivos de la extinguida Cámara de Castilla, y el primero de Instrucción pública.*

El artículo ocho establece que los empleados en las bibliotecas formarán, para los efectos expresados, un ramo especial. El artículo nueve regula que: el bibliotecario mayor de la Nacional es Jefe de Administración. Son jefes de negociado los bibliotecarios de la misma biblioteca, y el de la general de la Universidad central. Son oficiales los empleados de la Biblioteca Nacional, los bibliotecarios de las facultades de la Universidad Central y los bibliotecarios primeros de las Universidades.

Por último, *los Rectores de las Universidades, corresponden a la categoría de Jefes de Administración, siendo jefes de negociado el Secretario de la Universidad central y el general de la Real Academia de Ciencias.*

Durante el año 1852 permanecieron cerradas las Cortes, y ante la oposición al proyecto de reforma constitucional, publicado por Bravo Murillo, se consideró pertinente presentar la dimisión el 13 de diciembre del mismo año, sucediéndose varios Gobiernos⁵⁷.

Como ya hemos visto el *Real Decreto de 5 de diciembre de 1851* tuvo por objeto poner en armonía el ramo de Instrucción Pública con los demás del Ministerio, aumentando el personal. Sin embargo, en estos momentos el Ministro competente, considera que esta planta no es la que más conviene al Ministerio de Gracia y Justicia debido a las variaciones que se estaban introduciendo en el Ministerio donde se agregaban diferentes negociados, como la Instrucción Pública con su Dirección general y Real Consejo del ramo, a la vez que se iban segregando otros que hasta entonces le habían correspondido.

Por estos motivos, parecía indispensable proponer y fijar definitivamente la planta de este Ministerio distinguiendo las atribuciones de diversa índole -que hoy están confundidas- y destinando, convenientemente, los empleados según el carácter respectivo de sus funciones, y separando las que son propias de la Secretaría con otras dependencias que reclaman conocimientos especiales, pero de orden inferior a los anteriores.

En función de lo expuesto se publica el *Real Decreto de 2 de noviembre de 1853*, que reforma la planta de la Secretaría del Ministerio de Gracia y Justicia; planta que es modificada, un año mas tarde, integrando seis Jefaturas de sección y manteniendo algunos puestos como los de Archivero y ocho oficiales del archivo.

⁵⁷ Consúltase PONS Y UMBERT, Adolfo. *Organización y funcionamiento de las Cortes según las Constituciones españolas y Reglamentos de dichos Cuerpos colegiados*. Madrid: Hijo de M. S. Hernández, 1906. También SOLÉ TURA, Jordi y AJA, Eliseo. *Constituciones y períodos constituyentes en España (1812-1874)*. Barcelona: Siglo XXI, 1990.

2.5.1. La revolución de 1854

Sobre la revolución de 1854 el profesor Julio Aróstegui escribe: *El movimiento contra el estado de cosas, en 1854, concluiría con el pronunciamiento militar de julio de 1854 que recibió el nombre de la Vicalvarada*⁵⁸. Ante esta situación la Reina decide entregar el poder al viejo regente Espartero como único hombre que, en su opinión, podía calmar la situación, gobernando el país durante dos años, período conocido como el *Bienio Progresista*⁵⁹.

Unido a esto, un nuevo conflicto enturbiaría las relaciones de la Reina con su gobierno, la reforma que introduce el Ministro de Hacienda, Pascual Madoz, para desamortizar bienes religiosos dando lugar a una Ley que fue sancionada por la Reina a pesar de la resistencia mantenida. Como nos recuerda José Luis Comellas, [...] *la reforma fundamental de Madoz fue la célebre desamortización, que le ha colocado en la historia casi a la altura de Mendizábal*⁶⁰.

Como ya apuntábamos al analizar disposiciones anteriores, el *Real Decreto de 5 de febrero de 1847* que fijó, con bastante acierto, los diversos ramos que comprendía el Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras Públicas fue modificado adoptando la denominación de Ministerio de Fomento, denominación que se consideró mas propia y adecuada al no integrarse en él la instrucción pública. A su vez, el *Real Decreto de 20 de octubre de 1851* llevó al Ministerio de Gracia y Justicia una parte principal de la instrucción pública dejando, al propio tiempo, en el

⁵⁸ Op. cit., pp. 795-796.

⁵⁹ Consúltense las obras de TUÑÓN DE LARA, Manuel. *La España del siglo XIX (1808-1914)*. París: Club del Libro Español, 1961; y *La España del siglo XIX*. Barcelona: LAIA, 1975.

⁶⁰ Op. cit. p.189.

de Fomento las escuelas especiales. Ante esta dispersión de las materias y de las competencias, el Ministro responsable del ramo aduce la imposibilidad de llevar con unidad y armonía la dirección de los estudios, por ello, insiste en la necesidad de unificar porque todo esto exige cierta unidad de miras, de proyectos, de intenciones y de medidas que no pueden llevarse a cabo cuando están descentralizadas en distintas Secretarías del Despacho [...] *con razón tan importante ramo se separó de la Gobernación del Reino y de la Administración, y pasó una parte de él al Ministerio de Gracia y Justicia, por ser este el menos cargado de atribuciones.*

En base a estas justificaciones se propone integrar, en el Ministerio de Fomento, la Instrucción pública, y se aprueba el *Real Decreto de 17 de junio de 1855* decretando que los negociados de instrucción pública, con sus incidencias y conexiones, pasarán al Ministerio de Fomento. Se incluía la Dirección y Consejo de Instrucción pública, con sus dependencias en lo personal y material, y por *Real Decreto de 1 de agosto de 1855* se integra en la planta del Ministerio de Fomento el personal de que constaba la Dirección General de Instrucción Pública.

Sin duda, el objeto perseguido por el *Real Decreto de 17 de junio de 1855*, devolviendo al Ministerio de Fomento la parte de la Instrucción pública que estaba a cargo del de Gracia y Justicia, fue incompleto puesto que lo que se pretendía era reconstruir la Dirección bajo la misma forma que tenía cuando fue suprimida y esto es, precisamente, lo que se propone con el *Real Decreto de 17 de diciembre de 1856* en el que se manda incorporar a la Dirección General de Instrucción Pública los ramos dependientes del Ministerio de Fomento que correspondían a la Dirección antes de transferirlos al Ministerio de Gracia y Justicia.

En el verano de 1856, tras una serie de conflictos, O'Donnell consigue desembarazarse de Espartero con la intención de hacerse, no por mucho tiempo, con la jefatura del Gobierno pero como consecuencia de los desórdenes que supusieron el cierre de las Cortes, O'Donnell fue cesado sucediéndole el general Narváez. Esto da lugar a una situación similar a la de 1854 desencadenando, entre los años 1856 y 1868, una etapa del régimen moderado diseñado por la Constitución de 1845⁶¹. Sobre este período el profesor Comellas refleja: *Las Cortes constituyentes quedaron suspendidas, y con ellas la aprobación del nuevo Código. O'Donnell se limitó a extender un Acta Adicional a la Constitución de 1845, que la hacía un poco más abierta. Pero no tuvo tiempo de más. La crisis se produjo en octubre*⁶².

Desde que el general Narváez es llamado por la Reina Isabel II para ponerse al frente de la gobernación del Estado, uno de sus principales propósitos sería restablecer, en todas sus partes, la organización establecida en la Constitución política de la Monarquía decretada y sancionada por la Reina en 1845 e implantada de acuerdo con las Cortes del Reino, que se convocan al efecto, por *Real Decreto de 16 de enero de 1857*.

Consideramos importante destacar que en este año 1857 se publica la *Ley de 9 de septiembre de 1857* que regula la Instrucción pública y que recoge en la Sección cuarta todo lo relacionado *Del gobierno y administración de la instrucción pública*. El Título Primero, Capítulo I, bajo el epígrafe, *Del Ministro de Fomento y del Director general de Instrucción pública* establece que el gobierno superior de la Instrucción pública en todos sus ramos, dentro del orden civil, corresponde al Ministro de Fomento. Por este motivo le compete:

1. *Aconsejar al Rey en todos los asuntos relativos a esta parte de Administración pública y refrendar las Reales disposiciones.*

⁶¹ ARÓSTEGUI SÁNCHEZ, J. Op. cit., pp 796.

⁶² *Idem*, pp. 202-203.

2. *Presidir las secciones del Real Consejo de Instrucción pública y de las demás Corporaciones del ramo, siempre que asista a ellas.*
3. *Conferir el grado de Doctor y expedir los títulos profesionales.*

A su vez, el artículo 244 establece lo que corresponde al Director general considerándole como la figura central de la Instrucción pública.

Fue con la *Ley de Instrucción Pública de 9 de septiembre de 1857*, conocida como Ley Moyano, cuando se adscriben los archivos al Ministerio de Fomento por los artículos 165 y 166, sin embargo, con la dimisión de Claudio Moyano y el nombramiento del nuevo ministro se modifican estos artículos por *Real Decreto de 17 de julio de 1858* disponiendo que las Bibliotecas y Archivos sujetos al Ministerio de Fomento dependan inmediatamente de la Dirección general de Instrucción pública y regulando las reglas convenientes para la organización del personal de Archivos y Bibliotecas.

A su vez, el Decreto recoge que las Bibliotecas públicas y los Archivos generales y provinciales históricos, sujetos hoy al Ministerio de Fomento, y los establecimientos de esta naturaleza que se formen en lo sucesivo, estarán bajo la dependencia de la Dirección general de Instrucción pública.

Por lo que respecta al Consejo Real constituido, en virtud de la *Ley de 6 de junio de 1845*, como cuerpo consultivo del Gobierno para la mejor administración del Estado, se propone por *Real Decreto de 1 de julio de 1858* variaciones en el nombre y categoría del mismo suprimiendo el Consejo y creando, en su lugar, el Consejo de Estado.

Unos meses después de estos cambios, vuelve O'Donnell como presidente del Consejo de Ministros y disuelve el Congreso de los Diputados convocando uno nuevo por *Real Decreto de 11 de septiembre de 1858*. A pesar de la sospecha de que este gobierno iba a durar menos que el de Narváez, resultó ser el gobierno más duradero del momento permaneciendo durante los años 1858 a 1863⁶³.

En este período, por *Real Decreto de 20 de julio de 1859*, se aprueba el Reglamento general para la Administración y el régimen de la Instrucción pública que el Título primero bajo el epígrafe *De la Administración Central*, regula en el Capítulo I la figura del Ministro de Fomento y en su artículo primero estipula:

En todo lo relativo a la enseñanza, disciplina escolástica, gobierno, administración e Inspección de los establecimientos de Instrucción pública del orden civil, las resoluciones de S.M. se comunicarán a quien corresponda por el Ministro de Fomento.

El artículo 2º recoge *las competencias que al Ministro de Fomento le corresponde como Jefe superior de la Instrucción pública*:

- 1. Presidir, cuando asista, las sesiones del Real Consejo del ramo.*
- 2. Presidir asimismo, en todos los establecimientos de Instrucción pública, los actos solemnes a que asistiere.*
- 3. Conferir el grado de Doctor y por delegación puede hacerlo el Director general de Instrucción pública.*

⁶³ Es aconsejable consultar las obras de GARCÍA DE CORTAZAR, Fernando y GONZÁLEZ VESCA, José. *Breve Historia de España*. Madrid: Alianza Editorial, 1995, y FONTANA y LÁZARO, Josep. *La historiografía española del siglo XIX: un siglo de renovación entre dos rupturas*. En CASTILLO, Santiago (coord.). *La historia social en España. Actualidad y perspectivas*. En *Actas del primer Congreso de la Asociación de Historia Social*. Madrid: Siglo XXI, 1991, pp. 325-335.

4. *Expedir los títulos de catedrático y de Doctor, así como los de los funcionarios administrativos, cuya dotación lo exija según las disposiciones generales vigentes en la materia.*

El Capítulo II *Del Director general de Instrucción pública* contiene las atribuciones que le corresponden, a saber:

1. *Trasladar las ordenes y reglamentos que se dictaren por S.M. y dar instrucciones para facilitar su ejecución.*
2. *Dirigir la instrucción de los expedientes que deben decidirse por Real orden.*
3. *Resolver las consultas de las Autoridades subordinadas a la Dirección general cuando para ello no haya que suplir o alterar Reales disposiciones.*
4. *Proponer al Ministro las medidas que considere provechosas y no estén en sus atribuciones.*
5. *Proveer a las necesidades de la enseñanza nombrando personas que la den provisionalmente cuando las cátedras estén vacantes y no haya quien deba sustituirlas.*
6. *Nombrar, suspender y separar a los empleados administrativos del ramo, así como a los dependientes, en todos los establecimientos de que los Rectores son Jefes superiores.*
7. *Conceder licencia por un mes a los profesores y hasta por dos meses a los Jefes, empleados y dependientes.*
8. *Firmar a nombre del Ministro los títulos de Licenciado y los demás de carreras superiores y profesionales.*

9. *Formar la estadística general del ramo.*

10. *Ejercer las demás atribuciones que se le señalen en este reglamento y las que se den al llevar la competencia de Instrucción pública.*

El creciente desarrollo de los diversos ramos que constituyen el Ministerio de Fomento impide que el Ministro pueda despachar todos los negocios competentes a su puesto. Al no poder crear una plaza de Subsecretario, por carecer de presupuesto, se considera necesario dar mas facultades a los Directores generales y de esta forma ensanchar el círculo de responsabilidades administrativas para facilitar el curso de los procedimientos y resoluciones del Ministerio.

Ante esta conveniencia se redacta el *Real Decreto de 4 de noviembre de 1863* disponiendo que los Directores generales de Obras Públicas, Instrucción pública y Agricultura, Industria y Comercio ejerzan, en los asuntos de sus Direcciones respectivas, las atribuciones que en los demás Ministerios competen a los Subsecretarios. A su vez, un reglamento interior de la Secretaría determinará el límite de las facultades que el presente decreto otorga a los Directores generales. En virtud de este reglamento, se crea un Negociado de Asuntos Generales afecto a la Dirección general de la Instrucción pública, y con las atribuciones que ha tenido hasta la fecha el Negociado Central.

De nuevo, y para ajustarse a la reciente ley de presupuesto, se implanta una nueva estructura orgánica en el Ministerio de Fomento, el 11 de agosto de 1864, formada por tres Directores generales, un Ordenador general de Pagos, un Oficial mayor, cinco Oficiales primeros, siete segundos, ocho terceros, un Abogado Consultor y Oficiales auxiliares.

Esta decisión es modificada dos años después por la necesidad de realizar atinadas economías en los gastos públicos y cumplir las exigencias del buen servicio público. Por *Real Decreto de 18 de julio de 1866* se ajusta la planta del Ministerio de Fomento rebajando el número de Oficiales y Auxiliares y suprimiendo las plazas de Oficial mayor y Consultor.

Por último, el *Real Decreto de 9 de octubre de 1866* reorganiza el Consejo de Instrucción Pública y, unos días después, el *Real Decreto de 14 de octubre de 1866* aprueba el reglamento del Real Consejo de Instrucción Pública desarrollando la organización, composición y atribuciones del mismo. Este Real Consejo se vuelve a reorganizar por *Real Decreto de 17 de junio de 1868* transfiriendo a la sección tercera las competencias de las Facultades y ejerciendo las funciones de Secretario General, el Oficial de Secretaría perteneciente a la Dirección General del ramo. Unos meses más tarde es disuelto por *Decreto de 10 de octubre de 1868*.

2.6. De la caída del reinado de Isabel II a la Restauración de la Dinastía Borbónica

El debilitamiento progresivo del trono de Isabel II originó en 1868 una situación política insostenible que desencadenó, tras el fallecimiento de O'Donnell y de Narváez, el destronamiento de la Reina y el comienzo de una revolución dentro del período denominado del *sexenio* que comprende de los años 1868 a 1874⁶⁴.

⁶⁴ Esta situación ha sido tratado, entre otros, por FONTANA y LÁZARO, Josep. *Cambio económico y actitudes políticas en la España del siglo XIX*. Barcelona: Ariel, 1973.

José Luis Comellas analiza este momento histórico destacando lo siguiente: *De pronto, en 1868, cambia radicalmente el ritmo de la historia de España.[...] A partir de entonces se ensayan sistemas completamente nuevos -incluso una República- por obra de hombres nuevos*⁶⁵.

En el mes de enero de 1869 se celebran elecciones a Cortes Constituyentes, y en su programa se incluye como sistema de gobierno el monárquico, pero, no la Monarquía identificada con la dinastía histórica tradicional de España, sino, la que naciera del sufragio universal. Al abrirse, el 11 de febrero, las Cortes Constituyentes se presentó el proyecto constitucional que fue aprobado el uno de junio y promulgado el seis del mismo mes. Para Ángel Bahamonde y Julián Toro, la Constitución de 1869 era la más liberal de todas las que se habían promulgado anteriormente. Integraba 112 artículos repartidos en 11 títulos que abordaban el ideario de los principios democráticos superando los del liberalismo doctrinario.

El principio básico se apoyaba en la soberanía nacional estableciendo una total división de poderes del Estado: el legislativo en manos de las Cortes, el ejecutivo en el rey y el judicial en los tribunales, que se llegan a democratizar con la institución del jurado⁶⁶. A su vez, la Constitución establecía un sistema bicameral: Congreso de los Diputados y Senado.

Una vez aprobado el texto constitucional se instauró una *Regencia* en la persona del General Serrano, mientras Prim se erigía como jefe del primer gobierno constitucional. Las reformas radicales que propone introducir el Gobierno para anular constante y enérgicamente la acción centralizadora del Estado, abren campo a la actividad individual transformando por completo el mecanismo administrativo.

⁶⁵ *Idem*, pp. 219-220.

Estos cambios están inspirados tanto en el planteamiento de la economía, que se considera necesaria, como en la organización de los servicios. El Ministro de Fomento, atento a tales circunstancias, decreta el 13 de octubre de 1868 la nueva plantilla para la Secretaría del Ministerio de Fomento uniendo las dos Direcciones de Obras públicas y Agricultura, Industria y Comercio, en una sola, y reduciendo también el número de empleados.

En este sentido se tiene en cuenta que, a consecuencia de la disolución del Consejo de Instrucción Pública, el 10 de octubre último han quedado en aquellas oficinas multitud de expedientes y asuntos cuya resolución es urgente por los graves perjuicios que puedan sufrir las personas y establecimientos afectados. Se hace, pues, preciso distribuir a los Negociados de Instrucción pública los expedientes que allí existen y reformar la plantilla del personal administrativo del antiguo Consejo. Por ello, el *Decreto de 15 de enero de 1869* suprime la plantilla administrativa del Consejo de Instrucción Pública y crea una sección en la Dirección General del ramo para el despacho de los expedientes relativos al extinguido Consejo.

Creemos conveniente apuntar que, en estos momentos, por *Decreto de 20 de junio de 1869* se crea la Secretaría de la Regencia y de la Estampilla a las inmediatas órdenes del Presidente del Poder ejecutivo Francisco Serrano correspondiendo, a la misma, preparar y dar cuenta de todos los asuntos que a este fin se remitan por los diversos Ministerios o por cualquier otro conducto, y de hacer que se firmen por medio de la Estampilla, que se abrirá con el nombre y rúbrica del Presidente, todos los títulos, cédulas, despachos y demás documentos que hayan de expedir y haya sido costumbre firmar por la misma. Este motivo determinó su creación y, hasta ahora,

⁶⁶ BAHAMONDE, Ángel y TORO, Julián. *El sexenio Democrático, 1868-1874*. En *Historia de España*. Madrid: Historia 16, 1986, pp. 858-859.

la conservación de la Secretaría denominada de la *Estampilla*, cuyo objeto era autorizar por medio de ella los documentos que hubieran de llevar la firma de las personas que habían ejercido el Poder. Por ello el decreto establece lo siguiente:

La existencia de la Secretaría de la Estampilla se confirma por la prontitud con que en todos los cambios políticos se ha acudido a decretar su conservación, aun en los períodos de verdadero trastorno, y en que quienes ejercían el poder público lo hacían solo con carácter provisional y transitorio. Buen ejemplo es el decreto de la Regencia provisional del Reino de 5 de noviembre de 1840 disponiendo que se abriese la Estampilla con la inscripción de El Duque de la Victoria, Presidente; haber usado incluso después al pasar a ser Regente del Reino, y por último, haber procedido de la misma manera el Gobierno provisional que rigió en el país una parte del año 1843.

En la misma línea que venimos resaltando, los nuevos principios proclamados por la Revolución también exigen modificaciones en el organismo administrativo del país, y toman como base, del nuevo sistema, la distribución de servicios entre los departamentos. Uno de los centros que más urge reformar es el Ministerio de Fomento. Se considera necesario centralizar los servicios que se hallan repartidos por los demás Ministerios sin un motivo que lo explique. Es el caso de las Escuelas distribuidas por varios departamentos ministeriales, que dan lugar a una repetición de materias y profesores y ocasionan gastos innecesarios. En estos momentos el Ministerio de Fomento solo comprende dos Direcciones: la de Instrucción Pública y la de Obras Públicas, Agricultura, Industria y Comercio. La existencia de este Ministerio se interpreta como irregular frente a los principios que rigen en la administración de economía, orden, unidad, y todo aconseja que este centro se organice en torno al fomento material y moral del país. Fundado en estas razones se regula el *Decreto de 20 de septiembre de 1869*, creando una Comisión que proponga

la reorganización del Ministerio de Fomento. Esta Comisión presentará en breve plazo una Memoria con la organización definitiva de dicho departamento detallando los servicios que deban pasar al Ministerio y que dependen de otros departamentos, la reducción del personal y los gastos que conlleve.

Como consecuencia se aprueba por *Decreto de 17 de septiembre de 1870* el Reglamento para el gobierno interior de las Secciones de fomento. El capítulo uno que recoge el objeto y organización de las Secciones de Fomento establece que, el Cuerpo de Administración provincial de Fomento, creado por el Decreto de 26 de agosto último, se constituirá con los empleados en las Secciones de las provincias y dependerá exclusivamente del Ministerio de Fomento en el Negociado Central del mismo para todo lo que se refiere a su organización, disciplina y gobierno.

Los asuntos que van a entender las Secciones se clasificarán en función de los Negociados, y así al de Instrucción Pública corresponderán los asuntos de primera y segunda enseñanza, escuelas especiales, Bellas Artes y Facultades. Corresponde a estas Secciones la tramitación y preparación de todos los expedientes y asuntos relativos a los ramos que dependen del Ministerio de Fomento y cuya resolución competa a los Gobernadores, todas ellas funcionarán con arreglo a las órdenes que reciban del Ministerio, de las Direcciones, Ordenación de Pagos, Negociado Central y Gobernador de la provincia.

El Archivo de expedientes y documentos de los ramos de Fomento será independiente del de la Secretaría del Gobierno y estará arreglado y clasificado por Negociados con su índice correspondiente bajo la dirección, vigilancia y responsabilidad del Jefe de la Sección. En las Secciones de Fomento habrá un registro general de entrada y salida de expedientes y documentos, un Archivo, y Libros de registro de recibos que estarán a cargo de un Escribiente bajo la dirección y vigilancia del Jefe de la Sección.

2.6.1. El rey Amadeo I de Saboya

Promulgada la Constitución de 1869, España se encuentra en un régimen de monarquía sin rey con un *Gobierno Provisional* que no podía mantenerse mucho tiempo y que imponía encontrar un monarca para España⁶⁷. Ante esta situación el general Prim sometió a votación la elección del rey descartando como candidatos los tres Borbones a quienes hubiera sido lógico ofrecer la corona incluso a Don Alfonso de Borbón que contaba con la estricta legitimidad dinástica desde el 25 de junio de 1870, fecha de la abdicación de su madre. El acto de votación celebrado el 16 de noviembre de 1870, en sesión de las Cortes Constituyentes, dio como resultado una monarquía improvisada en la figura del Príncipe italiano Amadeo de Saboya y, el 2 de enero de 1871, Amadeo I jura la Constitución promulgada el 6 de junio de 1869. Tras haber reinado *setecientos setenta* días, Amadeo I abdica el 11 de febrero de 1873. Ha sido considerado como un período de mucha inestabilidad política, pues se sucedieron varios presidentes de gobierno, entre ellos, Sagasta, Serrano, Ruiz Zorrilla y todos con continuos conflictos internos⁶⁸.

La vuelta de Manuel Ruiz Zorrilla al frente del Ministerio de Fomento provoca la *Circular de 15 de enero de 1871* dirigida a los Directores del Ministerio con los propósitos respecto de los ramos que abraza el departamento. Vuelve a insistir en los principios que han de servir de base y de punto de partida en la Instrucción pública manifestando, de nuevo, la importancia que tiene la libertad de enseñanza sobre *todo porque abre el libre pensamiento sin desterrar la disciplina académica*.

⁶⁷ Véase SÁNCHEZ AGESTA, Luis. *Historia del Constitucionalismo Español (1808-1936)*. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1984. También CARR, Raymond. *España 1808-1975*. Edición Española corregida y aumentada por el autor, séptima edición. Barcelona: Ariel, 1996.

⁶⁸ Consúltase ARTOLA, Miguel. *Partidos y programas políticos en la España contemporánea (1808-1936)*. Madrid: Alianza, 1991, 705 p.

En esta línea, el Ministro intenta dotar de medios materiales a la enseñanza y fomentar el desarrollo de las Bibliotecas populares que han encontrado una acogida entusiasta por parte de los ciudadanos. Por cuanto se refiere a otros centros que pertenecen también a la instrucción pública, aunque no sean de enseñanza, se harán modificaciones con objeto de convertirlos en verdaderos centros donde se divulgue las ciencias o artes dando a conocer las riquezas literarias e históricas, y prestando un gran servicio a la ilustración y a la patria procurando que adquieran carácter nacional las manifestaciones del progreso en la esfera intelectual. A este fecundo avance en la instrucción pública debe corresponder otro no menos importante en los ramos que abraza la Dirección de Obras públicas, Agricultura, Industria y Comercio, perteneciente a este Ministerio.

Posteriormente se publica un *Real Decreto el 6 de febrero de 1871* que da nueva organización a la Secretaría del Ministerio de Fomento y que fija la plantilla del personal. Se trata del mismo ministro que, en octubre de 1868, reformó el Ministerio respondiendo a unos principios descentralizadores que variaban el carácter de los asuntos pertenecientes al Ministerio proponiendo, una vez conocidas las necesidades de la Secretaría y la legislación, un nuevo arreglo que permitiera distribuir mejor los asuntos para su pronto despacho.

La plantilla de la Secretaría del Ministerio de Fomento será la siguiente: Cuatro Directores generales que se denominarán; de Instrucción pública, de Obras públicas, de Agricultura, Industria y Comercio y de Estadística, dos Oficiales de Secretaría de la clase primeros, tres segundos, otros de inferior rango, un Escribiente mayor, y otros Escribientes inferiores.

Por lo que se refiere al Consejo de Instrucción pública se disuelve en 1868. Ha sido considerada como una medida exigida por las circunstancias políticas para

hacer grandes y rápidas reformas en la Instrucción pública. Al disolverse el Consejo de Instrucción pública se dejó al Ministerio todas las atribuciones adquiridas y se dispuso que en los casos dudosos o de importancia se consultase a los Consejos universitarios y, en último término, al Consejo de Estado, sin tener en cuenta que en la Instrucción pública existen muchas cuestiones que no son propias de un Consejo universitario, y otras que no competen al Consejo de Estado. Estas y otras razones han puesto de manifiesto la necesidad de una Junta consultiva de Instrucción pública con las atribuciones del Gobierno y con la independencia de un Cuerpo ajeno a las cuestiones políticas.

Por lo tanto la Junta consultiva de Instrucción pública se crea *por Real Decreto de 13 de julio de 1871*, y estará formada por miembros de las distintas Academias siendo vocales natos el Director de Instrucción pública y el Rector de la Universidad de Madrid. El presidente y los consejeros ponentes serán nombrados por el gobierno. Los dictámenes se emitirán siempre y cuando el Gobierno se lo pida sobre las cuestiones relativas a la Instrucción pública.

Un año mas tarde esta Junta de Instrucción pública y la plantilla de su personal administrativo va a ser de nuevo disuelta por *Real Decreto de 18 de julio de 1872*. Son muchos los motivos que dan lugar a esta decisión. Por una parte, porque la organización dada al nuevo Cuerpo consultivo no se halla en armonía con el pensamiento ni el propósito que motivaron su creación. Al mismo tiempo, el Ministro esta pensando someter a la deliberación de las Cortes un proyecto de ley que dé a la Instrucción pública la organización necesaria a los nuevos principios en los que hoy se funda y, parece natural, que en consonancia se establezca una corporación que tan directo influjo debe ejercer en su régimen y gobierno, *por tanto se considera que la Junta debe hoy desaparecer*. A su vez, el decreto recoge en el artículo dos que, durante este tránsito, el Ministerio de Fomento consultará al Consejo de Estado o el de Universidades los asuntos que lo requieran por su importancia.

Creado el Cuerpo de Administración provincial de Fomento, por *Decreto de 7 de agosto de 1871*, y compuesto por los empleados en las Secciones de las provincias bajo las inmediatas ordenes de los Gobernadores dependerá, exclusivamente, del Negociado Central del Ministerio de Fomento en lo que se refiere a su organización, disciplina y gobierno interior. Este Ministerio, por *Real Decreto de 15 de setiembre de 1871*, aprueba el reglamento para el gobierno interior de las Secciones de Fomento estructuradas en cuatro Negociados: de Asuntos generales, Intervención y Contabilidad, de Estadística, Agricultura, Industria y Comercio, de Obras públicas y de Instrucción pública. Este último entenderá de los asuntos relativos de la primera, segunda enseñanza, escuelas especiales y Universidades.

Corresponde a las Secciones la tramitación y preparación de todos los expedientes y asuntos relativos a los ramos que dependen del Ministerio de Fomento y cuya resolución competa a los Gobernadores con arreglo a las disposiciones vigentes. Habrá en las Secciones de Fomento un registro general de entrada y salida de expedientes y documentos. El Archivo de expedientes y documentos de los ramos de Fomento será independiente del de la Secretaría del Gobierno, estará arreglado y clasificado por Negociados bajo la dirección del Jefe de la Sección. Los asuntos que ha de entender la Sección de Instrucción pública serán los relativos a primera y segunda enseñanza, Escuelas especiales, Bellas Artes y Facultades.

Posteriormente el *Real Decreto de 16 de febrero de 1872* establece que las Secciones administrativas serán tres, a saber: De primera y segunda enseñanza, de Escuelas especiales, y de Universidades, Academias, Museos, Bibliotecas y Archivos. El Director general de Instrucción pública será individuo nato en las tres Secciones administrativas. Estas Secciones conocerán de los asuntos referentes a la creación, supresión, régimen y reforma de los establecimientos de enseñanza y a la antigüedad, jubilación de los profesores y empleados facultativos.

La Dirección General de la Instrucción pública que vela por el fomento y la protección de la cultura dispone, por *Real Orden de 20 de mayo de 1872*, que se entregue al Ateneo científico, literario y artístico de Madrid, y con destino a su Biblioteca, un ejemplar de cada una de las obras que se hayan adquirido o adquieran con los fondos destinados al fomento de las letras y de las artes, previas las formalidades que esa Dirección general estime oportunas, por considerar al Ateneo como una de las asociaciones libres que más servicios ha prestado a la causa de la civilización y de la cultura española⁶⁹.

2.6.2. La I República

El mismo día de la abdicación del rey Amadeo I, el 11 de febrero de 1873, y vulnerando algunos preceptos de la Constitución, el Senado y Congreso se constituyeron en Asamblea soberana declarando, como forma de gobierno de la Nación, *la República* y dejando a las Cortes Constituyentes la organización de este gobierno.

Poco después se eligió el primer gobierno de coalición radical-republicana presidido por Estanislao Figueras, fue un período en el que se produjeron sucesivos cambios en la Presidencia del Poder Ejecutivo⁷⁰; tal y como afirman Bahamonde y Toro, *la República vino, pues, a llenar un vacío de poder en un contexto hostil*⁷¹.

⁶⁹ Sobre el Ateneo y sus fondos bibliográficos puede consultarse, ALBO ÁLVAREZ, M^a José. *La Biblioteca del Ateneo de Madrid: (Un recorrido por su historia)*. Madrid: Fundación Erol Beker. Véase las obras de RUIZ SALVADOR, Antonio. *El Ateneo científico, literario y artístico de Madrid (1835-1885)* y el *Catálogo de publicaciones periódicas de la Biblioteca*. Madrid: Ateneo, 1995. Y también SAINZ DE ROBLES, Federico Carlos. *Breve Historia de la Biblioteca del Ateneo de Madrid*. En *Anales del Instituto de Estudios Madrileños*, VII (1971), pp. 383-403.

⁷⁰ José Luis COMELLAS, op. cit., p. 24, puntualiza que conviene advertir que, por falta de una ley fundamental que rigiera los mecanismos, no hubo presidente de la República; los cuatro *presidentes* a que alude la historiografía -Figueras, Pi y Margall, Salmerón y Castelar- fueron simplemente *presidentes del poder ejecutivo*, con una función similar a la de jefes de gobierno.

⁷¹ Op. cit., pp. 867-868.

El proyecto de Constitución Federal de la I República Española que Francisco Pi Margall quiso dar como ley fundamental que sirviera de soporte a la Institución no llegó ni a discutirse. El principio básico se apoyaba en una República Federal con división de poderes donde los Cuerpos colegisladores estaban integrados por: el Senado, el Congreso y las Cortes de cada uno de los Estados miembros de la federación. La forma de gobierno, obviamente, era la República Federal; la soberanía nacional residía en los ciudadanos y se ejercía en representación suya, por medio del sufragio universal, a través de los siguientes organismos: municipio, Estado regional y Estado Federal o Nación. La duración de la legislatura era de dos años y el cargo de Presidente de la República podía llegar hasta cuatro años de duración como máximo.

El nuevo período histórico y el consiguiente cambio de Gobierno implicaba modificaciones, no sólo, en los nombramientos de Ministros, sino también, en las estructuras ministeriales reformándose la planta de la Secretaría del Ministerio de Fomento por *Decreto de 16 de febrero de 1873*.

La reforma que recoge este Decreto es considerada necesaria por el Ministro recién llegado, Manuel Becerra, como justificación expone que la experiencia y la práctica en el tiempo que lleva de existencia el departamento que, actualmente, tiene a su cargo han puesto de relieve la necesidad de introducir algunas modificaciones que incluso facilitan alguna economía al Tesoro público y, sobre todo, repercuten en el acertado movimiento de la Administración y en el rápido curso de los negocios que comprende. Para ello se plantea reformas que llevan consigo resultados importantes en los ramos que corresponden al Ministerio de Fomento.

Así, el Ministro propone, a la aprobación del Gobierno de la República, el proyecto de Decreto en el cual se establecen las modificaciones más urgentes como el establecimiento de la Subsecretaría, en la que deben refundirse, además, de los

asuntos que corren a cargo del Negociado central, todo lo concerniente al Archivo y otras importantes funciones que se determinarán en el reglamento interior del Ministerio. Recogía una organización que se ajustaba perfectamente a los principios administrativos establecidos en el resto de los Ministerios.

Por otra parte, según el artículo tres del Decreto, la Dirección de Agricultura, Industria y Comercio queda refundida en la de Estadística constituyendo una sola, bajo la denominación de Dirección general de Estadística, Agricultura, Industria y Comercio, igual en categoría y atribuciones a las de Instrucción y Obras públicas, que forman parte del Ministerio, quedando derogado, por tanto, el *Decreto de 19 de septiembre de 1872* que daba organización especial a la Dirección de Obras públicas. Esta fusión, que obedece a una necesidad administrativa de organizar los servicios, incorporó a la Dirección de Obras públicas la de Agricultura, Industria y Comercio.

Asimismo, el Negociado Central formará parte de la Subsecretaría y tendrá las funciones que en el reglamento interior del Ministerio se determinen. El personal de Oficiales, Aspirantes, porteros y ordenanzas propuesto, determina una plantilla general suficiente para las atenciones del servicio si se tiene en cuenta además que la Biblioteca y Archivo del Ministerio deben estar a cargo del Cuerpo que presta sus servicios en dependencias análogas, como la Biblioteca Nacional y el Archivo histórico. Se da un cambio de denominación en el personal.

Los cambios que introduce el ministro que viene a ocupar el Ministerio de Fomento, Eduardo Chao, son regulados por *Decreto de 12 de marzo de 1873*. Modifica y suprime, en la plantilla del Ministerio de Fomento aprobada en el mes de febrero último, la plaza de Subsecretario entonces creada. El Oficial mayor continuará desempeñando las funciones que el reglamento interior del Ministerio asigna al Negociado Central.

El artículo dos del Decreto estipula que la planta se compondrá de cuatro Directores generales, Jefes superiores de Administración, Jefes de Administración, Oficiales, porteros y ordenanzas. Las cuatro Direcciones generales de este Ministerio tendrán a su cargo los diferentes ramos que sus denominaciones indican: Dirección de Instrucción pública; Dirección de Obras públicas; Dirección de Agricultura, Industria y Comercio; Dirección de Estadística y del Instituto geográfico. Esta última Dirección, responde a la estrecha relación de los trabajos de la Estadística con los del Instituto geográfico para los fines del Estado, que deben regirse siempre bajo una misma dirección.

De conformidad con lo dispuesto en el *Decreto de 19 de junio de 1873* que suprime la Dirección general de Estadística de la Secretaría del Ministerio de Fomento y crea el Instituto Geográfico y Estadístico, el Gobierno de la República dicta el Decreto de 20 del mismo mes y año estableciendo que la plantilla del Ministerio de Fomento se compondrá de dos Directores generales refundiendo, en la de Obras públicas, la de Agricultura, Industria y Comercio, y acumulando, por consiguiente, a la primera los numerosos asuntos que a ésta corresponden, Jefes superiores de Administración, Jefes de Administración, Oficiales y ordenanzas.

Por último, queremos destacar la creación, por *Decreto 1 de octubre 1873*, de la sección de Cancillería con la misma finalidad que hemos visto para la Estampilla.

2.7. La Restauración Borbónica

La I República se derrumbó con el golpe de Estado del general Pavía el 3 de enero de 1874. Una de las primeras intenciones del proyecto de Pavía, que prosperó, consistía en proponer al general Serrano para que pasase a presidir el *Gobierno*

*rovisional*⁷².

Conseguida la finalidad y Serrano ya como presidente dirige el día 8 de enero de 1874, un *manifiesto* a la Nación declarando subsistente la Constitución de 1869 con la única alteración referida al artículo 33 que en su redacción original decía: "*La forma de gobierno de la Nación española es la Monarquía*", transformando dicho artículo en lo siguiente: "... *las Cortes ordinarias decretarán la forma y modo con que han de elegir al supremo magistrado de la Nación...*".

La mayor parte de la historiografía coinciden en denominar al sistema de la Restauración como *sistema canovista* por considerar a Cánovas del Castillo el autor de sus líneas fundamentales. En realidad, fue la Reina Isabel II quien acude a confiarle, por su prestigio intelectual, la responsabilidad de dirigir el movimiento de la causa restauradora de su dinastía; afán que mantiene desde que en 1870 abdica en su hijo. Cánovas acepta el encargo imponiendo la condición de restaurar una monarquía constitucional conjugando la colaboración de la Corona con el Parlamento. La finalidad de Cánovas era la de lograr el restablecimiento de la Dinastía por obra de un amplio consenso de la opinión pública⁷³.

Como señalábamos anteriormente, con la llegada de Francisco Serrano a la Presidencia del *Gobierno provisional*, se reorganiza la planta de la Secretaría de Fomento y se suprime el Negociado Central por *Decreto de 22 de marzo de 1874* quedando estructurada en: un Secretario general, un Director general de Instrucción pública, un Director general de Obras públicas, un Director general de Agricultura, Industria y Comercio, Oficiales, porteros y ordenanzas. El Instituto Geográfico y Estadístico, en opinión del Ministro, debería de subsistir y reestructurarse con ligeras modificaciones.

⁷² Refiriéndonos al período de la Restauración véase CARR, Raymond. *España, de la Restauración a la democracia 1875-1980*. 5ª edición. Barcelona: Ariel, 1998, 820 p. y MONTERO, F. *La Restauración*. En *Manual de Historia de España. Siglo XIX*. Madrid: Historia 16, 1990, pp. 317-323.

La Dirección general de Agricultura, Industria y Comercio, que aparece en este decreto, tendrá a su cargo los mismos asuntos que tenía cuando fue suprimida, a excepción de las Escuelas especiales de Agricultura, Minas y Montes que continuarán dependiendo de la de Instrucción pública.

La Secretaría general, que se restablece por el mismo decreto, tendrá las atribuciones del Negociado Central y además, las que se determinen en el reglamento interior del Ministerio que es aprobado por *Decreto de 26 de abril de 1874*. Este reglamento regula, en el artículo uno, que el Ministerio de Fomento se compondrá de las dependencias siguientes: La Secretaría general y sus Negociados respectivos, las Direcciones generales de Instrucción pública, de Obras públicas, Agricultura, Industria y Comercio, de Instituto geográfico y estadístico, con los Negociados afectos a las mismas.

El artículo dos establece que el Secretario general, Jefe superior de Administración, es el Jefe superior de la Secretaría del que dependen el Negociado del personal del Ministerio, el de las Secciones de Fomento y el administrativo de ferrocarriles, el Negociado de Contabilidad del Ministerio, el Archivo y la Biblioteca, la Habilitación, el registro y el sello.

Por lo que se refiere al Archivo y la Biblioteca están regulados en el Capítulo XI y XII respectivamente. El Archivo estará bajo la responsabilidad del Archivero y será el jefe inmediato de los empleados en el mismo correspondiéndole, dirigir e inspeccionar los trabajos del Archivo, inventariar, custodiar, autorizar certificaciones e impedir extraer documentos del Archivo.

⁷³ COMELLAS, J.L. Op. cit., p. 249.

Por su parte, la Biblioteca, bajo la responsabilidad del Bibliotecario, cumplirá las tareas de recibir, clasificar, arreglar, custodiar e inventariar todos los libros que pertenezcan a la Biblioteca del Ministerio de Fomento.

Para finalizar, el Capítulo XIII del reglamento recoge, en un único artículo, que el depósito de planos del Ministerio formará parte de uno de los Negociados de la Dirección general de obras públicas.

Como venimos describiendo, en menos de cinco meses se han hecho cuatro reformas de suma trascendencia que produjeron perturbaciones y dificultades considerables. Los propios ministros reconocen la falta de estabilidad, no sólo en el personal, sino en la distribución de los trabajos.

Dos meses después de la publicación del Reglamento, el Ministro de Fomento plantea reorganizar el Ministerio al entender que, no consiste en tener muchos empleados, sino que, estos empleados sean especializados y especiales considerando lo primero contrario al espíritu de descentralización administrativa. Pretende suprimir el cargo de Secretario general porque no tiene razón de existir en el ámbito de los ramos en que entiende este Ministerio. Por otra parte, la Subsecretaría que fue creada el 16 de febrero de 1873, suprimida el 12 de marzo del mismo año y restablecida con la denominación de Secretaría general el 22 de marzo del actual año, se ha demostrado, con su reciente origen y su inestabilidad, que no responde a una necesidad administrativa. Parece más útil, más conveniente y más práctico el Negociado central que antes existía y cuyo restablecimiento es propuesto por el Ministro que suscribe.

Atendiendo a estas razones expuestas se aprueba, por *Decreto de 29 de mayo de 1874*, lo siguiente: Se suprime en la planta del Ministerio de Fomento la plaza de Secretario general, restableciéndose el Negociado central con las mismas funciones que desempeñaba antes de ser suprimido.

Por lo tanto la planta del Ministerio se compondrá, además del Ministro y de un Director general de Instrucción pública, de un Director general de obras públicas y de un Director general de Agricultura, Industria y Comercio. Estos Directores generales continuarán desempeñando las funciones que el reglamento interior del Ministerio les asigna. A su vez, el artículo cinco señala que el Instituto geográfico y estadístico conservará su actual organización.

Aprobada la planta del personal del Ministerio y distribuidas las necesidades del servicio era indispensable armonizar las prescripciones reglamentarias para el régimen y gobierno interior del Ministerio de Fomento con las variaciones introducidas por la nueva organización. Por ello se aprueba el *Decreto de 17 de julio de 1874* que contiene el reglamento interior del Ministerio de Fomento. El Capítulo primero recoge la composición del Ministerio formado por el Negociado central, tres Direcciones generales, a saber; de Instrucción pública, de Obras públicas, de Agricultura, Industria y Comercio y, por último, del Instituto geográfico y estadístico.

El Negociado central estará dirigido por el Jefe del negociado que estará bajo las órdenes del Ministro. Dependen de este negociado central: el negociado del personal del Ministerio y el de las Secciones provinciales y los asuntos generales, el gabinete particular del Ministerio, la Habilitación y custodia de los objetos de valor,

el Archivo, la Biblioteca, el registro, cierre y sello. Por lo que respecta al Archivo, Biblioteca, registro y depósito de planos, el reglamento se mantiene en los mismos términos que veíamos en el reglamento interior aprobado el 26 de abril.

Dependen de la Dirección general de Instrucción pública los Negociados de: Primera enseñanza, segunda enseñanza, Universidades, Archivos y Bibliotecas, Bellas artes y Escuelas especiales.

En cuanto al Instituto Geográfico y Estadístico continuará rigiéndose por el *Reglamento de 19 de junio de 1873* y sus trabajos continuarán divididos en ocho Negociados entre los que se encuentra el Archivo topográfico y geodésico, la Biblioteca y, dentro del Negociado de Población las estadísticas especiales, el depósito y la distribución de publicaciones estadísticas.

El Capítulo XVIII sobre *los Consejos y Comisiones* establece que los Consejos superiores entre los que se encuentra el de Instrucción pública se regirán por sus respectivos reglamentos. Con el propósito de reorganizar la enseñanza pública se restableció el Consejo de Instrucción pública por *Decreto de 12 de junio de 1874*. La necesidad era prioritaria, después del período de libertad de enseñanza, ya pasado, donde el Estado había renunciado casi del todo a su dirección y gobierno autorizando a las corporaciones populares para crear, suprimir, ampliar o restringir establecimientos de instrucción; a los catedráticos para determinar a su arbitrio la materia de su asignatura y a los alumnos para hacer los estudios en el tiempo y por el orden que eligieran, sin obligación de asistir a las clases ni menos acreditar en ellas su aptitud y laboriosidad.

El Decreto establece que *este abuso, por parte de Ayuntamientos, a suprimir escuelas, las Diputaciones invirtiendo en fundar Universidades, la absoluta*

independencia del profesor en los límites de la enseñanza, el desajuste en la armonía del conjunto de los planes de estudio, son entre otras cosas males que no se pueden achacar a la libertad de enseñanza, sólo se pueden atribuir a la manera de cómo España se ha planteado y ha practicado la enseñanza. No es la libertad de enseñanza sino el respeto del poder público al derecho que no puede negarse a elegir, incluso el Maestro. Conviene, pues, mantener la libertad de enseñanza, pero regulando su ejercicio para mejor protegerla e impedir que degenera en perturbadora licencia.

Para el Ministro que suscribe, el primer paso para la reforma de la Instrucción pública pasaría por el restablecimiento del Consejo de Instrucción pública, y en este sentido el Decreto dispone: *es necesaria una corporación que ilustre y autorice con su respetable voto las resoluciones de la Administración activa, la hubo desde la primera época de Gobierno constitucional hasta la revolución de setiembre y si entonces pareció conveniente prescindir de ella para acordar las innovaciones que se juzgaron provechosas u oportunas.* Por tanto, el Decreto de 12 de junio de 1874 del Ministerio de Fomento restablece el Consejo de Instrucción pública compuesto de un Presidente y de 30 individuos nombrados por el Gobierno, siendo Consejeros natos; el Director y los Inspectores generales de Instrucción pública y el Rector de la Universidad de Madrid.

El artículo seis establece que el Consejo de Instrucción pública se divide en cinco secciones con el fin de que sea más fácil y rápido el despacho de los negocios. Estas secciones son: De Literatura y Bellas Artes, de Ciencias morales y políticas, de Ciencias exactas, físicas y naturales, de Ciencias médicas y de Gobierno y administración de la enseñanza. Por último, la disposición establece que el Ministro de Fomento queda encargado de dictar las disposiciones necesarias para la ejecución del presente decreto.

2.7.1. El reinado de Alfonso XII

En el mes de noviembre de 1874 Don Alfonso enviaba un manifiesto a los españoles, el *Manifiesto de Sandhurst*, redactado por Cánovas causando, inmediatamente, efectos en el general Martínez Campos que pasará al trono un mes después. Como consecuencia, el 29 de diciembre de 1874, proclaman Rey al Príncipe Don Alfonso de Borbón y Borbón y, dos días después, se forma el ministerio-regencia presidido por Cánovas⁷⁴ dando entrada a Alfonso XII en Madrid el 14 de enero de 1875.

El Ministro de Fomento el Marqués de Orovio, que ejercía en estos momentos tales competencias, entendía que la organización dada al personal del Ministerio por *Decreto de 29 de mayo de 1874* no se correspondía ni con la especialidad de los servicios que tenía a su cargo, ni con el orden que debe presidir en las diversas categorías administrativas, esto unido, a que el Negociado sustituía a la Subsecretaría y la consideración de que las tres plazas de Oficiales mayores no eran necesarias, dieron lugar al *Decreto de 5 de enero de 1875* reorganizando la planta del personal del Ministerio de Fomento. La estructura se compondrá, además del Ministro, de un Director general de Agricultura, Industria y Comercio, de un Director general de Instrucción pública, de un Director general de Obras públicas además de otros Oficiales, porteros y ordenanzas. Por su parte el Instituto geográfico y estadístico conservará la organización que hasta el momento tenía.

⁷⁴ Hay que destacar que Cánovas puso en marcha la *Restauración*, pero después le faltó la necesaria fe en sí mismo, y en los españoles para intentar encauzar lo legal con lo real, incluso tuvo dificultades para atraerse a los liberales, cuyo líder era Sagasta. Sobre estos aspectos históricos, *Cfr. Los amigos políticos. Partidos, elecciones y caciquismo en la Restauración (1875-1900)*, de VARELA ORTEGA, José. Madrid: Alianza, 1977. También veasé JOVER, J.M., *La época de la Restauración: panorama político-social, 1875-1902*. En vol.VIII de la Historia de España, dir. por M. Tuñón de Lara.

Dependiendo del Ministerio de Fomento, la Junta Consultiva de Archivos, Bibliotecas y Museos, que se había creado por *Decreto de 12 de julio de 1867*, se disuelve, reorganizándola con el nombre de Junta facultativa de Bibliotecas, Archivos y Museos de Antigüedades por *Decreto de 16 de abril de 1875* que fija, a su vez, las atribuciones de la misma. La presidencia de la Junta recaía en el Director general de Instrucción pública.

Esta Junta, que tanto ha contribuido a cimentar sólidamente la estabilidad de los individuos que componen el Cuerpo de Bibliotecarios, Archiveros y Anticuarios, fue constituida en el año 1858 con las atribuciones que reclamaba el servicio facultativo que había que prestar en establecimientos destinados a ser poderosos auxiliares de la pública enseñanza. Cumplió pues, por entonces, la misión para la que fue creada, pero a medida que el personal del Cuerpo fue aumentando, se descubrieron otras importantes. Era pues, de urgente necesidad fijar expresamente las atribuciones de la Junta.

Una vez que el Rey D. Alfonso llega al país se firma, por *Real Decreto de 9 de enero de 1875*, la confirmación en los cargos y atribuciones de los actuales Ministerios disponiendo que continúen ejerciéndolos durante la ausencia del Rey y se nombra como Presidente del Consejo de Ministros a D. Antonio Cánovas del Castillo.

El 20 de mayo de 1875 Sagasta reúne, en el Palacio del Senado, a cuantos habían sido en pasadas legislaturas diputados o senadores de su partido. El resultado se resume en una proposición, aprobada por unanimidad, donde se deja claro que si se quiere restablecer el orden, la libertad y las libertades parlamentarias es necesario afianzar, por una parte, la monarquía de Don Alfonso XII y por otra la legalidad común, siendo una comisión de notables la que formule las bases de la legalidad común.

Como señala el profesor Feliciano Montero *la constitucionalización y consolidación política del nuevo régimen, de acuerdo con las directrices anunciadas en el Manifiesto, se convierte en la primera y difícil tarea de Cánovas en los dos primeros años de la Restauración.*

La definición y consolidación política del nuevo régimen pasaba por la elaboración de unas bases constitucionales que se encarga redactar a una comisión. Elaboradas las bases en el verano de 1875, era preciso elegir unas nuevas Cortes constituyentes que aprobarán la nueva Constitución en junio de 1876.

La Constitución de 1876, por su larga vigencia, ocupa un lugar destacado en la historia del constitucionalismo español. Añade el autor anteriormente mencionado, *que la mayoría la ha valorado como una mezcla dosificada de las Constituciones de 1845 (moderada) y de 1869 (liberal)* ⁷⁵.

Concretamente la Constitución consta de 13 títulos que engloban un total de 89 artículos. Los principios que rigen son: la Monarquía constitucional con división de poderes; entre los derechos y libertades consagrados se encuentran, la libertad de enseñanza, de comunicación y la libre emisión del pensamiento, entre otros. La duración de cada legislatura se cifraba en cinco años ⁷⁶.

Un riguroso análisis comparativo de la Constitución del 76 con todas las anteriores, elaborado por el profesor Manuel Martínez Sospedra subraya que en la Constitución de 1876 influyen, no sólo las del 45 y del 69, sino también y de una

⁷⁵ MONTERO, F. *La Restauración*. En *Manual de Historia de España. Siglo XIX*. Madrid: Historia 16, 1990, pp. 317-323.

⁷⁶ Véase SÁNCHEZ AGESTA, Luis. *La Constitución de 1876 y el Estado de la Restauración*. Madrid: Fundación Santa María, 1985.

manera más fundamental, la de 1837⁷⁷. En suma, todos los estudios sobre la Constitución de 1876 insisten en su fundamental continuismo con la tradición constitucional española que arranca de Cádiz.

Implantada la nueva Constitución se van sucediendo las correspondientes modificaciones en los ministerios. Dentro del ministerio de Fomento se publica un *Real Decreto el 13 de abril de 1877* que aprueba el reglamento para el Consejo de Instrucción pública.

Las atribuciones que, el *Decreto de 12 de junio de 1874*, daba al Consejo de Instrucción pública, conforme al artículo nueve, eran prácticamente consultivas, y reducidas, bajo tal concepto, a dar su dictamen en cuestiones sobre planes de estudios, programas de enseñanza, creación y supresión de cátedras, o sobre cualquier otro asunto relativo a la Instrucción pública. Según lo preceptuado, el Consejo se dividirá en cinco Secciones, entre las que se encuentra la de Gobierno y Administración de la enseñanza. Los miembros que han de componer esta Sección serán designados por el Presidente de entre todos los que constituyeren el Consejo, formando parte de la misma Sección el Director general de Instrucción pública.

En otro orden de cosas, y con la finalidad de reunir todas las leyes, decretos, ordenes, circulares y disposiciones oficiales que emanan del Ministerio de Fomento, la *Real Orden de 29 de enero de 1876* dispone que desde principios del corriente año se publique semanalmente un *Boletín oficial* del Ministerio de Fomento dependiente de la Dirección general de Agricultura, Industria y Comercio, en la misma forma que el publicado desde los años 1848 a 1864.

⁷⁷ El estudio se titula: *Las fuentes de la Constitución de 1876. Continuidad y cambio en el constitucionalismo español del siglo XIX*.

De nuevo el Ministerio de Fomento sufre cambios en su estructura y, por *Real Decreto de 11 de julio de 1877*, se refunden en dos las tres Direcciones generales que dependen del Ministerio de Fomento que se denominarán; una de Instrucción pública, Agricultura e Industria y la otra de Obras públicas, Comercio y Minas, volviendo a restablecerse, en las tres antiguas Direcciones generales, a partir del *Real Decreto de 10 de diciembre de 1880* con la denominación de; Instrucción pública; Agricultura, Industria y Comercio y; de Obras públicas.

Para el cumplimiento de lo anterior, por Real Decreto de la misma fecha, se reorganiza la planta del personal del Ministerio donde se estipula que en adelante la planta del Ministerio de Fomento se compondrá; además del Ministro, y de los Directores generales respectivos a las tres Direcciones; de Oficiales, Ordenanzas y porteros. El Instituto Geográfico y Estadístico conservará la organización anterior.

Por otra parte, dentro de las Direcciones generales de Instrucción pública y de Obras públicas, se crean dos Bibliotecas especializadas, respectivamente, por *Real Orden de 12 de septiembre de 1881*. Estas Bibliotecas formarán una Sección especial de la del Ministerio de Fomento y estarán a cargo de uno de los empleados de la misma, sin alterar las condiciones de la Biblioteca y sin aumento de personal. Formarán parte de estas Bibliotecas, básicamente, las obras referentes a una y otra Dirección que se publiquen por cuenta del Estado.

La planta del Ministerio de Fomento y las vacantes que se produzcan se reorganizaran por el *Real Decreto de 8 de octubre de 1883* integrada por; el Ministro; tres Directores generales, de Obras públicas, Instrucción pública y Agricultura, Industria y Comercio; Oficiales; Ordenanzas y porteros. El Instituto Geográfico seguiría conservando su organización.

Con el fin de concentrar en el Negociado central del Ministerio de Fomento los servicios generales no dependientes de ninguna Dirección, la planta del Ministerio vuelve a sufrir alteraciones sobre todo en el aumento de Auxiliares y aspirantes sobre los que recae la mayor parte del trabajo. Por ello, el *Decreto de 6 de diciembre de 1883* organiza la plantilla del Ministerio de Fomento y establece la necesidad de un reglamento interior del Ministerio, en el cual, además de la organización del mismo, se fija las condiciones que han de tener los empleados del Ministerio de Fomento para gozar de una estabilidad.

La plantilla de la Secretaría del Ministerio se organizará de la manera siguiente: el Ministro, tres Directores generales, Jefes de Administración, Auxiliares y Ordenanzas. El Instituto Geográfico y Estadístico seguirá con su anterior organización.

El 10 de enero de 1884 se dispone, por Real Decreto, que el Archivo del Ministerio de Fomento quede incorporado a la Dirección general de Instrucción pública y que los empleados del referido Archivo pasen al escalafón de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, de acuerdo con el reglamento del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios. Esta incorporación duró poco tiempo ya que, el 1 de febrero de 1884, por Real Decreto, se dispone que el Archivo del Ministerio de Fomento dependa directamente del Negociado central y sus empleados ingresen con la categoría y sueldo que hoy disfrutaban en la plantilla de la Secretaría de dicho Ministerio, por considerar, que este Archivo no excede en importancia a los de otros departamentos ministeriales que dependen, directamente, de las respectivas Secretarías.

El 8 de febrero de 1884 se publica un Real Decreto que modifica una pequeña parte de la plantilla del personal del Ministerio de Fomento. La variación que introduce, con respecto a la planta anterior, es que el Negociado central pasa a

integrarse a una Dirección general y que los demás tengan a su frente un Oficial de Secretaría. De esta manera el Negociado central dependerá en lo sucesivo de la Dirección general de Agricultura, Industria y Comercio.

2.7.2. La reina regente M^a Cristina

Con motivo del fallecimiento del Rey D. Alfonso XII se dispone, por *Real Decreto de 26 de noviembre de 1885*, que se publiquen todos los actos de Gobierno a nombre de S. M. la Reina Regente María Cristina, durante la minoría de edad de su hijo⁷⁸. Simultáneamente a este acontecimiento, se produce la dimisión de Antonio Cánovas del Castillo como Presidente del Consejo de Ministros que inmediatamente después pasará a ser presidido por Sagasta. La política del Gobierno de Sagasta se inicia bajo una perspectiva ampliamente liberal, aunque no tardarían en producirse las primeras disensiones.

En el mandato de ésta Regencia se publica el *Real Decreto de 7 de mayo de 1886* que ordena suprimir, desde 1º de julio, el Ministerio de Fomento y desdoblarlo en otros dos departamentos ministeriales. El preámbulo del Decreto que transforma el Ministerio de Fomento en el Ministerio de Instrucción pública y de Ciencias, Letras y Bellas Artes, y el Ministerio de Obras públicas, Agricultura, Industria y Comercio, da comienzo de la siguiente manera: *La organización de los centros ministeriales ha sido desde su origen como el foco luminoso en que ha venido reflejándose constantemente el desarrollo de la vida nacional.*

⁷⁸ Consúltase TUSELL, Javier. *Los Archivos para la Historia Política del reinado de Alfonso XIII*. Conferencia pronunciada en “Ciclo de Conferencias del Archivo Histórico Nacional”. Madrid, octubre-noviembre de 1981. Madrid: Ministerio de Cultura, 1982, pp. 7-24

Será de la competencia del Ministerio de Instrucción pública y de Ciencias, Letras y Bellas Artes todo lo relativo a la Instrucción pública, a saber: Consejo de Instrucción pública, personal y material de la enseñanza pública de todas clases, inspección y fomento de la enseñanza privada, fomento de las Ciencias, de las Letras y de las Bellas Artes, Archivos, Bibliotecas y Museos. Asimismo será de su competencia el Instituto Geográfico y Estadístico.

El artículo cuatro del Decreto estipula que *el Archivo actual del Ministerio de Fomento se dividirá en dos, clasificándose los documentos del actual Archivo para formar el Archivo de cada uno de los nuevos Ministerios los papeles integrados por los expedientes terminados sobre asuntos correspondientes a los Negociados que por este Decreto han de ser de la respectiva competencia de cada uno de aquellos.*

El Ministerio de Instrucción pública y de Ciencias, Letras y Bellas Artes estará formado por el Ministro, un Director de Establecimientos de enseñanza, un Director de Ciencias, Letras y Bellas Artes, cuatro Subdirectores-Inspectores, Auxiliares, Ordenanzas y Porteros.

A pesar del desarrollo reflejado en el Real Decreto condicionando la desaparición de Fomento y su sustitución por los dos nuevos departamentos citados más arriba, no entrará en vigor hasta la publicación del *Real Decreto de 18 de abril de 1900*.

Una de las atribuciones que se le encomiendan a la Dirección general de Instrucción pública, es la que se da por *Real Orden de 14 de junio de 1886*, disponiendo que los autores o editores que deseen introducir en España obras en castellano, impresas en el extranjero, remitan una hoja bibliográfica de ellas a la Dirección general de Instrucción pública para que sea publicada en la *Gaceta*.

Por la importancia de las funciones que tanto en el orden científico como en el administrativo desempeña el Consejo de Instrucción pública, así como la asiduidad, estudio y suficiencia que reclaman los asuntos que se someten a deliberación del mismo, se evidencia la necesidad de que las personas que lo forman gocen de una consideración y jerarquía en relación con las funciones que le están encomendadas. El *Real Decreto de 2 de agosto de 1886* concede a los Consejeros de Instrucción pública la categoría y abono de servicios de Jefes superiores de Administración civil. Con la misma fecha otro Real Decreto crea, en el Ministerio de Fomento y bajo su dirección, un *Boletín oficial* de la propiedad intelectual e industrial suprimiendo el *Boletín de la propiedad intelectual* que se venía publicando actualmente en el Ministerio de Fomento y que a partir de ahora estaría refundido en el de la *propiedad intelectual e industrial*.

Esta disposición describe *que con la división del actual Ministerio de Fomento, -hasta la fecha no se ha ejecutado la disposición que establecía el cambio de denominación- dicho órgano oficial dependerá del de Instrucción pública en lo que se refiere a la propiedad intelectual, y del de Fomento en lo que se refiere a patentes de invención, de marcas de fábrica y de comercio.*

Dada la importancia y el aumento de los asuntos que se incoan y que se resuelven en las Secciones provinciales de Fomento, creadas por *Real Decreto de 12 de junio de 1859*, el Ministro propone el necesario aumento del personal de estas Secciones y, por *Real Decreto de 1 de abril de 1887* se aprueba el reglamento para el régimen interior de las Secciones provinciales de la Administración de Fomento. Este Reglamento, en el artículo 32, concede a los Jefes de las Secciones provinciales *decretar al margen de las comunicaciones recibidas cuando el decreto sea de mera tramitación y la de adoptar las disposiciones y providencias necesarias para la*

instrucción de los expedientes. Por este motivo se publica la *Circular de 31 de diciembre de 1887* dictando medidas aclaratorias acerca de las atribuciones reglamentarias de los Jefes de las Secciones de Fomento, disposición que fue derogada en septiembre de 1888 volviendo a implantarse por *Real Decreto de 14 de julio de 1890*.

En contraposición al *Real Decreto de 1884* que separaba el Archivo de Fomento de la Dirección general de Instrucción pública, el *Real Decreto de 9 de diciembre de 1887* dispone que el Archivo del Ministerio de Fomento quede agregado a esta Dirección de Instrucción pública y a cargo del Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios aumentándose, a su vez, la planta del personal administrativo y subalterno de dicho Cuerpo.

Las reformas que, en este momento, se imponen vienen justificadas por causas económicas. En este sentido, el *Real Decreto de 1 de agosto de 1889* fija la plantilla de la Secretaría y Direcciones generales del Ministerio de Fomento introduciendo reformas para obtener economía, por ello, en la Dirección general de Instrucción pública, la más complicada de este Ministerio por los muchos y distintos servicios que tiene a su cargo, se suprimen o se reducen los créditos concedidos. Estas medidas económicas afectan también, directamente, al personal de Archivos, Bibliotecas, Museos y Propiedad literaria, suprimiendo partidas presupuestarias de Bibliotecas; con carácter excepcional se aumenta la consignación de la Biblioteca Universitaria de Madrid, y la de la Biblioteca Agrícola que ha pasado a Instrucción pública.

Por *Real Decreto de 1 de mayo de 1890* se aprueba el reglamento para el régimen interior del Ministerio de Fomento, organizando la Secretaría del Ministerio en: un Negociado central del que depende la Biblioteca del Negociado central que contiene las disposiciones oficiales, las Direcciones generales, los Negociados

especiales de Contabilidad, Construcciones civiles y Patentes y Marcas, la Comisión de gobierno interior, la Habilitación, y el Registro general. En cuanto al Archivo del Ministerio estará a cargo del Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, y dependiente por tanto de la Dirección general de Instrucción pública.

Unos meses más tarde de la publicación del reglamento de régimen interior del Ministerio de Fomento, la Reina Regente, por *Real Decreto de 31 de julio de 1890* dispone que el Negociado Central del Ministerio de Fomento dependa de una de las Direcciones generales y se suprima la Comisión de gobierno interior de dicho Ministerio, cuyas funciones serán desempeñadas por el Negociado Central.

Para conseguir la unidad de este servicio se dictó el *Real Decreto de 28 de junio de 1895* aprobando el reglamento para el régimen interior del Ministerio de Fomento. El Capítulo primero establece que la Secretaría del Ministerio comprende el Negociado Central, las Direcciones generales, los Negociados especiales de Contabilidad, Construcciones civiles y Patentes y Marcas, la Habilitación y el Registro general.

El Negociado Central, que actualmente forma parte de la Dirección general de Obras públicas, dependerá en lo sucesivo exclusivamente del Ministro. Este Negociado Central volverá a depender por *Real Decreto publicado el 5 de marzo de 1899* de una de las Direcciones generales y desempeñará, a partir de entonces, las funciones de la Comisión de gobierno interior que se suprime por el mismo Decreto. Las Direcciones no tendrán más atribuciones propias que las consignadas en este reglamento. Por su parte el Negociado de Contabilidad no dependerá exclusivamente de ninguna Dirección, y el Negociado de Patentes y Marcas se regirá por su legislación especial y, por último, la Habilitación dependerá del Negociado Central.

Por lo que se refiere al Archivo, al Registro general de la propiedad intelectual y al Depósito de libros del Ministerio estarán a cargo del Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, y dependerán de la Dirección general de Instrucción pública. El jefe del Archivo recibirá directamente de los Directores del Jefe del Negociado Central o de los de Negociado las peticiones de documentos que entregará bajo recibo.

Este Reglamento fue derogado posteriormente por el *Real Decreto de 27 de 1898* en el que se aprobaba el Reglamento para el régimen interior del Ministerio de Fomento que introduce, dentro de la organización de la Secretaría, la figura de los Subdirectores y por ello, el artículo 15 establece que *los Oficiales mayores afectos a las Direcciones generales de Instrucción pública y Agricultura, Industria y Comercio, y uno de los Ingenieros Jefes en la Dirección de Obras públicas, elegido por el Ministro, ejercerán las funciones de Subdirectores de sus respectivos Centros, con el carácter y consideración de segundos Jefes de las mismas, y sin dejar de atender a sus demás obligaciones como Oficiales del Ministerio.*

El Archivo, el Registro general de la propiedad intelectual y el Depósito de libros del Ministerio estarán, tal y como veíamos en el Reglamento anterior, a cargo del Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios y seguirán dependiendo de la Dirección general de Instrucción pública.

Por *Real Decreto de 5 de agosto de 1893* se confía al Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios la reorganización y servicios del Archivo general del Ministerio de Hacienda, (...) *su personal dependerá del Ministerio de Fomento en cuanto a la reglamentación y régimen del Cuerpo a que pertenecen y al de Hacienda en lo referente a los servicios especiales que se les encomienda. El personal subalterno, los porteros y mozos, para el servicio del Archivo, formarán parte de la planta de la subsecretaría del Ministerio de Hacienda.*

Posteriormente un *Real Decreto de 21 de diciembre de 1893* incorpora el Archivo general del Ministerio de Hacienda al Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, dependiente, a su vez, de la Dirección general de Instrucción pública.

La Reina Regente del Reino publica, el 30 de junio de 1894, una Ley disponiendo que; los Archivos, Bibliotecas y Museos dependientes de la Presidencia del Consejo de Ministros o de los Ministerios de Fomento, Hacienda, Gobernación, Gracia y Justicia y Ultramar, así como, el Registro general de la propiedad intelectual, el Depósito de libros del Ministerio de Fomento y los demás centros de naturaleza análoga, serán servidos por individuos del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, que ingresarán, en este Cuerpo, bajo las condiciones y requisitos que dicta el Ministerio de Fomento.

El nombramiento de los individuos del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, que presten sus servicios en los Archivos, Bibliotecas y Museos pertenecientes a los Ministerios o que de estos dependan, se hará por el Ministerio de Fomento. Todos los establecimientos de carácter provincial o municipal que ofrezcan verdadera importancia, a juicio del Ministerio de Fomento, después de oír a la Junta superior facultativa del ramo, serán servidos por personas que posean el título académico de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios o sean individuos del correspondiente Cuerpo facultativo.

Disposiciones posteriores, en este mismo año, van regulando la incorporación y las condiciones para el ingreso en el Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios⁷⁹.

⁷⁹ Todo lo relacionado con el Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios será desarrollado en el siguiente capítulo.

En suma, hemos perseguido analizar la incidencia que, durante este siglo, tienen los aspectos políticos, sociales y administrativos en el desarrollo de la política documental y de acuerdo con este presupuesto el estudio se ha encaminado a trazar las estructuras ministeriales y orgánicas públicas vinculadas en el fomento de esta materia.

CAPÍTULO III

El Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios

3. El Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios

El objeto de estudio que abordamos en este capítulo intenta aproximarnos al discurrir del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, a su concepción y creación, su consolidación, estructura y contribución al funcionamiento de los Archivos y Bibliotecas públicos.

3.1. Creación del Cuerpo: escalafón, categorías, ingreso y ascensos

3.1.1. Nacimiento, formación y clasificación de sus miembros

Se ha venido considerando que en la creación del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos confluyen numerosos condicionantes, todos ellos relacionados entre sí, como la Desamortización eclesiástica de 1835, los intereses corporativos y científicos de la Real Academia de la Historia, los intereses de la clase social burguesa española y, por último, la preocupación del Estado por conseguir una organización administrativa eficiente para la conservación de un patrimonio histórico que necesitaba legitimarse⁸⁰.

⁸⁰ TORREBLANCA LÓPEZ, A.: *Erudición Institucional en el siglo XIX Español: La sección de Archivos del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos*. En: GIMENO BLAY, F. M.: *Erudición y Discurso Histórico: Las Instituciones Europeas. (S. XVIII-XIX)*. Valencia: Universitat de Valencia, 1993, p. 248.

Podemos afirmar que la Desamortización de Mendizábal, aprobada por la Reina Regente en el *Real Decreto de 11 de octubre de 1835*, afectó, fundamentalmente, a las Instituciones eclesiásticas y seculares de todo el país. Por ello, la Hacienda Pública se incautó de los títulos de propiedad de los bienes inmuebles de la Iglesia y acumuló ricos fondos documentales. Esta situación llevó al Estado a plantearse la necesidad de preparar a un personal cualificado conocedor de los distintos aspectos de los documentos para estudiar el fondo documental desamortizado .

En el año 1850, cuando la Hacienda Pública ya había transformado en bienes nacionales todas las propiedades desamortizadas a la Iglesia, el Ministro de la misma firmaba la *Real Orden de 29 de octubre de 1850* por la que se mandaba enviar la documentación conservada, en las dependencias provinciales del ramo, a la Real Academia de la Historia, previa selección de los documentos y códices más interesantes. Esta Real Orden establecía, por una parte, la entrega de libros y documentos procedentes de conventos y monasterios desamortizados a la Real Academia de la Historia y, por otra, declaraba las academias, bibliotecas, archivos y museos como centros de investigación que mas adelante pasarán, por *Ley de 9 de septiembre de 1857*, a ser entregados a la Dirección General de Instrucción pública del Ministerio de Fomento.

En este sentido, la Academia de la Historia no dejaba de promover, como lo hizo en los años 1852 y 1856, la creación de un Cuerpo de Archiveros-Bibliotecarios para dar empleo a los diplomados de la Escuela Superior de Diplomática empezando a ver sus frutos en la publicación de la *Ley de 17 de julio de 1857* que en el artículo 1 punto 14 establecía lo siguiente:

Como medios eficaces de ampliar y completar los progresos de las ciencias, el Gobierno procurará el aumento de las Academias, las

Bibliotecas, los Archivos y los Museos y creará nuevos establecimientos de enseñanza para los ramos mas elevados de la ciencias enlazando en lo posible su organización con la de los ya existentes.

Posteriormente, autorizado el Gobierno por *Ley de 17 de julio de 1857*, se publica la *Ley de Instrucción Pública de 9 de septiembre de 1857* que en el Título IV bajo el epígrafe, *De las Academias, Bibliotecas, Archivos y Museos*, establece y organiza, a la vez que promueve, las mejoras en Bibliotecas y Archivos. Por ello, el artículo 163 regula que, *el Gobierno promoverá los aumentos y mejoras de las Bibliotecas existentes*, y el artículo 165 expone que, *se organizará el servicio de Archivos, determinando cuáles han de ser tenidos como generales e históricos, y cuáles como provinciales, incluyéndose la clase de documentos que han de conservarse en los mismos, las fases de transferencias documentales, y la inspección que al Gobierno corresponde sobre las localidades y corporaciones.*

La necesidad de crear un Cuerpo de empleados en los Archivos y Bibliotecas, en los términos prescritos en los artículos de la Ley, motivó el *Real Decreto de 17 de julio de 1858* sobre clasificación de archivos y bibliotecas; creación del Archivo General Central del Reino; de la Junta Superior Directiva de Archivos y Bibliotecas del Reino y el Cuerpo de Archiveros y Bibliotecarios, al que organiza y dota de estructura, haciéndolo depender de la Dirección General de Instrucción pública del Ministerio de Fomento. Podríamos considerar que la finalidad perseguida por esta disposición fue estructurar y clasificar el sistema de Archivos y Bibliotecas español.

El origen del Cuerpo facultativo de Archiveros-Bibliotecarios se gesta a partir del artículo doce del mismo Decreto que estructura las categorías del Cuerpo del modo siguiente:

Se compondrá de tres categorías: la primera de Archiveros-Bibliotecarios, la segunda de Oficiales y la tercera de Ayudantes. Habrá además, un Director de la Biblioteca Nacional y otro del Archivo general central.

El artículo trece establece que, los actuales empleados de Archivos y Bibliotecas ingresarán en el Cuerpo y serán clasificados según; el sueldo que disfruten, títulos, méritos y antigüedad. Formarán parte del Cuerpo, los Catedráticos y Ayudantes de la Escuela de Diplomática⁸¹.

A partir de la publicación de este decreto será necesario, para ingresar en el Cuerpo, haber obtenido el título académico de Archivero-Bibliotecario. Los que en ese momento fueran Licenciados en Letras se hallarán aptos para el servicio de las Bibliotecas públicas pero los que, en adelante, reciban dicho título necesitarán acreditar haber cursado en la Escuela de Diplomática un curso de Bibliografía. El ingreso, en estos casos, será siempre en la última plaza de la categoría de ayudante. Los ascensos, dentro de una misma categoría, se obtendrán por antigüedad rigurosa, y de una a otra, por medio de concurso entre los de la inferior. Será razón de preferencia, en igualdad de circunstancias, haber obtenido el título de Licenciado en Letras o el de Archivero-Bibliotecario.

De cada tres plazas vacantes de Oficiales y Bibliotecarios, podrá el Gobierno, oída la Junta superior directiva, proveerla en un Doctor en Letras que haya cursado y aprobado la asignatura de Bibliografía -si el título es posterior a este decreto- o en persona que por sus escritos o servicios haya dado suficientes pruebas de aptitud.

⁸¹ Los catedráticos de la Escuela de Diplomática formaron parte del Cuerpo hasta la publicación del *Real Decreto de 18 de noviembre de 1887* que, por el artículo 17, dejaron de ser funcionarios del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios.

La disposición afecta a los actuales empleados que lleven seis años de servicio o los cumplan en adelante, siempre que estén en aptitud de aspirar al título de Archivero-Bibliotecario, previo examen de las asignaturas de la carrera de Diplomática. Por otra parte, los integrantes del Cuerpo de Archiveros-Bibliotecarios no podrán ser separados de sus empleos, sino en virtud de sentencia judicial que les inhabilite para ejercer sus cargos o de expediente gubernativo, formado con audiencia del interesado y dictamen de la Junta superior directiva.

También se crea, por este Decreto, *la Junta superior directiva de Archivos y Bibliotecas del Reino* compuesta de un Presidente y ocho Vocales nombrados por el Gobierno. Como individuos natos están los Directores de la Escuela de Diplomática y de la Biblioteca Nacional. Las funciones de Secretario recaerán en un vocal que será miembro del Cuerpo de Archivos y Bibliotecas. A partir del *Real Decreto de 11 de diciembre de 1862* el Director general de Instrucción pública pasará a encargarse de la Presidencia de esta Junta superior.

Siendo deseo de la Reina Isabel II, que la creación del Cuerpo de Archiveros-Bibliotecarios evolucione con estricta justicia y el mayor acierto posible, se redacta, de conformidad con el dictamen de la Junta consultiva de estos ramos, las reglas que han de tenerse presentes para la formación del Cuerpo, clasificación de sus miembros y primeros ascensos por *Real Orden de 12 de mayo de 1859*.

El artículo primero establece que formarán el Cuerpo facultativo de Archiveros-Bibliotecarios los actuales empleados que con buena nota sirvan en los establecimientos de ambos ramos. No serán por ahora comprendidos en el Cuerpo, los empleados de cualquier otro ramo, que además estén destinados a Archivos o Bibliotecas gratuitamente o con alguna remuneración. Si solicitaran ingresar en él se les clasificará, previa consulta de la Junta, con arreglo a la antigüedad, sueldo y consideración que en el servicio de estos ramos hubieren tenido.

Los miembros del Cuerpo ocuparán la categoría y, dentro de ella, el grado a que corresponda con el sueldo que disfruten o el que con arreglo a esta organización deban disfrutar. Todos los años se publicará el escalafón del Cuerpo con las modificaciones que hubieren ocurrido.

3.1.2. Nueva denominación del Cuerpo por Real Decreto de 12 de junio de 1867: la sección de Anticuarios.

Con la creación del Museo Arqueológico, por *Real Decreto de 20 de marzo de 1867*, el Cuerpo de Bibliotecarios y Archiveros sufre cambios reformándose por *Real Decreto de 12 de junio de 1867*.

Decretada el 20 de marzo pasado, la creación del Museo Arqueológico central, así como la instalación de los Museos y colecciones provinciales de antigüedades, ha surgido la necesidad de establecer la consiguiente división del cuerpo de Archiveros-Bibliotecarios en tres secciones, denominándose esta tercera sección de Anticuarios.

Así, da comienzo el preámbulo del Real Decreto por el que se crea la nueva sección de Anticuarios que, al igual que en las otras dos secciones, tiene señalado su respectivo empleo los Catedráticos de la Escuela de Diplomática. Esta nueva denominación perdurará hasta principios del siglo XX que será sustituida por la denominación de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos⁸².

⁸² Siguiendo a los autores PEIRÓ MARTÍN, I. y PASAMAR ALZURIA, G. *La Escuela Superior de Diplomática: Los archivos en la historiografía española contemporánea*. Madrid: ANABAD, 1996, pp. 203-207, la pérdida del término *anticuarios* y su sustitución por el de *arqueólogos* vino dado por los propios miembros del Cuerpo. En la última de las reformas de la Escuela Superior de Diplomática

Planteada la sección de Anticuarios, su pertenencia al cuerpo de profesores de la Escuela y clasificación según las reglas contenidas en la Real orden de 10 de abril último, falta ahora, tan sólo, unificar la legislación de ambos Institutos poniéndola en consonancia con las reformas últimamente adoptadas para constituir las bases orgánicas definitivas del servicio que prestan a las Bibliotecas, Archivos y Museos.

A esta finalidad se encamina el adjunto proyecto de decreto que reza así:

A la institución del Cuerpo de Archiveros-Bibliotecarios en 1858 precedió en 1856 la de la Escuela de Diplomática, cuyo pensamiento e iniciación puede decirse que datan desde el reinado de Fernando VI, como único medio para levantar los opulentos depósitos de nuestra historia, formando Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos científicos, en sustitución de los exclusivamente empíricos llamados Lectores o Revisores de la letra antigua, y de los Anticuarios que sin sujeción a reglas y sin norma fija, obtenían, a veces, este título como excepcional.

En este sentido, la Escuela, que empezó a dar sus resultados proporcionando el personal cualificado para los establecimientos públicos, necesitaba ir publicando su reglamentación pero *en términos que no la separasen del cuerpo*. Por ello, habiendo recobrado hoy su verdadero carácter de *especial* y encomendadas sus enseñanzas a los individuos del cuerpo se hace forzoso reformar sus reglamentos armonizándolos con los del mismo cuerpo, así lo expone la disposición al reconocer:

(1897) se indicaba que el título expedido por dicho centro pasaría a denominarse de *archivero, bibliotecario y arqueólogo* (vid. *Sección Oficial y de Noticias*. “R.A.B.M”, núm. 1, enero de 1897, p. 143). A partir de ese momento se impuso rápidamente la denominación de *Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos*.

Ha llegado, pues, el momento de que esta organización se realice. Una vez reformada convenientemente la Escuela y constituido durante nueve años el Cuerpo de Archiveros-Bibliotecarios, y completado con la sección de Anticuarios, procede, en buenos principios administrativos, ordenar de una manera perdurable todo lo relativo al servicio de este ramo, que tan íntimamente se halla con el fomento de los trabajos históricos, el progreso de los estudios de erudición y la cultura general del país.

Por lo tanto, el Real Decreto reorganizó el referido Cuerpo tomando el nuevo nombre y revisando la legislación de los once últimos años. Concordándola con las reformas adoptadas en todo el plan y economía de Instrucción pública se fijan las principales bases orgánicas del Cuerpo facilitando el ingreso a los alumnos de la Escuela de Diplomática y, facultando al Gobierno para que corresponda en darles los primeros puestos del ramo de Biblioteca, Archivos y Museos y ciertas plazas en las diversas categorías del mismo. Como bien apunta el legislador: *Los establecimientos prosperarán dirigidos siempre por la inteligencia, la honradez y la actividad*⁸³. En este sentido el artículo diez establece que los empleados en el servicio de las Bibliotecas, Archivos y Museos, constituirán un *Cuerpo facultativo* que se denominará de *Bibliotecarios, Archiveros y Anticuarios*⁸⁴.

⁸³ En el texto de la disposición se recoge que *no es aventurado predecir que llegará un día en que la Biblioteca, el Archivo y el Museo sean una necesidad para cada provincia, para cada Municipio.*

⁸⁴ PEIRÓ MARTÍN, I. y PASAMAR ALZURIA, G., consideran que esta nueva denominación que obedece al *Real Decreto de 12 de junio de 1867* había modificado previamente la constitución y nombre del anterior Cuerpo facultativo de Archiveros-Bibliotecarios, pasando a llamarlo Cuerpo facultativo de Bibliotecarios, Archiveros y Anticuarios, aunque el uso lo transformara después en Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios. Op. cit., p. 52. Consúltense también ESCUDERO DE LA PEÑA, José María. *Secciones del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios*. "Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos", nº 6, 15 de mayo de 1871, pp. 82-84 y VILLA-AMIL Y CASTRO, José. *El Cuerpo de Bibliotecarios, Archiveros y Anticuarios y nuestras Bibliotecas públicas*. "La Academia", nº 7, 18 de febrero de 1877, pp. 106-109.

3.1.2.1. El escalafón general del Cuerpo: secciones, categorías, grados, ingreso y ascenso

Siguiendo con la descripción del *Real Decreto de 12 de junio de 1867*, el Cuerpo se dividirá en tres secciones correspondientes a los tres ramos que comprende el servicio cada una de ellas tendrá un Director especial; de estos tres Directores el correspondiente a Bibliotecas prestará sus servicios en la Nacional bajo la inmediata dependencia del Jefe superior teniendo a su cargo la sección de manuscritos. Otro estará al frente del Archivo central de Alcalá, y el tercero tendrá a su cuidado el Museo arqueológico. Estas plazas de Director serán provistas por el Gobierno con personas de elevada reputación literaria y la categoría, como mínimo, de jefes de Administración civil.

A su vez, el artículo once establece que *cada una de las tres secciones tendrá su escalafón especial*, debiendo constar por ahora y mientras no exista aumento, la inclusión de nuevos establecimientos con 90 plazas para las Bibliotecas, de 45 para los Archivos y 15 para los Museos. *Los individuos del cuerpo dentro de cada una de las tres secciones, se dividirán en tres categorías; jefes, oficiales y ayudantes, y cada una de estas en tres grados, primero, segundo y tercero.* Se fijará por Real orden la plantilla definitiva y detallada de la distribución del personal en los establecimientos de cada ramo. Además del personal facultativo habrá, para cada establecimiento, el número necesario de Escribientes, Conserjes, porteros y mozos, con el sueldo y ventajas que en su planta especial se fije.

Por lo que respecta a la provisión de plazas, el artículo 18 establece que de cada tres vacantes, en todas las secciones y grados, corresponderá al Gobierno la provisión directa de la primera determinándose, este turno, por los primeros

nombramientos que se verifique, después de cubrir el Gobierno las vacantes que en ese momento existan. La segunda y tercera se proveerán conforme a lo que determinan los artículos 20 y 21, que reseñaremos más adelante.

Los nombramientos del Gobierno para las vacantes existentes y para la primera de cada tres que en lo sucesivo ocurran, según se establece en el artículo anterior, deberán recaer en personas que tengan alguno de los requisitos siguientes:

1- Para las plazas de *jefes* podrán ser individuos de número de alguna de las cinco Reales Académias, Catedráticos numerarios de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Central o Catedráticos numerarios de la misma Facultad en Universidades de distrito que cuenten con cuatro años de antigüedad en el escalafón y personas de altos merecimientos científicos o literarios, previa consulta del Real Consejo de Instrucción pública.

2- Para las plazas de *oficiales* podrán optar; Catedráticos numerarios de Filosofía y Letras de Universidades de distrito y supernumerarios de la Central, Catedráticos propietarios de Instituto con grado de Doctor o Licenciado y cinco años de antigüedad en la cátedra, Doctores en la expresada Facultad de Filosofía y Letras que lleven dos años de antigüedad en el cuerpo de Archiveros-Bibliotecarios o que hayan prestado servicios en la enseñanza por más de dos años, o que hubieren opositado a cátedras de la Facultad.

3- Para las plazas de *ayudantes*, podrán optar los Catedráticos supernumerarios de Filosofía y Letras de Universidad de distrito, Doctores, Licenciados en cualquier Facultad o Ingenieros, Profesores de Instituto que lleven mas de dos años en el desempeño de su cargo como propietarios y antiguos empleados en los Archivos administrativos de la nación con cuatro años de servicio.

El artículo 20 describe el ingreso ordinario en el Cuerpo fuera de los casos expuestos anteriormente que será por plaza de tercer grado de la tercera categoría, a cuyo fin, la Junta consultiva formará lista de clasificación que comprenderá todos los aspirantes que tengan el título de idoneidad respectivo expedido por la Escuela de Diplomática. El artículo 21 establece, por su parte, que el ascenso a consecuencia de vacantes que no correspondan al turno directo del Gobierno, se verificará de grado a grado por antigüedad y de categoría a categoría por concurso entre todos los de la inferior, y a propuesta en terna de la Junta consultiva. Para todo ascenso será requisito indispensable que el interesado lleve dos años cumplidos de servicio con el sueldo inmediato inferior⁸⁵. Será circunstancia preferente para los ascensos por concurso haber escrito y publicado obras referentes a estos ramos examinadas y aprobadas por la Junta consultiva, o declaradas de texto por el Real Consejo de Instrucción pública.

El artículo 23 regula las modificaciones que se dan en la incorporación de un nuevo establecimiento. Ingresarán sus empleados en el cuerpo facultativo en la sección, categoría y grado que les corresponda según su sueldo y antigüedad, aumentándose en los grados respectivos tantos números cuantos sean los individuos que ingresen.

Por último el artículo 24 recoge que los empleados facultativos del cuerpo podrán ser separados de sus destinos en los casos necesarios y extremos. En estos casos los empleados que obtengan otro destino o servicio inmediato de la Dirección general de Instrucción pública no producirán vacante y conservarán su puesto y sus derechos en el cuerpo facultativo.

⁸⁵ Este artículo fue derogado por *Real Decreto de 12 de marzo de 1875* anulando el requisito de los dos años de servicio en cada categoría para pasar a la superior inmediata.

3.1.2.2. Decreto de 10 de noviembre de 1868 derogando el Real Decreto de 12 de junio de 1867

Considerando que el Cuerpo de Bibliotecarios, Archiveros y Anticuarios, en cumplimiento con los fines que justifican su organización, ha sido uno de los que más ha sufrido el influjo de las circunstancias políticas y sociales del momento y con el objeto de convertirle en poderoso auxiliar de los estudios históricos, bibliográficos y en investigador y guardador de inestimables riquezas, *hoy dispersas y ocultas en manos profanas, con escasa utilidad pública*, el Ministro de Fomento considera urgente una reparación derogando el Decreto de 12 de junio de 1867 que, a juzgar por el legislador, *había introducido en el Cuerpo a unos cuantos favorecidos del poder y legalizado la separación de dignísimos Catedráticos, cuyas ideas liberales se creían menos temibles en el Cuerpo de Bibliotecarios*. Por estas razones se publica el Decreto de 10 de noviembre de 1868 derogando el del 12 de junio de 1867 que reformó el Cuerpo de Bibliotecarios y Archiveros integrando, dentro del Cuerpo de Bibliotecarios y Archiveros, a los Catedráticos de la Escuela de Diplomática.

Una de las repercusiones que lleva implícita esta disposición es que quedan sin efecto los nombramientos y ascensos dados a consecuencia del decreto derogado ya que, después de proveer los cargos y plazas vacantes, se cerrará el escalafón y sólo se podrá ascender por antigüedad o concurso, como establecen los reglamentos primitivos del cuerpo.

3.1.2.3. Reestructuración del Cuerpo por Real Decreto de 5 de julio de 1871

Mediante el Reglamento aprobado por el *Real Decreto de 5 de julio de 1871* se normalizan algunos aspectos del Cuerpo. El Título segundo bajo el epígrafe *Del personal* regula en el Capítulo I *Del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios*, que el personal encargado del servicio facultativo en los Archivos, Bibliotecas y Museos constituye el Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios. Este Cuerpo forma un escalafón distribuido en tres secciones denominadas respectivamente de Archivos, Bibliotecas y Museos. Cada sección se divide en tres categorías denominadas de Jefes la primera, de Oficiales la segunda y de Ayudantes la tercera y cada una de estas categorías se subdivide en tres grados, primero, segundo y tercero.

El artículo 27 establece que habrá un Jefe superior del Cuerpo y uno especial de cada sección, cuyas plazas proveerá libremente el Gobierno en persona de distinguida reputación literaria. El número de Jefes, Oficiales y Ayudantes que constituyen el Cuerpo se determinará por el Gobierno. Será Jefe en cada Archivo, Biblioteca o Museo el empleado facultativo de más categoría en el Cuerpo y si dos o más la tuvieran igual, el de mayor antigüedad.

Los individuos del Cuerpo no podrán ser separados de sus empleos sino mediante sentencia ejecutoria o expediente gubernativo con audiencia del interesado y oída la Junta consultiva. Podrán disfrutar de licencia durante dos años para servir cualquier cargo público o destino en establecimiento particular. Los que desempeñen cátedras en la Escuela de Diplomática atenderán con preferencia a la enseñanza, sin perjuicio, de los demás deberes propios de su cargo en los establecimientos que estén adscritos.

El Capítulo II bajo el epígrafe *Del ingreso y ascenso en el Cuerpo* establece que el ingreso en el Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios puede tener lugar en tres formas: por *concurso* reglamentario, por *libre nombramiento del Gobierno* y por *incorporación al ramo de Instrucción pública* de establecimientos que antes no dependían de él. El ingreso por *concurso* tendrá siempre lugar en las últimas plazas después de producirse los ascensos de antigüedad que resulten vacantes en la última categoría de cada sección y con destino al establecimiento que corresponda, según la plantilla respectiva. Para aspirar al concurso para estas plazas se necesita tener el título expedido por la Escuela de Diplomática. En las secciones de Bibliotecas y Museos podrán también presentarse al concurso los Licenciados en la Facultad de Filosofía y Letras, siempre que acrediten haber aprobado la asignatura de Bibliografía o la Arqueología, respectivamente, en la misma Escuela. La presentación de solicitudes se hará en la Dirección general de Instrucción pública.

El *libre nombramiento del Gobierno* se hará a partir de los miembros incluidos en terna. El nombrado ocupará el último lugar del escalafón y, si fueran más de uno los individuos, se hará por el orden de antigüedad del título académico que los habilite para el ingreso.

En el tercer caso, por *incorporación al ramo de Instrucción pública* de establecimientos que no dependían del mismo, se hará con arreglo a la clasificación expuesta en el Título primero de este Reglamento remitiendo los expedientes de los empleados a la Junta consultiva para que propongan el puesto que les corresponda dentro del Cuerpo.

El Reglamento también recoge la figura de *aspirante sin sueldo* siendo competente la Dirección general de Instrucción pública para nombrar a los aspirantes con destino a los establecimientos del ramo a los que hayan obtenido el título de aptitud en la Escuela de Diplomática o sean Licenciados en Filosofía y Letras y, siempre que hayan aprobado en la Escuela las asignaturas de Bibliografía o la de Arqueología para las secciones de Bibliotecas y Museos, respectivamente.

El artículo 45 establece que el ascenso en el Cuerpo se verificará por rigurosa antigüedad dentro de cada categoría. El artículo 47 estipula como requisito indispensable para ascender en categoría tener el título de la Escuela de Diplomática o de la Facultad de Filosofía y Letras, con la asignatura de Bibliografía o de Arqueología no siendo que lleve seis años de servicio en el ramo.

Serán méritos preferentes para el ascenso, según el artículo 48, la mayor asiduidad, celo e inteligencia acreditados en el servicio, el desempeño de comisiones y servicios extraordinarios del ramo, los premios obtenidos en concursos literarios y la publicación de obras de Diplomática, Bibliografía o Arqueología.

El capítulo V *Del personal administrativo* establece que en los Archivos, Bibliotecas y Museos, también habrá el correspondiente número de empleados subalternos destinados al servicio de los mismos con el nombre de porteros o vigilantes.

Por último, la Disposición transitoria primera hace eco de la tendencia a desaparecer, en lo sucesivo, la clase de *Escribientes* de los establecimientos, cuyas funciones, que no pueden despojarse por completo del carácter de facultativas, han de desempeñarse por aspirantes, o en su defecto por Ayudantes. Los actuales

Escribientes podrán conservar sus plazas y ser incluidos en el escalafón con el número y antigüedad correspondiente siempre que en el término de dos años, a contar desde la publicación de ese reglamento, adquieran el título académico en la Escuela de Diplomática o en la Facultad de Filosofía y Letras. De esta manera se irán suprimiendo las plazas de *Escribientes* hasta su total extinción⁸⁶.

Algunos aspectos de ésta disposición dieron lugar a la *Real orden de 18 de julio de 1871* que modifica el artículo 47 del reglamento anterior con la finalidad de resolver el problema creado sobre el ascenso por concurso en categoría. La disposición surgió como consecuencia de una instancia iniciada por varios individuos del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios que pretendían que el ascenso se ampliara a todo el personal y no fuera sólo, tal y como apunta el artículo modificado, a aquellos que obtuvieran el título de la Escuela de Diplomática o de la Facultad de Filosofía y Letras cursados los estudios de la asignatura de Bibliografía o Arqueología o los que llevaran seis años en el servicio.

Conociendo esta circunstancia, y deseando conciliar los derechos de los recurrentes, con la citada prescripción, se publica la orden que en concepto de la tercera disposición transitoria del referido reglamento se entenderá que los individuos que actualmente forman parte del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Museos, puedan ascender, por concurso en categoría, aunque carezcan de los títulos que el artículo 47 exige y será suficiente poseer cualquier otro título académico.

3.1.2.4. Reorganización del Cuerpo mediante el Real Decreto de 12 de junio de 1867

Constatados los problemas jurídicos ocasionados en el Cuerpo se publica el *Decreto de 12 de febrero de 1875* reorganizando el Cuerpo facultativo de Bibliotecarios, Archiveros y Anticuarios que establece el *Real decreto orgánico de 12 de junio de 1867* con el siguiente contenido legal:

Artículo 1º *Quedan sin efecto todos los nombramientos y ascensos del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios que hubiesen recaído en individuos que no reúnan los títulos y condiciones que exige el decreto orgánico de 12 de junio de 1867 o el reglamento de 5 de julio de 1871.*

Artículo 2º *Los empleados del Cuerpo que teniendo las condiciones prescritas por la Ley hubiesen sido declarados cesantes sin previa formación de expediente, serán repuestos en sus destinos con la categoría y antigüedad que les corresponda.*

Artículo 3º *Los individuos comprendidos en el artículo anterior se entiende que renuncien a su derecho si no lo alegan en el término de veinte días, a contar desde la publicación de este decreto.*

Artículo 4º *Los cesantes del ramo por cualquier concepto podrán ser repuestos en sus destinos cuando haya vacante.*

Artículo 5º *Se restablece en su fuerza y vigor el Real decreto orgánico de 12 de junio de 1867.*

⁸⁶ Las plazas de *Escribientes* quedan suprimidas por el artículo 8 del *Real Decreto de 12 de octubre de 1884*.

3.1.3. Supresión de las plazas de gracia y nuevas formas de ingreso y ascenso.

Durante el año 1856 el Gobierno instituyó que pudieran servir en Bibliotecas algunos individuos distinguidos por trabajos literarios previa una clasificación que justificara sus méritos dando origen a lo que en el Cuerpo se conoce con el nombre de *plazas de gracia*. Sobre estas plazas, el Gobierno amplió extraordinariamente su facultad llegando, en 1867, a conceder *plazas de gracia* con infundadas condiciones, sin previa clasificación, y extendiéndose a todos los grados de los escalafones tanto en la Sección de Bibliotecas como en los Archivos y Museos.

Las consecuencias derivadas de esta circunstancia son importantes y así la legislación, que fue modificada en 1871 y restablecida en 1875, produce, entre otros deplorables resultados, que solamente tienen derecho a ocupar cualquier puesto de escala, sin excepción alguna, aquellos que desconocen la Bibliografía, la Paleografía, los estudios arqueológicos y demás que se consideren indispensables en la carrera, mientras que los individuos que obtienen el competente título, únicamente, pueden aspirar a los últimos grados del escalafón y después de sufrir el riguroso concurso de méritos.

El Ministro de Fomento, secundando los deseos del Gobierno, considera de absoluta necesidad que terminen *las plazas de gracia* en el Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios renunciando, desde ahora, al derecho de concederlas y, a su vez, opina que para regularizar el servicio es indispensable modificar en parte el actual reglamento del Cuerpo encaminando la reforma para que el ingreso se verifique por *oposición* a los últimos lugares de la escala; el ascenso por *antigüedad* dentro de cada grado y el paso a las categorías de Oficiales y de Jefes por concurso de méritos.

Todas estas cuestiones condicionaron la publicación del *Real Decreto de 25 de marzo de 1881* aprobando el Reglamento orgánico del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, y establecimientos que del mismo dependan. El Título segundo, bajo el epígrafe *Del personal* regula todo lo relativo *Del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios*, en el Capítulo primero; por ello, el artículo 35 establece que *el personal encargado del servicio facultativo de los Archivos, Bibliotecas y Museos, constituye el Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, dividido en tres Secciones, denominadas respectivamente de Archivos, Bibliotecas y Museos.*

El artículo 36 refleja que además del Jefe superior del Cuerpo y de los tres Jefes de Sección cada una de estas se dividirá en tres categorías denominadas de *Jefes* la primera, de *Oficiales* la segunda y de *Ayudantes* la tercera. A su vez, cada una de estas categorías se subdivide en tres grados, primero, segundo y tercero. El número de Jefes, Oficiales y Ayudantes que constituyen el Cuerpo se determinará por el Gobierno y la Dirección general de Instrucción pública.

Por otra parte, el artículo 39 establece que los traslados de uno a otro establecimiento dentro de la misma Sección se autorizarán por la Dirección general de Instrucción pública a instancia del interesado o por conveniencia del servicio oyendo, en ambos casos, el dictamen de la Junta.

El Capítulo II, dentro de este segundo título, trata *Del ingreso y ascenso en el Cuerpo*. Un aspecto a destacar a partir de esta disposición es la supresión de *las plazas de gracia* y por ello el artículo 44 impone que el ingreso en el Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios tendrá lugar siempre por oposición y en las últimas plazas y el artículo 45 reseña alguno de los requisitos necesarios para poder presentarse a las oposiciones, a saber:

- 1- *Los alumnos de la Escuela superior de Diplomática que tengan el título expedido en virtud de los estudios hechos en la misma y*
- 2- *Los licenciados en la Facultad de Filosofía y Letras que hayan aprobado en dicha Escuela las asignaturas correspondientes a las Secciones en que ocurra la vacante.*

Añade el artículo que un reglamento especial determinará la forma de verificarse las oposiciones y los conocimientos especiales que han de reunir los aspirantes siempre que la índole de la vacante lo requiera. Este Reglamento fue publicado por *Real Decreto de 26 de julio de 1881* convocando las primeras oposiciones a ingreso en el Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios⁸⁷.

Por otra parte, el artículo 50 establece que por la Dirección general de Instrucción pública se nombrarán cuatro Aspirantes destinados; dos a la Biblioteca Nacional, uno al Archivo Histórico y otro al Museo Arqueológico de Madrid. Estos nombramientos se harán a propuesta del Claustro de profesores de la Escuela superior de Diplomática previa oposición entre los alumnos que reúnan las condiciones anteriormente señaladas.

Las modificaciones que se iban dando en el Cuerpo empezaron a implantarse de forma progresiva en los distintos establecimientos dando lugar a disposiciones específicas relativas a los distintos centros. Es el caso de la *Real Orden de 11 de mayo de 1883* reorganizando la plantilla del personal facultativo del Archivo general de Indias establecido en Sevilla que recoge en su articulado aspectos aprobados en el reglamento anterior como los artículos seis y siete que establecen, respectivamente:

⁸⁷ Véase epígrafe 3.1.3.3. del presente capítulo.

Los nombramientos para las plazas de Oficiales de nueva creación se hagan en individuos del Cuerpo facultativo de Archiveros, formulando al efecto el Ministerio de Fomento la oportuna propuesta.

La provisión de las vacantes que ocurran en lo sucesivo se verifique por rigurosa antigüedad, corriéndose los números de la escala hasta dejar vacante la última que será también provista en un individuo del Cuerpo de Archiveros, propuesto por el Ministerio de Fomento.

3.1.3.1. Real Decreto de 12 de octubre de 1884 reorganizando el personal del Cuerpo

Viendo la necesidad de normalizar y estabilizar al personal del Cuerpo el Ministro, que en octubre de 1884 dirige el Ministerio de Fomento, Alejandro Pidal y Mon expone como justificación a la publicación de la *Real Orden de 12 de octubre de 1884* sobre reorganización del personal y servicios del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, lo siguiente:

El Cuerpo facultativo viene desde su creación recibiendo las modificaciones que se consideran necesarias por los cambios producidos de la experiencia. Todas ellas han contribuido, sin duda, a constituir esta carrera tan útil para las ciencias y las letras españolas, aunque ha llegado el momento de atender algunas necesidades que el progresivo desarrollo de este Cuerpo facultativo exige y de fijar, definitivamente, la situación de los individuos que lo componen. Una vez que todos o casi todos tienen el título de la Escuela de Diplomática, y formando en rigor un solo cuerpo, tiene para

el ascenso tres distintas escalas en donde resulta que los de una sección necesitan para alcanzar el empleo inmediato doble tiempo que sus compañeros que prestan igual servicio en otro. Esta falta de equidad es insostenible y a corregirla tiende esta disposición, intentando que cada uno sirva en la sección para la que muestre mejores aptitudes, dejando libre campo al ejercicio de cada especialidad.

De conformidad con la propuesta del Ministro de Fomento, y de acuerdo con el Consejo de Ministros, se publica este *Real Decreto de 12 de octubre de 1884*, aprobando en el artículo primero que *el personal encargado del servicio facultativo en los Archivos, Bibliotecas y Museos constituye el Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios.*

El artículo tres añade: *Quedan refundidos en un sólo escalafón las tres secciones en las que se encuentra dividido el Cuerpo. Los individuos que forman sus diferentes categorías se colocarán en el nuevo escalafón por orden de rigurosa antigüedad de sus actuales empleos. Se ascenderá, dentro de cada categoría, por rigurosa antigüedad*⁸⁸. El artículo cuatro establece que *el Jefe superior del Cuerpo, Director de la Biblioteca Nacional, será nombrado libremente por el Gobierno, debiendo recaer el nombramiento en persona de relevantes méritos literarios y de notoria celebridad*⁸⁹.

⁸⁸ Este aspecto será debidamente desarrollado, posteriormente, por la *Real Orden de 18 de marzo de 1885* que dicta reglas para el ascenso de los individuos del Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios y establece lo siguiente; primera, se atenderá a la fecha de la toma de posesión del último destino que desempeñaren los funcionarios del Cuerpo, y por ella se ordenará su respectiva colocación con el correspondiente número. Segunda, en los ascensos al grado segundo de Ayudantes, motivados por la supresión del grado tercero de esta categoría, el orden de colocación de los favorecidos se regulará por la fecha de toma de posesión del destino de Ayudante del grado suprimido. Tercera, se concede el plazo de quince días desde la publicación de esta orden para formular reclamaciones.

⁸⁹ Teniendo en cuenta las razones que inspiraron el *Reglamento de 25 de marzo de 1881* que disponía que el Jefe del Cuerpo obtendría su plaza casi por ascenso riguroso entre los miembros de que consta, acabando con la vieja costumbre de aventajar a escritores famosos de la Nación el Ministro, que ocupa el Ministerio en estos momentos, considera necesario conservar la libertad para nombrar Jefe superior

La disposición también indica el número de Jefes, Oficiales, Ayudantes y Aspirantes de que constará el Cuerpo ocupando, respectivamente, las plazas de Inspector primero, segundo y tercero los actuales Jefes de las Secciones de Archivos, Bibliotecas y Museos. El artículo seis estipula que *dentro de cada categoría se ascenderá por rigurosa antigüedad*.

El artículo siete recoge: *El ingreso en el Cuerpo se hará previa oposición en las plazas de Aspirantes. Para tomar parte en la oposición será requisito indispensable tener aprobados los ejercicios para el título de Archivero, Bibliotecario y Anticuario, o los de Licenciado en cualquier Facultad. Los que previa oposición, ingresaren en el Cuerpo con el carácter de Licenciados de Facultad habrán de aprobar las asignaturas de Paleografía, Bibliografía y Arqueología, y haber sacado el título de Licenciado, sin cuyos requisitos, no podrán ascender a la categoría de Ayudante*.

Por el artículo octavo quedan suprimidas todas las plazas de Escribientes adscritos a los establecimientos a cargo del Cuerpo. Los individuos que en la actualidad las desempeñan, ingresarán en la clase de Aspirante, pero sin figurar en el escalafón del Cuerpo ni tener derecho a ascenso hasta que reúnan las condiciones exigidas a los que entran por oposición⁹⁰.

del Cuerpo y Director de la Biblioteca Nacional, a persona de altísima reputación literaria e indudables méritos, sin distinción alguna de opiniones ni partidos. De esta manera se evalúa no sólo la antigüedad para el ascenso en los Cuerpos facultativos, sino también la laboriosidad, la capacidad y el saber.

90 Suprimida esta clase, y considerando que ni los citados Aspirantes han tenido tiempo para hacer los estudios que el título de Archivero, Bibliotecario y Anticuario exige, ni fijado el plazo determinado, dentro del cual hubieran de reunir las citadas condiciones, no sería equitativo privarles de un derecho adquirido a la sombra de disposiciones del Gobierno. Bajo estas circunstancias la Reina regente, M^a Cristina, publica la Real orden de 21 de noviembre de 1887 disponiendo que los Escribientes adscritos como Aspirantes al Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, continúen desempeñando sus plazas con el sueldo que disfrutaban, pero sin figurar en el escalafón del Cuerpo hasta que reunieran las condiciones necesarias para ascender a la categoría de Ayudantes.

El artículo doce regula que la Junta facultativa de Archivos, Bibliotecas y Museos entenderá en los asuntos puramente técnicos. Los demás se despacharán por la Dirección general de Instrucción pública oyendo, cuando sea conveniente, al Consejo superior del ramo.

Por el artículo trece se establece, que el Ministerio de Fomento conservará un índice general de los documentos, libros y objetos que se conservan en los establecimientos del Cuerpo. Para dar el debido cumplimiento a esta disposición todos los individuos del mismo remitirán, anualmente, los trabajos prácticos que determinará el reglamento. Será condición indispensable para ascender a la categoría de Ayudantes, Oficiales y Jefes haber presentado los trabajos que preceptúa el párrafo anterior. Se exceptúan de esta obligación los catedráticos numerarios de la Escuela superior de Diplomática.

El artículo quince relaciona los empleados administrativos y dependientes de los Archivos, Bibliotecas y Museos. Por último, el artículo 16 determina que para la ejecución del presente decreto la Dirección general de Instrucción pública procederá a la formación del correspondiente reglamento.

3.1.3.1.1. Reglamento de desarrollo del Real Decreto de 12 de octubre de 1884

El Reglamento que desarrolla ésta disposición es aprobado por *Real Decreto de 19 de junio de 1885*. En el Capítulo VI *Del ingreso en el cuerpo* establece que el ingreso ha de ser mediante examen por las plazas de aspirantes. Para ser admitido a este examen será requisito indispensable tener aprobados los ejercicios para obtener

el título de Archivero, Bibliotecario y Anticuario, o los de Licenciado en cualquier Facultad. El procedimiento de la tramitación de las oposiciones viene regulado en los artículos que integran este capítulo.

El Capítulo VII sobre *El ascenso en el cuerpo* establece que el ascenso a la categoría de Ayudante se verificará ingresando los aspirantes en las vacantes que ocurran según los números que, conforme a sus méritos, les fueren señalados por los Tribunales de oposiciones. Los Licenciados de Facultad no podrán obtener ascenso si no hubieren aprobado las asignaturas de Paleografía, Bibliografía y Arqueología en la Escuela superior de Diplomática. Será, asimismo, requisito indispensable para el ascenso que los aspirantes hayan redactado 2.000 papeletas cuando menos para el Índice general.

El ascenso de Ayudante a Oficial se hará en dos turnos; el primero de antigüedad y el segundo de oposición, siendo requisito indispensable haber redactado, siendo ya Ayudante, 4.000 papeletas cuando menos para el Índice general. En este sentido el artículo 51 acuerda que dentro de cada categoría se ascenderá por rigurosa antigüedad. El ascenso de Oficial a Jefe se hará una vez por antigüedad y otra por concurso entre todos los Oficiales del Cuerpo que cuenten con más de dos años de servicio en esa categoría.

El artículo 48 refleja cómo deberán desarrollarse los ejercicios de oposición que serán dos; el primero consistirá en la lectura y discusión de una Memoria, el segundo, consistirá en hacer las papeletas correspondientes a tres documentos, tres libros o tres objetos de antigüedad o de arte, conforme a la clase del establecimiento donde exista la vacante. Estos ejercicios de catalogación se harán en *incomunicación absoluta* bajo la vigilancia del Tribunal.

Por último, la Dirección general de Instrucción pública será la competente tanto para la presentación de las solicitudes, como para nombrar el Tribunal de la oposición.

3.1.3.2. Reformas en el modo de ingresar y ascender en el Cuerpo

Siendo uno de los problemas del Cuerpo facultativo el referido a la unidad del escalafón es decir, todo lo relacionado con el modo de ingresar y de ascender en el Cuerpo, se publica el *Real Decreto de 18 de noviembre de 1887* que aprueba el reglamento del Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios y que centra su atención, sobre todo, en las reformas que en este momento se consideran necesarias separando lo técnico de lo administrativo y de lo consultivo.

El Real Decreto, por una parte, contiene en el artículo primero, que *el personal encargado del servicio facultativo en los Archivos, Bibliotecas y Museos, constituye el Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios*. A su vez, el artículo tercero destaca que *todos los individuos del Cuerpo formarán un solo escalafón por orden de antigüedad. La Dirección de Instrucción pública, oyendo a la Junta facultativa, asignará a cada uno la Sección donde deba prestar sus servicios*.

El artículo cinco establece que *dentro de cada categoría se ascenderá por rigurosa antigüedad*; de Ayudante a Oficial, de Oficial a Jefe y de Jefe a Inspector se ascenderá en dos turnos, uno por antigüedad y otro por concurso. Se ingresará en el Cuerpo, previa oposición, por la última categoría o por la incorporación de un establecimiento, según determina el artículo 12 de este decreto. Para tomar parte en la oposición será requisito indispensable tener aprobados los ejercicios para obtener

el título de Archivero, Bibliotecario y Anticuario, los de Licenciado en cualquier Facultad, o haber obtenido un primer premio en los concursos anuales de la Biblioteca Nacional.

Por otra parte, el Capítulo IV titulado *Del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios* recoge la competencia que tiene la Dirección general de Instrucción pública de distribuir el personal del Cuerpo conforme a las plantillas formadas por la Junta, en función de las necesidades de los establecimientos. Estos miembros del Cuerpo no podrán ser trasladados a establecimientos de otra sección ni de un establecimiento a otro, sin previo informe de la Junta facultativa.

El Capítulo V regula *El ingreso en el Cuerpo*. Se ingresará en el Cuerpo mediante oposición por las plazas de Ayudante de tercer grado. Para ser admitido será requisito indispensable tener aprobados los ejercicios para obtener el título de Archivero, Bibliotecario y Anticuario o los de Licenciado en cualquier Facultad o haber obtenido un primer premio en los concursos de la Biblioteca Nacional.

Todo lo relacionado con la oposición al Cuerpo estará regulado del artículo 25 al 36. La Dirección general de Instrucción pública será la encargada de la tramitación de las oposiciones al Cuerpo, y el Ministro será quien nombre al Tribunal y quien nombre, a propuesta de la Dirección general de Instrucción pública, a los candidatos para las plazas propuestas.

La oposición conllevará tres ejercicios, uno teórico y dos prácticos. El ejercicio teórico consistirá en contestar a las preguntas de las asignaturas correspondientes a la Sección a la que pertenezca la vacante.

El primer ejercicio práctico tratará sobre la lectura, traducción y análisis de un diploma para los Archiveros; en la clasificación de tres objetos arqueológicos para los anticuarios; y en la redacción de papeletas para la catalogación de un manuscrito, de un libro incunable y de otro moderno para los Bibliotecarios. El segundo ejercicio práctico consistirá en la lectura y traducción de impresos de una lengua viva y otra sabia.

El Capítulo VI que comprende los artículos 37 al 43 regula *los ascensos*. Dentro de cada categoría se ascenderá por rigurosa antigüedad; para ascender de una a otra categoría habrá dos turnos: el primero por antigüedad y el otro por concurso.

Las peticiones que se presentarán en la Dirección general, se remitirán a la Junta facultativa del Cuerpo que redactará las relaciones de méritos de todos los concursantes, formando la propuesta en lista en virtud de la cual el Ministro hará los nombramientos. El artículo cuarenta y uno reseña como méritos los siguientes:

1. *Presentar trabajos impresos o manuscritos relacionados con las tareas facultativas del Cuerpo.*
2. *Probar inteligencia, asiduidad y celo en el servicio acreditados por los trabajos realizados.*
3. *Tener hechos, o en fase de preparación, los índices del establecimiento.*
4. *Pertenecer como miembro de número a alguna de las Reales Academias.*
5. *Haber escrito obras científicas literarias.*
6. *Tener superioridad en títulos académicos.*
7. *Haber desempeñado comisiones extraordinarias en servicios del Cuerpo.*
8. *En igualdad de condiciones, la mayor antigüedad.*

Con el fin de evitar en lo sucesivo reclamaciones que obligan a determinar la fecha de los ascensos que en turno de antigüedad obtienen los individuos del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, y a tenor de lo resuelto para los diversos cuerpos facultativos que dependen del Ministerio de Fomento, la Regente del Reino, M^a Cristina, de conformidad con el dictamen de la Junta del ramo, publica la *Real Orden de 6 de diciembre de 1888* conteniendo disposiciones relativas a los ascensos por turno de antigüedad en el Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios. El artículo uno recoge que:

Los mencionados ascensos se entenderán concedidos con la fecha del día posterior al que ocurra la vacante para los efectos de abono de sueldo y antigüedad en la carrera, cualquiera que sea la fecha en que se expidan los nombramientos a los interesados.

Por su parte, el artículo dos regula:

Las vacantes que no procedan de defunción no se considerarán como tales hasta que materialmente cese en el servicio el funcionario que las produzca, y por último el artículo tres recoge que cuando el ascenso lleve consigo cambio de destino será también aplicable lo establecido en la disposición anterior.

Ante las dudas y reclamaciones que frecuentemente surgen entre los individuos del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios al ingresar en el mismo y conocer el puesto y la antigüedad en el escalafón, el Director general de Instrucción pública considera necesario dictar una resolución determinante. En este sentido se publica la *Real Orden de 7 de diciembre de 1888* regulando reglas para el ingreso en el Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios que recogemos en

los artículos siguientes. El artículo uno establece que *en los nombramientos se consignará el número con que los interesados hayan sido calificados por el Tribunal de oposiciones, el cual determinará la antigüedad y puesto que han de ocupar en el escalafón los agraciados que ingresen en el Cuerpo mediante oposición.*

El artículo dos recoge que *el Jefe superior del Cuerpo dará posesión del cargo de individuos del mismo con la fecha en que haya sido aprobada la propuesta por el Ministerio de Fomento a los que obtengan plaza.* Por último, el artículo tres regula que *los Jefes de los establecimientos a que sean adscritos los nombrados, les darán la posesión con la fecha en que se presenten a servir sus destinos, advirtiéndole que este y no el número obtenido en las oposiciones, determinará la antigüedad y lugar en el escalafón cuando se posesionen de sus empleos, después de transcurrido el tiempo legal, aunque se les hubiere concedido prórroga para verificarlo.*

En este sentido, y teniendo en cuenta lo que la *Ley de 21 de julio de 1876* establecía como regla general, *que en todos los empleos de la Administración civil se ascienda pasando de una clase a la superior inmediata*, se observa que se cumple en todos los Centros administrativos y en los Cuerpos facultativos con la excepción del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, interpretándose como una reminiscencia de lo heterogéneo del Cuerpo en su primitiva organización.

Para el debido cumplimiento de esta Ley, se exige, por lo tanto, que se suprima el turno de concurso en los ascensos del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, y que se ascienda sólo por rigurosa antigüedad como en todos los Cuerpos facultativos. Así se propone en el *Real Decreto de 20 de diciembre de 1889* estableciendo que, desde esta fecha, se darán los ascensos en todos los grados y categorías del Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios por rigurosa antigüedad.

A este respecto, se dicta la *Real Orden de 1 de febrero de 1892* derogando las *Reales órdenes de 22 de diciembre de 1884*⁹¹, la de 20 de febrero de 1885 y la de 6 de diciembre de 1888, todas ellas, relativas a los ascensos en los Cuerpos de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Minas, Montes y Agrónomos, y al de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios disponiendo que los ascensos de estos empleados facultativos no sean efectivos hasta el día que tomen posesión del nuevo destino en el Cuerpo a que pertenezcan.

Reconociendo el Gobierno las vicisitudes por las que ha pasado el Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios a consecuencia de la derogación del *Real Decreto orgánico de 12 de junio de 1867* y de la reorganización que hubo de hacerse con arreglo al *Real Decreto de 12 de febrero de 1875*, que dio lugar a algunas bajas en los miembros del Cuerpo, el *Real Decreto de 19 de junio de 1892* viene a conceder a los cesantes del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, siempre que no lo sean por sentencia ejecutoria, expediente, renuncia o morosidad, el derecho de reclamar en el plazo de dos meses su reposición, pasando a ser colocados en el último lugar de sus respectivos grados en las vacantes naturales que ocurran.

Por la *Ley de 29 de julio de 1894* se determina las condiciones de ingreso por oposición en el Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, con un artículo único que establece que para el ingreso por oposición en el Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, se exigirá una de las dos condiciones siguientes:

⁹¹ La *Real Orden de 22 de diciembre de 1884* que dictaba reglas para los ascensos en el Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, modificó esencialmente las que por práctica constante venían rigiendo en armonía con las establecidas para los funcionarios de la Administración pública en general. La experiencia ha demostrado que por tal innovación se perjudican los intereses del Tesoro público en una cifra importante, por lo que se ha hecho extensiva aquella disposición a los Cuerpos de Ingenieros de Minas, Montes y Agrónomos, y al de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, con el fin de armonizar los gravámenes que pesan sobre el Erario, y establecer la debida unanimidad en las disposiciones que regulan la materia.

Primera, *el título Académico de Archivero, Bibliotecario y Anticuario expedido en virtud de los estudios hechos en la Escuela de Diplomática.*

Segunda, *el de Licenciado en la Facultad de Filosofía y Letras siempre que se haya aprobado en dicha Escuela las asignaturas correspondientes a la Sección a que pertenece la vacante.*

Con la pretensión de definir, de nuevo, el escalafón del Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, la *Real orden de 18 de diciembre de 1894* recoge el definitivo escalafón del mencionado Cuerpo publicándolo en la Gaceta de Madrid. A su vez establece que en lo sucesivo se publique anualmente toda la clase de movimientos que se produzcan en el mismo, en virtud de vacantes, ascensos, excedencias y demás incidencias en el Cuerpo.

Veíamos como la *Real orden de 1 de febrero de 1892* que derogaba, parcialmente, la de 22 de diciembre de 1884, disponía que las consecuencias naturales de los ascensos en el Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, no serían efectivas -cualquiera que sea la fecha en que se expidan los nombramientos de los funcionarios que constituyen- hasta el día de la toma de posesión del nuevo destino que obtengan en el Cuerpo respectivo, este punto fue sustituido por la *Real orden de 5 de octubre de 1892* reflejando que en lo sucesivo los individuos del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios tomen posesión de los ascensos en la fecha de los nombramientos, produciendo los naturales efectos en lo que se refiere a la antigüedad y derechos adquiridos.

Con la publicación de la *Real Orden de 28 de octubre de 1895* se declara sin efecto la *Real orden de 1 de febrero de 1892* al proponer que los ascensos por antigüedad en el Cuerpo de Ingenieros de Caminos se entiendan conferidos desde el

día siguiente al que ocurra la vacante cuyo precepto se hará extensivo a los Ingenieros de Minas, Montes y Agrónomos y a los Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios.

Esta manifestación se recoge en la legislación como la *Real orden de 24 de diciembre de 1895* que reconoce el derecho que tiene el aspirante, D. José María Pío Tejera y Moncada para que se le conceda el derecho a ingresar en el Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, por reunir las condiciones que estipula la correspondiente legislación del *Real Decreto de 12 de octubre de 1884*. Por otra parte, esta disposición también recoge que los Catedráticos numerarios de las diversas Facultades de Universidad disfruten de igual beneficio que los Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, no existiendo fundamento legal que justifique estas excepciones, toda vez que se trata de Cuerpos de escala cerrada, donde los ascensos se conceden en virtud de rigurosa antigüedad.

3.1.3.3. Las primeras oposiciones a ingreso en el Cuerpo

Como indicábamos anteriormente el *Real Decreto de 25 de marzo de 1881*, que dio nuevo Reglamento orgánico al Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, suprimió las *plazas de gracia* y dispuso que, en adelante, para ingresar en el mencionado Cuerpo se hiciera siempre mediante oposición al que podrían presentarse los titulados por la Escuela Superior de Diplomática o los Licenciados de Filosofía y Letras siempre que hubieran aprobado en la mencionada Escuela las asignaturas correspondientes a las Secciones en las que hubiera vacante, añadiendo *un Reglamento especial determinará la forma en que han de verificarse las oposiciones y los conocimientos especiales que han de reunir los aspirantes*.

El reglamento especial, al efecto, es publicado por *Real Decreto de 26 de julio de 1881* convocando las primeras oposiciones a ingreso en el Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios⁹². Conocemos el procedimiento a seguir en el transcurso de la oposición gracias a los expedientes que se conservan tanto en el Archivo Histórico de la Universidad Complutense como en el Archivo General de la Administración en Alcalá de Henares.

Los documentos que contiene el expediente del Archivo Histórico de la Universidad Complutense⁹³, son:

- Borrador del reglamento de oposición a ingreso al Cuerpo. Su estructura esta basada en 4 Títulos; el Título I De los Aspirantes, Título II Tribunal, Título III De los ejercicios de oposición y Título IV De la propuesta.
- Oficio del Director general de Instrucción pública firmado por el claustro de profesores de la Escuela Superior de Diplomática aprobando el adjunto Reglamento con fecha 18 de mayo de 1881.
- Remisión de la convocatoria para su publicación en la Gaceta.
- El artículo de la Revista *La Reforma* que publica, dentro de la Sección Oficial, el *Reglamento para los ejercicios de oposición a las plazas de ingreso en el Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios*, firmada por el Director general de Instrucción pública, Pascual de Gayángos, con fecha de 26 de julio de 1881⁹⁴.

⁹² Sobre este aspecto en concreto vid. SANZ-PASTOR, C. *Reglamento de oposiciones al Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios en 1881. Texto y comentarios*. En *Homenaje a Federico Navarro. Miscelánea de estudios dedicados a su memoria*. Madrid, 1873, pp. 427-429.

⁹³ Archivo Histórico de la Universidad Complutense. Sección E.D. Caja 33 y legajo 42/186.

⁹⁴ *La Reforma*. Revista bisemanal de Instrucción pública de 26 de octubre de 1881. Año XI. Cuarta época, Madrid. Dentro de la Sección Oficial se publica el Reglamento para los ejercicios de oposición a las plazas de ingreso en el Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios. Firmado por el Director general de Instrucción pública, Pascual de Gayángos, con fecha de 26 de julio de 1881. Reproducimos aquí el articulado tal y como figura en le Revista:

El artículo primero establece que *para tomar parte en estas oposiciones se necesita haber obtenido el certificado de aptitud en la Escuela Superior de Diplomática, o ser Licenciado en Filosofía y Letras,*

- Actas del Tribunal.
- Actas de sesiones públicas con los datos del opositor que disiente así como, la hora y cuestiones planteadas a cada opositor.
- Listados de calificaciones.
- Papeletas elaboradas por el opositor en el examen correspondiente.
- Minuta de la propuesta al Director general de los aprobados.
- También encontramos uno de los cuestionarios⁹⁵ al que hace referencia el Reglamento bajo el título: *Cuestionario para las oposiciones a las plazas de ingreso al Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios*,

habiendo ganado y probado además en la misma Escuela las asignaturas propias de la sección a que corresponda la vacante. Dichas asignaturas son: para la sección de Archivos, Paleografía general y crítica, Latín de los tiempos y gallego, Geografía antigua y de la Edad Media, Historia de la organización administrativa y judicial de España; para la sección de Bibliotecas, añade la de Bibliografía y para la sección de Museos, Geografía antigua y de la Edad Media, Numismática y Epigrafía, Arqueología e Historia en las Bellas Artes.

El artículo segundo describe los ejercicios que serán cuatro. *El primero consistirá en contestar diez preguntas sacadas a suerte de entre ciento, que contendrán los puntos principales de las asignaturas correspondientes a la sección de Archivos, Bibliotecas o Museos a que corresponda la vacante, con arreglo a un programa que podrá ver los opositores en la secretaría del tribunal.. Si el opositor está aprobado pasará al segundo ejercicio que consistirá en una Memoria sobre un tema sacado a la suerte de entre los que los jueces tendrán dispuestos de antemano en un cuestionario referente a la asignatura especial de la sección que el tribunal designe. El tercer ejercicio consistirá en la exposición oral del sistema de clasificación científica y a la vez práctica de una biblioteca; un archivo o un museo, según la sección a la que opositen. El cuarto ejercicio, de carácter puramente práctico, consistirá en una formación de papeletas de los libros, manuscritos, códices, monedas u objetos arqueológicos que por suerte les toquen.*

Por el artículo tercero los opositores presentarán sus solicitudes documentadas en la Dirección general de Instrucción pública en el plazo de un mes desde la publicación en la Gaceta de Madrid.

El artículo cuarto dispone que, terminado el plazo de la convocatoria la dirección remitirá el expediente de oposiciones juntamente con los personales de los opositores a la Junta facultativa, para que ésta nombre el tribunal que ha de actuar en aquellas y elevar la propuesta a favor del individuo que hubiese obtenido mejor calificación.

El artículo quinto regula que, *para formar juicio, el tribunal atenderá ante todo al resultado de los actos, y sólo en igualdad de circunstancias se tendrán en cuenta las notas y premios de la carrera, las publicaciones, los títulos literarios y otros merecimientos adquiridos por el opositor antes de los actos.*

Por último el artículo seis establece el orden que se ha de seguir en las oposiciones que será el mismo que se viene haciendo en las oposiciones de Cátedras de la Escuela. También puede consultarse Reglamento firmado por el Director general de Instrucción pública Pascual de Gayángos y aprobado por el Ministro José Luis de Albareda en: "Boletín histórico" II, 1881.

formado por 200 temas, a saber; 20 temas de Latín y Romances, 20 de Paleografía general y crítica (Archivos), 20 de Geografía antigua, 20 sobre Instituciones de España, 20 de Numismática, 20 de Epigrafía, 20 de Arqueología, 20 de Bibliografía, 20 de Bellas Artes, y 20 de Paleografía (bibliotecas) que tratan aspectos sobre materia escriptoria, tintas en los Códices, escritura visigótica, signos de puntuación en los Códices, etc.

Como indicábamos anteriormente, en el Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares también encontramos documentación correspondiente a este expediente de oposición en este caso tenemos; los listados de alumnos, y, como es lógico, la documentación remitida a la Dirección General de Instrucción pública⁹⁶, así como el expediente instruido en relación con el oficio del Director de la Escuela Superior de Diplomática, Juan de Dios de la Rada y Delgado, por el que propone, para su aprobación, el proyecto de Reglamento para proveer por oposición plazas al Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios con fecha de 18 de mayo de 1881; documento que con otra tradición documental veíamos en el expediente del Archivo Histórico de la Universidad Complutense.

Por último, es conveniente señalar que también se conservan las convocatorias para Aspirantes al Cuerpo del año 1881 y 1885, en este último año se convocaron 25 plazas. La documentación y el procedimiento es muy similar a la descripción de la oposición anterior. En este caso el cuestionario *Bibliografía e Historia Literaria* esta formado por 100 temas que comprende materias desde el estudio de los Filósofos como Platón, Aristóteles; el de Bibliotecas como la Nacional, la del Escorial y sobre Historia de las distintas épocas, etc⁹⁷.

⁹⁵ Archivo Histórico de la Universidad Complutense de Madrid. Sección E. D. legajo 42/186.

⁹⁶ Archivo General de la Administración en Alcalá de Henares, sección educación y ciencia, caja 6677.

⁹⁷ En Archivo Histórico de la Universidad Complutense de Madrid. Sección Escuela de Diplomática, legajo 33/20 y Archivo General de Alcalá de Henares, sección Educación y Ciencia, caja 6678.

3.2. Los Reglamentos orgánicos del Cuerpo

3.2.1. Real Decreto de 5 de julio de 1871

De conformidad con lo propuesto por el Ministro de Fomento, Manuel Ruiz Zorrilla, se aprueba el Reglamento orgánico del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios y establecimientos de él dependientes por *Real Decreto de 5 de julio de 1871*.

Este Reglamento introdujo en la organización del Cuerpo profundas modificaciones; creó en los establecimientos las Juntas de Gobierno, el cargo de Jefe superior del Cuerpo se hizo independiente del de Director de la Biblioteca Nacional y se nombraron tres Jefes especiales, uno para cada sección. La provisión de las plazas de gracia que en el Reglamento anterior tenía lugar en todas las secciones y grados se limitó, en éste caso, a las categorías 1ª y 2ª de cada una de las secciones de Bibliotecas y Museos y por último; se determinan detalladamente las obligaciones generales de los individuos del Cuerpo y del personal administrativo⁹⁸.

La disposición se estructura de la siguiente manera: El Título primero bajo el epígrafe *La clasificación y régimen de los Archivos, Bibliotecas y Museos*, regula los Archivos históricos, las Bibliotecas públicas y los Museos arqueológicos existentes. Todos ellos bajo la dependencia de la Dirección general de Instrucción pública y a cargo del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios.

Tanto para los Archivos como para las Bibliotecas distingue tres clases: primera, segunda y tercera. Son Archivos de primera el Histórico Nacional, el Central de Alcalá de Henares, el de Simancas y todos los que en adelante dependan de la Dirección general de Instrucción pública y contengan documentos relativos a la generalidad de la Nación.

Son Archivos de segunda el de la Corona de Aragón, establecido en Barcelona; el de Valencia, el de Galicia, sito en La Coruña; el de Palma de Mallorca y cualquier otro que en lo sucesivo se creare con documentos de interés para la historia de la Nación. Por último, son de tercera el Histórico de Toledo, los de las Universidades literarias y los que se formen con documentos relativos a una localidad o institución determinada.

La clasificación que se hace de las Bibliotecas, en primera, segunda, tercera y cuarta clase, esta basada en criterios cuantificables. Son de primera las Bibliotecas que constan de más de 100.000 volúmenes entre impresos y manuscritos. De segunda las que no llegando a este número excedan de 30.000, de tercera las que pasen de 10.000 y de cuarta el resto.

Por lo que atañe a los Museos, además del Museo Arqueológico Nacional existente en Madrid que se considera de primera clase, serán de segunda o tercera los que en las provincias se organizasen según la generalidad, importancia y riqueza de sus colecciones.

⁹⁸ *Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios. En Anuario del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, 1881. Madrid: Imprenta del Colegio Nacional de Sordo-Mudos y de Ciegos, 1882, pp. 2-4.*

Los Jefes de estos establecimientos vienen regulados en el Capítulo III determinando que *será jefe en cada Archivo, Biblioteca o Museo, el empleado facultativo de más categoría en el Cuerpo, y si dos o más la tuvieren igual, el de mayor antigüedad*. Según el artículo diez corresponde a estos Jefes:

- 1- *Cumplir y hacer cumplir las leyes, decretos, y demás disposiciones relativas al servicio.*
- 2- *Ordenar el régimen interior del establecimiento.*
- 3- *Elevar al Gobierno las consultas y comunicaciones que estimaren convenientes, y evacuar los informes que se les pidiere.*
- 4- *Distribuir el personal facultativo y administrativo del establecimiento.*
- 5- *Presidir los actos oficiales que se celebren en el establecimiento.*
- 6- *Dar parte al Gobierno, al principio de cada trimestre, de los adelantos que se hicieren en los trabajos del establecimientos, y al principio de cada año remitir una Memoria sobre el estudio del mismo.*
- 7- *Disponer todo lo relativo a la adquisición del material científico y administrativo y demás concerniente a la gestión económica del establecimiento.*

El Capítulo IV recoge en el artículo trece que habrá en los establecimientos de primera clase un *Secretario* elegido por el Jefe de entre los empleados del mismo. Las obligaciones de los Secretarios, a tenor del artículo 14, serían las siguientes:

- 1- *Dar cuenta al Jefe de todos los asuntos relativos al gobierno y administración del establecimiento.*
- 2- *Desempeñar el cargo de Habilitado donde no lo hubiere especial.*

- 3- *Tener a su cargo el archivo del establecimiento, y expedir las certificaciones y copias que fueren de dar, con el visto bueno del Jefe y el sello del establecimiento.*
- 4- *Llevar la correspondencia literaria, bajo la dirección del Jefe.*
- 5- *Extender las Actas de las sesiones de la Junta de gobierno.*
- 6- *Llevar la contabilidad con arreglo a las disposiciones vigentes.*
- 7- *Llevar libros necesarios para anotar las entradas y salidas del material científico y administrativo, las ordenes y disposiciones administrativas, la correspondencia literaria, las certificaciones y copias, las catas de la Junta de Gobierno y operaciones de la contabilidad.*

El Capítulo V sobre *Las Juntas de gobierno* refleja que habrá en los establecimientos de primera clase una Junta de gobierno compuesta del Jefe, de los dos empleados que le sigan en categoría y antigüedad, y del Secretario⁹⁹. Corresponde a la Junta de Gobierno:

- 1- *Entender en todo lo relativo a las adquisiciones que hayan de hacerse en cada establecimiento con cargo a su presupuesto.*
- 2- *Consultar al Jefe en cuanto se refiere a la existencia de libros, documentos y objetos arqueológicos en el distrito donde el establecimiento radique.*
- 3- *Dar su parecer sobre la mejor inversión de las cantidades asignadas para el material administrativo.*

⁹⁹ Disposiciones posteriores, como el *Decreto de 24 de marzo de 1873*, establecen que en los Archivos, Bibliotecas, Museos y demás establecimientos de Instrucción pública, donde hubiere dichas Juntas, se autoriza con este Decreto que nombren a los empleados administrativos dependientes de los mismos.

- 4- *Evacuar los informes que la Superioridad o el Jefe pidieren*
- 5- *La Junta de gobierno se reunirá por lo menos una vez al mes.*

El Título segundo bajo el epígrafe *Del personal* estipula en el Capítulo I *Del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios*, que el personal encargado del servicio facultativo en los Archivos, Bibliotecas y Museos constituye el Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios. El Capítulo IV del mismo Título segundo, *De las obligaciones generales de los individuos del Cuerpo*, establece en el artículo 52 que son obligaciones de los individuos del Cuerpo las siguientes:

- 1- *Obedecer las ordenes del jefe y superiores inmediatos.*
- 2- *Asistir puntualmente al establecimiento donde sirvan, permaneciendo en él las horas señaladas.*
- 3- *Dar de sus trabajos las noticias periódicas que sus jefes les ordenen.*
- 4- *Velar por la custodia del departamento de su cargo.*
- 5- *Recibir y entregar por inventario las existencias de su negociado.*
- 6- *Cumplir en la parte que les concierna las disposiciones de este reglamento y las demás que se dictaren.*

El Capítulo V *Del personal administrativo* establece que en los Archivos, Bibliotecas y Museos, también habrá el correspondiente número de empleados subalternos destinados al servicio de los mismos con el nombre de porteros o vigilantes.

El Título tercero bajo el epígrafe *Del servicio de los establecimientos* recoge en el artículo 68 que en todos los establecimientos habrá inventarios e índices detallados de los libros, manuscritos, objetos arqueológicos y demás que poseyeren.

Con respecto al fomento de los Archivos, Bibliotecas y Museos, el artículo 78 reseña que contribuyen a este fomento:

- 1- *Las adquisiciones por compra o suscripción con los recursos ordinarios de cada establecimiento y los especialmente consignados a este efecto en el presupuesto general del Estado.*
- 2- *La distribución y cambio de duplicados, múltiples y descabalados entre los establecimientos.*
- 3- *Los donativos del Gobierno, corporaciones y particulares.*
- 4- *Los depósitos voluntarios de colecciones y objetos sin título oneroso para el establecimiento que lo reciba.*

Por otra parte, el artículo 79 refleja que se consignará en el presupuesto ordinario de cada establecimiento la cantidad suficiente para su fomento y conservación, distinguiéndola de la que se juzgue necesaria para los demás gastos del material. A su vez, se consignará todos los años una cantidad con destino al fomento de los Archivos, Bibliotecas y Museos expresando su distribución entre las tres secciones.

En cuanto al régimen y servicio público de los fondos que contienen los Archivos el artículo 90 expone, de manera sucinta, que *los Jefes de los Archivos generales están autorizados para facilitar a los interesados o corporaciones que de ellos lo soliciten, extractos de noticias, copias simples o certificaciones autorizadas*

de los documentos que custodian formalizándose antes de la entrega el pago de los derechos de tarifa. Sin embargo, en el caso de que el Jefe de un Archivo histórico creyere que no era conveniente expedir certificación de algún documento, consultará previamente al Gobierno.

Por último queremos señalar que una prueba de la política de fomento llevada a cabo por el Gobierno de la I República es la propuesta sobre el aumento de personal del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios por *Orden de 4 de junio de 1873*. Esta norma canaliza la aplicación de la cantidad consignada en el presupuesto vigente con la conformidad del dictamen de la Junta de Archivos, Bibliotecas y Museos y publica la planta para los establecimientos que están a cargo del expresado Cuerpo adjuntando el número total de plazas para los Archivos que será de 49 y para las Bibliotecas que será de 98.

3.2.2. Real Decreto de 25 de marzo de 1881

La creación del Museo de Arqueología Nacional y la instalación sucesiva de los Museos y colecciones provinciales de antigüedades, por una parte, y, por otra, las diferentes alteraciones que la legislación del Cuerpo de Archiveros y Bibliotecarios sufriera desde su creación en el año 1858, todo ello, hacía preciso una reforma orgánica que, dándole permanencia y estabilidad, ensanchara el campo de los conocimientos y trabajos de este sector profesional.

Como ya hemos descrito, el *Real Decreto de 12 de junio de 1867* llegó a satisfacer esta necesidad agregando la Sección de Anticuarios, recientemente creada, a las de Archiveros y Bibliotecarios; dictó reglas equitativas para la provisión de las

plazas vacantes en el Cuerpo, dando, el Gobierno, una razonable participación a los individuos que poseyeran el título profesional de la Escuela de Diplomática y reservándose el derecho de proveer algunas en Catedráticos y literatos distinguidos de larga carrera y notoria reputación literaria. Sin embargo, *el Decreto de 10 de noviembre de 1868* vino a detenerle en su progresivo desarrollo, y con esta disposición queda derogada la legislación anterior, se declararan sin efecto los nombramientos hechos con las condiciones prescritas e incluso se dieron destinos sin exigir los títulos profesionales ni aptitud notoria. Desde esta fecha hasta la publicación del *Reglamento de 5 de julio de 1871*, el Cuerpo facultativo estuvo privado de legislación y reducido a las condiciones ordinarias de cualquier dependencia del Estado donde no son necesarios conocimientos específicos. Sin embargo, este Reglamento que dicta reglas y exige condiciones, no corrige los daños del pasado llegando a considerar como superior al Decreto orgánico de 1867.

Todas estas cuestiones condicionan la publicación del *Real Decreto de 25 de marzo de 1881*, que aprueba el Reglamento orgánico del Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios y establecimientos que del mismo dependan.

El reglamento se estructura en tres títulos divididos en capítulos. El Título primero bajo el epígrafe *De la clasificación y régimen de los Archivos, Bibliotecas y Museos*, regula, en el Capítulo I, la clasificación de los establecimientos que estén bajo la dependencia de la Dirección general de Instrucción pública y a cargo del Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios. Por su parte el Capítulo II regula todo lo relativo *De la Junta facultativa de Archivos, Bibliotecas y Museos*.

El capítulo III está dedicado a *la Escuela superior de Diplomática* considerada como la especial del Cuerpo que tiene como objeto dar la instrucción

teórica y práctica necesaria para el servicio de los Archivos, Bibliotecas y Museos. Por ello, el artículo once establece que la enseñanza que se imparte en la misma estará a cargo de los miembros del Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios.

El capítulo IV *De los Jefes de los establecimientos*, expone en el artículo quince que habrá un Jefe superior del Cuerpo, el cual será a la vez Inspector general del ramo y Vicepresidente de la Junta facultativa. El artículo dieciséis añade que, además, habrá un Jefe de Sección por cada una de las tres en que se encuentra dividido el Cuerpo siendo Jefe en cada Archivo, Biblioteca o Museo el empleado facultativo de más categoría en el Cuerpo y siempre el de mayor antigüedad. Corresponde a los Jefes de los establecimientos:

- 1- Cumplir y hacer que se cumplan las leyes, decretos, reglamentos y demás disposiciones relativas al Cuerpo.*
- 2- Ordenar el régimen facultativo del establecimiento con arreglo a las instrucciones generales del Cuerpo.*
- 3- Elevar al Gobierno las consultas y comunicaciones que estimaren convenientes.*
- 4- Distribuir el personal facultativo y administrativo del establecimiento.*
- 5- Controlar a los empleados en sus trabajos, suspendiendo el sueldo en los casos de ausencia prolongada siempre dando cuenta al Gobierno.*
- 6- Dar parte, trimestralmente, al Presidente de la Junta facultativa del ramo, de los adelantos que se hicieren en los trabajos del establecimiento, expresando detalladamente el servicio que preste cada empleado.*
- 7- Remitir al mismo Presidente de la Junta todos cuantos datos sean necesarios para la formación del índice general.*

- 8- *Disponer todo lo relativo a la adquisición del material científico y administrativo, y demás concerniente a la gestión económica del establecimiento, oyendo a la Junta de gobierno en los casos que se determine.*
- 9- *Los Jefes de las Bibliotecas provinciales llevarán el registro de propiedad intelectual con arreglo a las disposiciones vigentes.*

El Capítulo V *De los Secretarios* estipula que habrá un Secretario general del Cuerpo que lo será también de la Escuela superior de Diplomática, cuyo cargo recaerá en un profesor de la misma. En función de lo que establece el artículo 23 será obligación de los Secretarios:

- 1- *Dar cuenta al Jefe de todos los asuntos relativos al gobierno y administración del establecimiento.*
- 2- *Desempeñar el cargo de Habilitado, donde no le hubiera especial.*
- 3- *Tener a su cargo el Archivo particular del establecimiento y expedir las certificaciones con el Visto bueno del Jefe y el sello del establecimiento.*
- 4- *Redactar la correspondencia literaria, que firmarán los respectivos Jefes.*
- 5- *Extender las actas de las sesiones de la Junta de gobierno.*
- 6- *Llevar la contabilidad con arreglo a las disposiciones vigentes.*
- 7- *Llevar los libros necesarios para anotar las entradas y salidas del material científico y administrativo, las órdenes y disposiciones administrativas, la correspondencia literaria, las certificaciones y copias, las actas de las Juntas de gobierno y operaciones de contabilidad.*

El Título segundo bajo el epígrafe *Del personal* regula en el Capítulo primero, *Del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios*. El artículo 55 recoge que el Jefe del Cuerpo será elegido por el Gobierno entre los Jefes de Sección, a propuesta de la Junta facultativa del ramo. El ascenso a Jefe de Sección, como cualquier otro, dentro de cada categoría se verificará por rigurosa antigüedad en la Sección respectiva. De una a otra categoría se ascenderá por concurso entre todos los de la inmediata categoría que lleven dos años cumplidos de servicio en la misma.

A considerar por el artículo 58 serán méritos preferentes para el ascenso por concurso:

- 1- *La mayor asiduidad e inteligencia en el servicio del ramo, acreditados por las visitas de inspección, por los informes de los respectivos Jefes locales, y a ser posible, por el examen de los trabajos que ha de remitir cada empleado para la formación del índice general.*
- 2- *El desempeño de comisiones y servicios extraordinarios del ramo, igualmente acreditados.*
- 3- *La publicación de obras de Diplomática, Bibliografía o Arqueología, examinadas y aprobadas por la Junta facultativa.*
- 4- *Superioridad de títulos académicos.*
- 5- *En igualdad de circunstancias, se atenderá siempre a la mayor antigüedad.*

El capítulo III *De las obligaciones de los individuos del Cuerpo* establece en el artículo 59 que serán obligaciones de los individuos del Cuerpo:

- 1- *Obedecer las ordenes del Jefe y superiores inmediatos.*
- 2- *Asistir puntualmente al establecimiento donde sirvan, permaneciendo en él durante las horas obligatorias.*
- 3- *Dar de sus trabajos las noticias periódicas que sus Jefes les ordenaren.*
- 4- *Vigilar el departamento de su cargo, debiendo poner en conocimiento del Jefe cualquier falta que notaren.*
- 5- *Recibir y entregar por inventario las existencias de su negociado.*
- 6- *Cumplir, en la parte que les concierna, las disposiciones de este reglamento y las demás que se dictaren.*

Para finalizar, el Título tercero trata *Del servicio de los establecimientos* e incluye cuatro Capítulos. El Capítulo I *De la conservación, arreglo y clasificación*, regula todo lo relacionado con las tareas llevadas a cabo en los establecimientos. El Capítulo II *De las adquisiciones y aumentos*, recoge las medidas que fomentan los establecimientos. El Capítulo III *Del régimen y servicio público* referido a las normas a seguir en la remisión de documentos y copias y las normas en el comportamiento que han de tener los miembros con respecto al sigilo profesional. Por último, el Capítulo IV sobre *Contabilidad* que recoge los aspectos que afectan a los presupuestos destinados a esta área.

3.2.3. Real Decreto de 19 de junio de 1885

En virtud del artículo 16 del *Real Decreto de 12 de octubre de 1884* que establecía que *para la ejecución de este Decreto la Dirección general de Instrucción pública debía proceder inmediatamente a la formación del correspondiente*

Reglamento, el Ministro de Fomento, pide la aprobación del *Real Decreto de 19 de junio de 1885* que regula el Reglamento del Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios redactado con arreglo a las bases que establece el Real Decreto anterior.

El reglamento consta de quince Capítulos con los siguientes contenidos: El Capítulo I *De la clasificación de los establecimientos* lleva a cabo la clasificación de los distintos tipos y clases de Archivos, Bibliotecas y Museos, que se hallan a cargo del Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios.

El Capítulo II *Del índice general* desarrolla lo recogido en el artículo doce de la *Real Orden de 12 de octubre de 1884*, estableciendo que el índice que se forme en el Ministerio de Fomento, dependerá de la Dirección de Instrucción pública y compete a su Director general nombrar un Jefe del índice general que será a su vez Inspector especial de los trabajos de catalogación de todos los establecimientos que se hallen a cargo del cuerpo. Asimismo establece como han de remitirse los trabajos a la Dirección general competente y las funciones que debe desempeñar el Jefe del Índice.

El Capítulo III *De la Junta facultativa de Archivos, Bibliotecas y Museos*¹⁰⁰. El Capítulo IV lo dedica a *La Escuela superior de Diplomática*¹⁰¹.

El Capítulo V *Del cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios*, establece, en su artículo 23, que el cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios se compondrá de un Jefe superior; Inspector general de cuerpo y

¹⁰⁰ Ver epígrafe 3.3 del presente capítulo.

¹⁰¹ Ver Capítulo V de este trabajo.

Director de la Biblioteca Nacional; un Inspector primero, segundo y tercero; tres Jefes de primer grado; cuatro Jefes de segundo grado; seis jefes de tercer grado: dieciséis Oficiales de primer grado; dieciséis Oficiales de segundo grado; veinte Oficiales de tercer grado; veintiséis Ayudantes de primer grado; ochenta Ayudantes de segundo grado y cuarenta Ayudantes de tercer grado. Según el artículo 24 será la Dirección general de Instrucción pública la competente para destinar al personal del cuerpo conforme a las plantillas formadas por la misma. Todo se hará en función de las necesidades de los establecimientos.

El Capítulo VI regula *Del ingreso en el cuerpo*. El Capítulo VII sobre *El ascenso en el Cuerpo*.

El Capítulo VIII *Del Jefe superior del cuerpo*, establece que habrá un Jefe superior del cuerpo, Inspector general, que será a la vez Director de la Biblioteca Nacional y Vicepresidente de la Junta facultativa. Las competencias atribuidas al Jefe superior del cuerpo serán:

1. *Hacer las visitas de inspección que estime conveniente.*
2. *Inspeccionar muy especialmente los trabajos del Índice general.*
3. *Dirigir la Biblioteca Nacional.*
4. *Corresponderse directamente con los Jefes de los establecimientos, para asuntos del servicio.*
5. *Avisar y suspender en caso necesario a los empleados del cuerpo, por las faltas que cometieren.*
6. *Presidir los Tribunales de oposición cuando fuere nombrado Vocal de los mismos.*

7. *Dar posesión a todos los funcionarios del cuerpo con residencia en Madrid.*

El Capítulo IX *De los Inspectores y de las visitas de inspección* describe las competencias y aspectos relativos a la figura de los Inspectores y la inspección que ha de llevarse a cabo en los establecimientos objeto de nuestra materia.

El Capítulo X *De los Jefes de los establecimientos* establece que serán Jefe en cada Archivo, Biblioteca o Museo el empleado facultativo de más categoría en cada establecimiento. Si dos o más la tuvieran igual, lo será el más antiguo. Las competencias que corresponden a los Jefes de los establecimientos están recogidas en el artículo 66, a saber:

- 1- *Cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos y demás disposiciones relativas al cuerpo.*
- 2- *Ordenar el régimen facultativo del establecimiento, con arreglo a las instrucciones generales del ramo.*
- 3- *Distribuir el personal facultativo y el administrativo donde sean varios los empleados, de modo que todos tomen parte en los trabajos de catalogación.*
- 4- *Señalar los horarios que deben estar destinados al servicio público.*
- 5- *Avisar del comportamiento de los empleados.*
- 6- *Dar parte a la Dirección general de Instrucción pública de los adelantos que en cada trimestre hicieren los trabajos del establecimiento, detallando el servicio que preste cada empleado.*
- 7- *Remitir una Memoria anual sobre el estado de la dependencia.*

- 8- *Disponer todo lo relativo a la adquisición y reparación del material científico y administrativo, oyendo a la Junta de gobierno.*
- 9- *Llevar el registro de propiedad intelectual con arreglo a las disposiciones vigentes.*

El Capítulo XI *De los Secretarios* describe la figura del Secretario general del Cuerpo, que también lo será de la Junta facultativa y de la Escuela superior de Diplomática y cuyo cargo habrá de recaer en el catedrático numerario de dicha Escuela que designe el Jefe superior del cuerpo. Serán obligaciones de los Secretarios a tenor del artículo setenta las siguientes:

- 1- *Tener a su cargo el Archivo particular del establecimiento y expedir las certificaciones y copias que se hubieren de dictar con el visto bueno del Jefe.*
- 2- *Redactar la correspondencia literaria, que firmarán los Jefes respectivos.*
- 3- *Asistir a las Juntas de gobierno con voz, pero sin voto, y extender actas.*
- 4- *Llevar la contabilidad con arreglo a las disposiciones vigentes.*
- 5- *Llevar los libros necesarios para anotar la entrada y salida del material científico y administrativo, las órdenes y disposiciones y las certificaciones y copias.*
- 6- *Desempeñar el cargo de Habilitado donde no le hubiere especial.*

El Capítulo XII *De la Junta de gobierno* prescribe que habrá en los establecimientos de primera clase una Junta de gobierno compuesta del Jefe, de los dos empleados que le siguen en categoría y antigüedad y del Secretario.

Por lo que se refiere a *las obligaciones generales de los individuos del cuerpo* vienen reguladas en el articulado del Capítulo XIII. Así el artículo setenta y cuatro establece las obligaciones de los individuos del Cuerpo en los mismos términos y contenidos que aparecieron en el *Real decreto de 25 de marzo de 1881* que aprobaba el Reglamento orgánico del Cuerpo.

El Capítulo XIV *De la conservación, arreglo y clasificación* contiene la obligatoriedad de existir en todos los establecimientos inventarios e índices de los documentos manuscritos, objetos de antigüedad y de arte que poseyeren. El Capítulo XV bajo el epígrafe, *De las adquisiciones*, refleja todo aquello que contribuye al fomento de estos establecimientos.

Por último, las disposiciones adicionales derogando todas las disposiciones de fecha anterior, siempre y cuando se opongan al cumplimiento y ejecución del presente reglamento, y las disposiciones transitorias que se dirigen a los aspirantes que tengan, en el momento de publicación del Decreto, las condiciones de idoneidad exigidas para el ascenso.

3.2.4. Real Decreto de 18 de noviembre de 1887

El *Real Decreto de 18 de noviembre de 1887* que aprueba el Reglamento del Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios centra su atención en todas las modificaciones que, en este momento, se consideran necesarias separando lo técnico, de lo administrativo y lo consultivo. Esta disposición incorpora las siguientes reformas:

- Por lo que se refiere al contenido legal del Decreto, el artículo primero señala que, *el personal encargado del servicio facultativo en los Archivos, Bibliotecas y Museos, constituye el Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios.*

- El número de Jefes, Oficiales y Ayudantes de que consta este Cuerpo será: Un jefe superior, un Inspector primero, un Inspector segundo, un Inspector tercero, tres Jefes de primer grado, cuatro jefes de segundo grado, siete Jefes de tercer grado, dieciséis Oficiales de primer grado, dieciséis Oficiales de segundo grado, veinte Oficiales de tercer grado, veintisiete Ayudantes de primer grado, setenta Ayudantes de segundo grado y sesenta de tercero. El Jefe superior del Cuerpo, que desempeñará el cargo de Director de la Biblioteca Nacional, será nombrado libremente por el Ministro de Fomento, debiendo recaer el nombramiento en persona de relevantes méritos literarios o de notoria celebridad con estudios especiales sobre Bibliografía, Archivología o Arqueología.

- Se suspende la formación del índice general de los documentos, libros y objetos que se conservan en los establecimientos del Cuerpo mandado formar por el Real Decreto de 1884.

- El artículo doce regula que, para la incorporación de un Archivo, Biblioteca o Museo arqueológico a la Dirección general de Instrucción pública, se oirá a la Junta facultativa, que informará acerca de la importancia del establecimiento, y del número de empleados que por este motivo han de ingresar en el Cuerpo.

- Será el Ministro de Fomento quien fije el número de empleados administrativos y subalternos necesarios para el mejor servicio de los Archivos, Bibliotecas y Museos, a su vez, la Dirección general de Instrucción pública canalizará la distribución de los empleados facultativos y administrativos previo informe de la Junta facultativa.
- También recoge esta disposición, en el artículo trece, que se establecerá en Toledo un Museo Arqueológico en el que se procurará reunir los objetos de carácter histórico y artístico, arábigos y judaicos.
- Por último, el artículo quince regula que la Dirección general de Instrucción pública, a petición de la Autoridad eclesiástica y previo el informe la Junta facultativa, podrá designar individuos del Cuerpo que atiendan a la organización y servicio de los Archivos, Bibliotecas y Museos de las catedrales, siempre que estos establecimientos se abran al público.

De conformidad con lo propuesto en el *Real Decreto de 18 de noviembre de 1887* se aprueba el *Reglamento del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios y de los Establecimientos que de él dependen* estructurándolo en las siguientes partes:

El Capítulo I bajo el epígrafe *De la clasificación de los establecimientos* establece en el artículo uno que los Archivos, Bibliotecas públicas y los Museos arqueológicos que se hallen a cargo del Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios se dividen en tres clases. Son Archivos de primera clase: El Histórico Nacional en Madrid, el Central en Alcalá de Henares y el Central en Simancas.

Son Archivos de segunda clase: El de la Corona de Aragón en Barcelona, el del antiguo Reino de Valencia en la ciudad del mismo nombre, el de Galicia en La Coruña, el de Mallorca en Palma. Son Archivos de tercera clase: Los Universitarios de Madrid, Salamanca, Barcelona y Zaragoza.

A partir de esta clasificación, los Archivos que se formen, en adelante, se atenderán a las circunstancias siguientes:

1. Cuando los documentos que contengan se refieran a la Nación en general y su valor histórico y su número sean de gran importancia y abracen las principales épocas de la Historia patria, serán de primera clase.

2. Cuando los documentos pertenezcan a uno solo de los antiguos Reinos de España y reúnan las circunstancias enumeradas para los de primera clase en la proporción correspondiente, serán de segunda clase.

3. Cuando los documentos pertenezcan a una provincia, una institución o una localidad, serán de tercera clase.

El artículo tres establece la clasificación de las Bibliotecas en primera clase, como; la Nacional, la de la Universidad de Madrid y la Universitaria de Barcelona. De segunda clase, las de Salamanca, Toledo, Sevilla, Valencia, Palma, Santiago, Cádiz, Zaragoza, Oviedo, Valladolid, Granada, Huesca y la del Ministerio de Fomento, y de tercera clase, las de Orihuela, Canarias, Orense, Alicante, Burgos, Cáceres, Córdoba, Murcia, Castellón, Mahón, Lérida, Gerona, León y Teruel y Escuela de Diplomática. Esta clasificación está fijada en función de las reglas siguientes; cuando su caudal literario exceda de 100.000 volúmenes, serán de primera clase; cuando exceda de 25.000 volúmenes, serán de segunda, y cuando no llegue a este número, serán de tercera.

La clasificación que el Reglamento hace de los Museos es el siguiente: El Arqueológico Nacional de primera clase; de segunda clase, el de Reproducciones artísticas y el Arqueológico de Tarragona y por último; los de tercera clase, los de Sevilla, Barcelona, Granada, Valladolid y los de otras provincias que se vayan incorporando.

El Capítulo II titulado *De la Junta facultativa del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios* regula la composición y las competencias atribuidas a la Junta.

El Capítulo III sobre *De la Escuela superior de Diplomática*, establece que habrá en Madrid una Escuela superior de Diplomática que tendrá por objeto dar la instrucción teórica y práctica necesaria para el servicio de los Archivos, Bibliotecas y Museos. Esta Escuela se regirá por un reglamento especial. Por lo que se refiere a las vacantes de cátedras de esta Escuela se proveerán por oposición. Los catedráticos de esta Escuela se regirán por la ley de Instrucción pública y no podrán ser individuos del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios.

El Capítulo VII *Del Jefe superior del Cuerpo* regula todas las competencias que recaen sobre esta figura, a saber:

1. *Hacer las visitas de inspección que le sean encargadas por el Ministro o por el Director general.*
2. *Dirigir la Biblioteca Nacional.*
3. *Entenderse directamente con los Jefes de los establecimientos del Cuerpo.*

4. *Controlar las faltas de los funcionarios y proponer a la Dirección general la imposición de mayores penas por faltas graves.*
5. *Presidir la Junta facultativa cuando no lo haga el Director general de Instrucción pública.*
6. *Dar posesión a todos los individuos del Cuerpo residentes en Madrid.*
7. *Velar por el cumplimiento de las ordenes emanadas de la superioridad.*

El Capítulo VIII *De los Inspectores y de las visitas de inspección* regula todo lo relativo a las funciones que tienen estos miembros. El Capítulo IX *De los Jefes de los establecimientos* estipula en el artículo cuarenta y nueve que será Jefe en cada Archivo, Biblioteca o Museo el empleado facultativo de mayor categoría y, en igualdad de categoría, el más antiguo, si otro de ella no recibiera comisión especial para desempeñar el cargo. Corresponde a los Jefes de los establecimientos:

1. *Cumplir y hacer que se cumplan todas las disposiciones vigentes y ordenes superiores referentes al ramo.*
2. *Distribuir el personal correspondiente al establecimiento, del modo que mejor convenga al servicio.*
3. *Señalar las horas en que el establecimiento ha de estar abierto al público.*
4. *Amonestar a los empleados que faltaren a sus deberes pudiéndoles suspender el sueldo por un tiempo determinado, dando cuenta al Director general.*
5. *Dar parte trimestral a la Junta facultativa de los trabajos hechos en el establecimiento, expresando detalladamente de los realizados por cada individuo del Cuerpo.*

6. *Remitir cada año a la Dirección general una Memoria sobre el estado de la dependencia.*
7. *Disponer todo lo relativo a la adquisición y reparación del material científico y administrativo, oyendo a la Junta de gobierno del establecimiento.*
8. *Llevar el registro de la propiedad intelectual con arreglo a las disposiciones vigentes.*

El Capítulo X recoge las figuras *Del Secretario general y los Secretarios de los establecimientos* y establece que habrá un Secretario general del Cuerpo, de la categoría de Oficial o Jefe, nombrado por el Director general de Instrucción pública. Para las funciones que desempeñe le auxiliarán un Oficial y dos Ayudantes. El artículo sesenta refleja las competencias que corresponde a los Secretarios de establecimientos y son:

1. *Tener a su cargo el archivo de estos y expedir las certificaciones y copias que se hubieren de dar, con el visto bueno del Jefe.*
2. *Abrir y redactar la correspondencia literaria y oficial.*
3. *Formar parte de las Juntas de gobierno, en las que funcionarán como Secretarios teniendo voz y voto y extender el acta de las mismas.*
4. *Llevar la contabilidad con arreglo a las disposiciones vigentes*
5. *Llevar los libros de entrada y salida del material científico y administrativo de ordenes de certificaciones y copias.*
6. *Desempeñar el cargo de Habilitado donde no lo hubiere especial.*

El Capítulo XI sobre *Las Juntas de gobierno* regula cómo cada establecimiento de primera clase tendrá una Junta de gobierno compuesta del Jefe, Presidente; de los dos empleados facultativos de mayor categoría y antigüedad, y del Secretario¹⁰².

Corresponde a la Junta de gobierno:

1. *Asesorar al Jefe del establecimiento en todo lo relativo a las adquisiciones que se deban hacer.*
2. *Proponerle las medidas y reformas que crea necesarias al buen régimen del establecimiento.*
3. *Consultar al Jefe en cuanto se refiera a la existencia de documentos, libros y objetos arqueológicos en el distrito donde el establecimiento radique proporcionando medios para su adquisición.*
4. *Informar al Jefe sobre la distribución de la cantidad presupuesta para material*
5. *Evacuar los informes que la Superioridad o el Jefe del establecimiento pidiesen.*

El Capítulo XII recoge *Las obligaciones generales de los individuos del Cuerpo*, a saber:

1. *Asistir puntualmente al establecimiento donde sirvan, permaneciendo en él las horas reglamentarias y dedicando el tiempo necesario a los trabajos que les encomendara el Jefe.*

¹⁰² En el caso de la Biblioteca de la Universidad Central, esta Junta se compondrá del Jefe, de los Jefes locales de las cinco dependencias que la forman y del Secretario.

2. *Vigilar el departamento comunicando al Jefe cualquier falta que surgiere.*
3. *Recibir y entregar por inventario las existencias de su departamento.*
4. *Cumplir todos los deberes que les impone este reglamento.*

Por su parte los artículos 64 y 65 establecen las faltas y penas, respectivamente, que atañen a los miembros del Cuerpo.

Por último el Capítulo XIII *De los premios*, y el Capítulo XIV *Del régimen de los establecimientos*. Este último Capítulo obliga a los establecimientos a tener inventarios e índices circunstanciados de los libros, documentos, manuscritos, impresos y objetos arqueológicos y artísticos que poseyeren. Todos estos trabajos se llevarán a cabo conforme a las instrucciones determinadas por la Junta facultativa. Los objetos custodiados llevarán el sello especial del establecimiento a que pertenezcan.

3.3. La Junta Consultiva del Cuerpo

3.3.1. La Junta Superior Directiva de Archivos y Bibliotecas del Reino

Por *Real Decreto de 17 de julio de 1858* se crea la Junta superior directiva de Archivos y Bibliotecas del Reino¹⁰³ compuesta de un Presidente y ocho Vocales

¹⁰³ Podemos considerar como antecedente la Junta superior directiva de Archivos del Ministerio de Gracia y Justicia creada por *Decreto de 5 de noviembre de 1847*. La redacción del decreto nos muestra que la Junta podría dedicarse al reconocimiento y arreglo de los archivos sometidos a su dirección, exponiendo el resultado de sus trabajos y proponiendo la organización y mejoras que creyere convenientes. Posteriormente la *Orden de 6 de noviembre de 1847* establece reglas para la organización de la misma desarrollando las tareas que ha de abarcar: Arreglo y organización de los

nombrados por el Gobierno. Como individuos natos están los Directores de la Escuela de Diplomática y de la Biblioteca Nacional. Las funciones de Secretario recaerán en un vocal miembro del Cuerpo de Archivos y Bibliotecas. A partir del *Real Decreto de 11 de diciembre de 1862*, el Director general de Instrucción pública pasará a encargarse de la Presidencia de esta Junta superior¹⁰⁴. Las atribuciones de esta Junta son:

1. *Consultar al Gobierno acerca del arreglo y clasificación de los Archivos y Bibliotecas del Reino y régimen más conveniente para cada uno de ellos.*
2. *Dar su dictamen en todo lo concerniente a la adquisición y cambio de libros y documentos.*
3. *Examinar y clasificar los antecedentes y méritos de los empleados, elevando al Gobierno el proyecto de Escalafón general.*
4. *Proponer para la provisión de plazas vacantes en la forma que determinare el Reglamento así como los premios o correcciones que por su conducta merecieren los empleados.*
5. *Expone al Gobierno las reformas que estimare convenientes para el mejor servicio de estos ramos.*

archivos, clasificación general de todos los documentos que encierran los archivos, planta y presupuesto del archivo general que propone y dictamen o juicio razonado acerca de las colecciones y documentos.

¹⁰⁴Véase ESCOLAR, Hipólito. *Historia de las bibliotecas*. Madrid: Fundación Sánchez Ruipérez, 1985, p. 442. Describe cómo la Junta Superior Directiva de Archivos y Bibliotecas del Reino es el origen de las posteriores Juntas consultiva, facultativa, técnica y asesora que prácticamente sin interrupción, aunque con facultades cada vez menores, han llegado hasta nuestros días. Se le confiaba el asesoramiento al gobierno sobre el régimen más conveniente para los establecimientos, el dictamen

6. *Examinar los estados en que periódicamente los Jefes de los Archivos y Bibliotecas habrán de dar cuenta de los trabajos emprendidos en estas oficinas.*
7. *Informar acerca de cualquier asunto sobre el que el Gobierno tuviera a bien consultarla.*

3.3.2. La Junta Consultiva de Archivos, Bibliotecas y Museos

Creada en el año 1858 bajo el nombre de *Junta directiva de Archivos y Bibliotecas del Reino* y dotada con las atribuciones que reclamaba de forma perentoria el servicio facultativo que había de prestarse en establecimientos destinados a ser poderosos auxiliares de la pública enseñanza; con el cambio de denominación, la *Junta Consultiva de Archivos, Bibliotecas y Museos*, sigue contribuyendo a cimentar sólidamente la estabilidad *con que se premian largos y reconocidos servicios* en los individuos que componen el Cuerpo de Bibliotecarios, Archiveros y Anticuarios.

El *Real Decreto de 12 de junio de 1867* que organiza las Bibliotecas públicas, los Archivos generales y Museos arqueológicos, destina los cinco últimos artículos (del 33 al 37) para regular todo lo relativo a la *Junta Consultiva del cuerpo*.

En primer lugar describe la composición de la Junta formada por un Presidente, un Secretario y siete Vocales. La Presidencia recaerá en el Director general de Instrucción pública; el Secretario será el Oficial de Secretaría encargado

en la adquisición y cambio de libros, etc. La presidencia de la Junta recayó en el historiador Modesto Lafuente, que era director de la Escuela de Diplomática.

del negociado del ramo. De los siete Vocales que la forman, tres serán natos, a saber: el Director de la Biblioteca Nacional, jefe superior del cuerpo, con el carácter de Vicepresidente; el Director especial jefe de la Sección de manuscritos que esté destinado a dicha Biblioteca, y el del Museo Nacional de Arqueología; y cuatro electivos, uno de ellos miembro numerario de la Real Academia de la Historia, otro Catedrático de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Central, y dos elegidos libremente entre personas de reconocida competencia en el ramo. Las atribuciones encomendadas a la Junta son las siguientes:

- 1- Consultar al Gobierno acerca del establecimiento, incorporación o clasificación de Bibliotecas, Archivos y Museos.*
- 2- Proponer sus reglamentos generales o especiales, y las instrucciones para su mejor servicio.*
- 3- Dar su dictamen en todo lo concerniente a adquisiciones y cambios de libros, documentos y antigüedades etc.*
- 4- Examinar y clasificar los antecedentes y méritos de los empleados.*
- 5- Examinar los estados y memorias en que los jefes de los establecimientos den cuenta de los trabajos efectuados en ellos.*
- 6- Por último, informar acerca de cualquier asunto que tenga a bien consultarle el Gobierno.*

Los Vocales de la Junta consultiva girarán las visitas de inspección, ordinarias y extraordinarias que les delegue la superioridad. Los reglamentos determinarán la forma y condiciones del servicio de inspecciones de las Bibliotecas, Archivos y Museos.

A partir de la entrada en vigor de este Decreto, el Gobierno, oída la Junta consultiva, publicará a la mayor brevedad posible, los reglamentos e instrucciones necesarias para el régimen gubernativo, administrativo y económico de las Bibliotecas, Archivos y Museos, y el reglamento de la Escuela de Diplomática.

Por otra parte, el *Real Decreto de 5 de julio 1871* dentro del Título primero, regula la *Junta Consultiva de Archivos, Bibliotecas y Museos* en el Capítulo II. El articulado de este Capítulo recoge la composición de la misma, donde observamos, que difiere bastante con respecto a la composición que contenía el *Real Decreto de 12 de junio de 1867*.

Será Presidente, el Director general de Instrucción pública y Vicepresidente, el Jefe del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios. También formarán parte, el Director de la Escuela de Diplomática, y en los casos de ser Vocal¹⁰⁵ por otro concepto, delegará en uno de los profesores de la misma, los Jefes de sección del Cuerpo que residan en Madrid, un individuo de número de la Academia de la Historia, uno de la de San Fernando, un Catedrático de la Facultad de Filosofía y Letras, el Jefe de Administración que lo sea del Negociado de Archivos, Bibliotecas y Museos en el Ministerio de Fomento, un Secretario, que lo será el general del Cuerpo y de la Escuela de Diplomática. Las atribuciones de la Junta serán las siguientes:

- 1- *Evacuar las consultas que el Gobierno le pidiere.*
- 2- *Formar periódicamente el anuario de los establecimientos a cargo del Cuerpo.*

¹⁰⁵ El cargo de Vocal de la Junta es honorífico y gratuito, a diferencia del cargo de Secretario que es retribuido.

- 3- *Elevar en terna las propuestas para el ingreso y ascenso por concurso en el Cuerpo.*
- 4- *Redactar los programas para los premios literarios.*
- 5- *Instruir los expedientes gubernativos acerca de la separación de los empleados del ramo.*
- 6- *Proponer cuantos medios le sugiera su celo para la formación de índices y catálogos.*
- 7- *Redactar las instrucciones facultativas para la formación de Índices y Catálogos.*
- 8- *Acordar los programas para los concursos a premios literarios entre los individuos del Cuerpo.*
- 9- *La Junta consultiva se reunirá ordinariamente una vez al mes.*

A los cargos y atribuciones de la actual Junta se añaden dos nuevas atribuciones importantes:

- 1- Formar periódicamente el Anuario de los Establecimientos a cargo del Cuerpo
- 2- Redactar las instrucciones facultativas para la formación de Índices y Catálogos.

Sobre la *Junta Consultiva de Archivos, Bibliotecas y Museos*, el Anuario del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios de 1881 describe que el *Reglamento de 5 de julio de 1871* introdujo en la constitución y atribuciones de la Junta las modificaciones siguientes:

Dar cabida nuevamente en ella, al Director de la Escuela de Diplomática.

Eliminar los vocales libremente elegidos entre personas de reconocida competencia en el ramo.

Nombrar Secretario al general del Cuerpo y de la Escuela.

Nombrar vocales al Jefe del Negociado del ramo, juntamente con los Jefes de Sección del Cuerpo¹⁰⁶.

3.3.3. La Junta Facultativa de Bibliotecas, Archivos y Museos

El preámbulo al *Real Decreto de 16 de abril de 1875*, de creación de la Junta Facultativa, expone lo siguiente:

- Cumplida la misión propuesta en estos años, la Junta va necesitando, progresivamente, cambios, no sólo, por las múltiples atribuciones consultivas adquiridas a medida que el personal iba aumentando, sino también, por otras competencias derivadas del desarrollo del Cuerpo.
- Ni el *Decreto de 8 de mayo de 1859*, donde se daban las bases para la organización de los Archivos y de las Bibliotecas públicas del Reino, ni el Reglamento de la Escuela de Diplomática, publicado en el mismo mes del año 1860, ni siquiera la necesidad que en tan largo espacio de tiempo reclamaba perentoriamente una organización homogénea y facultativa en

¹⁰⁶ *Junta Consultiva de Archivos, Bibliotecas y Museos*. “Anuario del Cuerpo Facultativo de Archivos, Bibliotecas y Museos”, 1881. Madrid: Imprenta del Colegio Nacional de Sordo-Mudos y de Ciegos, 1882, p. 14.

los trabajos de los establecimientos, han sido suficientes para activar la publicación de las instrucciones prácticas del servicio facultativo, justificando así la inacción de algunos empleados del ramo y perjudicando el orden y unidad que debe reinar en los trabajos facultativos de todos y cada uno de los establecimientos.

- Es pues, de urgente necesidad fijar expresamente las atribuciones de la Junta para que sus trabajos sean rigurosos y para juzgar, con la debida competencia, los servicios y méritos. En este sentido se considera indispensable en la Junta, tal y como hoy está constituida, la representación de los oficiales del Cuerpo que, por sus deberes facultativos, pueden contribuir a la acertada apreciación de los merecimientos adquiridos en el servicio del ramo por todos los empleados facultativos que trabajan para su consolidación y desarrollo. Será de gran utilidad su cooperación para redactar con acierto las instrucciones del Cuerpo, las cuales, no solamente servirán para impulsar los trabajos, sino que darán homogeneidad a los índices de los establecimientos y garantía al Gobierno de que los empleados a quienes otorga las ventajas propias de los individuos de un Cuerpo Facultativo se hacen acreedores a conservarlas y saben buscar otras mayores.

- El Ministro, que suscribe, entiende que debe darse una nueva misión a la Junta, la de proponer la manera más conveniente de plantear un índice general de todos los libros manuscritos y objetos de antigüedad confiados a la custodia del Cuerpo, para que los investigadores encuentren una guía breve y segura para adquirir los datos que deseen. En la ejecución de un índice general, el Gobierno ha de contar con la aplicación de los individuos del Cuerpo de Bibliotecarios, Archivos y Museos, para conseguir el fin establecido.

- Por otra parte, se constata que la Junta de Bibliotecarios, Archivos y Museos, con respecto a los concursos, es un Jurado para exponer, comparar y apreciar los merecimientos de los individuos del Cuerpo, y sus dictámenes tendrán la fuerza y vigor que tanto importa en juicios de esta naturaleza. Como mayor garantía se pasarán las propuestas de la Junta, cuando los interesados lo exijan, a la Sección correspondiente del Consejo de Instrucción pública, que deberá fortalecerlos con su superior aprobación, o modificarlos razonando las causas de su acuerdo.

En base a estas justificaciones preliminares se dicta *el Real Decreto de 16 de abril de 1875* por el que queda disuelta la *Junta consultiva de Archivos, Bibliotecas y Museos*, reorganizándose bajo la denominación de *Junta facultativa de Bibliotecas, Archivos y Museos de antigüedades*.

Regulado en los artículos uno y dos del Decreto, la disolución y reorganización de la nueva Junta, respectivamente, el artículo tres establece su composición.; estableciendo que compondrán la Junta facultativa de Bibliotecas, Archivos y Museos; el Director general de Instrucción pública, que será el Presidente; el Jefe del Cuerpo, como Vicepresidente; los Jefes especiales de las tres Secciones; un Oficial de cada una de las mismas; tres individuos de libre elección del Gobierno, designados entre personas de reconocida competencia en el ramo; y un Secretario con voz y voto, que será el Oficial del Ministerio de Fomento a cuyo cargo esté el Negociado de Bibliotecas, Archivos y Museos. Los nombramientos de Vocales de la Junta recaerán necesariamente en individuos que tengan su residencia en Madrid. Se establece que la Junta se reunirá por lo menos dos veces al mes. Las atribuciones de la Junta facultativa de Bibliotecas, Archivos y Museos son:

- 1- *Evacuar las consultas que el Gobierno le pidiere.*
- 2- *Proponer el establecimiento, incorporación y clasificación de las Bibliotecas, Archivos y Museos que deban pertenecer al Cuerpo.*

- 3- *Redactar los programas para los premios que se establezcan.*
- 4- *Proponer los reglamentos generales del Cuerpo, los especiales de los establecimientos, y las instrucciones para los trabajos facultativos.*
- 5- *Proponer la manera más conveniente de establecer en Madrid un índice general de los documentos, libros y objetos que se custodien en las Biblioteca, Archivos y Museos arqueológicos que el Estado sostiene y fomenta.*
- 6- *Elevar en terna las propuestas para el ingreso y ascenso por concurso en el Cuerpo.*
- 7- *Proponer por cuantos medios le sugieran, el aumento de las colecciones de las Bibliotecas, Archivos y Museos.*
- 8- *Informar en los expedientes gubernativos instruidos para la suspensión o separación de los empleados del ramo.*
- 9- *Examinar las Memorias y los estados que los Jefes de los establecimientos deben remitir periódicamente a la Dirección, redactando el Anuario correspondiente.*

Estas competencias de la Junta son, con escasa diferencia, las ya repetidas en disposiciones anteriores introduciéndose una nueva, la de proponer la manera más conveniente de establecer en Madrid un índice general de los documentos, libros y objetos que se custodian en los Archivos, Bibliotecas y Museos Arqueológicos que el Estado sostiene y fomenta¹⁰⁷.

¹⁰⁷ En el estudio de la Junta es aconsejable consultar VIGNAU Y BALLESTER, Vicente. *Junta Facultativa de Archivos, Bibliotecas y Museos*. "Anuario del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos" 1881. Op. cit. pp.

Posteriormente, el *Real Decreto de 25 de marzo de 1881* en el Título primero, Capítulo II regula todo lo relativo *De la Junta facultativa de Archivos, Bibliotecas y Museos* Componen esta Junta:

- 1- *El Director de Instrucción pública como presidente.*
- 2- *El Jefe del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, como vicepresidente.*
- 3- *El Director de la Escuela de Diplomática, y cuando sea vocal por otro concepto, uno de los profesores de la misma.*
- 4- *Los Jefes de Sección que estén adscritos a establecimientos sitos en esta Corte, y en caso de residir alguno de ellos fuera, le sustituirá el Jefe de la Sección más antiguo, que tenga su destino en Madrid.*
- 5- *Un miembro de número de la Real Academia de la Historia.*
- 6- *Tres miembros de libre elección del Gobierno, designados entre personas de reconocida competencia del ramo.*
- 7- *Un Secretario, que lo será el general del Cuerpo y de la Escuela de Diplomática.*
- 8- *Por último destacar, que el cargo de vocal de la Junta es honorífico y gratuito.*

Son atribuciones de la misma Junta:

- 1- *Evacuar las consultas que el Gobierno le pidiere.*
- 2- *Proponer el establecimiento, incorporación y clasificación de los Archivos, Bibliotecas y Museos que deban pertenecer al Cuerpo.*
- 3- *Redactar los programas para los premios que se establezcan.*

- 4- *Proponer los reglamentos generales del Cuerpo, los especiales de los establecimientos y las instrucciones para los trabajos facultativos.*
- 5- *Proponer la manera más conveniente de establecer en Madrid un índice general de los libros, documentos y objetos que se custodian en los Archivos, Bibliotecas y Museos Arqueológicos que el Estado sostiene y fomenta.*
- 6- *Elevar las propuestas para los ascensos por concurso en el Cuerpo, y nombrar Tribunal para los ejercicios de oposición en el ingreso.*
- 7- *Proponer, por cuantos medios le sugieren, el aumento de las colecciones de los Archivos, Bibliotecas y Museos.*
- 8- *Informar en los expedientes gubernativos instruidos para la suspensión o separación de los empleados del ramo, así como en los de traslación de los mismos de un establecimiento a otro, o de una a otra Sección.*
- 9- *Examinar las Memorias y los estados que los Jefes de los establecimientos deben remitir periódicamente a la Dirección, redactando con presencia de ellos el Anuario correspondiente, en el que han de constar los servicios prestados por el Cuerpo en los establecimientos que están a su cargo¹⁰⁸.*
- 10- *Formar las plantillas de los establecimientos, teniendo presentes las necesidades de los mismos, su concurrencia media, la riqueza de sus colecciones y la suma de sus volúmenes, documentos u objetos arqueológicos o artísticos.*

¹⁰⁸ En efecto, el proceso de elaboración de los *Anuarios del Cuerpo facultativo* partía de la petición, por parte de Junta facultativa, del estado de sus centros. En el Archivo Histórico de la Universidad Complutense encontramos el expediente con la signatura 33/88 que incluye un oficio de la Secretaría de la Junta facultativa de Archivos, Bibliotecas y Museos remitiendo, en este caso, al Bibliotecario de la Escuela de Diplomática las nuevas bases acordadas, por dicha Junta, para la publicación del Anuario del Cuerpo de 1882 y otro oficio solicitando Memoria de la Escuela desde 1 de enero de 1883

Por otra parte, el Capítulo III del *Real Decreto de 19 de junio de 1885* regula *De la Junta facultativa de Archivos, Bibliotecas y Museos*, y en el artículo 17 recoge la composición de la Junta que ya había sido regulada por el Reglamento aprobado el 25 de marzo de 1881. Esta disposición introduce algunas modificaciones en la composición al integrar miembros que en el año 1881 no existían, es el caso del Jefe del Índice general, el Consejero de Instrucción pública, y también el del Director de la Biblioteca Nacional que ocupará la Vicepresidencia de la Junta. Las competencias atribuidas a la Junta facultativa de Archivos, Bibliotecas y Museos, según el artículo 18, son las siguientes:

1. *Proponer por cuantos medios le sugieran el aumento de las colecciones de los Archivos de las Bibliotecas y de los Museos.*
2. *Acordar las instrucciones para los trabajos facultativos.*
3. *Redactar el anuario del cuerpo, en vista de los datos que los Jefes de los establecimientos deben enviar a la Dirección general.*
4. *Informar los expedientes incoados para la separación de los individuos del cuerpo.*
5. *Redactar las hojas de méritos de los Oficiales, que han de remitirse en los concursos al Consejo de Instrucción pública.*
6. *Formar con las listas de obras duplicadas, múltiples o descabaladas que le fueren remitidas por el Jefe del Índice, una general compendiada, para que circule entre todos los del cuerpo, a fin de facilitar los cambios y remisiones de incompletas que propondrá a la Dirección general.*
7. *Informar a esta acerca de las permutas de obras con Bibliotecas de corporaciones y de particulares, nacionales o extranjeras, conforme a las disposiciones más adelante enumeradas.*

a 31 de diciembre para incluirla en el Anuario del Cuerpo que no llegó a publicarse, tal y como deja constancia el legajo 36/91.

8. *Proponer a la Dirección general los individuos del Cuerpo que han de formar parte como Vocales en los Tribunales de oposiciones las plazas de Oficiales y Aspirantes.*
9. *Informar a la misma Dirección respecto de los establecimientos que han de incorporarse al Cuerpo y acerca de los demás asuntos que le fueren encomendados.*

Por último, el artículo 19 establece que el Secretario de la Junta deberá asistir a las sesiones de ésta y extender y firmar, junto con el Presidente, las actas de las mismas, así como certificar todos los documentos que de la Junta emanen.

El Reglamento aprobado por *Real Decreto de 18 de noviembre de 1887* recoge, en el Capítulo II, *De la Junta facultativa del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios* la composición y las competencias atribuidas a la Junta. Por ello, el artículo once establece que el Ministro, a propuesta de la Dirección general de Instrucción pública, nombrará los dos Vocales Académicos y los cinco individuos del Cuerpo que forman parte de la Junta según recoge el artículo noveno del Real decreto de esta fecha. El cargo de Vocal de esta Junta es honorífico y gratuito. El Secretario de la Junta deberá asistir a las sesiones del órgano colegiado, extender las actas y firmarlas, en unión del Presidente, así como, certificar todos los documentos que de la Junta emanen. Según el artículo trece corresponde a la Junta:

1. *Proponer el aumento de las colecciones de los Archivos, de las Bibliotecas y de los Museos.*
2. *Acordar las Instrucciones para los trabajos facultativos.*
3. *Redactar el Anuario del Cuerpo en vista de los datos que los Jefes de los establecimientos deben enviar a la misma Junta y a la Dirección general.*
4. *Informar los expedientes incoados para la separación de los individuos del Cuerpo.*

5. *Redactar las hojas de méritos de los individuos del Cuerpo que han de remitirse en los concursos al Ministro de Fomento.*
6. *Formar con las listas de obras duplicadas, múltiples o descabaladas, que le fueren remitidas por los Jefes de los establecimientos una general compendiada para circularla entre todos los establecimientos del Cuerpo, a fin de facilitar los cambios y remisiones de obras incompletas, que propondrá a la Dirección general.*
7. *Informar a ésta acerca de las permutas de obras con bibliotecas de corporaciones y de particulares, nacionales o extranjeras y sobre la adquisición de bibliotecas y colecciones por el Ministerio del Cuerpo.*
8. *Resolver las cuestiones técnicas que le sean consultadas por la Dirección general del ramo y por los Jefes de los establecimientos del Cuerpo.*

3.4. Incorporación de los Establecimientos documentarios públicos y su personal al Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios bajo la dependencia de la Dirección general de Instrucción pública.

A partir de la adscripción del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios a la Dirección general de Instrucción pública por *Real Decreto de 17 de julio de 1858* se ha ido centralizando, en esta Dirección general, el control y funcionamiento de los Archivos, Bibliotecas y Museos de carácter público.

Por ello el *Real Decreto de 12 de junio de 1867*, como ya hemos visto, estipula en el artículo cinco que *las Bibliotecas públicas, los Archivos generales y los Museos de antigüedades o arqueológicos estarán bajo la dependencia de la Dirección general de Instrucción pública.*

También se otorga a esta Dirección general la competencia de distribuir el personal del Cuerpo Facultativo por los distintos establecimientos. Así la *Orden de 8 de junio de 1870* aprueba la plantilla para los establecimientos que están a cargo del Cuerpo de Bibliotecarios, Archiveros y Anticuarios, autorizando a la Dirección general de Instrucción pública, previo dictamen de la Junta consultiva de Bibliotecas, Archivos y Museos, para integrar el personal con arreglo a las expresadas plantillas, pudiendo alterar el número parcial de Jefes, Oficiales y Ayudantes, señalados a cada establecimiento y siempre que el total de las tres clases, sea el que la planta determine. La plantilla a la que estamos haciendo referencia, refleja el número total y específico del personal del Cuerpo en cada una de las Bibliotecas y Archivos Públicos¹⁰⁹.

3.4.1. Establecimientos ministeriales

Con el *Real Decreto de 10 de enero de 1884* se dispone que el Archivo del Ministerio de Fomento se incorpore a la Dirección general de Instrucción pública, y que los empleados del referido Archivo pasen al escalafón de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, *todo ello en virtud de lo dispuesto en los artículos 6 y 54 del reglamento orgánico del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios aprobado el 25 de marzo de 1881, y conforme al dictamen emitido por la Junta facultativa del ramo.*

Posteriormente, en cumplimiento de los artículos 6 y 12 del *Real Decreto de 18 de noviembre de 1887*, se publica el *Real decreto de 9 de diciembre de 1887*, en virtud del expediente instruido por la Dirección general de Instrucción pública y con

¹⁰⁹ Podemos observar que el número de personas que integran la plantilla de las Bibliotecas es el doble que el que componen los Archivos. También observamos que el nivel de Ayudantes es el que más personal ocupa, tanto en los Archivos como en la Bibliotecas.

el informe favorable de la Junta facultativa de este Cuerpo, disponiendo que *el Archivo del Ministerio de Fomento quede agregado a la Dirección de Instrucción pública y a cargo del Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios*¹¹⁰.

Esta incorporación conlleva el aumento del personal en la planta del citado Cuerpo. También y como apunta el artículo tercero se aumentan la planta del personal administrativo y subalterno de dicho Cuerpo, al igual que una plaza de Escribiente. A su vez se incrementa la dotación para material y gastos del Archivo.

Como podemos observar uno de los requisitos necesarios para la incorporación de los establecimientos a la Dirección general de Instrucción pública y su personal al Cuerpo Facultativo es el previo informe de la Junta Facultativa. Así lo recogen algunas disposiciones como las siguientes:

- El *Real Decreto de 12 de octubre de 1884* en el artículo 14 refleja que *para la incorporación de los Archivos, Bibliotecas o Museo arqueológico a la Dirección general de Instrucción pública, se oirá a la Junta facultativa y al Consejo de Instrucción pública, ingresando con la categoría que les corresponda.*
- Por su parte, el artículo 12 del *Real Decreto de 18 de noviembre de 1887* al decir que *la Junta informará acerca de la importancia del establecimiento y del número de empleados que han de ingresar en el Cuerpo sin que puedan ingresar con categoría superior a la de Jefe de tercer grado.*

¹¹⁰ Consúltase MORLESIN y SOTO, Anastasio. *Necesidad y conveniencia de la incorporación de los Archivos y Bibliotecas que dependen del Estado al Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios*. "Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos", nº 4, 30 de abril de 1883, pp. 129-131.

- A su vez, el artículo 17 del mismo Decreto establece que *corresponde a la Dirección general de Instrucción pública la distribución de los empleados facultativos y administrativos oyendo a la Junta Facultativa.*

En cumplimiento del objeto que, el Ministro de Hacienda, se propuso al encomendar al Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios la reorganización y servicio de los *Archivos de las Delegaciones*, y a fin de que tan importante cometido pueda ser desempeñado con las mayores garantías de acierto, *la Real Orden de 21 de diciembre de 1888* dicta disposiciones relativas a los individuos del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios que se nombren para las plazas en los Archivos de Hacienda, como aclaración y complemento al *Real decreto de 1 de septiembre último*. El artículo primero establece:

Que ninguno de los individuos que se nombren para desempeñar plazas en los Archivos de Hacienda, en virtud del concurso anunciado en 23 de octubre último, ni de los que en lo sucesivo obtengan plaza de igual clase, podrá ser trasladado a otro establecimiento del Cuerpo, ni ocupar los cargos que menciona el artículo 22 del reglamento vigente, sin que antes acredite haber servido en los referidos Archivos, durante cuatro años por lo menos.

El artículo segundo añade:

Que si antes de transcurrir este plazo consigue la licencia mencionada en el expresado reglamento, no volverá a ingresar en el Cuerpo, sino, precisamente, en plazas de los Archivos de Hacienda, donde servirá hasta completar el tiempo señalado en la disposición anterior.

La incorporación de los *Archivos provinciales de Hacienda*, por *Decreto de 5 de setiembre de 1888*, obliga a rectificar la ley de Presupuestos de 29 de junio de 1890 al no determinar en la planta del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, el número de Ayudantes que se incorporan. Por ello el *Real Decreto de 23 de agosto de 1890* rectifica, en la forma que se indica, la plantilla del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, fijada en ley de Presupuestos vigente, modificando el número de Ayudantes segundos y terceros del mismo.

Disposiciones posteriores como la *Real Orden de 28 de julio de 1891* incorporan el Museo de Arqueología de Toledo creado por *Real Decreto de 18 de noviembre de 1887* al Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios.

Aprobadas las plantillas a que debe ajustarse la distribución del personal facultativo del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, con relación al número de miembros de que consta y al de los establecimientos que de él dependen, se hace preciso dictar la *Real orden de 29 de marzo de 1893* disponiendo que si por causa justificada falte en algún establecimiento el personal del Cuerpo de Archiveros y Bibliotecarios encargado de aquel, sea sustituido durante su ausencia por otro miembro del Cuerpo de los que sirvan en la misma localidad y en los puntos en que hubiese más de dos dependencias del Cuerpo, el reemplazo se hará por el más antiguo de los que allí existan.

Por *Real decreto de 31 de julio de 1893* se confió la reorganización de los Archivos de Hacienda de las provincias y el servicio de los mismos al Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, demostrando con el tiempo los buenos resultados de esta competencia. A su vez, el Archivo del Ministerio exige una radical transformación por su extraordinaria importancia en sus aspectos económicos,

administrativo, legislativo e histórico para evitar que, en plazo breve, este Archivo el más grande, se convierta en un inmenso depósito de papeles cuya clasificación sea difícil.

En este sentido se dicta el *Real decreto de 5 de agosto de 1893* que confía al Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios la reorganización y servicios del Archivo general del Ministerio de Hacienda, y cuyo personal dependerá del Ministerio de Fomento. En la exposición del preámbulo establece:

Interesa pues clasificar y ordenar la documentación de los múltiples servicios que con anterioridad a 1850, se han ido acumulando, con mayor o menor acierto, pero siempre con el diverso criterio de sus respectivos reglamentos. Organizaciones que fueron desapareciendo por efecto de los traslados de local y por falta de una disposición de carácter preceptivo que organizara la refundición hecha en 1850 de los grandes Archivos parciales, bajo la denominación de Archivo general del Ministerio de Hacienda.

Desde entonces han sido muchas las reformas y la dimensión que tomó el Archivo general en este periodo de 43 años. Esta clasificación tan necesaria no pudo realizarse hasta el momento. El resultado que debía dar el Real decreto de 31 de julio de 1888, y el estado en que se encuentra la documentación que constituye el Archivo general del Ministerio exige una organización especial para establecer un Archivo central de la Hacienda española que reúna todo lo que debe conservarse.

La disposición regula, en su articulado, que será el Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios quien se encargue de la reorganización del Archivo general del Ministerio de Hacienda, dependiendo los funcionarios directamente del

Ministerio de Fomento en cuanto a la reglamentación y régimen del Cuerpo al que pertenecen y al de Hacienda en lo referente a los servicios especiales que se les encomiende. El personal subalterno, los porteros y mozos al servicio del Archivo formarán parte, por ahora, de la planta de la Subsecretaría del Ministerio de Hacienda.

Posteriormente, por *Real decreto de 21 de diciembre de 1893*, se incorpora el Archivo general del Ministerio de Hacienda al Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, dependiente de la Dirección general de Instrucción pública. Por tal motivo se aumentará la planta de dicho Cuerpo.

Así mismo, la *Ley de 30 de junio de 1894*, sobre los establecimientos que ingresan en el Cuerpo con arreglo a las condiciones que dicta el Ministerio de Fomento, dispone:

Que los Archivos, Bibliotecas y Museos dependientes de la Presidencia del Consejo de Ministros o de los Ministerios de Fomento, Hacienda, Gobernación, Gracia y Justicia, y Ultramar así como el Registro General de la propiedad intelectual, el Depósito de libros del Ministerio de Fomento y los demás Centros de naturaleza análoga, sean servidos por individuos del Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, e ingresando en este Cuerpo según las condiciones y requisitos que se expresan. Los empleados de los establecimientos que sean incorporados lo harán con arreglo a las instrucciones que dicta el Ministerio de Fomento.

Advierte la ley que, quedan exceptuados de esta disposición; los Museos Nacionales de Pintura y Escultura, los de Ciencias naturales y Ciencias médicas y los

de carácter especial, artístico o científico y todos los Archivos, Bibliotecas y Museos que por su escasa importancia no permitan o justifiquen el nombramiento de un personal facultativo a su servicio.

Estos Archivos, Bibliotecas y Museos a que se refiere el párrafo precedente continuarán, como hasta aquí, a las ordenes de los Jefes de los respectivos departamentos. En cuanto al régimen, disciplina y condiciones orgánicas de su personal y a las relaciones de este con los demás individuos del Cuerpo se estará a lo que observen las leyes y reglamentos que rijan en el mismo. Por ello, el artículo tercero establece:

Que los empleados de los establecimientos que sean incorporados, ingresarán en el Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, obteniendo la colocación que les corresponda siempre que reúnan alguno de los requisitos siguientes: poseer el título especial de la Escuela de Diplomática, el de Licenciado en alguna Facultad, haber ocupado su puesto en el establecimiento por examen, concurso y oposición, o haber servido, como mínimo en este ramo dos años.

El artículo cuarto estipula que el nombramiento de los miembros que sirvan en estos establecimientos pertenecientes a los Ministerios se hará por el Ministerio de Fomento. En este sentido, el artículo cinco señala:

Los Archivos, Bibliotecas y Museos de carácter provincial o municipal que ofrezcan verdadera importancia a juicio del Ministerio de Fomento, y una vez oída la Junta superior facultativa, serán servidos por

personas que posean el título académico de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, o individuos del Cuerpo facultativo, respetándose los derechos de los funcionarios que anteriormente los tuviesen a su cargo.

Por último, la ley añade que todos aquellos Archivos, Bibliotecas y Museos, que no incluidos en los anteriormente mencionados, pueden disfrutar de sus beneficios, siempre que lo solicitaren los Jefes de los departamentos respectivos. El acuerdo es competencia del Ministerio de Fomento, una vez oída la Junta superior facultativa.

Para vertebrar lo dispuesto en la Ley se han de incorporar al Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, el Registro Central de la propiedad intelectual y el Depósito de libros de este Ministerio, llevándose a cabo por *Real orden de 30 de junio de 1894*.

Del mismo modo, la *Real Orden de 9 de julio de 1894* dispone la incorporación al Cuerpo facultativo de Archiveros de los miembros del Archivo del Ministerio de la Gobernación.

Por otra parte, la *Real orden de 5 de julio de 1895* incorpora a este Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, la Biblioteca de la Comisión del Mapa geológico de España. En este caso, el artículo segundo refleja cómo afecta, esta incorporación, al Oficial que presta sus servicios en la Biblioteca mencionada. El hecho de reunir la categoría de Licenciado y llevar más de dos años en el servicio del ramo, todo ello exigido por la Ley, le permite ingresar en el Cuerpo facultativo citado con el cargo de Oficial de tercer grado.

3.4.2. Establecimientos universitarios

La entrega al Cuerpo Facultativo, de los Archivos universitarios y de los Institutos, conlleva la publicación de la *Real orden de 7 de agosto de 1895* aprobando las plantillas para la distribución del personal del Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios y las reglas para el mejor servicio y régimen en las Bibliotecas y Archivos universitarios. Una vez visto el informe emitido por la Junta facultativa del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, y la propuesta de la Dirección general de Instrucción pública se aprueba, por esta disposición, las plantillas a las que debe ajustarse, en lo sucesivo, la distribución del personal del Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, en los establecimientos que pertenecen a este ámbito¹¹¹.

A consecuencia de dicha planta y de la distribución del personal, el Director general de Instrucción pública dispone, igualmente, que para los efectos del régimen y disciplina del personal y mejor servicio, se fusionen las Bibliotecas universitarias y Archivos universitarios, constituyendo en cada distrito universitario un sólo establecimiento, del cual será jefe el empleado facultativo de mayor categoría, sin que esta fusión implique la derogación de la *Real orden de 25 de enero de 1888*, que dispone que las Universidades facilitarán a los Archivos citados, el personal administrativo subalterno que necesiten.

En segundo lugar, destaca la disposición que en lo sucesivo las Bibliotecas de algunos Institutos provinciales y la Biblioteca y Archivo del Colegio Nacional de

¹¹¹ La planta que relaciona el personal del Cuerpo y los establecimientos presenta un mayor número de establecimientos de Archivos que de Bibliotecas dejando, en tercer lugar a los Museos. Por el contrario, el número de profesionales es mucho mayor, podríamos decir el doble, en las Bibliotecas que en los Archivos.

Sordomudos y de Ciegos serán servidos por individuos del Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, al igual que el Negociado de Archivos, Bibliotecas y Museos. Nada de lo establecido puede ser alterado salvo por expediente tramitado por la Dirección general de Instrucción pública, previo informe de la Junta facultativa.

3.4.3. Establecimientos de ámbito provincial

Por lo que se refiere al ámbito provincial, el *Real Decreto de 10 de enero de 1896* fija el sentido legal de las condiciones que han de tener los empleados que se agreguen al Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, determinando las atribuciones de las Diputaciones provinciales y Municipales para nombrar funcionarios para sus Archivos, Bibliotecas y Museos e incorporando varias Bibliotecas e Institutos de segunda enseñanza. Por ello, el artículo primero de la disposición regula:

Para agregar al Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios algún establecimiento del ramo, se hará con arreglo a la Ley de 30 de junio de 1894, y será requisito indispensable que la Junta facultativa del Cuerpo informe respecto a la importancia del establecimiento, al número y condiciones de los empleados que en él presten servicios, a las categorías con que estos hayan de ingresar en el Cuerpo y todas las dudas y dificultades que ocurran.

El artículo dos establece:

Que se declararán comprendidas en la excepciones que establece el párrafo segundo del artículo 1 de la citada Ley, las Bibliotecas cuyo número de volúmenes sea menor de 15.000, sin contar los duplicados y múltiples. Para ello será preciso que la Junta declare en expediente previo el ajuste con la Ley

El artículo tres resalta:

Que los empleados que ingresen en el Cuerpo en virtud de la incorporación de algún establecimiento, además de reunir los requisitos ya apuntados, han de pertenecer a la plantilla especial del mismo.

Así, el artículo cinco prescribe:

Con arreglo al artículo 5º de la Ley de 30 de junio de 1894, las Diputaciones y los Municipios no podrán nombrar en lo sucesivo para sus Archivos, Bibliotecas y Museos, empleados que no posean el título de Archivero, Bibliotecario y Anticuario, o no pertenezcan al correspondiente Cuerpo. Estos establecimientos serán declarados importantes, a estos efectos, por el Ministerio de Fomento después de oír a la Junta facultativa del ramo. En consecuencia, se declaran importantes los Archivos de las Diputaciones provinciales y los de los Ayuntamientos de todas las capitales de provincia.

En lo sucesivo, la Junta seguirá informando al Ministerio de Fomento respecto la declaración de otros establecimientos provinciales o municipales considerados importantes por su documentación u otras análogas

consideraciones. Los funcionarios que fuesen nombrados por las Diputaciones o Municipios para los Archivos, Bibliotecas y Museos provinciales o municipales serán declarados en situación de supernumerarios.

El artículo siete establece:

Que las Bibliotecas de los Institutos provinciales de segunda enseñanza establecidos en capitales de provincia y donde no exista Biblioteca universitaria, serán servidas en lo sucesivo por individuos del Cuerpo.

Por último, el artículo ocho añade que:

A las Bibliotecas provinciales, encomendadas al Cuerpo, se agregarán las colecciones de objetos artísticos y arqueológicos que existan en la misma localidad.

Dos años después se publica la *Real orden de 24 de octubre de 1898* que dicta reglas sobre provisión de plazas en los Archivos, Bibliotecas y Museos, considerando con derecho a desempeñar los cargos de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, incluso en los casos que no hubieren ingresado en el Cuerpo.

En el preámbulo de la disposición se expone:

Vista la instancia presentada al Ministerio de la Gobernación por parte de una Comisión de Archiveros Bibliotecarios titulares, pidiendo una explicación de la Real Orden circular de 26 de agosto donde recoge que sólo

pueden optar a las plazas los miembros del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios excluyendo a los que posean el título sin estar incluidos en el expresado Cuerpo.

El artículo primero establece:

Que se entienda la misma con legal derecho para el desempeño de los cargos que existan en los Archivos provinciales y municipales de las capitales de provincia, para los individuos que poseen títulos académicos de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios aunque no hayan ingresado en el Cuerpo.

Sin embargo estas medidas van a ser derogadas por la *Real Orden de 25 de febrero de 1899* que contiene lo siguiente; de conformidad con lo previsto en el artículo cinco de la *Ley de 30 de junio de 1894* y, declarados importantes los Archivos de las Diputaciones y Ayuntamientos de capitales de provincias por el *Real decreto de 10 de enero 1896*, no podrán continuar en estos cargos más individuos que aquellos que posean el título de Archivero o Bibliotecario o justifiquen derechos adquiridos, se publica la *Real orden de 25 de febrero de 1899* disponiendo que los cargos de Archiveros o Bibliotecarios provinciales o municipales no puedan ser desempeñados sino por los que posean el título correspondiente o justifiquen derechos adquiridos.

A su vez, el segundo artículo del Real Decreto establece que *las Diputaciones y Ayuntamientos de capital de provincia que no tengan en sus presupuestos cantidades consignadas para estos cargos han de proceder a consignarlas*. El artículo tercero recoge que en el plazo de quince días se justifique, ante esa Dirección

general de Administración, los derechos adquiridos por el personal que en la actualidad desempeña dichas plazas y, por último, el artículo cuarto dispone que una vez que haya transcurrido el plazo marcado en la artículo anterior, se publique por esa Dirección, en la Gaceta, relación exacta de las plazas libres por no estar desempeñadas por personal que tengan derechos adquiridos, disponiéndose el debido concurso público por treinta días. Para acreditar los derechos adquiridos será preciso acompañar la debida certificación en forma de acta de la sesión donde fue acordado el nombramiento.

Para finalizar queremos introducir algunas disposiciones que regulan otras tareas llevadas a cabo por los miembros del Cuerpo y que no han sido tratadas en los puntos anteriores.

La Dirección general de Instrucción pública, durante los años 1867 y 1868, mediante circulares, dispuso que los Rectores de las Universidades remitiesen a este Ministerio de Fomento, varios datos relativos al origen y fundación de las Universidades encomendadas a su dirección, con el objeto de reunir en el Ministerio las noticias necesarias para conceder la historia de la enseñanza pública de España y la finalidad de publicar los aspectos históricos de estas Instituciones que se han ido descuidando en España.

En este sentido, la *Orden circular de 6 de abril de 1869* dispone que los Rectores de las Universidades comisionen a los Catedráticos de cada Universidad que crean más aptos y a los miembros del Cuerpo de Bibliotecarios y Archiveros que estén al servicio de esa Biblioteca, para que redacten una Memoria histórica de la Universidad respectiva, que se publicará con cargo al material de ese establecimiento y que abrazará los puntos siguientes:

- 1- Noticias acerca del origen y fundación de esa Universidad.
- 2- Copia o resumen de los estatutos o reglamentos de estudios.
- 3- Plan de los estudios que se hacían en la Universidad.
- 4- Variaciones y reformas hechas en la enseñanza.
- 5- Número de alumnos matriculados en cada curso o asignatura.
- 6- Nota de los Rectores, Decanos y Catedráticos de esa Universidad.
- 7- Noticia de los medios materiales.
- 8- Noticia de las costumbres que llegaron a tener carácter de ley.
- 9- Resumen de los privilegios, exenciones y honores concedidos a esa Universidad.
- 10- Noticia de las Cátedras y Escuelas que hayan existido en ese distrito universitario.

3.5. Proyecto de Reglamento de la Sociedad de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios 1883

Este último epígrafe obedece al interés que presenta un documento que se conserva en el Archivo Histórico de la Universidad Complutense¹¹². Ulteriores intentos de profundizar en torno al presente proyecto, tanto en este y otros Archivos como en la bibliografía consultada¹¹³, nos han permitido conocer algún detalle sobre el propósito del borrador.

¹¹²Borrador del proyecto de Reglamento de la Sociedad de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios 1883. Archivo Histórico de la Universidad Complutense. Sección Escuela de Diplomática. Legajo 42/192.

¹¹³ Es aconsejable consultar el estudio de RUIZ CABRIADA, A. *Biobibliografía del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, 1858-1958*. Madrid: Junta técnica de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1958.

La primera referencia que podemos mencionar, sin que esta tenga una relación cronológica con su creación, es la que aparece en el primer número de la “Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos” de 31 de enero de 1871 en la sección: *Nuestros propósitos*, donde se autodefinía, el núcleo de fundadores de la Revista, como una *Sociedad de individuos del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios y de la Escuela de Diplomática*. Entendemos que esta autoproclamación tiene algo que ver con el borrador mencionado sobre todo, en el propósito común de constituir una Sociedad que no llegó a permanecer mucho tiempo.

Dos años después, en 1873, la misma Revista anuncia la idea de crear la Sociedad, aunque tuvieron que transcurrir 10 años para constatar su creación y con fecha de 28 de febrero de 1883 la “Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos” deja constancia, en la *sección oficial y de noticias*, de la formación de la Sociedad bajo lo siguiente¹¹⁴:

El día 22 del corriente se reunieron en la Escuela Superior de Diplomática la mayor parte de los individuos del Cuerpo residentes en Madrid, habiendo ocupado la presidencia de edad el Sr. Campillo, ejerciendo las funciones de Secretario el que lo es del Cuerpo, el cual manifestó que el objeto de la reunión era estudiar el proyecto de creación de una sociedad que, estrechando los lazos de unión entre individuos del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, cultivase las ciencias históricas con ampliación a los Archivos, Bibliotecas y Museos y promoviese los intereses generales de la colectividad.

¹¹⁴*Sociedad de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios*. “Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos”. Año IX, número 2, de 28 de febrero de 1883, pp. 50-51.

Aprobado el pensamiento y habiéndose convenido en dar a la Sociedad el nombre con que se encabezan estas líneas, se discutieron y aprobaron sucesivamente las bases que a continuación apuntamos:

- I. El objeto de esta Sociedad es cultivar el estudio de las ciencias históricas, con especial aplicación a los Archivos, Bibliotecas y Museos, estrechar los lazos de unión entre los individuos del Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, y promover los intereses generales del mismo. A los fines indicados tendrá la Sociedad periódicamente y en días fijos, reuniones, en las cuales de palabra o por escrito, se tratarán puntos científicos, teóricos y prácticos relativos a estas ciencias y se discutirán los que, atendida su índole, admitan controversia. Se darán también conferencias públicas sobre estos mismos asuntos cuando la Sociedad lo estime conveniente.
- II. Habrá dos clases de socios: numerarios y honorarios. Podrán ser socios de número todos los individuos del Cuerpo y los que tengan aptitud para ingresar en él, bien residan en Madrid, en provincias o en el extranjero.
- III. Para ser nombrado socio honorario se requiere haberse distinguido en el cultivo de las ciencias arqueológica, diplomática o bibliográfica, ser propuesto por siete socios numerarios, y elegido en Junta general, convocada al efecto, por mayoría absoluta de votos.
- IV. Son deberes de los socios numerarios: 1- Redactar trabajos sobre los asuntos de su especialidad, cuando por turno les corresponda. 2- Desempeñar con celo los cargos y comisiones que la Sociedad les asigne. 3- Los socios residentes en Madrid tienen además la obligación de asistir a las juntas y sesiones que celebre la Sociedad.

- V. Los socios honorarios podrán asistir a las sesiones y juntas tomando parte en las tareas de la Sociedad, sin estar obligados a desempeñar cargos activos en la misma.
- VI. Los individuos de esta Sociedad no satisfarán cuota alguna en concepto de ingreso ni de mensualidad.
- VII. Tendrá la Sociedad un órgano titulado: *Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos*, que publicará aquellos trabajos que estén en armonía con sus fines y condiciones materiales.
- VIII. El conocimiento y decisión de los asuntos de gobierno y régimen interior de la Sociedad, así como la dirección de las discusiones en las sesiones, designación de los trabajos, etc., corresponderá a una Junta directiva, compuesta de un Presidente, dos Vicepresidentes, dos Vocales y dos Secretarios.

Concluye la reseña anunciando que esta Sociedad ha comenzado ya a celebrar sus sesiones semanales, habiendo nombrado su Junta directiva, compuesta por los miembros anteriormente destacados, y recayendo la presidencia en D. Cayetano Rosell. Por último se invita, a los individuos residentes en provincias, que deseen inscribirse en la lista de los socios, poder remitir sus adhesiones al Secretario de la Sociedad o a la redacción de este periódico.

Unos meses más tarde, la misma publicación, recoge en la *sección oficial y de noticias*, una reseña firmada por el Secretario segundo de la Sociedad Augusto Charro Hidalgo donde nos explica los puntos del orden día de la última sesión y fundamenta la creación y reunión de sus miembros de la siguiente manera:

Hoy, que dentro de todos los órdenes y clases de la vida moderna toma el principio de asociación tan grandes proporciones en virtud de las inmensas ventajas que reporta y de las muchas necesidades a que responde, la *Sociedad de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios*, no sólo era justa y elocuente entre todos los individuos que forman este instruido y respetable Cuerpo, sino también una verdadera necesidad de los tiempos.

Movidos todos por un mismo sentimiento e impulsados hacia idénticos fines, deseosos de contribuir en cuanto esté de su parte al progreso y al desenvolvimiento científico de su país, los Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios tenían forzosamente que apelar al gran principio de la asociación en los actuales momentos para desarrollar el mayor grado posible de energía y satisfacer amplia y cumplidamente la elevada misión que les ha sido encomendada.

He aquí la causa, el motivo fundamental a que ha obedecido la creación de la Sociedad. Iniciado el pensamiento por uno de los más distinguidos e ilustrados individuos de la Sección de Archivos, fue aceptado por todos y procediéndose a la creación de la Junta directiva fue nombrado Presidente perpetuo el que hoy lamentamos su muerte.

¿A que fines respondía la Sociedad?, describe Charro:

- Al mejor y más pronto desarrollo de la vida intelectual del Cuerpo.
- A demostrar su utilidad, su necesidad apremiante en el orden práctico.
- A estrechar vínculos de amistad, compañerismo y mutua protección bajo el punto de vista individual.

Confirmada la celebración de sesiones ordinarias, a fin de discutir, exponer y dilucidar puntos relacionados con los trabajos profesionales y sesiones extraordinarias con carácter de públicas, para las lecturas o conferencias de puntos científicos determinados; también se aceptaron destinar una parte de las sesiones ordinarias a la discusión de cuestiones que afecten al Cuerpo en sus intereses materiales, cuando las circunstancias lo exijan.

Bajo estos precedentes la Sociedad inauguró sus tareas. El autor procede, en su exposición, a comentar el desarrollo que van tomando los puntos del orden del día de la última sesión, siendo uno de los temas más discutidos el referente al sistema de clasificación más conforme con las necesidades del momento para el régimen a que están sometidas las bibliotecas; otro punto pendiente esta ligado a las deliberaciones del Senado sobre el proyecto de incorporación de Archivos, Bibliotecas del Estado al Cuerpo facultativo especial del ramo, nombrando comisiones que representaran al Cuerpo.

Concluye, el autor, anunciando que dado lo avanzado de la estación ha obligado a la Sociedad a suspender las sesiones hasta el próximo invierno que se tratarán todos los temas que han quedado pendientes de discutir pero siempre dejando latente el espíritu de unidad y concordia que, con profunda satisfacción de todos, se advierte en la actualidad entre los individuos que forman las tres Secciones de Archivos, Bibliotecas y Museos¹¹⁵.

Dicho esto, pasamos a reproducir un resumen del borrador del proyecto de Reglamento para la constitución de la Sociedad tal y como se encuentra en el

Archivo. Las características externas del documento se pueden resumir, básicamente, en dos; está manuscrito y presenta correcciones. La estructura del proyecto consta de cinco capítulos integrados por 24 artículos y artículos adicionales. Los aspectos más característicos a destacar están recogidos en:

El Capítulo I De las sesiones y conferencias. Por el artículo uno se celebrarán sesiones y conferencias. El artículo dos establece que las conferencias serán públicas.

Por su parte, el artículo tres dispone que las sesiones pueden ser ordinarias, presididas por el Presidente, y secretas donde podrán tratarse asuntos relativos a la sociedad en el orden siguiente:

- 1- Lectura del acta anterior
- 2- Exposición o lectura de los trabajos sobre aspectos teórico-prácticos.
- 3- Temas científicos.
- 4- La última parte de la sesión estará destinada a Comisión de cuentas.

El artículo cinco recoge la forma de proceder en la discusión de dictámenes importantes. Los artículos, del seis al ocho, los dedica a los asuntos administrativos y propuestas de la vida ordinaria de la misma, y del discurso inaugural para la sesión de apertura del curso próximo. Sobre la sesión inaugural resalta que será en el mes de octubre. Por último, los artículos nueve y diez proponen establecer conferencias públicas; los temas de las mismas serán los que acuerden la Junta Directiva así como la forma y organización.

El Capítulo II *De la Junta Directiva y sus elecciones*. La Junta tiene la representación de la Sociedad. El artículo doce establece las atribuciones y deberes. Las cuestiones sobre la elección están reguladas de los artículos trece a diecisiete.

¹¹⁵ CHARRO HIDALGO, Augusto. *La Sociedad de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios*. "Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos". Año IX, número 6, de 30 de junio de 1883, pp. 193-195.

El Capítulo III *De las Comisiones*. El artículo diecinueve recoge que siempre que fuese necesario la Presidencia designará personas para las Comisiones dando cuenta e información de sus acuerdos.

El Capítulo IV *De las publicaciones de la sociedad*. El artículo veintiuno establece que la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos es el órgano oficial de la Sociedad, publicará actas, documentos, memorias y los trabajos de la misma¹¹⁶.

Por el artículo veintidós, la Sociedad publicará a sus expensas y en forma adecuada al objeto, los discursos de las sesiones inaugurales. Se dará cuenta de la vida científica y administrativa de la Sociedad proponiendo, la Junta Directiva, a la General, los medios conducentes de llevar a cabo lo anterior.

Por último, el Capítulo V sobre *Recursos y fondos de la Sociedad*.

La importancia de la Sociedad ha sido puesta de manifiesto por Ernest Adabal en el estudio elaborado sobre una descripción cronológica de las principales asociaciones, entidades, cuerpos de profesionales y colegios existentes en el Estado

¹¹⁶ El artículo 21 del borrador presenta una corrección resaltando que será la *Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos* el canal de comunicación de la Sociedad. En efecto, en este año 1883, la revista pasaba por su segunda etapa. Recordamos aquí que la Revista tuvo una vida en la que alternaron tres épocas: *La primera época (1871-1878)*. Las razones de lanzar esta publicación quizá fueran razones de corporativismo profesional. Ha sido considerada como el complemento más eficaz que tuvo la erudición profesional para la difusión continua de las enseñanzas propagadas desde las aulas de la Escuela.

La segunda época (1883). Después de conseguir la autorización para continuar la publicación de la Revista el 20 de diciembre de 1882, se abre una segunda época con sólo doce números correspondientes a 31 de enero a 31 de diciembre de 1883. Se la definió como la única con *carácter de órgano oficial de la Escuela Superior de Diplomática y el Cuerpo*. Términos que aporta el Proyecto de la Sociedad que hemos descrito.

La tercera época (1897-1931) da comienzo en enero de 1897, un año después de haberse lanzado el *Boletín de Archivos, Bibliotecas y Museos*. Es la etapa más duradera que comprende 34 años de vida de la Revista.

español, relacionando a la Sociedad de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios como una sociedad fundada en 1883 con fines corporativos y de cultivo de las ciencias históricas¹¹⁷.

En conclusión podemos considerar que la creación del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, y la Sociedad del mismo, significó la profesionalización y reconocimiento del trabajo de un grupo de profesionales dedicados a las tareas documentales y, en este sentido, nos unimos a la opinión que José Antonio Frías tiene al respecto: Si a la creación del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios y la de la Escuela añadimos la creación en 1883 de la Sociedad de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, podemos hablar ya de profesionalismo bibliotecario refiriéndonos no solamente a un tronco común de técnicas profesionales sino también a una doctrina, la de la unidad del servicio de las bibliotecas y de sus funciones independientemente de los usuarios a quienes sirven¹¹⁸.

¹¹⁷ ABADAL FALGUERAS, Ernest. *La Documentación en España*. Madrid: CINDOC; FESABID, 1994, p. 67.

¹¹⁸ FRÍAS ANTONIO, José. *El factor profesional en el futuro de las Bibliotecas*. En *¿Biblioteca Real frente a Biblioteca virtual?*. X Jornadas Bibliotecarias de Andalucía. Jerez de la Frontera de 28 al 30 de mayo de 1998, pp. 177-178.

CAPÍTULO IV

Actuaciones legislativas en materia de educación y enseñanza pública

4. Actuaciones legislativas en materia de educación y enseñanza Pública

En el presente capítulo analizaremos la educación y enseñanza pública dentro de nuestro ámbito de estudio, incidiendo en tres aspectos concretos que juzgamos de interés:

- 1- Análisis de los planes de estudio destacando la incorporación de las disciplinas documentarias en los cuadros de asignaturas de los cursos académicos de las carreras docentes universitarias.
- 2- El significado y repercusión de la Ley de Instrucción Pública de 1857 en los estudios de la enseñanza superior.
- 3- Cuerpos consultivos y de inspección en asuntos de enseñanza pública superior.

4.1. La educación y la enseñanza en los primeros años del reinado de Fernando VII. La Constitución de 1812

Establecidas las Cortes de Cádiz, como poder legislativo, y proclamado Rey Fernando VII, por *Decreto de 24 de septiembre de 1810*, se van a suceder medidas que emanan de las mismas Cortes en forma jurídica de leyes y decretos, confiando la potestad ejecutiva a un Consejo de Regencia .

En el ámbito de la enseñanza, en estos momentos, las circunstancias políticas y sociales llevaron a la suspensión de los estudios al permanecer cerradas las

universidades y colegios por *Decreto de 30 de abril de 1810*. Sin embargo, un año más tarde, considerando las Cortes generales y extraordinaria, el influjo que tiene la educación nacional, no sólo en el orden político y en la mejora de las costumbres, sino también en la dirección de las empresas, se ordena con el *Decreto de 16 de abril de 1811: Que desde la publicación de esta disposición quede revocado el de 30 de abril en la parte que dispone el cierre de las Universidades y Colegios*¹¹⁹.

Durante el período de las Cortes de Cádiz se formó, como primera medida, una Comisión para la elaboración de un Plan de Instrucción Pública y Educación Popular el 23 de septiembre de 1811. La Comisión estaba compuesta por Jovellanos, Manuel José Quintana y el Bibliotecario de la Biblioteca de las Cortes, Bartolomé José Gallardo, entre otros. Posteriormente, esta Comisión fue sustituida por una nueva Junta de Instrucción pública.

Con la publicación de la *Constitución de 1812* se empieza a regular y centralizar todo lo referente a la materia de educación y enseñanza; el Título IX de la Norma recoge el epígrafe *De la instrucción pública*. Bajo este apartado se ordena el establecimiento de centros, objeto de la instrucción pública, creación de

¹¹⁹ Consideramos importante reseñar que a raíz de la suspensión de los estudios y el cierre de las Universidades y Colegios por *Decreto de 30 de abril de 1810* se llevan a cabo medidas para su implantación entre las que podemos encontrar la creación, a propuesta del Ministerio del Interior, de una Junta Consultiva de Instrucción Pública y Educación por *Decreto de 28 de enero de 1811*. Son pocos los datos de interés que tenemos de esta Junta sobre todo por la falta de documentos, pero sí sabemos que nace con la finalidad prioritaria de formar un *Plan general de Educación e Instrucción Pública* aunque las dificultades socio-políticas que se sucedieron impidieron a la Junta la finalización de sus trabajos. Por otra parte SAN SEGUNDO, Rosa. *Sistemas de Organización del Conocimiento: La organización del conocimiento en las bibliotecas españolas*. Madrid: Universidad Carlos III de Madrid. Boletín Oficial del Estado, 1996, pp. 228-229, manifiesta el hecho que, durante el período de las Cortes de Cádiz se formó, primeramente, una comisión para la elaboración de un *Plan de Instrucción Pública y Educación Popular* en 1811 (el 23 de septiembre). En 1813 fue sustituida por una nueva Junta de Instrucción Pública que realizó un informe en el que se recogían los planteamientos y proyectos liberales en materia de educación. En el Plan se asumió que la educación formaba parte de los deberes públicos e iba a tener un carácter público, universal y gratuito. El informe apareció el 9 de septiembre de 1813 bajo el título *Informe de la Junta creada por la Regencia para proponer los medios de proceder al arreglo de los diversos ramos de la instrucción pública* que fue principalmente redactado por Quintana.

Universidades y establecimientos de instrucción que se juzguen convenientes para la enseñanza. A su vez, también establece la formación de un Plan general de enseñanza uniforme en todo el reino y la creación, por el artículo 369, de una Dirección general de Estudios que canalizará y llevará a cabo la inspección de la enseñanza pública que será desarrollada legislativamente por el Gobierno¹²⁰.

En 1813 la Junta de Instrucción pública, que sustituyó a la Comisión creada el 23 de septiembre de 1811, elaboró un informe en el que se recogían los planteamientos y proyectos liberales en materia de educación; informe redactado por Quintana, que apareció el 9 de septiembre, bajo el título *Informe de la Junta creada por la Regencia para proponer los medios de proceder al arreglo de los diversos ramos de la instrucción pública*. Sin embargo esta normalización constitucional duró poco tiempo porque la vuelta del Rey Fernando VII en el mes de marzo de 1814 supuso la ruptura y anulación de las medidas tomadas por el gobierno Constitucional procediendo a restaurar el orden de cosas y disposiciones anteriores a 1808; un caso concreto es la publicación de la *Real Orden de 27 de enero de 1815*, donde:

El Rey a consulta personal del Consejo de 27 del mismo mes, se ha servido mandar que se restablezca la Universidad de Orihuela, implantando el plan de estudios establecido en el año de 1807, o el que se establezca en lo sucesivo.

Otro aspecto que denota las irregularidades mantenidas en este período del reinado de Fernando VII lo podemos observar en la descentralización ministerial de las competencias en materia de educación y de enseñanza. Unas disposiciones nos hacen pensar que es la Secretaría de Estado y del Despacho quien, entre otras muchas

¹²⁰ Luis García Ejarque, cit. SAN SEGUNDO, Rosa, p. 228, considera que las Cortes trataron de organizar las instituciones educativas tomando como modelo todo cuanto se había hecho en materia educativa en Francia.

atribuciones, tenía asumidas éstas competencias; en este sentido, la *Real Orden de 31 de enero de 1815*, expedida por la Secretaría de Estado y del Despacho, manda establecer *en diferentes provincias del reino seis cátedras de agricultura para dar gratuitamente la enseñanza teórica y práctica de esta ciencia*. Sin embargo, otras disposiciones, como los *Reales Decretos publicados con fecha de 15 de febrero de 1815*, son comunicados por el Ministro de Gracia y Justicia Tomás Moyano, donde; en el primero, se manda crear una Junta encargada de formar un plan de estudios para asegurar la educación y la instrucción pública y; en el segundo Real Decreto, se nombra los miembros que van a constituir esta Junta¹²¹.

El Real Decreto reza así:

Intimamente persuadido de que la ignorancia es la madre de todos los errores, causa principal de muchos vicios, que por el contrario una sólida y general instrucción es el medio más eficaz de desvanecerlos, combatirlos, evitarlos y de atraer sobre un estado todos los bienes y felicidades de que es susceptible; y anhelando Yo porque mis dignos vasallos sean de todos modos y en todos sentidos felices, he creído que nada puedo hacer mas útil para ellos ni más digno de mí que proporcionar y asegurar la educación e instrucción pública, [...] Así mi voluntad es que sin perdida de tiempo una Junta de Ministros, que nombraré de los que además de merecer mi confianza posean los conocimientos necesarios para formar el mas acertado plan general de estudios.

El profesor Martínez Velasco manifiesta, al hilo de esta disposición, la falsa idea que dan las disposiciones legislativas de los períodos del Reinado de Fernando

¹²¹ Aunque las disposiciones iban orientadas a formar una Junta para la elaboración del plan de estudios, éste no vio la luz hasta el *Decreto de 14 de octubre de 1824*.

VII regulando las numerosas medidas tendentes a reorganizar la situación del país que, de hecho, la lentitud burocrática hizo que todo quedara en meros deseos de reforma. Observamos como caso representativo la creación, en febrero de 1815, de una Junta encargada de redactar un plan general de estudios para todas las Universidades de acuerdo con la tendencia uniformadora del reinado de Carlos III y que se plasmó en el proyecto de *arreglo general de la enseñanza pública*, presentado a las Cortes de Cádiz por la Comisión de Instrucción pública. La labor de la Junta no se vio por ninguna parte, lo que ha llevado a la historiografía liberal, en palabras del mismo autor, a afirmar que su creación tuvo más bien por objeto impedir las reformas que promoverlas¹²².

En este orden de cosas, el primero de octubre del mismo año de 1815 aparece una Circular de la primera Secretaría de Estado y del Despacho donde se manda observar el adjunto plan para la enseñanza de ciencias naturales en un solo establecimiento público que se llamará Real Museo de Ciencias Naturales; y atendiendo al artículo dos, *el primer Secretario de Estado y del Despacho, bajo cuya protección han estado hasta aquí todos aquellos establecimientos, será el Protector del Museo*. El plan expresa el número de profesores que ha de haber y las atribuciones de cada uno.

En la primera enseñanza, hemos observado que las competencias estaban ejercidas a través de la Secretaría de Gracia y Justicia¹²³ aunque parece ser que se ceñía al ejercicio de vigilancia y control, lo cual se hizo posible mediante la

¹²² MARTÍNEZ DE VELASCO, Ángel. *España, 1808-1833*. En: Manual de Historia de España. Siglo XIX. Madrid: Historia 16, 1990, pp. 98-99.

¹²³ Salvo algunas excepciones, -de todas las disposiciones sobre esta materia, sólo tres de ellas van dirigidas a través de la Secretaría de Estado, los *Reales Decretos de 19 de noviembre de 1815*, sobre escuelas caritativas de primera enseñanza, el *Real Decreto de 17 de diciembre de 1815*, sobre colegios para nobles, y el *Real Decreto de 8 de julio de 1816*, sobre colegios para niños-.

elaboración de un plan general de estudios que debía aplicarse en todos los centros docentes del país. Además, el Estado se hacía cargo a través de las entidades municipales del desempeño de la actividad docente.

Del mismo modo que la primera enseñanza, la enseñanza superior, impartida en los establecimientos literarios, recibió un plan de ordenación general que debía regir en los mismos. Esto sirvió, no sólo, para unificar la enseñanza de las diversas disciplinas, sino también, para canalizar la gestión del Estado a través de la Secretaría de Gracia y Justicia; hay que tener en cuenta que con anterioridad, la mayor parte de las disposiciones seguían esta vía, y que en otras como las referentes a nombramientos, colegios mayores, etc. intervenía la Secretaría de Estado sin que, por su contenido, pueda llegarse a averiguar la razón de ello. Es el caso de la *Real Circular de 20 de febrero de 1815* sobre el restablecimiento de los seis Colegios Mayores que recoge una Real Orden comunicada al Consejo por el Secretario de Estado y de dicha Secretaría proceden los decretos de nombramiento de los Colegios al Infante D. Carlos y de la Universidad de Alcalá al Infante D. Antonio. salvo en casos muy concretos que, expresamente, se dice que estuvo bajo la inspección de la Secretaría.

Dentro de la enseñanza superior se hacía distinción entre las enseñanzas de carácter humanístico que se llevaba a efecto en los *establecimientos literarios*, es decir, las Universidades, Colegios Mayores y Seminarios Conciliares, y las enseñanzas de carácter técnico o de las *ciencias útiles* que corría a cargo de diversos establecimientos culturales. Con respecto a esta última enseñanza de las *ciencias útiles* no hay que olvidar que estaba íntimamente ligada al fomento, ya que se consideraba que el conocimiento de las ciencias naturales permitía una mejor explotación de los recursos del país. La Secretaría de Estado a la que competía el fomento de los medios de producción, también será la que se ocupe, por sí misma, o

a través de las Sociedades Económicas, de facilitar estos conocimientos técnicos mediante el apoyo de centros de investigación y enseñanza y la creación de cátedras. Pero si la iniciativa partía de la Secretaría de Estado, la de Hacienda intervenía y arbitraba los medios financieros participando de forma directa en el control de los establecimientos docentes de los organismos bajo su competencia, obsérvese en la *Orden circular del Ministerio de Hacienda de 16 de mayo de 1818*. Con total independencia, la enseñanza de los cuerpos militares se impartía en colegios y escuelas propios, dependientes de las Secretarías de Guerra y de Marina.

Dentro del mundo cultural y científico hay que apuntar el importante papel que jugaron las Academias en el terreno de la enseñanza, investigación y conservación del patrimonio cultural y artístico. Durante los primeros años del reinado de Fernando VII, las Academias, como en la época anterior, dependían de la Secretaría de Estado. Posteriormente esta dependencia se mantuvo sólo para las Academias de Bellas Artes de San Fernando y de la Historia¹²⁴; asimismo, el Real Conservatorio de Música será creación de la Secretaría de Hacienda.

De la promulgación de estos Decretos y de la *Orden circular del Consejo Real de 20 de diciembre de 1815*¹²⁵ se puede deducir, tal y como apunta Ana Barrero García, que en el período de Fernando VII, la educación y enseñanza de los súbditos aparece concebida en la documentación de la época como una actividad pública *objeto de la soberana atención y desvelo*, y como una muestra más del *paternal y decidido amor del rey hacia sus fieles y heroicos vasallos* en sus esfuerzos por alcanzar la *prosperidad pública* lo cual exigía, dada la consideración negativa de la etapa anterior, *no sólo curar y preservar las generaciones presentes sino también formar las venideras por medio de una educación e instrucción sólidamente*

¹²⁴ Véanse las *Circulares de 19 de septiembre de 1827 y de 21 de abril de 1828*.

¹²⁵ La Orden circular hace referencia a la preocupación del Rey por atender las necesidades en la educación y la enseñanza. Pretendía, no sólo, formar a las generaciones presentes sino también formar

*monárquicas y cristianas sin desatender los verdaderos progresos de las ciencias útiles a la prosperidad de mis dominios*¹²⁶

Los planteamientos hasta ahora analizados, cambian de dirección al abolirse el sistema constitucional e imponerse un período absolutista con Fernando VII. En este sentido por *Real Resolución de 3 de agosto de 1818* se deroga el Plan de estudios de 1807 y se dispone que volviera a observarse el de 1771.

En esta línea, y viendo la desigualdad en la implantación de los planes de estudios en las Universidades de cada provincia, se publica una *Circular del Consejo Real el 27 de octubre de 1818*, que expresa cómo S. M. ha mandado, al objeto de uniformar en lo posible la enseñanza pública en todas las Universidades del reino, que el plan de estudios de 1807 quede derogado, subsistiendo hasta terminar su mandato el de 1771.

4.2. La incorporación de las disciplinas documentarias en los Reglamentos generales de Instrucción pública y los Planes de Estudio del siglo XIX

4.2.1. El Reglamento general de Instrucción pública del trienio liberal (1820-1823)

El Plan de estudios de 1771, al que hemos aludido anteriormente, estuvo implantado hasta que se restableció el sistema constitucional que impuso, interinamente, por *Decreto de 6 de agosto de 1820*, el plan de estudios publicado en *Cédula de 12 de julio de 1807* expresando lo siguiente:

las venideras por medio de una educación e instrucción sólidamente monárquicas y cristianas sin desatender los verdaderos progresos de las ciencias útiles a la prosperidad de sus dominios.

¹²⁶BARRERO GARCÍA, Ana M^a. *La materia administrativa y su gestión en el reinado de Fernando VII*. Anuario de Historia del Derecho Español (AHDE). Madrid, 1983, pp. 415-416.

Las Cortes, usando de la facultad concedida por la Constitución, han decretado que se restablezca interinamente este plan debiéndose acomodar a él la enseñanza en todas las Universidades, Seminarios, Colegios y Conventos del reino desde la apertura del próximo curso, revocando todas las ordenes que se hubieren dado en contrario desde 1814 hasta el presente.

Este Plan de estudios permanece hasta la publicación del *Decreto LXXXI de 29 de junio de 1821* que aprobó el Reglamento general de Instrucción pública.

La legislación promulgada en el último periodo constitucional volvió a tomar vigencia durante esta nueva etapa liberal con la finalidad de extender la educación; un ejemplo es la *Orden de 9 de octubre de 1820* donde se designan las cátedras que deben proveerse en las Universidades. Sin embargo, va a ser con el Reglamento general de Instrucción pública¹²⁷, aprobado por *Decreto de 29 de junio de 1821*, cuando se sistematice de manera definitiva la enseñanza. Por ello, las Cortes, usando de la facultad que les concede la Constitución, aprueban este Reglamento estructurado en doce títulos integrados por ciento treinta artículos¹²⁸.

¹²⁷ Sobre este Reglamento consúltese, MIGUEL ALONSO, Aurora. *La Biblioteca de los Reales Estudios de San Isidro de Madrid. Su historia hasta la integración en la Universidad Central*. Madrid: Fundación Universitaria Española, 1996, p. 117. La autora describe como el proyecto del Reglamento no llegó a aprobarse en este primer periodo constitucional aunque sí lo fue en el siguiente. Es el *Proyecto para el arreglo general de la enseñanza pública*, que en marzo de 1814 remitió a las Cortes la Comisión de Instrucción pública. Al proyecto le precedió, meses antes, el *Informe de la Junta creada por la Regencia para proponer los medios de proceder al arreglo de los diversos ramos de la Instrucción pública*, redactado por Manuel José Quintana y presentado a las Cortes el 9 de septiembre de 1813. En 1821 este proyecto de Decreto se transformó en el *Reglamento General de Instrucción pública*, convirtiéndose en el modelo progresista en este campo legislativo hasta la Ley Moyano de 1857.

¹²⁸ En realidad, el Reglamento seguía fielmente la ruta marcada por el informe Quintana de 1813 y por el Proyecto de 1814 permitiendo la existencia de una enseñanza pública y otra privada, disponiendo la estructura del sistema educativo en tres grados, afirmando, en fin, el principio de la libertad de

El Título I bajo el epígrafe *Bases generales de la enseñanza pública* recoge en el artículo primero que toda la enseñanza costeada por el Estado o dada por cualquier corporación con autorización del Gobierno será pública y uniforme.

El Título II establece *la división de la enseñanza en primera, segunda y tercera*, considerando como *primera enseñanza* la general e indispensable que debe darse a la infancia; esta enseñanza se impartirá en escuelas públicas de primeras letras.

El Título III recoge *De la segunda enseñanza* y comprende aquellos conocimientos que sirven de preparación para dedicarse después a otros estudios más profundos. Esta enseñanza se proporcionará en establecimientos denominados de Universidades de provincia. Según el artículo 28 en cada Universidad de provincia habrá una biblioteca pública. En estos centros la biblioteca, no sólo es un lugar de consulta para los profesores y alumnos, sino un punto de expansión cultural para cualquier persona con curiosidad científica o cultural.

El Título IV *De la tercera enseñanza* comprende los estudios que habilitan para ejercer alguna profesión particular. Se impartirán en las diez Universidades mayores, nueve en la Península y una en Canarias. El artículo 37 establece que se proporcionarán algunos de estos estudios en cátedras agregadas a las Universidades de provincia, y otros en escuelas especiales. El artículo siguiente añade que los estudios que se han de dar en cátedras agregadas a dichas Universidades de provincia son; *la teología, la jurisprudencia civil y canónica, con los estudios auxiliares que son útiles para la enseñanza de estas ciencias*.

Para proporcionar los estudios auxiliares, propios de esta enseñanza, se establecerán las Cátedras siguientes: una de lengua hebrea y caldea, y otra, de lengua griega. *A cargo de los Bibliotecarios, estará la asignatura de Historia literaria y Bibliografía, Numismática y Antigüedades. Habrá un monetario y un gabinete de estas últimas* (art. 41). Esta propuesta de establecer las cátedras de Bibliografía, a cargo de Bibliotecarios, estaba incluida en el Proyecto del Decreto¹²⁹.

El Título V *De las escuelas especiales* regula los estudios que se darán en esas escuelas consideradas como necesarias para algunas profesiones de la vida civil.

El artículo 54 establece que, la Dirección general de estudios será la competente para designar los profesores, directores y ayudantes que sean necesarios para el desempeño de estas enseñanzas. El artículo 55 señala que *la enseñanza de la historia de estas ciencias y de su bibliografía estará a cargo del Bibliotecario*¹³⁰. Cabe decir, en este sentido, que en la escuela especial destinada a la enseñanza conjunta de la Medicina, Cirugía y Farmacia, los bibliotecarios tenían que enseñar tanto la historia de esas ciencias como su *bibliografía*. Nada se dice, sin embargo, respecto al nombramiento de los bibliotecarios. En cada una de estas escuelas habrá una biblioteca pública y un depósito de planos y mapas.

El Título VI *De la Universidad Central* recoge que en la capital del reino deberá existir una Universidad central donde se impartan los estudios necesarios para el completo conocimiento de las ciencias; además de enseñarse todo lo

¹²⁹ *Dictamen del Proyecto de Decreto sobre arreglo general de la Enseñanza pública de 7 de marzo de 1814*. Madrid, Imp. Nacional, 1820, artículo 59, p. 367.

¹³⁰ La asignación de tareas docentes al bibliotecario ha sido calificada por Rosa San Segundo op. cit, p. 229, como un hecho que pone de manifiesto la importancia que dotó a las Cortes de Cádiz a los trabajos bibliotecarios y a las técnicas bibliográficas, igualando la categoría del bibliotecario a la del docente y, añade la autora, que este intento de igualar las categorías entre bibliotecarios y profesores había tenido su primera expresión en 1793, llevándose a efecto con la elaboración, por parte de Jovellanos, de un informe en el que expuso la equivalencia del *status* de ambos.

comprendido en la segunda y tercera enseñanza, se añadirán cátedras donde habrá un profesor que será auxiliado por ayudantes en las ciencias que lo exijan¹³¹. Las enseñanzas que se imparten en esta Universidad son las mismas que se imparten en el resto de las Universidades, si bien, en el *Proyecto del Decreto* se añaden nuevas asignaturas y un nuevo centro docente donde se implantará un curso de Diplomática y otro de Paleografía destacando que la *Paleografía será impartida por un miembro de la Biblioteca*¹³².

El Título VII regula todo lo relacionado con *los Catedráticos* y establece que todos ellos obtendrán sus cátedras por oposición y rigurosa censura, excepto los de las escuelas de aplicación.

El Título VIII referente *De la Dirección general de estudios* comprende los artículos 92 a 107. El artículo 92 establece que de acuerdo con el artículo 369 de la Constitución de 1812, se creará una Dirección general de Estudios competente en la inspección y arreglo de la enseñanza pública. A su vez, el artículo 93 regula la composición de esta Dirección general integrada por siete individuos, siendo Presidente el más antiguo por el orden de su nombramiento. Para ser nombrado Director se requiere haber dado pruebas positivas de saber, haber enseñado en los establecimientos públicos por espacio de seis años, o haber publicado una obra que acredite su sólida instrucción. El cargo de Director será vitalicio e incompatible con otro destino.

¹³¹ Para su puesta en marcha se contaba con reunir las cátedras de los Reales Estudios de San Isidro de Madrid y de la Universidad de Alcalá y las enseñanzas prácticas del Museo de Ciencias. Será con el Plan de Estudios de 1850 cuando se reconozca a esta Universidad fe Madrid como Central.

¹³² Hemos considerado de interés apuntar la disposición, *Real Orden de 3 de octubre de 1822*, que aprueba un plan de estudios específico para la Universidad central y que incluye, dentro del primer curso, la asignatura de *Biblioteca*.

Por su parte, el artículo 101 regula las facultades de la Dirección general de Estudios y son:

1. *Velar sobre la enseñanza pública y cuidar de que se observen los reglamentos establecidos.*
2. *Recibir las solicitudes, propuestas y reclamaciones de todos los cuerpos literarios y escuelas de la Monarquía para pasarlas al Gobierno con su informe.*
3. *Cuidar de la formación de los diferentes planes y reglamentos necesarios para el arreglo de la instrucción pública, valiéndose de las personas y medios que crea necesario y oyendo en lo perteneciente a la parte científica a la Academia nacional, antes de presentar el reglamento al Gobierno.*
4. *Promover la mejora de los métodos de enseñanza y la formación y publicación de tratados elementales por medio de premios a sus autores.*
5. *Presentar las alteraciones que puedan convenir en la parte científica de los estudios, siempre a propuesta de la Academia nacional.*
6. *Cuidar de la conservación y aumento de todas las bibliotecas públicas del reino.*
7. *Dar cuenta anualmente a las Cortes del estado de la enseñanza pública en una memoria.*
8. *Ejercer todas las demás facultades que se le señalen en su respectivo reglamento.*

El Título IX *De la Academia nacional* establece que en la capital del reino existirá una Academia nacional con el objeto de conservar , perfeccionar y propagar los conocimientos humanos.

El Título X versará sobre *La enseñanza de las mujeres* y el Título XI sobre *Los establecimientos antiguos* regulando en el artículo 122 que las Universidades y demás establecimientos de instrucción pública, existentes actualmente en la Monarquía, seguirán en ejercicio hasta la creación de los establecimientos que se prescriben en este arreglo general de la enseñanza pública. Por otra parte, la Dirección general de Estudios formará el correspondiente arreglo literario de estos establecimientos para que se observe en ellos la conveniente uniformidad.

Por último, el Título XII regula *De los fondos destinados a la instrucción pública*; el Gobierno se encargará de conocer, en cada provincia, los fondos destinados a la enseñanza pública, también controlará que estos fondos sean bien administrados. Por su lado, el artículo 129 establece que la Dirección general de Estudios propondrá al Gobierno los medios que crea más convenientes para ir estableciendo sucesivamente en toda la Monarquía este plan general de enseñanza. En este sentido, la *Orden de 18 de mayo de 1822*, del Secretario de Estado y del Despacho de la Gobernación de la Península, autoriza a la Dirección general para resolver los expedientes sobre dispensas de cursos y grados académicos bajo las reglas que expresa la disposición.

4.2.2. El Plan general de Estudios de 1824

La vuelta del rey Fernando VII y el régimen absolutista, en el último trimestre de 1823, supone el cierre de un período constitucional y su obra legislativa; iniciándose por tanto, una etapa orientada a restablecer disposiciones promulgadas con anterioridad por el propio monarca impidiendo la entrada en vigor de las medidas educativas liberales. Todo ello supone una reforma en la concepción de la enseñanza y en la extensión de la cultura concluyendo en un nuevo plan de enseñanza contrario al emanado de las Cortes de Cádiz.

Una primera medida se da con la publicación de dos *Reales Decretos con fecha de 18 de febrero de 1824* comunicados al Consejo Real y dirigidos, uno de ellos, a restablecer la Junta de Ministros, tal y como se proyectó el 1 de febrero de 1815 y, el otro, a delimitar las bases de un plan general de estudios y arreglo de las Universidades. Fruto del trabajo de esta Junta es el Plan Literario de Estudios y arreglo general de las Universidades del Reino inserto en el *Real Decreto de 14 de octubre de 1824* y publicado por la Secretaría de Estado de Gracia y Justicia bajo la firma de Francisco Tadeo de Calomarde; plan que se ha venido conociendo como Plan Calomarde. El Plan hace referencia a la enseñanza como actividad pública y abarca todos los niveles desde las *primeras letras a los estudios superiores*, por ello fue considerado como un plan que implantó la uniformidad de la enseñanza en todas las universidades sujetándolas a un mismo régimen. La exposición de motivos de la disposición señala la importancia de formar a las generaciones en una educación e instrucción firme y a este respecto prescribe:

Años pasados se mandó en febrero de 1815, el arreglo de un plan de estudios a una Junta de Ministros. En agosto del mismo año se formó una sección de tres ministros para que propusiera medios para perfeccionar y dotar competentemente los establecimientos de primeras letras de utilidad general a todas las clases del Estado. De los informes evacuados por esta Junta y Sección se llegó a conclusiones que no pudieron tramitarse por sobrevenir el nuevo Gobierno que destruyó los documentos y memoria reunidos para la formación de los nuevos planes.

Los Títulos del Real Decreto dedicados a la Universidad, son los siguientes:

- El Título I *De las Universidades* destaca que el plan literario de estudios será uniforme en todas las Universidades de la Península e Islas adyacentes.

- El Título XXV *Del gobierno de las universidades* donde se establece que pertenece al Rector y al claustro.
- El Título XXVI *Del Rector*, considerado como la cabeza de la universidad para su gobierno literario, político, económico, contencioso y correccional.
- El Título XXVIII sobre *los Claustros universitarios* reflejando que en cada universidad existirá un claustro general y un claustro de Catedráticos.
- El Título XXXII *Disposiciones generales para la ejecución de este arreglo y plan de estudios*. A imitación de las *juntas de método*, que en 1772 se mandaron establecer en algunas Universidades para implantar el plan, se formará en cada una de las que subsisten la *junta de arreglo y plan de Estudios* encargada de la ejecución de este en todas sus partes.

Como podemos observar el Plan de estudios y arreglo de las Universidades del Reino de 1824, obra del ministro de Gracia y Justicia, no dedica unos artículos a las Bibliotecas -aspecto que sí contemplaba el Reglamento general de Instrucción pública de 1821- y solamente menciona la Biblioteca cuando hace referencia a *los libros malos y corruptores, prohibiendo a los bibliotecarios el franquearlos a cualquiera que no tenga licencia para leerlos añadiendo que toda infracción de la ley en la Biblioteca de la Universidad será severamente castigada por el Rector*, en este sentido las tareas del Bibliotecario también cambian y adoptan, en cierta manera, la función de censor.

4.2.3 El Plan de Estudios de 4 de agosto de 1836

Con el restablecimiento de la Constitución de 1812 y bajo la presidencia de Francisco Javier de Istúriz¹³³ se pretende dar a la enseñanza pública el impulso conveniente para unificarla. De estas y otras medidas resultará el Plan General de Instrucción Pública aprobado por *Real Decreto de 4 de agosto de 1836* que de conformidad con lo apuntado dispone:

Persuadida de la necesidad de dar a las enseñanzas actuales la dirección que exigen las luces del siglo y la extensión que los medios permiten, y convencida de que no puede diferirse por mas tiempo la reforma sin perjudicar al arraigo y progreso de las instituciones políticas y civiles, se aprueba el Plan General de Instrucción Pública.

El Plan del Duque de Rivas, ministro de Gobernación, responde a una doble motivación: de una parte, a la necesidad de sustituir la legislación de Calomarde para adaptarla a los nuevos patrones políticos¹³⁴; de otra, a la necesidad de concretar el ideario moderado en materia de educación¹³⁵. El Plan se estructura en seis títulos subdivididos a su vez en Secciones.

¹³³ Véase Capítulo II de este trabajo, *supra* pp. 22-23.

¹³⁴ Encontramos en estos momentos disposiciones orientadas a centralizar en publicaciones oficiales la legislación de esta materia así, el *Real Decreto de 1 de enero de 1841* crea un Boletín Oficial de Instrucción pública y la *Real Resolución de 31 de enero de 1842* va dirigida a promover la circulación del Boletín Oficial de Instrucción pública. Ambas consideran que el objeto principal del Boletín consiste en la comunicación de las ordenes del Gobierno y de la Dirección general de Estudios a los establecimientos de instrucción pública del reino.

¹³⁵ *Historia de la educación en España: De las Cortes de Cádiz a la Revolución de 1868*. Vol II. Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia. Secretaría General Técnica, 1979, p. 22.

El Título I bajo el epígrafe *De la Instrucción primaria* establece en el artículo uno que la instrucción primaria es pública y privada. Está dividido en cuatro capítulos, todos ellos, dedicados a esta enseñanza.

El Título II *De la Instrucción secundaria* en el artículo 25 establece que la instrucción secundaria comprende aquellos estudios que no alcanza la primaria superior y que son necesarios para completar la educación general de las clases acomodadas para seguir con fruto las facultades mayores y escuelas especiales. La instrucción pública secundaria se dividirá en elemental y superior. La primera se impartirá en Institutos elementales y la segunda en Institutos superiores.

El Título III *De la tercera enseñanza* en el artículo 42 recoge que la tercera enseñanza comprende las facultades, escuelas especiales y estudios de erudición siguientes:

1. Las facultades de Jurisprudencia, Teología, Medicina y Cirugía, Farmacia y Veterinaria.
2. Las escuelas especiales de Caminos y Canales, Minas, Agricultura, Comercio, Bellas Artes, Artes y oficios, y las que el Gobierno juzgue conveniente establecer en lo sucesivo según lo requieran las necesidades públicas.
3. Los estudios de erudición de *Antigüedades o arqueología, Numismática y Bibliografía*.

El Título IV sobre *Disposiciones comunes a la segunda y tercera enseñanza*, regula, en el artículo 49, la clasificación de los profesores en estos centros que se dividirán en: Propietarios, Sustitutos y Supernumerarios. El Capítulo cuarto dentro

de este Título recoge lo concerniente a *los bibliotecarios*. El artículo 82 establece que en los Institutos elementales y Facultades mayores la Biblioteca estará a cargo de un catedrático nombrado por el claustro general al que se le dará una gratificación proporcional a su trabajo¹³⁶. En virtud del artículo 83 *será obligación de los catedráticos de arqueología, numismática, bibliografía e idiomas griego, árabe y hebreo cuidar de la biblioteca en los Institutos superiores, donde se halle establecida alguna de estas cátedras, haciendo de jefe el mas antiguo, si hubiere varios.*

Dentro del Título IV la Sección cuarta *Del régimen de los establecimientos literarios de segunda y tercera enseñanza* regula que, las universidades estarán al cargo de un rector y de un vicerrector, todas deliberaciones en asuntos arduos serán llevados al claustro general o al particular. El claustro general, donde hubiere universidad, se compondrá de todos los profesores propietarios, excepto los de lenguas vivas y dibujo. El claustro particular lo formarán los profesores propietarios de una facultad mayor, los del instituto superior o los del elemental en sus respectivos casos.

El Título V sobre *Disposiciones generales* contiene, en la Sección segunda, *Del Consejo de Instrucción pública*. En este sentido, la décima disposición especial incide al destacar:

Establecido el Consejo de instrucción pública, quedará extinguida la Dirección general de Estudios y la Comisión central de instrucción primaria, cuyos papeles y efectos se pasarán al Ministro de la Gobernación del Reino.

¹³⁶ En base a este Plan se crearon bibliotecas en escuelas, institutos y universidades. SAN SEGUNDO, Rosa. op. cit., p. 231.

El Título VI sobre *Disposiciones especiales de la ejecución del plan* regula la necesidad de dictar los reglamentos necesarios para llevar a efecto lo estipulado.

Aunque este Plan de estudios se suspendió inmediatamente por *Real orden de 4 de septiembre de 1836* podemos concluir diciendo influyó decisivamente en los Planes posteriores diseñados por los políticos Pidal y Mon, y Claudio Moyano.

4.2.4. El Plan de Estudios de 29 de octubre de 1836

Transcurrido un mes de la suspensión del Plan de estudios de agosto del mismo año y en la misma línea de impulsar y uniformizar la enseñanza pública, se promulga el *Real Decreto de 8 de octubre de 1836* que restablece interinamente la Dirección general de Estudios según la Constitución.

Teniendo en cuenta y llevados a cabo los informes previos elaborados por esta Dirección general de Estudios se publica la *Real orden de 29 de octubre de 1836* que aprueba el Plan general de Estudios. La disposición contiene el *Arreglo provisional de estudios para el próximo año académico*, y está dividida en cuatro secciones:

* La Sección primera *De la segunda enseñanza* recoge la enseñanza que se conoce con el nombre de *filosofía en las universidades* y que se completará en tres años o cursos académicos.

* La Sección segunda *De la enseñanza de tercera clase* recoge la enseñanza de las ciencias que son objeto de esta tercera clase y la forma de impartir las lecciones; regula lo referente a la jurisprudencia, la teología y la medicina en los capítulos uno, dos y tres, respectivamente.

* Por último la Sección tercera *De los libros de texto, de los exámenes y otras disposiciones generales*.

Como hemos observado, la finalidad perseguida con el arreglo provisional de estudios decretado en esta disposición ha sido desterrar los defectos de los estudios superiores. A partir de esta fecha, el Gobierno y la Dirección general del ramo consideran necesario llevar a efecto todas las mejoras gubernativas de la enseñanza superior reorganizando las carreras literarias y reformando convenientemente el régimen universitario. En este sentido, la *Real Resolución de 15 de julio de 1842* reorganiza las carreras literarias y reforma las universidades. Una de las medidas recogida en esta disposición es la unión definitiva de las dos facultades de jurisprudencia civil y canónica, formando una sola carrera literaria.

4.2.5. El Plan de Estudios de 1845

Con la proclamación de Isabel II como Reina, el 8 de noviembre de 1843, se modifica la estructura del Ministerio de la Gobernación de la Península dividiéndole en dos secciones; una de Gobierno y otra de Fomento. En este sentido, y teniendo en cuenta que la Constitución que estaba implantada en estos momentos no recogía, de forma expresa, el derecho a la educación como había ocurrido con anterioridad

durante los gobiernos liberales con la Constitución de 1812 y de 1837, uno de los problemas más urgente y acuciante, con el que se encuentra el poder, va a ser la enseñanza media y universitaria. A este respecto, el Marqués de Pidal, Ministro del ramo, elabora un Plan de Enseñanza que, en opinión de la historiografía, destruyó los últimos reductos de autonomía de las universidades para convertirlas en escuelas del Estado; plan que imponía y consagraba el sentido centralizador propio del liberalismo y que, según afirma Aurora Miguel, fue redactada por uno de sus colaboradores, Antonio Gil de Zárate¹³⁷.

El Plan de Estudios, relativo a las enseñanzas secundaria y superior¹³⁸, aprobado por *Real Decreto de 17 de septiembre de 1845* fundamenta, en un extenso preámbulo, la justificación del cambio en el Plan de estudios y la reestructuración de la enseñanza de la siguiente manera:

El Secretario del Despacho de la Gobernación, considera que las disposiciones anteriores y los esfuerzos hechos para reformar la instrucción pública con sujeción a un Plan general se han malogrado por circunstancias y obstáculos imprevistos. Por tanto, con este proyecto, pretende aunar todas las impresiones que han sido dadas por las ilustradas consultas del Consejo de Instrucción pública como los dictámenes de personas entendidas y las indicaciones de la prensa, esperando conseguir un plan a la justa medida.

¹³⁷ MIGUEL ALONSO, Aurora. *La Biblioteca de los Reales Estudios de San Isidro*. Madrid: Fundación Universitaria Española, 1996, p.147.

¹³⁸ La instrucción primaria había sido regulada por la Ley de 21 de julio de 1838.

También destaca como conveniente:

Establecer unidad y armonía en todas las escuelas del reino, terminando con la idea desintegrada que se tenía de las universidades, que eran independientes entre sí y hasta del Gobierno. Cada cual tenía su régimen, sus estudios, sus métodos y aun sus pretensiones distintas, no sólo disponían arbitrariamente de sus fondos sino que eran arbitrarios con la enseñanza. Ya desde fines del siglo pasado trató el Gobierno de poner solución a esta anarquía. Por ello, el plan de 1824, en medio de sus vicios y del espíritu reaccionario que le dominaba, hizo no obstante el gran servicio de establecer la uniformidad de enseñanza en todas las universidades y sujetarlas además a un mismo régimen¹³⁹.

El nuevo arreglo está destinado a realizar esta especie de centralización haciendo que concurran a perfeccionarse en un mismo centro los que intenten dedicarse a la enseñanza. Para ello atiende a la necesidad de organizar del modo más conveniente la instrucción pública del reino en la parte relativa a la enseñanza secundaria y superior y, a su vez, perfeccionar los estudios y dar a los profesores el decoro indispensable para que cumplan sus funciones. Esta idea ha sido puesta de manifiesto por María Carmona de los Santos al defender que la reforma que proponía significó un paso importante en el desarrollo del sistema educativo por lo que representaba de regulación general a los estudios secundarios como preparatorios para acceder a la universidad¹⁴⁰.

¹³⁹ A pesar de las reformas que conlleva el Plan Pidal, todo ello llegará a verse recogido en la Ley de Instrucción pública de 1857.

El Plan de Estudios está estructurado en cuatro Secciones:

* La primera Sección trata *de las diferentes clases de estudios de las materias que abraza cada una de ellas y del orden con que deberán darse las enseñanzas*. Clasifica las enseñanzas en cuatro estudios que se corresponden con los cuatro Títulos que integran esta sección:

Estudios de *segunda enseñanza*.

Estudios de *facultad mayor*.

Estudios *superiores*.

Estudios especiales.

Los estudios de *segunda enseñanza* recogidos en el Título I se dividen en elemental y de ampliación. Los estudios de *facultades mayores*, en el Título II, distinguen entre, Teología, Jurisprudencia, Medicina y Farmacia¹⁴¹, y los estudios *superiores*, en el Título III, estarían definidos en el artículo 31 como los estudios superiores que sirven para obtener el grado de doctor en las diferentes facultades o para perfeccionarse en los varios conocimientos humanos. El artículo 32 establece que, por ahora, y sin perjuicio de aumentarlas cuando convenga y lo permitan los fondos de instrucción pública, se impartirán las siguientes asignaturas, dentro de las *Ciencias; Bibliografía, historia y literatura médicas*.

El artículo 37 estipula que el grado de *Doctor en medicina* exige el estudio de las asignaturas que refleja el plan general; en el segundo año de los dos cursos obligatorios aparece como asignatura la *Bibliografía e historia de las ciencias*

¹⁴⁰CARMONA DE LOS SANTOS, María. *La Universidad Central y su distrito: Fondos documentales en el Archivo Histórico Nacional*. Madrid:Boletín de ANABAD XLVI (1996), n. 1, p. 169.

¹⁴¹ En efecto, el Plan Pidal crea, además, las Facultades Mayores de Jurisprudencia, Teología, Medicina y Farmacia; las dos primeras, por reforma de las Facultades clásicas de Cánones y Leyes, las dos últimas, por conversión en estudios universitarios de enseñanzas que hasta entonces se impartían en Escuelas especiales, y también la Facultad de Filosofía, heredera directa de la Facultad de Filosofía y Artes del Antiguo Régimen que superponía, en un mismo centro, los estudios secundarios más los grados propios de la Facultad mayor.

médicas, y, a tenor del artículo 38, el grado de Doctor en farmacia se obtendrá en dos años cursando, al igual que en el doctorado en medicina, la asignatura Bibliografía y la historia de las ciencias médicas.

Por último, el Título IV sobre los *estudios especiales*, entendiéndolos como aquellos que habilitan para carreras y profesiones que no estén sujetas a recepción de grados académicos.

* La segunda Sección del proyecto regula los *establecimientos de enseñanza, tanto públicos como privados, del número y la situación*. Entre los públicos estarán los institutos y las universidades. Los primeros destinados a la segunda enseñanza y los segundos destinados a la instrucción superior y enseñanza de las varias facultades, estos estudios son costeados por el Gobierno.

* La Sección tercera considerada como una de las más importantes del proyecto por cuanto sus contenidos influirán de manera ventajosa en los progresos de la enseñanza. Las bases principales donde se apoya este sistema educativo son:

- 1- La primera consiste en formar, con todos los catedráticos que enseñen en las universidades, un cuerpo único sin más distinción que la antigüedad y el diferente sueldo que corresponda a cada uno.
- 2- La segunda base tiene por objeto el proporcionar al catedrático aumentos de sueldo conforme a los años prestados de servicio. Por tanto el proyecto divide el cuerpo de profesores en varias series con diferentes dotaciones, formando un escalafón general en el que se ascenderá por antigüedad rigurosa.
- 3- La tercera base divide a los catedráticos en las tres categorías de entrada, ascenso y término, pudiendo ascender por oposición rigurosa.

* La última Sección del proyecto se refiere *al gobierno general y particular de los establecimientos de enseñanza tanto en la parte administrativa como en la disciplinaria y económica*. Dentro de esta sección del *Gobierno de la Instrucción pública*, el Título I *Administración general*, regula en el artículo 131 que la dirección y gobierno de la instrucción pública en todos los ramos corresponde al Rey por el Ministerio de la Gobernación de la Península.

Por lo que se refiere al *régimen de las universidades* reguladas en el Título II se introducen algunas variaciones que conducen a dar más fuerza y actividad a la acción administrativa dejando, sin embargo, a cada facultad la que le corresponde en la parte científica y de enseñanza; cada una tendrá su claustro particular con su decano al frente. El Claustro general cesará en el gobierno de la universidad pasando a manos del Rector.

Por último el Título III *De la administración económica* regula en el artículo 151 que habrá en Madrid una Junta llamada de *Centralización de los fondos propios de instrucción pública* cuyo principal cargo será:

1. *Administrar y distribuir los fondos que correspondan a los establecimientos de enseñanza incluidos en la ley de presupuestos en el artículo relativo a instrucción pública.*
2. *Examinar y aprobar las cuentas de los establecimientos que se mantengan con fondos provinciales.*
3. *Vigilar sobre la inversión de todas las rentas destinadas a establecimientos que no se sostengan con fondos provinciales o del Estado.*

4.2.5.1. El Reglamento de desarrollo del Plan de Estudios de 1845

Atendiendo a las disposiciones generales de este Decreto donde se establece que el Gobierno formará y publicará a la mayor brevedad posible los reglamentos que deben completar su desarrollo se aprueba por *Real Decreto de 22 de octubre de 1845*, el Reglamento para la ejecución del plan de estudios decretado el 17 de septiembre. El reglamento se estructura en cuatro secciones:

* Sección primera *Del gobierno general de la instrucción pública* dividida en cuatro Títulos.

En el Título I recoge lo concerniente al Ministerio competente y sus relaciones con los Rectores y Directores de establecimientos públicos de enseñanza. Por ello, el Ministerio de la Gobernación será competente en esta materia y la Junta de Centralización de fondos será la encargada de ejecutar lo establecido en materia económica.

El Título II *De los distritos Universitarios* establece la división de la Península e islas adyacentes en tantos distritos como universidades queden subsistentes siendo diez los distritos universitarios.

El Título III *Del Consejo de Instrucción pública* que a tenor del artículo nueve se compondrá de nueve miembros como mínimo y quince como máximo elegidos con destino a los ramos de; jurisprudencia, ciencias eclesiásticas, facultad de filosofía, ciencias médicas e instrucción primaria.

* La Sección segunda *Del régimen interior de los establecimientos de instrucción pública* esta estructurada en tres Títulos. El Título I *Del personal de los establecimientos* lo dedica a regular las figuras de los Rectores de Universidades, los Decanos, los Directores de Institutos, los Secretarios, los Bibliotecarios, los conserjes, bedeles, porteros y mozos.

- Los Rectores, como jefes únicos y exclusivos de sus respectivas universidades, dirigen y administran con sujeción a los reglamentos y ordenes del Gobierno. Les corresponde por lo tanto cuidar de que se observe con todo rigor cuanto se previene en el plan general de estudios y presente reglamento, corrigiendo las faltas que se siempre connotaran, y dando parte al Gobierno de los abusos que escapen de su ámbito competencial.
- Los Decanos dirigen sus facultades respectivas en lo relativo a la enseñanza y régimen interior de las mismas, con sujeción a los reglamentos y a las disposiciones del rector. Los Directores de instituto son los jefes del establecimiento y lo administran conforme a los reglamentos y ordenes del Gobierno.
- Los Secretarios generales de la Universidad dependerán exclusivamente del Rector. Entre sus obligaciones principales tendrán la de cuidar de los archivos y de la buena clasificación de los papeles.

El Capítulo V de este mismo Título regula *De los Bibliotecarios*. Según el artículo 110 serán bibliotecarios de las universidades o facultades los agregados que designe el Gobierno a propuesta del rector que estarán libres de la sustitución de cátedras, a no ser que se presten voluntariamente a este servicio.

El artículo 111 establece que los bibliotecarios custodiarán bajo su responsabilidad, los libros y demás efectos que se les entreguen; cuidarán de su buen arreglo y clasificación; formarán dos índices exactos y metódicos, uno por materias y otro por autores; asistirán a la biblioteca los días y horas que se les señalen y procurarán su aumento haciendo presente, al rector, sus necesidades para que solicite del Gobierno los recursos convenientes. Por el artículo 112 no se permitirá sacar libro alguno de la biblioteca excepto al rector, decanos y catedráticos y siempre, con el correspondiente registro de préstamo.

El Título II bajo el epígrafe *De los claustros* regula en el artículo 124 que el claustro general de las universidades se reunirá, previa convocatoria del rector, en los casos siguientes:

1. *Para la apertura anual del curso académico.*
2. *Para la solemne distribución de premios.*
3. *Cuando la universidad tenga que asistir a algún acto público.*
4. *Cuando dentro de la misma universidad se celebre algún acto solemne que a juicio del rector merezca la presencia de todos los doctores.*

El Título III y último de esta segunda sección, recoge *De los Consejos de Disciplina*.

* La Sección tercera *Del curso literario y método de enseñanza* regula todo lo concerniente a las facultades de Filosofía, Teología y Jurisprudencia y de las facultades de Medicina y Farmacia.

* Por último, la Sección cuarta *De los profesores* que trata de los ejercicios de oposición y de cómo obtener el título de regente .

4.2.6. El Plan de Estudios de 1847

Con la transferencia de competencias del Ministerio de la Gobernación al Ministerio de nueva creación de Comercio, Instrucción y Obras públicas, la disposición anterior queda derogada por el *Real Decreto de 8 de julio de 1847* modificando el plan de estudios de 17 de septiembre de 1845.

En atención a la propuesta del Ministro de Comercio, Instrucción y Obras públicas, y a las observaciones hechas por la Comisión nombrada para revisar el Plan de Estudios de 17 de septiembre de 1845 se fija definitivamente las bases de la instrucción pública en este Decreto. El plan divide la enseñanza en las siguientes clases:

Estudios de *segunda enseñanza*.

Estudios de *facultad*.

Estudios *superiores*.

Estudios *especiales*.

Las modificaciones que introduce el Real Decreto se recogen principalmente dentro del Título III de la Sección primera que regula *De los estudios superiores*. Según el artículo 21 son estudios superiores los que sirven para obtener el grado de

doctor en las diferentes facultades¹⁴². A su vez, el artículo 23 establece que el grado de *doctor* exigirá uno o dos años de estudios superiores después de la licenciatura según se prescriba en los reglamentos. Las asignaturas que se cursan en estos años académicos están relacionadas en el artículo 22. Destacamos dos de ellas por referirse a la materia que nos ocupa; *Bibliografía e historia de las ciencias eclesiásticas* y *Bibliografía, historia y literatura médicas*.

Con respecto a la *Administración general del Gobierno de la Instrucción pública* aparece regulado en el Título I de la Sección cuarta.

Dentro de las disposiciones generales, el artículo 119 regula que *el Reglamento de 22 de octubre de 1845* se reformará inmediatamente con sujeción a las disposiciones de este decreto y resultados de la experiencia.

4.2.6.1. El Reglamento de desarrollo para la ejecución del Plan de 1847

En atención a lo dispuesto en el articulado del Plan de estudios anterior se publica, por *Real Decreto de 19 de agosto de 1847*, el Reglamento para la ejecución del plan de estudios decretado el 8 de julio del mismo año y está estructurado en cuatro Secciones:

* La primera Sección *Del régimen interior de los establecimientos de instrucción pública* regula en el Capítulo primero del Título I lo concerniente a *Los*

¹⁴² El grado de *doctor*, a tenor del artículo 51, sólo se conferirá en la Universidad de Madrid y se establecerán los estudios necesarios para obtenerlo.

Rectores de las Universidades; recoge la figura y las competencias del Rector tal y como lo veíamos en el Decreto anterior. Así mismo, los Capítulos segundo, tercero, cuarto y quinto tratan sobre los *Decanos* y *Directores de Instituto*, los *Secretarios* y los *Bibliotecarios*, respectivamente.

* La Sección segunda *Del curso literario y método de la enseñanza*.

* La Sección tercera *De los profesores* regula en el Título V sobre los *agregados* y establece que los agregados tendrán como obligación desempeñar los cargos de secretarios, archiveros y bibliotecarios de las facultades sin eximirles de obligaciones generales anejas a su destino.

* Por último la Sección cuarta que trata sobre los *alumnos*.

Uno de los objetivos del nuevo plan, dentro de la idea de potenciar el ramo de la Instrucción pública, fue la creación de Comisiones para el arreglo de la Biblioteca nacional y de las Universidades por *Real Orden de 24 de diciembre de 1849*.

En este sentido, ha sido objeto de interés las bibliotecas públicas y las bibliotecas de las Universidades incrementado sus fondos con todo lo que se ha podido recoger de las que existían en los antiguos conventos. Por ello, presentan un caudal suficiente de obras de todo tipo de conocimientos llegando algunas a reunir un número considerable de volúmenes.

Regulado en los artículos primero y segundo de la disposición, el artículo uno estipula que en cada Universidad se formará una comisión compuesta del Rector, del bibliotecario, de un catedrático de las facultades de teología, jurisprudencia, medicina y farmacia, donde existan y otro de filosofía. Hará de secretario el más

joven. Por otra parte, el artículo dos establece que en la Biblioteca Nacional se creará otra comisión compuesta de todos sus bibliotecarios presididos por el mayor, y de un oficial de la misma como secretario. Se formará, a su vez, una comisión central, presidida por el Director general de Instrucción pública, compuesta por el bibliotecario mayor de la Nacional, de la Universidad de Madrid y de catedráticos de las facultades.

A fin de llevar a efecto lo dispuesto en el Plan de Estudios recientemente publicado respecto de las enseñanzas correspondientes a las facultades de medicina, farmacia, jurisprudencia y teología, la *Real orden de 21 de agosto de 1850* aprueba la distribución de las asignaturas que constituyen el plan vigente.

Dentro del Plan que corresponde a la Facultad de Medicina, observamos que en el noveno curso académico, aparece implantada como asignatura: *Bibliografía, historia y literatura de aplicación a las ciencias médicas*. De la misma manera en la Facultad de Farmacia, en el sexto año académico, también aparece la asignatura de *Bibliografía, historia y literatura de aplicación a las ciencias médicas*.

Por último, destacar que en los estudios de la Facultad de Teología se incluye la asignatura de *Bibliografía Sagrada*.

4.2.7. El Plan de Estudios de 1850

Por *Real Decreto de 28 de agosto de 1850* se reforma el Plan de estudios de 1847; la estructura de este Plan es similar a las que hemos venido analizando y se divide en cuatro Secciones:

* La Sección primera bajo el título *De las diferentes clases de enseñanza*, desarrolla las cuatro clases de estudios que comprende la instrucción pública, a saber:

Instrucción *primaria*.

Estudios de *segunda enseñanza*.

Estudios de *facultad*.

Estudios *especiales*.

En cuanto a los estudios de facultad se dividirán en tres períodos, que corresponderán, respectivamente, a tres grados académicos, estos grados son: los de *bachiller*, *licenciado* y *doctor*. En concreto, y para el grado de *doctor*, encontramos que en la Facultad de Farmacia y de Medicina se necesita cursar la asignatura de *Bibliografía, historia y literatura de las mismas ciencias*, y en la facultad de Teología la asignatura de *Bibliografía sagrada*.

* La Sección segunda trata *De los establecimientos de enseñanza* señalando que las Universidades del reino serán diez; una central y nueve de distrito. La central existirá en Madrid donde se enseñarán todas las facultades y sólo en ella se conferirá el grado de doctor¹⁴³. Las de distrito se emplazarán en: Barcelona, Granada, Oviedo, Salamanca, Santiago, Sevilla, Valencia, Valladolid y Zaragoza.

* La Sección tercera *Del profesorado público*.

* La Sección cuarta *Del Gobierno de la Instrucción pública* que según el artículo 150 la dirección y gobierno supremo de la instrucción pública, en todos los ramos, corresponde al Rey por el Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras

¹⁴³ CARMONA DE LOS SANTOS, María. Op. cit, pp. 169-170, resalta, al respecto, que la Universidad Literaria de Madrid comenzó a denominarse Central al inaugurarse el curso académico 1850-51.

públicas y el artículo 151 establece que habrá un Real Consejo de Instrucción pública cuya organización y atribuciones estarán siempre determinadas por un decreto especial.

4.2.7.1. El Reglamento de desarrollo para la ejecución del Plan de 1851

El Reglamento de desarrollo del Plan de estudios decretado el 28 de agosto de 1850 va a ser aprobado por *Real orden de 10 de septiembre de 1851*.

La disposición contempla la figura de *los bibliotecarios*¹⁴⁴, y así, el artículo 35 establece que habrá en cada Universidad un bibliotecario con los demás empleados necesarios para el servicio de la Biblioteca nombrados, todos ellos, por el Gobierno en el número y forma que se estime conveniente. También puede existir la figura de bibliotecario especial o un ayudante para todas aquellas bibliotecas que estén situadas en distinto edificio, en estos casos, dependerá del bibliotecario general de la Universidad.

En la misma línea, el artículo 36 recoge que los bibliotecarios custodiarán, bajo su responsabilidad, los libros y demás efectos que se les entreguen; cuidarán de su buen arreglo y clasificación; formarán dos índices exactos y metódicos, uno por materias y otro por autores y asistirán a la biblioteca los días necesarios.

Con respecto a los estudios de la segunda enseñanza, y en concreto, en la *Facultad de Teología* los cursos se distribuirán en ocho años y en el octavo año encontramos, formando parte del cuadro de asignaturas, la disciplina de *Bibliografía sagrada: historia literaria de las ciencias eclesiásticas*.

4.2.8. Reglamento de Estudios de 1852

Como consecuencia de los sucesivos cambios de Gobierno¹⁴⁵ producidos en el otoño de 1851, se reestructura la organización de la Administración central. Una primera medida se hace notar con el *Real Decreto de 20 de octubre de 1851* que crea el Ministerio de Fomento y agrega al Ministerio de Gracia y Justicia la Dirección general de Instrucción pública y varios negociados como el Negociado de Instrucción pública.

La finalidad que se propone con estos cambios redunda en mejorar la Instrucción pública, y en este sentido, se nombra una comisión que revise el plan de estudios vigente y que examine la disposición dando lugar al Reglamento de estudios que contiene el *Real Decreto de 10 de septiembre de 1852*. Este Plan modifica algunos aspectos relativos a los estudios secundarios y amplió notablemente las atribuciones de los Rectores. El Reglamento se estructura en cinco Secciones:

* La Sección primera *Del gobierno general de Instrucción pública*.

* La Sección segunda *Del régimen interior de los establecimientos de Instrucción pública* regula en el Título I *De las personas empleadas en los establecimientos de enseñanza*, y por ello, en el artículo quinto, sobre los Rectores

¹⁴⁴ Hemos observado que no todos los Reglamentos recogen en su articulado la figura del Bibliotecario y el establecimiento de la Biblioteca.

¹⁴⁵ Véase Capítulo II del presente trabajo.

de las Universidades, establece que dependerán, únicamente, del Ministro y de la Subsecretaría de Gracia y Justicia, serán los jefes natos de todos los establecimientos de Instrucción pública de su distrito universitario dependiendo de dicho Ministerio, a excepción, de los de Instrucción primaria y de los Seminarios conciliares. También regula en esta misma Sección las figuras de los Decanos, Directores de Institutos, y de los Bibliotecarios recogiendo las mismas atribuciones que veíamos en disposiciones anteriores.

* La Sección tercera *Del régimen económico de los establecimientos de Instrucción pública*.

* La Sección cuarta *Del curso literario y método de enseñanza*. Dentro de ésta sección el Título I recoge las *disposiciones comunes a todas las enseñanza* y el Título II *De la segunda enseñanza*.

El Título III *De la Facultad de Filosofía* establece, en el artículo 82, las secciones de esta facultad donde encontramos, dentro de la *Sección de Literatura* y en el cuarto año, la asignatura *Arqueología, numismática y paleografía*¹⁴⁶.

El Título IV *De la Facultad de Farmacia*. El Título V *De la Facultad de Medicina* con la distribución de los ocho cursos académicos recogiendo, en el octavo año, la asignatura *Historia crítica de la medicina y nociones de bibliografía*.

El Título VI *De la Facultad de Jurisprudencia*. El Título VII *De los materiales de Instrucción que ha de haber en los establecimientos públicos de enseñanza* y el artículo 112 recoge lo siguiente:

¹⁴⁶ Cátedras que no llegaron a crearse.

En todo establecimiento de enseñanza, cualquiera que sea su naturaleza, habrá una biblioteca y un archivo. Donde haya Universidad o Instituto provincial se reunirá a la de estas escuelas y se aumentará con los libros que se destinen para este objeto, en conformidad con el artículo 25 de esta disposición que establece que el bibliotecario general de la Universidad, ateniéndose a las noticias de las facultades, redactará una Memoria acerca del estado y de las necesidades materiales y científicas de las bibliotecas de la Universidad, la cual remitirá el Rector al Gobierno. Los Rectores formarán un reglamento para el buen orden de los archivos y bibliotecas.

* Por último, la Sección V *Del profesorado público*.

4.2.9. Programas de la Facultad de Teología

En el Reglamento aprobado por *Real Orden de 10 de septiembre de 1851*, para el desarrollo del Plan de Estudios de 1850, en los estudios de la segunda enseñanza de la Facultad de Teología estaba implantada, en el octavo curso académico, la asignatura de *Bibliografía Sagrada: historia literaria de las ciencias eclesiásticas*. Los cursos académicos en los que está programada esta disciplina son:

- Los cursos académicos 1855-1856 y 1856-1857 donde aparece esta materia bajo la denominación de *Bibliografía Sagrada*.
- Durante el curso académico 1857-1858 cambia de denominación volviendo a ser *Bibliografía e historia de las ciencias eclesiásticas*. Se repite con la misma denominación en el cuadro de asignaturas de enseñanza del curso 1858-1859.

- Para el curso 1861-1862 aparece como *Bibliografía Sagrada* manteniéndose en los cuadros de asignaturas de los cursos académicos 1862-1863, 1863-1864 y 1866-1867.

Por último queremos destacar que a partir de la reorganización de la enseñanza en el año 1868, la Facultad de Teología desaparece.

4.2.10. Programas de las carreras de Diplomática y Notariado

La *Ley de Instrucción pública de 1857* -que más adelante desarrollaremos- dentro de las enseñanzas superiores, incluye los estudios de *Diplomática* y los del *Notariado* reguladas en los artículos 59 y 60 respectivamente. El artículo 59 señala lo siguiente:

La carrera de Diplomática abraza entre otros estudios los de: Paleografía general, Paleografía crítica, Latín de los tiempos medios, y conocimientos del Romance, del Lemosín y gallego, Arqueología y Numismática, Bibliografía: clasificación y arreglo de archivos y bibliotecas, Historia de España en los tiempos medios y Ejercicios prácticos.

Por otra parte, el artículo 60 relaciona las asignaturas propias de la enseñanza superior del Notariado y observamos que, dentro del cuarto año de la carrera, se imparte una asignatura con la denominación de *Paleografía*.

Para la adaptación y ejecución de esta *ley de Instrucción pública* se publica el *Real Decreto de 23 de septiembre de 1857* que contiene las normas que han de regir durante el curso académico de 1857-1858 y contempla los programas de estas dos carreras. Dentro de las formalidades referentes a la iniciación del curso el artículo 58 reseña cómo han de hacerse los estudios de la enseñanza superior de Diplomática que acababa de implantarse¹⁴⁷.

Para el curso académico siguiente, el *Real Decreto de 20 de septiembre de 1858* aprueba los programas generales de estudios para las carreras de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, de Minas, de Montes, Industriales y Agrónomos y de las de Arquitectura, del Notariado y de Diplomática, y en cuanto al programa general de estudios de la carrera del Notariado, en el artículo primero se establece que para ingresar en la carrera del Notariado se necesita, entre otros requisitos; *estar versado en la lectura de letra del siglo XVI y posteriores*.

4.3 La Ley de Instrucción pública de 9 de septiembre de 1857: El proyecto de ley de Instrucción Pública de 9 de diciembre de 1855

4.3.1. El proyecto de Instrucción pública de 9 de diciembre de 1855

Las continuas reformas que sufre el Plan Pidal evidencian la necesidad de proceder a una norma que, con rango de ley, regule la compleja trama de la Instrucción nacional; a este espíritu responderá el *proyecto de ley de 9 diciembre de 1855*, conocido como el proyecto de Alonso Martínez que ha sido considerado como un proyecto global, referido a todos los grados de enseñanza, y que, salvadas determinadas singularidades, es también un proyecto que contiene muchos de los

¹⁴⁷ Para conocer los programas de la enseñanza superior de Diplomática véase epígrafe tercero del Capítulo V.

principios e instituciones del moderantismo español¹⁴⁸. Esta idea de aunar en una sola ley el sistema educativo, así como, el sentido que tiene buena parte del proyecto de Alonso Martínez veremos que es incorporada a la Ley de Instrucción Pública de 1857.

El proyecto se estructura en cuatro secciones integradas por Títulos, capítulos y artículos. Dentro de la sección primera *De las diferentes clases de enseñanza* el Título III, *De las Facultades*, introduce notables modificaciones respecto al número de Facultades y Escuelas especiales. El artículo once establece que habrá siete Facultades, a saber: de Literatura y Filosofía, Ciencias Exactas, Física y Naturales, de Ciencias Políticas y Administración, de Farmacia, de Medicina, de Jurisprudencia, y de Teología.

En el Título IV, de dicho proyecto de Ley, se establecen enseñanzas especiales cuya finalidad era abrir nuevas carreras a la juventud y difundir ciertos conocimientos poco desarrollados en España. Entre ellas figuraba la de Antigüedades¹⁴⁹ que de acuerdo con el artículo 51 quien realizase los estudios especiales de Antigüedades, si además tenía aprobada la segunda enseñanza, estaría habilitado para ser empleado en los archivos generales y en aquellos otros donde el Gobierno lo considerara necesario¹⁵⁰.

¹⁴⁸ *Historia de la Educación ... op. cit.*, pp. 32-33.

¹⁴⁹ Pedro Felipe MONLAU, op. cit., por GODÍN, Aurora. *La Escuela Superior de Diplomática y la Formación de los Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos en el Siglo XIX*. Boletín de ANABAD, XLV (1995), n. 3, p. 35, nos recuerda que en este proyecto se establecía, por los artículos 31 y 32, la enseñanza especial de *Antigüedades*, cuyos estudios debían comprender: *paleografía, latín y romances de la Edad Media, arqueología y numismática*.

¹⁵⁰ TORREBLANCA LÓPEZ, Agustín. *La Escuela Superior de Diplomática y la política archivística del siglo XIX*. En GENERELO, Juan José, MORENO LÓPEZ, Ángeles, (coordinadores). *Historia de los Archivos y de la Archivística en España*. Valladolid: Secretariado de Publicaciones e Intercambio Científico, Universidad de Valladolid, 1998, pp. 82-83.

4.3.2. Ley de 17 de julio de 1857

Con la publicación de la *Ley de 17 de julio de 1857* se autoriza al Gobierno para formar y promulgar una ley de Instrucción pública. La citada norma recoge el marco legal en el que ha de publicarse la Ley de Instrucción pública. La estructura es muy sencilla y está integrada por tres artículos donde se autoriza, por el artículo primero, *al Gobierno para formar y promulgar una ley de Instrucción pública con arreglo a unas bases:*

1. *La enseñanza puede ser pública o privada.*
2. *La enseñanza se divide en primera, segunda, tercera o superior.*
3. *Para ejercer el profesorado es indispensable haber obtenido el título correspondiente.*
4. *El profesorado público constituye una carrera facultativa en la que se ingresará por oposición salvo los casos que determine la ley, y se asciende por antigüedad y méritos adquiridos en la enseñanza.*
5. *El Jefe superior de Instrucción pública en todos los ramos es el Ministro de Fomento. Su administración central corre a cargo de la Dirección general de Instrucción pública y la local está encomendada a los Rectores de las Universidades, Jefes de sus respectivos distritos universitarios.*
6. *Se organizará la inspección de la instrucción pública en todos sus grados.*
7. *Al lado de la Administración superior habrá un Real Consejo de Instrucción pública y un Consejo universitario en cada cabeza de distrito. Habrá también en cada capital de provincia una Junta para el fomento y prosperidad de la enseñanza primera y segunda.*

8. *Como medios eficaces de ampliar y completar los progresos de las ciencias, el Gobierno procurará el aumento de las Academias, las Bibliotecas, los Archivos y los Museos y creará nuevos establecimientos de enseñanza para los ramos mas elevados de las ciencias.*

Para la publicación definitiva de la Ley se crea una Junta y, por *Real orden de 22 de julio de 1857*, se nombran los miembros que han de componer la Junta encargada de examinar la ley de instrucción pública.

4.3.3. Ley de Instrucción pública de 1857

Teniendo en consideración todas estas disposiciones previas se publica la *Ley de 9 de septiembre de 1857* regulando la Instrucción pública. La entrada en vigor de la ley vino a sancionar de manera definitiva muchas de las disposiciones anteriores. La estructura esta basada en cuatro Secciones integradas por Títulos y capítulos.

* La Sección primera regula todo lo relativo a *los estudios de primera, segunda y superior enseñanza*. La ley consolida los tres niveles educativos, define sus contenidos y categoriza los centros de cada nivel. En este sentido, la enseñanza secundaria y superior se separan, definitivamente, dedicándose los Institutos a impartir la enseñanza secundaria y las Facultades a la enseñanza superior.

* La Sección segunda *De los establecimientos de enseñanza* regula todo lo relativo a los establecimientos de enseñanza públicos y privados¹⁵¹. Con respecto a los establecimientos públicos de enseñanza superior y profesional el Capítulo IV del Título Primero de esta Sección segunda recoge, en el artículo 127, que para la

¹⁵¹ El articulado de la ley declaraba pública la enseñanza superior pero admitía la enseñanza privada en la primaria y secundaria, asegurando su control.

enseñanza de las facultades habrá diez Universidades; una central y nueve de distrito. Por este artículo se creaban dos nuevas Facultades; la de Derecho, que sustituía la antigua Escuela de Jurisprudencia y; la de Ciencias, constituida por las asignaturas que se estudiaban anteriormente en la Facultad de Filosofía y por una serie de ejercicios prácticos que debían realizarse en el Museo de Historia Natural y en el Observatorio astronómico. Además formaban parte del nivel superior las Escuelas Superiores.

Por otra parte, el artículo 138 establece que las enseñanzas superiores como la de Diplomática se darán en la Escuela de Madrid y, la del Notariado, en las de Madrid, Barcelona, Granada, Oviedo y Valladolid.

De esta manera, consolidaba la Ley los distritos universitarios del Plan Pidal; circunscripciones geográficas que reunían los centros públicos de enseñanza de varias provincias bajo la autonomía de una Universidad.

El Título IV *De las Academias, Bibliotecas, Archivos y Museos* que a tenor del artículo 158 las Academias, Bibliotecas, Archivos y Museos se consideran, para los efectos de esta Ley, dependientes del ramo de Instrucción pública. Para establecer Academias u otras corporaciones que tengan por objeto discutir o estudiar cuestiones relativas a cualquier ramo del saber humano era necesaria la autorización especial del Gobierno que sólo podrá concederla oído el Real Consejo de Instrucción pública.

Por otra parte, el artículo 163 establece que el Gobierno promoverá los aumentos y mejoras de las Bibliotecas existentes por ello, cuidará de que en ninguna provincia deje de haber, por lo menos, una Biblioteca pública y dictará las disposiciones convenientes para que en cada una de ellas haya aquellas obras de lectura útil.

En el ámbito archivístico, se organizará el sistema y gestión de Archivos distinguiendo entre los generales e históricos, y los de provincia. A su vez, clasificará los documentos que han de conservarse en ellos, los períodos de transferencia y la inspección que al Gobierno corresponde sobre los de las localidades y corporaciones. Se creará, tal y como establece el artículo 166, un Cuerpo de empleados en los Archivos y Bibliotecas exigiendo, a los que aspiren a entrar en él, especiales condiciones de idoneidad señalándoles la estabilidad que exige el buen servicio de estos ramos¹⁵².

* La Sección tercera, regula todo lo relativo *Del Profesorado en general*.

* Por último, la Sección cuarta *Del gobierno y administración de la instrucción pública*. Esta Sección, en el Título Primero, Capítulo I regula *Del Ministro de Fomento y del Director general de Instrucción pública* y establece que el gobierno superior de la Instrucción pública, en todos sus ramos y dentro del orden civil, corresponde al Ministro de Fomento. Por este motivo le incumbe:

1. *Aconsejar al Rey en todos los asuntos relativos a esta parte de Administración pública y refrendar las Reales disposiciones.*
2. *Presidir las secciones del Real Consejo de Instrucción pública y de las demás Corporaciones del ramo, siempre que asista a ellas.*
3. *Conferir el grado de Doctor y expedir los títulos profesionales.*

El artículo 244 establece lo que corresponde al Director general estando la administración central de la Instrucción pública, bajo las ordenes del Ministro de Fomento.

¹⁵² Refiriéndonos al Cuerpo Facultativo de Archiveros y Bibliotecarios véase el Capítulo III del presente trabajo.

El Capítulo II sobre *Real Consejo de Instrucción pública*, regula todo lo concerniente al Consejo de los artículos 245 a 258¹⁵³.

El Título segundo, de esta Sección, lo dedica a *La administración local* y establece que para los efectos de la enseñanza pública el territorio español se divide en tantos distritos cuantas son las Universidades. En cada distrito universitario habrá un Rector como Jefe inmediato de la Universidad respectiva y superior de todos los establecimientos de Instrucción pública que haya en él; los Rectores serán nombrados por el Rey.

En cuanto al *régimen de los establecimientos de enseñanza* que regula el Capítulo III establece que, al frente de cada Facultad habrá un Decano nombrado por el Gobierno entre los catedráticos de la misma y a propuesta del Rector. Por su parte, cada Escuela superior, profesional e Instituto tendrá un Director nombrado por el Gobierno y el artículo 272 establece que a los Decanos y Directores corresponde gobernar, bajo las ordenes del Rector, las facultades o establecimientos que tenga a su cargo.

El Capítulo IV del mismo Título y Sección *De las Juntas de Instrucción pública* establece, en su articulado, que en cada capital de provincia habrá una Junta de Instrucción pública, compuesta del Gobernador, Presidente, de un Diputado provincial, un Consejero provincial, un individuo de la Comisión provincial de Estadística, un catedrático del Instituto de la provincia, un Eclesiástico delegado del Diocesano y dos o más padres de familia. El Gobierno nombrará los individuos de las Juntas provinciales de Instrucción pública a propuesta en terna del Gobernador. En virtud del artículo 286 corresponde a estas Juntas:

1. *Informar al Gobierno en los casos previstos por esta ley y demas en que se les consulte.*
2. *Promover las mejoras y adelantos de los Establecimientos de primera y segunda enseñanza.*
3. *Vigilar sobre la buena administración de los fondos de los mismos establecimientos.*
4. *Dar cuenta al Rector, y en su caso al Gobierno, de las faltas que adviertan en la enseñanza y régimen de los Institutos y Escuelas puestas a su cuidado.*

Por último el Título cuarto de la misma Sección recoge lo relativo *De la Inspección*, siendo el Gobierno quien ejerza la inspección y vigilancia sobre los Establecimientos de instrucción, tanto públicos como privados; estos inspectores serán nombrados por el Rey. Según el artículo 306 serán inspectores generales de Instrucción pública los retribuidos del Real Consejo del ramo, a su vez, el artículo 307 recoge que el Gobierno publicará, oyendo al Real Consejo de Instrucción pública, un reglamento que determine las obligaciones y facultades de los Inspectores generales señalando las cantidades que han de percibir por vía de indemnización cuando salgan del lugar de su residencia en desempeño de su destino.

Por su parte, la *Real Orden de 20 de julio de 1866* prescribe el exacto cumplimiento de la ley de Instrucción pública y, en la exposición de motivos, muestra la importancia que tiene para España que esto sea así, considerando conveniente que el Gobierno cuide y vele por el cumplimiento de la ley en esta

¹⁵³ Su desarrollo corresponde a los epígrafes siguientes.

materia por cuanto afecta al interés que hay en la enseñanza y sus repercusiones culturales. Como expresa el texto *el Gobierno desea ardientemente el progreso científico, lo impulsará y favorecerá por cuantos medios estén a su alcance.*

Podemos concluir diciendo que, esta Ley, significó -a pesar de las modificaciones que se sucedieron en materia educativa consecuencia de los avatares políticos del último tercio del XIX- la estabilización del régimen educativo. Muchas de sus medidas como la fijación de los tres niveles educativos, el ordenamiento del profesorado, el régimen y gobierno de los centros tuvieron vigencia hasta bien entrado el Siglo XX. En realidad, no fue una ley innovadora, sino, una norma que venía a consagrar un sistema educativo cuyas bases fundamentales se encontraban tanto en el Reglamento de 1821 como en el Plan de 1836 y en el de 1845¹⁵⁴.

4.3.4. Modificaciones de la Ley de Instrucción pública

Viendo la necesidad de reformar la Ley de Instrucción pública el *Real Decreto de 29 de diciembre de 1876* autoriza al Ministro de Fomento para que presente a las Cortes el proyecto de ley de bases para la reforma de la misma.

La presentación que se lleva a las Cortes expone, como punto de partida, la urgente necesidad de reformar la Instrucción pública. En su redacción se toma como núcleo y principal fundamento legislativo el *Decreto de 21 de octubre de 1868* y la *Ley de 9 de septiembre de 1857*, a su vez, se observa el debido respeto al precepto constitucional y el interés de la ciencia concluyendo en el requerimiento de una

¹⁵⁴ *Historia de la educación...* op. cit. p. 33.

enseñanza oficial organizada y una amplia libertad lealmente concedida. En suma, la finalidad de la nueva Ley pretende armonizar la Constitución del Estado con la organización de la Instrucción pública.

Fundado en estas y otras consideraciones, y conforme con el parecer del Consejo superior de Instrucción pública, el Ministro de Fomento somete el presente Proyecto de Ley que reza así en el artículo primero:

Queda el Gobierno autorizado para formar y promulgar una Ley de Instrucción pública con arreglo a las siguientes bases

- 1- La enseñanza se divide en los tres periodos de primera enseñanza, segunda enseñanza y enseñanza superior. A su vez esta última se divide en universitaria y especial.*
- 2- La enseñanza será oficial, privada o doméstica.*
- 3- La enseñanza oficial se dará únicamente en los establecimientos públicos. El Gobierno dirigirá esta enseñanza y aprobará los textos a impartir.*

El Real Consejo de Instrucción pública propondrá oportunamente al Gobierno los programas generales donde se determinará la extensión y límites de cada asignatura.
- 4- La enseñanza superior será puramente científica.*
- 5- Costearán la Instrucción pública, tanto los alumnos como el Estado.*
- 6- El profesorado público constituye una carrera facultativa, en la cual se ingresa por oposición, salvo los casos que determine la Ley.*

- 7- *El Ministro de Fomento es el Jefe superior de la Instrucción pública. La Administración de la misma corre a cargo de la Dirección general del ramo. La local está encomendada a los Rectores de las Universidades, Jefes de los respectivos distritos universitarios. El Real Consejo de Instrucción pública es en la materia el cuerpo consultivo permanente del Gobierno. El universitario lo es del Rector*
- 8- *Para el fomento de la Instrucción pública habrá Juntas provinciales y municipales bajo la presidencia de las Autoridades que la ley señale.*
- 9- *Se organizará la Inspección de Instrucción pública en todos los grados.*
- 10- *Los cargos de Inspector y de Rector son incompatibles con el ejercicio del Profesorado. La ley determinará las condiciones indispensables para obtenerlos.*
- 11- *Con el mismo objeto y el de conservar las riquezas artísticas, científicas e industriales, el Gobierno sostendrá las Academias, Museos, Bibliotecas, Archivos y Conservatorios y procurará la creación de nuevos establecimientos semejantes.*
- 12- *Las Bibliotecas y Archivos de carácter general estarán a cargo del cuerpo especial del ramo. La Ley determinará las relaciones existentes entre los Jefes de los establecimientos de enseñanza y los de las Bibliotecas unidas a los mismos.*
- 13- *En todas las cabezas de partido habrá Bibliotecas populares.*

El artículo segundo autoriza al Gobierno para disponer de las sumas destinadas en el presupuesto anual de la instrucción pública, dando la oportuna cuenta a las Cortes del uso que se haga de esta autorización.

Otra modificación de la Ley se da, posteriormente, al interpretar el artículo 178 de la misma por la *Real Orden de 31 de Agosto de 1889* que prescribe lo siguiente:

Los profesores que por supresión o reforma quedaren sin colocación, percibirán las dos terceras partes del sueldo que disfrutaban, hasta tanto que vuelvan a ser colocados.

Con el presente decreto, estructurado en dos artículos, la redacción definitiva del artículo primero sería:

Que el artículo 178 de la Ley de Instrucción pública, que reconoce a los profesores el derecho de percibir los dos tercios del sueldo, solamente es aplicable a los que queden sin colocación por supresión o reforma y en manera alguna a los que hubieren sido elegidos Diputados a Cortes o por cualquier otra causa no desempeñasen sus cátedras o cargos.

Por el artículo segundo:

Que por lo tanto cesan desde el 1º del corriente mes en el percibo del sueldo de excedentes los profesores de Universidades, Institutos, Escuelas especiales e individuos del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios y cualesquiera otros funcionarios dependientes de este Ministerio que por asimilación a los casos comprendidos en el mismo artículo 178 hayan venido percibiendo las dos tercera partes del sueldo por ser Diputados a Cortes, o por cualquier otra causa distinta de las expresadas en dicho artículo.

4.4. Reorganización de la enseñanza superior: las Facultades de Filosofía y Letras, Derecho y Farmacia

4.4.1. Los estudios de Filosofía y Letras

En el año 1873 el Gobierno de la República, a través del Ministro de Fomento, con el interés de mejorar la enseñanza pública somete, a la aprobación del Gobierno, el *Decreto de 2 de junio de 1873* reorganizando la enseñanza de las actuales Facultades de Filosofía y Letras; y de Ciencias exactas, Físicas y Naturales. Según el artículo primero, estas Facultades, se dividirán en cinco con las siguientes denominaciones: *De Filosofía, de Letras, de Matemáticas, de Física y Química, y de Historia natural.*

Una de las finalidades que se pretende con estas medidas es suprimir la Escuela de Diplomática mediante el proceso de refundir sus asignaturas en la nueva Facultad de Letras, cuestión que se aprecia en el artículo cuarto al describir los estudios que componen la Facultad de Letras, donde en la relación de asignaturas, unas de carácter obligatorias y otras optativas, resalta las asignaturas de *Paleografía diplomática y literaria, con nociones de organización y régimen de los Archivos, y Epigrafía, Gliptica y Numismática, comprendiendo la historia de los sistemas métricos, ponderales y monetarios.* Sin embargo; a pesar del intento, la ejecución de esta medida fue suspendida por otro Decreto de 10 de septiembre siguiente.

4.4.2. Los Planes de estudio de la Facultad de Derecho

Entre las reformas más apremiantes, en el ámbito docente, se encuentra el plan de estudios de la Facultad de Derecho que se intenta orientar a las aplicaciones

prácticas del título académico. Una de las primeras innovaciones, en este sentido, es la fusión, en una sola carrera académica, de las tres ramas que en estos momentos se encuentran fraccionadas. Por su parte, se enaltece la carrera Notarial entendiendo que el Notario tiene, en la vida social y jurídica, funciones *tan delicadas* que su ejercicio requiere una variedad de conocimientos.

Por lo tanto, teniendo en consideración las razones que el Ministro de Fomento ha expuesto, y con el previo acuerdo del Consejo de Instrucción pública y del Consejo de Ministros, se dicta el *Real Decreto de 2 de septiembre de 1883* disponiendo que las enseñanzas de la Facultad de Derecho serán comunes a las dos secciones que hoy comprende determinando, a su vez, las asignaturas que han de constituir las. El artículo primero asigna en el *Período de la Licenciatura* la disciplina de *Literatura española y nociones de Bibliografía y Literatura jurídicas de España*¹⁵⁵. Por su parte, el artículo quinto establece que la distribución de estudios se hará por grupos y que serán siete; en el primer grupo estará integrada la asignatura *Literatura española y nociones de Bibliografía y Literatura jurídicas de España*.

Por lo que se refiere a los estudios del Notariado, el artículo undécimo regula que la Facultad de Derecho comprenderá también la carrera del Notariado y el artículo duodécimo establece que los estudios del Notariado se cursarán en cuatro grupos y en las mismas clases que los alumnos de Derecho. Referido al Notariado la disposición constata que, aprobadas las asignaturas incluidas para los cuatro grupos establecidos y previo el examen de *Paleografía*, con arreglo a lo determinado en la *Real Orden de 1 de septiembre de 1880*, se expedirá al alumno de esta carrera el certificado o título de aptitud para el ejercicio de la fe pública.

¹⁵⁵ Esta disciplina la encontramos en el cuadro de asignaturas del curso académico 1883-1884 dentro de los estudios de la Facultad de Derecho que, hasta ahora, no habíamos observado. *Memoria-Anuario de la Universidad Central para el curso 1883-1884*. Madrid: Tipografía de Gregorio Estrada, 1884.

Unos meses después por *Real Decreto de 16 de enero de 1884* se reorganiza los estudios de la Facultad de Derecho para adaptarse a los principios que inspiraron las reformas del *Decreto de 22 de noviembre de 1883* relativas a la validez académica de los estudios privados y nombramiento de vocales para los Tribunales de exámenes de facultad. Lo que se pretende es fomentar y mantener concentrada la atención sobre materias de propio y legítimo interés en la enseñanza jurídica. Esto justifica la supresión de las tres asignaturas llamadas preparatorias que corresponden a estudios de la Facultad de Filosofía y Letras teniendo su completo desarrollo e iniciación en la segunda enseñanza; sólo merece respetarse y otorgarle la debida importancia a la asignatura de *Nociones de Bibliografía y Literatura jurídicas de España*, dándole cabida en los estudios complementarios de la carrera. También se pretende sustituir denominaciones de asignaturas por otras denominaciones más afines a su contenido.

El preámbulo justifica el significado de la asignatura de *Literatura y Bibliografía jurídicas en general y en particular de España*, en la Facultad de Derecho, y por ello reza así:

Es de gran interés que los que ya tienen declarada la intención de dedicar su vida al cultivo y enseñanza de la ciencia del Derecho adquieran, cuando aun son jóvenes, noticia de las obras que pueden consultar con más fruto para ampliar y depurar las nociones con que ha enriquecido su inteligencia en las Escuelas, y lo es mas aún que se les den a conocer los trabajos hechos por nuestros mayores en los diversos ramos de la ciencia del Derecho, trabajos muchos desconocidos, por la omisión en las obras históricas de autores y libros que figurarían en ellas dignamente, si nosotros no fuéramos los primeros en dejarlos caer en injusto olvido. A esto responde la asignatura mencionada.

Tomando en consideración estos aspectos se decreta lo siguiente en el artículo primero:

Se suprimen en los estudios del periodo de la licenciatura de la Facultad de Derecho la asignatura de Literatura española y Nociones de Bibliografía y Literatura jurídicas de España.

Por otra parte, el artículo octavo dispone lo siguiente:

El periodo del doctorado en la Facultad de Derecho, comprenderá nueve asignaturas entre las que se incluye la Literatura y Bibliografía jurídicas en general y en particular de España.

A su vez, el artículo noveno establece:

Para aspirar al título de Doctor bastará cursar y aprobar cinco de las nueve asignaturas, a elección del alumno. Entre las cinco figurarán necesariamente la de Literatura y Bibliografía jurídicas.

La disposición transitoria novena regula que con arreglo al presente decreto se anunciarán inmediatamente, en turno de oposición, la Cátedra de *Literatura y Bibliografía jurídicas en general y en particular de España*, que resulten vacantes en la Universidad de Madrid.

Por *Real Decreto de 25 de enero de 1884* se suspende la ejecución de los Decretos de 16 de este mes sobre organización de los estudios de las Facultades de Derecho, Medicina y Farmacia. La exposición de motivos justifica la finalidad de la disposición entendiendo razonables, las reformas que contenían los planes anteriormente publicados, además el Ministro no considera conveniente empezar las reformas por las Facultades superiores cuando la primera y segunda enseñanza no han preparado suficientemente a los alumnos.

La única medida importante referida a la Universidad fue la reforma del Plan de estudios de la Facultad de Derecho ordenada por el *Real Decreto de 14 de agosto de 1884* modificando el cuadro de asignaturas de la carrera. Una vez refundidas las dos secciones de la Facultad de Derecho y entendiendo que deben ampliarse los conocimientos de los futuros licenciados se fijan las materias que han de cursar los alumnos de esta Facultad. Las modificaciones que se incorporan en este nuevo plan, con respecto al antiguo, son las siguientes:

1. Desaparecen las asignaturas de *Bibliografía* en la docencia a impartir en la carrera.
2. Una consecuencia del nuevo plan se da en la distribución de cátedras entre los profesores; quedando encargado el Catedrático de *Literatura española y Nociones de Bibliografía y Literatura jurídica de España* de la asignatura de *Literatura general y española*.
3. Para expedir a los alumnos el título de aptitud para el ejercicio de la fe pública se necesita aprobar las asignaturas de la carrera y superar un examen de Paleografía, tal y como se venía haciendo desde la publicación de la *Real Orden de 1 de septiembre de 1880*.

Por *Real Decreto de 28 de julio de 1892* se reducen las plantillas del personal y los créditos de material de los establecimientos dependientes de la Dirección de Instrucción pública y a cuyo fin, se suprimen cátedras de varias asignaturas en algunos Institutos de segunda enseñanza y en las Facultades de Derecho, Filosofía y Letras y Ciencias, se determina la situación de los Catedráticos de asignaturas suprimidas.

En estos momentos, volvemos a ver en el cuadro de asignaturas de los cursos académicos, 1892 a 1894, dentro del período de doctorado, la asignatura de *Literatura y Bibliografía jurídica*¹⁵⁶ continuando en los planes del curso académico 1893-1894.

Por último, la *Real Orden de 3 de mayo de 1895* reforma el cuadro de analogías de las asignaturas de la Facultad de Derecho. En esta disposición se publica la reforma a dicho cuadro y las modificaciones fijadas por el Consejo de Instrucción pública. Consideramos importante destacar que en la relación de asignaturas está incluida la de *Literatura y Bibliografía jurídica*, en el período de doctorado, permaneciendo durante todos los cursos académicos de los años noventa hasta principios del siglo XX.

4.4.3. Los planes de estudio de la Facultad de Farmacia

Reformados los estudios de la Facultad de Farmacia por *Decreto de 16 de enero de 1884* se considera necesario una nueva reforma que viene regulada por el *Real Decreto de 24 de septiembre de 1886*. Esta disposición pretende armonizar

¹⁵⁶ *Memoria-Anuario de la Universidad Central del curso académico 1892-1893*. Madrid: Tipografía de Gregorio Estrada, 1893.

estos estudios con el progreso científico siendo conveniente aumentar el cuadro de asignaturas.

El presente Decreto establece en el artículo segundo que los estudios de Farmacia constituirán tres periodos: *Período preparatorio*, *Período de Licenciatura* y *Período del Doctorado* cursándose en este último la asignatura de *Historia crítica de la Farmacia y Bibliografía farmacéutica*. La implantación de esta disciplina en los cuadros de asignaturas del período de Doctorado, se recoge desde el curso académico 1887-1888 hasta el curso 1899-1900 que ya desaparece. También observamos que no está implantada en la enseñanza libre de la Facultad de Farmacia¹⁵⁷.

El *Real Decreto de 28 de julio de 1892* que pretende reducir la plantilla del personal y los créditos de material de los establecimientos dependientes de la Dirección de Instrucción pública regula, en el artículo siete, que el período del Doctorado en dicha Facultad queda reducido a las cuatro cátedras obligatorias de *Literatura y Bibliografía jurídicas*, Historia de la Iglesia y Colecciones canónicas, Legislación comparada e Historia de los Tratados que, tal y como hemos apuntado, desaparece en el curso 1899-1900.

4.5. Cuerpos consultivos y de inspección en asuntos de enseñanza

4.5.1. Creación de la Dirección general de Estudios

Comenzamos este epígrafe tomando como punto de referencia la *Constitución de 1812* por considerar que los nuevos modelos de educación y enseñanza parten y se proyectan desde su publicación.

¹⁵⁷ Se han contrastado las *Memorias-Anuarios de los cursos 1887-1888 al curso académico 1898-1899 de la Universidad Central*. Madrid: Tipografía de Gregorio Estrada.

En efecto, la Constitución de 1812 recoge en el Título IX bajo el epígrafe *De la instrucción pública* todo lo relacionado con el establecimiento de centros objeto de la instrucción pública, creación de Universidades y establecimientos de instrucción que se juzguen convenientes para la enseñanza, a su vez, también contempla la formación de un Plan general de enseñanza uniforme en todo el reino y la creación, por el artículo 369, de una Dirección general de Estudios¹⁵⁸ que canalizará y llevará a cabo la inspección de la enseñanza pública siendo desarrollada legislativamente por el Gobierno.

Las atribuciones que se encomiendan a esta Dirección general de Estudios son reguladas en el *Reglamento general de Instrucción pública* aprobado por *Decreto de 29 de junio de 1821* estipulando, en el artículo 54 que la Dirección general de Estudios será la competente en todo lo necesario para el desempeño de las enseñanzas. A su vez, el Título VIII regula *De la Dirección general de estudios* de los artículos 92 a 107.

El artículo 92 establece que de acuerdo con el artículo 369 de la Constitución de 1812 *se creará una Dirección general de Estudios competente en la inspección y arreglo de la enseñanza pública*. Por otra parte, el artículo 93 regula la composición de esta Dirección general formada por siete individuos; siendo Presidente el más antiguo por el orden de su nombramiento.

Para ser nombrado Director se requiere haber dado pruebas positivas de saber, haber enseñado en los establecimientos públicos por espacio de seis años, o haber publicado una obra que acredite su sólida instrucción. El cargo de Director será vitalicio e incompatible con otro destino. El artículo 101 regula las facultades de la Dirección general de estudios a saber:

¹⁵⁸ Dirección general que desaparecerá y resurgirá cíclicamente a lo largo del siglo.

1. *Velar sobre la enseñanza pública y cuidar de que se observen los reglamentos establecidos.*
2. *Recibir las solicitudes, propuestas y reclamaciones de todos los cuerpos literarios y escuelas de la Monarquía para pasarlas al Gobierno con su informe.*
3. *Cuidar de la formación de los diferentes planes y reglamentos necesarios para el arreglo de la instrucción pública, valiéndose de las personas y medios que crea necesario y oyendo en lo perteneciente a la parte científica a la Academia nacional, antes de presentar el reglamento al Gobierno.*
4. *Promover la mejora de los métodos de enseñanza y la formación y publicación de tratados elementales por medio de premios a sus autores.*
5. *Presentar las alteraciones que puedan convenir en la parte científica de los estudios, siempre a propuesta de la Academia nacional.*
6. *Cuidar de la conservación y aumento de todas las bibliotecas públicas del reino.*
7. *Dar cuenta anualmente a las Cortes del estado de la enseñanza pública en una memoria.*
8. *Ejercer todas las demás facultades que se le señalen en su respectivo reglamento.*

4.5.2. Supresión de la Dirección general de Estudios y creación de la Inspección general de Instrucción pública (1825-1834)

Durante el segundo período de gobierno del Rey Fernando VII y hasta la creación del Ministerio de Fomento, por *Real Decreto de 5 de noviembre de 1832*, la enseñanza estaba atribuida al Ministerio de Gracia y Justicia y directamente

vinculada a la Inspección general de Instrucción pública que se crea, en 1825, al suprimirse la Dirección general de Estudios¹⁵⁹ y ejerce sus funciones hasta 1834 que, por Real Decreto de 25 de septiembre, vuelve a crearse. Las competencias encomendadas a la Inspección están reguladas en los *Reglamentos de 25 de noviembre de 1825 y el de 13 de marzo de 1826*.

En este sentido, a partir de la publicación del *Real Decreto de 9 de noviembre de 1832* todas las competencias de Instrucción pública, relacionadas con la enseñanza y la Inspección general de Instrucción pública, son asumidas por el nuevo Ministerio de Fomento.

Por lo que respecta al ámbito provincial, los principales responsables de este Ministerio en las provincias serán los Subdelegados de Fomento. La *Real Orden de 20 de marzo de 1834* fija las facultades de los Subdelegados de Fomento¹⁶⁰ en materia de instrucción pública, a saber:

1. *Cuidarán de que en las Bibliotecas públicas, Colegios de humanidades, Academias de nobles artes y de bellas letras, en Escuelas, Corporaciones, etc. se cumplan los reglamentos vigentes y las ordenes del Gobierno.*
2. *Se exceptúa de lo dispuesto en el punto precedente las Universidades literarias, que continuarán dependiendo única y directamente de la Inspección general de Instrucción pública.*
3. *También cuidarán de que no se desvíen ni malversen los fondos y rentas aplicados a los Establecimientos literarios y de enseñanza de todas clases.*

¹⁵⁹ CARMONA DE LOS SANTOS, María. *Guía del Archivo Central del Ministerio de Educación y Ciencia*. Alcalá de Henares: Ministerio de Educación y Ciencia. Dirección general del Patrimonio Artístico y Cultural, 1975, p. 83.

¹⁶⁰ Esta figura se denominará Gobernador civil a partir del *Real Decreto de 13 de mayo de 1834*.

4. *Propondrán a la Inspección general de Instrucción pública y a cualesquiera otras Corporaciones superiores de que los mismos Establecimientos dependan las reformas y mejoras de que les consideren susceptibles y dirigirán informadas al Gobierno sus solicitudes.*
5. *Por último, protegerán y promoverán la enseñanza en todos sus ramos y con especialidad el de las primeras letras, comunicando para ello las ordenes que estén dentro del círculo de sus atribuciones como Jefes principales en las provincias, o acudiendo al Gobierno en solicitud de la correspondiente autorización en los casos de que los reglamentos vigentes lo estimen necesario.*

4.5.3. Desaparición de la Inspección general de Instrucción Pública y creación de la Dirección general de Estudios (1834-1836)

Con el cambio de denominación del Ministerio en Secretaría de Estado y del Despacho del Interior, por *Real Decreto de 13 de mayo de 1834*, se modifica la estructura departamental de la Secretaría y por, *Real Decreto de 25 de septiembre de 1834* se suprime la Inspección general de Instrucción pública creándose, en su lugar, una Dirección general de Estudios que seguirá teniendo las mismas atribuciones y facultades que estaban cometidas a la suprimida Inspección hasta la publicación de un nuevo decreto que designe las obligaciones de la Dirección.

El preámbulo al Decreto establece:

Para la formación de un Plan general de Instrucción pública que extienda la esfera de la enseñanza y contribuya a propagar los conocimientos más útiles, tuve a bien nombrar el 31 de enero último una comisión

compuesta de personas ilustradas y celosas del bien público, pero considerando que sus trabajos deben ser en mucha parte fruto de conocimientos prácticos sobre el estado actual de la instrucción pública en el reino, de los establecimientos literarios, de los efectos que ha producido el plan vigente de estudios y de los medios con que puede contarse para realizar las útiles reformas de este importante ramo, que estos hechos tan indispensables solo se hallan reunidos en la Inspección general de Instrucción pública y en sus dependencias y que sin ellos apenas puede formarse el nuevo plan de estudios adecuado a las necesidades presente y que ha de influir tan directamente en la sólida instrucción de la juventud y en los progresos del saber.

Por lo tanto, el artículo uno del Decreto suprime la Inspección general de Instrucción pública, e implanta una Dirección general de Estudios que estará compuesta de cinco miembros propietarios y dos suplentes. El artículo tres recoge:

Que las facultades de la Dirección general se fijarán por un decreto especial una vez aprobado el Plan de Estudios. Mientras tanto, ejercerá las mismas atribuciones y facultades que tenía cometidas la suprimida Inspección en los Reglamentos de 25 de noviembre de 1825 y 13 de marzo de 1826.

Por otra parte el artículo cuatro dispone:

La Dirección general propondrá los autores que deban servir de asignatura en las universidades para la apertura del curso académico y así por Real Decreto de 30 de septiembre de 1835 se manda que por este año continúen abiertas las Universidades como anteriormente y se señalan los libros de derecho que se han de dar.

En este sentido el artículo cinco añade:

También la Dirección general tomará conocimiento del estado actual de las universidades y demás establecimientos literarios que han estado a cargo de la Inspección así como de sus rentas y arbitrios para calcular acertadamente sobre las reformas necesarias, exceptuando las escuelas de primera enseñanza.

Por último, se le encomienda examinar los trabajos hechos por los miembros encargados de la formación del Plan de Estudios del 31 de enero para concluir y aprobar el definitivo.

4.5.4. Creación del Consejo de Instrucción Pública en 1836

Con el restablecimiento de la Constitución de 1812 y el cambio de denominación del Ministerio, bajo la presidencia de Francisco Javier de Istúriz¹⁶¹ en agosto de 1836, la Secretaría de Estado y del Despacho de la Gobernación del Reino pretende dar a la enseñanza pública el impulso conveniente para unificarla. Resultando el Plan General de Instrucción Pública aprobado por *Real Decreto de 4 de agosto de 1836*.

Por este Real Decreto se suprime la Dirección general de Estudios y se crea el Consejo de Instrucción pública; así, el Título V, sobre *Disposiciones generales*, en la Sección segunda regula *Del Consejo de Instrucción pública*. El artículo 126 prescribe que:

¹⁶¹ Véase Capítulo III de este trabajo.

Se establecerá un Consejo de instrucción pública que se compondrá de un presidente, de doce a veinte consejeros y un secretario de Real nombramiento.

El secretario, en virtud del artículo 127, tendrá voz, pero no voto en las deliberaciones.

Por su parte el artículo 128 dispone que:

Los consejeros serán nombrados por el Gobierno entre los individuos mas distinguidos por su saber en las diferentes carreras científicas y literarias, debiendo recaer una mitad por lo menos de los nombramientos en personas que hayan pertenecido o pertenezcan a la clase de profesores.

El artículo 130 resalta que *el Consejo se dividirá en varias secciones encargadas de preparar los trabajos especiales que se han de discutir en Junta General* y por ello el artículo 131 establece que el Consejo examinará y dará su dictamen en los siguientes puntos:

- 1. Sobre todos los reglamentos o estatutos parciales que hayan de regir en cualquier establecimiento público científico o literario.*
- 2. Sobre la planta de cualquier de estos establecimientos que se trate de formar de nuevo.*
- 3. Sobre la conservación o supresión de los que existen en el día.*
- 4. Sobre las modificaciones que admitan los métodos de estudios: la especie, número y serie sucesiva de cursos en cada carrera.*

El artículo 132 añade que el Consejo será oído en la provincia de los rectorados y de las cátedras de los institutos superiores de las facultades mayores; u otros destinos puramente científicos o literarios de Real nombramiento. Por otra parte, el artículo 133 recoge que *el Consejo propondrá al Ministro de la Gobernación los inspectores o visitadores extraordinarios que en cada caso juzgue necesarios para inspeccionar los establecimientos de instrucción pública costeados por el Estado o por particulares.*

Según el artículo 134 *el Consejo informará:*

1. *Sobre la remoción de catedráticos propietarios en los establecimientos públicos.*
2. *Sobre las reclamaciones de los profesores acerca de la suspensión u otras penas disciplinarias que las juntas de disciplina les hubiesen impuesto.*
3. *Sobre las quejas dadas por los alumnos en los casos de faltas graves.*

Por último, el Título VI sobre *Disposiciones especiales de la ejecución del plan* regula la necesidad de dictar los reglamentos necesarios para llevar a efecto lo estipulado y la décima disposición especial regula:

Establecido el Consejo de instrucción pública, quedará extinguida la Dirección general de Estudios y la Comisión central de instrucción primaria, cuyos papeles y efectos se pasarán al Ministro de la Gobernación del Reino.

4.5.5. Restablecimiento de la Dirección general de Estudios (1836-1843)

Debido a los cambios producidos en la Secretaría del Despacho de la Gobernación de la Península y la suspensión del Plan de Estudios se promulga el *Real Decreto de 8 de octubre de 1836* que restablece, interinamente, la Dirección general de Estudios según la Constitución. Así lo confirma el artículo primero al decir:

Que se restablezca interinamente y hasta la resolución de las Cortes, la Dirección general de Estudios conforme al artículo 369 de la Constitución y al 93 del Reglamento General de Instrucción pública de las Cortes de 29 de junio de 1821.

A su vez, el artículo segundo establece:

Las facultades que tendrá la Dirección serán las que señale el Reglamento de las Cortes¹⁶². Según el artículo tercero, la Dirección propondrá el plan de enseñanza que deba regir el próximo curso académico.

El artículo sexto estipula que *la Dirección comprenderá como parte de su informe la conveniencia o no del traslado de la Universidad de Alcalá¹⁶³ a la capital, así como los extremos que conduzcan a mejorar el sistema de enseñanza.*

¹⁶² Véase artículo 101 del Reglamento general de Instrucción pública.

¹⁶³ Refiriéndonos a la Universidad de Alcalá la *Real orden de 29 de octubre de 1836* dispone el traslado a Madrid de esta Universidad, dando a sus estudios la extensión correspondiente para que sea un establecimiento digno de la capital de la Monarquía.

Teniendo en consideración la política de fomento del ramo de la instrucción pública; y la necesidad de reorganizar las universidades y establecimientos de enseñanza así como plantear un nuevo plan de instrucción pública, el Gobierno - después de modificar la planta del Ministerio de la Gobernación de la Península- considera conveniente reestructurar la organización de la actual Dirección general de Estudios y, en este sentido, se publica el *Real Decreto de 1 de septiembre de 1838* que da nueva organización a la Dirección general.

Por el artículo primero, *la composición de la Dirección que hasta ahora había estado formada por siete miembros, en adelante se compondrá de doce*. El artículo segundo señala que *tendrá las atribuciones indicadas en el artículo 2º del Real decreto de 8 de octubre de 1836*.

Por último, el artículo cuarto dispone que *esta Dirección propondrá las reformas que estime conveniente en su reglamento interior fijando, de modo preciso, sus relaciones con los establecimientos de su inspección con las autoridades y con el Gobierno*.

4.5.6. Supresión de la Dirección general de Estudios y creación del Consejo de Instrucción pública (1843-1857) y de una Sección de Instrucción pública

Durante el período de regencia del general Espartero y hasta la proclamación de Isabel II como Reina el 8 de noviembre de 1843, las estructuras ministeriales continuaron sin cambios.

Por lo que respecta a la Secretaría de Estado y del Despacho de la Gobernación de la Península, seguirá con las mismas competencias y sufrirá como única modificación la supresión de la Dirección general de Estudios por *Decreto de 1 de junio de 1843*. Por ello el artículo uno dispone: *Queda suprimida la Dirección general de Estudios*.

El artículo dos establece:

Las atribuciones ejecutivas que hasta este momento ha tenido la Dirección general de Estudios se incorporarán al Ministerio de la Gobernación de la Península.

Por el artículo tres:

Se crea un Consejo de Instrucción pública compuesto de un presidente y de doce a veinte consejeros nombrados en ambos casos, por el Gobierno.

El Consejo, a tenor del artículo cinco, examinará y dará su dictamen cuando sea consultado por el Gobierno en asuntos sobre la creación, conservación y supresión de los establecimientos literarios, sobre los métodos de estudio, los reglamentos de los establecimientos de instrucción pública, sobre provisión y remoción de rectores y catedráticos, y sobre todos los puntos relativos a la enseñanza, siempre que el Gobierno tenga por conveniente oírle.

A su vez, el artículo siete recoge que:

Para la centralización de los fondos propios de los establecimientos

de instrucción pública se creará una comisión compuesta de cinco individuos, de los cuales tres, por lo menos, serán catedráticos en propiedad de establecimientos públicos, quienes tendrán bajo su inspección, y con los dependientes absolutamente indispensables, la administración de los fondos destinados a la enseñanza.

Debiendo incorporarse a este Ministerio las atribuciones gubernativas de la suprimida Dirección General de Estudios, conforme al artículo 2º del *Decreto de 1 de junio de 1843*, así como, encargarse de la centralización de los fondos propios de los establecimientos de instrucción pública a una junta compuesta de cinco vocales, como observa el artículo siete del expresado decreto; el Regente del reino, por *Resolución de 2 de junio de 1843*, crea en el Ministerio de la Gobernación de la Península una Sección denominada de Instrucción Pública, esta sección estará a cargo de un Oficial del ministerio. Todos los jefes de los establecimientos literarios y científicos se entenderán directamente con el Gobierno.

4.5.6.1. Reestructuración de Consejo de Instrucción pública en el año 1845

El Plan de Estudios relativo a las enseñanzas secundaria y superior aprobado por *Real Decreto de 17 de septiembre de 1845*, reestructura la enseñanza bajo el Consejo de Instrucción pública.

Dentro de la sección referida al *Gobierno de la Instrucción pública*, el Título I, sobre *Administración general* regula en el artículo 131 que, la dirección y gobierno de la instrucción pública en todos los ramos corresponde al Rey por el Ministerio de

la Gobernación de la Península. El artículo 132 establece que habrá un Consejo de Instrucción pública cuyos vocales serán nombrados por el Rey entre las personas mas distinguidas en las carreras científicas y literarias; el Consejo podrá, en casos especiales, oír a las facultades o simplemente a los profesores.

El artículo 134 estipula que el Consejo de Instrucción pública dará su dictamen cuando sea consultado por el Gobierno:

1. *Sobre creación, conservación y supresión de establecimientos de instrucción pública.*
2. *Sobre métodos de enseñanza y libros de texto.*
3. *Sobre los reglamentos de toda clase de escuelas.*
4. *Sobre la provisión de cátedras.*
5. *Sobre la antigüedad y clasificación de los profesores.*
6. *Sobre remoción de los catedráticos propietarios.*
7. *Sobre las cuestiones que se susciten relativas al gobierno interior de los establecimientos y penas académicas.*
8. *Sobre los demás puntos relativos a la enseñanza en que el Gobierno tenga por conveniente oírle.*

El artículo 135 señala que el Consejo de Instrucción pública tendrá un secretario de nombramiento Real con voz pero sin voto. Por último, el artículo 137 establece que los Jefes políticos tendrán también derecho de inspección sobre todos los establecimientos de instrucción pública en sus respectivas provincias.

El *Real Decreto de 22 de octubre de 1845* que aprueba el Reglamento para la ejecución del Plan de estudios decretado el 17 de septiembre del mismo año desarrolla, en el Título III, *Del Consejo de Instrucción pública*. En virtud del artículo nueve:

El Consejo de Instrucción pública se compondrá de nueve miembros como mínimo y quince como máximo elegidos con destino a los ramos de: jurisprudencia, ciencias eclesiásticas, facultad de filosofía, ciencias médicas e instrucción primaria.

El artículo diez destaca que *el presidente será nombrado por el Rey*. El artículo once describe las atribuciones del Consejo de Instrucción pública que coincidirán con las del artículo 134 de la sección cuarta del Real Decreto de 17 de septiembre último.

El artículo trece señala que el Consejo se dividirá en las secciones siguientes:

1. *De jurisprudencia y ciencias eclesiásticas.*
2. *De ciencias médicas.*
3. *De filosofía.*
4. *De instrucción primaria.*
5. *De disciplina universitaria.*

Cada Sección se compondrá como mínimo de tres individuos. A su vez un mismo consejero podrá pertenecer a dos secciones diferentes.

El artículo quince relaciona las atribuciones de los consejeros, a saber:

1. *Abrir y cerrar las sesiones y dirigir las discusiones del Consejo.*
2. *Citar a sesión extraordinaria.*
3. *Llevar la correspondencia con el Gobierno.*
4. *Nombrar los individuos que han de componer las secciones y comisiones.*
5. *Repartir los trabajos entre las varias secciones y activar su despacho.*

4.5.6.2. El Consejo de Instrucción pública bajo la dependencia del Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras públicas

La creación del nuevo Ministerio denominado Secretaría de Estado y del Despacho de Comercio Instrucción y Obras públicas, por *Real Decreto de 28 de enero de 1847*, incorpora a su estructura la Dirección general de Instrucción pública adscrita con anterioridad a la Secretaría de la Gobernación.

A pesar de la modificación del Plan de estudios de 17 de septiembre de 1845, por el *Real Decreto de 8 de julio de 1847*, la figura del Consejo de Instrucción pública se mantiene con las mismas características apuntadas en la disposición anterior, aunque, bajo la dirección del nuevo Ministerio. El Título I de la Sección cuarta regula la *Administración general del Gobierno de la Instrucción pública*. En el artículo 101 establece que *la Dirección y gobierno supremo de la Instrucción pública en todos los ramos corresponde al Rey por el Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras públicas*. Por su parte, el artículo 102 establece que *habrá un*

Consejo de Instrucción pública, cuya organización se determinará por un decreto especial. Este Consejo dará su dictamen en los casos que hemos reseñado anteriormente en el artículo 134 del Plan general de estudios del año 1845.

En cumplimiento de lo expresado se publica el *Real Decreto de 7 de marzo de 1849* que aprueba el Reglamento del Real Consejo de Instrucción pública. De acuerdo con la propuesta del Real Consejo y, en cumplimiento de lo establecido en el adjunto Reglamento para el régimen que ha de observar el Consejo en el desempeño de las funciones, se decreta lo siguiente dentro del Capítulo primero titulado *De las atribuciones y organización del Consejo*:

El artículo 1º dispone que *las atribuciones del Consejo de Instrucción pública serán las mismas que veíamos en el artículo 103 del Plan de estudios vigente.*

El artículo 2º establece que *el Real Consejo de Instrucción pública se compondrá del Ministro del ramo que será el Presidente, de un Vicepresidente, del Director general de Instrucción pública, de veintiocho consejeros, y de un secretario general que será oficial del Ministerio.*

Serán atribuciones especiales del Presidente o, en su lugar, del Vicepresidente:

- 1. Citar a sesiones ordinarias y extraordinarias.*
- 2. Dirigir el orden de las discusiones.*
- 3. Firmar las actas del Consejo después que fuesen aprobadas y las comunicaciones o consultas que se hicieren al Gobierno.*

4. *Señalar las secciones que deban informar acerca de los asuntos que remita el Gobierno, pidiendo el dictamen del Consejo pleno.*

El artículo 3º dispone que *el Consejo se dividirá en seis secciones: De instrucción primaria, de filosofía, de ciencias eclesiásticas, de jurisprudencia, de ciencias médicas, de administración y gobierno de la enseñanza, de las escuelas y sus fondos. El Director general de Instrucción pública será individuo nato de todas las secciones.*

El Consejo en pleno dará su dictamen cuando fuere consultado por el Gobierno y en especial:

1. *Sobre la formación o reforma del plan general de estudios.*
2. *Sobre la creación o supresión de escuelas y establecimientos científicos y literarios de toda clase.*
3. *Sobre el aumento de facultades o cátedras en las escuelas que hoy existen.*

El Secretario general del Consejo según el artículo séptimo recibirá del Gobierno los expedientes o asuntos que se remitan a consulta de la corporación para ello, llevará un registro.

En el año 1850 con la publicación del Plan de Estudios, aprobado por el *Real Decreto de 28 de agosto de 1850*, este órgano colegiado regula, en la Sección cuarta, *Del Gobierno de la Instrucción pública*. Por ello, el artículo 150 establece que *la dirección y gobierno supremo de la instrucción pública, en todos los ramos,*

corresponde al Rey por el Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras públicas; y el artículo 151 establece que habrá un Real Consejo de Instrucción pública, cuya organización y atribuciones estarán siempre determinadas por un decreto especial.

Por último, el artículo 153 dispone que, *los gobernadores de las provincias, tendrán también el derecho de inspección sobre todos los establecimientos de instrucción pública de sus respectivos territorios.*

Posteriormente, el Reglamento de desarrollo de este Plan de estudios decretado el 28 de agosto de 1850 va a ser aprobado por Real orden de 10 de septiembre de 1851. En la Sección primera titulada *Del gobierno general de la Instrucción pública*, el Título primero recoge *Del Ministerio y de la Dirección general* y el artículo uno establece:

Que en todo lo relativo a la enseñanza, gobierno interior de los establecimientos, disciplina escolástica, administración y demás puntos que abraza la instrucción pública en España, las ordenes de S. M. se comunicarán directamente a quienes corresponda por el Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras públicas.

En este sentido el artículo dos describe:

Para el rápido despacho de los negocios, la Dirección general de Instrucción pública tendrá las atribuciones siguientes:

- 1. Trasladar las instrucciones, ordenes y reglamentos que le comunique el Ministro, haciendo las oportunas prevenciones para facilitar su ejecución e inteligencia.*

2. *Disponer cuanto sea necesario para la completa instrucción de los expedientes.*
3. *Acordar las resoluciones forzosas en todo caso previsto por las leyes, Reales decretos y reglamentos vigentes.*
4. *Dictar las disposiciones necesarias para llevar a debido efecto lo mandado por las mismas disposiciones.*
5. *Proponer las mejoras que estime oportunas y las variaciones que la experiencia acredite ser necesarias en las disposiciones y reglamentos vigentes.*
6. *Formar la estadística del ramo, pidiendo todas las noticias y datos necesarios al efecto.*
7. *Proponer para todas las plazas que sean de Real nombramiento, con sujeción a las condiciones y trámites establecidos para sus respectivos casos.*
8. *Suspender, con sueldo o sin él, a todos los profesores y empleados dando inmediatamente cuenta al Ministro.*
9. *Nombrar bedeles, porteros y demás dependientes cuyo sueldo no supere la cantidad estipulada.*
10. *Conceder licencia hasta por dos meses a los profesores y empleados, excepto a los jefes de los establecimientos.*
11. *Resolver todos los expedientes relativos a validez de cursos, exámenes, matrículas y faltas de asistencia siempre que no exijan una gracia especial.*
12. *Aprobar los expedientes de títulos para las diferentes carreras y expedir dichos documentos en nombre del Ministro, menos los de doctor.*
13. *Autorizar ciertos gastos.*

14. Aprobar los presupuestos mensuales de los establecimientos, siempre que se hallen contenidos dentro del presupuesto votado por las Cortes y de la cantidad señalada en la distribución del mes por el Ministro.

15. Aprobar las cuentas de los gastos mensuales de dichos establecimientos, pasándolas después donde corresponda, para los demás trámites que exijan las leyes.

4.5.6.3. El Consejo de Instrucción pública bajo la dependencia del Ministerio de Gracia y Justicia y del Ministerio de Fomento

A consecuencia de los continuos cambios de gobierno¹⁶⁴ que se sucedieron en el otoño de 185,1 se reestructura la organización de la Administración central. Una primera medida se hace notar con el *Real Decreto de 20 de octubre de 1851* que crea el Ministerio de Fomento y agrega al Ministerio de Gracia y Justicia la Dirección general de Instrucción pública y varios negociados como el Negociado de Instrucción pública. Sin embargo, unos días más tarde, el mismo Ministerio por *Real Decreto de 12 de noviembre de 1851* suprime la Dirección general de Instrucción pública y dispone que el Subsecretario del Ministerio de Gracia y Justicia desempeñe las funciones que, hasta ahora, estaban a cargo de la Dirección suprimida. Por *Real Decreto de 5 de diciembre de 1851* se agrega además del Negociado de Instrucción Pública, el Real Consejo del ramo al Ministerio de Gracia y Justicia.

¹⁶⁴ Para conocer los cambios de gobierno que se suceden en este momento, véase Capítulo II del presente trabajo.

La finalidad que se propone con estos cambios redunda en mejorar la Instrucción pública y por ello se nombra una comisión que revise el plan de estudios vigente y que examine la disposición dando lugar al Reglamento de estudios que contiene el *Real Decreto de 10 de septiembre de 1852*. El Reglamento se estructura en cinco Secciones. La Sección primera *Del gobierno general de Instrucción pública*, en el Título I, sobre *el Ministro y de la Dirección general*, regula lo siguiente en el artículo 1º:

El Ministro de Gracia y Justicia comunicará directamente a quien corresponda las ordenes del Gobierno relativas a la enseñanza al gobierno y administración de la Instrucción pública.

Por otra parte, el artículo 2º contiene las atribuciones del Subsecretario correspondiéndole las mismas que tenía delegadas la Dirección general de Instrucción pública a excepción de las tres siguientes que pasamos a relacionar:

- 1. Suspender con sueldo o sin él, a todos los profesores y empleados, dando inmediatamente cuenta al Ministro.*
- 2. Nombrar bedeles, porteros, y demás dependientes, cuyo sueldo no sobrepase la cantidad estipulada.*
- 3. Conceder licencia hasta por dos meses a los profesores y empleados, excepto a los jefes de los establecimientos.*

Unos años más tarde, por *Real Decreto de 17 de junio de 1855*, se dispone que los negociados de instrucción pública, incluida la Dirección general y el Consejo de Instrucción pública, pasarán al Ministerio de Fomento.

4.5.7. La Ley de Instrucción pública y el Real Consejo de Instrucción pública

La publicación de la *Ley de 9 de septiembre de 1857* de Instrucción pública regula, dentro de la Sección cuarta *Del gobierno y administración de la instrucción pública*, en el Título primero, Capítulo II *El Real Consejo de Instrucción pública* de los artículos 245 a 258.

Así el artículo 245 recoge *la composición del Consejo integrado por 30 miembros y un Presidente, nombrados todos ellos por el Rey. El nombramiento podrá recaer en personas de reconocido prestigio personal y profesional*. Por el artículo 255 el Real Consejo de Instrucción pública se dividirá en cinco secciones:

De primera enseñanza.

De segunda enseñanza, de Bellas Artes y de Filosofía y Letras.

La tercera de enseñanzas superiores y profesionales, de Ciencias exactas, Físicas y naturales.

La cuarta de Ciencias médicas, y

La quinta de Ciencias eclesiásticas y Derecho.

El artículo 256 establece que *el Gobierno oirá al Consejo en los siguientes casos:*

- 1. En la formación de los reglamentos generales y especiales que deberán expedirse para el cumplimiento de esta ley, y en toda modificación que haya de hacerse en ellos.*

2. *En la creación o supresión de cualquier establecimiento público de enseñanza y en las autorizaciones que exige esta ley para los establecimientos privados. Exceptuase la creación de Escuelas de primera enseñanza.*
3. *En la creación o supresión de cátedras.*
4. *En los expedientes de provisión de cátedras y en los de clasificación, antigüedad, categorías, jubilación y separación de los profesores.*
5. *En la revisión de programas de enseñanza, y en las modificaciones que en ellos se hicieren.*
6. *En la designación de libros de texto.*
7. *En los demás casos que previene esta Ley o expresen los reglamentos.*

El Título segundo de esta Sección está dedicado a *La administración local* y establece que para los efectos de la enseñanza pública, el territorio español se divide en tantos distritos cuantas son las Universidades. En cada distrito universitario habrá un Rector, Jefe inmediato de la Universidad respectiva y superior de todos los establecimientos de Instrucción pública que haya en él. Los Rectores serán nombrados por el Rey.

En cuanto al *régimen de los establecimientos de enseñanza* que regula el Capítulo III, determina que al frente de cada Facultad habrá un Decano nombrado por el Gobierno, entre los catedráticos de la misma y a propuesta del Rector. Por su parte, cada Escuela superior, profesional e Instituto tendrá un Director nombrado por el Gobierno. El artículo 272 establece que a los Decanos y Directores les corresponde gobernar, siempre bajo las ordenes del Rector, las facultades o establecimientos que tenga a su cargo.

El Capítulo IV del mismo Título y Sección, *De las Juntas de Instrucción pública*, establece en su articulado que en cada capital de provincia habrá una Junta de Instrucción pública compuesta del Gobernador, Presidente, de un Diputado provincial, un Consejero provincial, un individuo de la Comisión provincial de Estadística, un catedrático del Instituto de la provincia, un Eclesiástico delegado del Diocesano y dos o más padres de familia. El Gobierno nombrará los individuos de las Juntas provinciales de Instrucción pública a propuesta en terna del Gobernador.

Según el artículo 286 corresponde a estas Juntas:

1. *Informar al Gobierno en los casos previstos por esta ley y demas en que se les consulte.*
2. *Promover las mejoras y adelantos de los Establecimientos de primera y segunda enseñanza.*
3. *Vigilar sobre la buena administración de los fondos de los mismos establecimientos.*
4. *Dar cuenta al Rector, y en su caso al Gobierno, de las faltas que adviertan en la enseñanza y régimen de los Institutos y Escuelas puestas a su cuidado.*

Por último, el Título cuarto de la misma Sección recoge lo relativo *De la Inspección* estableciendo que el Gobierno ejercerá su inspección y vigilancia sobre los Establecimientos de instrucción, tanto públicos como privados. Estos inspectores serán nombrados por el Rey. Por ello, el artículo 306 dispone que, *serán inspectores generales de Instrucción pública los retribuidos del Real Consejo del ramo*, añadiendo en el artículo 307 que, *el Gobierno publicará, oyendo al Real Consejo de*

Instrucción pública, un reglamento que determine las obligaciones y facultades de los Inspectores generales, señalando las cantidades que han de percibir por vía de indemnización cuando salgan del lugar de su residencia en desempeño de su destino.

4.5.7.1 Adaptación del Consejo de Instrucción pública a la Ley de Instrucción pública

A consecuencia de las modificaciones que introduce la Ley de Instrucción pública, el *Real Decreto de 10 de septiembre de 1857* suprime el actual Consejo de Instrucción pública y lo reorganiza adaptándolo a los preceptos de la Ley. La exposición al Decreto justifica la supresión del Consejo de la siguiente manera:

La Ley de Instrucción pública, que introduce novedades importantes tanto en la naturaleza como en el gobierno y administración de la enseñanza, exige disposiciones nuevas en su regulación. A la vez que regula aspectos en los mismos términos que lo hacía el Real decreto de 17 de febrero de 1848, introduce modificaciones notables para que pueda ajustarse a la organización actual de la Corporación.

Por ello el presente Real Decreto declara suprimido el Real Consejo de Instrucción pública en cumplimiento de lo dispuesto en la ley, reorganizándose en los términos que previenen los artículos 245 a 258 de la misma.

Por *Real Decreto de 24 de diciembre de 1857* se aprueba el Reglamento para el nuevo Real Consejo de Instrucción pública. El Capítulo I regula *De las*

atribuciones y organización del Consejo. Básicamente las atribuciones del Real Consejo de Instrucción pública consistirían en dar su dictamen en los puntos siguientes:

- 1. La formación de los reglamentos generales y especiales para el cumplimiento de la misma ley y en toda modificación que hubiere de hacerse en ellos.*
- 2. En la creación o supresión de cualquier establecimiento público de enseñanza y en las autorizaciones que exige la ley para los establecimientos privados, a excepción de la creación de escuelas de primera enseñanza.*
- 3. En la creación o supresión de cátedras.*
- 4. En los expedientes de provisión de cátedras y en los de clasificación, antigüedad, categoría, jubilación y separación de los profesores.*
- 5. En la revisión de programas de enseñanza y en las modificaciones que en ellos se hicieren.*
- 6. En la designación de libros de texto.*
- 7. En los demás asuntos que previene la ley o expresen los reglamentos.*
- 8. En los casos de duda y de importancia en que el Gobierno tenga por conveniente consultar al Consejo en pleno o por Secciones.*

Tal y como dispone el artículo cuatro el Consejo se dividirá en las cinco secciones siguientes:

- 1. De primera enseñanza.*
- 2. De segunda enseñanza, Bellas Artes, Filosofía y Letras.*

3. *De enseñanzas superiores y profesionales y de Ciencias exactas, físicas y naturales.*

4. *De ciencias eclesiásticas y de Derecho.*

La composición del Real Consejo de Instrucción pública no variará con respecto a la que recoge la Ley, es decir, estará compuesto de 30 miembros y un Presidente, nombrados por el Rey. Los Capítulos II, III y IV regulan *las atribuciones y obligaciones del Presidente, de los Consejeros Ponentes y del Secretario general del Consejo*, respectivamente y, por último, los Capítulos V y VI contienen todo lo relacionado al régimen y gobierno del Consejo, así como, las sesiones del Consejo.

Por el *Real Decreto de 20 de julio de 1859* se aprueba el Reglamento general para la Administración y el régimen de la Instrucción pública. Estructurado en seis Títulos el Título primero, bajo el epígrafe *De la Administración Central*, en el Capítulo I trata sobre el Ministro de Fomento y señala en el artículo uno:

En todo lo relativo a la enseñanza, disciplina escolástica, gobierno, administración e Inspección de los establecimientos de Instrucción pública del orden civil, las resoluciones de S.M. se comunicarán a quien corresponda por el Ministro de Fomento.

El artículo dos recoge *las competencias que el Ministro de Fomento tiene como Jefe superior de la Instrucción pública*:

1. *Presidir, cuando asista, las sesiones del Real Consejo del ramo.*

2. *Presidir asimismo, en todos los establecimientos de Instrucción pública, los actos solemnes a que asistiere.*
3. *Conferir el grado de Doctor y por delegación puede hacerlo el Director general de Instrucción pública.*
4. *Expedir los títulos de catedrático y de Doctor, así como los de los funcionarios administrativos, cuya dotación lo exija según las disposiciones generales vigentes en la materia.*

El Capítulo II *Del Director general de Instrucción pública* tendrá las atribuciones siguientes:

1. *Trasladar las ordenes y reglamentos que se dictaren por S.M. y dar instrucciones para facilitar su ejecución.*
2. *Dirigir la instrucción de los expedientes que deben decidirse por Real orden.*
3. *Resolver las consultas de las Autoridades subordinadas a la Dirección general cuando para ello no haya que suplir o alterar Reales disposiciones.*
4. *Proponer al Ministro las medidas que considere provechosas y no estén en sus atribuciones.*
5. *Proveer a las necesidades de la enseñanza nombrando personas que la den provisionalmente cuando las cátedras estén vacantes y no haya quien deba sustituirlas.*
6. *Nombrar, suspender y separar a los empleados administrativos del ramo, así como a los dependientes, en todos los establecimientos de que los Rectores son Jefes superiores.*

7. *Conceder licencia por un mes a los profesores y hasta por dos meses a los Jefes, empleados y dependientes.*
8. *Firmar a nombre del Ministro los títulos de Licenciado y los demás de carreras superiores y profesionales.*
9. *Formar la estadística general del ramo.*
10. *Ejercer las demás atribuciones que se le señalen en este reglamento y las que se den al llevar la competencia de Instrucción pública.*

El artículo cinco establece que la Dirección general publicará cada tres años una memoria del estado del ramo cuya administración le esta confiada.

El Capítulo III sobre *El Real Consejo de Instrucción pública* dispone que seguirá rigiéndose por el Reglamento del Consejo aprobado por *Real Decreto de 24 de diciembre de 1857*. El artículo siete establece que los nombramientos de Presidente y miembros del Consejo serán designados por Reales decretos.

Por otra parte se crearán Comisiones formadas por los Consejeros para el examen de obras y formación de listas de libros de texto. Las cuatro Comisiones son las siguientes:

- 1- *De ciencias eclesiásticas, morales y políticas.*
- 2- *De literatura y bellas artes.*
- 3- *De ciencias exactas, físicas y naturales.*
- 4- *De ciencias médicas.*

El Título Segundo regula *El Gobierno de los distritos universitarios*. Dentro del Capítulo I, *De los Rectores*, en el artículo 25 establece que el Rector es el Jefe de todos los establecimientos dependientes de la Dirección general de Instrucción pública que existan en el distrito universitario, exceptuándose las Academias, la Biblioteca nacional, el Archivo central y el Museo nacional de Pintura y Escultura. Los Rectores serán nombrados por Reales Decretos conforme a la Ley de Instrucción pública. El artículo 27 recoge las competencias que corresponde a los Rectores como Jefes de los distritos universitarios, a saber:

1. *Cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos y demás ordenes superiores.*
2. *Promover la creación y fomento de los establecimientos que, según la ley, deben sostener las provincias y pueblos del distrito.*
3. *Dictar disposiciones para la mas fiel obsefvancia de lo mandado por la Superioridad y proponer al Gobierno cuanto juzguen conducente a la perfección de la enseñanza y mejor régimen de los establecimientos.*
4. *Convocar y presidir el Consejo Universitario.*
5. *Convocar, cuando lo tenga por conveniente las juntas de profesores de los establecimientos sujetos a su autoridad y presidirlas.*
6. *Proponer al Gobierno para los cargos de Directores de los Institutos y Escuelas profesionales.*
7. *Nombrar, suspender y separar por justas causas a los empleados de los establecimientos de su dependencia.*
8. *Suspender en casos urgentes a los Jefes y empleados nombrados por la superioridad, dando cuenta a la Dirección general de Instrucción pública.*

9. *Expedir los títulos de Bachiller, los de las carreras periciales y los de los maestros, empleados y dependientes que nombre.*
10. *Dirigir la administración económica y ejercer la inspección.*
11. *Cumplir las obligaciones que les señalan los reglamentos sobre la Instrucción pública.*

El Capítulo II *De los Secretarios generales*, recoge en el artículo 32 que los Secretarios generales tendrán, respecto de los asuntos concernientes al gobierno y administración del distrito, las mismas obligaciones que se les impone en el reglamento de Universidades.

El Capítulo III *De los Consejos universitarios* regula en el artículo 38 que el Rector será quien convoque el Consejo en los siguientes casos:

- *Cuando el Gobierno ordene que sea escuchado.*
- *Cuando en el régimen literario o administrativo ocurra alguna dificultad para cuya resolución crea el Rector conveniente consultarle.*
- *Cuando profesores o alumnos incurran en alguna falta de que el Consejo deba conocer según los reglamentos.*

El conocimiento y las decisiones del Consejo universitario tienen el carácter de actos académicos administrativos y se entenderán sin perjuicio de la jurisdicción que en su caso corresponda a los Tribunales de justicia y, de lo que proceda con arreglo al Código penal u otras leyes especiales.

El Título tercero recoge todo lo relacionado sobre *De las Autoridades civiles y de las Juntas de Instrucción pública*.

El Título cuarto regula *Del régimen interior de los establecimientos* y dedica el Capítulo I *Del personal administrativo*, disponiendo que los Jefes y Secretarios de los establecimientos serán nombrados en la forma prescrita por la Ley y tendrán las facultades y obligaciones que se les señalen en este reglamento general y en los especiales respectivos. En el Capítulo II *De las Secretarías* el artículo 82 establece que los Jefes de las Secretarías ordenarán, del modo que crean mas conveniente, la instrucción de los expedientes, los registros y la colocación de los documentos del Archivo, pero a fin de que en los puntos mas importantes y trascendentales haya la debida uniformidad; se atenderá a recoger en libros toda la documentación, actas etc. que sean necesarias. A su vez, se formarán índices de los legajos y documentos existentes en los archivos para su más fácil manejo y para evitar los fraudes que de otro modo pudieran cometerse.

El Título quinto describe todo lo relacionado con *la Administración económica* y por último el Título sexto *De la Inspección* describe en el Capítulo I *la Inspección general* que les corresponderá a los miembros del Real Consejo de Instrucción pública. Los Inspectores generales tendrán la obligación de visitar los establecimientos dependientes de la Dirección general y, cuando el Gobierno lo disponga, visitarán también los que están bajo las dependencias de los Rectores. Por otra parte, los Rectores harán la inspección de los establecimientos donde son Jefes superiores por sí o por medio de los catedráticos de facultad, a quienes, previa autorización de la Dirección general, podrán encomendar el servicio (artículo 116).

El artículo 120 establece que el Inspector encargado de visitar un establecimiento de enseñanza informará con toda exhaustividad:

- *Del modo como el Jefe lo dirige y administra.*
- *De la aptitud y celo de cada uno de los profesores.*
- *De la asistencia y aprovechamiento de los alumnos.*
- *De la severidad en los ejercicios literarios y exámenes.*
- *Del orden con que se llevan los libros, expedientes y documentos en las Secretarías.*
- *Del estado de la administración económica.*
- *De los enseres y demás extremos a que se refieren las instrucciones encargadas.*

Según el artículo 121 estas mismas consideraciones han de tener los Inspectores cuando visiten las Academias, Bibliotecas, Archivos u oficinas en la parte aplicable a esta clase de establecimientos.

4.5.8. La nueva reorganización del Real Consejo de Instrucción Pública en el año 1866

El *Real decreto de 9 de octubre de 1866* reorganiza el Real Consejo de Instrucción pública que es desarrollada, posteriormente, en el Reglamento que contiene el *Real Decreto de 14 de octubre de 1866*. La necesidad de reorganizar el

Consejo, en virtud del Decreto reseñado, se debe fundamentalmente a *los abusos y actuaciones deplorables* que la ley de Instrucción pública ha generado con el tiempo como consecuencia de no haber recogido ciertos aspectos en su contenido. Por tanto, el Decreto modifica los siguientes puntos; a tenor del artículo primero:

El Real Consejo de Instrucción pública se compondrá de 24 vocales además del Presidente. El cargo de Consejero es honorífico y gratuito.

El artículo segundo relaciona los cargos necesarios para poder ser nombrado Consejero. El Gobierno, por el artículo tres, podrá proveer hasta cuatro plazas de Consejero, en personas que pertenezcan al elenco del artículo anterior. Según el artículo quinto el Real Consejo se dividirá en tres secciones:

- 1. De primera enseñanza,*
- 2. De segunda enseñanza y Bellas Artes, y*
- 3. De facultades y Escuelas superiores y profesionales. El nombramiento de Presidente de cada Sección se hará por Real Decreto especial.*

Cada Sección podrá dividirse en Comisiones para la mejor distribución de los egocios, turnándose los Consejeros en el cargo de Ponentes. El cargo de Consejero es incompatible con el de Catedrático en activo servicio. El artículo octavo establece que *el Real Consejo ejercerá la alta inspección sobre la enseñanza pública, a cuyo fin podrá conferirse la comisión de visitar Universidades u otros establecimientos públicos dependientes del Gobierno.*

Por el artículo nueve corresponde al Real Consejo dar su dictamen a petición del Gobierno en los casos siguientes:

- *En la provisión de cátedras, traslación, ascenso y separación de profesores.*
- *En la creación y supresión de establecimientos públicos de segunda enseñanza y de enseñanzas superiores.*
- *En los Planes y Reglamentos de enseñanza.*
- *En todos los demás asuntos que, a juicio del Gobierno, exijan por su índole e importancia deliberación y detenido examen*

Unos días después de la publicación de esta disposición, el *Real Decreto de 14 de octubre de 1866* aprueba el Reglamento de desarrollo del Real Consejo. La estructura de la disposición esta compuesta por ocho capítulos que contienen 47 artículos. El Capítulo primero sobre *Organización y atribuciones del Consejo* regula en el artículo uno la composición del Consejo coincidiendo con el artículo primero de la disposición de 9 de octubre.

De la misma manera, el artículo dos tampoco sufre modificaciones y contiene las tres Secciones que establecía el artículo cinco de la disposición a la que estamos aludiendo. Este artículo dos fue desarrollado por *Decreto de 17 de junio de 1868* reorganizando las Secciones del Real Consejo de Instrucción pública y, en este sentido, establece en el artículo primero:

Corresponderán en lo sucesivo a la Sección primera del Real Consejo de Instrucción pública¹⁶⁵ todos los asuntos generales del ramo, las Escuelas especiales y Bellas Artes, dejando a la Sección segunda todo lo perteneciente a segunda enseñanza y a la Sección tercera las Facultades.

El artículo tres establece que el Presidente del Consejo señalará la Sección a la que han de pertenecer cada Vocal. El artículo cinco recoge lo que corresponde al Real Consejo que ya veíamos en el artículo nueve de la disposición anterior.

Según el artículo seis corresponde al Consejo formar listas de libros de texto para todas las asignaturas. Para llevar a cabo la ejecución de este artículo, la Dirección general de Instrucción pública remitirá al Presidente del Consejo dos ejemplares impresos de la obra a favor de la cual se solicitare la declaración de texto. En el mismo sentido el artículo octavo no varía en sus contenidos con respecto al artículo octavo de dicha disposición.

El resto de los Capítulos se corresponderán con: el Capítulo II *Del Presidente del Consejo* recoge las atribuciones especiales del Presidente y destaca que el Director general de Instrucción pública ocupará el lugar inmediato al Presidente del Real Consejo; el Capítulo III sobre *Los Presidentes de Sección*; el IV *de Los Consejeros ponentes*; el V *Del Secretario general del Consejo*; el VI *De las sesiones del Consejo*; el VII *De las Secciones* y por último; el Capítulo VIII, *Del juramento, prerrogativas y consideraciones de los Consejeros* que vienen a ser las mismas que tenían las suprimidas Direcciones generales de Estudio y sus vocales.

¹⁶⁵ La Junta superior central de Instrucción primaria creada por *Real Decreto de 4 de junio de 1868* llevará todos los asuntos que hasta ahora había entendido la Sección primera del Real Consejo de Instrucción pública.

4.5.9. Sustitución del Consejo de Instrucción pública por la Junta Consultiva de Instrucción pública

Posteriormente y por *Decreto de 10 de octubre de 1868* el ministro de Fomento disuelve el Consejo de Instrucción pública modificado el 9 de octubre de 1866.

Disuelto el Consejo de Instrucción pública por el Gobierno provisional las competencias atribuidas al mismo pasaron; por una parte, al Gobierno y por otra, a los Consejos Universitarios y al Consejo de Estado. Sin embargo, era evidente la necesidad de crear una institución que tuviera las atribuciones del Gobierno y la independencia de un Cuerpo ajeno a las cuestiones políticas y con prestigio necesario para dictaminar informes imparciales. Por ello, el *Decreto de 15 de enero de 1869* suprime la plantilla administrativa del Consejo de Instrucción pública y crea una sección en la Dirección General del ramo para el despacho de los expedientes relativos al extinguido Consejo.

Sustituyendo al Consejo de Instrucción pública se crea la Junta consultiva de Instrucción pública por *Real Decreto de 13 de julio de 1871*. La Junta estará compuesta por miembros de las Academias, el Rector de la Universidad de Madrid y tres vocales ponentes. Serán vocales natos, el Director de Instrucción pública y el Rector de la Universidad de Madrid. Los Consejeros ponentes serán nombrados por el Gobierno.

Los dictámenes que emita la Junta serán, siempre y cuando se lo pida el Gobierno, sobre cuestiones relativas a la Instrucción pública por último; la organización interior de la Junta consultiva de Instrucción pública será objeto de un reglamento especial.

4.5.10. Disolución de la Junta de Instrucción pública e implantación del Consejo de Instrucción pública

Transcurrido un año desde la creación de la Junta de Instrucción pública por *Real Decreto de 18 de julio de 1872* se dispone la disolución de la misma. Los motivos que dan lugar a esta decisión son:

- El primer motivo está justificado por la falta de armonía que existía entre la organización dada al nuevo Cuerpo consultivo y el pensamiento y propósito de su creación.
- En segundo lugar, por la propuesta del propio Ministro de someter a la deliberación de las Cortes un proyecto de ley que diera a la Instrucción pública la organización necesaria. Por estos motivos, parece natural que se establezca una corporación que ejerza su régimen y gobierno, *por tanto se considera que la Junta debe hoy desaparecer.*

El decreto recoge en el artículo dos que, *durante este tránsito, el Ministerio de Fomento consultará, para todos los asuntos que lo requieran, al Consejo de Estado o el de Universidades los asuntos que lo requieran por su importancia.*

Por todos estos aspectos apuntados, se plantea la necesidad de reorganizar la enseñanza pública restableciéndose, de nuevo, el Consejo de Instrucción pública por *Decreto de 12 de junio de 1874*. Tal y como expone el Decreto, la necesidad era prioritaria, después del período de libertad de enseñanza, ya pasado, donde el Estado había renunciado casi del todo a su dirección y gobierno, autorizando a las

corporaciones populares para crear, suprimir, ampliar o restringir establecimientos de instrucción; a los catedráticos para determinar a su arbitrio la materia de su asignatura; y a los alumnos para hacer los estudios en el tiempo y por el orden que eligieran, sin obligación de asistir a las clases ni menos acreditar en ellas su aptitud y laboriosidad.

El Decreto establece que *el abuso por parte de Ayuntamientos a suprimir escuelas, las Diputaciones invirtiendo en fundar Universidades, la absoluta independencia del profesor en los límites de la enseñanza, el desajuste en la armonía del conjunto de los planes de estudio, son entre otras cosas males que no se pueden achacar a la libertad de enseñanza, sólo se pueden atribuir a la manera de cómo España se ha planteado y ha practicado la enseñanza. No es la libertad de enseñanza sino el respeto del poder público al derecho que no puede negarse a elegir, incluso el Maestro. Conviene, pues, mantener la libertad de enseñanza, pero regulando su ejercicio para protegerla e impedir que degenera en perturbadora licencia*¹⁶⁶.

El primer paso que se da para llevar a cabo la reforma de la Instrucción pública significará restablecer el Consejo de Instrucción pública, y en este sentido se acuerda:

¹⁶⁶ Por ello, el *Decreto de 29 de julio de 1874* regula el ejercicio de la libertad de enseñanza de conformidad con el dictamen del Consejo de Instrucción pública y de acuerdo con el Consejo de Ministros. El Decreto establece diferencias entre los establecimientos de enseñanza públicos, privados o en el hogar doméstico. Son establecimientos públicos de enseñanza los que están a cargo del presupuesto general del Estado. Al Gobierno incumbe dirigir estos establecimientos dictando los planes, programas de estudios, creación de plazas, publicación de disposiciones, etc. En el caso de suprimirse alguno de estos establecimientos se satisfará a los Catedráticos propietarios el haber que les corresponda como excedentes mientras no obtengan otra colocación.

Para llevar a efecto el Decreto anterior se dicta la *Orden de 6 de agosto de 1874* regulando el ejercicio de la libre enseñanza. El artículo tres de esta disposición contempla que los Rectores, si lo consideran necesario, podrán comisionar a un Catedrático de la Universidad para que controle el estado de la

Es necesaria una corporación que ilustre y autorice con su respetable voto las resoluciones de la Administración activa, la hubo desde la primera época de Gobierno constitucional hasta la revolución de septiembre que pareció conveniente prescindir de ella para acordar las innovaciones que se juzgaron provechosas u oportunas.

Por tanto, el *Decreto de 12 de junio de 1874* restablece el Consejo de Instrucción pública que se compondrá de un Presidente y de 30 individuos nombrados por el Gobierno, siendo Consejeros natos el Director, los Inspectores generales de Instrucción pública y el Rector de la Universidad de Madrid. El artículo seis establece:

El Consejo de Instrucción pública se divide en cinco secciones con el fin de que sea más fácil y rápido el despacho de los negocios. Estas secciones son las siguientes;

- 1. De Literatura y Bellas Artes,*
- 2. De Ciencias morales y políticas,*
- 3. De Ciencias exactas, físicas y naturales,*
- 4. De Ciencias médicas, y*
- 5. De Gobierno y administración de la enseñanza.*

Para finalizar, la disposición establece que el Ministro de Fomento queda encargado de dictar las disposiciones necesarias para la ejecución del presente decreto.

Bajo la nueva Constitución de 1876 se implantan modificaciones en los Ministerios. Dentro del Ministerio de Fomento se publica un *Real Decreto el 13 de abril de 1877* que aprueba el reglamento para el Consejo de Instrucción pública. Este Reglamento se estructura en seis capítulos. El Capítulo I sobre *Organización y atribuciones del Consejo* que regula en el artículo uno:

Las atribuciones del Consejo conforme al artículo nueve del Decreto de 12 de junio de 1874 eran prácticamente consultivas, y reducidas, bajo tal concepto, a dar su dictamen en cuestiones;

- 1. Sobre la formación y modificaciones de los planes de estudios, programas de enseñanza y reglamentos de los establecimientos pertenecientes al ramo.*
- 2. Sobre la creación y supresión de cualquier establecimiento público de enseñanza, exceptuando las Escuelas de educación primaria.*
- 3. Sobre creación y supresión de cátedras.*
- 4. Sobre cualquier otro asunto relativo a la Instrucción pública.*

El artículo tres determina la composición del Consejo con los mismos miembros que regulaba el Decreto orgánico anterior. A tenor de lo que preceptúa este Decreto, el Consejo seguirá dividiéndose en las mismas Secciones. En la

sección de Gobierno y Administración de la enseñanza, los miembros que la componen serán designados por el Presidente de entre todos los que constituyeren el Consejo; forma parte de la misma el Director general de Instrucción pública.

A su vez, el Capítulo II, *Del Presidente del Consejo de Instrucción pública*, regula las atribuciones privadas que se le confieren; el Capítulo III *De los Presidentes de Sección* también regula todas las funciones respectivas; el Capítulo IV *Del Secretario general del Consejo* que recoge todo lo relacionado con esta figura; el Capítulo V *De los Secretarios de Sección*; por último, el Capítulo VI *De las Juntas del Consejo pleno y de las Secciones*.

Por la importancia de las funciones que, tanto en el orden científico como en el administrativo desempeña el Consejo de Instrucción pública, así como, la asiduidad, estudio y suficiencia que reclaman los asuntos que se someten a deliberación del mismo, se evidencia la necesidad de que las personas que lo forman gocen de una consideración y jerarquía en relación con las funciones que le están encomendadas. En este sentido, el *Real Decreto de 2 de agosto de 1886* concede a los Consejeros de Instrucción pública la categoría y abono de servicios de Jefes superiores de Administración civil.

4.5.11. El Consejo de Instrucción pública en la última década del siglo XIX

En la última década del siglo, el Consejo de Instrucción pública sufre dos modificaciones importantes. La primera que es regulada por la *Ley de 27 de julio de 1890* y que reorganiza su estructura, y la segunda, con la misma finalidad, es desarrollada por el *Real Decreto de 11 de octubre de 1898*.

Por lo que se refiere a la Ley, el artículo primero establece que el Consejo de Instrucción pública, Cuerpo consultivo superior del ramo, se compondrá de un Presidente y 53 Vocales de los cuales 22 serán nombrados por el Rey a propuesta del Ministro de Fomento. El artículo segundo dispone que funcionará en pleno o representado por una Comisión permanente en la forma que previene la Ley.

El artículo tercero establece que el Ministro de Fomento necesitará consultar al Consejo en pleno o a la Sección a la que corresponda los asuntos siguientes:

- 1- Formación y reforma de planes o reglamentos de estudios.*
- 2- Creación de establecimientos o de nuevas enseñanzas.*
- 3- Supresión de establecimientos o enseñanzas de cualquier clase o grado.*
- 4- Reglamento de exámenes y grados de provisión de cátedras.*
- 5- Expedientes de separación y rehabilitación de los profesores numerarios de las Universidades, Escuelas superiores especiales, Institutos, Escuelas Normales y profesores de primera enseñanza oficial.*

El artículo cuarto recoge:

Corresponde también al Consejo pleno, por virtud de propuesta de cinco de sus individuos, la iniciativa para someter a la consideración del Gobierno las reformas de interés general sobre instrucción pública que estime convenientes y para aconsejar que se hagan visitas extraordinarias de inspección a los establecimientos de enseñanza oficial o privada.

El artículo quinto relaciona los asuntos que pueden ser consultados por el Ministro de Fomento a la Comisión, a saber:

- 1- Premios y castigos a los profesores.*
- 2- Extensión que deben tener los programas y libros de texto.*
- 3- Subvenciones para material de primera enseñanza*
- 4- Subvenciones a establecimientos de enseñanza no oficial.*
- 5- Autorización a los extranjeros para ejercer las profesiones que requieren título académico.*
- 6- Incorporación de los estudios hechos en el extranjero.*
- 7- Sobre cualquier cuestión de enseñanza en que el Ministro lo conceptúe conveniente.*

El artículo sexto expone que la Comisión permanente preparará e informará los expedientes que hayan de someterse a la deliberación del Consejo pleno, y contestará a las consultas sobre cuestiones de enseñanza que el Gobierno le remita. El artículo séptimo estima que el Presidente del Consejo deberá haber sido Ministro de la Corona y nombrado por Real Decreto a propuesta del Ministro de Fomento.

Los Consejeros que han de ser nombrados a propuesta del Ministro de Fomento son los siguientes:

- *Cuatro por la primera enseñanza.*
- *Cuatro por la segunda.*
- *Cuatro por las Universidades, Escuelas Diplomática y de Veterinaria.*

- *Seis por las Escuelas preparatorias de Ingenieros y Arquitectos, de Ingenieros y otras existentes.*
- *Cinco por los establecimientos de enseñanza de Ultramar.*
- *Y dos por los establecimientos de enseñanza no oficial.*

Los cuatro Consejeros elegibles por las Universidades serán elegidos cada uno por los compromisarios de las Facultades y establecimientos agregados en la proporción siguiente:

- uno por las Facultades de Derecho,
- otro por las de Medicina, Farmacia y Escuela de Veterinaria,
- otro por las de Filosofía y Letras y sus Secciones y Escuelas de Diplomática
- otro por la de Ciencias y sus Secciones.

De nuevo, vuelve a reorganizarse el Consejo de Instrucción pública modificando su estructura por *Real Decreto de 11 de octubre de 1898*. Uno de los motivos por los que se reorganiza este Cuerpo es para incorporar al mismo, la Inspección general de Enseñanza, Estadística y Colección legislativa, provincial y municipal, y, a su vez, incorporar al Consejo de Instrucción pública Consejeros de Real nombramiento. Una vez reconocida la necesidad del servicio, lo que importa es resolver cómo debe organizarse su estructura para que dé todos sus frutos.

La exposición del Decreto presenta una relación de las disposiciones que han regulado el Consejo desde su creación y reza así:

La organización de la Inspección se halla íntimamente relacionado con la organización del Consejo de Instrucción pública, que nacido del plan de estudios de 4 de Agosto de 1836 y constituido con arreglo a los Reales decretos de 1 de junio de 1843 y 17 de febrero de 1848, ha venido sujeto, desde la ley de 9 de septiembre de 1857, a las modificaciones que han impreso el Real decreto de 9 de octubre de 1866, los decretos de 10 de octubre de 1868 y 13 de julio de 1871, el Reglamento de 16 de febrero de 1848, ha venido sujeto desde la ley de 9 de septiembre de 1857 a las modificaciones a veces radicales que le han impreso el Real decreto de 9 de octubre de 1866, los decretos de 10 de octubre de 1868 y 13 de julio de 1871 el Reglamento de 16 de febrero de 1872, el Real decreto de 18 de julio del mismo año, el decreto-ley de 12 de junio de 1874, el Reglamento de 13 abril del 1877, el Real decreto de 2 de agosto de 1886, la ley de 27 de julio de 1890, la Real orden de 7 de mayo de 1892 y los Reales decretos de 8 de marzo de 1894 y 27 de julio y 1 de noviembre de 1895.

El presente Real Decreto se estructura en cinco títulos que recogen lo siguiente; Título primero bajo el epígrafe *Disposiciones generales*, en el artículo 1º establece que el Consejo de Instrucción pública, Cuerpo consultivo superior del ramo, se compondrá, de un Presidente y 53 vocales. Tanto el presidente como 49 vocales, incluidos los Inspectores generales, serán nombrados por el Rey a propuesta del Ministro de Fomento; el resto serán Consejeros natos.

El artículo 2º estipula que:

El Consejo pleno y la Comisión permanente del mismo se dividirá en cuatro Secciones. La primera se ocupará en todos los asuntos relacionados con la primera enseñanza. La segunda tendrá a su cargo los referentes a la segunda enseñanza. La tercera entenderá en los expedientes de Facultades y los de las Escuelas de Ingeniería. La cuarta tendrá a su cargo los referentes a las Escuelas donde se encuentra la de Diplomática.

El artículo 3º establece que:

La Inspección general, provincial y local de enseñanza y los servicios de Estadística y Colección legislativa, quedan desde la publicación del presente decreto, y con arreglo a las prescripciones del mismo, incorporados al Consejo de Instrucción pública.

Por su parte el artículo 4º regula la figura del Secretario al servicio del Consejo, y el artículo 5º dispone que:

Tanto los Inspectores generales, como los Rectores, los Directores de Institutos, Escuelas y Academias; los Inspectores provinciales y los Delegados de partido, representando al Consejo de Instrucción pública; los Consejos universitarios y las Juntas provinciales de Instrucción pública, son los encargados de la inspección de la enseñanza.

El Título segundo regula *De los Inspectores generales*. Según el artículo 7º habrá *cuatro Inspectores generales, que serán vocales natos del Consejo de Instrucción pública y Ponentes de las cuatro Secciones de su Comisión permanente.*

El artículo 8º establece que *de los cuatro Inspectores generales, uno, por lo menos, deberá ser Catedrático de Facultad o de Instituto de segunda enseñanza. Los otros tres serán elegidos por el Gobierno dentro o fuera del personal docente.* Como Inspectores generales, ejercerán sus funciones en representación del Consejo de Instrucción pública y por delegación del Ministro de Fomento.

Mediante el Título tercero *De los Rectores y Directores*, el artículo 23 establece que los Rectores de Universidad son Inspectores natos de todos los establecimientos de

enseñanza pública y privada, a su vez, el Título cuarto *De los Inspectores provinciales* regula en el artículo 29 la inspección de las Escuelas públicas de instrucción primaria y la de las privadas, que será ejercida por las Juntas provinciales que estarán a las inmediatas ordenes de los Inspectores generales y de los Rectores y por último, el Título quinto que regula todo lo relativo a *Los Delegados de Partido y de la Inspección local*.

En suma, hemos observado en este capítulo, por una parte, las aportaciones que la Ley de Instrucción pública adopta en la educación y enseñanza superior, sobre todo, en la implantación de las disciplinas documentarias en las distintas titulaciones y en los estudios orientados a la investigación. A su vez hemos atendido a las contribuciones manifestadas por los Cuerpos consultivos y de inspección en el control, seguimiento y asesoramiento para el buen funcionamiento de la enseñanza.

CAPÍTULO V

La Escuela Superior de Diplomática

Info. de la
Biblioteca
1987

Se recuerda al lector no hacer más uso de esta obra que el que permiten las disposiciones Vigentes sobre los Derechos de Propiedad Intelectual del autor. La Biblioteca queda exenta de toda responsabilidad.

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
DE MADRID

FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA INFORMACION

REGISTROS DE LIBROS

BIBLIOTECA GENERAL

Nº Registro 50.609

5. La Escuela Superior de Diplomática

El propósito de esta parte del trabajo es analizar la trayectoria de la Escuela Superior de Diplomática a partir de la consideración de que es en este siglo cuando se institucionalizan los estudios documentales.

5.1. La creación de la Escuela Superior de Diplomática y sus Reglamentos de desarrollo.

La fundación de la Escuela, en opinión de Peiro y Pasamar, responde a un proyecto político-cultural avalado por los diversos gobiernos del período del moderantismo. En sí misma, no sólo era una pieza más del jerarquizado almacén educativo pensado para garantizar una instrucción clasista sino también, su creación estaba directamente vinculada al interés cultural, cada vez más extendido entre las capas de la burguesía conservadora por la erudición histórica. En este sentido, añaden los autores, no deja de ser significativo que, tanto el primer intento de supresión de la Escuela como su cierre definitivo, coincidieran con los dos momentos de crisis política y del sistema de valores de ciertos sectores de la burguesía: el Sexenio y el Noventa y Ocho¹⁶⁷.

Los motivos que determinaron la creación de la Escuela superior de Diplomática, los podemos apreciar en el *Anuario del Cuerpo Facultativo de*

Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios en un artículo atribuido -en opinión de Luis García Ejarque- a Vicente Vignau Ballester, Secretario de la Escuela y redactor de dicho *Anuario*¹⁶⁷. Comenzamos transcribiendo algunos párrafos de su contenido:

La institución en el siglo pasado de los Lectores de letra antigua, peritos oficiales para la versión a la escritura corriente de los documentos antiguos, la creación por la Sociedad Económica Matritense de una Cátedra de Paleografía en 1839¹⁶⁹, el establecimiento de las asignaturas de Arqueología, Numismática y Paleografía por el Reglamento de estudios de 1852, y el malogrado proyecto de Escuela de Antigüedades presentado a las Cortes en 1855 por el Ministro de Fomento, son precedentes de la creación de la Diplomática, que explican hasta que punto se iba arraigando en la opinión la necesidad de difundir los conocimientos históricos.

En efecto, la Real Academia de la Historia no descuidaba el trabajo de encauzar y dirigir este movimiento de la opinión, y en dos ocasiones distintas en 1852 y 1856 representó al Gobierno acerca de la conveniencia de establecer una

¹⁶⁷ PEIRÓ MARTÍN, Ignacio; PASAMAR ALZURIA, Gonzalo. *La Escuela Superior de Diplomática. (Los Archiveros en la historiografía española contemporánea)*. Madrid: ANABAD, 1996, p. 53.

¹⁶⁸ PEIRÓ MARTÍN, Ignacio; PASAMAR ALZURIA, Gonzalo. Op. cit., p.183. Opinión que contrasta con la de estos autores al matizar en la nota 196 del Capítulo 2 que, Vignau dirigió entre 1881 y 1882 el *Anuario del Cuerpo*.

¹⁶⁹ En este contexto la Sociedad Económica Matritense de Amigos del País consciente de la importancia de la Paleografía para la formación de este Cuerpo, así como, el abandono a que estaba sometido su estudio en nuestro país, resolvió el 26 de agosto de 1838, establecer bajo su protección una Cátedra pública de Paleografía que fue inaugurada el 20 de enero del siguiente año, y que posteriormente pasó a formar parte de la Escuela de Diplomática. Véase GODÍN GÓMEZ, Aurora. *La Escuela Superior de Diplomática y la Formación de los Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos en el siglo XIX*. Boletín de ANABAD XLV (1995), n. 3, pp. 34-35. También consúltase ELÍAS DE MOLINS, Antonio. *Una efemérides. Inauguración de la Cátedra de Paleografía de Madrid en 20 de enero de 1839*. "R.A.B.M.", tercera época, vol. III, febrero de 1897, pp. 121-123, y TORREBLANCA LÓPEZ, Agustín. *La Escuela Superior de Diplomática y la política archivística del siglo XIX*. En GENERELO, Juan José; MORENO LÓPEZ, Angeles, (coordinadores). *Historia de los Archivos y de la Archivística en España*. Valladolid: Secretariado de Publicaciones e Intercambio Científico, Universidad de Valladolid, 1998, pp. 71-118.

*Escuela de Diplomática. La autorizada voz halló eco en el Ministro de Fomento y en el Director de Instrucción pública, a quienes se debe la creación de la enseñanza de la Diplomática*¹⁷⁰.

Bajo esta idea el Ministerio de Fomento, el 29 de agosto de 1856, encarga un informe a la Academia de la Historia acerca del planteamiento de la Escuela de Diplomática.¹⁷¹ El Informe contiene las disciplinas que deben impartirse en la Escuela.

Todos estos precedentes llevaron a la publicación del *Real Decreto de 7 de octubre de 1856* por el que se crea la Escuela de Diplomática y enseñanzas de Paleografía¹⁷².

La exposición de motivos justifica la necesidad de crear esta Escuela por distintas cuestiones:

- El arreglo de los archivos del reino es una necesidad reconocida por todos que comprende los depósitos y establecimientos de las riquezas literarias que nos han legado las pasadas generaciones y de los derechos e intereses del Estado. El Ministro que suscribe ha examinado la situación y se ha convencido de que serán ineficaces las medidas que se tomen si no se

¹⁷⁰ *La Escuela Superior de Diplomática*. “Anuario del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios”, 1881. Madrid: Imprenta del Colegio Nacional de Sordomudos y de Ciegos, 1882, pp. 16-25.

¹⁷¹ El Archivo General de Alcalá, en el expediente de la Escuela de Diplomática, Secc. E. C., legajo 6084, conserva el proyecto del Informe que somete Evaristo San Miguel, Director de la Real Academia de la Historia y Pedro Sabau, Secretario de la misma, a la aprobación del Ministro de Fomento.

¹⁷² Sobre aspectos históricos y legislativos de la creación de la Escuela, véase MONLAU Y ROCA, Pedro Felipe de, *Reglamento de la Escuela Superior de Diplomática creada en Madrid por Real Decreto de 7 de octubre de 1856, y confirmada por la Ley de Instrucción pública de 9 de septiembre de 1857, precedido de una introducción histórica y acompañado de la legislación vigente sobre archivos y bibliotecas*. Madrid, M. Rivadeneyra, 1865.

exigen conocimientos especiales y una instrucción preparatoria a los que hayan de ocupar estos puestos. Para conseguir este objeto tan plausible es indispensable la creación de un Escuela de Diplomática que podrá servir de plantel de buenos jefes y oficiales de las bibliotecas públicas donde se conservan los manuscritos.

- En Escuelas de esta clase han logrado las naciones más cultas elevar sus archivos a la categoría de establecimientos de primera importancia política, histórica, literaria y hasta económica, teniendo además inmensa trascendencia a las cuestiones de derecho cuya solución depende de la inteligente lectura de un manuscrito. Es el caso de la célebre Ecole des Chartes de París¹⁷³, que está prestando a las ciencias históricas iguales servicios que la politécnica a las ciencias físicas y matemáticas, y el Aula Diplomática, creada en 1796 en Coimbra y trasladada en 1801 a Lisboa, que tanto ha contribuido al descubrimiento de la historia de su país. Si no se sigue el ejemplo, seguirán siendo desconocidos los ricos tesoros conservados en nuestros establecimientos.
- No es relativamente nueva en España la necesidad y la importancia de custodiar, interpretar, clasificar y ordenar los documentos de nuestros archivos. Ya en el reinado de Fernando VI empezó a difundirse el estudio de la Paleografía y Diplomática y si bien decayó a principios de este siglo.

¹⁷³ No debemos olvidar que en España, siete años antes de que se fundara en París la Ecole des Chartes, se pretendió en 1814 implantar cursos orientados a enseñar estas materias documentarias. GARCÍA EJARQUE, Luis. *La formación del Bibliotecario en España: De la Paleografía y la Bibliografía a la Biblioteconomía y la Documentación*. Madrid: ANABAD, 1993, p. 33, describe que en el Proyecto de Decreto sobre arreglo general de la enseñanza pública presentado a las Cortes por su Comisión de Instrucción pública y mandados imprimir de orden de las mismas con fecha 7 de marzo de 1814, se hacían unas propuestas ambiciosas, pues además de establecer, en las universidades mayores, un curso de *Historia literaria y Bibliografía* y otro de *Numismática y Antigüedades*, igualmente a cargo de los dos directores de su biblioteca, creaban también una Universidad Central en la capital del Reino y establecían en el nuevo centro docente un curso de *Diplomática* y otro de *Paleografía*.

Sin embargo un sector importante reclamaron por su restauración. Así es que en 1839 la Sociedad Matritense creó una Cátedra de Paleografía y con la cual se cuenta como parte de las que han de componer la nueva Escuela. Por estas mismas razones la Real Academia de la Historia, ha llamado en varias ocasiones la atención del Gobierno acerca del estado de los Archivos del reino, e informando sobre los estudios más convenientes para formar archiveros y paleógrafos entendidos.

- Por otra parte, el informe que el Rector de la Universidad Central elevó a Real orden en 1853, expuso igualmente la necesidad de crear una Escuela de Paleografía y Diplomática. Y por último en el proyecto de Ley de Instrucción pública que fue presentado a las Cortes en diciembre de 1855 se consignó también bajo el título de Escuela de Antigüedades un establecimiento de igual clase, indicando las principales materias que debían ser objeto de estos estudios.

En este sentido, era inexcusable aplazar por más tiempo el nacimiento de una Escuela, *tan reclamada*, por los beneficios que iba a aportar a los intereses generales y particulares del país, a la vez de abrir una nueva carrera cultivando unos conocimientos diferentes¹⁷⁴.

Atendiendo a las razones expuestas por el Ministro de Fomento, el *Real Decreto de 7 de octubre de 1856* crea en Madrid una Escuela de Diplomática donde se dará la enseñanza de los conocimientos necesarios para el desempeño de los

¹⁷⁴ ESCOLAR, Hipólito. *Historia de las bibliotecas*. Madrid: Sánchez Ruipérez, 1985, p. 440, sobre el preámbulo del decreto mencionado deduce: *se habla de archivos y no de bibliotecas, término aquel que parece abarcar el concepto de biblioteca, pues, si bien dice que son depósitos de los derechos e intereses del Estado, de los pueblos y de las familias, descripción que conviene a los archivos, manifiesta también que en ellos guardan las riquezas literarias que nos han legado las pasadas generaciones, descripción más certera referida a las bibliotecas.*

puestos de Jefes y Oficiales de los archivos y bibliotecas, tal y como reza el artículo uno. Por el artículo dos, *la Cátedra de paleografía*¹⁷⁵, *creada por la Sociedad Económica Matritense y sostenida por el Estado, formará parte de la Escuela. En virtud del artículo tres la enseñanza durará tres años académicos y comprenderá las materias que reflejamos en el epígrafe siguiente.*

El artículo cuatro dispone que Habrá un Director para el régimen interior de la Escuela, cuyo cargo será honorífico y gratuito y recaerá en persona que se haya distinguido por sus conocimientos y trabajos históricos. En relación con este artículo la Escuela inició su andadura bajo la dirección de dos eminentes académicos como lo eran Modesto Lafuente y Antonio Delgado Hernández, dando el carácter, tal como manifiesta Elena Sotelo, de institución destinada a auxiliar a las Academias y principalmente a la de la Historia¹⁷⁶. El artículo cinco estipula:

Siendo las asignaturas de esta Escuela de nueva creación, el Gobierno nombrará por esta vez, para el cargo de profesores a aquellas personas que por sus conocimientos especiales fueren aptas para su desempeño. La provisión sucesiva se hará por oposición.

El artículo seis señala:

Para ingresar en esta Escuela se requiere tener el título de Bachiller en filosofía y realizar un examen sobre historia general de España y nociones de literatura. El alumno terminados sus estudios en la Escuela y aprobado el examen general obtendrá el título de paleógrafo apto para trabajar en los archivos del reino y en las bibliotecas públicas.

¹⁷⁵ Por Real Decreto de 16 de enero de 1852 se encomendó al Ministerio de Fomento el Colegio de Sordomudos y las Cátedras de Paleografía. Sobre el expediente de esta Cátedra y su integración en la Escuela, véase legajo 34/42 de la sección E.D. del Archivo Histórico de la Universidad Complutense.

Con esta finalidad por *Real Orden de 5 de noviembre de 1856* se dispone lo conveniente para la próxima apertura de la Escuela de Diplomática ya creada, y en este sentido, deseando la Reina que se inicie, a la mayor brevedad posible, las enseñanzas de la Escuela de Diplomática, la inauguración se celebrará en el local de la Biblioteca de la Real Academia de la Historia, donde se halla establecida accidentalmente la Escuela¹⁷⁷. De conformidad con esta disposición, las Cátedras de la Escuela se inauguraron el 21 de noviembre de 1856 en el local de la Biblioteca de la Real Academia de la Historia¹⁷⁸.

5.1.1. El primer Reglamento de la Escuela de Diplomática aprobado por Real Decreto de 11 de febrero de 1857

Unos meses después de la apertura de la Escuela se promulga el *Real Decreto de 11 de febrero de 1857* por el que se aprueba el primer reglamento para la Escuela de Diplomática, estructurado en diez capítulos. El Capítulo I sobre *Objeto y constitución de la escuela*. Regula en primer lugar el objeto diciendo que la Escuela de Diplomática establecida en Madrid, *tiene por objeto la instrucción teórica y práctica necesaria para aspirar a las plazas de Jefes y Oficiales de archivos y bibliotecas*.

Por el artículo segundo, *la Escuela se halla bajo la inmediata inspección de la Dirección general de Instrucción pública*. En virtud del artículo tercero *la Escuela*

¹⁷⁶ SOTELO MARTÍN, Elena. *La Escuela Superior de Diplomática en el Archivo General de la Administración*. Anexos de "Signo" 1. Madrid: Universidad de Alcalá, 1998, p. 18.

¹⁷⁷ En cuanto a su instalación, Aurora GODÍN, op. cit., pp. 47-48, detalla las vicisitudes por las que pasó la Escuela hasta encontrar un local que fuese el definitivo.

¹⁷⁸ El Archivo Histórico de la Universidad Complutense recoge en el legajo 34/12 dentro de la sección E. D. el expediente sobre el establecimiento provisional de la Escuela de Diplomática en la Real Academia de la Historia.

estará integrada por el personal siguiente: un Director, seis profesores, dos ayudantes, un escribiente, un bedel y un mozo de oficio.

El Capítulo II *De la enseñanza* establece en el artículo cuarto la apertura del curso en la Escuela de Diplomática que se abrirá el 1º de octubre y concluirá en el mismo día del mes de junio. Los 15 últimos días de septiembre se dedicarán a los exámenes extraordinarios de cada curso y en los de entrada a la matrícula del primer año. En estas mismas fechas estará abierta la matrícula.

El Capítulo III *De los exámenes*. Regula todo lo concerniente a los exámenes y las calificaciones.

El Capítulo IV *Del Director* donde el artículo dieciocho establece como atribuciones las siguientes:

- 1. Cuidar de la puntual observancia del reglamento de la escuela y del exacto cumplimiento de las ordenes que se le comuniquen.*
- 2. Proponer al Gobierno las mejoras oportunas respecto de la enseñanza y el régimen interior de la escuela.*
- 3. Intervenir en todo lo relativo a la administración económica de la misma.*
- 4. Presidir la Junta de Profesores.*
- 5. Nombrar para las plazas vacantes de bedel y mozo.*

El Capítulo V *De los profesores, sus derechos y obligaciones* recoge todo lo relativo a la manera de proveer las plazas de profesor tanto por oposición como por concurso. También lo relativo a sueldos, disciplina, etc.

El Capítulo VI *De los Ayudantes de profesor*; las plazas de Ayudantes se darán por oposición, exigiéndose para entrar en ellas los mismos requisitos que para las de profesores. Según el artículo veintisiete un Ayudante desempeñará el cargo de Secretario de la escuela y otro el de Bibliotecario y Archivero. El artículo veintiocho recoge que deberán, además, sustituir a los profesores en sus ausencias y enfermedades y dirigir los ejercicios prácticos de los alumnos conforme a las instrucciones que les diere el Director.

El Capítulo VII *De los dependientes* considerando como dependientes; el escribiente, el bedel y el mozo de oficio, todos ellos recibirán las instrucciones que el Director considere convenientes.

El Capítulo VIII *De los alumnos* regula todo lo relativo a las características que debe reunir el alumno para ser matriculado y cursar los estudios en la escuela de Diplomática. Por último, el Capítulo IX sobre las *Disposiciones generales* a seguir para la ejecución de este reglamento.

La publicación de la *Ley de Instrucción pública en 1857* que intenta consolidar y perfeccionar las enseñanzas de esta Escuela, introduce modificaciones que hacen imprescindible la publicación del *Real Decreto de 23 de septiembre de 1857* dictando las medidas necesarias para la adaptación de esta ley. Describe, básicamente, las formalidades referentes a la iniciación del curso académico de 1857 a 1858. Los programas de estudios incluidos en esta última disposición determinaron el orden que se debía seguir en el estudio de las asignaturas.

En esencia, escriben Peiró y Pasamar, el cuadro de enseñanzas ordenado en el *Reglamento de 11 de febrero de 1857, la Ley de Instrucción pública de 1857 y el*

Real Decreto de 23 de septiembre de 1857, fue el eje central en torno al cual se organizó la carrera de la erudición¹⁷⁹.

5.1.2. El Reglamento de la Escuela de Diplomática aprobado por Real Decreto de 31 de mayo de 1860

Por *Real Decreto de 31 de mayo de 1860* se aprueba el Reglamento de la Escuela Superior de Diplomática derogando el anterior Reglamento de 1857. Su estructura está basada en cuatro títulos vertebrados en capítulos y artículos.

El Título primero *Del gobierno de la Escuela* recoge, en el Capítulo I, todo sobre *Del Director*. El artículo 1º establece que el Director es el Jefe inmediato de la Escuela y le corresponde:

1. *Cuidar de que se cumpla este reglamento, así como las demás disposiciones superiores relativas al orden de los estudios y régimen interior de la Escuela.*
2. *Velar por que la enseñanza se dé cumplidamente.*
3. *Convocar y presidir la junta de profesores.*
4. *Amonestar privadamente a los profesores y suspenderles en los casos graves y urgentes.*
5. *Proponer a la Superioridad cuanto sea conducente a la perfección de la enseñanza y la buena administración de la Escuela.*

¹⁷⁹ Op. cit., p. 61.

6. *Ejercer los actos de administración económica prescritos en el reglamento general administrativo.*

El Capítulo II *De los Catedráticos*. El Capítulo III *Del Secretario* describe que el cargo de Secretario será desempeñado por uno de los Catedráticos supernumerarios. En virtud del artículo 11 el Secretario tendrá las obligaciones siguientes:

1. *Dar cuenta al Director de los expedientes de títulos y demás asuntos que ocurran en el gobierno y administración de la Escuela.*
2. *Instruir los expedientes y extender las consultas y comunicaciones que se ofrezcan con arreglo a las ordenes del Director.*
3. *Extender las actas de las sesiones de la Junta de profesores y del Consejo de disciplina.*
4. *Hacer los asientos de matrículas exámenes , llevando los libros en la forma que se ordena en el reglamento general administrativo.*
5. *Pedir y despachar las acordadas necesarias para la comprobación de los documentos presentados por los alumnos.*
6. *Firmar las cédulas de aviso para los actos a que convoque el Director.*
7. *Expedir la correspondiente autorización y certificaciones a petición particular.*
8. *Cuidar del Archivo y de la clasificación metódica de los documentos de su incumbencia.*

El Capítulo IV *De los dependientes*. La Escuela tendrá un conserje y un portero que será a la vez mozo de oficio. En algunos casos, cuando el número de alumnos matriculados no llegue a cien, el conserje será al propio tiempo bedel. El

bedel, en su calidad de conserje, cuidará de la conservación del edificio, dará cuenta al Director de las reparaciones que han de hacerse, además, cuidará de que el portero cumpla con sus obligaciones y de que el servicio se haga con exactitud y esmero.

El Capítulo V *De la Junta de profesores* refleja en el artículo 18 que la Junta estará compuesta por los Catedráticos numerarios y supernumerarios de la Escuela, aunque sólo tendrán voto los numerarios. El Director consultará y oír a la Junta de profesores en aquellos asuntos facultativos o económicos que considere oportuno y principalmente para la redacción de los programas de enseñanza, formación de planes de estudios, etc. La Junta será convocada por el Director dos veces durante el curso; también se reunirá cuando se celebre algún acto que merezca la presencia de los profesores.

El Título segundo *De la enseñanza* recoge todo lo referente a la duración del curso, el orden de las clases, método de enseñanza y medios materiales de construcción. Dentro de este Título, el Capítulo III *De los medios materiales de instrucción*, regula en el artículo 40 que, la Escuela de Diplomática tendrá una Colección de diplomas, un Museo arqueológico y numismático y una Biblioteca especial para uso de los profesores y de los alumnos. Según el artículo 41 se destinará una parte presupuestaria consignada para conservar y enriquecer la Colección, el Museo y la Biblioteca. El artículo 42 establece, a su vez, que estas dependencias estarán a cargo de uno de los Catedráticos supernumerarios, bajo la dirección de los respectivos profesores.

El Título tercero *De los alumnos*. Regula todo lo relativo a las cualidades necesarias para ser admitido y matriculado en el centro, también sobre las obligaciones de los alumnos, los exámenes, los premios y los castigos. Por último, el Título cuarto *Del título de Archivero-Bibliotecario*.

Este Reglamento es modificado por *Real Decreto de 15 de julio de 1863* que amplía los estudios de la Escuela superior de Diplomática señalando las circunstancias que se requieren para ingresar en la misma¹⁸⁰, y son las siguientes condiciones:

Para ingresar en la Escuela superior de Diplomática se requiere, además del título de Bachiller en Artes, ser aprobado en un examen especial de Historia general de España y nociones generales de Literatura latina y castellana ante los profesores de la Escuela.

5.2. De la denominación superior a especial de la Escuela de Diplomática

Como ya hemos apuntado la *Ley de 9 de septiembre de 1857* aunó legislativamente todas las enseñanzas y sometió al régimen general universitario las llamadas entonces Escuelas especiales, agregando unas a los Institutos, otras a la Facultad de Ciencias, y clasificando las restantes en profesionales y superiores. Estas fusiones originan incompatibilidad con disposiciones posteriores.

Considerando estos aspectos, el *Real Decreto de 9 de octubre de 1866* reforma las Escuelas del Notariado, Diplomática, Ingeniería Industrial, Profesores mercantiles, Real Conservatorio de Música y Declamación, Bellas Artes, Náutica y

¹⁸⁰ Encontramos en el Archivo General de Alcalá un expediente instruido en relación con los informes emitidos por el Real Consejo de Instrucción pública, informando, favorablemente, sobre la necesidad

Veterinaria. Por ello, y a tenor del artículo primero las Escuelas del Notariado, de Diplomática, de Ingenieros Industriales, el Real Conservatorio de Música y Declamación, las Bellas Artes, Náutica y Veterinaria dejan la denominación de *Escuelas superiores*, para tomar la de *Escuelas especiales* que ya tenían antes de la *Ley de 9 de septiembre de 1857*.

Una vez declarada como *superior*, se consideró urgente dotarla de una reglamentación y recobrar su verdadero carácter de *especial*, encomendando sus enseñanzas a los individuos del Cuerpo y reforman sus reglamentos para armonizarlos con los del cuerpo. En este sentido se promulga el *Real Decreto de 12 de junio de 1867*, que organiza las Bibliotecas públicas, los Archivos generales y los Museos arqueológicos. En la exposición de motivos, refiriéndose a la Escuela de Diplomática, resalta los buenos resultados que estaba dando la institución, sobre todo, porque proporcionaba el personal necesario para este tipo de establecimientos públicos.

Estos dos aspectos son regulados en el articulado de la disposición de la siguiente manera; el artículo 28 establece que:

Los individuos procedentes del escalafón de las Escuelas superiores continuarán gozando de todos los derechos que obtuvieron en virtud de la ley de Instrucción pública de 9 de septiembre de 1857.

A su vez, el artículo 29 considera que:

La Escuela de Diplomática como especial del cuerpo y para matricularse en ella será requisito indispensable la presentación del título de

Bachiller en la Facultad de Filosofía y Letras. La carrera durará tres años, que podrán simultanearse con los del período de la licenciatura de dicha Facultad, uno de dichos años será común para las tres secciones y dos especiales para cada una de ellas. Los licenciados en Filosofía y Letras podrán estudiar la carrera en un año, cursando la carrera las asignaturas sueltas que prescriba el reglamento de la Escuela, según sea la sección a que aspiren.

El artículo 32 dispone que:

El Jefe de la Escuela llevará la denominación de Director y su nombramiento recaerá en uno de los profesores mas antiguos y de mayor categoría en el cuerpo. El Secretario de la Escuela que despachará los asuntos generales de las tres secciones del cuerpo, será otro profesor nombrado por el Gobierno.

El reconocimiento como *especial* del Cuerpo, esta bien reflejado en el *Real Decreto de 25 de marzo de 1881* que aprueba el reglamento orgánico del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios y los establecimientos que del mismo dependan, en el Capítulo III del Título primero regula *De la Escuela superior de Diplomática*.

El artículo diez establece que:

La Escuela superior de Diplomática, ubicada en Madrid, es la especial del Cuerpo y tiene por objeto dar la instrucción teórica y práctica necesaria para el servicio de los Archivos, Bibliotecas y Museos.

A tenor del artículo once:

La Escuela superior de Diplomática se halla bajo la inmediata inspección de la Dirección general de Instrucción pública y la enseñanza que en ella se da estará a cargo de los individuos del Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios.

Por tanto, podemos concluir diciendo que a partir de estos Decretos se declara a la Escuela de Diplomática como *especial* del Cuerpo Facultativo de Archiveros y Bibliotecarios¹⁸¹

5.3. Desaparición de la Escuela Superior de Diplomática

5.3.1. Reorganización de la enseñanza de las Facultades

Como ya hemos visto, la consolidación de las enseñanzas de la Escuela de Diplomática por parte de la Universidad ha sido una constante a lo largo de estos años; lo hemos observado en la reforma que se propone en 1868 y lo vemos ya regulado en 1873, cuando el Ministro de Fomento somete a la aprobación del Gobierno el *Decreto de 2 de junio de 1873* reorganizando la enseñanza de las actuales Facultades de Filosofía y Letras y de Ciencias exactas, físicas y naturales. Con este decreto el Ministro intentó suprimir la Escuela refundiendo sus asignaturas en la Facultad de Letras. Según el artículo primero, estas Facultades, se dividirán en cinco con las siguientes denominaciones: *De Filosofía, de Letras, de Matemáticas, de Física y Química, y de Historia natural.*

¹⁸¹ Con esta denominación aparece en los membretes de los documentos expedidos por la Escuela conservados en los Archivos.

El artículo cuarto relaciona los estudios que componen la Facultad de Letras. En la relación de asignaturas, unas de carácter obligatorias y otras optativas, se encuentran las asignaturas de *Paleografía diplomática y literaria*, con nociones de organización y régimen de los Archivos, y *Epigrafía, Gliptica y Numismática*, comprendiendo la historia de los sistemas métricos, ponderales y monetarios.

Por el artículo quinto:

Se suprime la Escuela superior de Diplomática refundiéndose en la Facultad de Letras¹⁸². Los profesores de la misma, tanto activos como excedentes, nombrados con sujeción a la legislación vigente, ingresarán en esta Facultad desempeñando las mismas Cátedras que han servido o las más análogas a ellas.

El artículo seis establece que:

El Museo Arqueológico y el Archivo Histórico Nacional dependerán exclusivamente de la Facultad de Letras cuyo claustro nombrará de su seno, cada tres años, a los Directores de estos establecimientos.

El artículo veinte regula que las Bibliotecas incorporadas a los establecimientos que constituyen la Universidad de Madrid dependerán, exclusivamente, del Claustro general de la misma, el cual nombrará también de su seno, cada tres años, un Director. Por su parte el artículo veintiuno estipula que todos los empleos facultativos del Museo Arqueológico y Archivo Histórico Nacional, así

¹⁸² Aspecto que ha sido tratado por la historiografía como un efímero intento republicano que buscaba la reforma y ampliación de los estudios de la Facultad de Letras mediante la supresión de la Escuela e incorporación de sus asignaturas.

como del Gabinete de Historia natural, Jardín Botánico y Bibliotecas universitarias, cuyos actuales titulares no tuvieran declarada su inamovilidad en los cargos con anterioridad al presente decreto, se proveerán inmediatamente por oposición.

Cada Facultad elegirá de su seno un Decano y un Secretario, cuyos cargos durarán tres años. Por último, será el Ministro de Fomento el encargado de la ejecución del presente decreto, del cual dará el Gobierno oportunamente cuenta a las Cortes, sin embargo, esta medida fue suspendida en vista de las consultas elevadas por algunos Rectores y Jefes de establecimientos y el Decreto no entra en vigor hasta que por *Orden de 21 de junio de 1873* del Gobierno de la República, es aplazada su aplicación.

5.3.2. La supresión de la Escuela en el año 1900

Una de las últimas reformas que sufrió la Escuela, orientada al cierre, se dio por *Real Decreto de 18 de noviembre de 1887* que aprueba el Reglamento reorganizando el Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios. Este Reglamento dedica el Capítulo III, de los artículos 15 al 18, sobre la *Escuela superior de Diplomática*.

El preámbulo deja latente el deseo de pasar las enseñanzas de la Escuela de Diplomática a la Facultad de Filosofía y Letras diciendo que *el Ministro de Fomento que suscribe la disposición entiende que las asignaturas que constituyen la enseñanza de la Escuela de Diplomática, por su índole y por su objeto, deberían*

*formar parte de una Facultad completa de Filosofía y Letras donde dominarán la unidad y la íntima correlación que son hoy el problema a que conducen las disquisiciones históricas, artísticas y literarias*¹⁸³.

El artículo 15 establece:

Habrá en Madrid una Escuela superior de Diplomática que tendrá por objeto dar la instrucción teórica y práctica necesaria para el servicio de los Archivos, Bibliotecas y Museos.

Lo que se pretendía con esta disposición era llevar las enseñanzas de la Escuela Superior de Diplomática a la Facultad de Filosofía y Letras, pero por motivos presupuestarios no se llevó adelante en estos momentos, sin embargo, la historia de la Escuela Superior de Diplomática se cierra en el año 1900 en virtud del artículo uno del *Real Decreto de 20 de julio de 1900* y por decisión del Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, Carlos Rodrigo Navarro.

Los motivos que causaron la desaparición definitiva de esta Institución, que jugó un papel fundamental en la formación del personal destinado a los Archivos, Bibliotecas y Museos de nuestro país, vinieron dados por tres frentes:

¹⁸³PEIRÓ MARTÍN, Ignacio; PASAMAR ALZURIA, Gonzalo. *La Escuela Superior de Diplomática. (Los Archiveros en la historiografía española contemporánea)*. Madrid: ANABAD, 1996. Describen que la idea de organizar una Facultad completa de Filosofía y Letras significaría contar con unos planes de estudio que incluyeran el cuadro de asignaturas de los estudios de Diplomática, sin embargo declinó la oportunidad de hacerlo alegando razones financieras y docentes. Por todo ello se conformaba con someter a los catedráticos de la Escuela de Diplomática a la Ley general de Instrucción pública, *respetando a los que actualmente desempeñan estas cátedras y sus miembros del Cuerpo* y tomando como excusa el replanteamiento de la vieja cuestión del modo de ingreso y ascensos en el Facultativo, y lanzar una duda oficial sobre la titulación de la Escuela que *si bien supone los conocimientos necesarios para servir a una biblioteca, un Archivo o un Museo, no ha de dar sin embargo, a sus jóvenes alumnos aquel conjunto de conocimientos que constituyen todas las Facultades universitarias*.

- 1- Por una parte, la falta de apoyo de la Real Academia de la Historia.
- 2- El distanciamiento de los funcionarios del Cuerpo facultativo¹⁸⁴.
- 3- Escasa renovación de las enseñanzas de la Escuela.

Todo ello, unido al excesivo coste del centro, obligó al Estado a plantearse el destino de la Escuela en términos de rentabilidad y, en este sentido, el preámbulo del decreto, por el que desaparece la Escuela, dispone lo conveniente para suprimir la Institución incorporando absolutamente todas las enseñanzas a la Facultad de Filosofía y Letras. Las asignaturas de la suprimida Escuela se implantan en los planes de estudio de la Sección de Estudios literarios y de la Sección de estudios históricos de dicha Facultad.

5.4. Sobre el Título académico expedido por la Escuela

5.4.1. Denominación

Las variaciones que experimentaron los planes de estudios de la Escuela fueron causa, más bien, del cambio de nombre del certificado o título de aptitud otorgado por la Escuela de Diplomática. La primera denominación que recibió el certificado de aptitud que debía conceder la Escuela fue el de *Paleógrafo*, por deseo de la Real Academia de la Historia, y así figuró en el *Decreto de 7 de octubre de 1856* de creación aunque no llegó a expedirse al ser modificado, a los pocos meses, por la denominación *Paleógrafo-Bibliotecario*. Esta segunda denominación tampoco

¹⁸⁴ SOTELO MARTÍN, Elena. *La Escuela Superior de Diplomática en el Archivo General de la Administración*. Anexos de "Signo" 1. Madrid: Universidad de Alcalá, 1998, pp. 29-31, sostiene que es a partir del estudio de la publicación de la *Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos* cuando se aprecia el progresivo distanciamiento que en los últimos años del siglo experimentaron estos funcionarios con respecto a la Escuela.

llegó a concederse puesto que, antes de terminar el curso, se volvió a cambiar por el de *Archivero-Bibliotecario*, siendo, ésta última, la denominación ajustada que llegó a otorgar la Escuela. Así consta en la Ley de Instrucción Pública y más tarde en el *Real Decreto de 17 de julio de 1858* que lo puntualizó en el artículo 15 al decir: *Para ingresar en el Cuerpo Facultativo, Archivero y Bibliotecario, se necesitará haber obtenido el título académico de Archivero-Bibliotecario.*

Posteriormente, la *Real Orden de 9 de mayo de 1865* declaró título profesional el de *Archivero-Bibliotecario* y, siendo así, llegó a transformarse por el uso en *Archivero, Bibliotecario y Anticuario* como segunda denominación real del título que otorgó la Escuela Superior de Diplomática.

Según el *Decreto de 21 de diciembre de 1868*, firmado por el ministro Manuel Zorrilla, en el artículo once descentraliza la expedición de los títulos académicos facultando al Director de la Escuela para expedir el título *Bibliotecario Archivero y Anticuario*. En palabras de García Ejarque, esta nueva denominación obedecía a que el *Real Decreto de 12 de junio de 1867* había modificado, previamente la constitución y nombre del anterior Cuerpo Facultativo de Archiveros-Bibliotecarios, pasando a llamarlo Cuerpo facultativo de Bibliotecarios, Archiveros y Anticuarios, aunque el uso lo transformara después en Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios¹⁸⁵.

El título académico de Archivero, Bibliotecario y Anticuario, recibió el máximo giro legal durante la minoría de edad de Alfonso XIII. Las Cortes, mediante *Ley de 29 de julio de 1894*, lo reconocieron como uno de los dos válidos para ingresar por oposición en el Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y

A tenor del artículo segundo:

Para matricularse en el primer año de la carrera de Archivero, Bibliotecario y Arqueólogo, desde el próximo curso de 1897-98, será condición indispensable, además de estar en posesión del título de Bachiller, haber sido examinado y aprobado en la Escuela superior y especial de Diplomática de Latin, Francés, Geografía, Historia general e Historia particular de España.

El artículo tercero dispone que:

Desde el curso de 1899 a 1900 los alumnos de la Escuela superior y especial de Diplomática no podrán efectuar los ejercicios de grado de la carrera sin que acrediten previamente por medio de certificación académica, haber aprobado en algún establecimiento docente oficial la asignatura de Lengua italiana, inglesa o alemana y en la Facultad de Filosofía y Letras el idioma árabe, el griego o el hebreo.

5.4.2. Facultades privativas del título

En este epígrafe vamos a exponer, atendiendo a la legislación, en qué casos puntuales es exigible el título al que estamos aludiendo. Así el *Real Decreto de 5 de julio de 1871* que aprueba el reglamento orgánico del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios y establecimientos de él dependientes, dispone en el artículo 37:

Para aspirar al concurso para estas plazas se necesita tener el título de aptitud expedido por la Escuela de Diplomática. En las secciones de

Anticuarios, junto al de Licenciado de en la Facultad de Filosofía y Letras; con esta medida se pretendía evitar los perjuicios causados a aquellos alumnos que no tenían los conocimientos fundamentalmente prácticos impartidos en la Escuela.

Por último el *Real Decreto de 12 de marzo de 1897* que reorganiza los estudios en la Escuela Superior y especial de Diplomática, dispone que, el título profesional de la carrera se denomine de Archivero, Bibliotecario y Arqueólogo¹⁸⁶. Este Decreto supuso un cambio en la denominación del título expedido por la Escuela que pasó a llamarse de *Archivero, Bibliotecario y Arqueólogo* siendo una nota que se impuso en el cambio de denominación del Cuerpo Facultativo al perder el término *Anticuario* y sustituirlo por el de *Arqueólogo*.

Otra de las reformas que aporta esta disposición legislativa es la que se refiere al sistema de oposición estableciendo como único título el de la Escuela de Diplomática, para opositar a las cátedras de la misma. A partir de este momento será necesario, para obtener el título, haber superado un examen de ingreso regulado en esta disposición.

El artículo primero establece que:

El certificado de aptitud para Archivero, Bibliotecario y Anticuario se eleva para todos los efectos a la categoría de título profesional. Dicho título se denominará de Archivero, Bibliotecario y Arqueólogo, y su expedición no devengará más pagos que los que devenga actualmente el certificado de aptitud.

¹⁸⁵ Op. cit., p. 52.

¹⁸⁶ En el Archivo Histórico de la Universidad Complutense, en la Sección Escuela Diplomática, legajo 38/98, se conservan certificados de aptitud bajo el título profesional de Archivero, Bibliotecario y Arqueólogo.

Bibliotecas y Museos podrán también presentarse al concurso los Licenciados en la Facultad de Filosofía y Letras, siempre que acrediten haber aprobado la asignatura de Bibliografía o la de Arqueología respectivamente en la misma Escuela.

Por otra parte, el artículo 47 recoge:

Será requisito indispensable para ascender en categoría tener el título de la Escuela de Diplomática o de la Facultad de Filosofía y Letras, con la asignatura de Bibliografía o de Arqueología a no llevar seis años de servicio en el ramo.

Este último artículo fue modificado por *Real Orden de 18 de julio de 1871* estableciendo que, para ascender en categoría se requiere el título de la Escuela de Diplomática o de la Facultad de Filosofía y Letras con la asignatura de Bibliografía o Arqueología, a no llevar seis años de servicio en el ramo.

Otra disposición relevante, en este sentido, fue el *Real Decreto de 25 de marzo de 1881* que suprime las *plazas de gracia* ordenando el ingreso en el Cuerpo mediante oposición a la que podrían presentarse los titulados por la Escuela Superior de Diplomática. En la misma línea se muestra la provisión de las Cátedras de la Escuela.

Por otra parte, el título expedido por la Escuela de Diplomática da aptitud pericial para examinar documentos modernos del mismo modo que para revisar letras antiguas, es decir, da la misma aptitud legal, a los Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, que a los Revisores de letra antigua para declarar en los Tribunales

como peritos; todo ello en virtud de la *Real Orden de 9 de mayo de 1865*¹⁸⁷ que ha sustituido a los Revisores de letra antigua. Estas atribuciones están justificadas por los estudios que en la Escuela reciben de la *Paleografía general y crítica*, en cuya asignatura está comprendida la enseñanza de la historia de la escritura y la de los caracteres intrínsecos y extrínsecos de los documentos antiguos y modernos¹⁸⁸. Así lo declara la *Real Orden de 13 de febrero de 1871* al decir que:

*Los Bibliotecarios, Archiveros y Anticuarios tienen la misma aptitud legal que tenían los Revisores de letra antigua*¹⁸⁹ *por la Novísima Recopilación para declarar en los Tribunales como peritos*¹⁹⁰.

¹⁸⁷ No reconociendo la *Ley de 9 de septiembre de 1857* la enseñanza de Revisores de letra antigua y habiendo sustituido a esta, la que en mayor extensión y con mayores conocimientos se da en la Escuela superior de Diplomática, la Reina, conforme con la propuesta de la Junta superior directiva de Archivos y Bibliotecas del Reino y de acuerdo con el dictamen del Real Consejo de Instrucción pública dispone, por *Real orden de 9 de mayo de 1865*, que *el título de aptitud para Archivero-Bibliotecario obtenido en la Escuela superior de Diplomática, es profesional y que los Tribunales, Administración o personas particulares que necesiten pruebas periciales en cualquiera de los ramos que abraza la enseñanza de dicha Escuela, habrán de valerse de personas que posean el indicado título como competentes según lo establece la Ley de Enjuiciamiento civil, salvo los derechos que en materias paleográficas puedan asistir a los Revisores y Lectores de letra antigua hasta la extinción de esta clase.* En el Archivo Histórico de la Universidad Complutense, en la Sección de Escuela Diplomática, caja 38, tenemos expedientes relativos a este aspecto, y vemos un informe elevado al Ministro de Fomento por el Director de la Escuela Superior de Diplomática, sobre la solicitud de los Archiveros-Bibliotecarios pidiendo se les declare legalmente como autorizados para certificar sobre las letras antiguas y sospechosas.

¹⁸⁸ En este sentido el *Anuario del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios*, en el artículo dedicado a *La Escuela Superior de Diplomática*, op. cit. p. 19, apunta que, la Escuela no limita sus servicios a proporcionar plantel inteligente a nuestros Archivos, Bibliotecas y Museos públicos y de particulares, sino que también auxilia a la Administración de justicia poderosamente, designando individuos de su seno que examinen la autenticidad de documentos antiguos y de letras modernas sospechosas. Los informes relativos a estos puntos que anualmente suelen evacuarse ante los tribunales de Madrid pasan de doscientos cincuenta.

¹⁸⁹ Las dos titulaciones que respondían a dos categorías profesionales se denominaban: *Revisores y lectores de letras antiguas* y *Revisores de firmas y papeles sospechosos*, la finalidad de ambas era peritar documentos por orden de los Tribunales, según fueran antiguos o contemporáneos. Ver TORREBLANCA LÓPEZ, Agustín. *La Escuela Superior de Diplomática y la política archivística del siglo XIX*. En GENERELO, Juan José, MORENO LÓPEZ, Ángeles, (coordinadores). *Historia de los Archivos y de la Archivística en España*. Valladolid: Secretariado de Publicaciones e Intercambio Científico, Universidad de Valladolid, 1998, p. 72.

¹⁹⁰ El Archivo General de la Administración conserva algunos expedientes que dejan constancia de la labor de estos profesionales. Un ejemplo es el expediente relativo a la solicitud de D. Servando Fernández Vitorio, Magistrado de Audiencia de fuera de Madrid, Juez de Primera Instancia del Juzgado del Congreso al Ministro de Fomento para que dé orden de que, en calidad de peritos,

5.4.3. Reconocimiento oficial del título de los estudios privados de Diplomática

El *Real Decreto de 22 de noviembre de 1883* dicta medidas para la validez académica de los estudios privados y nombramiento de vocales para los Tribunales de exámenes de instrucción primaria, segunda enseñanza y facultad, señalando lo específico para los estudios de Diplomática. En virtud del artículo primero, *la validez académica de todos los estudios dependientes del ramo de Instrucción pública, cualquiera que sea su grado y denominación, pertenezcan a la enseñanza oficial o privada se obtendrá mediante iguales pruebas de suficiencia y conforme a un mismo reglamento de exámenes*. Recoge la disposición que no habrá para los estudios de enseñanza privada otros preceptos especiales que los taxativamente determinados en el presente decreto.

Con respecto a los Jurados para las pruebas de aptitud, relativas a la revalida de los estudios privados pertenecientes a las Escuelas superiores y profesionales como la de Diplomática, el artículo cuarto dispone que, *se constituirán los Jurados bajo las análogas condiciones con los respectivos Profesorados oficiales en igual proporción en el número de Vocales extraños a la enseñanza oficial*.

Por último, en las Disposiciones transitorias establece que las pruebas de suficiencia de los estudios de Diplomática se acomodarán, tanto respecto de los alumnos que cursen en la enseñanza oficial como los procedentes de la privada, a las mismas reglas hasta aquí establecidas y prácticas observadas para cada una de ellas.

5.5. Programas y contenidos de los estudios de la carrera de Diplomática

Con la creación en Madrid de la Escuela de Diplomática por *Real Decreto de 7 de octubre de 1856* se implantan las enseñanzas objeto de nuestro estudio.

A tenor del artículo tres *la enseñanza durará tres años académicos y comprenderá las materias siguientes:*

Paleografía general.

Ejercicios prácticos, paleografía crítica y literaria.

Latín de los tiempos medios y conocimiento del antiguo romance castellano del Lemosín y gallego.

Clasificación y arreglo de archivos y bibliotecas.

Métodos empleados dentro y fuera de España, y parte reglamentaria de los mismos.

Historia de España en los tiempos medios y en particular de sus instituciones sociales, civiles y políticas.

*Elementos de Arqueología*¹⁹¹.

Posteriormente por el *Real Decreto de 11 de febrero de 1857* se aprueba el reglamento para la Escuela de Diplomática que dedica, una parte de su articulado, a la enseñanza de esta Escuela, concretamente en el Capítulo II bajo el título *De la*

¹⁹¹ Contrastando estas materias con los conocimientos que eran necesarios para obtener el título de Lector de letra antigua observamos que muchas de ellas son comunes.

enseñanza. Dentro de este Capítulo, el artículo nueve, establece que *los estudios en la Escuela de Diplomática se distribuirán por el orden y en la forma que señalamos a continuación:*

- El primer año se dará *Paleografía general*. Comprenderá la historia del desarrollo de la escritura, especialmente en España, y la lectura e interpretación de los documentos y diplomas anteriores al siglo XVIII. También se impartirá *Latín de los tiempos medios y conocimientos del romance, del lemosín y gallego*. Se hará estudio con la amplitud conveniente en lo especulativo y práctico.
- El segundo año se dará *Paleografía crítica*. Esta asignatura abraza la explicación de los caracteres de los diplomas y códices por cuanto conviene distinguir los auténticos de los apócrifos. Se impartirá *Arqueología y numismática*. En esta cátedra será estudio preferente el de la Epigrafía, se dará a los discípulos una breve noticia de las artes en la Edad Media, y se procurará que adquieran conocimiento exacto de los monumentos y objetos antiguos y del modo de colocar y clasificar estos últimos en los Museos y Biblioteca. Se darán lecciones de *aljamía* encargándose de ello, por el tiempo que sea necesario, uno de los ayudantes de la escuela designado por el Director.
- El tercer año se dará *Clasificación y arreglo de Archivos y Bibliotecas*. Además del conocimiento de los métodos empleados dentro y fuera de España y de la parte histórica, administrativa y reglamentaria en punto a Archivos y Bibliotecas, adquirirán los discípulos *nociones generales de bibliografía. Historia de España en los tiempos medios y en particular de sus instituciones sociales, civiles y políticas*. Al explicar los usos y

costumbres, la legislación y gobierno de la Península en aquel período, se inculcará a los alumnos la utilidad que, para su conocimiento, han de sacar del estudio de los diplomas. Junto a estas lecciones, que serán tres semanales como estipula el Reglamento, habrá diariamente ejercicios prácticos de hora y media por lo menos.

El artículo once regula que:

Estos ejercicios consistirán en las copias de códices y diplomas y en extraer, estos últimos, ejecutando precisamente los trabajos de manera que sean útiles a la enseñanza de los alumnos para las publicaciones de la Real Academia de la Historia y para el arreglo del archivo que este cuerpo esta formando.

Para llevar a cabo el Reglamento, anteriormente señalado, el *Real Decreto de 23 de septiembre de 1857* dicta medidas que han de regir durante el curso académico de 1857 - 1858 para la ejecución de la ley de Instrucción pública¹⁹². En concreto, el artículo 58 describe el orden de los estudios de la enseñanza superior de Diplomática, a saber:

- En el primer año, se estudiará *Paleografía general*, cuatro lecciones semanales. *Latín de los tiempos medios, romance, lemosin y gallego*, cuatro lecciones y *Aljamía*, ejercicios prácticos, cuatro lecciones.

¹⁹² Los programas eran aprobados por la Junta de Profesores de la Escuela. El Archivo Histórico de la Universidad Complutense conserva, en el legajo 33/63 de la Sección Escuela de Diplomática, los expedientes que, en este sentido, se venían tramitando entre el Rectorado y la Escuela, y constan de: 1- Al inicio de cada curso académico se remitian al Rector los programas con oficio al Sr. Rector adjuntando anuncio de la matrícula de la Escuela para fijar en el tablón de Edictos de la Universidad según lo acostumbrado. 2- Por otra parte, aparecen los requisitos para ingresar. 3- También se remiten los cuadros de distribución de disciplinas con la asignación de profesores, días, horas y locales donde se va a impartir la enseñanza y todo lo que ha de regir en la Escuela en el presente curso académico.

- En el segundo año, *Paleografía crítica*, cuatro lecciones semanales. *Arqueología y numismática*, cuatro lecciones semanales. *Ejercicios prácticos*, cuatro lecciones semanales.
- En el tercer año, *Clasificación y arreglo de Archivos y Bibliotecas*, cuatro lecciones semanales. *Historia de España en los siglos medios*, cuatro lecciones semanales. *Ejercicios prácticos*, cuatro lecciones semanales.

El programa para el curso académico siguiente es aprobado por el *Real Decreto de 20 de septiembre de 1858*. Esta disposición aprueba los programas generales de estudios para las carreras de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, de Minas, de Montes, Industriales y Agrónomos y de las de Arquitectura, del Notariado y de Diplomática.

Por lo que se refiere al programa general de estudios de la carrera de Diplomática, implícito en esta disposición, el artículo primero establece que para ingresar en la carrera de Diplomática se requiere ser Bachiller en Artes. El artículo segundo destaca que, para aspirar al título de Archivero-Bibliotecario se necesita haber estudiado, en dos años, las siguientes asignaturas:

- *Paleografía general y Paleografía crítica*
- *Latín de los tiempos medios, romance, lemosín y gallego*
- *Arqueología y numismática*
- *Historia de España en los siglos medios*
- *Bibliografía, clasificación y arreglo de Bibliotecas y Archivos.*

Cada una de estas asignaturas se darán en un curso de tres lecciones semanales.

El artículo tercero destaca que la *Paleografía general* y el *latín de los tiempos medios, romance, lemosín y gallego* deben estudiarse antes que la *Paleografía crítica*. Por último, el artículo cuarto concluye diciendo que los alumnos se ejercitarán, durante sus estudios, en la lectura y crítica de documentos antiguos, aljamía y conocimientos de ediciones, monedas, inscripciones y monumentos arqueológicos.

Con esta disposición los estudios de Diplomática quedaron reducidos a dos años, volviendo a recuperar las connotaciones de tres años por el *Real Decreto de 31 de mayo de 1860*.

5.5.1. Programas de los cursos académicos impartidos en el período 1860-1870

Con el *Real Decreto de 31 de mayo de 1860*, que aprueba el Reglamento de la Escuela Superior de Diplomática y armoniza el régimen de la Escuela con el texto de la Ley de Instrucción pública de 1857, se vuelven a implantar los estudios de la carrera en tres años. Dentro del Título segundo, *De la enseñanza*, recoge todo lo referente a la duración del curso, el orden de las clases, método de enseñanza y medios materiales de construcción. Aunque no introduce ninguna modificación sustancial en la organización de las enseñanzas distribuye el plan de enseñanza, en tres años, y especifica el contenido de las asignaturas de la forma siguiente:

- El primer año: *Paleografía general*. Comprenderá la historia del alfabeto, la del desarrollo de la escritura y demás procedimientos gráficos,

especialmente en España, la lectura e interpretación de los documentos y diplomas anteriores al siglo XVIII.- Tres lecciones semanales.

Latín de los tiempos medios y conocimiento del romance castellano, del lemosin y gallego. Comprenderá un sumario de la gramática general, unas nociones de lingüística, examen de las causas que influyeron en la corrupción del latín, origen y formación de los romances e idiomas neolatinos, traducción y análisis gramatical de los documentos escritos en los romances de nuestros antiguos reinos.- Tres lecciones semanales.

Ejercicios prácticos. Lectura y copia de cartas y diplomas.- Una lección semanal.

- El Segundo año: *Paleografía crítica.* Abraza la explicación de los caracteres de los diplomas y códices y cuanto conviene a distinguir los auténticos de los apócrifos.- Tres lecciones semanales.

*Arqueología y Numismática*¹⁹³. Comprenderá una reseña de las artes en la edad media, un estudio detenido de la Epigrafía, conocimiento detallado de los monumentos y objetos antiguos, clasificación y colocación de estos últimos en los Museos y Bibliotecas.- Tres lecciones semanales.

Ejercicios prácticos. Lectura y traducción de cartas y diplomas.- Tres lecciones semanales.

¹⁹³ El programa de la asignatura de *Arqueología y Numismática*, podemos encontrarlo en el Archivo General de Alcalá, sección Educación y ciencia, legajo 6084. Firmado por Juan de Dios de la Rada y Delgado, Madrid, 29 de mayo de 1860. El programa, manuscrito, consta de una parte preliminar y dos partes diferenciadas con un total de 58 lecciones y un apartado de lecciones complementarias que va de la lección 58 a la 60 los contenidos están relacionados con la indumentaria, traje español, orfebrería, noticias etc.

La lección preliminar expresa la justificación de la asignatura.

La parte I: *Nociones generales de Arqueología entre los distintos pueblos de la antigüedad.* Está estructurada en cuatro secciones, y comprende 39 lecciones. La sección primera sobre *Monumentos de Arquitectónicos*, la sección segunda, Monumentos de escultura, la sección tercera, *Monumentos de pintura*, y la cuarta sobre *Grabados*.

- El Tercer año: *Historia de España en los tiempos medios* y en particular de sus instituciones sociales, civiles y políticas, inculcando a los alumnos la utilidad que para su conocimiento han de sacar del estudio de los diplomas.- Tres lecciones semanales.

Bibliografía, clasificación y arreglo de Archivos y Bibliotecas. Historia de la Imprenta, nociones generales de bibliografía teórica y práctica, de la clasificación y arreglo de Archivos y Bibliotecas, métodos empleados dentro y fuera de España, historia y organización de los establecimientos de ambos ramos.- Tres lecciones semanales.

Ejercicios prácticos. Traducción y análisis de los documentos, conocimiento de la Aljamía.- Cincuenta lecciones.

Los ejercicios prácticos serán dirigidos por los Catedráticos supernumerarios, siguiendo la distribución que haga el Director.

Con el fin de elevar el nivel académico de la Escuela, por *Real Decreto de 15 de julio de 1863*, se amplían y reforman los estudios de la Escuela superior de Diplomática señalando las circunstancias que se requieren para ingresar en la misma. La disposición decreta lo siguiente en el artículo primero:

Para ingresar en la Escuela superior de Diplomática se requiere, además del título de Bachiller en Artes, ser aprobado en un examen especial de Historia general de España y nociones generales de Literatura latina y castellana ante los profesores de la Escuela.

La parte II: *Arqueología especial de España e Historia del Arte en sus varias manifestaciones.* Comprende de las lecciones 40 a 57 y tratan básicamente sobre los temas de Historia del arte en nuestra patria.

La distribución del plan de enseñanza y el contenido de las asignaturas esta estructurado de la forma siguiente:

- Primer año: *Paleografía general*. Comprende la historia del alfabeto, la del desarrollo de la escritura y demás procedimientos gráficos, especialmente en España, la lectura e interpretación de los documentos y diplomas anteriores al siglo XVIII.- Tres lecciones semanales.-

Latín de los tiempos medios y conocimiento del romance castellano, del lemosin y gallego. Comprenderá un sumario de la gramática en general, unas nociones de lingüística, examen de las causas que influyeron en la corrupción del latín, origen y formación de los romances e idiomas neo-latinos, traducción y análisis gramatical de los documentos escritos en los romances de nuestros antiguos reinos.- Tres lecciones semanales.

Ejercicios prácticos. Lectura y copia de cartas y diplomas.- Una lección semanal.

- Segundo año: *Paleografía crítica*. Abraza la explicación de los caracteres de los diplomas y códices y cuanto conviene a distinguir los auténticos de los apócrifos.- Tres lecciones semanales.

Numismática antigua y de la edad media y en especial de España. Sistemas métricos y estudios comparativos de los pesos y medidas antiguas con las modernas, y del valor relativo de la moneda.- Tres lecciones semanales.

Epigrafía y geografía antiguas y de la edad media.- Tres lecciones semanales.

Ejercicios prácticos. Lectura y traducción de cartas y diplomas.- Tres lecciones semanales.

- Tercer año: *Historia de España en los tiempos medios*, y en particular de sus instituciones sociales, civiles y políticas, inculcando a los alumnos la utilidad que para su conocimiento han de sacar del estudio de los diplomas.- Tres lecciones semanales.

Bibliografía, clasificación y arreglo de Archivos y Bibliotecas. Historia de la imprenta, nociones generales de Bibliografía teórica y práctica, de la clasificación y arreglo de Archivos y Bibliotecas métodos empleados dentro y fuera de España, historia y organización de los establecimientos de ambos ramos.- Tres lecciones semanales.

Renacimiento. Cerámica, glíptica, muebles, iluminaciones de manuscritos, clasificación y arreglo de objetos arqueológicos y artísticos en los Museos.- Tres lecciones semanales.

Ejercicios prácticos. Traducción y análisis de los documentos, conocimiento de la Aljamía.- Cincuenta lecciones.

Observamos que, en este tercer año, se incluye la asignatura de *Historia de las Bellas Artes en los tiempos antiguos, edad media y renacimiento*. Por otra parte, la asignatura de *Bibliografía* que, había nacido en el primer plan como apéndice de la *Clasificación y arreglo de archivos y bibliotecas*, se convertía, ahora, en base fundamental. También, *Arqueología y Numismática* fue remplazada por *Numismática antigua y de la edad media y en especial de España* y por *Epigrafía y geografía antiguas y de la edad media*

El artículo tercero establece que, *la cátedra de Epigrafía y Geografía antiguas* se desempeñará por el Director de la Escuela como obligación aneja a su cargo. A su vez el artículo cuarto dispone que, *la enseñanza de Bibliografía* será desempeñada por los dos Bibliotecarios de número de la Nacional, alternando, por años, este servicio inherente también a su cargo.

Consideramos, por tanto, que el conjunto de conocimientos que más se desarrolló, a raíz del citado decreto, fue el de los arqueológicos. Hasta entonces sólo existía una cátedra para su desenvolvimiento, la de *Arqueología y Numismática*. Esta situación cambió radicalmente con la creación de tres cátedras; dos para ese curso, la de *Numismática antigua y de la Edad Media, y en especial de España*¹⁹⁴ que incluía la enseñanza de los sistemas métricos, del valor relativo de la moneda y el estudio comparativo de los pesos y medidas de distintas épocas, la de *Epigrafía y Geografía antigua y de la Edad Media* y, tercera, la llamada *Historia de las Bellas Artes en los tiempos antiguos, Edad Media y Renacimiento*, porque se consideraba que este conocimiento podía enseñar a los alumnos a fijar la edad de los códices, de su ornamentación y de sus miniaturas.

Teniendo en cuenta lo que contempla el artículo que precede, la Dirección general de Instrucción pública por *Orden de 29 de septiembre de 1863* dispone que la enseñanza de la Bibliografía se impartiese por los Bibliotecarios de la Nacional.

Con la revolución de 1868 y el nombramiento de Manuel Ruiz Zorrilla como Ministro de Fomento, por *Decreto de 21 de noviembre de 1868* se reforma la organización de la enseñanza de la Diplomática. La exposición al Decreto describe cómo se fueron implantando los estudios y resalta: En el año 1841 se trató por primera vez, en España, de organizar una enseñanza que sirviera de base a las investigaciones históricas. Por convulsiones políticas este intento fue fallido hasta que en 1855 se trató de establecer como agregadas a la facultad de Filosofía y Letras las asignaturas de *Paleografía, Arqueología y Numismática*, que formaban una

¹⁹⁴ El programa de la asignatura de *Numismática Antigua y de la Edad Media y en especial de España* está archivado en el legajo 6084 ya citado del A.G.A. Un aspecto a destacar es que, en este caso, está impreso, firmado por Juan de Dios de la Rada y Delgado, Madrid, 20 de mayo de 1864. Comprende 90 lecciones. De la lección 1 a la 84 incluye la explicación de los sistemas métricos y estudios comparativos de los pesos y medidas antiguas con las monedas y del valor relativo de la moneda. La parte segunda, de la lección 85 a 90 incluye ejercicios prácticos de conocimiento, estudio y clasificación de las monedas de la época comprendida entre la Reconquista hasta nuestros días, por el orden establecido en las lecciones que de ellas tratan. Por último, repaso general teórico y práctico.

sección de antigüedades propuesta en el plan de estudios cuyas bases se presentaron a las Cortes Constituyentes. Poco después fue creada la Escuela de Diplomática que sufrió, al poco tiempo, una reforma con la publicación de la *Ley general de Instrucción pública de 1857*. La creación de esta Escuela fue indudablemente un gran paso, pero su organización adolecía de grandes defectos como la falta de armonía con respecto a las reformas hechas en la pública enseñanza. En esta línea, el Ministro que suscribe cree necesario reformar la Escuela de Diplomática limitando sus asignaturas a aquellas que constituyen la especialidad de los conocimientos propios de los Bibliotecarios, Archiveros y Anticuarios. Las reformas que se proponen son:

- 1- Las cátedras de *Paleografía general* y de *Paleografía crítica* quedan reducidas solamente a una, donde se estudiará la Historia del alfabeto y del desarrollo en la escritura y demás procedimientos gráficos con la interpretación de los documentos antiguos, y también, como consecuencia de estos estudios, la explicación de los caracteres de los diplomas y códices y de los medios convenientes para distinguir los verdaderos de los apócrifos.
- 2- Por otra parte, se suprime la asignatura de *Historia de las Bellas Artes*, considerada impropia de los estudios de Diplomática. Otra de las asignaturas que se suprime es la de *Geografía*. Lo que se pretende es estudiar, en esta Escuela, la enseñanza práctica que existen en los Museos, Archivos y Bibliotecas sin que esto sea gravosa para el Estado.
- 3- Como complemento y ampliación de ésta asignatura, se crea la de *Historia de la organización administrativa y judicial de España* que reemplaza a la de Historia de España, y en la cual se estudiarán las instituciones antiguas y los usos, costumbres y ceremonias de los actos públicos.

La disposición decreta en el artículo primero:

La enseñanza de la Escuela de Diplomática comprenderá las materias siguientes:

Paleografía.

Arqueología, Numismática y Epigrafía.

Bibliografía.

Latín de los tiempos medios.

Historia de la organización administrativa y judicial de España y Ejercicios prácticos.

El artículo segundo establece:

Quedan suprimidos los derechos de examen, matrículas y títulos.

El artículo tercero destaca:

En el reglamento de Archivos y Bibliotecas se determinarán los derechos que puedan corresponder a los que adquieran certificación de todas las asignaturas que comprende el artículo primero.

A partir de esta disposición al Director de la Escuela se le considera competente para expedir los certificados de aptitud a Bibliotecarios, Archiveros y Anticuarios¹⁹⁵.

¹⁹⁵ Referente a la Escuela hemos encontrado en el Archivo de la Villa de Madrid una *Guía del Forastero para el año 1868*. Madrid: 1868, Imp. Cristóbal Rodríguez, p. 811, donde aparece una reseña sobre la Escuela de Diplomática bajo el Director, Pedro Felipe Monlau y el Secretario, Manuel Olivera. Sin duda, responderá al oficio, guardado en el Archivo Histórico de la Universidad Complutense en la sección E. D., legajo 35/150, del Director general de Instrucción pública por el que solicita una breve reseña de la Escuela a fin de que figure en la Guía del Forastero.

El curso académico 1869-1870 no sufrió modificaciones en su cuadro de asignaturas¹⁹⁶.

5.5.2. Programas de los cursos académicos impartidos en el período 1870-1880

Por lo que respecta al curso académico 1870-1871, conocemos todos los tramites llevados a cabo con el Rectorado de la Universidad por encontrarse el expediente en el Archivo Histórico de la Universidad Complutense¹⁹⁷. Forma parte del expediente, la publicación, en la Gaceta de Madrid, del anuncio de convocatoria del curso académico 1870-1871. Este documento, fechado el 10 de septiembre de 1870 y firmado por el Secretario, José María Escudero de la Peña –Catedrático de Paleografía crítica desde 1868- comunica el plazo de apertura de la matrícula de la Escuela¹⁹⁸.

A su vez, presenta la relación de las asignaturas que se cursan en ese año académico y son las siguientes:

¹⁹⁶ FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS, Angel. *Guía de Madrid. Manual del Madrileño y del Forastero*. Madrid: Oficinas de la Ilustración Española y Americana, 1969, p. 538. En esta Guía aparece una breve descripción de la Escuela de Diplomática, donde incluye el cuadro de asignaturas de la enseñanza de la Escuela. También informa sobre el título al que da derecho.

¹⁹⁷ En la sección Escuela de Diplomática, legajo 38/111 guarda este expediente que contiene la documentación generada entre el Rectorado y la Escuela de Diplomática en torno a este asunto de comienzo de curso nuevo. Es decir oficios de remisión de programas, anuncio de la Gaceta, etc.

¹⁹⁸ La exención del pago de matrícula viene establecido en virtud del artículo dos del *Decreto de 21 de noviembre de 1868* por el que, no se abonarán derechos de matrícula ni de título requiriéndose, sólo para el ingreso, la presentación del título de Bachiller en Artes y de una papeleta que se facilitará en la Secretaría. Posteriormente la *Real orden de 23 de febrero de 1883* dispone que los alumnos de la Escuela superior de Diplomática que hayan hecho ejercicios para obtener el certificado de aptitud para Archivero, Bibliotecario y Anticuario se les expida dicho título libre de derechos.

Latín de los tiempos medios y conocimientos de los romances castellano; lemosín; gallego y aljamiado.

Arqueología elemental.

Paleografía general y crítica.

Historia de la organización administrativa y judicial de España.

Numismática y Epigrafía.

*Bibliografía*¹⁹⁹.

Ejercicios prácticos de lectura, copia y traducción de diplomas y códices.

Por último, también nos informa de que, los cuadros de distribución de asignaturas, días, horas y locales donde se da la enseñanza se fijarán oportunamente en los tablonos de edictos.

Los cursos académicos 1871-1872 y 1872-1873 transcurren sin cambios en el cuadro de enseñanza.

En el curso académico 1873-1874, se intenta reimplantar la cátedra de *Historia de las Bellas Artes en los tiempos antiguos, Edad Media y Renacimiento* que fue eliminada, en su momento, por ser considerada impropia de los estudios de Diplomática²⁰⁰. Por ello, en septiembre de 1873 el Director de la Escuela solicita al Director general de Instrucción pública que tenga a bien acceder a restablecer dicha

¹⁹⁹ La *Revista de Archivos Bibliotecas y Museos*, número 2, de 15 de febrero de 1871, pp. 24-25, daba noticia de la reforma de las asignaturas de *Paleografía general y crítica* y de *Bibliografía*.

²⁰⁰ La *Revista de Archivos Bibliotecas y Museos*, número 18 de 30 de septiembre de 1873, pp. 276-277, recoge cómo la aceptación de estas asignaturas estuvo apoyada por el claustro de profesores de la Escuela y por el previo dictamen favorable de la Junta Consultiva de Archivos, Bibliotecas y Museos.

Cátedra, resolviendo favorablemente la petición²⁰¹. En este sentido se elabora el cuadro de asignaturas, para el curso 1874-1875, al incluir las asignaturas *Paleografía general y crítica* y *la Historia de la organización de España en la Edad Media* y *la Historia de las Bellas Artes*²⁰². El resto de las asignaturas que conforman el cuadro son:

Latín de los tiempos medios y conocimiento de los romances castellanos, lemosín y gallego.

Arqueología elemental.

Numismática y Epigrafía.

Historia de la organización de España en la Edad Media.

Historia de las Bellas Artes.

Bibliografía.

En el año 1876 como repuesta al expediente promovido por el Director de la Escuela, Juan de Dios de la Rada Delgado, se restablece la cátedra de *Geografía antigua y de la Edad Media*, suprimida en 1868 bajo la denominación de *Geografía Histórica*.

Para el curso académico 1879-1880, el cuadro de asignaturas es el siguiente:

Latín de los tiempos medios y conocimientos de los romances lemosín y gallego.

²⁰¹ Archivo de General de Alcalá, sección Educación y Ciencia legajo 6084.

Paleografía general y crítica.

Geografía antigua y de la Edad Media.

Numismática y Epigrafía.

Arqueología e Historia de las Bellas Artes en la Edad Antigua, Media y Renacimiento.

Bibliografía e Historia Literaria.

*Historia de la legislación administrativa y judicial de España en los tiempos medios*²⁰³.

5.5.3. Programas de los cursos académicos impartidos en el período 1880-1900

El continuo progreso de la Ciencia y los cambios constantes de la vida social obligan al Estado a reformar la Instrucción pública para adaptarse a las nuevas orientaciones implantadas y por ello se hace necesaria la ampliación de la enseñanza en todos sus grados. Apreciación constatada por el Ministro del ramo en el *Real Decreto de 13 de agosto de 1880* que fue aprobado con el previo dictamen del Consejo de Instrucción pública.

Esta medida que afecta también a la Escuela Superior de Diplomática no se lleva a cabo por problemas presupuestarios. Ante la imposibilidad de ampliar las enseñanzas de la Escuela el Ministro de Fomento, Pidal y Mon, pide reformarlas y en

²⁰² Legajo 6084, op. cit. Se trata del cuadro de asignaturas original y manuscrito que todos los años se enviaba para su aprobación.

²⁰³ *Memoria Anuario del curso académico 1879-1880 de la Universidad Central*. Madrid: Tipografía de Gregorio Estrada, 1880.

este sentido, unos años más tarde, de conformidad con lo propuesto por el Ministro y de acuerdo con el Consejo de Ministros, oído el dictamen del Real Consejo de Instrucción pública y de la Junta facultativa de Archivos, Bibliotecas y Museos, se dicta *el Real Decreto de 25 de septiembre de 1884* fijando los estudios que han de constituir la Escuela Superior de Diplomática. Nuevamente asistimos a una reforma de las enseñanzas de la Escuela.

Los motivos concretos por los que se pide esta reforma se deben a la importancia que han alcanzado los estudios de erudición y el creciente desarrollo del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios que traen consigo necesidades que no puede satisfacer el reducido cuadro de enseñanzas que, hasta ahora, ha impartido la Escuela Superior de Diplomática ; Institución creada, no sólo, para servir el plantel de empleados al referido Cuerpo, sino también, para contribuir al desarrollo de los estudios históricos. Las modificaciones que se presentan consisten en crear nuevas disciplinas, cambiar la denominación algunas ya existentes y reorganizar otras.

Para este curso académico 1884-1885, el Real Decreto establece en el artículo primero, *constituirán la Escuela Superior de Diplomática las asignaturas de:*

Paleografía general y crítica,

Diplomática y ordenación de Archivos,

Gramática histórica comparada de las lenguas romances,

Historia de las Instituciones de España en la Edad Media,

Historia de las Instituciones de España en la Edad Moderna,

Historia literaria en sus relaciones con la Bibliografía,
Bibliología y ordenación de Bibliotecas,
Arqueología y ordenación de Museos,
Numismática y Epigrafía,
Historia de las Bellas Artes,
Geografía antigua y de la Edad Media, especialmente de España,
Ejercicios prácticos de clasificación, catalogación y arreglo de
Archivos, Bibliotecas y Museos.

El artículo segundo determina que, los alumnos podrán hacer los estudios de la carrera en el tiempo y forma que elijan, sin otras limitaciones que las siguientes:

- El estudio de la *Paleografía*, la *Gramática histórica comparada* y la *Geografía* precederá necesariamente al de todas las demás asignaturas.
- El de las *Instituciones de la Edad Media* al de las *Instituciones de la Edad Moderna*.
- El de la *Historia literaria* al de la *Bibliología* y el de la *Arqueología* al de la *Historia de las Bellas Artes* y al de la *Numismática*.

El artículo tercero dispone que, el actual Catedrático de *Paleografía general y crítica*, desempeñará la asignatura de *Paleografía general y crítica*, *Diplomática y Ordenación de Archivos*; el de *Historia de la organización administrativa y judicial de España en la Edad Media*, la de *Historia de las Instituciones de España en la Edad Moderna*, y el de *Bibliografía*, la de *Bibliología y Ordenación de Bibliotecas*.

Las Cátedras de *Arqueología, Historia de las Instituciones de España en la Edad Media e Historia literaria* se proveerán por traslado entre los actuales Catedráticos, si alguno de ellos las solicitare. Las vacantes que resulten se proveerán por oposición. Será necesario para optar a ellas poseer el certificado de aptitud expedido por la Escuela de Diplomática, o haber sido aprobado en los respectivos ejercicios, pertenezca o no, el aspirante, al Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios. Si el agraciado no perteneciera al Cuerpo ingresará en el mismo con la categoría y sueldo de Oficial de primer grado, colocándose en el último número de los de esta clase. Según la disposición transitoria, los alumnos que hubiesen comenzado la carrera no estarán obligados a cursar las asignaturas creadas por el presente decreto.

A su vez, el preámbulo del *Real Decreto de 12 de marzo de 1897* modifica el plan de estudios refundiendo las asignaturas de *Historia de las Instituciones de España en la Edad Media*. Sin embargo, el Ministro de Fomento, considera que se había procedido a una reorganización de los Estudios de la Escuela pero *que no completaba debidamente la Sección de las ciencias históricas, y por ello trató de evitar la duplicidad de enseñanzas y añadirle conocimientos legislativos y cambió la denominación del certificado de aptitud expedido por la Escuela, que pasó a llamarse de Archivero, Bibliotecario y Arqueólogo disponiendo que con su nueva o antigua denominación fuera el único que habilitara para opositar a las cátedras de la Escuela.*

Considerando este precepto y la *Ley de 29 de julio de 1894*, que consagró la división en secciones del Cuerpo Facultativo en funcionarios al servicio de los Archivos, Bibliotecas y Museos Arqueológicos, se propone un nuevo plan de estudios también por secciones en la carrera Diplomática. Por *Real Orden de 30 de julio de 1897* se aprueban los cuadros de asignaturas de la carrera Diplomática en las secciones de Archivos, Bibliotecas y Museos. En su preámbulo expone:

De conformidad con lo propuesto por el Claustro de profesores de la Escuela Superior de Diplomática y lo informado por la Junta facultativa de Archivos, Bibliotecas y Museos, salvo las modificaciones introducidas por el Real Decreto de 12 de marzo último, se publica el presente Decreto aprobando los cuadros de asignaturas de la carrera de Diplomática que corresponden a cada una de las secciones de Archivos, Bibliotecas y Museos para el cumplimiento de la Ley de 29 de julio de 1894.

Como consecuencia, asistimos a la última reforma de la carrera de Diplomática²⁰⁴, reforma que consistió única y exclusivamente en la distribución de sus asignaturas en tres secciones, correspondientes a las que componían el Cuerpo integrando el Plan de estudios de la siguiente manera:

Sección de Archivos

Gramática histórico-comparada de las lenguas romances.

Paleografía general y crítica. Diplomática y ordenación de Archivos.

Geografía antigua y de la Edad Media, especialmente de España.

Historia de las instituciones de España en las Edades Media y Moderna.

Archivonomía y ejercicios prácticos de Archivos.

Historia literaria en sus relaciones con la Bibliografía.

Bibliología.

Ordenación de Bibliotecas y ejercicios prácticos de Bibliografía.

²⁰⁴ La Escuela superior de Diplomática desaparece en virtud del artículo primero del Real Decreto de 20 de julio de 1900.

Sección de Bibliotecas

Gramática histórico-comparada de las lenguas romances.

Paleografía general y crítica.

Geografía antigua y de la Edad Media, especialmente de España.

Historia literaria en sus relaciones con la Bibliografía.

Bibliología.

Archivonomía y ejercicios prácticos.

Ordenación de Bibliotecas y ejercicios prácticos de Bibliografía.

Sección de Museos

Gramática histórico-comparada de las lengua romances.

Paleografía general y crítica.

Geografía antigua y de la Edad Media, especialmente de España.

Arqueología y ordenación de Museos.

Numismática y epigrafía.

Historia de las Bellas Artes.

Ejercicios prácticos de clasificación, catalogación y arreglo de Museos.

5.6. Relación de la Escuela con el Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios.

5.6.1. Incorporación de los Catedráticos de la Escuela al Cuerpo.

La relación que existe entre los catedráticos de la Escuela y los miembros del Cuerpo está reflejada en la legislación que pasamos a describir:

- El *Real Decreto de 17 de julio de 1858* sobre clasificación de Archivos y Bibliotecas incluye en el artículo trece a los catedráticos y ayudantes de la Escuela estableciendo lo siguiente:

Los actuales empleados de Archivos y Bibliotecas ingresarán en el Cuerpo y serán clasificados según el sueldo que disfruten, títulos, méritos y antigüedad. Formarán parte del Cuerpo, los Catedráticos y Ayudantes de la Escuela de Diplomática.

- El *Real Decreto de 31 de mayo de 1860*, que aprueba el Reglamento de la Escuela Superior de Diplomática derogando el Reglamento de 1857, en el Capítulo II *De los Catedráticos* establece que, habrá seis Catedráticos numerarios y dos supernumerarios. Las vacantes de estos últimos se proveerán por oposición, mientras que las de los numerarios será mitad por oposición y mitad por concurso entre los profesores supernumerarios. Para uno u otro caso se necesita haber obtenido el título de Archivero-Bibliotecario.

Dentro del Título cuarto sobre *El título de Archivero-Bibliotecario*, en el Capítulo único, *De los ejercicios para obtener el título de Archivero-Bibliotecario*, refleja el procedimiento para ingresar en el Cuerpo de Archiveros-Bibliotecarios. Por ello, el artículo 96 establece que, todos los que aspiren a obtenerlo, presentarán al Director la instancia correspondiente; el Director pedirá los antecedentes a la Secretaría y acordará la admisión o anulación de los ejercicios. El Tribunal de examen se compondrá de Catedráticos numerarios y los ejercicios serán dos: uno teórico y otro práctico. Aprobados los ejercicios y satisfechos los derechos pertinentes, el Director remitirá al Gobierno una copia del Acta de los ejercicios con el papel que acredite el pago de los derechos, a fin de que se le expida el título. En este se expresará si el aspirante ha obtenido la calificación de sobresaliente o la de aprobado. Por último, el título se entregará a los interesados mediante recibo por la Secretaría de la Escuela.

- *La Real orden de 7 de julio de 1863* declarando que la competencia que la Ley de Instrucción pública atribuía al Gobierno para nombrar profesores encargados de auxiliar cátedras²⁰⁵, en adelante, corresponderá a la Dirección general de Instrucción pública.
- En 1864 quedó definitivamente organizado y clasificado el personal de la Escuela con el nombramiento de Catedráticos numerarios en propiedad. Así por *Real Orden de 10 de abril de 1867* fueron incorporados los Catedráticos de la Escuela Superior de Diplomática al Escalafón del

²⁰⁵ A este respecto, y en vista de lo que dispone el artículo 242 de la *Ley de 9 de septiembre de 1857* que reconoce al Gobierno como competente para nombrar a profesores encargados de auxiliar a los

Cuerpo Facultativo de Archiveros Bibliotecarios, destinando a la Sección de Bibliotecas D. Pedro Monlau, destacado Bibliotecario que dirigió la Escuela Superior de Diplomática.

Como podemos observar toda reforma y ampliación del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios supone también cambios en la Escuela de Diplomática. A su vez, la *Ley de 9 de septiembre de 1857* también introduce novedades al aunar, legislativamente, todas las enseñanzas y someter al régimen general universitario las llamadas entonces Escuelas especiales agregando unas a los Institutos, otras a la Facultad de Ciencias, y clasificando las restantes en profesionales y superiores.

- El *Real Decreto de 9 de octubre de 1866*, considerando los aspectos señalados en la Ley de Instrucción pública, reforma las Escuelas del Notariado, Diplomática, Ingeniería Industrial, Profesores mercantiles, Real Conservatorio de Música y Declamación, Bellas Artes, Náutica y Veterinaria.

El decreto establece en el artículo primero que las Escuelas del Notariado, de Diplomática, de Ingenieros Industriales, el Real Conservatorio de Música y Declamación, las Bellas Artes, Náutica y Veterinaria dejan la denominación de *Escuelas superiores*, para tomar la de *Escuelas especiales* que tenían antes de la *Ley de 9 de septiembre de 1857*. Por el artículo segundo *se procederá sin demora por el Real*

Consejo de Instrucción pública a la formación de un reglamento que determine los aumentos de sueldo a dichos profesores. A su vez, el artículo tercero establece la formación de reglamentos de todas las expresadas Escuelas para determinar su régimen y respectivos estudios. Por otra parte, el artículo cuarto dispone que:

Las enseñanzas de la Escuela de Diplomática estarán al cargo de individuos del cuerpo de Archiveros-Bibliotecarios. Los actuales profesores ingresarán en dicho cuerpo en las categorías que les corresponda, a cuyo fin, para el ejercicio del próximo presupuesto se transferirá la cantidad a que asciende el sueldo de estos profesores a la consignación del personal de Archivos y Bibliotecas²⁰⁶.

- El *Decreto de 10 de noviembre de 1868* que deroga el del 12 de junio de 1867 reiteró, de nuevo, que los Catedráticos de la Escuela de Diplomática fueran individuos del Cuerpo Facultativo del ramo, lo que supuso el cese de algunos profesores.
- El *Real Decreto de 25 de marzo de 1881* que aprueba el reglamento orgánico del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios y los establecimientos que del mismo dependan regula en el Capítulo II del Título primero de la disposición, la *Junta Facultativa del Cuerpo*, e integra como miembros de la misma a Catedráticos de la Escuela de Diplomática.

²⁰⁶ En el Archivo General de Alcalá encontramos el expediente relativo a las modificaciones que se produjeron en el Cuerpo para el cumplimiento de lo preceptuado en este artículo 4 del *Decreto de 9 de octubre de 1866*. Sección Educación y Ciencia, legajo 6084.

- Por otra parte, el *Real Decreto de 19 de julio de 1885* que aprueba el Reglamento del Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, redactado con arreglo a las bases establecidas en el *Real Decreto de 12 de octubre de 1884* regula en el Capítulo IV *De la Escuela Superior de Diplomática* de los artículos 20 a 22, y el artículo 22 establece:

La Escuela se halla bajo la inmediata inspección de la Dirección general de Instrucción pública y sus Catedráticos son individuos del Cuerpo.

- Esta relación mantenida durante muchos años se resquebrajó debido a las últimas reformas que sufrió la Escuela introduciendo algo novedoso con respecto a la relación profesional entre el Cuerpo y la Escuela en el *Real Decreto de 18 de noviembre de 1887* que aprueba el Reglamento de reorganización del Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios.

En el preámbulo de la disposición se refleja el deseo de pasar la enseñanza de la Escuela de Diplomática a la Facultad de Filosofía y Letras justificando, a su vez, las causas que lo impedían; así fue como a tenor de lo dispuesto en el artículo 17 del Decreto los catedráticos de la Escuela dejaron de ser funcionarios del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, condición que tenían desde 1858, y el artículo 17 recoge que:

Los Catedráticos de esta Escuela se regirán por la Ley de Instrucción pública, y no podrán ser individuos del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios. Sin embargo, los actuales profesores continuarán con los derechos que hoy disfrutaban como Catedráticos y con sus ascensos en el escalafón del Cuerpo.

Por último, reseñar que también en este Decreto se recoge que los Catedráticos de la Escuela eran miembros de los Tribunales de oposiciones de ingreso en el Cuerpo Facultativo.

5.6.2. Procedimiento de oposiciones para la provisión de las plazas de Catedráticos y profesores auxiliares de la Escuela

El *Real Decreto de 31 de mayo de 1860*, que aprueba el Reglamento de la Escuela Superior de Diplomática derogando el Reglamento de 1857, en el Capítulo II *De los Catedráticos* establece que, habrá seis Catedráticos numerarios y dos supernumerarios. Las vacantes de estos últimos se proveerán por oposición, mientras que las de los numerarios será mitad por oposición y mitad por concurso entre los profesores supernumerarios. Para uno u otro caso, se necesita estar en posesión del título de Archivero-Bibliotecario.

Posteriormente, el *Real Decreto de 5 de julio de 1871* que aprueba el reglamento orgánico del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios y establecimientos de él dependientes, estipula en el artículo treinta y cinco lo siguiente:

El ingreso en el Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios puede tener lugar de tres formas: por concurso reglamentario, por libre nombramiento del Gobierno y por incorporación al ramo de Instrucción pública de establecimientos que antes no dependían de él.

El ingreso por concurso tendrá siempre lugar en las últimas plazas que después de los ascensos de antigüedad resulten vacantes en la última categoría de cada sección.

En este sentido el artículo 37 establece:

Para aspirar al concurso para estas plazas se necesita tener el título de aptitud expedido por la Escuela de Diplomática. En las secciones de Bibliotecas y Museos podrán también presentarse al concurso los Licenciados en la Facultad de Filosofía y Letras, siempre que acrediten haber aprobado la asignatura de Bibliografía o la de Arqueología respectivamente en la misma Escuela.

Por otra parte el artículo 47 recoge:

Será requisito indispensable para ascender en categoría tener el título de la Escuela de Diplomática o de la Facultad de Filosofía y Letras, con la asignatura de Bibliografía o de Arqueología a no llevar seis años de servicio en el ramo.

El *Real Decreto de 25 de marzo de 1881* que aprueba el reglamento orgánico del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios y los establecimientos que del mismo dependan regula, en el Capítulo III del Título primero, *De la Escuela superior de Diplomática* y en su artículo doce contiene:

El servicio que desempeñan los profesores de la Escuela en la enseñanza, es el que les corresponde en virtud del cargo que ejercen y en este concepto, sin perder el carácter de profesores, obtendrán los ascensos en su carrera²⁰⁷. Podrán, sin embargo, desempeñar otras comisiones del servicio

²⁰⁷ La *Real orden de 31 de diciembre de 1881* declara que los profesores de la Escuela de Diplomática tienen opción al aumento de haber de 500 pesetas por cada cinco años de servicio en la enseñanza. La iniciativa fue a instancia de los profesores de la Escuela con el objeto de homologarse a los profesores de otros centros en virtud de disposiciones anteriores que regulaban el derecho a quinquenios en la enseñanza.

en los establecimientos en los cuales estén adscritos, previo acuerdo entre el Director de la Escuela y el Jefe del establecimiento respectivo.

A su vez, el artículo trece establece lo siguiente:

Las vacantes de cátedras de la Escuela de Diplomática se proveerán por oposición entre los individuos del Cuerpo que tengan la categoría de Jefes o de Oficiales. Los auxiliares de la Escuela que hayan desempeñado cátedras por espacio de un curso entero, podrán presentarse a oposiciones, aún cuando pertenezcan a la categoría de Ayudantes.

En vista de los dictámenes del Consejo de Instrucción pública y de la Junta Facultativa de Archivos, Bibliotecas y Museos se publica la *Real orden de 17 de mayo de 1882* aprobando el reglamento para las oposiciones a cátedras de la Escuela superior de Diplomática. La provisión de cátedras de la Escuela de Diplomática, según el articulado de la disposición, se anunciará por la Dirección general de Instrucción pública en la *Gaceta de Madrid* dentro del plazo de dos meses²⁰⁸. En la convocatoria se expresarán las condiciones que han de reunir los opositores y el plazo de dos meses para presentar las solicitudes en la Dirección general del ramo.

El Tribunal de oposición será presidido por un Consejero de Instrucción pública y la Dirección general del ramo propondrá al Ministerio de Fomento los miembros que han de componerle. Los ejercicios, que se desarrollarán en público, serán cuatro:

²⁰⁸ El Archivo Histórico de la Universidad Complutense de Madrid, en la sección Escuela Diplomática, dentro de los legajos 33/8 a 33/10 se recogen los expedientes de concursos a plazas de Cátedras y Auxiliares.

- En el primer ejercicio el opositor deberá contestar a 10 preguntas pertenecientes a la asignatura objeto de la oposición.
- El segundo ejercicio consistirá en una lección acerca de uno de los tres temas sacados a la suerte de entre todos los que abrace el programa de la asignatura.
- El tercer ejercicio versará en un discurso oral acerca del programa presentado por el actuante, defendiendo las ventajas que a su juicio tenga sobre los demás, respecto al orden y plan de enseñanza que recomiende para el estudio de su asignatura.
- Por último el cuarto ejercicio, el práctico, será distinto para cada una de las asignaturas elegidas:
 - Para la asignatura de *Paleografía* consistirá en la lectura, análisis crítico y papeletas de índice de un documento.
 - Para la asignatura de *Numismática y Epigrafía*, en la lectura, análisis y clasificación de una moneda y una inscripción
 - Para la de *Arqueología*, en la descripción crítica y clasificación de un objeto arqueológico.
 - Para la de *Bibliografía*, en la redacción de las distintas papeletas que correspondan a un libro y a un códice en los índices de una Biblioteca. Este ejercicio se verificará por escrito y versará sobre un mismo punto para todos los opositores, previa su incomunicación por espacio de tres horas.

Terminados los ejercicios se procederá a la votación y se hará la propuesta con sujeción a los criterios marcados por el Tribunal; se tendrá muy en cuenta la capacidad científica de los opositores y la aptitud que hayan demostrado para el Magisterio durante los ejercicios. Una vez asignada la plaza al opositor, el Presidente del Tribunal elevará la propuesta, en el plazo de seis días, al Ministerio de Fomento remitiendo las firmas de los vocales y todas las actas pertinentes, así como, las Memorias y documentación necesaria. La Dirección general pasará el expediente al Consejo de Instrucción pública y si, de su dictamen, resultara que no se ha faltado a la legalidad, en ninguno de los actos, se procederá al nombramiento del propuesto.

Posteriormente, el *Real Decreto de 19 de julio de 1885* que aprueba el Reglamento del Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, redactado con arreglo a las bases establecidas en el *Real Decreto de 12 de octubre de 1884*, regula en el Capítulo IV *De la Escuela Superior de Diplomática* en los artículos 20 y 21; el artículo 20 dispone:

La Escuela superior de Diplomática, establecida en Madrid es especial del Cuerpo y tiene por objeto dar instrucción teórica y práctica necesaria para el servicio de los Archivos de las Bibliotecas y Museos.

Por otra parte el artículo 21 estipula:

Las vacantes de cátedras de la Escuela superior de Diplomática, se proveerán por oposición, siendo necesario para optar a ellas haber sido aprobado en los ejercicios para obtener el título de Archivero, Bibliotecario y Anticuario, pertenezca o no el aspirante al cuerpo. Si el agraciado no perteneciera al Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, ingresará en el mismo con la categoría y sueldo de Oficial de primer grado, colocándole en el último número de los de esta categoría.

El *Real Decreto de 18 de noviembre de 1887* que aprueba el Reglamento reorganizando el Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, establece en el artículo 16 que *las vacantes de cátedras de esta Escuela Superior de Diplomática se proveerán por oposición.*

Por último señalamos lo que el *Real Decreto de 12 de marzo de 1897* recoge con respecto a la reorganización de los estudios en la Escuela Superior y especial de Diplomática y disponiendo que el título profesional de la carrera se denomine de Archivero, Bibliotecario y Arqueólogo, y así el artículo quinto establece que:

Las asignaturas de ejercicios prácticos para el arreglo y ordenación de Archivos y ejercicios prácticos para el arreglo y ordenación de Bibliotecas, se denominarán respectivamente Archivonomía y ejercicios prácticos, Ordenación de Bibliotecas y ejercicios prácticos de Bibliografía. Dichas cátedras, vacantes con anterioridad al Real decreto de 18 de noviembre de 1887, se proveerán desde luego con arreglo a la legislación general de Instrucción pública entonces vigente para la Escuela de Diplomática, por concurso entre auxiliares de dicha Escuela que tengan el título de Archivero Bibliotecario y Arqueólogo o el certificado de aptitud de Archivero, Bibliotecario y Anticuario y hayan prestado, durante cinco cursos por lo menos, el servicio de su cargo.

El artículo sexto añade:

Los que sean nombrados Catedráticos en virtud de lo establecido en el artículo anterior, gozarán de los ascensos de antigüedad o quinquenales que disfrutaban los profesores de las demás Escuelas superiores o especiales.

Por el artículo séptimo:

Habrà en dicha Escuela tres plazas de profesores auxiliares, uno para la Sección de Archivos, otro para la de Bibliotecas y un tercero para la de Museos. El nombramiento de estos profesores será hecho por el Ministro de Fomento, previa oposición ante el Claustro de la Escuela.

Los ejercicios de oposición serán tres:

- *El primero, consistirá en contestar oralmente a dos preguntas o temas por cada una de las asignaturas de la Sección correspondiente.*
- *En el segundo ejercicio el opositor preparará una lección sacada a la suerte que tratará de explicar durante una hora.*
- *El tercer ejercicio será práctico y consistirá en el examen crítico y catalogación de un códice, un incunable y un impreso moderno escrito en idioma extranjero, para la Sección de Bibliotecas; de tres documentos paleográficos de distintas épocas, para la Sección de Archivos; y de tres objetos arqueológicos, para la Sección de Museos. El opositor en este ejercicio expondrá la literatura bibliográfica que conozca respecto a los libros, documentos u objetos arqueológicos u otros análogos de su clase.*

Los profesores auxiliares podrán ser individuos del Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, pero no podrán ser dispensados en este caso de prestar en él el servicio reglamentario.

Por último, el artículo octavo establece que:

El título que habilite para hacer oposición a la cátedra de la Escuela superior de Diplomática será el de Archivero, Bibliotecario y Arqueólogo o el anterior certificado de aptitud.

Para finalizar reseñaremos que sobre algunas cuestiones relacionadas con los catedráticos de la Escuela se ocupaban publicaciones como el *Anuario del Cuerpo del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios de 1881*, dando noticia de nombramientos y traslados de Catedráticos, y así, este anuario nos comenta que el 26 de noviembre de 1867 se restableció la Cátedra de *Elementos de Arqueología* designándose para desempeñarla a D. Manuel de Assas y de Ereño, y por haberse ausentado indefinidamente de Madrid D. Antonio Delgado, separándose de la Dirección de la Escuela y de la Cátedra de *Geografía antigua y Epigrafía*, se encargó de esta asignatura D. Manuel Oliver y Hurtado.

También describe que por fallecimiento de D. Tomás Muñoz se nombró el 28 de octubre de 1867, a D. José María Escudero de la Peña, Catedrático de *Paleografía general y crítica*, y en 25 de junio del mismo año, Catedrático de *Latín de los tiempos medios*, D. Vicente Vignau, quien desde el nombramiento de D. Pedro Felipe Monlau para el cargo de Director del Museo Arqueológico, desempeñaba dicha asignatura²⁰⁹.

En suma, hemos abordado el significado de la Escuela Superior de Diplomática como institucionalización de las enseñanzas documentales en España, analizando los planes de estudio y enseñanzas que, básicamente, estaban a cargo de los individuos del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios.

²⁰⁹ Op. cit. p. 17.

CAPÍTULO VI

Las Instituciones documentales en el siglo XIX

6. Las Instituciones documentales en el siglo XIX

La política de información y documentación que estamos estudiando en este trabajo va a dejar su impronta en distintas instituciones culturales y, en este sentido, consideramos conveniente examinar el alcance que, dicha política, tiene en determinadas instituciones como las Bibliotecas y Archivos que a continuación reseñamos.

6.1. La creación de la Biblioteca del Congreso y la Biblioteca del Senado

6.1.1. La Biblioteca del Congreso

6.1.1.1. Primera etapa: Constitución de la Biblioteca de Cortes y su Comisión

Cuando Hipólito Escolar analiza lo que significó el inicio del siglo XIX para nuestras bibliotecas, describe que este siglo, -que trajo a España, con los aires de la Revolución Francesa, nuevas ideas sobre la redistribución de los fondos bibliográficos, almacenados en los viejos monasterios-, se inició con la creación de una Biblioteca Nacional de Cortes. Idea y realización del erudito bibliófilo Bartolomé José Gallardo, quién no dudó en compararla con la de El Escorial y la Real pues, como ellas, había nacido tras famosas guerras con Francia, aunque ninguna guerra había sido tan dañina para nuestras colecciones como la de la Independencia, en la que, en su opinión, habían quedado dismanteladas y destruidas más de 2.000 bibliotecas²¹⁰.

²¹⁰ ESCOLAR, Hipólito. *Historia de las bibliotecas*. Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 1985, pp. 432-433.

El germen de la Biblioteca de las Cortes podemos concebirlo con la constitución de las Cortes de Cádiz. En principio, surge con el carácter especial de biblioteca parlamentaria, para ayudar a los parlamentarios en sus trabajos²¹¹, pero muy pronto pasará a prestar otras necesidades propias de una Biblioteca de estas características²¹². Esta necesidad de los parlamentarios de contar con todo tipo de información para su trabajo fue tratado en la primera sesión de septiembre de 1810 en el Teatro de la Isla de León. Previo a la convocatoria de la sesión, por *Decreto de 22 de mayo de 1810*, la Junta crea una Comisión de Cortes para que se ocupe de las cuestiones pertinentes a la misma y un decreto de la propia Comisión de Cortes de 1809 autorizaba a dicha Comisión del reino para recoger de todos los archivos, bibliotecas y protocolos públicos, cuantos documentos, libros, copias o noticias necesitaren *para el mejor desempeño de su grave encargo*.

Como sostiene Rosario Herrero, las respuestas no se hicieron esperar y llegaron aluviones de documentos, los llamados *Informes sobre Cortes*, creándose una Junta de Redacción y Ordenación para su selección²¹³.

Debido al ambiente de caos y confusión de los últimos meses del año 1809 esta documentación se va a dispersar, a pesar de la instrucción dada por la Regencia de que se *encajonaran y conservaran en su custodia*. Más tarde, a partir del 6 de marzo de 1810, fue la Secretaría de Gracia y Justicia quien recabó los asuntos de Cortes y su Secretaría recogió toda la documentación aunque, unos días después al iniciar las Cortes sus sesiones, reclamaron la documentación depositándola en su Archivo tal y como podemos observar hoy en el depósito del Archivo del Congreso.

²¹¹ *Diario de Sesiones de las Cortes Generales y Extraordinarias*, núm. 65, de noviembre de 1810. Consúltase ESTELRICH, Juan Luis. *Biblioteca Provincial de Cádiz. Noticia de su fundación y vicisitudes*. "Revista de Archivos Bibliotecas y Museos", XIX, 1908, pp. 227-241.

²¹² HERRERO GUTIÉRREZ, Rosario. *La Biblioteca del Senado*. Madrid: Senado, 1982, p. 13.

²¹³ A.C.E., Leg. 3-1. Acta de 13 de julio *Remítase a la Junta de Ordenación y Redacción. Fecho en 6 de septiembre de 1809*. Reseñado por HERRERO GUTIÉRREZ, Rosario. *La Biblioteca del Senado*. Madrid: Senado, 1982, pp. 19-20.

Así pues, reunidas las Cortes de Cádiz en el Teatro Real de la Isla de León el 24 de septiembre de 1810 constatan la urgencia de crear la infraestructura necesaria para custodiar, convenientemente, la documentación que las propias Cortes iban generando, y contar con una colección básica de bibliografía, indispensable para las consultas de los diputados.

Esta propuesta provocó que, en ese mismo año, el 5 de noviembre se procediera al nombramiento de un archivero en la persona de Antonio Moreno y Galea y que, el 30 del mismo mes, se eligiera la Comisión de Biblioteca²¹⁴ con el fin de localizar la que había sido del Colegio de Guardias Marinas y disponer de ella para proporcionar los fondos que pudieran necesitar los Diputados. Así pues, se consideró que, para el funcionamiento de las Cortes debían contar, por un lado, con una Secretaría que les auxiliara en sus trabajos y, por otro, con una biblioteca propia donde pudieran consultar la documentación precisa para su tarea legislativa²¹⁵. Los resultados, en este sentido, se dieron en la sesión del 24 de enero de 1811 cuando se acordó la creación de la Biblioteca de Cortes y se confió su dirección y arreglo a D. Bartolomé José Gallardo que acababa de acreditar su inteligencia en la elección de obras de las bibliotecas de Marina, Medicina y Cirugía de Cádiz²¹⁶. La relación de la Biblioteca de Cortes con el bibliófilo durará hasta 1838 y su personalidad marcará la estructura y evolución posterior de la Biblioteca pues, no sólo organizó una biblioteca legislativa para consulta inmediata de los Diputados sino que concibió una Biblioteca de Cortes que sirviera de cobijo a los grandes tesoros bibliográficos nacionales, cualquiera que fuera su procedencia²¹⁷.

²¹⁴ *Diario de Sesiones de las Cortes Generales y Extraordinarias*, núm. 65, de 30 de noviembre de 1810.

²¹⁵ SALAVERT, Vicente: *La Biblioteca del Congreso de los Diputados: notas para su historia (1811-1936)*. Madrid: Congreso de los Diputados, 1983, pp. 23-24.

²¹⁶ *Diario de Sesiones de Cortes Generales y Extraordinarias*, número 120, 24 de enero de 1811.

²¹⁷ A partir de la publicación de la Constitución de 1812, la Biblioteca de Cortes adquiere el carácter de biblioteca pública permaneciendo abierta al público en las horas y días que reglamente el Congreso.

Designado Gallardo como bibliotecario de Cortes, se forma una Comisión de Biblioteca en cuyo modelo de constitución y funciones podemos ver el origen de la que será la Comisión de Fomento y Conservación de la Biblioteca del Senado. Las funciones de la Comisión de Biblioteca serán fundamentalmente; adquisición de obras, administración económica y demás gestiones necesarias. Por lo tanto, la Biblioteca de Cortes nace bajo la supervisión de una comisión de parlamentarios propia; la denominación como comisión permanente se acuñó en el artículo 25 del Reglamento de 1821 y deja de existir como tal en la legislatura de 1837-1838 ya que en 1838 se decide, mediante la publicación de una ley, la supresión de la Biblioteca de Cortes. El contenido esencial de esta ley, que se publicó en mayo de 1838, está recogido en el artículo tercero al disponer el reparto de libros entre el Congreso, Senado y Biblioteca Nacional. Sin embargo, a pesar de los repetidos intentos no se llevó a efecto e incluso fue renovada en 1851.

El Fondo Bibliográfico de la Biblioteca se formó de manera progresiva y no sólo contenía referencias legislativas sino que, por *Orden de 12 de marzo de 1811*, se pidió que los impresores remitieran dos ejemplares de todas las obras y papeles que se imprimieran, a la Biblioteca y Archivo de Cortes. Con respecto a la formación de la colección bibliográfica, Escolar opina que ni Gallardo ni los diputados debieron pensar en la posibilidad y conveniencia de destinar una cantidad para adquirir libros y se conformaron con aquellos que podían obtener, por este prematuro depósito legal o por medio de incautaciones que se iniciaron con la de los libros de los súbditos franceses y de los españoles afrancesados y con los de bibliotecas públicas y comunidades que quedaron destruidas por la guerra²¹⁸. En este sentido, se publica la *Orden de 28 de agosto de 1812* para que se remitan a la Biblioteca de Cortes listas de los libros y manuscritos resultantes de represalias y confiscos en todos los pueblos de la Monarquía para entresacar los que convengan y que la Regencia del Reino expida con la posible prontitud las ordenes correspondientes al efecto. A esto hay que añadir

²¹⁸ Op. cit., p. 433.

que la Comisión establece que se proceda de igual forma con las Bibliotecas de los conventos abandonados de todo el Reino²¹⁹.

6.1.1.1.1. Proyecto del Reglamento Nacional de Bibliotecas provinciales y de la Planta fundamental de la Biblioteca Nacional Española de Cortes de 8 de noviembre de 1813

No conformándose el bibliotecario con acumular fondos bibliográficos, propone la idea de elaborar un Reglamento para dicha Institución. La primera noticia que se tiene sobre este Reglamento de la Biblioteca va a ser por un informe de la Comisión del 17 de agosto de 1813 donde aparece que el bibliotecario de Cortes *está preparando el Plan de Bibliotecas provinciales, al que se manifiesta tan inclinado el Congreso en la sesión donde se trató este punto*. En octubre del mismo año se recoge en acta el dictamen de la Comisión de Biblioteca fijando las bases para el establecimiento de bibliotecas provinciales en ambos hemisferios y la planta fundamental de la Biblioteca Nacional Española de Cortes, creando un sistema nacional de bibliotecas, bajo el patrocinio de la de Cortes, que sería la nacional²²⁰

La importancia del Reglamento es relevante y para el propio Gallardo supone *el monumento clásico del españolismo liberal e ilustrado de las Cortes*²²¹. La disposición consta de 24 artículos donde la primera parte, recoge el servicio y préstamo de fondos y crea las bibliotecas públicas provinciales. La segunda parte

²¹⁹ *El Diario de Sesiones de Cortes*. Legislatura de 1821. Tomo II. Madrid, 1871, pp. 1.457-8, recoge el dictamen de la comisión del día 7 de julio donde se decidió la medida de encargar al Gobierno a tomar medidas para recuperar documentos que estaban en poder de particulares y, en este sentido, se dictó la *Real Orden dada por las Cortes el 11 de mayo de 1821*.

²²⁰ *Actas de las Sesiones de la Legislatura Ordinaria de 1813*, núm. 28, de 27 de octubre de 1813.

regula las competencias de la Biblioteca de Cortes como cabecera de las provinciales, dándole el carácter de Biblioteca Nacional Española de Cortes y, como tal, le correspondía reunir todas las obras impresas, estampadas y manuscritas en cualquier idioma²²².

Así pues, la Biblioteca Nacional repartiría entre las provincias los duplicados y les facilitaría copia de los manuscritos que les solicitara por lo tanto; cualquier obra que conservara una de estas bibliotecas provinciales y que no tuviera la Biblioteca Nacional era trasladada a ésta. Finalmente se encargaba a los bibliotecarios la confección del catálogo de los escritos nacionales y la reunión de todas las posibles noticias para ilustración de la bibliografía española. También tendría una red de Bibliotecas en todas las capitales de provincia, dependientes de la Diputaciones provinciales, con la misión de recopilar la producción científica de la provincia, redactar los índices y enviárselos a la Central para darlo a conocer a toda la nación a través de la Biblioteca Central.

De los contenidos de este proyecto Escolar deduce que, *la organización bibliotecaria estaba a punto de nacer con finalidad de bibliofilia y erudición histórica*²²³. Sin embargo, tan magno proyecto aprobado, casi en su totalidad en las sesiones del 7 y 8 de noviembre de 1813, no pudo ejecutarse por causa del fin próximo de la guerra y el traslado de las Cortes y de su Biblioteca a Madrid.

Con la vuelta de Fernando VII se disuelven las Cortes y unos meses más tarde, en mayo de 1814, se lleva a cabo el cierre de la Biblioteca Nacional de Cortes.

²²¹ Sobre esta cuestión puede verse, GARCÍA EJARQUE, Luis. *La Biblioteca Nacional Española de Cortes y su último reglamento*. En: Homenaje a Justo García Morales. Miscelánea de estudios con motivo de su jubilación. Madrid: ANABAD, XLII, 1992, pp. 191-217.

²²² Refiriéndonos a la Biblioteca Nacional de Cortes, véase GALLARDO y BLANCO, Bartolomé José. *Propuesta sobre la Biblioteca Nacional de Cortes*. Madrid: Imp. D. M. Calero, 1838.

²²³ Op. cit., p. 435.

Tras la disolución de las Cortes y de su Biblioteca los libros pertenecientes a las mismas pasaron a las Casas Consistoriales de Madrid y a la Biblioteca Real, tal y como pone de manifiesto la comunicación del Auditor de Guerra de 22 de mayo de 1814.

6.1.1.2. Segunda etapa de la Biblioteca de Cortes

Esta segunda etapa que durará seis años, entre mayo de 1814 y enero de 1820, coincide con el momento histórico en el que Fernando VII se ve obligado, por los liberales, a jurar la Constitución y por ello se volvieron a convocar las Cortes. La apertura de las Cortes y de su Biblioteca supuso restablecer, de nuevo, la figura de Gallardo al frente de la misma y la Comisión encargada del fomento y conservación de la Biblioteca de Cortes.

Durante esta nueva etapa que ocupa el *Trienio Liberal*, la labor del bibliotecario consistió, fundamentalmente, en recuperar los fondos antiguos a la vez que, incorporar algunos nuevos procedentes de colegios mayores suprimidos y de colecciones privadas como la del Diputado Francisco Navarro²²⁴. En esta línea de trabajo, Gallardo comunicó a la Comisión que era necesario activar la observancia de las Disposiciones legislativas referidas a la Biblioteca y seguir con la tarea de recoger libros y documentos²²⁵. Sin embargo cuando se consiguió rehacer de nuevo la Biblioteca acontecimientos políticos, en este caso, la intervención del ejército francés, los llamados *Cien Mil Hijos de San Luis* acabaron en 1823 con el trienio liberal y la Biblioteca volvió a cerrarse hasta 1834.

²²⁴ Colección que constaba de siete a ocho mil volúmenes de filosofía, jurisprudencia y política. Dato reflejado en el *Diario de Sesiones de las Cortes*, 7 de diciembre de 1821, p. 1134.

²²⁵ Un ejemplo lo vemos con la *Orden de 25 de julio de 1820* donde se establece que el archivo de la Diputación de Millones se entregue al Archivero de la Secretaría de Cortes bajo el correspondiente inventario.

Un período vigente de los años 1820 a 1823 que ha sido considerado por Salavert, como un período de poco esplendor para la Biblioteca, sobre todo, por el ambiente de tensión, de exaltación y conspiración nada propicio para establecer una política bibliotecaria tal y como lo concebía Gallardo²²⁶.

Al finalizar el período con la suspensión de las Cortes y, con ellas, la Biblioteca, el desastre se produce en el traslado de los fondos de la misma transfiriendo, una parte de los libros a la Biblioteca Real, y otra buena parte, fueron destruidos, a causa de un motín, en el recorrido de Sevilla a Cádiz por el Guadalquivir.

6.1.1.3. Tercera etapa. Fase final de la Biblioteca de Cortes

La tercera etapa de la Biblioteca viene a coincidir con la muerte de Fernando VII, la subida al trono de la Reina Gobernadora María Cristina, y la aprobación del *Estatuto Real* en el año 1834 que recoge, en el artículo primero, la convocatoria de Cortes generales del Reino, y en el artículo segundo la configuración de dos Estamentos: Próceres y Procuradores.

En este sentido, a partir del 24 de julio de 1834 quedan inauguradas las Cortes y, por supuesto, la restauración de la Biblioteca de la que no se dice nada hasta la Sesión de 5 de diciembre de 1835²²⁷. La primera referencia que se tiene de ésta Biblioteca se encuentra en la declaración de uno de los Diputados al hacer *la debida reclamación a fin de que la Biblioteca de las antiguas Cortes venga a ocupar*

²²⁶ Op. cit. pp. 68-69.

el lugar que le corresponde en este recinto, y va a ser en 1836, en la sesión del 25 de octubre, cuando se da cuenta del nombramiento del Bibliotecario en la persona de Gallardo, así como la designación de la Comisión de Biblioteca.

Con Gallardo al frente de la Biblioteca se continúa con la misma trayectoria marcada en etapas anteriores intentando, como siempre, enriquecer la Biblioteca y llegar a la realidad de una Biblioteca Nacional Española; este período ha sido considerado como el momento estelar de la Biblioteca de Cortes, y, en este sentido, se restablecen medidas que habían perdido vigencia a la vez que se publica el *Real Decreto de 9 de febrero de 1837*, que contiene el *Decreto de 23 de abril de 1813* por el que debía de entregarse a la Biblioteca de las Cortes dos ejemplares de cada obra impresa en cumplimiento de la *Resolución de 12 de marzo de 1811*. También entró en vigor la disposición de las Cortes que actualizaba otra anterior ordenando que, el Bibliotecario de Cortes pudiera seleccionar a su favor los fondos de las bibliotecas públicas de las Comunidades destruidas por el enemigo y de los conventos suprimidos, cuestión que creó problemas. Es interesante destacar que fueron muchas las donaciones que entraron a formar parte de la Biblioteca de Cortes, pero el fondo más rico estaba en la incorporación de la biblioteca de D. Carlos María Isidro de Borbón que, más adelante, veremos que fue el germen de la Biblioteca del Senado.

6.1.1.4. La Ley de 19 de mayo de 1838: Supresión de la Biblioteca de Cortes.

La publicación de la Constitución de 1837 y la implantación del bicameralismo, va a suponer la consolidación de la Alta Cámara y el nacimiento de

²²⁷ Dato recogido por SALAVERT, Vicente: *La Biblioteca del Congreso de los Diputados: notas para su historia (1811-1936)*. Madrid: Congreso de los Diputados, 1983, p. 71.

su Biblioteca. Un primer aspecto que dio lugar a este establecimiento fueron los problemas surgidos con la Biblioteca y el bibliotecario de Cortes a partir de enero de 1838, momento en el que el Congreso de los Diputados comienza la discusión de un nuevo reglamento donde se proponía la supresión de la Biblioteca. Las razones que aducían los diputados para extinguir la Biblioteca eran, básicamente, de tipo económico, aunque también se discutieron cuestiones personales y profesionales contra el bibliotecario²²⁸. Todo ello terminó con la promulgación de la Ley publicada el 21 de mayo de 1838. El proceso de ejecución de la Ley fue tan largo que no se llevó a efecto, dando lugar al Senado a presentar un proyecto de ley sobre la supresión de la Biblioteca de Cortes que se convirtió *Ley de 19 de mayo de 1838*. El contenido de la Ley se dividía en cuatro artículos donde, a tenor del artículo primero, se disponía que *quedaba extinguida la Biblioteca denominada de las Cortes*. Por su parte, el artículo tercero establece:

Que de entre estos libros se separen los Códigos de las Leyes de la Monarquía, las obras clásicas de legislación y otros que se crean necesarios para consultarlos en las deliberaciones de ambos cuerpos colegisladores, los cuales se conservarán en su respectivo archivo.

Para dar cumplimiento a este artículo tercero de la Ley y comenzar la selección del fondo bibliográfico se crea una Comisión Mixta de selección y supresión de la Biblioteca encargada del reparto de libros. A pesar de esto, la supresión de la Biblioteca se empezó a llevar a cabo diez años después a causa del desacuerdo existente entre el Congreso y el Senado con respecto al informe que contenía los índices de los libros que la Comisión presentó en el año 1840²²⁹.

²²⁸ Consúltase SAINZ RODRÍGUEZ, Pedro. *Don Bartolomé José Gallardo y la crítica literaria de su tiempo*. "Revue Hispaniques", LI, Nueva York, 11921.

²²⁹ Véase Archivo del Congreso, Leg. 63 y 64 y Archivo del Senado caja de varios (n. 11). Hay que destacar que en el fondo del Archivo del Senado no encontramos la relación de las obras destinadas al Senado.

Durante el transcurso de los doce años, que duró la extinción de la Biblioteca de Cortes, y la consiguiente enajenación de sus fondos, la Biblioteca pasó a denominarse Biblioteca del Congreso.

6.1.1.5. La Biblioteca del Congreso

La Biblioteca del Congreso, en opinión de Alicia Martín, surge con un fondo mínimo procedente de la suprimida Biblioteca de Cortes. Para esta autora, la Biblioteca del Congreso, se caracterizará por una mayor estabilidad que su predecesora y por un desarrollo más lento y menos espectacular, aunque más efectivo desde el punto de vista técnico²³⁰.

La formación de la Biblioteca del Congreso se inicia con la supresión de la Biblioteca de Cortes y con la adscripción de los fondos bibliográficos al Archivo. En este sentido la Biblioteca del Congreso estará bajo las ordenes del Archivero que se encargará de separar los fondos del Archivo y los de la Biblioteca. Desaparecida la Comisión especial de Biblioteca, la Biblioteca pasa a depender directamente de Gobierno Interior, que, a su vez, designará una subcomisión para proponer las adquisiciones. A su vez, se encarga a la Comisión de Gobierno interior la formación de los reglamentos de todas las dependencias del Congreso.

El destino definitivo que se dio a los fondos bibliográficos de la Biblioteca fue el siguiente: unos se quedaron en las bibliotecas de Cádiz, de donde procedían y que no llegaron a salir; otros fueron a la Biblioteca Nacional; otros como los Papeles

²³⁰ MARTÍN GONZÁLEZ, Alicia. *La Biblioteca del Congreso de los Diputados*. Revista de las Cortes Generales, n.º 18, tercer cuatrimestre, 1989, p. 231.

y Colección de Salazar y la llamada Biblioteca Doméstica de los Jesuitas pasaron a la Academia de la Historia; otros se quedaron en el Senado, como la biblioteca del Infante D. Carlos; y otros pasaron a la nueva sede del Congreso en la Carrera de San Jerónimo de Madrid.

Para finalizar con el estudio de la Biblioteca en sus últimos años, vamos a seguir los períodos que traza Vicente Salavert en la obra que venimos consultando²³¹.

- 1- Un primer período de los años 1841 a 1857 que según el testimonio que nos dejó el bibliotecario Clemente Arias en el prólogo a su *Catálogo de los fondos de 1857*²³², la nueva Biblioteca habría iniciado su andadura en 1841 donde quedaba un residuo de los más insignificantes libros de la recién suprimida de Cortes.

Sobre este aspecto, deduce Salavert que todo hace pensar que la efectiva labor bibliotecaria de Arias debió iniciarse hacia 1850, momento que daría comienzo la preparación de los tres catálogos:

- el original y manuscrito, para el gobierno de la biblioteca;
- impreso para los Diputados en cumplimiento de lo establecido en el Reglamento;
- el de ejemplares duplicados, que se conservan para reemplazar las obras que se inutilicen o extravíen²³³.

²³¹ Op. cit., pp. 133-156.

²³² *Catálogo por orden alfabético y de materias de la Biblioteca del Congreso de los Diputados y Reglamento de la misma y del Archivo (por Clemente Arias y Avilés)*. Madrid, Imp. M. Rojas, 1857.

²³³ *Ibidem*, p. 134.

Consideramos procedente hacer constar que, cuando se suprime la Biblioteca de Cortes, y que como hemos visto sus fondos pasan al Archivo encargándose la Comisión de Gobierno interior de la formación de los Reglamentos de todas las dependencias del Congreso, se firma en 1855 el *Reglamento de las dependencias del Congreso de los Diputados*, que en teoría, habría continuado vigente hasta nuestros días, si bien, con algunas modificaciones²³⁴. Por lo que se refiere a los servicios del *Archivo y Librería*, aparecen regulados, dentro del Título III, en los artículos 15 a 25. Por este articulado puede apreciarse que ambos servicios quedaban diferenciados, aunque coordinados bajo la dirección del Archivero quien usa en estos momentos el título de Archivero-Bibliotecario y será siempre un Oficial de la Secretaría. En este *status* jurídico-administrativo continuará hasta 1905 fecha en que se separará la Biblioteca del Archivo²³⁵.

2- El segundo período comprendería de los años 1857 a 1884. Sentadas las nuevas bases de la Biblioteca comienza una fase de desarrollo más lento y menos espectacular que en los tiempos de Gallardo pero, desde luego, como destaca Salavert, más efectivo. Tanto es así, que lo califica como fase de consolidación.

Durante esta etapa hay que señalar la publicación, en 1877, del cuarto catálogo de la Biblioteca del Congreso de los Diputados realizado por Manuel Fernández Martín Oficial de la Secretaría y Archivero-Bibliotecario²³⁶. También en este período se consiguen adquisiciones de fondos muy ricos como las obras de la biblioteca de Andrés Borrego y las de Ángel Fernández de los Ríos.

²³⁴ El Reglamento de 1855 fue modificado en las sesiones secretas de 2 de abril de 1895 y 23 de febrero de 1917 y por un acuerdo, tomado también en sesión secreta, de 26 de diciembre de 1905. Fue el Reglamento que estuvo en vigor durante un período más largo de tiempo. Así lo constatan ALGUACIL PRIETO, M^a Luisa, MACIÁ, Mateo, y MARTÍNEZ-CAÑAVATE, María del Rosario. *El Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados (1810-1977)*. Madrid: Congreso de los Diputados., Dirección de Estudios y Documentación de la Secretaría General, 1996, p. 53.

²³⁵ SALAVERT, Vicente. Op. cit. p. 139.

²³⁶ *Catálogo de las obras existentes en la Biblioteca del Congreso de los Diputados, (por Manuel Fernández Martín, Oficial de la Secretaría y Archivero-Bibliotecario)*. Madrid, Imp. Viuda e Hijos de J.A. García, 1877.

3-El último período que comprende de los años 1884 a 1905 viene marcado por un crecimiento y desarrollo significativo. Si el período anterior, afirma Salavert, lo he calificado como de consolidación de la Biblioteca del Congreso de los Diputados, consolidación que se verifica a través, y no obstante, de las vicisitudes políticas que se desarrollan entre la Revolución de 1868 y la Restauración de Alfonso XII, principalmente, este último período podría designarse como de crecimiento o desarrollo. Durante estos años podemos asistir a una transformación sustancial, con ampliaciones radicales, tanto en los locales destinados a Biblioteca, como por lo que se refiere a un crecimiento igualmente sensible de los fondos bibliográficos²³⁷.

Destacamos, dentro de este período, la publicación de un nuevo catálogo elaborado por Calvo Marcos²³⁸. Salavert describe esta obra como un catálogo que abandona la división en secciones adoptando el sistema diccionario de materias. Dentro de cada materia general se establecían subdivisiones, asimismo en orden alfabético, y en ese mismo orden se iban reseñando las diferentes obras, pero atendiendo a sus títulos y no a sus autores, cuyos apellidos, por otra parte, se destacaban por medio de los caracteres tipográficos. Sólo dos excepciones en la estructura indicada: colocaba a la cabeza de las divisiones principales los textos legales y los tratados generales, así como las obras de legislación aparecían al principio de las subdivisiones; de otro lado, las colecciones “en forma de Biblioteca” las encontramos agrupadas, unas en Literatura y otras en Derecho, de acuerdo con su propio carácter. Finalmente el catálogo se cerraba con un cuadro maqueta de las materias, seguido de un “Índice por orden alfabético de apellidos de los autores, traductores, comentadores y compiladores”, que remiten, el primero, a las páginas del tomo, y al número de orden de cada asiento, el segundo.

²³⁷ Op. cit., p. 146.

²³⁸ CALVO MARCOS, Manuel. *Catálogo de la Biblioteca del Congreso de los Diputados, formado por orden de la Comisión de Gobierno interior por el Oficial de la Secretaría*. Madrid, Imp. Hijos de J. A. García, 1889.

Por último, señalar que durante la preparación del catálogo no pudieron incluirse un buen número de adquisiciones que más adelante se relacionaban como *Apéndice I*²³⁹ y posteriormente en 1907 *Apéndice II*²⁴⁰ al catálogo de Calvo Marcos.

6.1.2 La Biblioteca del Senado

6.1.2.1. La formación de la Biblioteca del Senado: El Estatuto Real de 1837 y la Biblioteca del Infante Carlos María Isidro de Borbón.

La Biblioteca del Senado, al igual que la Biblioteca del Congreso, tiene su origen en 1838 con el nacimiento del bicameralismo, intrínseco en el Estatuto Real de 1837. Por este motivo, el estudio de la historia de la Biblioteca del Senado corre paralela a la de la Alta Cámara.

Rosario Herrero Gutiérrez, actual bibliotecaria del Senado, en su trabajo sobre *La Biblioteca del Senado* escribe cómo la Biblioteca, desde sus inicios hasta su disolución en 1923, se concibió como un conjunto complejo y armónico donde se procuró que lo documental, literario, arquitectónico y decorativo quedaran recogidos en armoniosa síntesis y a la altura que reclamaba la Institución a la cual servía. Aun contando con los límites que imponía el espacio físico, se tuvo una concepción grandiosa de la Biblioteca del Senado. Se trató, en suma, de que recogiera nuestro patrimonio cultural y aun parte del universal de la época²⁴¹.

²³⁹ *Catálogo de la Biblioteca del Congreso de los Diputados... Apéndice I*. Madrid, Imp. Hijos de J. A. García, 1893.

²⁴⁰ *Id. Apéndice II*. Madrid, Imp. Hijos de J. A. García, 1907.

²⁴¹ HERRERO GUTIÉRREZ, Rosario. *La Biblioteca del Senado*. Madrid: Senado, 1982, p. 11.

Podemos sistematizar diciendo que, son tres los aspectos que intervienen en la configuración de la Biblioteca del Senado:

- 1) Un primer aspecto relacionado con el nacimiento del bicameralismo integrado en la Constitución de 1837, que significa la división del Congreso en dos Cámaras.
- 2) Un segundo aspecto está relacionado con la *Ley de 19 de mayo de 1838* que suprime la Biblioteca de Cortes y da paso a la creación de la Biblioteca del Senado, después de haber estado fusionadas ambas bibliotecas de Congreso y Senado.
- 3) El tercer aspecto es el relativo a los fondos que se incorporan de la biblioteca personal de D. Carlos María Isidro de Borbón, que se ha venido considerando como el germen de la Biblioteca del Senado.

En efecto, el hito importante destaca a finales de 1837 cuando entra a formar parte del fondo de la Biblioteca de Cortes, la biblioteca personal de D. Carlos María Isidro de Borbón, que fue ofrecida al Congreso el 3 de abril de dicho año, y que por discrepancias en su aceptación, no fue aprobada definitivamente hasta el 14 de septiembre. Los motivos que originaron la adjudicación del fondo bibliográfico del Infante a las Cortes podemos encontrarlos, de manera exhaustiva, en el expediente conservado en el Archivo del Senado²⁴² y en los Diarios de las Cortes²⁴³ nosotros pretendemos subrayar, muy brevemente, que fue el Director general de Arbitrios, en enero de 1837, quien propuso al Gobierno que la referida biblioteca *se adjudicase en propiedad de las Cortes*, por una cantidad de dinero estipulada.

²⁴² Caja número 11 sobre asuntos varios del Archivo del Senado.

²⁴³ Puede consultarse en el *Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes de 17 de octubre de 1836 a 4 de noviembre de 1837*. Madrid: Imprenta de J.A. García, 1870, 10 volúmenes. Las sesiones de 26 y 30 de junio de 1837 se encuentran en el volumen VI, números 211 a 245, pp. 3743-4540.

Fundamentadas las razones de su necesidad la Reina manda, por *Real Orden de 27 de marzo de 1837*, pasar a las Cortes todos los antecedentes de este asunto para que resolviese a cargo de qué presupuesto debería incluirse el importe de las dos terceras partes de la tasación de dicha Biblioteca. Las Cortes decidieron su adquisición, previo informe elaborado en conjunto por las Comisiones de Gobierno Interior y Biblioteca, donde proponían la aceptación de la Biblioteca y su permanencia en el Palacio del Senado.

Adquirida la Biblioteca del Infante por las Cortes en 1837 y depositada en el Palacio del Senado hubo algún intento de traslado por parte del Bibliotecario de Cortes; traslado que fue impedido por el Presidente del Senado permaneciendo intacta, incluso, con la propuesta de reparto del fondo que incluía la Ley de supresión de Biblioteca de Cortes en 1838, que al no ejecutarse dio lugar a que los fondos de la Biblioteca del Infante se incorporaran al catálogo que elaboró, en 1851, la Biblioteca del Senado. Esta incorporación de la Biblioteca del Infante Carlos María Isidro no sólo aporta a la Biblioteca del Senado un fondo con antigüedad, sino más bien, una gran riqueza de contenido y variedad.

Pues bien, si estos fueron sus inicios va a ser, a partir de 1846, cuando queda definida como tal Biblioteca, ordenando y enriqueciendo su depósito. Uno de los trabajos más destacados de la Biblioteca fue la publicación, en el año 1851, de un catálogo por orden alfabético y de materias con los fondos de la Biblioteca del Senado²⁴⁴.

²⁴⁴ Véase *Reglamento y Catálogo por orden alfabético y de materias de la Biblioteca del Senado*. Madrid: E. Aguado, 1851. Este catálogo como el manuscrito original están firmados por Diego Medrano, el Marqués de Valgomera y por el Presidente del Senado, Marqués de Miraflores, que dio su aprobación.

6.1.2.2. El Reglamento de Régimen interno de la Biblioteca de 1851

El mismo año que se publica el catálogo de los fondos de la Biblioteca del Senado también, -y como muestra del avance en los trabajos de la Biblioteca- se publica un Reglamento para el régimen interno de la misma. La publicación del Reglamento, por otra parte, nos demuestra la necesidad de una norma para el funcionamiento y organización de la Biblioteca, dando la impresión de consolidación del establecimiento.

El reglamento para el régimen y servicio de la Biblioteca del Senado, estaba estructurado en cuatro capítulos y veintiocho artículos. El primer capítulo regulaba la figura de los senadores-inspectores de la Biblioteca recogiendo el número, nombramiento y funciones de los mismos. No obstante, el artículo uno estipula que, la Biblioteca del Senado, como todas sus dependencias, está bajo las órdenes del Presidente y Senadores-Conservadores.

Las funciones que tienen encomendadas los senadores-inspectores están recogidas en el artículo cuarto a saber:

- 1. Cuidar de que los dependientes de la Biblioteca cumplan con exactitud los deberes que se les impongan.*
- 2. Cuidar de las faltas que se noten o quejas que se produzcan sobre el servicio de la Biblioteca y acudir, si son fundadas, a su remedio.*

3. *Disponer por sí mismos las mejoras de que juzguen ser susceptibles el establecimiento, si están dentro del círculo de sus facultades, o proponer a la Comisión de Administración económica las que crean convenientes y no se consideren autorizados para adoptarlas.*
4. *Procurar la adquisición de buenas obras y demás objetos que contribuyan a enriquecer la Biblioteca o proporcionar su mayor utilidad y buen servicio proponiendo al efecto lo conveniente.*
5. *Cuidar con el mayor esmero de que una vez establecido debidamente el sistema adoptado para el completo arreglo y colocación de las obras, se lleven siempre al corriente con limpieza y claridad los índices y registros oportunos.*
6. *Exigir por lo menos una vez al mes al bibliotecario, el parte por escrito y circunstanciado de las obras que están fuera del establecimiento con expresión de los nombres o títulos de los senadores en cuyo poder se hallan, tiempo que llevan de extracción y documentos que justifican la entrega.*

Concluye expresando que, por regla general compete a los senadores-inspectores conocer, en primer término, todo lo relativo a la dirección y buen servicio de la Biblioteca.

Por otra parte, el artículo cinco, dentro del capítulo segundo, regula que habrá un bibliotecario que será Oficial de la Secretaría y que por su doble condición estará bajo las ordenes del Oficial Mayor y bajo las instrucciones de los senadores-inspectores. Se incluyen como obligaciones del bibliotecario las siguientes:

- Obligación de tener todo el fondo bien dispuesto para servir con rapidez las peticiones de los senadores.
- Procurar que los índices y registros se conserven con esmero.

- Dar parte mensual o, cuando se le exija, a los senadores-inspectores de las obras que hay en préstamo.
- Cumplir las instrucciones que reciba de los senadores-inspectores.

Los capítulos tercero y cuarto se ocupan del personal de la Biblioteca. En concreto, el capítulo tercero está dedicado a las normas que han de cumplir tanto el escribiente como los empleados y así el artículo 10 establece que se destinará a la biblioteca un escribiente que llevará al día los índices y registros. En este sentido, el artículo 16 señala que habrá también un portero destinado al servicio de la biblioteca para cuidar la conservación y seguridad de los objetos que a la misma pertenezcan, teniendo especial cuidado en los horarios de apertura de la Biblioteca.

Finalmente, el capítulo cuarto sobre el servicio de la biblioteca, se refiere al horario, préstamo, distribución de los catálogos y los índices de las adquisiciones a los senadores, presupuesto de la biblioteca, etc. En cuanto al horario, señala que principalmente estará abierta durante la sesión del Senado y además todos los días festivos de once de la mañana a tres de la tarde en invierno, y de diez de la mañana a dos de la tarde en verano. El préstamo está regulado con mucho detalle y precisión para evitar pérdidas o extravíos de libros, sólo se contempla el préstamo dentro del Senado y, en casos excepcionales, se podrán sacar libros fuera del Palacio con una orden por escrito del inspector que adjuntará el recibo firmado por el senador interesado.

6.1.2.3. La Comisión de Fomento y Conservación de la Biblioteca

Entendemos conveniente analizar la importancia que en estos momentos tuvo la Comisión de Gobierno Interior sobre todo, porque se encargaba de la gestión de la Biblioteca que estaba auxiliada por un archivero-bibliotecario nombrado en 1841;

labor que continuará la Comisión de Fomento y conservación de la Biblioteca. En efecto, *la Comisión que se constituía al comienzo de cada legislatura, señala Rosario Herrero, realizó a lo largo de los años una considerable labor no sólo bibliográfica e instrumental, como sería de esperar, sino además cultural y de recuperación para el patrimonio público, de tesoros culturales que de otro modo quizá se hubieran dispersado*²⁴⁵.

Desde 1846 hasta 1849 eran los presidentes del Senado los que se encargaban del orden de los fondos, a partir de esta fecha se nombran *dos senadores conservadores e inspectores de la biblioteca* que llevarán a cabo la ordenación y arreglo de la misma. Bajo esta denominación se conoce a las personas encargadas de la dirección y ordenación de la Biblioteca que en 1871 pasara a preocuparse la Comisión de Fomento y Conservación llevando a cabo las funciones que tenían atribuidas los Senadores.

El origen de ésta Comisión de Fomento y conservación de la Biblioteca, podemos encontrarlo en la Comisión de la Biblioteca del Congreso de 1811, tal y como adelantábamos en el epígrafe anterior al decir que ésta Comisión iba a ser el modelo de constitución y funcionamiento de la que sería la Comisión de Fomento y Conservación. Las funciones que tenía atribuidas eran básicamente; adquirir obras, administrar los asuntos económicos y las demás gestiones necesarias. Es, en este modelo de constitución y funciones, donde podemos ver el origen de la Comisión de Fomento y conservación de la Biblioteca.

El Reglamento del Senado regula la Comisión diciendo:

²⁴⁵ Op. cit., p. 51.

Que haya una Comisión de Fomento y Conservación de la Biblioteca del Senado, y que esta Comisión se componga de un secretario elegido por la Mesa y de dos senadores nombrados directamente por el Senado. La Mesa propone que la elección de los dos senadores se verifique en la primera sesión²⁴⁶.

Esta nueva modalidad de nombramiento de los miembros de la Comisión contrastaba con la forma tradicional de elegir los senadores-inspectores que se designaban en sesión secreta.

Por lo que se refiere a las funciones de la Comisión, a partir de 1871, continuarán siendo las mismas que veíamos para los senadores-inspectores en el artículo cuarto del Reglamento de la Biblioteca de 1851. Sin embargo, observamos a partir de este año, una mayor asiduidad en las sesiones, un mayor detalle en el examen de las cuentas y administración del presupuesto asignado a la Biblioteca, y un mayor orden en el archivo de todas estas cuentas y facturas.

Para finalizar reseñaremos los fondos que se incorporan, en este siglo, a la biblioteca. En este sentido parece ser que la Comisión llevó a cabo una considerable labor bibliográfica cuidando mucho la selección de los libros que más interesaban a la Institución y adquiriendo importantes conjuntos bibliográficos de todas las áreas científicas, a saber:

- Por donación testamentaria, el fondo de Don Ángel Fernández de los Ríos.

²⁴⁶ En el *Diario de Sesiones del Senado*, número 68 de 15 de julio de 1877, p. 1109, encontramos esta referencia hecha a la Comisión de Fomento y Conservación.

- Por compra se adquiere una parte de la biblioteca de la Casa de Osuna-Infantado²⁴⁷.
- También por compra, la biblioteca del General Gómez de Arce con un contenido monográfico notable de la Guerra de la Independencia.
- Por último, por compra se adquirió, en dos fases, los fondos de Eduardo Hinojosa.

6.2. Bibliotecas Públicas

6.2.1. Origen de las Bibliotecas Públicas

El origen y evolución de las Bibliotecas públicas va a venir enlazado a hechos y circunstancias que, en cada caso, resulten relevantes al desarrollo político, social y cultural del siglo XIX. En este sentido, la creación y desaparición de estos establecimientos va a reflejar el interés que se tenga por la educación, cultura, y por la necesidad de recoger, conservar y dar vida al servicio de la cultura.

La preocupación por crear Bibliotecas públicas, podemos constatarla en el *Proyecto del Reglamento nacional de Bibliotecas Provinciales y de la Planta fundamental de la Biblioteca Nacional Española de Cortes de 8 de noviembre de 1813*. El artículo primero decía así:

²⁴⁷ La autorización fue dada por *Ley de 14 de agosto de 1884*. En el artículo 1º se autoriza al Ministro de Fomento para adquirir la biblioteca de los Duques de Osuna y del Infantado concediéndole un suplemento del presupuesto del año económico de 1884 a 1885. El artículo 2º establece que los manuscritos de esta biblioteca pasarán a la Nacional, así como cualquier libro impreso de que esta biblioteca carezca. Los restantes, en base al artículo 3º, pasarán a las bibliotecas del Senado y del Congreso todos los relativos a derecho político, historia constitucional y demás materias análogas a su instituto. El artículo 4º estipula que hecha esta distribución, el Ministro de Fomento cuidará de repartir los restantes entre las bibliotecas públicas, según las necesidades de cada una. Por el artículo 5º,

En cada capital de provincia, en la Península y Ultramar, se establecerá una biblioteca pública que tomará su denominación del nombre de la provincia.

Por este motivo, Hipólito Escolar subraya que la idea del P. Martín Sarmiento de que se crearan bibliotecas en las provincias estuvo a punto de convertirse en realidad gracias al erudito bibliófilo Bartolomé José Gallardo²⁴⁸.

Con respecto a estas Bibliotecas, el padre Martín Sarmiento, en una de las cartas que escribió al bibliotecario de la Librería Real Juan de Iriarte, exponía en 36 puntos el desarrollo de sus ideas sobre las bibliotecas, la producción y comercio del libro. No sólo es muy interesante la parte que trata del comercio del libro en el siglo XVIII, puesto que nos proporciona datos sobre el comercio del libro en Madrid durante las tres últimas décadas, sino también por el plan que expone sobre las bibliotecas. En su opinión las bibliotecas deberían situarse en ciudades distintas a la capital, y en el siguiente orden:

- 1- en las ciudades que tuviesen Universidad,
- 2- en las que tuviesen catedral,
- 3- en las que no tuviesen ni Universidad ni catedral, pero constituyeran un núcleo importante de población.

inmediatamente que haya sido adquirida la biblioteca, se formará y publicará oficialmente el inventario de los impresos y de los manuscritos.

²⁴⁸ Op. cit. p. 46. Refiriéndonos al origen de las Bibliotecas Públicas consúltese GESTA Y LECETA, Marcelino. *Bibliotecas públicas*. En "Boletín Histórico". Año III, n. 8, Madrid, 1882; y CASTELLANOS, Basilio Sebastián. *Origen de las Bibliotecas Públicas Españolas y en particular de la Nacional de Madrid*. El Bibliotecario, mayo de 1841, p. 1-4. También véase TORRES CAMPOS,

En la misma línea, reflexiona sobre lo siguiente: *Lo cierto es que si en los lugares que pican en mil vecinos se fundasen bibliotecas, habría en ellos menos ociosos y no se embrutecerían tanto por falta de libros los que teniendo buenos talentos y habiendo tenido buenos principios de literatura, residen allí sin poder seguir carrera de las letras. Las bibliotecas servirían para que vayan a leer y estudiar los que no tienen los que necesitan para escribir alguna obra es preciso que se establezca una afición que pique algo en honesto vicio a todo género de literatura.*

Concluye diciendo que este plan debería ser mantenido y dirigido por la Iglesia y creía que donde se estableciesen las bibliotecas aumentaría el gusto por leer y comprar libros y algunos particulares formarían su propia biblioteca, siguiendo el ejemplo del monarca que había transformado la suya en pública.²⁴⁹

La creación de bibliotecas públicas podemos situarla a partir de la publicación del *Decreto de 7 de marzo de 1814* que por el artículo 97.6 quedarían encomendadas a la Dirección general de Estudios ocupándose del cuidado, conservación y aumento de las bibliotecas públicas del Reino²⁵⁰.

Manuel. *Las Bibliotecas en España*. "Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos". Tomo 6, 20 de marzo de 1877, pp. 71-88; y tomo 7, 1877, pp. 82-83 y 103-106.

²⁴⁹ MARTÍN SARMIENTO, Benedictino. *Reflexiones literarias para una biblioteca real y para otras bibliotecas públicas hechas por el P. P. F. Martín Sarmiento, Benedictino, en el mes de diciembre del año 1743*. En: *Semanario erudito que comprende varias obras inéditas, críticas, morales, instructivas políticas, históricas, satíricas y jocosas de nuestros mejores autores antiguos y modernos dadas a la luz por Antonio Valladares*, t. XXI. 1789, pp. 100-273. Recoge dos cartas que el padre Martín Sarmiento escribió al bibliotecario de la Librería Real, Juan de Iriarte. En la primera carta Sarmiento expone sus opiniones e ideas sobre el emplazamiento que entonces tenía la Librería Real en el pasadizo de la Encarnación, la segunda, que es más amplia, desarrolla sus ideas sobre las bibliotecas.

²⁵⁰ La formación de estas bibliotecas estuvo mediada por el informe elaborado por la Junta de Instrucción pública que recogía los planteamientos y proyectos liberales en materia de educación titulado: *Informe de la junta creada por la Regencia para proponer los medios de proceder al arreglo de los diversos ramos de la instrucción pública* con fecha de 9 de septiembre de 1813. Así lo pone de relieve SAN SEGUNDO MANUEL, Rosa. *Sistemas de organización del conocimiento: La*

La vuelta del período absolutista impuesto por Fernando VII, supone abolir la Constitución de 1812 y toda la legislación promulgada sobre el desarrollo y fomento de las bibliotecas públicas. La normalización resurge con el período de *trienio liberal* que implanta medidas educativas reflejadas en el desarrollo de algunas disposiciones. En esta línea de desarrollo, se reguló el *Decreto de 29 de junio de 1821* aprobando el Reglamento general de instrucción pública que supone un avance al recoger las bibliotecas públicas en los centros de enseñanza bien en Universidades, en Escuelas o en otros centros. De la lectura del Reglamento observamos que el legislador trata a los bibliotecarios de las bibliotecas públicas como profesionales dedicados a tareas docentes asignándoles la docencia en la enseñanza superior de la asignatura de *Bibliografía*. Este hecho pone de relieve la importancia que dieron las Cortes de Cádiz a los trabajos bibliotecarios y a las técnicas bibliográficas, igualando la categoría del Bibliotecario a la del docente. El intento de igualar las categorías entre bibliotecarios y profesores había tenido su primera expresión en 1793, con la elaboración, por parte de Jovellanos, de un informe en el que expuso la equivalencia del *status* de ambos²⁵¹.

Como se sabe, al *trienio liberal* le vino a suceder otro período absolutista bajo el reinado de Fernando VII y ello impidió la entrada en vigor de las anteriores medidas educativas de los liberales produciéndose una reforma considerable en la concepción de la enseñanza y en la extensión de la cultura. Las modificaciones en este ámbito se reflejaron en un nuevo plan de educación contrario al plan proyectado por los gobiernos liberales. Así, el Plan que se aprobó por *Real Orden de 14 de octubre de 1824* bajo el título *Plan literario de estudios y arreglo general de las Universidades del Reino* sólo hacía referencia a las bibliotecas de las Universidades y de las escuelas especiales, cambiando la imagen del Bibliotecario y llegando a

organización del conocimiento en las bibliotecas españolas. Madrid: Universidad Carlos III de Madrid. Boletín Oficial del Estado, 1996, pp. 228-229.

²⁵¹ JOVELLANOS. *Instrucción u ordenanza para la nueva Escuela de Matemáticas, Física, Química, Mineralogía y Náutica de Gijón*, [17-?]. La cita está tomada de la obra de SAN SEGUNDO, Rosa, op. cit., p. 229.

considerarle como un censor, ya que en el régimen absolutista de Fernando VII se implantó un sistema riguroso de censura en el que se asiste, incluso, a cierres de Bibliotecas.

Finalizado el absolutismo con la muerte de Fernando VII, en 1833, se inició un nuevo régimen liberal con la regencia de M^a Cristina y una sucesión, en el poder, de progresistas y moderados (1833-1868). Con estos cambios políticos se modificaron los proyectos de bibliotecas públicas produciéndose la creación de nuevas bibliotecas públicas en capitales de provincia e iniciándose el origen de una organización bibliotecaria española.

6.2.2. La desamortización de Mendizábal como contribución a la creación de las Bibliotecas Públicas

Otra medida política, que contribuye al incremento de Bibliotecas, es la decisión por *Decreto de 11 de octubre de 1835* de suprimir las comunidades religiosas con la excepción de las que se dedicaban a la enseñanza de los niños pobres y a la asistencia de los ancianos, procediendo a la incautación y venta en subasta pública de sus bienes. Con la firma del Decreto citado y del *Real Decreto de 8 de marzo de 1836* se ordena la supresión de todos los monasterios y conventos que tuvieran menos de doce religiosos profesos.

No cabe duda, que el aumento del número de las Bibliotecas públicas en estos momentos viene dado por una democratización que se vio apoyada por la sucesión de desamortizaciones originadas en esta década. La primera en el tiempo fue la

producida con la supresión de la Compañía de Jesús en julio de 1835. De los bienes de la Compañía sólo se exceptuaron para fines de la deuda pública, las pinturas, bibliotecas y enseres que podían ser útiles a los institutos de ciencias y artes, así como los colegios, residencias y casas de la Compañía.

A su vez, observamos como el *Reglamento de 24 de marzo de 1836*, sobre organización de estos fondos, establece que *los exclaustros y secularizados célebres por su erudición podrán aspirar a ser colocados en las Bibliotecas públicas existentes o que en adelante se establecieran.*

Otra disposición, en relación con el desarrollo de las bibliotecas de carácter público que debemos considerar es el Plan General de Instrucción Pública, también llamado Plan Duque de Rivas, aprobado por *Real Decreto de 4 de agosto de 1836* al restablecer las bibliotecas de los centros de enseñanza, es decir las bibliotecas escolares y universitarias, aunque, en este caso se omitía el término pública o popular; en base a este plan se crearon bibliotecas en escuelas, institutos y universidades, sin llegar a cubrir necesidades populares de acercamiento a la cultura popular.

La siguiente medida que favoreció las bibliotecas públicas vino dada por la *Real Orden de 22 de marzo de 1838* que manda formar bibliotecas en las capitales de provincia para utilizar riquezas literarias que contenían los conventos suprimidos. Podemos pensar que en este momento nacen definitivamente las bibliotecas provinciales españolas que se enriquecen con ingente cantidad de fondos de las bibliotecas universitarias. Por esta disposición la Reina dispone que *en las provincias donde hubiere universidad reemplace este cuerpo literario a la comisión artística en la reunión, colocación y arreglo de los libros procedentes de los suprimidos conventos, pero en la inteligencia de que no ha de considerar la biblioteca que se*

forme como propiedad exclusiva suya, aunque sí podría servirse de ella, sino como establecimiento público, de cuya conservación estará encargada, y que deberá estar abierto seis horas al menos diarias [...] y como en la realización de este proyecto están interesados los ayuntamientos y diputaciones provinciales, es la voluntad de S.M. que se pongan los claustros de acuerdo con estas corporaciones para que señalen fondos sobre sus presupuestos, a efecto de conservar y enriquecer las bibliotecas.

Las bibliotecas sólo se crearon en las capitales de provincia que carecían de Universidad sin embargo, en aquellos lugares en los que existía Universidad no se llegaron a crear puesto que los fondos fueron depositados en las bibliotecas de las Universidades. Los centros de enseñanza eran los destinatarios prioritarios de estos fondos y su formación estuvo supeditada a la enseñanza.

La repercusión y desarrollo que conllevó la supresión de conventos fue considerable, sobre todo porque poseían numerosas obras artísticas, ricos archivos y grandes bibliotecas. Es cierto que en aquellas ciudades en las que existían bibliotecas o ciudades universitarias la documentación y obras literarias pasaron a estas instituciones pero, en la mayoría de las provincias, donde no existían se recogieron y guardaron debidamente obligando al gobierno a constituir *comisiones científicas y artísticas provinciales*. Se trataba de poner orden en el caos que se había producido por el abandono de los conventos.

En 1885 Nicolás Díaz y Pérez, bibliotecario de la Sociedad Económica Matritense, escribió un informe sobre las bibliotecas españolas; da comienzo su obra con estas palabras *Las bibliotecas públicas han progresado algún tanto en nuestro país, contra la opinión de aquellos que sostenían hasta poco há, que nunca se aclimatarían en España, porque no se conocía la costumbre de leer*. La obra nos da

noticias muy interesantes sobre las bibliotecas españolas y también sobre las americanas, británicas y las de Europa latina. Da numerosos datos de todos los países, no sólo, sobre las bibliotecas sino también sobre la escolarización, educación, etc. Habla del progreso producido en Portugal y que aún no se conoce ni en España²⁵². Nos detalla la existencia de las treinta bibliotecas públicas estatales abiertas en España; tres en Madrid y 27 en el resto de la Nación y a su vez añade: *Basta esta cifra para saberse que está muy desatendido este ramo de la instrucción popular, y que es indispensable mejorarlo, como lo reclama la opinión pública y las necesidades del País*. Por último presenta una relación de la situación de las treinta bibliotecas y los volúmenes que las forman; observamos que en la relación aparecen la Biblioteca Nacional y la Universitaria de Madrid.

A pesar del esfuerzo que se estaba desarrollando en el ámbito de la educación y la cultura no se llegó donde se pretendía puesto que se consideraba que las reformas eran insuficientes para el estado de abandono en el que se encontraba la instrucción pública. Nicolás Pérez Díaz refleja esta impresión afirmando que en la primera mitad del siglo XIX las bibliotecas públicas fueron prácticamente inexistentes²⁵³.

La legislación publicada acerca del destino de los objetos artísticos y científicos procedentes de los conventos suprimidos originó la creación de museos y bibliotecas. Por ello, la *Orden de 27 de mayo de 1843* establece, en Cádiz, una Junta para la creación de un museo de pintura y biblioteca. Al formarse ésta Junta cesará la comisión científica y artística que se formó en Cádiz en 1837. La Junta tendrá las mismas atribuciones que se designaron a aquella; dará parte mensualmente de los

²⁵² DÍAZ y PERÉZ, Nicolás. *Las bibliotecas en España en sus relaciones con la educación popular y la instrucción pública*. Madrid: Tip. núm. 6 Hernández, 1885, pp. 6-7.

avances que se hagan en el establecimiento y, llegado el momento, podrá disolverse dando cuenta al Gobierno con remisión de un inventario clasificado de los fondos.

Para finalizar anotaremos que a pesar de que la Constitución de 1845 no fomenta el desarrollo de las bibliotecas públicas, entre otras cosas, porque el texto constitucional no recoge, de forma expresa, el derecho a la educación como había ocurrido en las constituciones de gobiernos liberales; al contrario las disposiciones que se promulgan sobre las bibliotecas públicas ordenan medidas para asegurar el servicio en bien del público estudioso como por ejemplo, medidas relacionadas con el tipo de lectura que se debe hacer en estas salas y formas de acceso.

6.2.3. La Ley de Instrucción Pública de 1857 y la organización bibliotecaria

Aunque se viene considerando que con la Ley de Instrucción pública se llega a la consolidación de la organización bibliotecaria, en realidad, la iniciativa parte del Proyecto de Ley de Instrucción pública de 9 de diciembre de 1855, llamado Proyecto de Alonso Martínez que, aún haciendo referencia a las bibliotecas universitarias, fue un proyecto que prepara el camino a las bibliotecas públicas y a sus profesionales, dando lugar a la *Ley de Instrucción pública de 9 de septiembre de 1857*.

La promulgación de la Ley de Instrucción Pública, denominada Ley Moyano, reconocía la obligación del Gobierno de establecer, en cada provincia, al menos una biblioteca pública; idea que fue desarrollada por el *Decreto de 17 de julio de 1858*, firmado por el marqués de Corbera, al proponer la creación de la organización

²⁵³ DÍAZ y PÉREZ, Nicolás. *Las bibliotecas en España*. "Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos", 1885, p. 2.

bibliotecaria española y, en este sentido, la Ley dedica unos artículos a las instituciones culturales de las bibliotecas y archivos, en concreto, el artículo 163 establece lo siguiente:

Que el gobierno promoverá los aumentos y mejoras de las bibliotecas existentes, cuidará de que en ninguna provincia deje de haber, por lo menos, una biblioteca y dictará las disposiciones convenientes para que en cada una haya aquellas obras cuya lectura pueda ser más útil, atendidas las circunstancias especiales de la localidad y del establecimiento a que pertenezca.

Esta medida evidencia que la pretensión de Claudio Moyano no estuvo centrada sólo en recoger los viejos libros de los conventos sino en iniciar una organización bibliotecaria. Por ello, un año más tarde, se promulga el *Decreto de 17 de julio de 1858* desarrollando los puntos mencionados en la Ley anterior en relación con la dependencia administrativa de estas bibliotecas y la organización del personal. El artículo primero del decreto establece que las *Bibliotecas públicas, sujetas al Ministerio de Fomento, dependerán de la Dirección general de Instrucción pública.*

Según el artículo séptimo *son Bibliotecas públicas, la Nacional, las universitarias, las provinciales y todas aquellas que por su instituto o por las condiciones de su fundación deban destinarse a la enseñanza del público. Respecto a las demás, que en todo o en parte estén sostenidas con fondos del Estado, el Gobierno ejercerá la inspección que le compete.*

Por el artículo noveno, *habrá un Reglamento general para el servicio de todas las Bibliotecas públicas. Por último, se crea el Cuerpo Facultativo de Archiveros-Bibliotecarios y una Junta superior directiva de Archivos y Bibliotecas del Reino con atribuciones propias en este ámbito.*

Iniciada, con esta disposición, la reforma de las Bibliotecas públicas se van a dictar varias medidas referentes a la organización de las Bibliotecas públicas del reino con el *Real Decreto de 8 de mayo de 1859*. Por el artículo cuarto, las bibliotecas públicas, seguirán dependiendo de la Dirección general de Instrucción pública y según el artículo cinco se dividirán, para su servicio y organización en; Bibliotecas de primera, segunda y tercera clase.

Para el régimen y servicio de las Bibliotecas se formarán reglamentos generales. El personal destinado al servicio facultativo de las Bibliotecas públicas constituirá en lo sucesivo el Cuerpo de Archiveros-Bibliotecarios. Los Jefes de las Bibliotecas públicas formarán y remitirán separadamente al Gobierno una lista de los duplicados y ejemplares repetidos de los establecimientos de su dependencia y se formarán también inventarios completos que darán cuenta durante todo el año al Gobierno mediante una memoria del estado de la Biblioteca.

A partir de la publicación de esta disposición parecen verse consolidados los intentos de una organización bibliotecaria. Sin embargo, no todos los autores se ponen de acuerdo en su inicio. Así, por ejemplo, Vicente Salavert considera que el origen hay que verlo en los primeros años del siglo XIX con el proyecto del Reglamento nacional de Bibliotecas Provinciales y de la Planta fundamental de la Biblioteca Nacional Española de Cortes de 8 de noviembre de 1813. Sin embargo, esto no quiere decir que no hubiera existido la preocupación por crear una organización bibliotecaria con anterioridad; de hecho, tal y como apunta Amparo García, es en el siglo XVIII cuando, con el espíritu de la Ilustración, se da mayor interés por la organización bibliotecaria y se busca dotarla de fondos bibliográficos propios para el público al que estaban destinados. Fueron las Sociedades Económicas de Amigos del País las que buscaron llevar a cabo este proyecto que, sin embargo, tuvo un influjo limitado. El proyecto fue retomado por los ilustrados de las Cortes de

Cádiz (1810) quienes, para subsanar la destrucción y el saqueo bibliográfico ocasionado por la guerra de independencia contra Francia, crearon una Comisión de Bibliotecas, cuya labor consistía en localizar y recoger los fondos dispersos de las bibliotecas destruidas. Con este fondo crearon la Biblioteca de Cortes, que fue organizada por el bibliotecario Bartolomé José Gallardo que la utilizó como punta de lanza para la organización de bibliotecas públicas, pese a que entre sus objetivos no estaba el préstamo sino la bibliofilia y la erudición, proyecto que es clausurado con la vuelta de Fernando VII²⁵⁴.

Por otra parte, Maciá y M. Gonzalo sostienen que el origen parte de la desamortización de Mendizábal de 1835 que a su vez motivó, en 1837, la constitución de Comisiones científicas y artísticas provinciales para inventariar los fondos bibliográficos y artísticos removidos, así como crear nuevas bibliotecas y archivos²⁵⁵.

En este sentido, se manifiesta Hector Guillermo Alfaro al decir que el acontecimiento eclosionador de la toma de conciencia de la organización bibliotecaria fue la expedición de las leyes de Desamortización de Mendizabal que decretaban la nacionalización de los bienes de los monasterios. El Gobierno tomó así posesión de libros, documentos y objetos artísticos, y despertó con ello el interés de la clase política por los archivos y bibliotecas. Era menester almacenar los bienes expropiados en una organización bibliotecaria que los protegiera, incluso contra los usuarios populares. Tal organización estaba sustentada en un proyecto conservador y de conservación, no de difusión, actitud que marcó con su impronta la *organización interna* de las bibliotecas; más destinadas entonces para los eruditos e investigadores,

²⁵⁴ GARCÍA CUADRADO, Amparo. *Aproximación a la organización bibliotecaria española en el siglo XVIII*. "Investigación Bibliotecológica". Revista semestral; julio-diciembre 1997, vol. 11, núm. 23 México, CUIB-UNAM, pp 102-136.

²⁵⁵ GONZALO, Miguel Ángel y MACIÁ, Mateo. *La Legislación Española de Bibliotecas*. "Boletín de ANABAD" XLI (1990) n° 2-3, pp. 65-66.

quienes tenían los conocimientos apropiados para abordar el acervo bibliográfico y documental expropiado a los monasterios. De ahí la ambigüedad y limitaciones que caracterizan a esa organización bibliotecaria²⁵⁶.

Para el mismo autor, la organización bibliotecaria en España fue resultado de una tardía toma de conciencia, que se dio al inicio del reinado de Isabel II, en la segunda mitad del siglo XIX, sobre la necesidad de proteger el patrimonio bibliográfico de la nación; a este fin obedece el decreto de 1858²⁵⁷. En esta línea, Hipólito Escolar sostiene que con la Ley Moyano podemos hablar y considerar formalmente la organización bibliotecaria española que surgió, pues, para conservar el patrimonio documental y bibliográfico de la nación que contenía las pruebas de los derechos de los particulares y del Estado, la experiencia de muchos siglos y los tesoros de la humana sabiduría²⁵⁸.

La propuesta de una organización definitiva se lleva a cabo por el *Decreto de 12 de junio de 1867* que clasifica las bibliotecas y regula su personal; el preámbulo al Decreto expone:

Ha llegado, pues, el caso de que esta organización se realice. Reformada convenientemente la Escuela y constituido nueve años el Cuerpo de Archiveros-Bibliotecarios, que ahora se completa con la sección de Anticuarios, procede en buenos principios administrativos ordenar de una

²⁵⁶ ALFARO LÓPEZ, Héctor Guillermo. *Teoría e historia de la constitución del campo bibliotecológico español*. "Investigación Bibliotecológica: archivonomía, bibliotecología e información". Revista semestral, enero-junio de 1999, vol. 13, núm 26. México: Editada por el Centro Universitario de investigaciones Bibliotecológicas. Universidad Nacional Autónoma de México, p. 20.

²⁵⁷ *Ibidem*. pp. 19-20.

manera durable todo lo relativo al servicio de este ramo, que tan intimamente enlazado se halla con el fomento de los trabajos históricos, el progreso de los estudios de erudición y la cultura general del país.

Dentro de esta organización, las Bibliotecas públicas se dividirán en tres clases: de primera, la Nacional y las que posean mas de 1000.000 volúmenes; de segunda, las que pasen de 20.000 y de tercera; las que excedan de 5.000. Las que no alcancen este número conservarán su carácter de Bibliotecas privadas.

Según el artículo nueve, las Bibliotecas públicas son establecimientos nacionales costeados por el presupuesto general del Estado y sus empleados constituirán el Cuerpo Facultativo de Bibliotecarios, Archiveros y Anticuarios. Los reglamentos e instrucciones para el servicio de las Bibliotecas, sus catálogos, índices e inventarios, serán conformes en todo el reino en cuanto lo permita el sistema seguido en dichos establecimientos.

6.2.4. Los Depósitos de libros

Un aspecto a destacar como medida de fomento de las Bibliotecas públicas es la creación de los Depósitos de libros. El *Real Decreto de 29 de agosto de 1895* dispone la forma de adquirir por cuenta del Estado obras con destino a las Bibliotecas públicas y a los Depósitos de libros; se estipula que no se invertirá, por este concepto, en cada trimestre del año económico una cantidad mayor de la cuarta parte presupuestaria.

²⁵⁸ ESCOLAR SOBRINO, Hipólito. *El compromiso intelectual de bibliotecarios y editores*. Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez y Ediciones Pirámide, 1989, p. 49.

En este sentido, el Boletín de Archivos, Bibliotecas y Museos²⁵⁹ da noticia de la entrada en vigor de la *Real Orden de 28 de febrero de 1896* dictada por el Ministro de Fomento donde comunica la creación de los Depósitos de libros, en este Ministerio, con el objeto de fomentar las Bibliotecas públicas. Establece, por otra parte, que de todas las obras y publicaciones que ingresen en lo sucesivo por donativos, adquisición, suscripción, cambio internacional o cualquier otro concepto en los Depósitos de libros del Ministerio de Fomento, se destine y distribuya un ejemplar a cada una de las Bibliotecas públicas que sean servidas por individuos del Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios. El anexo al Boletín publica una relación de las obras que han ingresado en el Depósito de libros de la Dirección general de Instrucción pública durante el segundo semestre del año 1895.

Por último, es preciso anotar que para evitar abusos y lograr el más ventajoso fomento de las Bibliotecas públicas, el Ministerio dicta el *Real Decreto de 23 de junio de 1899* regulando reglas para la adquisición de libros.

6.3. Bibliotecas populares

6.3.1. La creación de las Bibliotecas escolares

En la segunda mitad del siglo, cuando se iban superando las dificultades económicas y políticas que trajo el cambio del antiguo régimen, y coincidiendo con el inicio del reinado de Isabel II, se despertó, en la clase política, un interés por los archivos y bibliotecas. Este aspecto ha sido puesto de manifiesto por Escolar resaltando cómo la revolución de septiembre de 1868, la Gloriosa, que destronó a Isabel II, incluía en su programa, además del sufragio universal, la libertad de cultos,

²⁵⁹ *Las Bibliotecas Públicas*. "Boletín de Archivos, Bibliotecas y Museos". Órgano oficial del Montepío del Cuerpo Facultativo del ramo. Año I, nº1 (1896). Madrid: Imprenta del Colegio Nacional de Sordo-Mudos y Ciegos, 1896, pp. 11-12.

de enseñanza y de imprenta. Estas ideas como era de esperar repercutieron favorablemente en el campo de las bibliotecas, concretamente en la lectura popular, frente a la lectura superior que ofrecían las bibliotecas de la organización a cargo del Cuerpo facultativo²⁶⁰.

Desde esta perspectiva y viendo el creciente público lector popular el Ministro de Fomento, Manuel Ruiz Zorrilla, dictamina la creación de bibliotecas populares en las escuelas. Por tanto, la creación, propiamente dicha, de las denominadas bibliotecas populares cabe datarla alrededor de la revolución de 1868, al producirse un cambio político notable que repercutió, de forma favorable, en el ámbito de la educación y supuso un desarrollo de la cultura popular. Esta nueva concepción de la educación y la cultura facilitó una mayor extensión y desarrollo de las bibliotecas. Sin embargo, no todos los autores consideran la revolución de 1868 como el único factor que influyó en la creación de las bibliotecas, así por ejemplo, Rosa San Segundo subraya que el antecedente claro de estas bibliotecas está en la incautación de bienes de la Iglesia, y en concreto, en la desamortización de Mendizábal, ya que es con este acontecimiento cuando se concibió en España la idea de implantar bibliotecas públicas de carácter gratuito financiadas con fondos públicos capaces de prestar un servicio a la comunidad²⁶¹.

La primera medida que se da en este sentido, es el *Decreto de 1 de enero de 1869* al disponer la incautación por el Estado²⁶², y en su nombre por el Ministro de Fomento, de todos los archivos, bibliotecas, gabinetes y demás colecciones de objetos de ciencias, arte o literatura que estén a cargo de las catedrales, monasterios u ordenes militares, quedaron excluidas las bibliotecas de los seminarios. A partir de la disposición esta riqueza, una vez clasificada en las Bibliotecas, Archivos y Museos nacionales, será considerada como nacional y puesta al servicio público.

²⁶⁰ Op. cit., p. 443.

²⁶¹ SAN SEGUNDO, Rosa. Op. cit., pp. 261-263.

Posteriormente se publicó una *Orden el 18 de enero de 1869* dictando varias medidas para llevar a efecto lo mandado en el decreto anterior. El fondo documental, al que hace referencia la disposición, comprendía los libros impresos o manuscritos reunidos en colecciones o bibliotecas, los códices, vitelas, documentos, láminas, sellos, monedas y medallas y cualquier objeto artístico que pudiera dar a conocer la historia de las ciencias y las letras españolas; quedaban exceptuados los objetos de inmediata aplicación o frecuente uso en el culto. Por otra parte, el proceso de incautación incluía el nombramiento de un individuo del Cuerpo de Bibliotecarios, Archiveros y Anticuarios con la finalidad de acompañar a miembros del Gobierno y contrastar y confrontar los inventarios, índices y catálogos. De todas estas tareas se extenderá acta de toma de posesión.

Simultáneamente y por *Decreto de 18 de enero de 1869* el Ministro Ruiz Zorrilla expone la pretensión de mejorar la enseñanza primaria por el estado tan lamentable en el que se encontraba. Pretendía, por tanto, favorecer los medios de enseñanza y mejorar la calidad para hacer más grato el aprendizaje a los niños. En este sentido el artículo segundo recoge esta idea estableciendo:

La formación de Bibliotecas en las Escuelas de instrucción primaria, correspondiendo al Gobierno tomar la iniciativa y auxiliar en lo que sea posible la formación de estos centros de ilustración pública, de los cuales deben esperarse grandes beneficios.

Sin embargo, la primera noticia que se tiene de esta aprobación se constata en una nota que dirigió el Ministro al Jefe de Negociado primero de la Dirección general de Instrucción pública, Felipe Picatoste, con fecha de 15 de enero de 1869²⁶³.

²⁶²El expediente general de incautación 1868-1875, se conserva en el Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares en la Sección Educación y Ciencia, legajos 6675 y 6676.

²⁶³ PICATOSTE, Felipe. *Memoria sobre las Bibliotecas populares*. Imprenta Nacional. Madrid: 1870, p. 41

La creación de las bibliotecas populares, como extensión y mejora de la enseñanza, eran los mejores recursos -así pensaba Ruiz Zorrilla- para combatir el argumento de los defensores de la tiranía que invocaban la ignorancia del pueblo. Había que contribuir al afianzamiento de la libertad robusteciendo la inteligencia del pueblo²⁶⁴. Esta iniciativa propuesta por Ruiz Zorrilla se puso en marcha bajo la responsabilidad de su sucesor José Echegaray, quien reconoce, en el preámbulo de la *Orden de 18 de septiembre de 1869*, que la creación de estas bibliotecas es obra de mucho tiempo y que exige inmensos gastos, pero que sobre todo, han de suplir en España la falta de comunicaciones de la vida científica, artística y literaria, y de todos aquellos elementos que abundan en naciones más adelantadas, y que además han de llevar la ilustración, con muy diversos aspectos y motivos, a los pueblos más apartados y de menos vecindario. Añade, sólo el libro puede reemplazar todos los males, y por esta razón las Bibliotecas populares deben tener un carácter especial que se deduce de la clase de lectores que han de frecuentarlas y, por tanto, deben abrazar principalmente los libros referentes a las materias que constituyan la primera enseñanza y a los conocimientos mas útiles, prácticos y elementales de ciencias, artes, agricultura e industria que formen el complemento de la primera enseñanza.

A su vez, la Orden dispone la creación de 20 Bibliotecas populares, dos en cada distrito universitario destinando al efecto, como base, el donativo de los libros existentes en el depósito del entonces suprimido Consejo de Instrucción pública²⁶⁵. El sostenimiento y conservación corresponde, según la organización dada a la enseñanza pública, a las Diputaciones provinciales y a los Ayuntamientos, dejando al Gobierno la inspección general de la instrucción pública y la concesión de aquellos auxilios que salgan fuera de los límites de la autoridad de las corporaciones populares.

²⁶⁴ ESCOLAR, Hipólito. *Historia de las Bibliotecas*. Op. cit., p. 445.

²⁶⁵ En el Archivo General de Alcalá de Henares se encuentran los expedientes de adquisición de libros para las Bibliotecas populares creadas en 1869. Sección Educación y Ciencia, legajos 6386 y 6448. También véase RAMOS RUIZ, Carlos. *Catálogo de la Documentación de Archivos y Bibliotecas y de Museos Arqueológicos del Archivo del Ministerio de Educación Nacional*. Prólogo de Miguel Bordonau y Más. Madrid: Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, 1950.

6.3.2. Instrucciones que han de regir en las Bibliotecas populares

Promulgadas las disposiciones anteriores y hasta la formulación de las instrucciones que han de regir estas Bibliotecas, se aprueba *la Orden de 28 de septiembre de 1869* dictando medidas provisionales para la instalación, régimen y servicio de las bibliotecas populares.

El contenido de las disposiciones referidas a las Bibliotecas populares lo encontramos resumido en un artículo que recoge el Anuario del Cuerpo Facultativo de Archiveros y Bibliotecarios de 1881²⁶⁶ subrayando los siguientes aspectos:

1. Serán el Alcalde y Profesor-Bibliotecario de la localidad los responsables de las obras que forman la colección.
2. Remitirán por conducto de las Juntas provinciales de primera enseñanza, los oportunos catálogos para que con el *Recibí y conforme* se devuelva un ejemplar al Ministerio de Fomento, depositándose otro en la Secretaría de la Junta y conservando un tercero para el servicio de la Biblioteca.
3. Los Ayuntamientos poseerán estas obras como propiedad inalienable.
4. Se formará un catálogo correspondiendo su elaboración al maestro.
5. Los libros remitidos por el Ministerio de Fomento llevarán un sello especial.

²⁶⁶ *Bibliotecas Populares, Depósito de Libros, Propiedad Intelectual y cambio internacional de publicaciones científicas y literarias*. "Anuario del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios", 1881. Madrid: Imprenta del Colegio Nacional de Sordo-Mudos y de Ciegos, 1882, pp. 357-358.

6. Pueden leerse las obras en la Escuela en el horario fijado.
7. Los inspectores de Instrucción primaria están encargados de velar por el buen orden y arreglo de estas Bibliotecas y deben comunicar al Ministerio las faltas que observen en las mismas.
8. Si el local de la Escuela no permitiera establecer en ella la Biblioteca, se depositarán los libros en la Casa-ayuntamiento o en otro sitio que creyeren conveniente y de común acuerdo el Alcalde y el Maestro.

Con respecto a las Bibliotecas populares, Díaz y Pérez recoge que *Las bibliotecas populares tiene por objeto desarrollar el estímulo o afición al estudio entre el pueblo trabajador, ensanchar los conocimientos humanos, y al mismo tiempo proporcionar al obrero medios de entretenerse agradablemente en lecturas, que, además de serle útiles, le evitan el concurrir a otros lugares más peligrosos y perjudiciales para su educación y para sus intereses*²⁶⁷... *Verdaderamente que las bibliotecas populares no están en España a la altura que era de desear, pero es preciso tener en cuenta que son de origen muy moderno, como que apenas cuentan trece años*²⁶⁸.

Sobre estos aspectos peculiares de las bibliotecas populares, Nicolás Díaz y Pérez deduce que estas Bibliotecas se escapaban del control del Cuerpo de Bibliotecarios estando encomendadas a maestros. Razón por la que las tareas técnicas realizadas por los mismos, como el catálogo, supusieron una desigualdad de los servicios y funciones de las mismas frente a otras bibliotecas estatales²⁶⁹.

²⁶⁷ DÍAZ y PERÉZ, Nicolás. *Las bibliotecas en España en sus relaciones con la educación popular y la instrucción pública*. Madrid: Tip. núm. 6 Hernández, 1885, p. 55.

²⁶⁸ *Ibidem*, p. 71.

²⁶⁹ *Op. cit.*, p. 91.

Un año después de la puesta en marcha del plan de bibliotecas populares, Felipe Picatoste en la Memoria que presenta al Ministro sobre el funcionamiento de las Bibliotecas populares, informa de lo siguiente:

La creación de estos centros no ha podido tener aún todo el desenvolvimiento que V. E. desea porque como le consta, no disponiendo para ello, la Dirección, de recurso alguno y teniendo que limitarse a formar las Bibliotecas con libros, que se la regalan, no ha sido posible darles el verdadero carácter local y de aplicación propia, que les es tan necesario para que respondan al fin de su instituto²⁷⁰.

El Anuario anteriormente mencionado, refleja cómo el gobierno amparaba esta iniciativa a través de la legislación y cómo en el año 1873 se dictaron disposiciones para el aumento de los fondos de estas colecciones adquiriendo el Ministerio obras adecuadas al objeto, y de las que no se podía dotar sólo por el generoso desprendimiento de los particulares y Corporaciones²⁷¹.

En este sentido se dictaron disposiciones como el *Decreto de 8 de julio de 1873* ordenando que se establezca en todo presidio y casa-galera una Biblioteca popular para instrucción y recreo de los penados. El artículo dos señala que por el Ministerio de Fomento se pondrán a disposición del de la Gobernación las colecciones de libros necesarios para cumplir lo dispuesto, acomodando las obras a su finalidad.

A su vez, el Anuario también nos informa de otra *Real Orden de 23 de junio*

²⁷⁰ PICATOSTE, Felipe. Op. cit., p. 6.

²⁷¹ *Bibliotecas Populares, Depósito de Libros, Propiedad Intelectual y cambio internacional de publicaciones científicas y literarias*. "Anuario del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y

de 1876 con medidas que alcanzan a las adquisiciones de libros para las Bibliotecas populares, y a la inclusión en los presupuestos del Estado de las cantidades necesarias al efecto. También relata cómo, progresivamente, se estuvieron haciendo concesiones de estas Bibliotecas, llegando a 692 en el año 1881, concesiones que ascienden a un número relativamente mayor con respecto al año anterior, así lo refleja la estadística que se adjunta en la publicación²⁷².

Sin embargo, como pone de relieve Pilar Faus, a pesar de la escasez de medios y libros, merced a esta iniciativa, el número de lectores se disparó²⁷³. Contamos con algunos datos del año 1872 en Madrid, que revelan el número de usuarios de estas bibliotecas populares establecidas en las escuelas, con cifras de 5.500 lectores a los que se suman 8.710 solicitantes de libros en préstamo²⁷⁴.

Una vez terminada la euforia cultural de la revolución de 1868 no se crearon ni más bibliotecas ni se incrementaron los fondos, e incluso se dejaron de inspeccionar. Nadie se volvió a ocupar de ellas y el resultado final fue el cierre de la mayoría de estas bibliotecas. Todo esto ha motivado la interpretación de que fueron finalidades electoralistas las que determinaron su creación.

Como acertadamente subraya Carmen Cayetano, desde luego, es difícil que estas colecciones formadas un poco al azar, sin profesionales, y sobre todo sin dinero pudieran tener futuro. La mayoría terminaron en el olvido, sin embargo, eran una luz

Anticuarios", 1881. Madrid: Imprenta del Colegio Nacional de Sordo-Mudos y de Ciegos, 1882, p. 358.

²⁷² Op. cit., pp. 358-360.

²⁷³ FAUS SEVILLA, Pilar. *La lectura pública en España y el Plan de Bibliotecas de María Moliner*. ANABAD, Madrid, 1990, p. 30. Es aconsejable consultar la última obra de GARCÍA EJARQUE, Luis. *Historia de la lectura pública en España*. Gijón: Trea, 2000, 533 p.

²⁷⁴ VIÑAO FRAGO, A.: *A la cultura por la lectura. Las bibliotecas populares (1869-1885)*. "Clases populares, cultura y Educación". Siglos XIX y XX. Madrid: Casa Velázquez, UNED, 1989, pp. 301-335.

en las tinieblas²⁷⁵. La realidad era que no sólo la falta de medios, sino la ausencia de actividad editorial adecuada hacía, casi imposible, la dotación bibliográfica. Para Díaz y Pérez únicamente estaban instaladas 80 bibliotecas en el año 1883.

6.4. La Biblioteca Nacional

6.4.1. De la Real Librería Pública a la Biblioteca Nacional

Luis García Ejarque en el trabajo que elabora sobre la Biblioteca Nacional, se remonta a la fundación de esta Institución como Real Librería Pública de Madrid implantada con la instauración de la casa de Borbón en el trono de España. Felipe V, primer monarca de esta dinastía, fue quién resolvió crear en Madrid, dentro de su palacio real una librería pública como entonces se llamaba a estos establecimientos²⁷⁶. Con esta finalidad aprobó, el 29 de diciembre de 1711²⁷⁷, el plan presentado para el efecto, y de acuerdo con este plan se abrió al público el 1 de marzo de 1712, aunque su creación oficial no se llevó a cabo hasta la publicación del *Real Decreto de 2 de enero de 1716*²⁷⁸.

²⁷⁵ CAYETANO MARTÍN, Carmen. *Archivos y Bibliotecas en Madrid (1868-1902)*. Madrid: Ayuntamiento de Madrid. Área de Cultura, Educación, Juventud y Deportes. Instituto de Estudios Madrileños del Consejo Superior de investigaciones Científicas. Aula de Cultura, 1995, p.13.

²⁷⁶ GARCÍA EJARQUE, Luis. *Biblioteca Nacional de España*. “Boletín de la ANABAD”, XLII (1992), n. 3-4, p. 206. Véase también, ESCOLAR SOBRINO, Hipólito. *La Biblioteca Nacional de España*. Madrid: Dirección General de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1981, pp. 5-6, BRETÓN y OROZCO, Cándido. *Breve noticia de la Biblioteca Nacional*. Madrid: Imp. Aribau, 1876 y CARRIÓN, Manuel. *La Biblioteca Nacional de Madrid, biblioteca hispánica*. “Revista de Información”. Madrid: Comisión nacional española de cooperación con la UNESCO, n. 12, octubre-diciembre, 1977, pp. 47-56.

²⁷⁷ Sobre su fundación puede consultarse MORÓN Y LIMINIANA, Jesús. *La Biblioteca Nacional (Madrid). Su fundación en 29 de diciembre de 1711*. En *Escenas contemporáneas...* Bajo la dirección de D. Manuel Ovilo y Otero. Nueva época, 1865, pp. 145-147.

²⁷⁸ Para el estudio y conocimiento de la Real Librería puede consultarse, CASTELLANOS, Basilio Sebastián. *Origen de las Bibliotecas públicas Españolas y en particular de la Nacional de Madrid*. El Bibliotecario, T.I, n.1, mayo de 1841, pp. 14-34. ESCOLAR SOBRINO, Hipólito. *La Biblioteca Real (1712-1813)*. Madrid: Artes Gráficas Municipales, 1971, y GARCÍA MORALES, Justo. *La Biblioteca Real (1712-1836)*. Madrid: Ayuntamiento de Madrid, 197. Veasé también ANDRÉS, Gregorio (OSA). *La Real Biblioteca de El Escorial*. Madrid: [s. n.], 1970. MESTRE, Antonio. *Historia cultural de la Real Biblioteca*. En MAYÁNS Y SISCAR, Gregorio. *Epistolario VII. Mayáns y Martínez*

La transformación en Biblioteca Nacional se ordena mediante *Decreto de 25 de noviembre de 1836*²⁷⁹, comunicado al Bibliotecario mayor por *Real Orden de 26 de noviembre de 1836*. En esta disposición, la Reina Gobernadora dispuso que la Real Biblioteca, como todos los demás establecimientos literarios, estuviesen bajo la dirección y gobierno del Ministerio de la Gobernación de la Península con lo cual se convirtió, definitivamente, en Biblioteca Nacional. Como matiza García Ejarque; consideración y tratamiento que ya había recibido antes oficialmente durante la ocupación francesa y durante todos los períodos constitucionales, desde que la primera Constitución española se aprobará en 19 de marzo de 1812²⁸⁰.

Poco a poco las medidas que va tomando el Gobierno van contribuyendo al crecimiento del fondo, es el caso de la *Real Orden de 22 de marzo de 1837* que con el acuerdo de las Cortes se manda que se entregue a la Biblioteca Nacional un ejemplar de cada obra que se imprima. En la misma línea, y a pesar de los cambios ministeriales, en el año 1843 se vuelve a recordar a los jefes políticos por *Orden de 30 de septiembre de 1843* que se envíe un ejemplar de las obras que se impriman. De igual forma, por *Real Orden de 6 de enero de 1849* se manda entregar a la Biblioteca Nacional las obras que se publiquen²⁸¹.

Pingarrón, I. *Historia cultural de la Real Biblioteca. Transcripción, estudio preliminar y notas de...* Valencia: (Publicaciones del Ayuntamiento de Oliva, 16); pp.7-75. *Real Biblioteca y política cultural*. En MAYÁNS Y SISCAR, Gregorio. *Epistolario IX. Mayáns y Martínez Pingarrón, 3. Real Biblioteca y política cultural. Transcripción, estudio preliminar y notas de...* Valencia: (Publicaciones del Ayuntamiento de Oliva, 18); pp.7-37 y MARTÍN SARMIENTO, Benedictino. *Reflexiones literarias para una biblioteca real y para otras bibliotecas públicas hechas por el P. P. F. Martín Sarmiento, Benedictino, en el mes de diciembre del año 1743*. En: *Semanario erudito* que comprende varias obras inéditas, críticas, morales, instructivas políticas, históricas, satíricas y jocosas de nuestros mejores autores antiguos y modernos dadas a la luz por Antonio Valladares, t. XXI. 1789, pp. 100-273. Recoge dos cartas que el padre Martín Sarmiento escribió al bibliotecario de la Librería Real, Juan de Iriarte. En la primera carta Sarmiento expone sus opiniones e ideas sobre el emplazamiento que entonces tenía la Librería Real en el pasadizo de la Encarnación, la segunda, que es más amplia, desarrolla sus ideas sobre las bibliotecas.

²⁷⁹ PONCE DE LEÓN FREYRE, Eduardo. *Guía del lector en la Biblioteca Nacional. Historia, organización y fondos*. 2º ed. Madrid: Patronato de la Biblioteca Nacional, 1949. Cuando se refiere a este decreto de creación siempre pone como fecha el día 23 en vez del 25 de noviembre.

²⁸⁰ Op. cit., pp. 206-207.

²⁸¹ Véase CRESPO TOBARRA, Carmen. *Ensayo de una bibliografía sobre la Biblioteca Nacional*. "Boletín de la ANABAD", XLII, 1992, pp. 229-243, y ESCOLAR SOBRINO, Hipólito. *La Biblioteca*

Viendo el aumento progresivo de los fondos documentales, en este mismo año, el Ministerio competente de Comercio, Instrucción y Obras Públicas, a través del Director de Instrucción pública, establece por *Real Orden de 24 de diciembre de 1849* crear comisiones para el arreglo de la Biblioteca Nacional. Las comisiones estarán compuestas por todos los bibliotecarios de la misma Biblioteca, presididos por el mayor, y de un oficial que actuará como secretario. Estas comisiones deberían presentar una lista de las obras que crean necesario adquirir, para remitirla a la Dirección general de Instrucción pública y posteriormente el Gobierno ha de presentar a las Cortes mediante un proyecto de ley, para la autorización de las compras correspondientes.

Bajo el ministerio de Claudio Moyano, se dictó el *Real Decreto de 3 de diciembre de 1856* reorganizando la Biblioteca Nacional. Por este decreto orgánico la Biblioteca Nacional se compondría de un Director, cuyo cargo sería honorífico y gratuito, dos Bibliotecarios, diez oficiales, siete celadores, un escribiente, dos porteros, y dos mozos. Según el artículo segundo, para el arreglo de la Biblioteca se proveerán en lo sucesivo las vacantes de bibliotecarios y Oficiales en concurso público y a propuesta en terna del Tribunal que se designe al efecto.

El artículo tercero establece que los empleados de la Biblioteca redactarán un *Diccionario biográfico y bibliográfico* de todos los escritores españoles. También se publicará mensualmente un *Boletín bibliográfico* en la forma y modo que se prescriba a su tiempo. Concluye la disposición proponiendo la aprobación de un Reglamento de la Biblioteca Nacional.

6.4.2. Reglamento de la Biblioteca Nacional de 1857

De acuerdo con la proposición del Decreto último de 1856 se aprobó, por *Real Decreto de 7 de enero de 1857*, el primer Reglamento de la Biblioteca Nacional presentado, también, por el Ministro de Fomento Claudio Moyano.

El Reglamento se estructura en 17 títulos; el Título primero *Del objeto de la Biblioteca* regula en el artículo uno que, la Biblioteca Nacional tiene por objeto reunir, conservar e ir acrecentando sucesivamente, para uso del público, el mayor número posible de libros y demás impresos, manuscritos, mapas, música y cualquier otro género de grabados y litografías, monedas, medallas y antigüedades.

El artículo tercero estipula que, en virtud de lo que se establece en el artículo 13 de la ley de propiedad literaria, la Biblioteca Nacional tiene el carácter de *Archivo público* para asegurar los derechos de los autores o editores de obras impresas en España y sus posesiones ultramarinas. El artículo cinco vuelve a recordar lo que disposiciones anteriores ya recogían:

Los ejemplares de lo que se publique en Madrid serán entregados por los autores o editores en la Secretaría de la Biblioteca; los ejemplares de lo que se de a luz en las provincias y en nuestras posesiones ultramarinas pasarán a la Biblioteca Nacional por mano del Gobierno.

El Título II, III y IV, tratan del personal y provisión de plazas²⁸². El Título V *De los ejercicios de oposición* recoge todo lo relacionado con las pruebas de oposición para ingresar en la planta de la Biblioteca Nacional.

El Título VI *De la toma de posesión*. El Título VII *De la Junta de gobierno* constituida por el Director, como Presidente; los Bibliotecarios, como vocales; y el Oficial como Secretario pero sin voto.

El Título VIII trata sobre *Del Director* y según el artículo 46 el Director, como jefe superior y conservador del establecimiento, tiene a su cargo el gobierno e inspección general. Representará a la Institución en las solemnidades a que asistiere por derecho o por invitación. Cada año, remitirá al Gobierno una memoria acerca de la Biblioteca, adquisiciones y trabajos hechos durante el año, variaciones del personal y mejoras, resumen del movimiento científico y literario de España. Esta memoria se imprimirá con el *Boletín bibliográfico* del que se ocupa la Biblioteca.

El Título IX *De los Bibliotecarios*; serán dos los Bibliotecarios y sustituirán al Director en los casos necesarios.

El Título XI *De los Oficiales*, el artículo 63 regula que el Oficial como *Archivero* conservará en buen orden cuantos papeles y documentos deban obrar en la Biblioteca y pertenezcan a su historia, régimen y organización como las papeletas de entrada y un registro de los artículos biográficos de escritores españoles que redacten los Oficiales. También preparará los datos para el *Boletín bibliográfico* mensual.

²⁸² Los preceptos correspondientes a estos Títulos están comprendidos en el *Reglamento de 18 de noviembre de 1887* que desarrollamos en el Capítulo III del presente trabajo.

El Título XII *De los Celadores y el escribiente*. El Título XIII *De los demás empleados subalternos*. El Título XIV *Del servicio público*. El Título XV *De los premios y recompensas*. El Título XVI *De la separación de empleados* y, por último, el Título XVII *Disposiciones generales y transitorias*.

Para el debido cumplimiento de la disposición primera del Título XVII del Reglamento orgánico se publicó *la Real Orden de 8 de enero de 1857* disponiendo lo que han de observar los Gobernadores de provincia respecto al autor o editor de cualquier obra nueva para cumplir lo establecido sobre la publicación del Boletín bibliográfico.

6.4.3. La incidencia del Cuerpo Facultativo en la Biblioteca Nacional

Con la publicación del *Real Decreto de 17 de julio de 1858* que crea el Cuerpo Facultativo de Archiveros-Bibliotecarios, la Biblioteca Nacional se ve afectada en lo siguiente:

- En primer lugar, el director de la Biblioteca Nacional también se convertirá, a partir de este momento, en el jefe de dicho Cuerpo hasta 1930, e incluso en algunos momentos en jefe de la Junta Consultiva, Facultativa o Técnica de la corporación, organismo consultivo de la Dirección general de Instrucción pública²⁸³.

²⁸³ Véase PAZ ESPESO, Julián. *Biblioteca Nacional: Reseña histórica*. En *Guía histórica y descriptiva de los Archivos, Bibliotecas y Museos de España que están a cargo del Cuerpo Facultativo del ramo*. Publicada bajo la dirección de D. Francisco Rodríguez Marín. Madrid: Tipografía de la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1916.

- En segundo lugar se ve implicada por la reglamentación de dicho Cuerpo, concretamente, por las siguientes disposiciones; *Real Decreto de 8 de mayo de 1859*, dictando bases para la organización de los archivos y bibliotecas del reino; *Real Orden de 12 de mayo de 1859*, dando reglas para la formación del Cuerpo, clasificación de sus individuos y primeros ascensos; *Real Decreto de 12 de junio de 1867*, reorganizando el Cuerpo facultativo de Bibliotecarios, Archiveros y Anticuarios; *Real Decreto de 5 de julio de 1871*, dando nuevo reglamento a dicho Cuerpo, el *Real Decreto de 12 de febrero de 1875*, restableciendo el reglamento de 12 de junio de 1867, aunque su artículo 12 fue derogado por *Real Decreto de 12 de marzo de 1875*. El *Real Decreto de 25 de marzo de 1881* aprobando un nuevo Reglamento que suprime las plazas de gracia y dando la dirección de la Biblioteca a un funcionario, el *Real Decreto de 12 de octubre de 1884*, dando nueva organización al Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios.

6.4.4. Los traslados de la Biblioteca Nacional

Uno de los problemas que sufrió la Biblioteca, incluso, desde su denominación como Librería Real fueron sus traslados. A principios del siglo XIX el edificio que ocupaba la Librería Real amenazaba ruina. José Bonaparte mandó derribarlo disponiendo su traslado al convento de los Trinitarios Calzados por *Decreto de 26 de agosto de 1809*, donde permaneció durante diez años. Con Fernando VII se trasladó a la plaza de la Marina Española hasta que por fin, en 1826 encontró alojamiento propio en la calle Arrieta.

Los acontecimientos y, sobre todo, las dificultades por las que pasó la Biblioteca Real desde el momento en que José Bonaparte pensó derribar el edificio, llevaron a la Biblioteca a iniciar su ir y venir de edificio en edificio hasta su

instalación definitiva repercutiendo en el conjunto de los fondos²⁸⁴. Este aspecto ha sido puesto de manifiesto en el interesante y anecdótico informe que nos ofrece, Valeriano Trost y Barceló sobre el traslado donde cuenta cómo la Biblioteca estaba *en tan malas condiciones que hubo que reorganizar todos los fondos*²⁸⁵.

En menos de medio siglo, el edificio de Arrieta se quedó pequeño y fue preciso pensar en un local mas amplio. La primera piedra del nuevo y definitivo edificio fue colocada el 20 de abril de 1866 aunque la Biblioteca no empezó a funcionar hasta 30 años más tarde y el 16 de marzo de 1896 se abrieron al público las nuevas instalaciones en el Palacio de Recoletos. De ello da noticia el Boletín de Archivos, Bibliotecas y Museos en el artículo que publica en la Sección Técnica²⁸⁶. La descripción del artículo se concreta en resaltar la estructura departamental de la Institución y el funcionamiento interno de la Biblioteca Nacional con respecto al lector diciendo:

- Esta integrada por dos departamentos; uno de Impresos y otro de Manuscritos.
- El público lector cuenta con un *Índice* que puede manejar por orden de materias y con un catálogo auxiliar de nombres, autores, traductores, etc.
- Cada lector recibe, antes de entrar en la Sala de pedidos una contraseña metálica numerada, con la que quedan sujetas las papeletas que suscribe, hasta la devolución de las obras solicitadas.
- Por último, descende a describir los espacios útiles, los materiales de las mesas, de construcción, etc.

²⁸⁴ MARTÍN ABAD, Julian. *Crecimiento de la colección de manuscritos de la Biblioteca Nacional en el siglo XIX: Breves apuntes para una Historia necesaria*. "Boletín de la ANABAD", XLII (1992), nº1, enero-marzo, p. 98.

²⁸⁵ TROST Y BARCELÓ, Valeriano. *La Biblioteca Nacional: (Una visita al Palacio de Recoletos)*. "Heraldo de Madrid", año V, nº 1415, de 22 de septiembre de 1894, p. 2. Citado por MARTÍN ABAD, Julián. Op. cit., p. 98.

6.4.5. Fondos Bibliográficos de la Biblioteca Nacional

Los fondos con los que cuenta, en este momento, la Biblioteca Nacional de España se fueron constituyendo, como es normal en cualquier biblioteca, con las adquisiciones, por vía onerosa o gratuita. Las colecciones más ricas fueron adquiridas mediante incautación, compra o donación.

Sin duda, como reconoce Martín Abad, la colección de manuscritos es de las más importantes y su formación tiene procedencias diversas²⁸⁷.

Algunos fondos incorporados a la colección a lo largo del siglo XIX son, entre otros:

- Parte de la Biblioteca de Francisco de Bruna.
- Gran parte de la Biblioteca de las Cortes.
- Manuscritos de obras inéditas y correspondencia de Leandro Fernández de Moratín.
- Biblioteca de Juan Nicolás Böhl de Faber.
- Libros del Ministerio de Instrucción Pública²⁸⁸.

²⁸⁶ *Instalación de la Biblioteca Nacional en el Palacio de Recoletos*. "Boletín de Archivos, Bibliotecas y Museos". Órgano Oficial del Montepío del Cuerpo Facultativo del Ramo. Año 1, nº 1 (1896) de 15 de abril. Madrid: Imprenta del Colegio Nacional de Sordo-Mudos y Ciegos, pp. 9-10.

²⁸⁷ MARTÍN ABAD, J. Op. cit., p. 97. Puede consultarse de José LÓPEZ DEL TORO, *Inventario general de manuscritos de la Biblioteca Nacional*. Tomos IV y V.

²⁸⁸ Para un conocimiento mas detallado de las aportaciones al fondo de la Biblioteca Nacional véase la relación que inserta GARCÍA EJARQUE, Luis. Op. cit., pp. 210-220. Resulta también ilustrativo desde un punto de vista histórico, SÁNCHEZ MARIANA, Manuel. *Biblioteca Nacional. Fondos histórico-ecclesiásticos*. En: *Diccionario de Historia Eclesiástica de España*, dir. por Quintín Aldea

6.4.6. El estado de la Biblioteca en los años 1881 y 1882

Para finalizar comentaremos lo que recogían los Anuarios de Archivos y Bibliotecas de los años 1881 y 1882, considerados como memorias anuales, que intentan trazar un panorama de la situación o estado de la Biblioteca Nacional en estos años.

El artículo titulado *La Biblioteca Nacional* relativo al Anuario de 1881²⁸⁹ está dividido en cinco secciones. En la primera, describe el emplazamiento de la Biblioteca y la distribución de las distintas salas y dependencias. En la segunda sección, hace una breve historia de los orígenes de la *Librería Real* y de la transformación en Biblioteca Nacional. A su vez, reseña las adquisiciones y la plantilla desde sus orígenes.

La tercera parte, expone el catálogo general de las obras que posee la Biblioteca estructurado en dos Índices: de impresos y de manuscritos. Ambos se redactan en papeletas sueltas, y cada uno de ellos consta de dos apartados, uno principal o de autores, y otro auxiliar o de títulos. La cuarta sección, nos detalla el aumento del personal especializado en la Biblioteca.

La quinta relaciona los trabajos elaborados y las personas que han supervisado esos trabajos. La sexta sección fija el número de lectores que asistieron

Vaquero, Tomás Marín Martínez, José Vives Gatell. Madrid: Instituto Enrique Florez, 1987. Suplemento I, pp. 91-92.

²⁸⁹ *Biblioteca Nacional*. "Anuario del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios", 1881. Op. cit., pp.135-151.

en el año 1881 y por último, una relación nominal del personal facultativo y administrativo dedicado a prestar los servicios en la Biblioteca con un apéndice de los fondos que conserva.

Bajo el mismo título, el Anuario de 1882²⁹⁰, nos informa de la evolución que en ese año ha tenido la Biblioteca Nacional, siempre teniendo como referente el año 1881. En primer lugar expone la necesidad cada vez más perentoria de tener un nuevo edificio sobre todo por la falta de espacio para conservar los volúmenes. Seguidamente nos cita datos estadísticos del número de lectores, del número de papeletas facilitadas, pedidos de obras y obras consultadas, y un apartado sobre adquisiciones con las obras que se han incorporado y las distintas vías de ingreso.

Recoge, también, los trabajos realizados por los empleados facultativos y, por último incorpora un apartado sobre *Vicisitudes del personal* con los nombramientos, toma de posesiones y traslados del personal de esa Biblioteca en el año 1882.

6.5. Biblioteca de la Universidad Central de Madrid

6.5.1. La Universidad Central de Madrid

Compartiendo la idea que manifiesta Cecilia Fernández, al escribir sobre la Universidad española y sus bibliotecas, *no puede hablarse de una política de Bibliotecas Universitarias fuera del contexto de la política educativa de nuestro país, pues si la Biblioteca es consustancial a alguna Institución, esta es la*

*Universidad*²⁹¹, parece procedente iniciar este epígrafe tomando como punto de referencia la publicación de la *Real orden de 29 de octubre de 1836* que dispuso el traslado a Madrid de la Universidad de Alcalá dando a sus estudios la extensión correspondiente para que sea un establecimiento digno de la capital de la Monarquía. Universidad que se denominará Central de Madrid a partir de 1850 aunque también es verdad que con anterioridad a esta fecha la legislación del ámbito de la enseñanza ya venía recogiendo en sus preceptos lo que iba a ser la Universidad Central.

El concepto nuevo de Universidad estatal y secularizada que se había ido formando desde 1813, surgió de las aspiraciones de la ideología liberal por renovar el sistema educativo. En 1820 al llegar al poder los liberales elaboran una normativa que iba a suponer la renovación de las antiguas concepciones en las que se basaba la enseñanza, y mediante el *Real Decreto de 29 de junio de 1821* que aprueba el Plan general de Estudios se establece, en el artículo 28, que en cada Universidad de provincia habrá una biblioteca pública.

A su vez, el artículo 78, dentro del Título VI, regula que se establecerá en la capital del reino una Universidad Central donde se impartan los estudios con toda la extensión necesaria para el completo conocimiento de las ciencias. Además de enseñarse todo lo comprendido en la segunda y tercera enseñanza, se añadirán cátedras donde habrá un profesor que será auxiliado por ayudantes en las ciencias que lo exijan.

²⁹⁰ *Biblioteca Nacional*. "Anuario del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios", 1882. Op. cit., pp. 91-100.

²⁹¹ FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Cecilia. *La Universidad Española y sus Bibliotecas*. "Boletín de la ANABAD", XLI (1990), nº 2-3 abril-septiembre, p. 57. Véase también MATEU IBARS, Josefina. *Aportación bibliográfica para el estudio de las Bibliotecas Universitarias Españolas*. "Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos", 1959, LXV.

Para su puesta en marcha se contaba con reunir las cátedras de los Reales Estudios de San Isidro de Madrid y de la Universidad de Alcalá y las enseñanzas prácticas del Museo de Ciencias. Sin embargo este proyecto no se llevará a la práctica hasta la implantación definitiva del régimen liberal en 1834.

En este mismo sentido, el *Plan de estudios de 25 de septiembre de 1845* seguía manteniendo la aspiración de inaugurar la Universidad de Madrid; aspiración que tuvo lugar al inicio del curso académico de 1836 al publicarse la *Real orden de 29 de octubre de 1836* donde se acordaba el traslado a Madrid de la Universidad de Alcalá, dando a sus estudios la extensión correspondiente para que sea un establecimiento digno de la capital de la Monarquía. Se trasladaron de Alcalá las cátedras de leyes y cánones, instalándose en el edificio del Seminario de Nobles. Las de filosofía y tecnología llegaron al año siguiente reuniéndose en el edificio de Las Salesas.

Es preciso anotar, así lo afirma, María Carmona, que es a partir de 1836 cuando Madrid tiene universidad propia y una universidad que respondía a un modelo diferente del que durante varios siglos había tipificado a las universidades del Antiguo Régimen²⁹².

Por *Real Decreto de 17 de septiembre de 1845* se implanta el nuevo Plan de Estudios firmado por el Duque de Rivas e inspirado por el Director de Instrucción pública, Gil de Zárate. La reforma que proponía significó un paso importante en el desarrollo del sistema educativo por lo que representaba de regulación general y unitaria de la enseñanza. Hemos de destacar que en el preámbulo establece:

²⁹² V. ENTRAMBASAGUAS, S. de, *La Universidad Central*. Instituto de Estudios Madrileños, 1972. PESET REIG, M. y PESET REIG, J.L.: *La Universidad Española (S. XVIII y XIX). Despotismo ilustrado y revolución liberal*. Madrid, 1974, 807 p. citado por CARMONA DE LOS SANTOS,

El grado de doctor sólo se dará en aquella universidad que reúna todas las facultades y todas las ciencias, para formar un gran centro de luces que la iguale con el tiempo a las mejores y más célebres de Europa, convirtiéndola en norma y modelo de todas las de España.

El artículo 51 añade: *El grado de doctor sólo se conferirá en la Universidad de Madrid y se establecerán los estudios necesarios para obtenerlo.*

La disposición dejaba claro el papel que tenía la Universidad Central sin embargo, va a ser con el Plan de estudios aprobado por *Real Decreto de 28 de agosto de 1850* cuando se da a la Universidad de Madrid el título de Central, al confirmar en el artículo 67 que *las Universidades del reino serán diez, una Central y nueve de distrito, la Central existirá en Madrid.*

Así las cosas, el curso académico 1850-51 ya se inaugura en la Universidad Central considerado como centro modélico donde únicamente podían cursarse todas las carreras universitarias en su más alto grado²⁹³.

En 1857 las Cortes aprueban la Ley de Instrucción Pública a instancias del Ministro de Fomento Claudio Moyano. En ella se establece que habrá una Universidad Central, la de Madrid, y nueve de distrito. Con esta Ley se consolida el centralismo de la Universidad que dependerá, directamente, del Ministerio de Fomento a través de una Dirección General y un Real Consejo de Instrucción pública.

María. *La Universidad Central y su distrito: Fondos documentales en el Archivo Histórico Nacional*. "Boletín de la ANABAD", XLVI (1996), nº 1, pp. 168-171.

²⁹³ CARMONA DE LOS SANTOS, María. Op. cit., p. 170.

Por tanto, la Universidad Central de Madrid quedaba estructurada de la siguiente manera:

- De las cuatro Facultades Mayores, las Facultades de Jurisprudencia y Teología, procedían de la Universidad de Alcalá.
- La Facultad de Medicina era la transformación del Colegio de San Carlos, fundado por Carlos III en 1787.
- La Facultad de Farmacia por la transformación del Colegio de San Fernando, fundado en 1804.
- La quinta Facultad, la de Filosofía, aprovechó la infraestructura de material y personal de los Estudios de San Isidro. Años más tarde, las secciones de Ciencias y Letras de la enseñanza secundaria favorecerán la creación de las Facultades de Filosofía y Letras y de Ciencias²⁹⁴.

En resumen, Cecilia Fernández, concluye este período diciendo que, la Universidad de finales del siglo XIX se caracteriza por una estructura administrativa rígida con carencia de medios económicos, pero con un abierto espíritu crítico²⁹⁵.

6.5.2. La Biblioteca de la Universidad Central de Madrid

Venimos analizando cómo se regulan las Bibliotecas Universitarias, durante este siglo XIX, se regulan en los Reglamento de desarrollo de los Planes de Estudio

²⁹⁴ MIGUEL ALONSO, Aurora. *La Biblioteca de los Reales Estudios de San Isidro: (Su historia hasta la integración en la Universidad Central)*. Madrid: Fundación Universitaria Española, 1996, p.148.

²⁹⁵ FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Cecilia. Op. cit., p. 59.

Universitarios²⁹⁶. De todos los reglamentos de desarrollo señalados en el capítulo IV de este trabajo observamos que los de 1847 y 1850²⁹⁷ pretenden reunir en una sola biblioteca todas las colecciones que existían en cada universidad. Esta idea de unificar que se intentaba reflejar en el caso de la Universidad de Madrid era por una parte, difícil y por otra, poco conveniente. La solución que se tomó fue la de unificar la labor de los bibliotecarios o *jefes locales* bajo la autoridad de un único bibliotecario general nombrado directamente por el Rector.

Por ello, el *Real Decreto de 8 de julio de 1847* establece en el artículo 27 lo siguiente:

Habrà en cada biblioteca un bibliotecario, con los demás empleados necesarios para el servicio de la Biblioteca, nombrados todos por el Gobierno en el número y forma que estime conveniente. Si la biblioteca fuera de corta extensión, o las Facultades tuvieran bibliotecas especiales, se encargará su servicio a uno de los agregados.

En el *Reglamento de 1850* esta definición de Biblioteca como unidad aparece aún más clarificada en el artículo 35: *Habrà en cada Universidad un bibliotecario con los demás empleados necesarios para el servicio de la Biblioteca, nombrados todos por el Gobierno en el número y forma que estime conveniente. Si alguna*

²⁹⁶ La idea de legislar las Bibliotecas Universitarias en los Planes de Estudio se viene haciendo desde siglos pasados. Transcribo aquí una información que agradezco a la profesora Cecilia Fernández por cedermé datos inéditos que forman parte del trabajo que esta elaborando de su tesis doctoral. *En el mes de noviembre de 1766, Carlos III encarga a D. Gregorio Mayans, profesor de la Universidad de Valencia que habia sido bibliotecario de Felipe V, la elaboración de un plan de reforma de las Universidades.* Mayans elaboró en tres meses el encargo real y redacta *Idea del nuevo método que se puede practicar en la enseñanza de las Universidades de España. El material de que se sirvió para su trabajo él mismo nos lo dice: sus meditaciones y varias Constituciones de Universidades. De su plan uno de los apartados ha destacar es el modelo de Biblioteca que responde bastante a lo que debía ser en aquellos momentos la de Alcalá. Es el modelo de Biblioteca Universitaria que él propone para una Universidad renovada y moderna.*

²⁹⁷ El Plan del Duque de Rivas y el de Pidal no decían mucho de las Bibliotecas solamente en el artículo 107 establecía: *Los regentes-agregados tendrán a su cargo las secretarías de las Facultades, los archivos, las bibliotecas, los gabinetes y colecciones.*

Facultad se hallare colocada en otro edificio y tuviere su biblioteca particular, se nombrará también para ella un bibliotecario especial o un Ayudante; pero con dependencia del bibliotecario general de la Universidad.

Podríamos decir que aquí nace lo que hoy entendemos como Biblioteca Universitaria española. Un bibliotecario jefe coordina y dirige el trabajo realizado en las diversas bibliotecas especializadas de la Universidad formando, todas ellas, una única entidad legal. El bibliotecario jefe, además, es el enlace entre las distintas bibliotecas y el rector es decir; el gobierno. La cadena de autoridad estaba firmemente conseguida: Ministro - Rector - Bibliotecario general - Jefe local²⁹⁸.

La Universidad de Madrid contaba en estos momentos con tres bibliotecas perfectamente organizadas:

- Biblioteca de San Isidro²⁹⁹ considerada, desde el principio, la Biblioteca general de la Universidad y en ella se asentó la dirección de la Biblioteca. Atendía al público de la recién creada Facultad de Filosofía, pero en realidad era la segunda biblioteca pública de Madrid, contando con Biblioteca Nacional.
- Biblioteca de Medicina fue fundada a la vez que el Colegio de San Carlos, en 1787, aunque sus fondos se enriquecieron con los procedentes del Colegio de Cirugía y de la propia Biblioteca de San Isidro.
- Biblioteca de Farmacia al igual que la anterior, su origen es el mismo del Colegio donde se asentaba, el Colegio de San Fernando. La fecha de fundación fue 1804.

²⁹⁸ Archivo del Rectorado de la Universidad Complutense de Madrid, citado por MIGUEL ALONSO, Aurora, p. 149.

²⁹⁹ Para conocer en profundidad lo que fue la Biblioteca de San Isidro consúltese la obra ya citada de MIGUEL ALONSO, Aurora.

En el fondo histórico de la Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid se encuentra un Reglamento interior de la Universidad Central del año 1853. Siguiendo este Reglamento recogemos aquí lo siguiente:

La Sección segunda del Título primero alude a la instrucción de la Biblioteca, ocupándose de dar normas internas para el funcionamiento del personal y los procedimientos a seguir en la misma.

A su vez, también encontramos un documento de gran interés como es la Memoria de la Biblioteca en el año 1855 elaborada por el Bibliotecario general, Escudero y Perosso, que nos da a conocer el estado de la Biblioteca en este año describiéndola así :

Son cuatro las secciones o Bibliotecas especiales, antes independientes entre sí y sujeta cada una a un régimen particular, que vinieron a constituir, desde la moderna centralización de la Instrucción pública, la Biblioteca general de esta Universidad: tales son las situadas en los edificios de S. Isidro y el Noviciado, y en los Colegios de S. Carlos y S. Fernando, correspondientes a las cuatro facultades de Filosofía, Jurisprudencia, Medicina y Farmacia. Muy recientemente, y en virtud de una real orden con fecha de 18 de abril del presente año, se agregó a la Biblioteca de la Universidad, la que existe en el Museo de Ciencias Naturales de esta Corte, siendo cinco los establecimientos, a saber:

La Biblioteca de San Isidro. Biblioteca que perteneció a los Jesuitas.

Biblioteca del Noviciado. Biblioteca destinada especialmente a la facultad de Jurisprudencia. Representante y heredera de la famosa Complutense que en Alcalá de Henares, fundó el Cardenal Cisneros.

Bibliotecas de S. Carlos, S. Fernando y del Museo de Ciencias. Correspondientes a las Facultades de Medicina y Farmacia y fundadas al mismo tiempo que sus respectivos colegios. En cuanto a la del Museo de Ciencias Naturales, se encuentra todavía casi por constituir y necesita previos los fondos oportunos y una reforma radical y completa.

Este documento se ocupa también de recoger las mejoras y reformas que se han desarrollado en la Biblioteca con respecto a los avances y arreglos así como los índices. Al mismo tiempo incorpora un informe sobre el personal de la biblioteca.

Por último, procede apuntar que el Anuario del Cuerpo Facultativo del año 1881³⁰⁰ describe las Facultades que constituyen la Biblioteca universitaria de Madrid, y son: la Facultad de Filosofía y Letras (vulgo de San Isidro), la de Teología y Derecho, la de Farmacia y las del Museo de Ciencias y Jardín Botánico. El artículo está redactado teniendo en cuenta los datos que contienen los informes que han remitido los Jefes locales en cumplimiento de la circular dirigida por la Junta facultativa del Cuerpo a cada uno de los Jefes de los establecimientos.

6.6. Bibliotecas de los Ministerios

Un último apartado, dentro de las instituciones bibliotecarias, lo vamos a dedicar a reseñar algunos ejemplos de implantación de las Bibliotecas en los propios Ministerios.

³⁰⁰ *Biblioteca Universitaria de Madrid.* “Anuario del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios”, 1881. Madrid: Imprenta del Colegio Nacional de Sordo-Mudos y de Ciegos, 1882, p. 152. Es interesante conocer todo el artículo pp. 152-169.

Basándonos en el estudio elaborado sobre estructuras orgánicas de las Secretarías de Estado y sus contextos legislativos, podemos llegar a reconocer que, desde mediados de siglo, la mayoría de las Secretarías de Estado cuentan con su propia Biblioteca. En este sentido, pasamos a relacionar algunas disposiciones que ponen de manifiesto esta afirmación:

- La Secretaría de Estado de Gracia y Justicia *por Real Decreto de 12 de noviembre de 1873* crea un Negociado especial encargado del Archivo y de la Biblioteca.
- Posteriormente, la *Orden de 25 de noviembre de 1873* de la misma Secretaría de Estado, convoca plazas de Oficiales de primera y segunda para la Biblioteca.
- Por el *Real Decreto de 12 de febrero de 1884* se crea otra Biblioteca ésta de carácter especial de Códigos y textos legales, en el Ministerio de Gracia y Justicia.
- El *Real Decreto de 6 de octubre de 1885* crea una Biblioteca de Códigos y de textos legales en las Audiencias territoriales y de lo criminal.
- Por *Real Orden de 16 de agosto de 1876* se dispone que en la Dirección general de Agricultura, Industria y Comercio se proceda a la creación de una Biblioteca agrícola del Ministerio de Fomento.
- La *Real Orden de 12 de septiembre de 1881* crea en el Ministerio de

Fomento dos Bibliotecas especiales una para la Dirección general de Instrucción pública y otra para la de Obras públicas.

- Otros Ministerios como el de Marina, también cuentan con Bibliotecas legislando la apertura al público de acuerdo con el *Reglamento de 22 de septiembre de 1866*.
- En la misma línea, el Ministerio de Guerra, crea Bibliotecas militares en cada uno de los puntos donde existan Conferencias de Oficiales.
- Instituciones como el Consejo de Estado, el Archivo Histórico Nacional y otras Públicas también contaban con sus respectivas Bibliotecas.

6.7. El Archivo de Cortes: El Archivo del Congreso de los Diputados y el Archivo del Senado.

Antes de entrar en el estudio de cada uno de estos archivos, resaltamos dos características del Archivo parlamentario Español, analizadas desde la perspectiva actual:

1. Son archivos que recopilan documentos de dos siglos que les convierte en la fuente más rica para el estudio de la historia española.
2. La característica singular de que sus fondos no han sido transferidos nunca a otras instituciones del Estado dependientes de las administraciones públicas gubernamentales.

6.7.1. El Archivo del Congreso de los Diputados

En el presente trabajo venimos describiendo cómo las Constituciones españolas han originado normas que han influido y regido en la organización interna de las Instituciones públicas. En el caso concreto de ésta Cámara y su Archivo, no sólo, han estado regidos por las normas constitucionales sino también por los Reglamentos parlamentarios que han establecido diversas organizaciones y diferentes modos de funcionamiento.

El inicio del Archivo de Cortes y su estudio podríamos fijarlo a partir del año 1808, con la primera convocatoria de Cortes Generales y Extraordinarias por Acuerdo de la Junta Suprema Gubernativa Central y concretamente con la Constitución de Bayona de 1808 que, como mantiene Sofía Gandarias, fue esta Constitución la que creó el primer fondo del Archivo del Congreso de los Diputados. Ahora bien, la fecha decisiva es la del 24 de septiembre de 1810, cuando comienzan las deliberaciones parlamentarias de manera pública en la Isla de León, hoy San Fernando (Cádiz), con cuya sesión se encabeza el primer tomo del Diario de Sesiones³⁰¹. El 5 de noviembre del mismo año se nombra como primer archivero a D. Antonio Moreno Galea³⁰².

El primer Reglamento que encontramos en este período está aprobado por Decreto de 27 de noviembre de 1810. En el Capítulo referente A las funciones de los Secretarios, señala: Formarán un Reglamento para la Oficina y Archivo y lo presentarán a las Cortes para su aprobación. Lo más destacable, como señala M. Ángeles Valle de Juan, es que fue criterio de los primeros constitucionalistas, y

³⁰¹ *Diario de Sesiones de las Cortes Generales y Extraordinarias* nº 1 de 24 de septiembre de 1810.

permaneció vigente hasta el último tercio del siglo XIX, la configuración del Archivo directamente ligado a la Secretaría General y con personal de características similares, mientras la Biblioteca desarrollaba su propia historia cultural independiente³⁰³.

En este aspecto incide Sofía Gandarias al decir, desde un primer momento parece marcada cierta independencia entre el Archivo y la Biblioteca de la Cámara estando esta última a cargo. Sin embargo en 1841 aparecen unidas las funciones de archivero y bibliotecario en Clemente Arias, como más tarde en Fernández Martín, Rivera del Pino o Calvo Marcos, a lo largo de todo el siglo XIX³⁰⁴.

Al igual que las antiguas Cortes de Castilla, que tenían la facultad de nombrar los empleados y dependientes que se hallaban a su inmediato servicio, las Cortes de Cádiz en el *Decreto de 17 de diciembre de 1811*, sobre establecimiento de la Secretaría de las Cortes, regula en el artículo primero que *habrá una Secretaría de Estado con el título de Secretaría de las Cortes, compuesta de cinco oficiales... y de un Archivero elegido por las mismas*.

Las diferentes propuestas van a generar, en el año 1821, un nuevo Reglamento que iba a regir desde el 27 de septiembre, estableciendo en el artículo 201 que, *habrá un Archivero con uno o más oficiales si los necesitara para el desempeño de su encargo*³⁰⁵.

³⁰² GANDARIAS ALONSO DE CELIS, Sofía. *El Archivo del Congreso de los Diputados*. Madrid: Congreso de los Diputados. Dirección de Estudios y Documentación de la Secretaría General, 1999, pp. 13-16.

³⁰³ VALLE DE JUAN, m. Ángeles. *El archivo del Senado en sus documentos*. Conferencia pronunciada en el Convegno Europeo Degli Archivi Storici Parlamentari, que tuvo lugar en Roma del 22 al 25 de marzo de 1993, p. 3.

³⁰⁴ GANDARIAS ALONSO DE CELIS, Sofía. Op. cit., p. 17.

³⁰⁵ Este Reglamento, advierte M. Ángeles Valle de Juan, debe considerarse el primero de los propiamente de Régimen Interior, personal, etc., es decir, no parlamentario.

Posteriormente, se aprueba el *Decreto de 7 de febrero de 1823* bajo la denominación de Reglamento para la Secretaría y Archivo de las Cortes. El artículo uno regula que constará *la Secretaría y Archivo de las Cortes de seis Oficiales y seis Escribientes*.

El Archivo de las Cortes, que lo es también de la Secretaría, así lo estipula el artículo cuarto, estará *a cargo del Oficial* a quien se le destine este negociado, y continuará en él aunque obtenga ascenso en la misma Secretaría. El artículo treinta y dos recoge, *será del cargo del Archivero la custodia y mejor conservación de los interesantes documentos existentes en el Archivo y de cualquier falta será responsable, aun cuando procediese de sus dependientes*.

Al final del trienio 1820-23, las Cortes se trasladan a Sevilla y, finalmente, a Cádiz soportando el Archivo todos los itinerarios y trasiegos peligrosos que se llevaron a cabo, sin formalidad alguna, en las dos reacciones absolutistas del primer cuarto del siglo XIX; siendo la causa de importantes pérdidas de documentación parlamentaria.

El paso de los años del reinado de Fernando VII de 1823-1833, trajo en 1834, con la reina Gobernadora, un régimen más liberal y la publicación del Estamento Real que introduce, por vez primera, unas Cortes bicamerales de escasa representatividad y de acción liberal significativa, pero es la Constitución de 1837 la que da la denominación que hoy reciben las Cámaras: Congreso de los Diputados como cámara baja o primera cámara y del Senado como cámara alta o segunda cámara.

La documentación que conserva el Archivo, tal y como recoge la Guía de Archivos de Madrid³⁰⁶, se puede considerar de dos clases bien definidas una; de tipo político y parlamentario, la más importante, otra; de carácter administrativo,

³⁰⁶ *Cortes Españolas*. En Guía de los Archivos de Madrid. Prólogo de Francisco Sintés y Obrador. Madrid: Dirección General de Archivos y Bibliotecas. Servicio de Publicaciones del Ministerio de Educación Nacional, 1952, pp. 2-3.

referente al régimen interior, tesorería, publicaciones, etc. El Archivo, en estos momentos, estaba formado por documentación que aparece estructurada en tres períodos bien diferenciados:

Expedientes de Cortes de la primera época constitucional (1810-1814).

Expedientes de 1820-1823.

Expedientes desde 1834.

Estos expedientes, a su vez, se clasificaron según la materia de su contenido y, por ello, el fondo archivístico fue dividido en cuatro secciones, a saber;

De expedientes.

De presupuestos

Actas electorales.

De folletos de impresos sueltos.

La documentación primitiva la forman los *Informes sobre Cortes* que son escritos procedentes de Corporaciones y de particulares enviados a la Junta Central como respuesta a la información recabada en una circular de 24 de junio de 1809 de la Comisión de Cortes creada en aquella Junta. Otra forma de incorporar fondos al Archivo se dio por la *Orden de 25 de julio de 1820* que previene que el Archivo de la Diputación de Millones se entregue al Archivero de la Secretaría de Cortes, y rinda aquella sus cuentas al Ministerio de Hacienda. Posteriormente la *Ley de 25 de junio de 1873* agrega definitivamente al Archivo de las Cortes, el Archivo del Palacio que en Madrid ocupaban los Reyes de España.

Para terminar, recordar que la organización actual del Archivo sigue teniendo en cuenta los principales criterios establecidos por Clemente Arias en 1841, que permiten conocer su estructura histórica y actual.

6.7.2. El Archivo del Senado

Un año después de la muerte de Fernando VII, el 10 de abril de 1834, se aprueba el Estatuto Real, y en su Título primero, artículo segundo, establece *Las Cortes Generales se compondrán de dos Estamentos: el de Próceres del Reino y el de Procuradores del Reino*, poniendo así fin al período unicameral. La denominación actual obedece a la Constitución de 1837 que en su Título segundo sobre *De las Cortes*, regula en el artículo trece que, *Las Cortes se componen de dos Cuerpos Colegisladores, iguales en facultades: el Senado y el Congreso de los Diputados*.

La implantación del bicameralismo va a producir, naturalmente, la existencia de dos Archivos parlamentarios, la documentación conservada, hasta el momento, quedaría depositada en el Archivo de Procuradores, donde se conserva hasta la actualidad. De este breve período de 1834 a 1837 nos indica Ángeles Valle de Juan que son escasas las referencias al Archivo, tanto que, sólo encontramos dos solicitudes para el ingreso en sus dependencias dirigidas al Presidente del Estamento de Próceres³⁰⁷.

Al inicio de la etapa parlamentaria se crea una Comisión que redacta un *Proyecto de Reglamento del Senado* recogiendo dentro del Título XVI *Del Gobierno Interior del Palacio y Oficinas del Senado* las competencias de la Comisión de Gobierno Interior, bajo cuyas ordenes están todos los empleados de la oficina del Senado. Un segundo proyecto es presentado y leído en la sesión pública de 16 de enero de 1838 que, entre otras cosas, recoge dentro de las funciones de la Comisión, *proponer al Senado los empleados de la Secretaría y Archivo y nombrar los demás empleados*

³⁰⁷Para conocer las personas a las que nos referimos en este apartado, consúltase el Legajo 539-02 de la Serie Estamento de Próceres.

En la sesión de 25 de enero de 1838 proponen el siguiente texto: *Los Secretarios tendrán a su cargo la Secretaría y Archivo del Senado, dependiendo de ellos todos los empleados de estas oficinas, y formarán una instrucción para el régimen de ellas, sometiéndola a la aprobación del Senado*³⁰⁸.

Sin embargo, y a pesar de las propuestas presentadas al Senado para nombrar empleados de Archivo, en julio del mismo año se piensa que daría un resultado más positivo si quedasen al frente dos Senadores dirigiendo el Archivo, y así, en noviembre, se encargan dos Senadores.

Nada nuevo encontramos hasta 1841, cuando en la Sesión secreta de 18 de junio se acuerda *el restablecimiento de la plaza oficial del Archivo de Secretaría reduciendo a una sola las dos plazas que hubiera de Escribientes*.

Con respecto a la ubicación, el hecho de no encontrar, hasta el momento, ninguna referencia a la ubicación y espacio del Archivo, nos permite deducir, en opinión de M. Ángeles Valle de Juan, que compartía las dependencias de la Secretaría, lo que va a resolverse a partir de 1842³⁰⁹.

El período de 1842 a 1848 no presenta especiales alteraciones, solamente, en el año 1848, observamos en los presupuestos un nuevo Oficial del Archivo.

Por lo que respecta a las competencias y obligaciones del Archivero aparecen en un borrador para el Régimen de la Secretaría del Senado y sus dependencias³¹⁰. Es obligación del Archivero:

- Recibir los expedientes terminados que le pasen las Mesas al final de cada legislatura.

³⁰⁸ Archivo del Senado, leg. 760-01.

³⁰⁹ VALLE DE JUAN, M. Ángeles, op. cit., p. 10.

- Clasificar y colocar los expedientes.
- Repartir los Diarios de las Sesiones.

Los Oficiales, por su parte, tienen las obligaciones de:

- Auxiliar al Archivero en todos sus trabajos.
- Llevar los libros de Registro y poner en limpio los escritos relativos al Archivo o la Secretaría.

A partir de la Restauración Borbónica, en 1876, encontramos en las Actas Secretas un dato ciertamente confuso; mientras que los empleados aparecen como Archivo-Biblioteca, los presupuestos para los siguientes años contemplan ambas dependencias separadamente.

En este sentido, una documentación más va a enriquecer nuestro estudio: las Actas de la Comisión de Fomento y Conservación de la Biblioteca. Si bien creada en 1871, es en 1893 cuando aparecen referencias al Archivo y su personal. Así, en la sesión de 1 de mayo leemos, *Enterada la Comisión de que el personal de la Biblioteca y Archivo se halla actualmente reducido a sólo tres individuos, a saber, el Archivero-Bibliotecario y dos auxiliares y considerando que tan corto número de mpleados es insuficiente para las múltiples atenciones de ambos Departamentos se pidió que se hiciese saber a la Mesa del Senado*³¹¹.

En 1895 la misma Comisión se ocupará del sistema de oposiciones alegando la conveniencia de escoger un procedimiento que garantice la idoneidad para desempeñar estos cargos y proponiendo, a tal fin, la reforma del sistema utilizado hasta entonces. Cerrando este epígrafe describimos la relación de los Fondos del Archivo que están divididos en las siguientes series:

³¹⁰ Se encuentra en el legajo 761-06, del Archivo del Senado.

1. Serie Electoral con actas de elecciones generales y parciales.
2. Serie Senadores. Contiene expedientes personales, fallecimientos...
3. Serie Administración interna y personal. Todo lo relacionado con personal de la Secretaría, presupuestos...
4. Serie Parlamentaria. Contiene lo relacionado con las Sesiones Parlamentarias como reuniones, nombramientos, proyectos...
5. Serie Relaciones con otras Instituciones como Casa Real, Congreso...
6. Serie varios. Aquí se encuentra el Senado como Tribunal y otros.

6.8. Los Archivos Ministeriales

La reforma de la Administración Central del Estado y los cambios sustanciales en estos organismos administrativos van a incidir en los Archivos, no sólo por ser dependencias que reflejan la estructura ministerial sino, más bien, precisa Concepción Contel, *por ser la memoria de la institución a la que corresponden*³¹².

Como hemos observado a lo largo del trabajo que presentamos, en el siglo XIX hay un gran interés por la documentación administrativa emanada de las Secretarías de Estado. Tónica mantenida durante el siglo y que se refleja en la continua alusión que se hace al Archivo, y la que se hace en las disposiciones referentes a la organización de la Administración Central.

³¹¹ VALLE DE JUAN, M. Ángeles. op. cit., p. 12.

Tenemos constancia de la aparición de los archivos ministeriales desde la propia creación de las Secretarías de Estado. También observamos que en el desarrollo de las plantas de los Ministerios se va integrando la figura de Oficiales de Archivo y la propia de Archivero. Por ello, acertadamente, Carmen Salas al prologar la *Guía del Archivo del Ministerio del Interior*, nos dice que son los archivos ministeriales fuente copiosa de información y elemento imprescindible para la reconstrucción del proceso histórico moderno. La citada autora, subraya, que estos archivos aparecen en la primera mitad del siglo XIX con personalidad propia, como unidades orgánicas diferenciadas con misión específica que cumplir al servicio de la Administración. Al mismo tiempo que esta se desarrolla, las Secretarías se transforman en órganos de apoyo de los diferentes Secretarios de Despacho, convertidos ya en Ministros, con responsabilidad independiente del Monarca³¹³.

Hasta el año 1844 estos archivos cumplían un papel importante, aunque limitado, casi exclusivamente, al servicio de la propia Administración. Con la publicación de la *Real Orden Circular de 20 de abril de 1844 de la Gobernación* sobre licencias solicitadas por nacionales y extranjeros para registrar los archivos del reino, se reconoce el derecho de los estudiosos e investigadores a consultar los depósitos de los archivos del reino y tomar en ellos apuntes y copias de los documentos que encierran. La disposición regula las condiciones para realizar las consultas, entendiendo por tanto que esta medida es importante y afecta al crecimiento y funcionamiento de los archivos. Por tanto, no deja de ser un acontecimiento puesto de relieve por los profesionales y que ha marcado un punto de referencia en la historia de los archivos.

³¹² CONTEL BAREA, M^a Concepción. *La creación del Archivo Histórico Nacional*. En *Erudición y Discurso Histórico: Las Instituciones Europeas (S. XVIII-XIX)*. Valencia: Universidad de Valencia, 1993, p. 233.

³¹³ SALAS LARRAZÁBAL, Carmen. *Prólogo*. En SERRA NAVARRO, Pilar. *Guía del Archivo Central. Ministerio del Interior*. Madrid: Ministerio de Cultura. Subdirección General de Archivos, 1981, p. 8.

En este sentido, Cayetano Martín, describe como en el año 1868, la capital contaba, por supuesto, con los Archivos de los Ministerios, porque no hay centro administrativo que no tenga el suyo. Califica como *netamente favorable el momento archivístico en esta época*, y transcribe un párrafo de la obra de Fernández de los Ríos donde reconoce esta afirmación:

“Obra de este siglo son también casi todos los preciosos depósitos de riquezas científicas, literarias y artísticas que reseñamos en este capítulo³¹⁴...”

Sin embargo, añade la autora, en este año 1868, los archivos que existían en Madrid no reunían las condiciones precisas no sólo para conservar la documentación, sino para consultarla. Además, precisar que los archivos de los Ministerios adolecen de los mismos males que los generales, sobre todo porque el panorama de la Administración en esta época es conflictivo por los cambios de estructuras orgánicas y de competencias³¹⁵.

Un hecho que se ha venido considerando de gran relevancia para los Archivos Ministeriales fue dado por la *Ley de 30 de junio de 1894*, encomendando todos los Archivos de la Administración Central al Cuerpo de Archiveros y Bibliotecarios. Es evidente, afirma Carmen Salas, que en este período se manifiesta una preocupación por reunir y salvaguardar el Tesoro Documental y Bibliográfico del País, preocupación que plasma en numerosas disposiciones que culminan con la creación del Cuerpo Facultativo especializado y un Archivo General Central. Dos aspectos que contribuyen a la buena marcha de los Archivos, y que se cierra con la aparición del Archivo Histórico³¹⁶.

³¹⁴ FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS, Ángel. *Guía de Madrid. Manual del madrileño y del forastero*. Madrid: Oficinas de la Ilustración Española y Americana, 1876, p. 429. En: CAYETANO MARTÍN, Carmen. Op. cit., p. 33.

³¹⁵ CAYETANO MARTÍN, Carmen. Op. cit., pp. 32-33.

Pasamos a señalar algunos Archivos de los Ministerios más relevantes del presente siglo.

6.8.1. Archivo del Ministerio de Fomento

De la gran importancia que tenía el Archivo de Fomento a lo largo del siglo XIX, nos da idea el Decreto de incorporación de los Archivos al clasificar a este archivo, excepcionalmente, entre los generales y de primera clase a causa de la categoría y riqueza de sus fondos. En el escalafón definitivo del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios de 12 de diciembre de 1895 se le adjudicaba una plantilla de siete facultativos.

En efecto, el Ministerio de Fomento creado por *Real Decreto de 5 de noviembre de 1832*, llamado de Interior con anterioridad a 1810, denominado de Gobernación de 1810 a 1814; 1820-1823, de Fomento en 1833 y luego nuevamente de Gobernación, era un Ministerio que se constituye como órgano de la renovación y de la prosperidad; los dos grandes mitos de aquella tendencia liberal. Ministerio complejo, que aborda funciones que empezaban con el control del Gobierno de los pueblos y acababan con la sanidad, transportes, obras públicas, etc.³¹⁷. El inicio de su gestión suponía el paso a la burocracia asumiendo un papel preponderante que no abandonará durante el siglo. Desde sus orígenes contó con un Oficial de archivos y en 1835 tenía integrado en la plantilla un Archivero y 30 Oficiales. Las plantillas de los años siguientes aluden a Oficiales, Archiveros y Oficiales con honores de Archiveros.

³¹⁶ SALAS LARRAZÁBAL, Carmen. Op. cit., p. 8.

³¹⁷ Para conocer la creación del Ministerio así como los cambios de estructuras orgánicas y de denominaciones, véase el Capítulo II.

En este sentido, el Reglamento de Régimen interior de 1869 contiene que el Archivo y la Biblioteca estarán a cargo de un Jefe de Negociado, alcanzando en el organigrama un Negociado independiente. Disposiciones posteriores como la *Orden de 4 de mayo de 1870* nos indican la política archivística del Ministerio por crear plazas para el archivo o sobre reorganización del mismo otras como, la *Orden de 19 de octubre de 1870* determinan las formalidades para sellar y numerar los documentos. Por otra parte, el Ministerio también se preocupa por el abandono de fondos pertenecientes a otras Instituciones y por ello legisla casos específicos como la *Orden de 15 de octubre de 1873* mandando entregar sus archivos al Instituto oficial de la provincia o distrito universitario por supresión de establecimientos de enseñanza libre.

6.8.2. Archivos dependientes del Ministerio de Gracia y Justicia

6.8.2.1. Archivos Notariales

En el año 1847 el Ministerio de Gracia y Justicia va a llevar a cabo una política para fomentar e impulsar una organización común y uniforme en los archivos generales y, en particular, para los archivos dependientes del Ministerio de Gracia y Justicia.

Ante esta necesidad de organizar un sistema general el Ministro de Gracia y Justicia, Sr. Arrazola, publica un *Real Decreto el 5 de noviembre de 1847* creando una Junta superior directiva de archivos dependientes del Ministerio de Gracia y Justicia y disponiendo la formación de otras subalternas. En el preámbulo de la disposición ya expone el lamentable estado en el que se encuentran los archivos del reino tanto los conocidos bajo el nombre de generales como los judiciales y los del

notariado o de la fe pública, considerando a estos últimos, que aún siendo de diversa índole y naturaleza, pueden y deben sujetarse a una organización común y a reglas uniformes.

En efecto, el estado de desorden y abandono de los títulos y documentos públicos ha sido puesto de manifiesto con anterioridad a estas disposiciones. En la *Orden de 2 de mayo de 1821*, el Secretario de Estado y del Despacho de Gracia y Justicia se pronunciaba pidiendo al Gobierno que interviniera para tomar medidas y establecer archivos de protocolos y pleitos fenecidos. Esta desorganización y abandono de los fondos notariales puede justificarse, tal y como se expone en el preámbulo de la disposición de 1847, en primer lugar; por las vicisitudes que viene afligiendo al país, en segundo lugar; por el hecho de no estar sometidos a un sistema general y uniforme a su formación, conservación y arreglo y en tercer lugar; por considerar el protocolo de un escribano como una propiedad particular.

Por tanto, se pide proceder al establecimiento de archivos locales de partido y de distrito judicial donde se conserve el protocolo terminado bajo la garantía y protección de la autoridad especial instituida al efecto.

Al respecto, Carmen Cayetano resalta que en los Archivos de Madrid del siglo XIX, *había archivos que escapaban al sistema. Los dos más característicos fueron y son sin duda el Archivo de Protocolo de Madrid [...]*³¹⁸.

³¹⁸ Op. cit., p.37.

notariado o de la fe pública, considerando a estos últimos, que aún siendo de diversa índole y naturaleza, pueden y deben sujetarse a una organización común y a reglas uniformes.

En efecto, el estado de desorden y abandono de los títulos y documentos públicos ha sido puesto de manifiesto con anterioridad a estas disposiciones. En la *Orden de 2 de mayo de 1821*, el Secretario de Estado y del Despacho de Gracia y Justicia se pronunciaba pidiendo al Gobierno que interviniera para tomar medidas y establecer archivos de protocolos y pleitos fenecidos. Esta desorganización y abandono de los fondos notariales puede justificarse, tal y como se expone en el preámbulo de la disposición de 1847, en primer lugar; por las vicisitudes que viene afligiendo al país, en segundo lugar; por el hecho de no estar sometidos a un sistema general y uniforme a su formación, conservación y arreglo y en tercer lugar; por considerar el protocolo de un escribano como una propiedad particular.

Por tanto, se pide proceder al establecimiento de archivos locales de partido y de distrito judicial donde se conserve el protocolo terminado bajo la garantía y protección de la autoridad especial instituida al efecto.

Al respecto, Carmen Cayetano resalta que en los Archivos de Madrid del siglo XIX, *había archivos que escapaban al sistema. Los dos más característicos fueron y son sin duda el Archivo de Protocolo de Madrid [...]*³¹⁸.

³¹⁸ Op. cit., p.37.

Aunque los Archivos de Protocolos existen desde el siglo XVIII³¹⁹ no podemos hablar de archivos propiamente dichos hasta el *Decreto-Ley de 8 de enero de 1869* por el que se crean los Archivos generales de Distrito Notarial en las poblaciones donde había Juzgado de Primera Instancia.

El paso definitivo para salvar estos fondos se dio al promulgarse la *Ley Orgánica del Notariado de 1862*, con esta ley se logró evitar, en parte, el problema declarando que los protocolos pertenecían al Estado. Otro impulso se dio con la publicación de la *Real Orden de 6 de febrero de 1865* disponiendo que los notarios y archiveros expidan a los investigadores de Propiedades y Derechos del Estado las copias, testimonios y certificaciones que soliciten, cumpliendo con las formalidades que se prefijan.

Por su parte la Ley del Notariado previene la urgente necesidad de dictar un reglamento orgánico y bajo este cumplimiento, la *Real Orden de 31 de diciembre de 1867* reúne varias disposiciones previas para la formación del reglamento orgánico de los archivos notariales, a saber:

- 1- Que en el término de seis meses formen todos los Notarios un inventario de los protocolos que tienen en su poder.
- 2- Que los Notarios remitan dichos inventarios a las Juntas de los respectivos Colegios para elevarlos a la Sala de gobierno de la Audiencia.

³¹⁹ Con anterioridad al siglo XVIII, cada Escribano conservaba en su domicilio los libros que formaban su Protocolo, los cuales pasaban a sus herederos, por cuyo motivo eran muchos los que se perdían. Felipe V, por *Real Decreto de 23 de junio de 1701*, manifestó al Consejo la conveniencia de establecer en Madrid y principales ciudades, Archivos donde se custodiasen los Protocolos, como ya había hecho Carlos II, recogiendo en las casas de Ayuntamiento. Estos datos han sido tomados de *Archivo de Protocolos del Distrito Notarial*. Guía de los Archivos de Madrid. Prólogo de Francisco Sintés y Obrador. Madrid: Dirección General de Archivos y Bibliotecas. Servicio de Publicaciones del Ministerio de Educación Nacional, 1952, pp.123-126.

- 3- En el plazo de seis meses las Juntas han de recoger todos los protocolos, documentos y papeles pertenecientes a Notarios vacantes, que existan en poder de particulares.
- 4- Las Salas de gobierno darán cuenta a este Ministerio de todas las medidas tomadas para la consecución de los fines propuestos.
- 5- Los archivos generales de protocolos que existan continuarán en el estado y con la organización que tienen.

La medida definitiva viene recogida en el *Decreto de 8 de enero de 1869* disponiendo la creación de un Archivo general de protocolos en cada distrito notarial y dictando reglas para su formación y establecimiento³²⁰. Por el artículo primero “*Habrà un Archivo general de protocolos en cada distrito notarial, establecido en la población donde resida el Juzgado de primera instancia*”. El artículo segundo añade, *dichos archivos se formarán con los protocolos generales de más de treinta años de fecha*.

Según el artículo tercero, *el resto de los libros y protocolos quedarán en el archivo de la Notaría*. El artículo cuarto establece que *de cada uno de los Archivos generales de protocolos estará encargado un Notario elegido por el Ministerio de Gracia y Justicia. El Juez de primera instancia dará la posesión al Notario-Archivero*. En este sentido el Ministerio de Gracia y Justicia recibirá todos los años un parte detallado realizado por los Regentes de las Audiencias del estado donde se hallen los Archivos generales de protocolos del territorio respectivo.

³²⁰ En virtud del *Decreto de 8 de enero de 1869*, los Archivos de Protocolos, ya no son recogidos en los Ayuntamientos. Carmen CAYETANO, op. cit., pp. 37-38, nos recuerda dos hechos importantes del Archivo de Protocolos de Madrid, el primero su salida de la protección municipal por el Decreto apuntado, pasando el fondo de ser custodiado por el Archivero Municipal a la de don Manuel de la Fuente, nombrado notario-archivero por el Ministro de Gracia y Justicia. El segundo, la construcción de un edificio destinado especialmente para archivo, en 1884, un caso único en el Madrid de final de siglo, donde los archivos habían utilizado viejos conventos y palacios.

Con respecto a la persona que debe responsabilizarse de estos archivos, disposiciones como por ejemplo la *Real Orden de 29 de marzo de 1875*, confirman que el cargo de Archivero de protocolos es obligatorio si recae el nombramiento en el Notario único de la cabeza del partido o en el más moderno si fuesen dos o más los residentes en ella.

A partir de la publicación de este Decreto, los Ministerios van a tomar medidas orientadas a normalizar el proceso y por *Orden de 18 de abril de 1873* se manda entregar a los Notarios-Archiveros, del respectivo partido judicial, los protocolos que fueron de la Corona y que correspondan a las Bailías y Administraciones del Patrimonio.

A su vez, el Ministerio de la Marina que había suprimido, por *Real Decreto de noviembre de 1872*, las Escribanías de Marina promulga el *Real Decreto de 7 de noviembre de 1876* disponiendo que *los protocolos de las Escribanías especiales de Marina que hayan vacado o en lo sucesivo vacaren, pasen en su totalidad y bajo inventario a los Archivos generales de protocolos de los distritos notariales a que aquellas pertenezcan.*

Los protocolos se seguirán conservando en estos Archivos hasta la creación de los Archivos Históricos de Protocolos por *Decreto de 12 de noviembre de 1931* que recogerán los protocolos con más de cien años de antigüedad.

6.8.2.2. Archivos Judiciales

Como ya apuntábamos anteriormente, el *Real Decreto de 5 de noviembre de 1847* pretendía crear una organización común de los archivos dependientes del

Ministerio de Gracia y Justicia. En el preámbulo de la disposición el Ministro, siendo consciente del desastre de los archivos judiciales, precisa la necesidad de organizar y crear un sistema general que centralice y unifique estos archivos para terminar con la documentación hacinada y desperdigada.

El inicio de los Archivos judiciales hay que datarlo en 1714, fecha en que Felipe V organiza las Secretarías de Despacho, sin embargo adquirieron verdadera importancia en 1836 cuando se incorporan, al mismo, los papeles del Consejo, Cámara y Sello de Castilla, y los de Espolios y Vacantes³²¹.

Las disposiciones que legislan estos archivos son las siguientes:

- Por *Orden de 16 de mayo de 1844* del Ministerio de Gracia y Justicia se encarga la reunión, custodia y conservación de todos los libros de registro y documentos para iniciar la formación del archivo del Ministerio fiscal de esa Audiencia.
- Por otra parte, la *Real Orden de 2 de diciembre de 1845* prescribe varias reglas para que los tribunales y archivos dependientes de este Ministerio permita reconocer y sacar copias de causas y otros documentos judiciales.
- Por *Real Decreto de 4 de julio de 1851* se determina qué personas están autorizadas para dar las copias o certificaciones de documentos que existan en los archivos del Ministerio de Gracia y Justicia, la forma y modo de su extensión. Según el artículo uno, *las certificaciones de cualquier documento que existan en los archivos de la Corte, que dependan inmediatamente del Ministerio de Gracia y Justicia, se extenderán y librarán por el oficial de sección a cuyo*

*cargo esté el archivo donde se encuentre el documento, previa orden por escrito del Ministro o Subsecretario, el artículo dos añade que para que hagan fe dichas certificaciones serán autorizadas por el Jefe de mesa en su calidad de Archivero*³²².

Para el mejor servicio de las Secretarías de gobierno y archivos de las Audiencias se aprueba, por *Real Orden de 28 de diciembre de 1853*, el Reglamento para las mismas. Los puntos que destaca son los siguientes:

1. Los secretarios, como archiveros, están obligados al arreglo, custodia y conservación de los papeles.
 2. Cuidarán de la integridad del archivo.
 3. Archivarán los expedientes y autos ordenándolos alfabéticamente por los partidos judiciales a que correspondan.
 4. Procederán a poner en especial y segura custodia los índices de escrituras públicas que se remitan a las Audiencias cada año y en general vigilarán para impedir cualquier alteración.
-
- Por *Real Decreto de 12 de mayo de 1854* se procede hacer un arreglo en los Archivos de las Audiencias y creando al efecto una Comisión en cada una de ellas. El decreto establece que se remitan al Ministerio estados semestrales de los trabajos practicados en los Archivos de cada Audiencia.

³²¹ Ministerio de Justicia. En *Guía de Archivos de Madrid*, op. cit., p.114

Entre las importantes reformas que se plantean en el Ministerio de Gracia y Justicia la más necesaria y urgente es la del Archivo del propio Ministerio. Por *Decreto de 12 de noviembre de 1873* se crea en la Secretaría del Ministerio de Gracia y Justicia un Negociado especial del Archivo y de la Biblioteca del Ministerio con arreglo a la organización que se expresa. La organización de este Negociado tiene que revestir caracteres especiales, los propios de un Ministerio que contiene documentos de consulta tanto para la Secretaría del propio ministerio como para las grandes reformas que deben operarse en la administración de justicia y en la organización de los Tribunales. Por tanto hay que tener en cuenta el perfecto conocimiento de las instituciones y del Derecho.

Por todo esto, es preciso que el Archivo y la Biblioteca constituyan un Negociado especial dependiente, como los otros Negociados de la Administración general del Ministerio y, a su vez, independiente como centro facultativo donde el personal sea competente e idóneo acreditando su aptitud mediante oposición³²³.

6.8.3. Archivo del Ministerio de Hacienda

6.8.3.1. Archivo General del Ministerio de Hacienda

Por *Real Decreto de 25 de junio de 1850* se manda formar un solo Archivo General del Ministerio de Hacienda constituido por los archivos de las Direcciones

³²² Posteriormente se dispone que no se libre por los Jefes de los archivos documento alguno sino en virtud de la oportuna Real cédula expedida por la Cancillería de este Ministerio.

³²³ La *Orden de 23 de noviembre de 1873* acuerda la provisión de las plazas de Jefe del Archivo y las de Oficiales primero y segundo de la Biblioteca del Ministerio de Gracia y Justicia y aprueba las reglas para los ejercicios de oposición a dichas plazas en la forma que se consignan. Para la plaza de Archivo los aspirantes deben presentar el título de Doctor en la Facultad de Filosofía y Letras y un informe de la organización del Archivo. Los ejercicios de la oposición serán dos: el primero lectura del informe razonado y respuestas a preguntas. El segundo consistirá en un examen de tres preguntas de las siguientes materias: Paleografía, Historia y organización de los Archivos de la Nación, otras Historias del Derecho, de los Consejos, etc.

de Rentas, Tesoro público y Contaduría General del Reino. El personal actual de los tres archivos queda bajo las inmediatas ordenes del Jefe único del general que ha de subsistir. Tendrán la consideración de Jefes de sección los que eran archiveros en las Direcciones generales de Rentas, Tesoro y Contaduría general y formarán una sola escala los empleados del nuevo archivo general.

La reforma más importante en este archivo se da por *Orden de 5 de agosto de 1873* que modifica las plantas del personal de la Secretaría y Archivo del Ministerio. En la exposición de motivos el legislador detalla *la insuficiencia de brazos*, muy especialmente, en el encomendado Archivo general a pesar del celo de sus empleados. Es pues, llegado el caso de corregir los males advertidos dar a dicha Secretaría general una organización adecuada al cometido que está llamada a desempeñar, para lo cual es de necesidad absoluta separar de su planta la del Archivo y dotarla con el inexcusable número de empleados.

De esta manera el Archivo del Ministerio estaría formado por un Archivero Jefe de Administración de cuarta clase, con un Jefe de Negociado de tercera clase y con tres Oficiales de tercera clase.

6.8.3.2. Archivos generales de Hacienda pública de las provincias

Por *Real Orden de 27 de septiembre de 1852* se dictan disposiciones para el arreglo de los archivos de las provincias que se hallan encomendado a las Contadurías de Hacienda. En esta misma línea, al año siguiente, por *Real Orden de 20 de abril de 1853*, se acuerdan varias disposiciones para el arreglo de los Archivos generales de Hacienda de las provincias, y se pide que los Gobernadores de las

provincias, oyendo a las Juntas de Jefes de Hacienda de las mismas, nombren Comisiones temporales para el arreglo de estos archivos. También se advierte que las oficinas provinciales pasen a los Archivos, a cargo de las Contadurías, todos los libros y documentos que conserven de años anteriores.

Por *Real Orden de 15 de enero de 1854* se aprueba la Instrucción para el régimen y gobierno de los Archivos generales de Hacienda pública de las provincias. El artículo primero establece, *la reunión de todos los documentos, libros y papeles que pertenezcan a la Hacienda pública en cada provincia, constituye su Archivo general*. Según el artículo dos, se crearán en cada Archivo cuatro secciones, a saber:

- 1- *Documentos relativos a fincas, derechos y pertenencias de todas clases del Estado y crédito público.*
- 2- *Todos los demás documentos que no pertenezcan a la primera sección y sean anteriores al año de 1824.*
- 3- *Los documentos que no pertenezcan a la primera sección y correspondan a la época de 1 de enero de 1824 a fin de junio de 1845.*
- 4- *Todos los no incluidos anteriormente y procedan desde el 1 de julio de 1845 en adelante.*

En este sentido, la *Circular de 10 de julio de 1856* dispone lo que ha de practicarse para el arreglo de los Archivos generales de la Hacienda pública. Ordena que se cumpla la Instrucción dada el 15 de enero de 1854, y para ello el Archivero debe tener las siguientes ocupaciones:

1. Dedicarse exclusivamente al arreglo del Archivo de esa provincia.

2. Que no se extraigan documentos.
3. Que se remita a la Dirección general de Contabilidad de Hacienda en el término de un mes, una nota expresa del número de documentos de las características del local y de todas las observaciones necesarias.

La expedición de certificados relativos a los papeles que tengan a su cargo corresponderá a los Archiveros; siempre que se refieran a los ramos y servicios puestos al de las Contadurías.

Por otro lado, la Intervención General de la Administración del Estado presenta una *Orden circular el 28 de agosto de 1878*, haciendo varias prevenciones a los Jefes económicos para llevar a efecto, con el mayor impulso, el arreglo de los Archivos Provinciales. En el preámbulo, el Interventor Raimundo Fernández Villaverde relata cómo en el momento de responsabilizarse de la oficina general, uno de los servicios que más le llamó la atención fue el de los Archivos de Hacienda pública, sobre todo, por el notorio abandono que presentan y que en opinión del mismo, es un efecto de la indiferencia prestada por la mayoría de los Jefes. Añade, por otra parte, que después de las acertadas disposiciones dadas como, la Instrucción de 15 de enero de 1854 y otras similares, se ha vuelto a un desorden que conviene organizar pues, no se puede ocultar los perjuicios que de tan lamentable estado se originan en el despacho de los asuntos de la Administración.

Decidido firmemente, el Interventor, en arreglar los archivos acuerda:

- Como primera medida organizar el Archivo de esa provincia dando el mayor impulso posible y destinando a dicho trabajo el personal de esa Administración.

- En segundo lugar que el Jefe no permita que en lo sucesivo no se efectúe entrega alguna de documentos del Archivo sin las formalidades previas que determine la Instrucción.
- Tercero, que tampoco se consienta que la remesa anual de los documentos de los Negociados o de otras dependencias al Archivo se verifique sin que antes se hallan enlegajado e inventariado, por los respectivos Jefes de los Negociados u oficinas que procedieran.
- Cuarto, que en atención a la reconocida conveniencia y utilidad se conserve la legislación aplicable a los diferentes ramos de la Administración pública formando la *Colección Legislativa y Boletines Oficiales del Ministerio de Hacienda* y;
- Por último, que se faciliten modelos para el control de la documentación y los inventarios que se van haciendo al año.

6.8.3.3. Incorporación de los Archivos provinciales y del Archivo general de Hacienda al Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios

Por *Real Decreto de 31 de julio de 1888* se confía la reorganización de los Archivos de Hacienda de las provincias y el servicio de los mismos al Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios. A su vez, por *otro Real Decreto de 1 de septiembre del mismo año* se incorporan a la Dirección general de Instrucción pública.

Conforme a lo establecido en estas disposiciones se aprueba, por *Real Decreto de 2 de julio de 1889*, la instrucción para el régimen y organización de los

Archivos provinciales de Hacienda. Con la nueva organización de las dependencias, el personal se dividirá en facultativo y auxiliar³²⁴. Según el artículo tercero, corresponde al Ministerio de Fomento el nombramiento y separación del personal facultativo así como la concesión de licencias. Compete al Ministerio de Hacienda, tal y como establece el artículo sexto, la superior autoridad sobre los Archiveros provinciales.

En vista de los buenos resultados que ha demostrado el Cuerpo organizando los Archivos provinciales de Hacienda se considera conveniente una transformación en el Archivo general del Ministerio de Hacienda, sobre todo, por el estado en que se encuentra la documentación, exigiendo una organización especial para establecer un Archivo central de la Hacienda española que reúna todo cuanto deba conservarse y que se halle diseminado entre varios establecimientos. De acuerdo con esta propuesta, se publica el *Real Decreto de 5 de agosto de 1893* confiando al Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios la reorganización y servicios del Archivo general del Ministerio de Hacienda, cuyo personal dependerá del Ministerio de Fomento. El personal del Cuerpo adscrito a este Archivo general será de un Jefe de seis Oficiales y cuatro Ayudantes. El personal subalterno formará parte, por ahora, de la planta de la Subsecretaría del Ministerio de Hacienda.

Sobre este Archivo, Matilla Tascón, constata que era uno de los tres o cuatro mejores de la Nación. Describe de este Archivo que, su elevado número de legajos e innumerables libros prolongaban hasta nuestros días, sin solución de continuidad, las series documentales financieras de Alcalá de Henares y Simancas. Continúa diciendo el autor que algunas de las series son de un valor inestimable como; la serie Personal

³²⁴ Consúltase PRIETO CARO, I.: *Los archivos provinciales de Hacienda, 1881-1981*. En *Las Delegaciones de Hacienda: su historia (1881-1981)*. Madrid, 1981, pp. 813-826.

que ofrece antecedentes de todos los funcionarios del siglo XIX, la de Propiedades que permite el estudio de la Desamortización civil y eclesiástica, etc³²⁵.

6.9. Archivo General de Alcalá de Henares

Se ha venido considerando que con la creación del Archivo General de la Administración en Alcalá de Henares, como continuación al Archivo General de Simancas, se estaba formando el sistema archivístico estatal. La saturación del espacio físico del Archivo de Simancas y su lejanía de la Corte fueron los motivos que determinaron la creación del Archivo General Central que fue instalado en el Palacio Arzobispal de Alcalá³²⁶.

Desde este presupuesto, en los años cincuenta, la Real Academia de la Historia muestra a la Administración la necesidad de crear un Archivo General para recoger toda la documentación que se encontraba en los organismos estatales en malas condiciones; propuesta que se lleva a cabo bajo el deseo de que este Archivo se instalara en Madrid, no sólo, por motivos históricos, sino también administrativos aunque, razones económicas hicieron que se estableciera en Alcalá de Henares.

El *Real Decreto de 17 de julio de 1858* recoge su creación en el artículo tercero diciendo:

...se establecerá además en edificio espacioso y cercano a la Corte un Archivo general central, donde se reúnan desde luego los de las cuatro

³²⁴ Consúltase PRIETO CARO, I.: *Los archivos provinciales de Hacienda, 1881-1981*. En *Las Delegaciones de Hacienda: su historia (1881-1981)*. Madrid, 1981, pp. 813-826.

³²⁵ MATILLA TASCÓN, Antonio. *Ministerio de Hacienda (Archivo Central)*. En *Guía de Archivos de Madrid*, op. cit., pp. 188-226.

³²⁶ Véase ESCUDERO DE LA PEÑA, José María. *Los Archivos de Simancas y Alcalá*. "Revista de Madrid", 1883, vol. VI, pp. 144-159, y PESCADOR DEL HOYO, M^a Carmen. *El Archivo General de la Administración*. "Boletín de la Dirección General de Archivos y Bibliotecas", 133-134, 1973, pp. 213-221.

*Ordenes militares y de San Juan de Jerusalén, en sus dos lenguas de Castilla y Aragón, los de la Inquisición, los de las Colegiatas suprimidas en virtud del último Concordato celebrado con su Santidad y cuantos se consideren útiles*³²⁷.

Por su parte, el artículo cuarto dispone:

... se remitirán al Archivo central en las épocas y con las formalidades que en el Reglamento se establezcan todos los papeles de carácter administrativos de las Secretarías del Despacho cuando el trascurso del tiempo los haga inútiles para la instrucción de los negocios.

Una vez creado el Archivo general se van a dictar medidas referentes a la organización general de estos establecimientos públicos del reino por *Real Decreto de 8 de mayo de 1859*. Según el artículo uno, los Archivos públicos que custodien documentos históricos se clasificarán en; *generales, provinciales y municipales*. Por el artículo dos, *los generales son de primera y segunda clase*. Dentro de la primera estaría integrado el *Archivo central de Alcalá*.

Por otra parte, el artículo octavo recoge la creación del cargo de Director del Archivo general central que, al ser de nueva creación, vendrá designado por el Gobierno. La persona nombrada ocupará, en la categoría de Archiveros, el grado que le corresponda según su antigüedad.

³²⁷ Estos fondos, tras la creación del Archivo Histórico Nacional en 1866, pasaron a formar parte del mismo Archivo. Igualmente fueron transferidos regularmente al Archivo Histórico Nacional los documentos recibidos de los Ministerios, una vez transcurridos los plazos reglamentarios. Sobre los fondos es interesante el estudio de SANTA MARÍA Y RAMÍREZ, C. *Archivo General Central de Alcalá de Henares (Fondos del mismo)*. "Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos", I, 1871, pp. 26-28.

Por el artículo diecinueve se establece que, la organización de todos los Archivos, la clasificación de sus documentos y formación de índices e inventarios serán uniformes en cuanto lo permita el sistema que rija³²⁸ y el artículo veinte obliga a remitir al central copia debidamente autorizada de los índices de cada Archivo.

Al mismo tiempo se iban implantando los archivos centrales de los diferentes Ministerios y de las Delegaciones de Hacienda, lo que suponía la existencia de una estructura archivística en el seno de la Administración que vuelve a reorganizarse, en el año 1866, por la creación del Archivo Histórico Nacional y del Museo Arqueológico. Así por *Real Decreto de 12 de junio de 1867* se clasifican las Bibliotecas, los Archivos y los Museos, según el artículo tres los Archivos generales, que estarán bajo la dependencia de la Dirección general de Instrucción pública, se dividirán, en dos clases: *de primera y de segunda, siendo de primera el Central de Alcalá de Henares, el Histórico....*

Por el artículo siete *no se remitirán a los Archivos generales mas papeles que aquellos que el transcurso del tiempo haya hecho innecesarios para la instrucción y despacho de los negocios corrientes, considerándose por regla general en este caso los referentes a los últimos treinta años, contados desde el día en que se efectúe la remesa.*

³²⁸ Consúltase TORRE REVELLO, José. *Archivo General Central de Alcalá de Henares. Reseña histórica y clasificación de sus fondos*. Buenos Aires: Universidad, Instituto de Investigaciones históricas, 1926.

6.9.1. Memoria anual recogida en el Anuario del Cuerpo del año 1882

Para finalizar vamos a aludir al artículo publicado, sobre este archivo, en el Anuario de 1882³²⁹. En concreto describe la Memoria elaborada por el Jefe del establecimiento a razón de una circular por la que, la Junta facultativa pedía a los responsables de los establecimientos remitir información sobre el estado del Archivo. Se estructura en nueve secciones:

- La primera sección bajo el epígrafe, *Razón y carácter de esta memoria*, detalla el estado o situación general del Archivo durante el año 1882 calificándolo como brillante, gracias a los constantes favores y protección del Gobierno.
- La sección segunda, *Fondos y trabajos Facultativos*, reconoce en este apartado que, si bien el Archivo no ha tenido aumento de sus fondos, sí que se considera que ha crecido en el orden y clasificación y, por consiguiente, en importancia, utilidad y facilidad para el servicio. Se han redactado inventarios, índices y se ha coordinado bastante documentación. Reseña los fondos que se han ido clasificando.
- La sección tercera, sobre *Personal*, destaca la necesidad de una nueva plantilla para este Archivo ya que la vigente no es suficiente para los múltiples trabajos que conlleva su organización.
- La sección cuarta de *Mejoras de carácter material*, va reflejando todo aquello que se considera que debe mejorarse, como numeración de salas, estanterías, etc.

³²⁹ Archivo general de Alcalá de Henares. "Anuario del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios", 1882, op. cit. pp. 34-50.

- La sección quinta refleja una concurrencia de los visitantes al Archivo mucho mayor que en años pasados.
- La sección sexta, sobre *Obras*, recoge las obras de restauración que necesita el edificio.
- La sección séptima *Apéndice a las Obras*.
- La sección octava *Mejoras* donde propone una serie de mejoras referidas a la organización y al servicio, tanto facultativo como administrativo, adoptando un sistema metódico y uniforme para los trabajos y las operaciones que emplea el personal facultativo: conservación, catalogación y comunicación de los documentos. Las otras mejoras que propone se refieren a la continuación y perfeccionamiento de las obras de restauración y ampliación del edificio.
- La sección novena sobre el *Museo Complutense* describe las tareas que corresponden sobre la colocación, catalogación y descripción de los objetos.

Por último señalar que este Archivo cumplió sus funciones tal y como las hemos estudiado hasta que fue destruido por un incendio en el año 1939.

6.10. Archivo Histórico Nacional

6.10.1. Antecedentes y origen del Archivo Histórico Nacional

Las reformas administrativas que venimos analizando en este trabajo han llegado a incidir directamente en el mapa de los archivos existentes en España. Sin embargo y a pesar de esto, no podemos considerar que la decisión por parte del Gobierno de crear un gran Archivo histórico Nacional es sólo consecuencia de las reformas de la Administración central sino, más bien, debemos verlo desde una

perspectiva histórica que parte del siglo XVIII³³⁰ cuando el ministro de Carlos III, Campomanes, propone reanudar el envío de remesas de papeles al Archivo General de Simancas sin llegar a trasladarse, entre otras cosas, por problemas de distancia, transporte, etc.

Posteriormente en tiempos de Carlos IV y bajo la ilegítima dominación de Bonaparte -así lo refleja la exposición de motivos del *Real Decreto de 5 de noviembre de 1847* del Ministerio de Gracia y Justicia- se intentó realizar este plan beneficioso pero las circunstancias no permitieron llevarlo a cabo, sin embargo y como sostiene, Concepción Contel sostiene que en esta disposición podemos encontrar el germen de la creación del Archivo Histórico Nacional³³¹.

En efecto, la exposición de motivos de la disposición señalada, prescribe lo siguiente: *Hija fue de aquellos esfuerzos la idea de crear un archivo general de la nación, suscitada en diversas ocasiones, limitándose en otras el propósito a que se reunieran en un solo local y bajo una misma mano todos los que existen en Madrid. Párrafo que confirma la voluntad de crear un archivo nacional insistiendo más adelante al describir: Atendida la embarazosa circunstancia de hallarse diseminados y dispersos en los enunciados archivos públicos, que ninguna relación ni enlace tienen entre sí, y en innumerables archivos particulares, una inmensidad de papeles, escrituras y documentos propios del Estado o muy conducentes para su mejor servicio, no es obra fácil ni del momento la de crear y establecer un archivo nacional donde se reúnan, cuantos datos de interés general sea posible atesorar.*

Sobre la situación de los archivos del Estado es abundante la legislación que genera el Ministerio de Gracia y Justicia reflejando la inquietud de los responsables políticos, del momento, sobre la falta de una organización fundamental de los

³³⁰ Consúltase RODRÍGUEZ DE DIEGO, José Luis. *Archivos de la Administración Central desde el s. XV al s. XX*. IRARGI, Ano II, Bergara, 1991.

papeles producidos por la Administración central y determinando que se establezcan las bases legales para una organización jerárquica de los establecimientos de los archivos del Ministerio de Gracia y Justicia.

En los contenidos de estas disposiciones, no sólo podemos ver el germen del Archivo Histórico sino, también, una preocupación por la situación caótica de los papeles recogidos por el Estado como consecuencia del gran cambio político hacendista que significaron las leyes desamortizadoras llevadas a cabo a partir de las Cortes de Cádiz y, en especial, durante el reinado de Isabel II. Esta documentación, procedente de las instituciones religiosas a las que afectaron dichas leyes, se encontraba depositada en el Ministerio de Hacienda y en las Delegaciones de este Departamento sin que sirvieran los trámites administrativos. Ante el peligro que suponía esta situación para tan valiosos documentos, la Academia de la Historia, que juega un importantísimo papel en la creación del Archivo, solicita su custodia y conservación con el propósito de organizarlos y por una *Real Orden de 18 de agosto de 1850*, siendo ministro Juan Bravo Murillo, se dispone que pase a la Academia la documentación de los Archivos de las Ordenes Monásticas³³².

Muy pronto la Academia de la Historia empieza a preocuparse por la organización y estudio de esta documentación como por los recursos económicos y humanos, y por ello, solicitan la creación de un archivo, a partir de un informe que elabora la Academia conteniendo la petición expresa de que “el Archivo continuara en Madrid porque, en el caso contrario, no se utilizaría y sucedería con él como lo que ocurrió con el Archivo de Simancas”.

³³¹ CONTEL BAREA, Concepción. Op. cit., p. 236.

³³² Para el estudio del Archivo, consúltese CRESPO NOGUEIRA, Carmen. *Los primeros cien años del Archivo Histórico Nacional (1866-1966)*. Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, Tomo LXXIII, 2, 1966 y PESET Y CÁMARA, J.M.: *Archivo Histórico Nacional*. Madrid: Historia 16, año VII, n. 74.

6.10.2. La creación del Archivo Histórico Nacional

El estudio del Archivo Histórico Nacional podemos describirlo desde tres etapas que vienen marcadas por las tres ubicaciones que ha ido teniendo a lo largo de su vida, una primera; la de su creación localizado en la propia Real Academia de la Historia una segunda; cuando es trasladado al Palacio de Biblioteca en Recoletos, y una tercera y definitiva; hasta el momento, la ubicación en la calle de Serrano.

1- La primera etapa o de creación enlaza con lo que comentábamos anteriormente sobre el informe emitido por la Academia de la Historia que fue correspondido, por parte de la Reina Isabel II, con el *Real Decreto de 28 de marzo de 1866* creando el Archivo Histórico Nacional. Este Real Decreto que organiza el Archivo Histórico Nacional estipula en el artículo uno:

Se declara Archivo público general del Reino, bajo la denominación de Archivo histórico Nacional, al reunido con los documentos procedentes de las suprimidas corporaciones monásticas por la Real Academia de la Historia en esta Corte, donde en adelante habrá de permanecer.

Por el artículo dos se confirma *que el personal que actualmente sirve este archivo ingresará en el Cuerpo facultativo de Archiveros-Bibliotecarios, en la categoría, grado y antigüedad que corresponda.* El artículo tercero dispone que *al frente del Archivo habrá un Comisario Regio que será cargo honorífico y gratuito. Se nombrará por el Gobierno siendo un individuo de la Real Academia de la Historia.* Este cargo recayó en la persona de don Tomás Muñoz y Romero, el 8 de abril del mismo año.

Por último, el artículo cuarto establece que *serán trasladados al Archivo todos los documentos procedentes de las suprimidas comunidades monásticas que existan en las Administraciones de Hacienda pública y no fueren indispensables para acreditar derechos de propiedad.*

Por tanto, el Archivo, de acuerdo con este Decreto citado, nace con el fin de poner a disposición de los investigadores la documentación conservada en la Academia. De ello da cuenta la exposición de motivos al decir: *Bajo la inmediata dependencia de la Dirección general de Instrucción pública, se le dé la consideración que merece, declarándole público, conservándole en esta Corte para que pueda ser más útil a la Academia, a la vez que a los aficionados a los estudios históricos.*

Una vez creado el Archivo se procedió por *Real Decreto de 12 de junio de 1867* a clasificarse los Archivos generales. En este sentido, el artículo tercero dispone que, *los Archivos generales se dividirán en dos clases. Serán de primera; el Central de Alcalá de Henares, el Histórico Nacional de Madrid ...*

Por lo que se refiere a los fondos del Archivo tuvieron como núcleo primitivo el numeroso caudal de pergaminos, libros y papeles, procedentes de la desamortización eclesiástica reunidos en el edificio del Nuevo Rezado que después fueron aumentando con los incautados por *Real Decreto de 1 de enero de 1869* que disponía que todos los Archivos y Bibliotecas que estuviesen a cargo de las catedrales, monasterios exceptuando los indispensables para el culto.

A su vez, la *Real Orden de 25 de enero de 1872* recoge que todos los documentos, libros y demás objetos que componen el Archivo de la casa conventual de la Orden de Santiago en Uclés se destinen al Histórico Nacional. Sin embargo, el

artículo siete establece que *los códices, manuscritos e impresos que se trasladen a esta Corte se depositarán en le Archivo Histórico para en su día resolver su ulterior destino.*

En el año 1882, el Anuario del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios nos da noticia del estado del archivo³³³, y muestra los trabajos tan relevantes que vienen haciendo, desde hace unos años, el personal del Archivo.

Nos describe la relación de los trabajos-estudios correspondientes a cada uno de los facultativos; estudios de caudal científico, que constituyen el estado que hoy tiene el Archivo. Constata el buen servicio público que presta y, por ultimo, incluye un Apéndice con los Códices y manuscritos existentes en este Archivo.

2-La segunda etapa para el Archivo Histórico Nacional, viene dada por la *Real Orden de 5 de marzo de 1894* que dispone su traslado al Palacio de Biblioteca y Museos, hoy Biblioteca Nacional. El traslado de papeles se inicia el 26 de julio de 1896. Las secciones de las que consta el archivo son: Clero secular y regular, Ordenes Militares, Estado, Juros, Universidades y Colegios, Sigilografía, Inquisición, Consejos Suprimidos, Códices y cartularios, Archivo de Ultramar y Diversos.

3- Por último, la tercera etapa que se inicia en el siglo XIX y se corresponde con el traslado al actual edificio de la calle Serrano.

³³³ *Archivo Histórico Nacional. Anuario de 1882, op. cit., pp. 21-33.*

6.11. Organización Archivística

Llegados a este punto, vamos a subrayar algunas cuestiones de interés en la evolución que ha tenido el proceso organizativo de los archivos españoles. En el ámbito archivístico se considera como punto de referencia significativo la publicación de la *Colección de los Reales Decretos, Ordenes y Reglamentos expedidos por el Ministerio de Gracia y Justicia*³³⁴ en la década de los años cuarenta, del presente siglo, orientada a impulsar una estructura centralizada de los Archivos.

Es indudable la importancia que tiene esta legislación, así lo manifestamos y, a este respecto Concepción Contel lo resalta de la siguiente manera: *me parece de suma importancia esta legislación, porque es el resultado de una preocupación y una dedicación de los responsables políticos del gobierno por los Archivos en ese momento, en una centuria en la que sobresalen los estudios históricos y por lo tanto es indispensable el establecimiento de normas para la organización de los documentos en sus depósitos, como fuentes únicas para estos trabajos*³³⁵.

Sin embargo, con ser un impulso importante, no parece que diera todos los resultados esperados, a juzgar por las palabras pronunciadas por D. Vicente Vignau en su discurso de ingreso en la Real Academia de la Historia, *todo resultó completamente ineficaz, así como el Reglamento para su ejecución, dictado el 24 de mayo de 1849*³³⁶.

³³⁴ *Colección de los Reales Decretos, Ordenes y Reglamentos expedidos por el Ministerio de Gracia y Justicia para la creación y Organización de la Dirección General de Archivos, Junta Superior Consultiva y de las demás subalternas establecidas en la Península y Ultramar*. Madrid: Imprenta que fue de Operarios, 1849.

³³⁵ CONTEL BAREA, M. Concepción. *La creación del Archivo Histórico Nacional*. Op. cit., 235-236

³³⁶ VIGNAU Y BALLESTER, V. *El Archivo Histórico Nacional*. Discursos leídos ante la Real Academia de la Historia en la recepción pública del Sr.- el día 19 de junio de 1898. Madrid: Tip. De la viuda e hijos de Tello, 1898. Citado por CONTEL BAREA, Concepción, op. cit., p. 236.

Lo relevante de la disposición es apreciado por Concepción Contel, al decir, *la esencia y la intención de los puntos establecidos son perfectamente válidos hoy, [...] el texto de las disposiciones podría servir de pauta, hoy, para regular el funcionamiento de los archivos estatales, naturalmente con una adecuación a distintos aspectos.* Por otra parte, añade la autora, *en ella podemos encontrar el germen de la creación del Archivo Histórico Nacional, aunque la fecha extrema más moderna de sus textos sea el año 1849, ya que con estas disposiciones se va iniciar una política nacional de archivos, que irá exigiendo la creación de los Centros que deben asumir las funciones y competencias dadas a los archivos y a sus responsables*³³⁷.

El punto de partida de los textos del Ministerio de Gracia y Justicia, a los que nos estamos refiriendo, hay que ponerlo en la *Real Orden de 20 de abril de 1844* que abre los Archivos a la investigación. Con posterioridad a esta disposición el *Real Decreto de 5 de noviembre de 1847* crea una Junta superior directiva de archivos dependientes del Ministerio de Gracia y Justicia y pone de relieve, en la exposición de motivos, la situación peligrosa de los Archivos, a pesar de la riqueza de sus fondos, por ello proponiendo la necesidad de empezar a preocuparse e intentar una organización común, un sistema general con reglas uniformes y con propósitos de continuidad.

Por este motivo se crea una Junta superior directiva de los Archivos dependientes del Ministerio, también se forman Juntas subalternas en las cabezas de partido judicial, de provincia y de distrito y todas aquellas que la Junta proponga como necesarias estando subordinadas a la superior. El número de individuos de las Juntas será indefinido y la presidencia recaerá en el Ministro de Gracia y Justicia. La Junta superior se dedicará, tal y como señala el artículo cinco, al reconocimiento y

³³⁷ *Ibidem*, p. 236.

arreglo de los archivos sometidos a su dirección, exponiendo el resultado de sus trabajos y proponiendo la organización y mejoras que creyere mas convenientes para conseguir los fines indicados.

Para la organización de esta Junta se promulga una *Real Orden el 6 de noviembre de 1847* estableciendo reglas para la organización de la Junta superior directiva de los archivos. La Junta se dividirá en las secciones que estime necesarias a fin de dar mayor facilidad y expedición a los trabajos. Propondrá la aprobación a S. M. de las Juntas de partido y de provincia que fuesen necesarias y organizadas éstas, se dedicará a conocer el estado de los archivos del notariado y de la fé pública, los judiciales del Reino, y el particular de la Secretaría de Gracia y Justicia como todos aquellos que dependan de este Ministerio. El artículo seis de la disposición regula los puntos que ha de abarcar los trabajos competentes de la Junta, al menos:

- 1- *Arreglo y organización de los Archivos anteriormente mencionados.*
- 2- *Clasificación general de todos los documentos que encierran dichos archivos.*
- 3- *Planta y presupuesto de este Archivo general.*
- 4- *Dictamen o juicio razonado acerca de las colecciones y documentos.*

La Junta informará sobre la pérdida, sustracción o extravío de documentos que notare en todos los archivos, a fin de que el Gobierno adopte las medidas eficaces para su reclamación.

6.11.1. La organización de los Archivos a partir de la Ley de Instrucción Pública de 1857

Diez años después de las propuestas indicadas anteriormente, la publicación de la *Ley de Instrucción Pública de 1857* determina la organización de los Archivos y su adscripción al Ministerio de Fomento y por ello disposiciones posteriores como el *Real Decreto de 17 de julio de 1858* organizan de manera definitiva los Archivos y Bibliotecas; primero, porque la experiencia ha demostrado la equivocada organización dada desde sus inicios y segundo, porque la riqueza de sus fondos requiere unas tareas cualificadas para evitar el mal que acarrea el abandono.

Con la publicación de este Decreto y la creación del Archivo General de Alcalá por el artículo tres, podríamos considerar que el sistema de archivos ya se estaba configurando.

En efecto, se estaba sistematizando una estructura de Archivos centralizada en el Ministerio de Fomento bajo la dependencia de la Dirección general de Instrucción pública; una organización común con una clasificación de los archivos en generales, provinciales y municipales donde la pieza clave del sistema estaría en la creación del Archivo General de Alcalá fundado para reunir toda la documentación de la Administración Pública producida por los archivos de las Secretarías. Para el gobierno, control y gestión del sistema se crea una Junta formada por miembros profesionales del ámbito.

Como podemos observar, en esta disposición, los archivos provinciales figuran entre las tres clases en las que se dividen los archivos públicos, junto con los

generales y los municipales³³⁸. Por ello, Luis Miguel de la Cruz Herranz considera que en este siglo se producen, igualmente, los primeros intentos de crear una red de archivos provinciales. Hace constar un proyecto que data de 1852 firmado por Eugenio Ochoa, secretario general de la sección 4ª de Instrucción pública y cuyo resultado final no parece estar muy claro. Una interpretación rápida y sin fundamentar es la que nos dan Olga Gallego y Pedro López Gómez³³⁹ al considerar que el proyecto no se llevó a cabo, sin embargo, Luis Miguel de la Cruz, que localizó y analizó el proyecto, opina de manera razonada que no ha encontrado ningún indicio posterior que confirme su puesta en marcha³⁴⁰.

Todos estos preceptos llevaron al legislador a desarrollar, por *Real Decreto de 8 de mayo de 1859*, las medidas referentes a la organización de los Archivos y Bibliotecas Públicas; el decreto regula básicamente tres puntos:

- 1- Clasificación de Archivos y Bibliotecas.
- 2- Constitución del Cuerpo facultativo.
- 3- Organización general de los establecimientos.

De nuevo, la clasificación de los archivos y la estructura archivística de la Administración central viene a modificarse con la creación del Archivo Histórico

³³⁸ Véase ESCUDERO DE LA PEÑA, José María. *Los archivos provinciales*. “Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos”. n.º. 15 de 30 de septiembre de 1871, pp. 225-229.

³³⁹ GALLEGO DOMÍNGUEZ, Olga y LÓPEZ GÓMEZ, Pedro. *Los archivos históricos provinciales en su cincuentenario*. En Boletín de la ANABAD, XXXII, n.º 1-2, 1982, p. 5.

³⁴⁰ CRUZ HERRANZ, Luis Miguel de la. *Panorama de los archivos durante el siglo XIX y primer tercio del siglo XX*. En: GENERELO, Juan José y MORENO LÓPEZ, Ángeles, (coordinadores). *Historia de los Archivos y de la Archivística en España*. Valladolid: Secretariado de Publicaciones e Intercambio Científico, Universidad de Valladolid, 1998, pp. 153-155. Nos informa de la localización del documento conservado en el Archivo Central del Ministerio de Educación y Ciencia, legajo 6558-7, y describe el expediente en todo lo relacionado con los archivos provinciales. El documento recoge la urgencia de una organización uniforme y en armonía con las mejoras que se han introducido en

Nacional por *Real Decreto de 28 de marzo de 1866*. Al incorporarse el Archivo Histórico Nacional, al sistema, se da una nueva clasificación y organización de los Archivos. El artículo tres reclasifica los Archivos cerrando la cadena archivística que en realidad comienza con la implantación de los Archivos Ministeriales.

Una última reforma que trasciende en dar una organización nueva a la estructura señalada viene determinada por el *Real Decreto de 12 de junio de 1867* que crea el Museo Arqueológico y que supone un cambio en la denominación y estructura del Cuerpo en tres secciones añadir la nueva sección de Anticuarios.

En este sentido, hemos observado cómo en la década de los años cincuenta y sesenta van surgiendo distintos archivos y cómo se va creando un sistema u organización archivística perfectamente profesionalizada, no sólo por la creación del Cuerpo facultativo de Archiveros Bibliotecarios y Anticuarios, al que terminan encomendándose todos los archivos de la Administración, sino, más bien, por la implantación de una Escuela Superior de Diplomática donde se enseñan las disciplinas necesarias para llevar a cabo las tareas propias para el funcionamiento de estas Instituciones.

Para finalizar, solamente reseñaremos algunos Archivos de Instituciones que se crearon en este siglo y que no desarrollamos por considerar que muchos ya han desaparecido, o bien por la escasa documentación conservada.

6.12. Gobiernos civiles

Tienen su origen en la Constitución de Cádiz de 1812 y nacen como autoridad de la confianza del Gobierno en cada una de las provincias que aparece dividido el territorio nacional. En 1833 se les califica como subdelegaciones de Fomento y en 1834 como Gobiernos civiles. La documentación, en el caso del Gobierno civil de Madrid, pereció en su totalidad por un traslado.

6.13. Diputaciones Provinciales

Las Diputaciones provinciales aparecen por primera vez en la Constitución de Cádiz de 1812. Los acontecimientos políticos de 1814 y los de 1823 produjeron la paralización de estas Instituciones administrativas que reaparecen en el año 1837 y que posteriormente se ocupan las Constituciones.

En el caso de Madrid, se conserva la documentación recogida del Hospital de Antón Martín, Colegio de los Niños Desamparados, sobre la Plaza de Toros con expedientes de arrendamiento, etc. En la actualidad está transferido a la Comunidad Autónoma de Madrid.

6.14. Consejo de Estado

El Consejo de Estado, cuerpo supremo consultivo del Gobierno en los asuntos de gobernación y administración, encuentra sus precedentes en el Consejo Real o de Castilla. La Constitución de 1812 creó el Consejo de Estado pero hasta 1845 no se llegó a organizar definitivamente bajo el nombre de Consejo Real que, en 1858, cambia por el actual Consejo de Estado siendo reorganizado por la ley de 1860.

El Archivo se conserva bastante completo ya que sus fondos arrancan del año 1845, fecha en que toma forma definitiva este organismo. Mucha documentación ha sido transferida a los Archivos Históricos de Simancas y de Madrid.

6.15. Universidad Central

El Archivo de la Universidad Central, hoy Archivo de la Universidad Complutense de Madrid, tiene sus fondos repartidos en tres ubicaciones distintas: El Archivo Histórico Nacional, el Archivo Central universitario y los Archivos de los Centros y Servicios de la Universidad.

Dentro del Archivo Central, en la sección de documentación histórica, encontramos la documentación universitaria del siglo XIX, en concreto, a partir de 1836. También encontramos expedientes académicos de alumnos de las distintas Facultades y Escuelas, libros de Registro, de actas, etc.

6.16. Presidencia del Gobierno

En el Estatuto Real del año 1834, inspirado por Martínez de la Rosa, es cuando, por primera vez, se emplea la denominación de *ministros* para designar a los encargados que están al frente de las Secretarías de Estado que tiene la Administración central del reino. La reunión de todos estos ministros forman el Consejo de Ministros con la finalidad de coordinar las distintas carteras. Asimismo, la primera vez que aparece perfectamente definida, con su significación moderna, la Presidencia del Consejo de Ministros va a ser el 9 de marzo de 1820 con las funciones siguientes; nombrar ministros, presidir sus reuniones, dirigir la alta política de la Nación, e incluso nombramientos de los más altos funcionarios de la Administración central, provincial, etc.

El Archivo de la Presidencia del Gobierno responde a estas atribuciones señaladas. La documentación más antigua esta formada por las Actas del Consejo de Ministros del año 1834. A pesar de esta antigüedad, es uno de los archivos modernos más interesantes, el de más valor, por la índole especial de la institución que representa³⁴¹.

Se encuentra organizado, de acuerdo con los fondos que contiene, en dos Secciones, referente la una a los altos funcionarios afectos al gobierno general de la Nación, y la otra, al régimen interior del propio departamento. Por ejemplo, en la primera, encontramos expedientes personales de Ministros, personales de Consejeros del Consejo de Estado, de Gobernadores provinciales, de Magistrados del

Tribunal Supremo, de Magistrados del Tribunal de lo Contencioso, de los Cuerpos Colegisladores, etc. También encontramos, Actas del Consejo de Ministros, comunicaciones de la Casa Real, Grandezas y Títulos, etc.

Las aportaciones que recoge este capítulo vienen a justificar la manifestación del desarrollo y ejecución de las políticas informativas institucionalizándose a través de los establecimientos, archivos y bibliotecas, que van a permanecer y ser testigos de la historia. También nos hemos referido a la organización bibliotecaria y archivística entendida, no como organización interna de las institucionales documentales, sino de manera principal, como articulación de ésta política que se fue gestando al compás de los movimientos, cambios y necesidades sociales.

³⁴¹ Así lo considera SÁNCHEZ BELDA, Luis. *Presidencia del Gobierno*. En *Guía de los Archivos de Madrid*, op. cit., p. 14.

CAPÍTULO VII

Conclusiones

CONCLUSIONES

- 1) Los articulados de las Constituciones del siglo XIX no recogen referencias concretas sobre la materia que nos ocupa. Destacamos la Constitución de 1812 por ser la única que regula en el Título IX *De la Instrucción pública* la creación, por el artículo 369, de la Dirección general de estudios que fue desarrollada por el Reglamento aprobado por *Decreto de 29 de junio de 1821* el cual establece la competencia de cuidar de la conservación y aumento de las bibliotecas del Reino.
- 2) La política documental de la Administración española a lo largo del siglo XIX reviste dos direcciones: la encaminada a dotar a sus organismos de estructuras vinculadas a la materia de archivos y bibliotecas y otra dedicada a dotar a la sociedad española de estas unidades en los niveles de la enseñanza, de la ciencia y de la cultura popular.
- 3) En el primero de los ámbitos se observa un crecimiento progresivo de archivos y bibliotecas afectos a organismos del Estado como se demuestra en la figura del Consejo de Estado, recogido en la Constitución de 1812, y cuya planta incluye entre 8 y 10 oficiales y un Archivero general. Asimismo, el organigrama que adoptan las distintas Secretarías de Estado desde 1813 incluyen las figuras del Archivero y Oficiales de Archivo aumentando en número en los años sucesivos. También se van estableciendo secciones administrativas de archivos y bibliotecas como se contempla en el *Real Decreto de 16 de febrero de 1872* para el Ministerio de Fomento con las secciones de Bibliotecas y Archivos, mas tarde éstas pasarán a depender del Secretario General, del Negociado Central hasta que, por último, se transfieran a la Dirección General de Instrucción pública y a cargo del Cuerpo Facultativo de Archiveros Bibliotecarios y Anticuarios

dependiente de la misma Dirección general. Por *Real Decreto de 12 de septiembre de 1881* se crean Bibliotecas especializadas dentro del Ministerio de Fomento en la Dirección General de Instrucción pública y Dirección general de Obras públicas. A su vez, en esta línea, el *Real Decreto de 30 de octubre de 1852* dicta reglas para el Ministerio de Gracia y Justicia y separa el ramo de archivos para formar una sección independiente de las demás, constituyendo el ramo especial de Archivos; los empleados de la Secretaría del Despacho y sus agregados y los de los generales de Aragón, Galicia, Simancas y Valencia. Sin duda, todo ello representa una verdadera, aunque incipiente política documental en el seno de la propia Administración del Estado.

- 4) Los poderes públicos, paralelamente y a través de los órganos competentes, fomentan la creación de archivos y bibliotecas al servicio del bien común. Los hitos más importantes de carácter legislativo están representados por el *Real Decreto de 5 de noviembre de 1832* que manda establecer la Secretaría de Estado y del Despacho del Fomento General del Reino con las competencias relativas al establecimiento de corporaciones culturales, la *Real Orden de 20 de marzo de 1834* fijando las facultades de los Subdelegados de Fomento con la competencia de cuidar las bibliotecas públicas. Procede también poner de relieve de gran importancia a este respecto: La *Ley de Instrucción pública de 9 de septiembre de 1857* que, a mayor abundamiento, fomenta la creación de dichos establecimientos y el *Real Decreto de 29 de diciembre de 1876* que dispone la creación de bibliotecas populares.
- 5) El primer órgano de la Administración que representa más genuinamente la responsabilidad de la materia documental es la Dirección General de Estudios instaurada con la Constitución de 1812 y el Ministerio de Fomento creado por *Real Decreto de 5 de noviembre de 1832* al que se le incorporará con posterioridad la Dirección general de Instrucción pública. También hay que

destacar la Dirección general de los Archivos de España y Ultramar dependiente del Ministerio de Gracia y Justicia regulado por *Real Orden de 1 de diciembre de 1848* ocupándose de los Archivos puestos a disposición de los estudiosos.

- 6) La Escuela Superior de Diplomática, establecida por *Real Decreto de 7 de octubre de 1856*, supone la institucionalización de la enseñanza de los conocimientos necesarios para el desempeño de los puestos de Jefes y Oficiales de los Archivos y Bibliotecas públicos. En consecuencia, la Escuela es, en puridad, el primer centro de formación de especialistas en documentación que se crea en España.
- 7) La formación archivística y bibliotecaria de la Escuela Superior de Diplomática se basaba en una serie de asignaturas cuya denominación fue modificándose levemente en función de los diversos planes de estudio pero, que, esencialmente, fueron las siguientes:
 - *Clasificación arreglo de Archivos y Bibliotecas* conteniendo conocimientos de los métodos empleados y de la parte histórica, administrativa y reglamentaria referente a Archivos y Bibliotecas. Ejercicios prácticos.
 - Bibliografía clasificación y arreglo de Archivos y Bibliotecas se impartía desde Historia de la Imprenta, nociones generales de bibliografía teórica y práctica de la clasificación y arreglo de Archivos y Bibliotecas, métodos y organización de los establecimientos de ambos ramos.
 - *Diplomática y ordenación de Archivos y Ejercicios prácticos de clasificación, catalogación y arreglo de Archivos, Bibliotecas y Museos.*

- 8) La *Real Orden de 30 de julio de 1897* aprueba cuadros de asignaturas de la carrera para sus tres secciones, a saber, Archivos, Bibliotecas y Paleografía. Para la sección de Archivos y Bibliotecas se repiten las asignaturas excepto la de *Diplomática y ordenación de Archivos* para la sección de Archivos. La Sección de Bibliotecas incluía como específicas: *Bibliología*, *Archivonomía y ejercicios prácticos* y *Ordenación de Bibliotecas y ejercicios prácticos de Bibliografía*. *Bibliología y ordenación de Bibliotecas*.
- 9) La formación bibliográfica de los titulados de la Escuela cobró un carácter especial a partir del Plan de estudios de 1868. Efectivamente, la asignatura *Bibliografía*, que había nacido como apéndice de la *Clasificación y arreglo de Archivos y Bibliotecas*, se convierte en fundamental hasta 1875. Las asignaturas dedicadas a la misma se denominarán *Bibliografía e Historia Literaria*, *Historia literaria en sus relaciones con la Bibliografía*, y *Bibliología y ordenación de Bibliotecas*.
- 10) Los estudios paleográficos comienzan a partir de la Cátedra de Paleografía instaurada por la Sociedad Económica Matritense en 1839 y se añaden a la Escuela Superior de Diplomática para completar la formación y el conocimiento necesario para el desempeño de las tareas propias del archivero y bibliotecario. Estos estudios proporcionaban aptitud pericial para examinar documentos y revisar letras antiguas por medio de la asignatura *Paleografía general y crítica* que, además, incluía la enseñanza de la historia de la escritura y las características de los documentos antiguos y modernos.
- 11) La *Ley de Instrucción pública de 9 de septiembre de 1857* representa, en relación con la política archivística y bibliotecaria, las siguientes aportaciones: 1) Los archivos se adscriben al Ministerio de Fomento para depender, inmediatamente

después, de la Dirección general de Instrucción pública que dicta reglas convenientes para la organización del personal de los Archivos y Bibliotecas.- 2) Propone la creación del Cuerpo Facultativo de Archiveros y Bibliotecarios.- 3) La implantación en la enseñanza pública de las disciplinas documentarias desde la publicación del *Reglamento general de Instrucción pública de 29 de junio de 1821* que ya contempla la cátedra de Bibliografía para la asignatura de *Historia literaria y Bibliografía*. En los planes de estudio de las carreras de Medicina y Farmacia se encuentran las asignaturas de *Bibliografía, historia y literatura de aplicación a las ciencias médicas* que van cambiando de denominación en posteriores planes de estudio aunque los contenidos no varían. A su vez, la carrera de Teología con la *Bibliografía Sagrada*; la de Filosofía en la sección de Literatura con *Arqueología, numismática y paleografía*; la de Notariado con *Paleografía*; y la de Derecho con *Literatura española y nociones de Bibliografía y Literatura jurídicas de España*, que también van cambiando de denominación a lo largo del siglo, en algunos casos existen períodos que desaparecen. Lo que podemos observar en los planes de estudio es que, dentro del grado de doctor, se exige el estudio de estas disciplinas documentarias con carácter permanente.

- 12) La creación del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios por *Decreto de 17 de julio de 1858* que pasó a denominarse por *Real Decreto de 12 de junio de 1867* Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, y que hoy se conoce como de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, supone un hito de singular importancia –que llega a nuestros días– por cuanto significó la profesionalización de un grupo de profesionales que venía a reconocer el trabajo y al que, de forma paulatina, se fueron incorporando las instituciones documentales. La Junta Consultiva de Archivos, Bibliotecas y Museos que nació en el año 1858 bajo la denominación de Junta directiva de Archivos y Bibliotecas es regulada por *Real Decreto de 12 de junio de 1867*, contribuyendo a cimentar sólidamente la estabilidad de los miembros que componen el Cuerpo y ejerciendo atribuciones dirigidas al progreso de los Archivos y Bibliotecas desde el punto de

vista oficial. En el año 1875 se reorganiza bajo la denominación de Junta facultativa de Archivos, Bibliotecas y Museos.

- 13) El espíritu solidario de los miembros del Cuerpo y su proyección corporativista se manifiesta de modo palpable en 1883 con la fundación de la Sociedad de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios entendida como un gesto de unión y profesionalismo bibliotecario y archivístico en el que se fundía estos profesionales y el profesorado de la Escuela Superior de Diplomática. Era su objetivo cultivar el estudio aplicado a los Archivos, Bibliotecas y Museos promoviendo intereses generales del Cuerpo.
- 14) La creación de la Biblioteca de Cortes tiene su causa remota en la Constitución de Cádiz por la necesidad que tenían los Diputados de consultar la documentación precisa para su tarea legislativa. Esta biblioteca, dirigida por Bartolomé José Gallardo, se concibe como cobijo de grandes tesoros bibliográficos nacionales, y en 1837 fue considerada como Biblioteca Nacional. La Biblioteca del Congreso se formó a partir de la supresión de la Biblioteca de Cortes. La Biblioteca del Senado se debe al nacimiento del bicameralismo con la Constitución de 1837. En la constitución de la misma se unen hechos como la supresión de la Biblioteca de Cortes y la incorporación de la Biblioteca de D. Carlos María Isidro de Borbón.
- 15) El origen de las Bibliotecas públicas viene ligado a circunstancias relevantes al desarrollo político, social y cultural del siglo. Aunque la idea de su creación podemos remontarla al Proyecto del Reglamento nacional de Bibliotecas provinciales de 1813, la verdadera medida que contribuye al incremento es la Desamortización de Mendizabal en el año 1835. La ley de Instrucción pública trata de estas Bibliotecas y el ministro Claudio Moyano proyecta iniciar, con esta disposición, una organización bibliotecaria que, posteriormente, fue desarrollada en el *Decreto de 17 de julio de 1858* determinando la relación de las bibliotecas públicas.

- 16) La creación de las bibliotecas populares cabe datarla alrededor de la Revolución de 1868 al producirse un cambio político y cultural; importante vínculo al desarrollo de la educación popular, lo que desencadenará en el fomento e implantación, por parte del Ministro de Fomento Ruiz Zorrilla, de las mismas como centros donde se divulguen las ciencias o artes dando a conocer las riquezas literarias e históricas. Estas bibliotecas surgen, en suma, como extensión y mejora de la enseñanza para combatir la ignorancia popular aunque, frecuentemente, se han considerado como un proyecto más político que cultural.
- 17) La Real Librería pública de Madrid se transformó en Biblioteca Nacional mediante el *Decreto de 25 de noviembre de 1836* a fin de que los establecimientos literarios estuviesen bajo la dirección y gobierno del Ministerio de la Gobernación. El Reglamento de la Biblioteca Nacional, aprobado por Real Decreto de 7 de enero de 1857, la reconocía como Archivo público en cuanto a asegurar los derechos de los autores o editores de obras impresas en España y sus posesiones ultramarinas. Significó, además, la cabecera de la organización bibliotecaria característica que continúa en nuestro tiempo.
- 18) La creación del Archivo General de la Administración, por *Real Decreto de 17 de julio de 1858*, y la implantación de los archivos centrales de los Ministerios contribuyeron a configurar el sistema archivístico español y, en suma, el sistema de archivos ministeriales con objeto de poner la documentación al servicio del ciudadano.
- 19) El Archivo Histórico Nacional fundado por *Real Decreto de 28 de marzo de 1866* modifica la estructura, clasificación y organización archivística diseñada hasta ese momento, e implanta el sistema archivístico vigente en la actualidad. La iniciativa se remonta a las disposiciones legislativas publicadas por el Ministerio de Gracia y Justicia en el año 1847 y el impulso hay que reconducirlo a la obra de la Academia de la Historia que veló por la conservación de los fondos desamortizados.

20) El eje central de la política documental en el siglo XIX encaminada a la sociedad se basaba, fundamentalmente, en dos medidas tomadas por el gobierno: una primera el fomento de la lectura popular, y otra segunda en la apertura de los archivos a los ciudadanos. Sobre ambos principios emerge la creación de instituciones documentales y la articulación de las políticas que condujeron a la creación de la red bibliotecaria y archivística en el ámbito nacional con la finalidad de difundir la cultura.

APÉNDICE I

Fuentes

1. Apéndice I

1.1. Fuentes inéditas

Archivo histórico de la Universidad Complutense de Madrid

Sección Escuela de Diplomática

- Legajos 33/8 a 33/10

Contienen los expedientes de concursos a plazas de cátedras y auxiliares de la Escuela. El expediente correspondiente a la provisión de cátedras de la Escuela incluye la documentación sobre la publicación, enviada por la Dirección general de Instrucción pública, en la Gaceta de Madrid con las bases de la convocatoria, condiciones que han de reunir los opositores y documentación sobre la tramitación de la oposición.

- Legajo 33/20

Se conservan los expedientes de convocatorias para las plazas de Aspirantes al Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios de los años 1881 y 1885. Para la convocatoria de 1885 la documentación que contiene refleja el procedimiento a seguir en la oposición, así como el cuestionario de *Bibliografía e Historia Literaria* formado por 100 temas que comprende materias relativas al estudio de los Filósofos como Platón, Aristóteles, entre otros, también sobre Bibliotecas como la Nacional, la del Escorial; sobre Historia de las distintas épocas, etc.

- Legajo 33/63

Expediente tramitado entre el Rectorado y la Escuela Superior de

Diplomática, que recoge el procedimiento para la aprobación de programas de las asignaturas. Los programas se tramitaban entre el Rectorado y la Escuela eran aprobados, previamente, por la Junta de Profesores de la Escuela, por ello, el expediente refleja los pasos procedimentales desde el inicio de cada curso académico. En este sentido, mediante oficio de remisión dirigido al Sr. Rector se adjuntaban los programas con el anuncio de la matrícula de la Escuela para fijar en el tablón de Edictos de la Universidad, tal y como era lo acostumbrado. También remitía los requisitos para ingresar y los cuadros de distribución de las asignaturas con la asignación de profesores, días, horas y locales donde se iba a impartir la enseñanza al igual que todo lo necesario para regir en la Escuela en el curso académico.

- Legajo 33/88

Expediente sobre el proceso de elaboración de los *Anuarios del Cuerpo facultativo* iniciado a petición de la Junta facultativa sobre el estado de sus centros. Incluye un oficio de la Secretaría de la Junta facultativa de Archivos, Bibliotecas y Museos remitiendo, en este caso, al Bibliotecario de la Escuela de Diplomática, las nuevas bases acordadas, por dicha Junta, para la publicación del Anuario del Cuerpo de 1882.

- Legajo 34/12

Expediente sobre el establecimiento provisional de la Escuela de Diplomática en la Real Academia de la Historia.

- Legajo 34/42

Expediente sobre la integración de la Cátedra de Paleografía en la Escuela de Diplomática una vez que se había transferido, al Ministerio de Fomento, el Colegio de Sordomudos y las Cátedras de Paleografía.

- Legajo 35/150

Oficio del Director general de Instrucción pública por el que solicita una breve reseña de la Escuela a fin de que figure en la Guía del Forastero. La respuesta a este oficio la hemos encontrado en el Archivo de la Villa de Madrid en la *Guía del Forastero para el año 1868*. Madrid: 1868, Imp. Cristóbal Rodríguez, donde aparece publicada una reseña sobre la Escuela de Diplomática bajo la dirección de Pedro Felipe Monlau, y el Secretario, Manuel Olivera.

- Legajo 36/91

Contiene el oficio solicitando la Memoria de la Escuela desde 1 de enero de 1883 a 31 de diciembre del mismo año para incluirla en el Anuario del Cuerpo que no llegó a publicarse.

- Legajo 38/98

Conserva los certificados de aptitud bajo el título profesional de Archivero, Bibliotecario y Arqueólogo tal y como establece el *Real Decreto de 12 de marzo de 1897* que reorganiza los estudios de la Escuela Superior de Diplomática y dispone que el título profesional de la carrera se denomine en adelante de Archivero, Bibliotecario y Arqueólogo.

- Caja 38

Contiene expedientes relativos al título de aptitud de revisor de letra antigua e incluye un informe del Director de la Escuela Superior de Diplomática elevado al Ministro de Fomento asesorando sobre la solicitud de los Archiveros-Bibliotecarios donde piden que se les declare legalmente autorizados para certificar sobre las letras antiguas y sospechosas.

- Legajo 38/111

Expediente relativo a la apertura del curso académico 1870-1871. Contiene la documentación generada entre el Rectorado y la Escuela de Diplomática en torno a este asunto, es decir, oficios de remisión de programas, anuncio de la Gaceta con la convocatoria de comienzo de curso, apertura de matrícula, etc.

- Legajo 42/186

Corresponde al expediente de procedimiento de las primeras oposiciones al Cuerpo Facultativo de Archiveros Bibliotecarios y Anticuarios de 1881. Los documentos que contiene son los siguientes:

- Borrador del reglamento de oposición para las plazas de ingreso al Cuerpo.
- Oficio del Director general de Instrucción pública firmado por el claustro de profesores de la Escuela Superior de Diplomática aprobando el adjunto Reglamento con fecha 18 de mayo de 1881.
- Remisión de la convocatoria para su publicación en la Gaceta.
- El artículo de la Revista *La Reforma* que publica, dentro de la Sección Oficial, el *Reglamento para los ejercicios de oposición a las plazas de ingreso en el Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios*, firmado por el Director general de Instrucción pública, Pascual de Gayángos, con fecha de 26 de julio de 1881.
- Actas del Tribunal.
- Actas de sesiones públicas con los datos del opositor que disiente, así como, la hora y cuestiones planteadas a cada opositor.

- Listados de calificaciones.
 - Papeletas elaboradas por el opositor en el examen correspondiente.
 - Minuta de la propuesta de los aprobados al Director general.
 - También encontramos uno de los cuestionarios al que hace referencia el Reglamento bajo el título: *Cuestionario para las oposiciones a las plazas de ingreso al Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios*, formado por 200 temas a saber; 20 temas de Latín y Romances, 20 de Paleografía general y crítica (Archivos), 20 de Geografía antigua, 20 sobre Instituciones de España, 20 de Numismática, 20 de Epigrafía, 20 de Arqueología, 20 de Bibliografía, 20 de Bellas Artes, y 20 de Paleografía sobre materia escritoria, tintas en los Códices, escritura visigótica, signos de puntuación en los Códices, etc.
- Legajo 42/192
- Borrador del proyecto de Reglamento de la Sociedad de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios del año 1883. Se estructura en 5 capítulos integrados por 24 artículos y artículos adicionales.

Archivo General de la Administración en Alcalá de Henares

Sección Educación y Ciencia

- Legajo 6084

Este legajo contiene un amplio expediente relativo a la Escuela Superior de Diplomática e incluye:

- Proyecto del Informe que somete Evaristo San Miguel, Director de la Real Academia de la Historia, y Pedro Sabau Secretario de la misma, a la aprobación del Ministro de Fomento para la implantación de la Escuela.
- Expediente instruido en relación con la ampliación de los estudios de la Escuela justificado por los informes emitidos por el Real Consejo de Instrucción pública informando, favorablemente, sobre la necesidad de reformar las enseñanzas impartidas en la Escuela de Diplomática.
- Algunos expedientes que dejan constancia de la labor de estos profesionales como revisores de letra antigua. Un ejemplo es el expediente relativo a la solicitud de D. Servando Fernández Vitorio, Magistrado de Audiencia de fuera de Madrid, Juez de Primera Instancia del Juzgado del Congreso al Ministro de Fomento para que dé orden de que, en calidad de peritos, realicen un reconocimiento de letras en la causa que se instruye con motivo del asesinato del Excmo. Sr. D. Juan Prim.
- Programa de la asignatura de *Arqueología y Numismática* firmado por Juan de Dios de la Rada y Delgado en Madrid el día 29 de mayo de 1860. El programa, manuscrito, expresa la justificación de la asignatura y consta de una parte preliminar y dos partes diferenciadas con un total de 58 lecciones y un apartado de lecciones complementarias que va de la lección 58 a la 60.

La parte I: *Nociones generales de Arqueología entre los distintos pueblos de la antigüedad.*

La parte II: *Arqueología especial de España e Historia del Arte* en sus varias manifestaciones.

- Programa de la asignatura de *Numismática Antigua y de la Edad Media y en especial de España*. El programa que está impreso va firmado por Juan de Dios de la Rada y Delgado en Madrid a 20 de mayo de 1864. Comprende 90 lecciones. De la lección 1 a la 84 incluye la explicación de los sistemas métricos y estudios comparativos de los pesos y medidas

antiguas con las monedas y el valor relativo de la moneda. La parte segunda, de la lección 85 a 90 incluye ejercicios prácticos de conocimiento, estudio y clasificación de las monedas de la época comprendida entre la Reconquista hasta nuestros días.

- Solicitud del Director de la Escuela al Director General de Instrucción pública pidiendo que tenga a bien acceder a restablecer la cátedra de Historia de Bellas Artes en los tiempos antiguos fechada en septiembre de 1873.
- Cuadro de asignaturas, original y manuscrito, que todos los años se enviaba para su aprobación con la asignatura de Historia de las Bellas Artes , Edad Media y Renacimiento.
- Expediente relativo a las modificaciones que se produjeron en el Cuerpo para el cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 4 del *Decreto de 9 de octubre de 1866* donde recoge que las enseñanzas de la Escuela de Diplomática estarán a cargo de individuos del Cuerpo; los profesores ingresarán en dicho Cuerpo en las categorías que les corresponda.

- Legajos 6386 y 6448

Se encuentran los expedientes de adquisición de libros para las Bibliotecas populares creadas en 1869 a partir de la *Orden de 18 de septiembre de 1869* que dispone la creación de 20 bibliotecas populares dos en cada distrito universitario destinando al efecto, como base, el donativo de los libros existentes en el Depósito del suprimido Consejo de Instrucción pública.

- Legajos 6675 y 6676

Contienen la documentación relativa al expediente general de incautación (1868-1875) que recoge la disposición por parte del Estado de

incautar las instituciones culturales, con las colecciones y objetos que estuvieran a cargo de ordenes religiosas y militares transformando esta riqueza como nacional al servicio del público.

- Caja 6677

Conserva la documentación correspondiente al expediente de oposición al Cuerpo en el año 1881 como los listados de alumnos y documentación remitida a la Dirección General de Instrucción pública y un expediente instruido en relación con el oficio del Director de la Escuela Superior de Diplomática, Juan de Dios de la Rada y Delgado, por el que propone, para su aprobación, el proyecto de Reglamento para proveer por oposición plazas al Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios con fecha de 18 de mayo de 1881. Este documento, con otra tradición documental, lo veíamos en el Archivo Histórico de la Universidad Complutense con la signatura 42/186.

- Caja 6678

Se conservan las convocatorias para Aspirantes al Cuerpo del año 1881 y 1885. La documentación que contiene y el procedimiento a seguir es muy similar a la oposición anterior. Contiene el cuestionario de *Bibliografía e Historia Literaria* que está formado por 100 temas que comprende materias desde el estudio de los Filósofos como Platón, Aristóteles; el de Bibliotecas como la Nacional, la del Escorial, y sobre Historia de las distintas épocas, etc.

Archivo del Congreso de los Diputados

- Legajo 3-1

Acta de 13 de julio donde aparece la remisión a la Junta de Ordenación y Redacción de los Informes sobre Cortes para la primera convocatoria de Cortes fechada en 6 de septiembre de 1809.

- Legajo 49

En el expediente con el número 189 encontramos, entre otros documentos, los siguientes:

- El oficio de Bartolomé José Gallardo, dirigido a la Comisión de Clasificación de Libros de la Biblioteca de Cortes, incluyendo el inventario original de lo que se salvó en el año 1823 perteneciente a dicha biblioteca.
- Informe de los comisionados de la de Gobierno interior para examinar el estado de la cuestión en torno a la suprimida Biblioteca de Cortes.
- Acta final del inventario de los libros y papeles de las Cortes Generales y Extraordinarias ocupados por la autoridad militar en el Oratorio de San Felipe Neri de Cádiz.

- Legajo 63 y 64

Contiene el informe que presentó la Comisión Mixta en el año 1840 encargada del reparto que contenía los índices de libros de selección del fondo bibliográfico para la supresión de la Biblioteca de Cortes.

Archivo del Senado

- Caja 3

Recoge toda la documentación relativa a la Comisión de Biblioteca, su constitución, actas, donación de libros de Fernández de los Ríos y compra de algunos fondos.

- Caja 11 de asuntos varios

En esta caja encontramos el expediente con los documentos que dejan constancia de los motivos que originaron la adjudicación del fondo bibliográfico de D. Carlos M^a Isidro de Borbón ofrecido el 3 de abril de 1837 a la Biblioteca de Cortes. Hay que destacar que en el fondo del Archivo del Senado no encontramos la relación de las obras destinadas al Senado.

También contiene los documentos sobre la disolución de la Biblioteca de Cortes, la ampliación de la Biblioteca del Senado y nuevas adquisiciones y catálogos elaborados, etc.

- Legajo 539-02 de la Serie Estamento de Próceres

Encontramos dos solicitudes para el ingreso en sus dependencias que van dirigidas al Presidente del Estamento de Próceres.

- Legajo 760-01

Incluye el documento relativo a la sesión de 25 de enero de 1838

donde se refleja el siguiente texto: Los Secretarios tendrán a su cargo la Secretaría y Archivo del Senado, dependiendo de ellos todos los empleados de estas oficinas y formarán una instrucción para el régimen de ellas sometiéndola a la aprobación del Senado.

- Legajo 761-06

Se encuentra el borrador bajo el título “Para el Régimen de la Secretaría del Senado y sus dependencias” que contempla las siguientes competencias y obligaciones del Archivero : recibir expedientes, clasificar, colocar y repartir los Diarios de Sesiones.

1.2. Fuentes publicadas

1.2.1. Anuarios, catálogos, diarios de sesiones, diccionarios, guías y memorias

Anuario del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, 1881. Madrid: Imprenta del Colegio Nacional de Sordo-Mudos y de Ciegos, 1882.

Anuario del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, 1882. Madrid: Imprenta del Colegio Nacional de Sordo-Mudos y de Ciegos, 1883.

Anuario de la Instrucción Pública para el año académico de 1867 a 1868. Madrid: Imp. del Colegio de Sordo-Mudos y de Ciegos, 1868.

Boletín de Archivos, Bibliotecas y Museos. Órgano oficial del Montepío del Cuerpo facultativo del ramo. Año 1, nº 1, (1896). Madrid: Imp. del Colegio Nacional de Sordo-Mudos y Ciegos, 1896.

Boletín Oficial de Instrucción Pública. Madrid: Imprenta Nacional, 1840.

Boletín Oficial de la Dirección General de Instrucción Pública. Madrid: Imprenta de los Hijos de M. G. Hernández, 1893.

Boletín de la Propiedad Intelectual. Año 1, n.1 (1877). Madrid, 1984. (Precede al título: Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios).

Boletín de la Real Academia de la Historia. Año 1, n. 1 (1877). Madrid: Academia de la Historia, 1877.

CALVO MARCOS, Manuel. *Catálogo de la Biblioteca del Congreso de los Diputados, formado por orden de la Comisión de Gobierno interior*. Madrid: Imp. Hijos de J. A., 1889.

- *Catálogo de la Biblioteca del Congreso de los Diputados ... Apéndice I.* Madrid, Imp. Hijos de J.A. García, 1893.
- *Id. Apéndice II.* Madrid, Imp. Hijos de J.A. García, 1907.

CARMONA DE LOS SANTOS, María. *Guía del Archivo Central del Ministerio de Educación y Ciencia. Guía del investigador.* Madrid: Dirección General del Patrimonio Artístico y Cultural, 1975.

Catálogo de las obras existentes en la Biblioteca del Congreso de los Diputados (por Manuel Fernández Martín, Oficial de la Secretaría y Archivero-Bibliotecario). Madrid, Imp. Viuda e Hijos de J. A. García, 1877.

Catálogo colectivo de publicaciones periódicas de la Facultad de Derecho. Madrid: Universidad Complutense. Facultad de Derecho, 1992.

Catálogo por orden alfabético y de materias de la Biblioteca del Senado. Madrid: E. Aguado, 1851.

Catálogo por orden alfabético y de materias de la Biblioteca del Congreso de los Diputados y Reglamentos de la misma y del Archivo. (Por Clemente Arias y Avilés, Oficial 3º de la Secretaría). Madrid: Imp. M. Rojas, 1857.

Catálogo por orden alfabético y de materias de la Biblioteca del Congreso de los Diputados y Reglamento del Archivo. 3ª edición. Madrid: Imp. J. Antonio García, 1867.

CRESPO NOGUEIRA, Carmen. *Guía del Archivo Histórico Nacional.* Madrid: Dirección General de Bellas Artes y Archivos, 1989.

Diario de Sesiones de las Cortes Generales y Extraordinarias, núm. 65, de 30 de noviembre de 1810.

Diario de Sesiones de Cortes Generales y Extraordinarias, número 120, 24 de enero de 1811.

Diario de Sesiones de las Cortes Generales y Extraordinarias (1810-1813). Cádiz: Cortes Generales.

Diario de las Sesiones de Cortes (1821-1823). Madrid: Cortes Españolas.

Diario de las Sesiones Cortes, Legislatura Extraordinaria (1821-1823). Madrid: Cortes Españolas.

Diario de las Sesiones de Cortes celebradas en Sevilla y Cádiz en 1823. Sevilla: Cortes Españolas.

Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes de 17 de octubre de 1836 a 4 de noviembre de 1837. Madrid: Imprenta de J.A. García, 1870.

Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes (1836-1870). Madrid: Cortes Españolas.

Diario de las Sesiones de Cortes. Congreso de los Diputados (1837-1899). Madrid: Cortes Españolas.

Diario de las Sesiones del Congreso de los Diputados desde 1870. Edición Madrid, Imp. J.A. García.

Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes de la República Española de 1873. Madrid: Cortes Españolas.

Diario de las Sesiones de Cortes. Senado (1889-1900). Madrid: Cortes Españolas.

Diario de Sesiones del Senado, número 68 de 15 de julio de 1877.

Diccionario-guía legislativo español..., por Teodoro Gómez Herrero. Madrid, 1901-2, 4 v.

FERNÁNDEZ MARTÍN, Manuel. *Catálogo de las obras existentes en la Biblioteca del Congreso de los Diputados*. Madrid: Imp. Viuda e Hijos de J.A. García, 1877.

FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS, Ángel. *Guía de Madrid. Manual del madrileño y del forastero*. Madrid: Oficinas de la Ilustración Española y Americana, 1876.

FUENTE COBOS, Concepción de la. *Guía del Archivo Central del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo*. Madrid: Ministerio de Cultura, 1983.

GÓMEZ VILLAFRANCA, Román. *Catálogo de la revista y el Boletín de Archivos, Bibliotecas y Museos en sus tres épocas (enero de 1871- diciembre de 1910)*. Madrid: Tip. de la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1911.

Guía de los Archivos Estatales Españoles. Madrid, 1977.

Guía de los Archivos de Madrid. Prólogo de Francisco Sintés y Obrador. Madrid: Dirección General de Archivos y Bibliotecas. Servicio de Publicaciones del Ministerio de Educación Nacional, 1952.

Guía de las Bibliotecas de Madrid. Madrid: Dirección General de Archivos y Bibliotecas, 1953. En las páginas 322 a 326, la de "Cortes Españolas".

Guía histórica y descriptiva de los Archivos, Bibliotecas y Museos Arqueológicos de España que están a cargo del Cuerpo Facultativo del ramo publicada bajo la dirección del Excmo. Sr. D. Francisco Rodríguez Marín. Sección de Bibliotecas. Bibliotecas de Madrid. Madrid: Tip. de la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1916.

Guía legislativa. Índice general de las leyes, decretos, órdenes y circulares contenidas en los 90 tomos de la Colección legislativa Oficial de España, que comprende desde 1810 hasta 1860..., por José Indalecio Caso. Madrid, Imprenta de Alejandro Gómez Fuentenebro e Imprenta de Luis Palacios, 1859-1860. 2v.

Guía del Ministerio de la Gobernación. Madrid: Imprenta Real, 1836.

Guía del Ministerio de la Gobernación. S.G.T. Ministerio de la Gobernación. Madrid, 1962.

LESMESS, H. *Memoria sobre la organización del Archivo General de España, dirigida al Excmo Sr. Don Modesto de Lafuente, Director de dicho Archivo.* Madrid, 1859.

MADOZ, Pascual. *Diccionario Geográfico Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de ultramar.* Madrid: Est. Literario Tipográfico de P. Madoz y L. Sagasti, 1845-1850.

MARTÍNEZ ALCUBILLA, Marcelo. *Diccionario de la Administración Española: compilación de la novísima legislación de España en todos los ramos de la Administración Pública.* 6ª ed. Madrid: Reus, 1814-1833.

Memoria Anuario del curso académico 1879-1880 de la Universidad Central. Madrid: Tipografía de Gregorio Estrada, 1880.

Memoria-Anuario de la Universidad Central para el curso 1883-1884. Madrid: Tipografía de Gregorio Estrada, 1884.

Memoria-Anuario de la Universidad Central del curso académico 1892-1893. Madrid: Tipografía de Gregorio Estrada, 1893.

Memorias-Anuarios de los cursos 1887-1888 al curso académico 1898-1899 de la Universidad Central. Madrid: Tipografía de Gregorio Estrada.

Memoria de la Biblioteca de la Universidad Central correspondiente a 1878-1880. Madrid: M. Tello, 1879.

Memoria del Ministerio de Fomento: Febrero de 1881-noviembre de 1882. Madrid: Rivadeneyra, 1882.

MONLAU Y ROCA, Pedro Felipe de. *Reglamento de la Escuela Superior de Diplomática creada en Madrid por Real Decreto de 7 de octubre de 1856, y confirmada por la ley de Instrucción Pública de 9 de septiembre de 1857. Precedido de una introducción histórica y acompañado de la legislación vigente sobre Archivos y Bibliotecas.* Madrid: Rivadeneyra, 1856.

PAZ ESPESO, Julián. *Catálogo de la Colección de documentos inéditos para la Historia de España.* Madrid: Instituto de Valencia de D. Juan, Tip. de D. Estalisnao Mestre, 1930-1931, 2 v.

PONCE DE LEÓN FREYRE, Eduardo. *Guía del lector en la Biblioteca Nacional. Historia, organización y fondos.* 2º ed. Madrid: Patronato de la Biblioteca Nacional, 1949.

RAMOS RUIZ, Carlos. *Catálogo de la Documentación de Archivos y Bibliotecas y de Museos Arqueológicos del Archivo del Ministerio de Educación Nacional.* Prólogo de Miguel Bordonau y Más.

- *Nuevo catálogo de la documentación no incluida en el anterior y de la recibida con posterioridad, referente a la actuación general del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos y de la sección correspondiente del Ministerio que se custodia en el Archivo Central del Ministerio de Educación Nacional.* Madrid, 1963.

RIVERA DEL PINO, Joaquín. *Memoria de los trabajos practicados en la Biblioteca y Archivo del Congreso de los Diputados durante el período de la legislatura de 1884 a 1885.* Madrid: Imp. y Fund. Hijos de J. A. García, 1886.

SERRA NAVARRO, Pilar. *Ministerio del Interior. Guía del Archivo Central.* Madrid: Ministerio de Cultura, 1983.

VILA SERRA, S. *Manual con la legislación referente a Archivos, Bibliotecas y Museos. Biblioteca de la Legislación Española en el siglo XX. Comprende la legislación referente a dichos ramos, desde las leyes de la Novísima recopilación hasta la fecha.* Valencia: Imprenta del autor, 1911.

YSASI-YSASMENDI, Julia y HERRÁEZ SÁNCHEZ DE ESCARICHE, Julia. *Guía del Archivo Histórico Universitario.* Sevilla: Universidad. Secretariado de Publicaciones, 1993.

1.2.2. Fuentes legislativas

Anuario Legislativo de Instrucción Pública. Madrid: Inspección General de Enseñanza, 1889.

Boletín Jurídico-Administrativo: anuario de legislación y jurisprudencia. Madrid: Reus, 1814-1868.

Boletín Jurídico-Administrativo. Apéndice al Diccionario de Administración Española: Anuario de Legislación y Jurisprudencia Alcubilla. Madrid: Alcubilla, 1886.

Boletín Oficial del Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras Públicas. Madrid: Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras Públicas, 1848-1851.

Boletín Oficial del Ministerio de Fomento. Madrid: Imprenta del Colegio de Sordomudos y Ciegos, 1852.

Boletín Oficial del Ministerio de Gracia y Justicia. Madrid: Imprenta de D. José María Alonso, 1852.

Colección de Decretos y Ordenes que han expedido las Cortes generales y extraordinarias desde su instalación. Madrid, 1813, t. II.

Colección de los Decretos y Ordenes que han expedido las Cortes Generales y extraordinarias desde su instalación, de 24 de septiembre hasta igual fecha de 1811. Madrid, 1820, t. I.

Colección de los Decretos y Órdenes de las Cortes Generales y Extraordinarias, desde su instalación, 24 de septiembre de 1810, hasta 14 de septiembre de 1813. Madrid: Imprenta Nacional, 1820.

Colección de los Decretos y Órdenes que han expedido las Cortes Generales y Extraordinarias 1810-1813. Madrid: Imprenta Nacional, 1813.

Colección de los Decretos y Órdenes de las Cortes Ordinarias, desde 25 de septiembre de 1813 hasta 11 de mayo de 1814. Madrid: Imprenta Nacional, 1820.

Colección de Decretos y Órdenes Generales expedidos por la Cortes Ordinarias 1813-1821. Madrid: Imprenta Nacional, 1821.

Colección de los Decretos y Órdenes generales de las Cortes Ordinarias de 1820 y 1821, desde 6 de julio de 1820 hasta 30 de junio de 1821. Madrid: Imprenta Nacional, 1821.

Colección de los Decretos y Órdenes generales de las Cortes Extraordinarias, desde 22 de septiembre de 1821 hasta 14 de febrero de 1822. Madrid: Imprenta Nacional, 1822.

Colección de los Decretos y Órdenes Generales de las Cortes Ordinarias, desde 1º de marzo hasta 30 de junio de 1822. Madrid: Imprenta Nacional, 1822.

Colección de Decretos y Órdenes Generales expedidos por las Cortes Extraordinarias 1821-1823. Madrid: Imprenta Nacional.

Colección de los Decretos y Órdenes Generales de las Cortes Extraordinarias, desde 3 de octubre de 1822 hasta 19 de febrero de 1823. Madrid: Imprenta Tomás Albán, 1823.

Colección de Decretos referentes a la Instrucción Pública. 3 Tomos. Madrid: Establecimiento Tipográfico de Tello.

Colección de Decretos referentes a Instrucción Pública. Madrid: Imp. de Manuel Tello, 1891-1892, 2 vols.

Colección Legislativa de España (continuación de la Colección de decretos), desde el primer trimestre de 1846 a 1937. Madrid: Imprenta Nacional, Ministerio de Gracia y Justicia, Revista de legislación, Reus, etc. 1848-1937.

Colección Legislativa de España 1846-1891. Madrid: Ministerio de Gracia y Justicia.

Colección Legislativa de España. Legislación y Disposiciones de la Administración Central 1881-1899. Madrid: Revista de Legislación.

Colección de Leyes, Decretos y Declaraciones de las Cortes y de los Reales Decretos ... expedidos por las Secretarías del Despacho de los Ministerios, desde 1843, de 1 de 1837 a fin de diciembre de 1845. Madrid: Imprenta Nacional, 1837-1846.

Colección de Reales Decretos expedidos por la Reina desde el 22 de enero de 1867. Madrid: Imprenta Real.

Colección de los Reales Decretos, Ordenes y Reglamentos expedidos por el Ministerio de Gracia y Justicia para la creación y Organización de la Dirección General de Archivos, Junta Superior Consultiva y de las demás subalternas establecidas en la Península y Ultramar. Madrid: Imprenta que fue de Operarios, 1849.

Compilación Legislativa de Instrucción Pública (1876-1881). Madrid: Imprenta Fortanet.

Decretos de la Reina Nuestra Señora Doña Isabel II (1834-1837). Madrid: Imprenta Real.

Decretos de la Reina Nuestra Señora Doña Isabel II, Madre la Reina Gobernadora, desde enero de 1834 a 1836, por Josef María de Nieva. Madrid: Imprenta Real, 1835-1837.

Decretos del Rey Fernando VII (1814-1833). Madrid: Imprenta Real.

Decretos del Rey don Fernando VII, desde 4 de mayo de 1814 a fin de 1819, por Fermín Martín de Balmaseda. Madrid: Imprenta Real, 1816-1823. Apéndices de los años 1814, 1815, 1816, 1817.

Decretos del Rey Nuestro Señor Don Fernando VII, desde 1 de enero de 1824 a fin de diciembre de 1831, por Josef María de Nieva. Madrid: Imprenta Real, 1824-1832.

Decretos y resoluciones de la Junta provisional, Regencia del Reino y los expedidos por su Majestad en 1823, por Fermín Martín de Balmaseda. Madrid: Imprenta Real, 1824.

Dictamen del Proyecto de Decreto sobre arreglo general de la Enseñanza pública de 7 de marzo de 1814. Madrid, Imp. Nacional, 1820.

Extracto alfabético de cuanto contienen todos los tomos de Decretos, por L. Carbonero y Sol. Madrid, 1941.

Gaceta de Madrid (1756-1936). Madrid: Sucesores de Rivadeneyra, 1936.

Índice cronológico y alfabético de las materias que contienen los doce tomos de la Colección de reales decretos..., desde 1 de enero de 1828 a 31 de diciembre de 1838, por Manuel Sánchez de Bustamante. Madrid, Imprenta de la Real Compañía de Impresores y Libreros del Reino, 1839.

Índice... de los 35 tomos que forman la Colección de las Leyes, decretos y declaraciones de las Cortes y de los reales decretos y declaraciones de las Cortes y de los reales decretos, órdenes y reglamentos generales, desde 4 de mayo de 1814 a 31 de diciembre de 1845. Madrid, Imprenta Nacional, 1848, 2v.

Índices generales, cronológico y alfabético, de las disposiciones generales, comprendidas en los 16 tomos de legislación, que comprenden, desde 1º de julio de 1891 a fin de año de 1897. Madrid, Imprenta de la Revista de Legislación, 1906.

Índices generales, cronológico y alfabético, de las disposiciones legales, comprendidas entre enero de 1898 y diciembre de 1902. Madrid, Imprenta de la Revista de Legislación, 1904.

Novísima recopilación de las leyes de España dividida en XII libros. Tomo IV, Libro VIII De las ciencias, artes oficios. Impresa en Madrid, 1805.

Prontuario de las leyes y decretos del Rey Nuestro Señor Don José Napoleón I, desde 1808. Madrid, 1810-1812, 3v.

Repertorio anotado de Legislación (1878-1931). Madrid: Revista de los Tribunales.

Textos legales: Bibliotecas. Madrid: Ministerio de Cultura. Secretaría General Técnica, 1983.

APÉNDICE II

Bibliografía y Disposiciones Legislativas

2. Apéndice II

El repertorio bibliográfico y de disposiciones legislativas que presentamos ha sido estructurado por materias respondiendo a los siguientes criterios:

- En primer lugar hemos agrupado todas las obras y disposiciones de carácter general bajo el epígrafe primero.
- En segundo lugar las referentes a estructura administrativa, legislación, política de archivos y bibliotecas en el siglo XIX coincidiendo con el epígrafe segundo.
- El tercer epígrafe reúne todo lo relacionado con el Cuerpo Facultativo de Archiveros Bibliotecarios y Anticuarios.
- El apartado cuarto aborda la enseñanza de las disciplinas documentarias.
- En quinto lugar recogemos los trabajos y disposiciones sobre la Escuela Superior de Diplomática.
- Por último, el epígrafe sexto responde al ámbito de las instituciones documentales, concretamente, a los archivos y bibliotecas en este siglo.

2.1. Bibliografía

2.1.1. Obras generales

ALCINA FRANCH, José. *Aprender a investigar. Métodos de trabajo para la redacción de tesis doctorales. Humanidades y Ciencias Sociales*. Madrid: Compañía Literaria, 1994, 237 p.

BOSCH GARCÍA, C. *La técnica de investigación documental*. Caracas: Facultad de Ciencias Económicas, 1972.

CARRERAS PANCHON, Antonio (Coor.). *Guía práctica para la elaboración de un trabajo científico*. Bilbao: Cita, 1994, 263 p.

CURRAS, E. *Documentación y metodología de la investigación científica. Cuaderno de trabajo*. Madrid: Paraninfo, 1985.

ECO, Umberto. *Cómo se hace una tesis. Técnicas y procedimientos de investigación, estudio y escritura*. Barcelona: Gedisa Editorial, 1994.

DESANTES-GUANter, José María; LÓPEZ YEPES, José. *Teoría y técnica de la investigación científica*. Madrid: Síntesis, 1996.

GARCÍA DE LA FUENTE, Olegario. *Metodología de la Investigación científica. Cómo hacer una tesis en la era de la Información*. Madrid: Ediciones CEES, 1994, 323 p.

LASO DE LA VEGA JIMENEZ-PLACER, J. *Técnicas de investigación y Documentación. Normas y ejercicios*. Madrid: Paraninfo, 1980.

LÓPEZ YEPES, José. *Metodología de la investigación en ciencia documental*. En

LÓPEZ YEPES, J.; SAGREDO, Félix y otros. *Estudios de Documentación general e informativa*. Madrid : Seminario Millares Carlo del Centro Asociado de la UNED en las Palmas, 1981, 429 p.

- *El estudio de la Documentación: Bibliografía y metodología fundamentales*. Madrid: Tecnos, 1981.
- *La aventura de la investigación científica. Cuía del investigador y del director de investigación*. Madrid: Síntesis, 1995, 253 p.
- *La Documentación como disciplina. Teoría e historia*. Pamplona: EUNSA, 1995, 337 p.

ROS GARCÍA, J.; LÓPEZ YEPES, J.: *Políticas de Información y Documentación*. Madrid: Síntesis, 1994, 191 p.

SIERRA BRAVO, R. *Tesis doctorales y trabajos de investigación científica*. Madrid: Paraninfo, 1994.

VALLES, Miguel. *Técnicas cualitativas de investigación social. Reflexión metodológica y práctica profesional*. Madrid: Síntesis Sociología, 1997.

2.1.2. Estructura administrativa, legislación, política de archivos y bibliotecas en el siglo XIX

ALBO ÁLVAREZ, M^a José. *La Biblioteca del Ateneo de Madrid: (Un recorrido por su historia)*. En *Centenario del Código civil*. Dirección de Francisco Rico Pérez. Madrid, 1989, 4 v., pp. 509-561.

ALGUACIL PRIETO, María; MACIÁ, Mateo; MARTÍNEZ-CAÑAVATE, M^a del Rosario. *El Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados (1810-1977)*. Madrid:

Congreso de los Diputados. Dirección de Estudios y Documentación de la Secretaría General, 1996, 242 p.

ARÓSTEGUI SÁNCHEZ, J. *Un nuevo sistema político*. En: *Historia de España*. Madrid: Historia 16, 1986.

ARRIAZU, Isabel y otros. *Estudio sobre las Cortes de Cádiz*. Pamplona: Universidad de Navarra, 1967.

ARTOLA, Miguel (editor), MORAN ORTÍ, Manuel y otros. *Las Cortes de Cádiz*. Madrid: Marcial Pons, 1981.

ARTOLA, Miguel. *Los orígenes de la España contemporánea*. 2º ed. Madrid: Alianza, 1976.

- *El modelo constitucional español del Siglo XIX*. Madrid: Fundación Juan March, 1979, 127p.
- *Partidos y programas políticos en la España contemporánea (1808-1936)*. Madrid: Alianza, 1991, 705 p.
- *La España de Fernando VII*. Madrid: Espasa, 1999, 788 p.

BAHAMONDE, Ángel y TORO, Julián. *El sexenio Democrático, 1868-1874*. En *Historia de España*. Madrid: Historia 16, 1986, pp. 858-859.

BARRERO GARCÍA, Ana. *La materia administrativa y su gestión en el reinado de Fernando VII*. "Anuario de Historia del Derecho Español" (AHDE). Madrid, 1983, pp. 395-421.

BENEYTO PÉREZ, Juan. *Historia de la Administración Española e Hispanoamericana*. Madrid: Aguilar, 1958.

BERMEJO CABRERO, J.L. - 1812-1992. *El arte de gobernar. Historia del Consejo de Ministros y de la Presidencia del Gobierno*. Madrid: Tecnos. Ministerio de Relaciones con las Cortes y Secretaría del Gobierno, 1992, 350 p.

- *Estudios de Historia del Derecho y de las Instituciones*. Alcalá de Henares: Universidad, 1989.

BLANCO CANALES, Ricardo. *Materiales para el Estudio de la Legislación y Jurisprudencia Española*. "Revista de las Cortes Generales" 7, 1986.

BOFARULL Y ROMANÍA, Manuel. *Las antiguas Cortes, el moderno parlamento, el régimen representativo orgánico*. Madrid: Tip. de la Revista de Archivos Bibliotecas y Museos, 1912.

CARR, Raymond. *España 1808-1975*. Edición Española corregida y aumentada por el autor, 7ª ed. Barcelona: Ariel, 1996, 827 p.

- *España, de la Restauración a la democracia 1875-1980*. 5ª ed. Barcelona: Ariel, 1998, 820 p.

CASTRO, Adolfo de. *Cortes de Cádiz. Complementos de las sesiones*. Madrid: Imp. Prudencio Pérez de Velasco, 1913, 2 vols.

COMELLAS, José Luis. *Historia de España Contemporánea*. Madrid: Ediciones Rialp S.A., 1995.

- *Los moderados en el poder, 1844-1854*. Madrid: C.S.I.C., 1970.

COS GAYÓN, Fernando. *Historia de la Administración pública en España*. Madrid: Instituto de Estudios Administrativos, 1976.

CRUZ HERRANZ, Luis Miguel de la. *Panorama de los archivos durante el siglo XIX y primer tercio del siglo XX*. En GENERELO, Juan José y MORENO LÓPEZ, Ángeles, coordinadores. *Historia de los Archivos y de la Archivística en España*. Valladolid: Secretariado de Publicaciones e Intercambio Científico, Universidad de Valladolid, 1998.

ESCUDERO, José Antonio Escudero. *Administración y Estado en la España moderna*. Valladolid: Junta de Castilla y León. Consejería de Cultura, 1993, 638 p.

- *Los Secretarios de Estado y del Despacho*. 2ª edición 4 vols. Madrid, 1976.

FERNÁNDEZ, Tomás Ramón y SANTAMARÍA PASTOR, Juan Alfonso. *Legislación Administrativa española del siglo XIX*. Madrid: Instituto de Estudios Administrativos, 1977.

FERNÁNDEZ MARTÍN, Manuel. *Derecho Parlamentario Español*. Madrid: Congreso de los Diputados. Dirección de Estudios y Documentación de la Secretaría General, 1992. 3t.

FIESTAS LOZA, Alicia. *El diario de sesiones de las Cortes: 1810-1814*. "Anuario de historia del Derecho español". T. 65 (1995), pp. 533-558.

FONTANA y LÁZARO Josep. *Cambio económico y actitudes políticas en la España del siglo XIX*. Barcelona: Ariel, 1973.

- *La histotiografía española del siglo XIX: un siglo de renovación entre dos rupturas*. En CASTILLO, Santiago (coord.). *La historia social en España. Actualidad y perspectivas. Actas del primer Congreso de la Asociación de Historia Social*. Madrid: Siglo XXI, 1991, pp. 325-335.

GARCÍA DE CORTAZAR, Fernando y GONZÁLEZ VESGA, José. *Breve Historia de España*. Madrid: Alianza Editorial, 1995, 808 p.

GARCÍA MADARIA, José María. *Estructura de la Administración Central (1808-1931)*. Madrid: Instituto Nacional de Administración Pública, 1982, (Colección

Estudios de Historia de la Administración), 357 p.

GARIJO AYESTARÁN, María Josefa. *El Ministerio de la Gobernación* (materiales para un estudio de su evolución histórica hasta 1937). Madrid: Ministerio de la Gobernación, Secretaría General Técnica, 1977.

GIL NOVALES, A. *El Trienio Liberal. De 1821-1823*. Madrid: Siglo XXI, 1980, 146 p.

GÓMEZ DE LA SERNA, Gaspar. *Las Cortes Españolas*. Madrid: Sucesores de Rivadeneyra, 1971.

GUAITA, Aurelio. *El Ministerio de la Gobernación cumple siglo y medio*. "Documentación Administrativa", 53, 1962, p. 35.

- *El Ministerio de Fomento 1832-1931*. Madrid: Instituto de Estudios de Administración Local, 1984. 126 p.

JOVER, J.M., *La época de la Restauración: panorama político-social, 1875-1902*. En *Historia de España*, vol. VIII dir. por M. Tuñón de Lara. Madrid: Alianza editorial.

KIERNAN, V. G.: *La Revolución de 1854 en España*. Madrid: Aguilar, 1970.

LAFUENTE ZAMALLOA, Modesto. *Historia General de España, desde los tiempos primitivos hasta la muerte de Fernando VII*. Por D. Modesto Lafuente, continuada desde dicha época hasta nuestros días por D. Juan Valera, Andrés Borrego y Antonio Pirala. Barcelona: Montaner y Simón, Editores, 1877-1882, 6 vols.

MADRAZO, Francisco. *Las Cortes Españolas...* Madrid: Imp. D. A. Rubí, 1857.

MALUQUER DE MOTES. Jordi. *El socialismo en España, 1833-1868*. Barcelona: Crítica, 1977.

MARCUELLO BENEDICTO, Juan Ignacio. *La práctica parlamentaria en el reinado de Isabel II*. Madrid: Congreso de los Diputados, 1986, 308 p.

MARICHAL, Carlos. *La revolución liberal y los primeros partidos políticos en España: 1834-1844*. Madrid: Cátedra, 1980.

MARTÍN-RETORTILLO, Sebastián y ARGULLOL E. *Descentralización administrativa y organización política. Aproximación histórica (1812-1931)*. Madrid, 1982.

MARTÍNEZ DE VELASCO, Ángel. *España, 1808-1833*. En: *Manual de Historia de España*. Siglo XIX. Madrid: Historia 16, 1990, pp. 18-80

MERCADER RIBA: José Bonaparte, rey de España (1808-1813). *Estructura del Estado español bonapartista*. Madrid, 1983.

MIRAFLORES, Marqués de (Manuel Pando Fernández de Pinedo). *Memorias del reinado de Isabel II*. Edición y estudio preliminar de Manuel Fernández Suárez. Madrid: Ediciones Atlas, 1964, 3 vols.

MONTERO, F. *La Restauración*. En *Manual de Historia de España. Siglo XIX*. Madrid: Historia 16, 1990, pp. 317-323.

PÉREZ-BUSTAMANTE, Rogelio. *Historia de las Instituciones Públicas de España*. Madrid: Servicio de Publicaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, 1995.

PONS Y UMBERT, Adolfo. *Organización y funcionamiento de las Cortes según las Constituciones españolas y Reglamentos de dichos Cuerpos Colegiados*. Madrid: Hijo de M. S. Hernández, 1906.

RODRÍGUEZ CAMALEÑO, Luis. *Consideraciones sobre el nuevo Ministerio de lo Interior...* Madrid: Imprenta de Don Luis Palacios, 1835.

ROURA, Lluís; MORAL, Joaquín del; GIL, Alberto. *El Trienio Liberal 1821-1823*. Cuadernos de Historia 16, n. 19.

RUIZ SALVADOR, Antonio. *El Ateneo científico, literario y artístico de Madrid (1835-1885) y el Catálogo de publicaciones periódicas de la Biblioteca*. Madrid: Ateneo, 1995.

SAINZ DE ROBLES, Federico Carlos. *Breve Historia de la Biblioteca del Ateneo de Madrid*. "Anales del Instituto de Estudios Madrileños", VII (1971), pp. 383-403.

SÁNCHEZ AGESTA, Luis. *Historia del Constitucionalismo Español (1808-1936)*. Madrid. Centro de Estudios Constitucionales, 1984.

- *La Constitución de 1876 y el Estado de la Restauración*. Madrid: Fundación Santa María, 1985.

SÁNCHEZ-ARCILLA, José. *Historia de las Instituciones Político-Administrativas Contemporáneas (1812-1845)*. Madrid: Dykinson, 1994.

SÁNCHEZ BELDA, L. *Presidencia del Gobierno*. En *Guía de los Archivos de Madrid. Archivos de la Administración Pública*. Madrid: Dirección general de Archivos y Bibliotecas. Servicio de publicaciones del Ministerio de Educación Nacional, 1952, pp. 12-13.

SÁNCHEZ BELLA, I. *La reforma de la Administración central en 1834*. En "Actas del III Symposium de Historia de la Administración". Madrid: Instituto de Estudios Administrativos, 1874.

SANTAMARÍA PASTOR, Juan Alfonso. *Sobre la génesis del Derecho Administrativo español en el siglo XIX (1812-1845)*. Sevilla: Legislación administrativa, 1973.

SERRA NAVARRO, Pilar. *Ministerio del Interior Guía del Archivo Central*. Madrid: Ministerio de Cultura, 1983.

SEVILLA ANDRÉS, D. *Constituciones y otras leyes y proyectos políticos de España*. Madrid, 1969, vol. I.

- *Historia política de España (1800-1967)*. Madrid, 1968.

SOLÉ TURA, Jordi y AJA, Eliseo. *Constituciones y periodos constituyentes en España (1812-1874)*. Barcelona: Siglo XXI, 1990, 175 p.

SUÁREZ VERDAGUER, Federico. *La creación del Ministerio del Interior en España*. "Anales de Historia del Derecho de España", 19, (1948-49) pp. 15-56.

SUÁREZ VERDAGUER, Federico. *Las Cortes de Cádiz*. Madrid: Rialp, 1982. 219 p.

TOMÁS VILLARROYA, Joaquín. *El Estatuto Real de 1834 y la Constitución de 1837*. Madrid: Fundación Santa María, 1985, 95 p.

TUÑÓN DE LARA, Manuel. *La España del siglo XIX (1808- 1914)*. París: Club del Libro Español, 1961.

- *La España del siglo XIX*. Barcelona: LAIA, 1975.

TUSELL, Javier. *Los Archivos para la Historia Política del reinado de Alfonso XIII*. Conferencia pronunciada en Ciclo de Conferencias del Archivo Histórico Nacional. Madrid, octubre-noviembre de 1981, pp. 7-24. Madrid: Ministerio de Cultura, 1982.

VARELA ORTEGA, José. *Los amigos políticos. Partidos, elecciones y caciquismo en la Restauración (1875-1900)*. Madrid: Alianza, 1977.

2.1.3. El Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios

ABADAL FALGUERAS, Ernest. *La Documentación en España*. Madrid: CINDOC; FESABID, 1994, 200 p.

BORDONAU MÁS, Miguel. *Formación profesional de los archiveros en España*. "Boletín del Archivo General de la Nación" (Caracas), nº 222, enero-junio de 1972, pp. 6-14.

CHARRO HIDALGO, Augusto. *La Sociedad de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios*. Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. Año IX, número 6, de 30 de junio de 1883, pp. 193-195.

ESCOLAR, Hipólito. *Historia de las bibliotecas*. Madrid: Fundación Sánchez Ruipérez, 1985, p. 442.

ESCUADERO DE LA PEÑA, José María. *Secciones del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios*. "Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos", nº 6, 15 de mayo de 1871, pp. 82-84.

FRÍAS ANTONIO, José. *El factor profesional en el futuro de las Bibliotecas*. En *¿Biblioteca Real frente a Biblioteca virtual? X Jornadas Bibliotecarias de Andalucía*. Jerez de la Frontera de 28 al 30 de mayo de 1998, 173-211.

Junta Consultiva de Archivos, Bibliotecas y Museos. En "Anuario del Cuerpo Facultativo de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1881". Madrid: Imprenta del Colegio Nacional de Sordo-Mudos y de Ciegos, 1882, pp. 14-16

MORLESIN Y SOTO, Anastasio. *Necesidad y conveniencia de la incorporación de los Archivos y Bibliotecas que dependen del Estado al Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios*. "Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos" nº 4, 30 de abril de 1883, pp. 129-131.

NIETO, G.: *El I Centenario del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos*. "Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos", 65, 1958, pp. 5-10.

PEIRÓ MARTÍN, I. y PASAMAR ALZURIA, G. *La Escuela Superior de Diplomática: Los archivos en la historiografía española contemporánea*. Madrid: ANABAD, 1996, 254 p.

RUIZ CABRIADA, Agustín: *Biobibliografía del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, 1858-1958*. Madrid: Junta técnica de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1958.

Sobre la forma de proveer la plaza de Jefe Superior del Cuerpo Facultativo de Archivos, Bibliotecas y Museos. "Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos". Tomo 9, 1883, pp. 82-83.

TORREBLANCA LÓPEZ, Agustín. *Erudición institucional en el siglo XIX español: La sección de Archivos del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos*. En *Erudición y discurso histórico: las Instituciones europeas (s. XVIII-XIX)*. Edición a cargo de F. M. Gimeno Blay. Valencia, 1993, pp. 247-264.

VIGNAU Y BALLESTER, Vicente. *Junta Facultativa de Archivos, Bibliotecas y Museos*. "A.C.F.A.B.A.", 1881, pp. 13-15.

- *Escuela Superior de Diplomática*. "A.C.F.A.B.A.", 1881, 1882, pp. 16-25.

VILLA-AMIL Y CASTRO, José. *El Cuerpo de Bibliotecarios, Archiveros y Anticuarios y nuestras Bibliotecas públicas*. "La Academia", nº 7, 18 de febrero de 1877, pp. 106-109.

La Reforma. Revista bisemanal de Instrucción pública de 26 de octubre de 1881. Año XI. Cuarta época, Madrid.

Sección Oficial y de Noticias. “Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos”, núm. 1, enero de 1897, p. 143.

Sociedad de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios. “Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. Año IX, número 2, de 28 de febrero de 1883, pp. 50-51.

2.1.4. La enseñanza de las disciplinas documentarias

BARRERO GARCÍA, Ana M^a. *La materia administrativa y su gestión en el reinado de Fernando VII*. Anuario de Historia del Derecho Español (AHDE). Madrid, 1983

CARMONA DE LOS SANTOS, María. *La Universidad Central y su distrito: Fondos documentales en el Archivo Histórico Nacional*. Madrid: Boletín de ANABAD XLVI (1996), n. 1.

GIL DE ZARATE. *La instrucción pública en España*. Madrid, 1855.

GODÍN, Aurora. *La Escuela Superior de Diplomática y la Formación de los Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos en el Siglo XIX*. Boletín de ANABAD, XLV (1995), n. 3, pp. 33-49.

HERRERO ORIA, Enrique. *Historia de la educación española desde el Renacimiento*. Madrid, 1941.

Informe Quintana. En *Historia de la Educación en España*. Textos legales y documentación. Vol. I. Madrid: Secretaría General del Ministerio de Educación, 1979.

KAGAN, Richard L. *Universidad y sociedad en la España moderna*. Madrid, 1981.

MIGUEL ALONSO, Aurora. *La Biblioteca de los Reales Estudios de San Isidro de Madrid. Su historia hasta la integración en la Universidad Central*. Madrid: Fundación Universitaria Española, 1996.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA. *Historia de la educación en España: De las Cortes de Cádiz a la Revolución de 1868*. Vol. II. Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia. Secretaría General Técnica, 1979

PEIRÓ MARTÍN, Ignacio. *Profesores e historiadores de la Restauración, 1874-1900*. Tesis doctoral, Zaragoza, 1992.

PESET, José Luis. *La Universidad española (siglos XVIII-XIX)*. Madrid: Taurus, 1974.

PESET, J.L. y PESET, M. *Pasado, presente y futuro de la Universidad española*. Madrid: Fundación Juan March, 1977.

PUELLES BENÍTEZ, Manuel. *Educación e ideología en la España contemporánea (1767-1975)*. Barcelona: Labor, 1980.

SAN SEGUNDO, Rosa. *Sistemas de Organización del Conocimiento: La organización del conocimiento en las bibliotecas españolas*. Madrid: Universidad Carlos III de Madrid. Boletín Oficial del Estado, 1996,

TORREBLANCA LÓPEZ, Agustín. *La Escuela Superior de Diplomática y la política archivística del siglo XIX*. En GENERELO, Juan José, MORENO LÓPEZ, Ángeles, (coordinadores). *Historia de los Archivos y de la Archivística en España*. Valladolid: Secretariado de Publicaciones e Intercambio Científico, Universidad de Valladolid, 1998, pp. 71-118.

2.1.5. La Escuela Superior de Diplomática

ALLENDE SALAZAR, Ángel. *La Escuela Superior de Diplomática*. "Boletín Histórico", nº 5, mayo de 1881, pp. 73-76.

BORDONAU MÁS, Miguel. *Formación profesional de los archiveros en España*. "Boletín del Archivo General de la Nación" (Caracas), nº 222, enero-junio de 1972, pp. 6-14.

ELÍAS DE MOLINS, Antonio. *Una efemérides. Inauguración de la Cátedra de Paleografía de Madrid en 20 de enero de 1839*. "R.A.B.M.", Tercera época, Vol. III, febrero de 1897, pp. 121-123.

ESCOLAR, Hipólito. *Historia de las bibliotecas*. Madrid: Sánchez Ruipérez, 1985. *La Escuela Superior de Diplomática*. "Anuario del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, 1881". Madrid: Imprenta del Colegio Nacional de Sordo-mudos y de Ciegos, 1882, pp. 16-25.

GARCÍA EJARQUE, Luis. *La formación del Bibliotecario en España: De la Paleografía y la Bibliografía a la Biblioteconomía y la Documentación*. Madrid: ANABAD, 1993, 127 p.

GODÍN GÓMEZ, Aurora. *La Escuela Superior de Diplomática y la Formación de los Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos en el siglo XIX*. "Boletín de ANABAD" XLV (1995), n. 3, pp. 33-49.

GONZÁLEZ DE LA PEÑA, M^a del Val. *Los orígenes de la enseñanza de la Paleografía en España: la primera cátedra de Paleografía*. "Revista de Historia de la Cultura Escrita" Signo 2 (1995), pp. 29-47.

MONLAU Y ROCA, Pedro Felipe de, *Reglamento de la Escuela Superior de Diplomática creada en Madrid por Real Decreto de 7 de octubre de 1856, y confirmada por la Ley de Instrucción pública de 9 de septiembre de 1857, precedido de una introducción histórica y acompañado de la legislación vigente sobre archivos y bibliotecas*. Madrid: M. Rivadeneyra, 1865.

MORENO PATO, Alicia. *Don Cayetano Rosell. Primer catedrático español de Bibliografía*. "Varia Bibliographica. Homenaje a José Simón Díaz". Kassel, Edition Reichenberger, 1988, pp. 495-498.

PEIRÓ MARTÍN, Ignacio y PASAMAR ALZURIA, Gonzalo. *La Escuela Superior de Diplomática: los archiveros en la historiografía española contemporánea*. Madrid: ANABAD, 1996, 254 p.

SOTELO MARTÍN, Elena. *La Escuela Superior de Diplomática en el Archivo General de la Administración*. Anexos de "Signo 1". Madrid: Universidad de Alcalá, 1998, 175 p.

- *La enseñanza de la Paleografía en España durante la segunda mitad del siglo XIX. La Escuela Superior de Diplomática (1856-1900)*. En *Actas del III Congreso de Historia de la Cultura Escrita*. Editado por Carlos Sáez y Rogelio Pacheco. Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá, 1999.

SOTELO MARTÍN, M. Elena. *La Escuela Superior de Diplomática (1856-1900). Fondos documentales para su estudio*. En *la investigación y las fuentes documentales de los archivos*. I y II Jornadas sobre Investigación en Archivos. Guadalajara: ANABAD, 1996, Vol. II, pp. 1093-1100.

TORREBLANCA LÓPEZ, Agustín. *La Escuela Superior de Diplomática y la política archivística del siglo XIX*. En GENERELO, Juan José, MORENO LÓPEZ, Ángeles, (coordinadores). *Historia de los Archivos y de la Archivística en España*. Valladolid: Secretariado de Publicaciones e Intercambio Científico, Universidad de Valladolid, 1998, pp. 71-118.

Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. Órgano oficial del Cuerpo facultativo del ramo. Año I, nº 1, (1871). Madrid: Impr. de Gregorio Hernando. Cinco épocas, 1871-1878, 1883, 1897-1931, 1947-1953, 1954.

Revista de Archivos Bibliotecas y Museos, número 2, de 15 de febrero de 1871, pp. 24-25.

Revista de Archivos Bibliotecas y Museos, número 18 de 30 de septiembre de 1873, pp. 276-277.

2.1.6. Archivos y Bibliotecas en el siglo XIX

ALFARO LÓPEZ, Héctor Guillermo. *Teoría e historia de la constitución del campo bibliotecológico español*. “Investigación Bibliotecológica: archivonomía, bibliotecología e información”. Revista semestral, enero-junio de 1999, vol. 13, núm. 26. Editada por el Centro Universitario de investigaciones Bibliotecológicas. Universidad Nacional Autónoma de México, pp. 6-26.

ALGUACIL PRIETO, M^a Luisa, MACIÁ, Mateo, y MARTÍNEZ-CAÑAVATE, María del Rosario. *El Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados (1810-1977)*. Madrid: Congreso de los Diputados, Dirección de Estudios y Documentación de la Secretaría General, 1996, 242 p.

ÁLVAREZ GARCÍA, C. *Los Archivos de la Administración Central en España. Sus fondos. Organización y descripción*. “Boletín de ANABAD”, 37 (1987), 1-2, enero-junio, pp. 163-196.

ANDRÉS, Gregorio (OSA). *La Real Biblioteca de El Escorial*. Madrid: [s. n.], 1970.

Archivo General de la Administración, 1969-1994. Madrid: Ministerio de Cultura. Subdirección General de los Archivos Estatales, 1995.

Archivo General Central de Alcalá de Henares. “Revista de Archivos Bibliotecas y Museos” 1881, pp. 31-46; 1882, pp. 34-50.

Archivo Histórico Nacional. “Anuario del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios de 1882”. Madrid: Imprenta del Colegio Nacional de Sordomudos y de Ciegos, 1883, pp. 21-33.

Biblioteca Nacional. "Anuario del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios 1881". Madrid: Imprenta del Colegio Nacional de Sordomudos y de Ciegos, 1882, pp. 135-151.

Biblioteca Nacional. "Anuario del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios 1882". Madrid: Imprenta del Colegio Nacional de Sordomudos y de Ciegos, 1883, pp. 91-100.

Las Bibliotecas Nacionales en Francia y España. Examen comparativo de sus fondos. "Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos", tomo 6, 1876, pp. 142-153.

Bibliotecas Populares, Depósito de Libros, Propiedad Intelectual y cambio internacional de publicaciones científicas y literarias. "Anuario del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios de 1881". Madrid: Imprenta del Colegio Nacional de Sordo-Mudos y de Ciegos, 1882, pp. 356-376.

Las Bibliotecas Públicas. "Boletín de Archivos, Bibliotecas y Museos". Órgano oficial del Montepío del Cuerpo Facultativo del ramo. Año I, nº1 (1896). Madrid: Imprenta del Colegio Nacional de Sordo-Mudos y Ciegos, 1896.

Biblioteca Universitaria de Madrid. "Anuario del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios de 1881". Madrid: Imprenta del Colegio Nacional de Sordo-Mudos y de Ciegos, 1882, pp. 152- 162.

BRETÓN Y OROZCO, Cándido. *Breve noticia de la Biblioteca Nacional*. Madrid: Imp. Aribau, 1876.

CARMONA DE LOS SANTOS, María. *La Universidad Central y su distrito: Fondos documentales en el Archivo Histórico Nacional*. Boletín de la ANABAD, XLVI (1996), nº 1, pp. 168-171.

CARRIÓN, Manuel. *La Biblioteca Nacional de Madrid, biblioteca hispánica*. "Revista de Información". Madrid: Comisión nacional española de cooperación con la UNESCO, nº 12, octubre-diciembre, 1977, pp. 47-56.

CASTELLANOS, Basilio Sebastián. *Origen de las Bibliotecas públicas Españolas y en particular de la Nacional de Madrid*. "El Bibliotecario, semanario histórico, científico, literario y artístico", 1, mayo de 1841.

- *Real Biblioteca de S. M. Memoria Histórica de la Biblioteca pública de Madrid y otros documentos para escribir la Historia de dicho Establecimiento*. Madrid, 1836, Tomo I.

CAYETANO MARTÍN, Carmen. *Archivos y Bibliotecas en Madrid (1868-1902)*. Madrid: Ayuntamiento de Madrid. Área de Cultura, Educación, Juventud y Deportes. Instituto de Estudios Madrileños del Consejo Superior de investigaciones Científicas. Aula de Cultura, 1995.

CONDE VILLAYERDE, M^a Luisa. *Archivo General de la Administración*. En *Gran Enciclopedia de España*, Zaragoza, 1991.

- *Fuentes documentales de la Administración Central: El Archivo General de la Administración*. "Studia Histórica. Historia Contemporánea". Vol. VI y VII, 1988-1989.

CONTEL BAREA, M^a Concepción. *La creación del Archivo Histórico Nacional*. En GIMENO BLAY, F. M.; *Erudición y Discurso Histórico: Las Instituciones Europeas (S. XVIII-XIX)*. Valencia: Universidad de Valencia, 1993, pp. 233-246.

CRESPO NOGUEIRA, Carmen. *Los primeros cien años del Archivo Histórico Nacional (1866-1966)*. "Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos", LXXIII 1966, 2 pp. 286-319.

CRESPO TOBARRA, Carmen. *Ensayo de una bibliografía sobre la Biblioteca Nacional*. "Boletín de la ANABAD", XLII, 1992, pp. 229-243.

CRUZ HERRANZ, Luis Miguel de la. *Panorama de los archivos durante el siglo XIX y primer tercio del siglo XX*. En GENERELO, Juan José y MORENO LÓPEZ, Ángeles, coordinadores. *Historia de los Archivos y de la Archivística en España*. Valladolid: Secretariado de Publicaciones e Intercambio Científico, Universidad de Valladolid, 1998, pp. 119-160.

DÍAZ Y PÉREZ, Nicolás. *Las bibliotecas de España en sus relaciones con la educación popular y la instrucción pública*. Madrid: Tip. nº 6. Hernández, 1885.

- *Las bibliotecas en España*. En “Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos”, 1885.

ESCOLAR SOBRINO, Hipólito. *La Biblioteca Real (1712-1813)*. Madrid: Artes Gráficas Municipales, 1971.

- *Historia social del libro*. Madrid: Asociación Nacional de Bibliotecarios, Archiveros y Arqueólogos, 1974-1975, 4v.
- *La Biblioteca Nacional*. En *Primeras Jornadas de Bibliografía*. Madrid: Fundación Universitaria Española, 1977, pp. 671-681.
- *Las bibliotecas y el libro al iniciarse el siglo XX*. “Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos”. Tomo 82, 1979, pp. 59-84.
- *La Biblioteca Nacional de España*. Madrid: Dirección General de Bellas Artes Archivos y Bibliotecas, 1981.
- *Dos mil años de pensamiento bibliotecario español*. Madrid: Dirección General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas, D.L. 1982.
- *Menéndez Pelayo, director de la Biblioteca Nacional*. Homenaje a Luis Morales Oliver, Madrid: 1986, pp. 607-622.
- *Historia de las Bibliotecas*. Salamanca: Fundación Germán Sánchez Ruipérez, Madrid: Pirámide, 1987.
- *El compromiso intelectual de bibliotecarios y editores*. Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez y Ediciones Pirámide, 1989.

ESCUADERO DE LA PEÑA, José María. *Secciones del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios*. "Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos", nº 6, 15 de mayo de 1871, pp. 82-84.

- *Los archivos provinciales*. "Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos", nº 15, 30 de septiembre de 1871, pp. 225-229.
- *Los Archivos de Simancas y Alcalá*. "Revista de Madrid", 1883, vol.VI, pp. 144-159.

ESTELRICH, Juan Luis. *Biblioteca Provincial de Cádiz. Noticia de su fundación y vicisitudes*. "Revista de Archivos Bibliotecas y Museos", XIX, pp. 227-241 y 392-401; XX, pp. 81-90 y 430-438; XXI, pp. 90-101 y 321-329; 1908.

FAUS SEVILLA, Pilar. *La lectura pública en España y el Plan de Bibliotecas de María Moliner*. Madrid: ANABAD, 1990.

FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Cecilia. *La Universidad Española y sus Bibliotecas*. Boletín de la ANABAD, XLI (1990), nº 2-3 abril-septiembre, pp. 259-272.

FUENTE COBOS, Concepción de la. *El Archivo y Biblioteca del Departamento. Su itinerario histórico y contenido*. "Boletín de Información del MOPU", Año 1981, marzo 279, pp. 34-40.

GALLARDO y BLANCO, Bartolomé José. *Propuesta sobre la Biblioteca Nacional de Cortes*. Madrid: Imp. D. M. Calero, 1838.

GALLEGO DOMÍNGUEZ, Olga y LÓPEZ GÓMEZ, Pedro. *Los archivos históricos provinciales en su cincuentenario*. En "Boletín de la ANABAD", XXXII, nº 1-2, 1982.

GANDARIAS ALONSO DE CELIS, Sofía. *El Archivo del Congreso de los Diputados*. Madrid: Congreso de los Diputados. Dirección de Estudios y Documentación de la Secretaría General, 1999.

GARCÍA CUADRADO, Amparo. *Aproximación a la organización bibliotecaria española en el siglo XVIII*. Investigación Bibliotecológica. Revista semestral; julio-diciembre 1997, vol. 11, núm. 23 México, CUIB-UNAM, pp. 102-136.

GARCÍA EJARQUE, Luis. *La Biblioteca Nacional Española de Cortes y su último reglamento*. En Homenaje a Justo García Morales. Miscelánea de estudios con motivo de su jubilación. Madrid: ANABAD, 1987.

- *Biblioteca Nacional de España*. "Boletín de la ANABAD", XLII, 1992, 3-4 pp. 203-255.
- *Historia de la lectura pública en España*. Gijón: Trea, 2000, 533 p.

GARCÍA MORALES, Justo. *La Biblioteca Real (1712-1836)*. Madrid: Ayuntamiento de Madrid, 1971.

GARCÍA SACRISTÁN, Pilar. *Manual de Bibliotecas y Documentación*. Madrid: Fundación Friedrich Elbert, 1977.

GESTA Y LECETA, Marcelino. *Bibliotecas públicas*. En "Boletín Histórico". Año III, nº 8, Madrid, 1882.

GONZALO, Miguel Ángel y MACIÁ, Mateo. *La Legislación Española de Bibliotecas*. "Boletín de ANABAD" XLI (1990) nº 2-3.

HERRERO GUTIÉRREZ, Rosario. *La Biblioteca del Senado*. Madrid, 1982, 111 p.

Instalación de la Biblioteca Nacional en el Palacio de Recoletos. "Boletín de Archivos, Bibliotecas y Museos". Órgano Oficial del Montepío del Cuerpo Facultativo del Ramo. Año 1, nº 1 (1896) de 15 de abril. Madrid: Imprenta del Colegio Nacional de Sordo-Mudos y Ciegos, pp. 9-10.

JOVELLANOS. *Instrucción u ordenanza para la nueva Escuela de Matemáticas, Física, Química, Mineralogía y Náutica de Gijón*, [17-?].

MARTÍN ABAD, Julian. *Crecimiento de la colección de manuscritos de la Biblioteca Nacional en el siglo XIX: Breves apuntes para una Historia necesaria*. En "Boletín de la ANABAD", XLII (1992), nº1, enero-marzo.

MARTÍN GONZÁLEZ, Alicia. *La Biblioteca del Congreso de los Diputados*. "Revista de las Cortes Generales", nº 18, tercer cuatrimestre, 1989.

MARTÍN SARMIENTO, Benedictino. *Reflexiones literarias para una biblioteca real y para otras bibliotecas públicas hechas por el R. F. Mtro. F. Martín Sarmiento, Benedictino, en el mes de diciembre del año 1743*. En: *Semanario erudito* que comprende varias obras inéditas, críticas, morales, instructivas políticas, históricas, satíricas y jocosas de nuestros mejores autores antiguos y modernos dadas a la luz por Antonio Valladares, t. XXI.

MÁRQUEZ CRUZ, Guillermo. *Sociología de la lectura pública en España en el proceso de modernización: De los orígenes de la organización bibliotecaria a la burocratización de la lectura (1808-1939)*. "Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios", 1988, año 4, n. 12-13; pp. 23-50.

MATEU IBARS, Josefina. *Aportación bibliográfica para el estudio de las Bibliotecas Universitarias Españolas*. "Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos", 1959, LXV.

MELGARES MARÍN, J. *Archivo General Central. Resumen de los fondos ingresados en este Archivo durante el año 1898*. "Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos", 3-1899, pp. 48-49.

MESTRE, Antonio. *Historia cultural de la Real Biblioteca*. En MAYÁNS Y SISCAR, Gregorio. *Epistolario VII. Mayáns y Martínez Pingarrón, I. Historia cultural de la Real Biblioteca. Transcripción, estudio preliminar y notas de...* Valencia: (Publicaciones del Ayuntamiento de Oliva, 16); pp.7-75.

- *Real Biblioteca y política cultural*. En MAYÁNS Y SISCAR, Gregorio. *Epistolario IX. Mayáns y Martínez Pingarrón, 3. Real Biblioteca y política cultural. Transcripción, estudio preliminar y notas de...* Valencia: (Publicaciones del Ayuntamiento de Oliva, 18); pp.7-37.

MIGUEL ALONSO, Aurora. *Del Plan Pidal a la Ley Moyano: Consolidación de la Biblioteca de la Universidad Central*. En *Estudios históricos: homenaje a los profesores José María Jover y Vicente Palacio Atard*. Madrid: Departamento de Historia Contemporánea, Facultad de Geografía e Historia, Universidad Complutense, 1990; pp. 681-701.

- *La Biblioteca de los Reales Estudios de San Isidro: (Su historia hasta la integración en la Universidad Central)*. Madrid: Fundación Universitaria Española, 1996, 233 p.

MILLARES CARLO, Agustín. *Historia del libro y de las bibliotecas*. México: Fondo de Cultura Económica, 1988.

MORÓN Y LIMINIANA, Jesús. *La Biblioteca Nacional (Madrid). Su fundación en 29 de diciembre de 1711*. En *Escenas contemporáneas...* Bajo la dirección de D. Manuel Ovilo y Otero. Nueva época, 1865, año X, tomo 1, Madrid: Imprenta del Colegio de Sordomudos y Ciegos, 1865, pp. 145-147.

ORTIZ DE BURGOS, José. *El primer bibliotecario de las Cortes*. "Boletín de Información Bibliográfica y Parlamentaria de España y el Extranjero", nº, 2, 3, 4 y 5, 1933.

PAZ ESPESO, Julián. *Biblioteca Nacional: Reseña histórica*. En *Guía histórica y descriptiva de los Archivos, Bibliotecas y Museos de España que están a cargo del Cuerpo Facultativo del ramo*, publicada bajo la dirección de D. Francisco Rodríguez Marín. Madrid: Tipografía de la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1916.

- *Más datos sobre el nombramiento de Menéndez Pelayo como director de la Biblioteca Nacional*. "Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos", nº 62, 1956, pp. 69-72.

PESCADOR DEL HOYO, M^a del Carmen. *El Archivo General de la Administración*. "Boletín de la Dirección General de Archivos y Bibliotecas", 133-134, 1973, pp. 213-221.

PESET Y CÁMARA, J.M.: *Archivo Histórico Nacional*. Madrid: Historia 16, año VII, n. 74.

PESET REIG, M. y PESET REIG, J.L.: *La Universidad Española (S. XVIII y XIX). Despotismo ilustrado y revolución liberal*. Madrid, 1974.

PICATOSTE, Felipe. *Memoria sobre las Bibliotecas populares*. Madrid: Imprenta Nacional 1870.

PRIETO CARO, I.: *Los archivos provinciales de Hacienda, 1881-1981*. En *Las Delegaciones de Hacienda: su historia (1881-1981)*. Madrid, 1981, pp. 813- 826.

RODRÍGUEZ DE DIEGO, José Luis. *Archivos de la Administración Central desde el s. XV al s. XX*. IRARGI, Ano II, 1989. Bergara, 1991.

SALAS LARRAZÁBAL, Carmen. *Prólogo*. En SERRA NAVARRO, Pilar. *Guía del Archivo Central. Ministerio del Interior*. Madrid: Ministerio de Cultura. Subdirección General de Archivos, 1981

SALAVERT, Vicente. *La Biblioteca del Congreso de los Diputados. Notas para su historia (1811-1936)*. Congreso de los Diputados, 1983, 244p.

SAN SEGUNDO MANUEL, Rosa. *Sistemas de organización del conocimiento: La organización del conocimiento en las bibliotecas españolas*. Madrid: Universidad Carlos III de Madrid. Boletín Oficial del Estado, 1996, 317 p.

SÁNCHEZ BELDA, Luis. *Archivo General de la Administración Española*. "Boletín de Dirección General de Archivos y Bibliotecas", 1956, julio-agosto, 38, pp. 6-8.

SÁNCHEZ BELDA, Luis. *Presidencia del Gobierno*. En *Guía de los Archivos de Madrid*. Prólogo de Francisco Sintés y Obrador. Madrid: Director General de Archivos y Bibliotecas. Servicio de Publicaciones del Ministerio de Educación Nacional, 1952.

SÁNCHEZ MARIANA, Manuel. *Biblioteca Nacional. Fondos histórico-eclesiásticos*. En *Diccionario de Historia Eclesiástica de España*, dir. por Quintín Aldea Vaquero, Tomás Marín Martínez, José Vives Gatell. Madrid: Instituto Enrique Florez, 1987. Suplemento I.

SANTA MARÍA Y RAMÍREZ, C. *Archivo General Central de Alcalá de Henares (Fondos del mismo)*. "Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos", I, 1871, pp. 26-28.

SAINZ RODRÍGUEZ, Pedro. *Don Bartolomé José Gallardo y la crítica literaria de su tiempo*. "Revue Hispaniques", LI, Nueva York, 1921.

TORRE REVELLO, José. *Archivo General Central de Alcalá de Henares*. Reseña histórica y clasificación de sus fondos. Buenos Aires: Universidad, Instituto de Investigaciones históricas, 1926.

TORRES CAMPOS, Manuel. *Las bibliotecas en España*. "Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos". Tomo 6, 20 de marzo de 1877, pp. 71-88, y tomo 7, 1877, pp. 82-83 y 103-106.

TROST Y BARCELÓ, Valeriano. *La Biblioteca Nacional: (Una visita al Palacio de Recoletos)*. "Heraldo de Madrid", año V, nº 1415, de 22 de septiembre de 1894.

VALLE DE JUAN, M^a Ángeles. *El archivo del Senado en sus documentos*. Conferencia pronunciada en el Convegno Europeo Degli Archivi Storici Parlamentari, que tuvo lugar en Roma del 22 al 25 de marzo de 1993.

VACA, Domingo. *La Biblioteca Nacional*. "Revista crítica de Historia y Literatura españolas, portuguesas e hispanoamericanas". I, 1896, pp. 161-162.

VIÑAO FRAGO, A.: *A la cultura por la lectura. Las bibliotecas populares (1869-1885)*. “Clases populares, cultura y Educación”. Siglos XIX y XX. Casa Velázquez, Madrid: UNED, 1989.

VIGNAU Y BALLESTER, V. *El Archivo Histórico Nacional*. Discursos leídos ante la Real Academia de la Historia en la recepción pública del día 19 de junio de 1898. Madrid: Tip. De la viuda e hijos de Tello, 1898.

2.2. Disposiciones legislativas³⁴²

2.2.1. Disposiciones generales

- Constitución de Bayona de 8 de julio de 1808.
- Decreto de 22 de mayo de 1810 creando una Comisión de Cortes para que se ocupe de las cuestiones pertinentes a la primera sesión.
- Decreto I de 24 de septiembre de 1810, declaración de la legítima constitución de las Cortes y de su soberanía: nuevo reconocimiento del rey D. Fernando VII de Borbón y anulación de su renuncia a la corona. División de poderes, reservándose las Cortes el legislativo con responsabilidad del ejecutivo por parte de las Secretarías de Despacho y habilitación de la Regencia.
- Decreto de 27 de noviembre de 1810 aprobando el primer Reglamento parlamentario.
- Decreto XXIV de 16 de enero de 1811 aprobando el Reglamento provisional del Poder Ejecutivo.
- Decreto de 17 de diciembre de 1811 sobre establecimiento de la Secretaría de las Cortes.
- Decreto CXXXVIII de 18 de marzo de 1812 publicación de la Constitución política de la Monarquía española de 1812.
- Decreto de 19 de marzo de 1812 regulando la subida al trono del Rey Fernando VII.

³⁴² Proceden de las obras citadas en el epígrafe 1.2.2. sobre Fuentes legislativas

- Decreto I de 25 de septiembre de 1813 sobre la instalación de las Cortes ordinarias con arreglo a la Constitución política de la Monarquía.
- Orden de 24 de marzo de 1814 anunciando la entrada de Fernando VII en España y jurando la Constitución de la Monarquía.
- Manifiesto del Rey de 4 de mayo de 1814 declarando por nula y ningún valor la Constitución de las llamadas Cortes generales y extraordinarias de la nación.
- Orden de 6 de julio de 1820 para constitución de las Cortes ordinarias de la Nación Española de los años 1820 y 1821 en su primera legislatura.
- Decreto de 9 de julio de 1820 por el que el Rey jura pública y solemnemente la Constitución en las Cortes Generales.
- Real Provisión de 29 de septiembre de 1833 dando noticia del fallecimiento del Rey Fernando VII y la Regencia de S.M. la Reina Gobernadora en nombre y durante la minoría de edad de su hija Isabel II.
- Estatuto Real de 10 de abril de 1834.
- Real Orden de 1 de junio de 1834 suprimiendo monasterios, conventos y demás congregaciones religiosas.
- Real Decreto de 11 de octubre de 1835 aprobando la desamortización eclesiástica y suprimiendo las comunidades religiosas con la excepción de las que se dedicaban a la enseñanza de los niños pobres y a la asistencia de los ancianos y procediendo a la incautación y venta en subasta pública de sus bienes.
- Real Decreto de 8 de marzo de 1836 suprimiendo monasterios, conventos y demás congregaciones religiosas.
- Real Orden Circular de 22 de septiembre de 1836 mandando que los Reales

Decretos, ordenes e instrucciones sean obligatorios desde el momento de su publicación en la Gaceta.

- Constitución política de la Monarquía Española proclamada en Madrid el 18 de junio de 1837.
- Real Orden de 31 de octubre de 1839 por la que se comunica y circula el Real Decreto de suspensión de Cortes.
- Real Decreto de 11 de octubre de 1840 disolviendo las Cortes.
- Ley de 9 de septiembre de 1857 regulando la Instrucción pública.
- Constitución de la Monarquía Española de 23 de mayo de 1845.
- Constitución de la Monarquía Española de 1 de junio de 1869.
- Ley de 5 de junio de 1869 promulgando y prestando juramento a la Constitución.
- Constitución de la Monarquía Española de 30 de junio de 1876.

2.2.2. Estructura administrativa, legislación, política de archivos y bibliotecas en el siglo XIX

- Decreto del Gobierno de José Bonaparte de 6 de febrero de 1809 en el que se señalan las atribuciones de la Secretaría de Estado y demás Ministerios confiando al Ministerio de Interior las cuestiones relativas a la administración civil del reino y fomento absorbiendo las funciones administrativas y políticas del Consejo de Castilla

- Decreto CX de 17 de diciembre de 1811 estableciendo una Secretaría de las Cortes. Habrá una Secretaría de Estado con el título de Secretaría de las Cortes, compuesta de 5 oficiales y de un archivero con las mismas prerrogativas que para los oficiales de Secretaría del Despacho de Gracia y Justicia.
- Decreto CXXIV de 21 de enero de 1812 creando el nuevo Consejo de Estado con 20 miembros.
- Decreto de 22 de enero de 1812 creando la Regencia del Reino.
- Decreto CXXIX de 20 de enero de 1812 dando nuevo reglamento a la Regencia del Reino.
- Decreto de 26 de enero de 1812 derogando el que con fecha de 16 de enero se dio al Consejo de Regencia.
- Orden de 28 de julio de 1812 aprobando la planta de las Secretarías del Consejo de Estado.
- Decreto LXV de 10 de abril de 1814 aprobando la planta de la Secretaría de Estado y del Despacho de la Gobernación de la Península.
- Decreto de 4 de mayo de 1814 la Secretaría de Estado y del Despacho nombra los ministros para el Despacho de las Secretarías de Estado.
- Real Decreto de 27 de mayo de 1814 restableciendo el Consejo Real en el pie, por ahora, tal y como estaba en el año 1808, nombrando presidente y ministros que le han de componer.
- Real Decreto de 5 de junio de 1814 restableciendo el Consejo de la Cámara bajo el pie en que se hallaba en 1808.
- Real Decreto de 20 de julio de 1814 comunicado por el Secretario de Estado y del

Despacho al Ministro de la Guerra relativo a que habiéndose determinado que corran por las Secretarías de Estado los negocios que por ellas respectivamente se despachaban en el año 1808 se suprima la del Despacho de la Gobernación de la Península.

- Real Orden de 27 de enero de 1815 por la que el Rey ordena que se restablezca la Universidad de Orihuela.
- Real Orden de 31 de enero de 1815 por la que se manda establecer en diferentes provincias del reino seis cátedras de agricultura para dar gratuitamente la enseñanza teórica y práctica de esta ciencia.
- Circular de 8 de septiembre de 1819 del Ministerio de la Guerra por la que se hace extensiva a los oficiales archiveros de las Secretarías de Estado la prerrogativa concedida a los oficiales de las mismas para que ocurriéndoles dar alguna declaración lo efectúen por medio de certificado.
- Decreto XI de 14 de agosto de 1820 aprueba la planta de la Secretaría de Estado y del Despacho de la Gobernación de la Península.
- Decreto de 29 de junio de 1821 que regula la Dirección general de Estudios.
- Decreto XXX de 7 de febrero de 1823 aprobando el reglamento para la secretaría y archivo de las Cortes.
- Decreto de 27 de mayo de 1823 aboliendo la Constitución y anulando las Secretarías de Gobernación de la Península y Ultramar creándose en su lugar la Secretaría del Interior.
- Real Decreto de 19 de noviembre de 1823 ordenando la formación de un Consejo que se denominará de Ministros formado por los Secretarios de Estado y del Despacho.
- Real Decreto de 2 de diciembre de 1823 nombrando los Secretarios de Estado y del Despacho en cada uno de los Ministerios.

- Real Decreto de 5 de noviembre de 1832 de la Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y su Consejo. Se manda establecer la Secretaría de Estado y del Despacho del Fomento General del Reino.
- Real Decreto de 5 de noviembre de 1832 mandando que el Secretario del Despacho de Hacienda proponga a S.M. la planta que ha de tener la del Fomento General del Reino.
- Real Decreto de 9 de noviembre de 1832 de la Secretaría de Estado y del Despacho del Fomento General del Reino dando la forma y atribuciones que ha de tener la misma. La planta recoge, entre otros, a un oficial archivero. Serán de la incumbencia y atribuciones de esta Secretaría, entre otras, la instrucción pública; las universidades; colegios académicos; la inspección general de instrucción pública y los Reales Archivos de Simancas, Sevilla, Barcelona y Valencia.
- Real Decreto de 23 de noviembre de 1832 señalando los empleos subalternos de la Secretaría del Despacho de Fomento dotaciones y ascensos que han de tener.
- Real Decreto de 29 de septiembre de 1833 por el que la Regencia confirma en sus cargos a los Secretarios de Estado y Despacho confirmando al Conde de Ofalia como Secretario de Estado del Despacho de Fomento que llevaba desde el 4 de enero del mismo año sin decreto que lo estableciese.
- Real Decreto de 21 de octubre de 1833 que nombra a Francisco Javier de Burgos como Secretario de Estado y del Despacho de Fomento.
- Real Orden de 20 de marzo de 1834 fijando las facultades de los subdelegados de Fomento en materia de instrucción pública.
- Real Decreto de 17 de abril de 1834 que nombra a José M^a Moscoso de Altamira, Secretario de Estado y del Despacho de Fomento sustituyendo a Javier de Burgos.
- Real Decreto de 13 de mayo de 1834 por el cual el ministerio creado con la denominación de Secretaría de Estado del Despacho del Fomento General del Reino tendrá desde ahora el título de Secretaría de Estado del Despacho del Interior con las mismas atribuciones declaradas por el Real Decreto de 9 de

noviembre de 1832. La sección que se llamó de Fomento se denominará en lo sucesivo del Interior.

- Real Decreto de 16 de junio de 1834 dando nueva planta a las Secretarías del Despacho.
- Real Decreto de 17 de febrero de 1835 renuncia de José M^a Moscoso y nombramiento interino de Diego Medrano como Secretario del Despacho de Interior.
- Real Decreto de 2 de abril de 1835 primer nombramiento de subsecretario en el Ministerio de Fomento.
- Real Decreto de 9 de abril de 1835 del Secretario de Estado y del Despacho de Interior. En virtud de lo previsto en el Real Decreto de 16 de junio de 1834 se establece que esta Secretaría se compondrá de 6 secciones; de la sección de la Secretaría General dependerá el archivo y registro. La sección de Instrucción Pública entenderá de todo lo relativo a universidades, escuelas, colegios, estudios de ciencias físicas y académicas, imprentas, archivos, bibliotecas, museos.
- Real Decreto de 4 de diciembre de 1835 mandando que el Ministerio de Interior se denomine en adelante Secretaría de Estado y del Despacho de la Gobernación del Reino; la Sección de Interior pasará a denominarse Sección de la Gobernación del Reino.
- Real Decreto de 4 de diciembre de 1835 sobre arreglo de la Secretaría de Estado de la Gobernación del Reino.
- Real Decreto de 2 de octubre de 1836 sobre el nuevo arreglo de la Secretaría de Estado y del Despacho de la Gobernación de la Península.
- Real Decreto de 8 de octubre de 1836 restableciendo interinamente la Dirección General de Estudios según la Constitución.

- Real orden de 29 de octubre de 1836 disponiendo el traslado de la Universidad de Alcalá de Henares a Madrid.
- Real Decreto de 31 de agosto de 1837 incluyendo la exposición presentada a S.M. acerca de la organización de la Secretaría del Despacho de la Gobernación y la aprobación de la planta que en ella se propone.
- Real Decreto de 15 de enero de 1838 nombrando empleados de la secretaría, archivo y contaduría del Ministerio de la Gobernación de la Península con arreglo a la nueva planta dada a dicha secretaría.
- Real Decreto de 1 de septiembre de 1838 dando nueva organización a la Dirección general de Estudios.
- Real Decreto de 1 de junio de 1843 suprimiendo la Dirección general de Estudios. Se crea un Consejo de Instrucción pública.
- Resolución de 2 de junio de 1843 creando en el Ministerio de la Gobernación una Sección de Instrucción pública.
- Real Decreto de 29 de diciembre de 1843 dando nueva organización a la Secretaría del Ministerio de la Gobernación.
- Real Decreto de 28 de agosto de 1844 aprobando la planta de la Secretaría del ministerio de la Gobernación de la Península.
- Real Decreto de 17 de septiembre de 1845 que aprueba el Plan de Estudios relativo a las enseñanzas secundaria y superior.
- Real Decreto de 28 de enero de 1847 creando el Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras Públicas, reflejando lo siguiente: Se crea un nuevo ministerio con la denominación de Secretaría de Estado y del Despacho de Comercio, Instrucción y Obras Pública que agrupa los ramos de Beneficencia, Obras Públicas e Instrucción del Ministerio de la Gobernación.

- Real Decreto de 5 de febrero de 1847 designando las atribuciones y ramos que abraza el Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras Públicas.
- Real Decreto de 25 de febrero de 1847 reformando la planta de la Secretaría del Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras Públicas.
- Real Decreto de 5 de noviembre de 1847 creando una Junta superior directiva de archivos del Ministerio de Gracia y Justicia, y disponiendo la formación de otras subalternas.
- Real Orden de 6 de noviembre de 1847 dictando reglas sobre organización de la Junta superior directiva para la conservación de archivos creada por Real Decreto de 5 de noviembre de 1847.
- Real Orden de 1 de diciembre de 1848 creando la Dirección general de los Archivos de España y Ultramar.
- Real Orden de 4 de julio de 1851 determinando qué personas deben ser autorizadas para expedir las copias o certificaciones de documentos que existen en los archivos del Ministerio de Gracia y Justicia así como la forma y modo de su extensión.
- Real Decreto de 20 de octubre de 1851 estableciendo el Ministerio de Fomento e incorporando al de Gracia y Justicia el ramo de Instrucción Pública.
- Real Decreto de 12 de noviembre de 1851 suprimiendo la Dirección General de Instrucción Pública y encargando al Subsecretario del Ministerio de Gracia y Justicia las funciones que correspondían al Director General.
- Real Decreto de 5 de diciembre de 1851 poniendo en armonía el negociado de Instrucción Pública con los demás del Ministerio de Gracia y Justicia cuya planta se decretó en 10 de junio último.

- Real Orden de 13 de diciembre de 1851 declarando aplicables a los jefes de sección del negociado de Instrucción Pública lo dispuesto en el Real Decreto de 10 de junio de 1851 del Ministerio de Gracia y Justicia.
- Real Decreto de 16 de enero de 1852 encomendando al Ministerio de Fomento el Colegio de Sordo-mudos y las Cátedras de Paleografía.
- Real Decreto de 21 de enero de 1852 fijando la planta general de la Secretaría del Ministerio de Fomento.
- Real Decreto de 30 de enero de 1852 creando una comisión que proponga a S.M. un proyecto de ley en el que se establezca el Plan de Instrucción Pública.
- Real Orden de 30 de octubre de 1852 dictando reglas para que tenga cumplido efecto, por lo respectivo al Ministerio de Gracia y Justicia y sus dependencias, lo dispuesto en el Real Decreto de 18 de junio anterior acerca de las categorías de los empleados de la administración activa.
- Real Decreto de 2 de noviembre de 1853 reformando la planta de la Secretaría del Ministerio de Gracia y Justicia.
- Real Decreto de 9 de agosto de 1854 disponiendo la planta del Ministerio de la Gobernación.
- Real Decreto de 11 de agosto de 1854 disponiendo la planta del Ministerio de Gracia y Justicia.
- Real Decreto de 24 de febrero de 1855 reformando la planta de la Secretaría del Ministerio de Gracia y Justicia; se suprime la plaza de subsecretario del Ministerio de Gracia y Justicia.
- Real Decreto de 17 de junio de 1855 determinando que el ramo de Instrucción Pública que dependía del Ministerio de Gracia y Justicia dependa en adelante del Ministerio de Fomento. Pasan a este Ministerio los negociados de Instrucción Pública, la Dirección y el Consejo de Instrucción Pública.

- Real Decreto de 1 de agosto de 1855 mandando se incluya en la planta del Ministerio de Fomento el personal de que constaba la Dirección General de Instrucción Pública.
- Real Decreto de 17 de diciembre de 1856 en el que se manda incorporar a la Dirección General de Instrucción Pública los ramos dependientes del Ministerio de Fomento que correspondían a la Dirección antes de transferirlos al Ministerio de Gracia y Justicia
- Real Orden de 27 de marzo de 1857 mandando que todos los autores o editores de obras de texto presenten para su revisión dos ejemplares en el Ministerio de Fomento.
- Real Decreto de 15 de octubre de 1857 admitiendo la dimisión del cargo de Ministro de Fomento a Claudio Moyano.
- Real Decreto de 17 de julio de 1858 disponiendo que las Bibliotecas y Archivos sujetos al Ministerio de Fomento dependan inmediatamente de la Dirección General de Instrucción Pública y dando las reglas convenientes para la organización del personal de Bibliotecas y Archivos.
- Real Decreto de 12 de mayo de 1859 dictando reglas que deben tenerse presentes para la formación del Cuerpo de Archiveros y Bibliotecarios, clasificación de sus individuos y primeros ascensos que hubieran de concederse.
- Real Decreto de 20 de julio de 1859 que aprueba el Reglamento general para la Administración y el régimen de la Instrucción pública
- Real Decreto de 11 de diciembre de 1862 por el que se dispone que el Director General de Instrucción quede encargado de la presidencia de la Junta Superior de Archivos y Bibliotecas.
- Real Orden de 7 de julio de 1863 declarando que corresponde a la Dirección general de Instrucción pública el nombramiento de los empleados facultativos a que se refieren el artículo 242 de la ley de 9 de septiembre de 1857 y el 33 del Real decreto de 14 de marzo de 1860.

- Real Decreto de 4 de noviembre de 1863 disponiendo que algunos Directores Generales, como el de Instrucción Pública, ejerzan en los asuntos de sus Direcciones respectivas, las atribuciones que competen a los Subsecretarios de los demás Ministerios.
- Real Orden de 30 de noviembre de 1863 disponiendo que el negociado de asuntos generales en el Ministerio de Fomento dependa de la Dirección general de Instrucción Pública.
- Real Decreto de 11 de agosto de 1864 dando nueva forma a la planta del Ministerio de Fomento.
- Real Orden de 18 de julio de 1866 fijando la planta del Ministerio de Fomento.
- Real Decreto de 9 de octubre de 1866 que reorganiza el Consejo de Instrucción Pública.
- Real Decreto de 14 de octubre de 1866 aprobando el reglamento del Real Consejo de Instrucción Pública.
- Real Decreto de 17 de junio de 1868 reorganizando las secciones del Real Consejo de Instrucción Pública.
- Decreto de 10 de octubre de 1868 disolviendo el Consejo de Instrucción Pública, modificado por Real Decreto de 9 de octubre de 1866.
- Decreto de 13 de octubre de 1868 fijando la nueva plantilla para la Secretaría del Ministerio de Fomento.
- Decreto de 15 de enero de 1869 suprimiendo la plantilla administrativa del Consejo de Instrucción Pública y creando una sección en la Dirección General del ramo para el despacho de los expedientes relativos al extinguido Consejo.

- Decreto de 20 de junio de 1869 creando la Secretaría de la Regencia y de la Estampilla.
- Decreto de 20 de septiembre de 1869 creando una Comisión que proponga lo más oportuno para la reorganización del Ministerio de Fomento.
- Decreto de 17 de septiembre de 1870 aprobando el adjunto reglamento para el gobierno interior de las secciones de Fomento.
- Circular de 15 de enero de 1871 manifestando a los Directores del Ministerio de Fomento los propósitos del Ministerio acerca de los importantes ramos que abraza aquel departamento.
- Real Decreto de 6 de febrero de 1871 dando nueva organización a la Secretaría del Ministerio de Fomento y fijando la plantilla del personal.
- Real Decreto de 13 de julio de 1871 creando una Junta Consultiva de Instrucción Pública.
- Real Decreto de 15 de septiembre de 1871 aprobando el adjunto reglamento para el gobierno interior de las Secciones de Fomento.
- Real Decreto de 8 de diciembre de 1871 modificando los artículos 34 y 44 del reglamento para el gobierno interior de las Secciones de Fomento.
- Real Decreto de 16 de febrero de 1872 derogando el de 20 de octubre último relativo a la inamovilidad de los empleados de la Secretaría del Ministerio de Fomento.
- Real Decreto de 16 de febrero de 1872 aprobando reglamento de la Junta Consultiva de Instrucción Pública.
- Real orden de 20 de mayo de 1872 disponiendo que por la Dirección general de

Instrucción pública se entregue al Ateneo científico, literario y artístico de Madrid un ejemplar de cada una de las obras que se hayan adquirido o adquieran con los fondos destinados al fomento de las letras y de las artes.

- Real Decreto de 18 de julio de 1872 derogando el Real Decreto de 13 de julio de 1871 y disolviendo la Junta Consultiva de Instrucción Pública.
- Decreto de 16 de febrero de 1873 reformando la planta de la Secretaría del Ministerio de Fomento.
- Decreto de 12 de marzo de 1873 modificando la plantilla de la Secretaría del Ministerio de Fomento y suprimiendo la plaza de Subsecretario creada recientemente.
- Decreto de 20 de junio de 1873 reorganizando la plantilla del personal del Ministerio de Fomento.
- Orden de 5 de agosto de 1873 del Gobierno de la República modificando las plantas del personal de la Secretaría y Archivo del Ministerio de Hacienda.
- Decreto de 1 de octubre de 1873 creando en la Presidencia del Poder Ejecutivo una Sección que se denominara Cancillería encargada de registrar los despachos, cédulas, patentes y cuantos documentos deba llevar la firma del Jefe del Estado.
- Orden de 25 de noviembre de 1873 acordando la provisión de las plazas de Jefe del Archivo y las de Oficiales primero y segundo de la Biblioteca del Ministerio de Gracia y Justicia y aprobando las reglas para los ejercicios de oposición a dichas plazas en la forma que se consignan.
- Decreto de 22 de marzo de 1874 reorganizando la plantilla de la Secretaría del Ministerio de Fomento y suprimiendo el Negociado llamado Central.
- Decreto de 26 de abril de 1874 aprobando el Reglamento para el régimen interior del Ministerio de Fomento.

- Decreto de 29 de mayo de 1874 reorganizando la Secretaría de Fomento.
- Decreto de 12 de junio de 1874 restableciendo el Consejo de Instrucción Pública.
- Real Decreto de 17 de julio de 1874 aprobando el Reglamento del Ministerio de Fomento.
- Decreto de 5 de enero de 1875 reorganizando la planta del personal del Ministerio de Fomento.
- Decreto de 9 de enero de 1875 confirmando en sus cargos y atribuciones a los actuales Ministros y disponiendo que continúen ejerciéndolos durante la ausencia de Su Majestad.
- Real Orden de 20 de abril de 1875 aprobando el reglamento adjunto para el orden de los trabajos del Ministerio de la Gobernación.
- Real Decreto de 29 de enero de 1876 disponiendo que desde principio del corriente año se publique semanalmente un Boletín Oficial del Ministerio de Fomento, dependiente de la Dirección general de Agricultura, Industria y Comercio.
- Real Decreto 13 de abril de 1877 aprobando el Reglamento del Consejo de Instrucción Pública.
- Real Decreto de 11 de julio de 1877 refundiendo en dos las tres Direcciones que dependen del Ministerio de Fomento.
- Real Decreto de 10 de diciembre de 1880 restableciendo las tres Direcciones Generales dependientes del Ministerio de Fomento que por Real Decreto de 11 de julio de 1877 se redujeron a dos; estas tres Direcciones Generales son: Instrucción Pública, Agricultura, Industria y Comercio y una tercera la de Obras Públicas.

- Real Orden de 12 de septiembre de 1881 creando dos Bibliotecas para las Direcciones generales de Instrucción Pública y Obras Públicas.
- Real Decreto de 8 de octubre de 1883 reorganizando la planta del personal de este Ministerio y estableciendo el modo de cubrir las vacantes en el mismo.
- Real Decreto de 6 de diciembre de 1883 organizando la plantilla del Ministerio de Fomento.
- Real Decreto de 8 de febrero de 1884 organizando la plantilla del personal del Ministerio de Fomento.
- Real Decreto de 10 de enero de 1884 disponiendo que el Archivo del Ministerio de Fomento se incorpore a la Dirección General de Instrucción Pública y que los empleados del mismo pasen al escalafón del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios.
- Real Decreto de 1 de febrero de 1884 disponiendo que el Archivo del Ministerio de Fomento dependa del Negociado Central por no considerarle importante para figurar entre los que están bajo la custodia del Cuerpo Facultativo.
- Real Decreto de 7 de mayo de 1886 suprimiendo, desde el 1 de julio, el Ministerio de Fomento y creando otros dos: Ministerio de Instrucción Pública y de Ciencias, Letras y Bellas Artes y el Ministerio de Obras Públicas, Agricultura, Industria y Comercio. En su artículo 4 establece las divisiones del archivo del actual Ministerio.
- Real Orden de 14 de junio de 1886 disponiendo que los autores o editores que deseen introducir en España obras en castellano, impresas en el extranjero, remitan una hoja bibliográfica de ella a la Dirección general de Instrucción Pública.
- Real Decreto de 2 de agosto de 1886 creando en el Ministerio de Fomento y bajo su dirección un Boletín Oficial de la Propiedad intelectual e industrial.

- Real Decreto de 2 de agosto de 1886 concediendo a los Consejeros de Instrucción Pública categoría de Jefes Superiores de la Administración Civil.
- Real Decreto de 1 de abril de 1887 aprobando el reglamento para el régimen interior de las Secciones provinciales de la Administración de Fomento.
- Circular de 31 de diciembre de 1887 dictando disposiciones aclaratorias acerca de las Secciones de Fomento.
- Real Decreto de 27 de agosto de 1888 disponiendo que la Biblioteca agrícola pase a depender de la Dirección General de Instrucción Pública, y que sea servida por individuos del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios.
- Real Decreto de 1 de agosto de 1889 fijando la plantilla de la Secretaría y Direcciones generales del Ministerio de Fomento.
- Real Orden de 7 de febrero de 1890 dictando reglas para la adquisición de obras científicas libros, cuadros y objetos de arte por el Ministerio de Fomento.
- Real Decreto de 23 de abril de 1890 estableciendo el Reglamento provisional de procedimiento administrativo que ha de regir en el Ministerio de Fomento en cumplimiento de lo previsto en la Ley de 19 de octubre de 1889 hasta la publicación del definitivo.
- Real Decreto de 1 de mayo de 1890 que aprueba el Reglamento para el régimen interior del Ministerio de Fomento.
- Real Decreto de 14 de julio de 1890 restableciendo las disposiciones del reglamento de 1 de abril de 1887 para el régimen interior de las Secciones provinciales de Fomento.
- Real Decreto de 31 de julio de 1890 disponiendo que el Negociado Central del Ministerio dependa de una de las Direcciones y suprimiendo la Comisión de Gobierno interior cuyas funciones serán desempeñadas por el Negociado Central.

- Ley de 30 de junio de 1894 disponiendo que los Archivos, Bibliotecas y Museos dependientes de la Presidencia de Consejo de Ministros o de los Ministerios de Fomento, Hacienda, Gobernación, Gracia y Justicia, Ultramar y demás Centros de naturaleza análoga, sean servidos por personal del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios.
- Real Decreto de 28 de junio de 1895 aprobando el adjunto reglamento para el régimen interior del Ministerio de Fomento.
- Real Decreto de 11 de octubre de 1898 reorganizando el Consejo de Instrucción Pública.
- Real Decreto de 27 de octubre de 1898 aprobando el Reglamento para el régimen interior del Ministerio de Fomento.
- Real Decreto de 5 de marzo de 1899 disponiendo que el Negociado Central dependa de una de las Direcciones generales y suprimiendo la Comisión de gobierno interior.

2.2.3. El Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios

- Real orden de 29 de octubre de 1850 por la que se manda enviar la documentación conservada en las dependencias provinciales del ramo a la Real Academia de la Historia.
- Real Orden de 15 de diciembre de 1853 disponiendo que la Memoria correspondiente a este año y que deben redactar los bibliotecarios de las Universidades contenga los datos que se expresan y un cuadro arreglado al adjunto modelo.
- Ley de 9 de septiembre de 1857 de Instrucción pública.

- Real Decreto de 17 de julio de 1858 sobre clasificación de Archivos y Bibliotecas. Creación del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, y del Archivo General Central del Reino.
- Decreto de 12 de mayo de 1859 dictando reglas que deben tenerse presentes para la formación del Cuerpo de Archiveros y Bibliotecarios, clasificación de sus individuos y primeros ascensos que hubieran de concederse.
- Real Decreto de 29 de agosto de 1859 disponiendo que la presidencia de la Junta de Archivos y Bibliotecas quede unida al cargo de Director de la Biblioteca Nacional.
- Real Decreto de 11 de diciembre de 1862 por el que se dispone que el Director General de Instrucción quede encargado de la presidencia de la Junta Superior de Archivos y Bibliotecas.
- Real Orden de 7 de julio de 1863 declarando que corresponde a la Dirección general de Instrucción pública el nombramiento de los empleados facultativos a que se refieren el artículo 242 de la ley de 9 de septiembre de 1857 y el 33 del Real decreto de 14 de marzo de 1860
- Real Orden de 26 de octubre de 1865 mandando proveer por oposición la plaza de Archivero Bibliotecario de la Dirección de Hidrografía y prefijando sus obligaciones.
- Real Decreto de 20 de marzo de 1867 creando el Museo Arqueológico.
- Real Decreto de 12 de junio de 1867 reformando el Cuerpo al incorporarse la sección de Anticuarios.
- Decreto de 10 de noviembre de 1868 derogando el Decreto de 12 de junio de 1867 que reformó el cuerpo de Bibliotecarios y Archiveros.
- Orden circular de 6 de abril de 1869 disponiendo que los Rectores de las Universidades comisionen a los Catedráticos de cada Universidad y a los

miembros del Cuerpo de Bibliotecarios y Archiveros que estén al servicio de esa Biblioteca para que redacten una Memoria histórica de la Universidad respectiva.

- Orden de 7 de enero de 1870 dictando varias disposiciones relativas al ingreso y antigüedad de los Oficiales del Cuerpo de Secciones-archivo en el escalafón del de Estado Mayor de Plazas.
- Orden de 8 de junio de 1870 aprobando las adjuntas plantillas para los establecimientos que están a cargo del Cuerpo de Bibliotecarios, Archiveros y Anticuarios.
- Orden de 6 de octubre de 1870 autorizando a los jefes de las Bibliotecas, Archivos y Museos, para nombrar Aspirantes, y fijando las circunstancias que en estos han de concurrir.
- Real Decreto de 5 de julio de 1871 aprobando el Reglamento orgánico del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios y establecimientos de él dependientes.
- Real Orden de 18 de julio de 1871 modificando el artículo 47 del Reglamento del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios y resolviendo que puedan ascender, por concurso, en categoría con sólo poseer un título académico.
- Orden de 4 de junio de 1873 aplicando en la forma que se expresa la cantidad consignada en el presupuesto vigente para aumento del personal del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios.
- Real Decreto de 12 de febrero de 1875 reorganizando el Cuerpo Facultativo de Archivos, Bibliotecas y Anticuarios restableciendo el Real Decreto orgánico de 12 de junio de 1867.
- Real Decreto de 12 de marzo de 1875 derogando el artículo 21 del Real Decreto orgánico del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios de 12 de junio de 1867 en la parte que se refiere a los dos años de servicio en cada categoría para pasar a la superior inmediata.

- Real Decreto de 16 de abril de 1875 disolviendo la Junta consultiva de Archivos Bibliotecas y Museos y reorganizándola con el nombre de Junta facultativa de Bibliotecas, Archivos y Museos de antigüedades.
- Ley de 21 de julio de 1876 estableciendo que en todos los empleos de la Administración civil se ascienda pasando de una clase a la superior inmediata.
- Real Decreto de 25 de marzo de 1881 aprobando el Reglamento del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios.
- Real Decreto de 25 de marzo de 1881 suprimiendo las plazas llamadas de gracia en todas las categorías, grados y secciones y estableciendo que el ingreso en la última categoría de Ayudantes se verifique por rigurosa oposición.
- Real Decreto de 26 de julio de 1881 convocando las primeras oposiciones a ingreso en el Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios.
- Real Orden de 11 de mayo de 1883 reorganizando la plantilla del personal Facultativo del Archivo general de Indias de Sevilla.
- Real Decreto de 10 de enero de 1884 disponiendo que el Archivo del Ministerio de Fomento se incorpore a la Dirección General de Instrucción Pública y que los empleados del mismo pasen al escalafón del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios.
- Real Decreto de 1 de febrero de 1884 disponiendo que el Archivo del Ministerio de Fomento dependa del Negociado Central.
- Real Decreto de 12 de octubre de 1884 reorganizando el Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios.
- Real Orden de 18 de marzo de 1885 dictando reglas para el ascenso de los individuos del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios.

- Real Decreto de 19 de junio de 1885 aprobando el adjunto reglamento del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, redactado con arreglo a las bases que establece el Real decreto de 12 de octubre de 1884.
- Real Decreto de 18 de noviembre de 1887 aprobando el Reglamento del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios y de los Establecimientos que del mismo dependen.
- Real Orden de 21 de noviembre de 1887 disponiendo que los Escribientes adscritos como Aspirantes al Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, continúen desempeñando sus plazas con el sueldo que disfrutaban pero sin figurar en el Cuerpo hasta que reúnan las condiciones necesarias para ascender a la categoría de Ayudantes.
- Real Decreto de 9 de diciembre de 1887 agregando a la Dirección General de Instrucción Pública y a cargo del Cuerpo de Archiveros, el Archivo del Ministerio de Fomento.
- Circular de 31 de diciembre de 1887 dictando disposiciones aclaratorias acerca de las Secciones de Fomento.
- Real Decreto de 31 de julio de 1888 dejando a cargo del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios los servicios de los Archivos de Hacienda.
- Real Decreto de 27 de agosto de 1888 disponiendo que la Biblioteca agrícola pase a depender de la Dirección General de Instrucción Pública, y que sea servida por individuos del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios.
- Real Decreto de 1 de septiembre de 1888 dictando reglas para el mejor cumplimiento de cuanto dispone el Decreto de 31 de julio que confió al Cuerpo facultativo la reorganización de los Archivos provinciales de Hacienda.
- Real Orden de 6 de diciembre de 1888 dictando disposiciones relativas a los ascensos por turno de antigüedad en el Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios.

- Real Orden de 7 de diciembre de 1888 dictando reglas para el ingreso en el Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios.
- Real Orden de 21 de diciembre de 1888 dictando disposiciones relativas a los individuos del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios que se nombren para plazas en los Archivos de Hacienda.
- Real Decreto de 20 de diciembre de 1889 disponiendo que los ascensos en el Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios se den por orden de antigüedad, con arreglo a la Ley de 21 de julio de 1876.
- Real Decreto de 23 de agosto de 1890 rectificando la plantilla del Cuerpo de Archiveros fijada en la Ley Presupuestaria de 29 de junio del mismo año.
- Real Orden de 28 de julio de 1891 incorporando el Museo de Arqueología de Toledo al Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios.
- Real Orden de 1 de febrero de 1892 derogando las Reales órdenes de 22 de diciembre de 1884, de 20 de febrero de 1885 y de 6 de diciembre de 1888 relativas a los ascensos en los Cuerpos de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios y disponiendo que los ascensos de estos empleados facultativos no sean efectivos hasta el día de la toma de posesión del nuevo destino en el Cuerpo a que pertenezcan.
- Real Decreto de 19 de junio de 1892 concediendo a los cesantes del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, siempre que no lo sean por sentencia ejecutoria, expediente, renuncia o morosidad, poder reclamar en el plazo de dos meses su reposición y pasando a ser colocados en el último lugar de sus respectivos grados en las vacantes naturales que ocurran.
- Real Orden de 5 de octubre de 1892 reflejando que la toma de posesión de los miembros del Cuerpo sea en la fecha de nombramiento.
- Real Orden de 14 de enero de 1893 disponiendo la formación de los Catálogos de los Archivos, Bibliotecas y Museos por los jefes de los Establecimientos servidos por el Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios.

- Real Orden de 28 de febrero de 1893 declarando que no comprende al Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios la Real orden de 14 de marzo de 1891 que prohíbe sean destinados a Madrid los empleados facultativos que no hayan cumplido cuatro años de servicios en provincias.
- Real Orden de 29 de marzo de 1893 disponiendo que cuando por causa justificada falte en algún establecimiento el individuo del Cuerpo de Archiveros y Bibliotecarios encargado de aquel, sea sustituido durante su ausencia por otro individuo del Cuerpo de los que sirvan en la misma localidad y en los puntos donde hubiese más de dos dependencias del Cuerpo.
- Real Decreto de 5 de agosto de 1893 confiando al Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios la reorganización y servicios del Archivo general del Ministerio de Hacienda, cuyo personal dependerá del Ministerio de Fomento.
- Real Decreto de 21 de diciembre de 1893 incorporando el Archivo general del Ministerio de Hacienda al Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, dependiente de la Dirección general de Instrucción Pública.
- Ley de 30 de junio de 1894 disponiendo que los Archivos, Bibliotecas y Museos dependientes de la Presidencia de Consejo de Ministros o de los Ministerios de Fomento, Hacienda, Gobernación, Gracia y Justicia, Ultramar y demás Centros de naturaleza análoga, sean servidos por personal del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios.
- Real Orden de 30 de junio de 1894 disponiendo la incorporación del personal en el Cuerpo de empleados de los Archivos, Bibliotecas y Museos.
- Real Orden de 9 de julio de 1894 disponiendo la incorporación al Cuerpo facultativo de Archivos los miembros del Archivo del Ministerio de la Gobernación.
- Ley de 29 de julio de 1894 determinando las condiciones para el ingreso en el Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios.

- Real Orden de 7 de agosto de 1894 dictando reglas para el cumplimiento de lo preceptuado en la Ley de 30 de junio.
- Real Orden de 18 de diciembre de 1894 determinando la forma y condiciones en que se ha de publicar el Escalafón del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios
- Real Orden de 1 de marzo de 1895 declarando que los destinos de Bibliotecarios y Archiveros de las Diputaciones provinciales se hallen exceptuados de las disposiciones de la ley de 10 de julio de 1895.
- Real Orden de 5 de julio de 1895 incorporando al Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios la Biblioteca de la Comisión del mapa geológico de España.
- Real Orden de 7 de agosto de 1895 dictando reglas referentes a la distribución del personal del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios y las reglas para el mejor servicio y régimen en las Bibliotecas y Archivos universitarios.
- Real Orden de 28 de octubre de 1895 dejando sin efecto la de 1 de febrero de 1892 derogatoria de la de 22 de diciembre de 1884 y disponiendo que los ascensos por antigüedad en el Cuerpo de Ingenieros de Caminos se entiendan conferidos desde el día siguiente al que ocurra la vacante, cuyo precepto se hará extensivo a los Ingenieros de Minas, Montes y Agrónomos y a los Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios.
- Real Orden de 24 de diciembre de 1895 reconociendo el derecho que tiene un aspirante a ingresar en el Cuerpo de Archiveros.
- Real Orden de 10 de enero de 1896 fijando el sentido legal de las condiciones que han de tener los empleados que se agreguen al Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, determinando las atribuciones de las Diputaciones provinciales y Municipios para nombrar funcionarios para sus Archivos, Bibliotecas y Museos, e incorporando varias Bibliotecas de Institutos de segunda enseñanza.

- Real Orden de 28 de febrero de 1896 disponiendo la forma de hacer periódicamente el reparto de obras y publicaciones que ingresen en los Depósitos de libros dependientes de este Ministerio entre las Bibliotecas Públicas servidas por el Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios.
- Real Orden de 12 de marzo de 1897 dictada para la interpretación de cuanto preceptúa el artículo 23 del Reglamento de 18 de noviembre de 1887 del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios.
- Real Orden de 27 de mayo de 1897 aprobando las adjuntas plantillas para la distribución del personal del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios en los establecimientos que se expresan.
- Real Orden de 30 de julio de 1897 fijando el cuadro de asignaturas para la carrera Diplomática en las secciones de Archivos, Bibliotecas y Museos.
- Real Orden-circular de 24 de octubre de 1898 considerando con derecho a desempeñar los cargos activos en los Archivos y Bibliotecas provinciales a los que posean títulos académicos de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, aunque no hayan ingresado en el Cuerpo.
- Real Decreto de 27 de octubre de 1898 aprobando el Reglamento para el régimen interior del Ministerio de Fomento.
- Real Orden de 25 de febrero de 1899 disponiendo que los cargos de Archiveros o Bibliotecarios provinciales o municipales no puedan ser desempeñados sino por los que posean el título correspondiente o justifiquen derechos adquiridos.

2.2.4. La enseñanza de las disciplinas documentarias

- Decreto de 30 de abril de 1810 mandando cerrar las universidades y colegios.
- Decreto de 28 de enero de 1811 creando, a propuesta del Ministro de Interior, una Junta Consultiva de Instrucción Pública y Educación.
- Decreto LVIII de 16 de abril de 1811 mandando abrir las universidades y colegios.
- Real Decreto de 15 de febrero de 1815 nombrando S.M. la formación de la Junta para crear un Plan general de estudios y asegurar la instrucción pública.
- Real Resolución de 3 de agosto de 1818 derogando el Plan de estudios de 1807 e implantando el de 1771.
- Circular de 27 de octubre de 1818 mandando que el Plan de estudios de 1807 quede derogado y subsista por ahora el de 1771.
- Decreto VI de 6 de agosto de 1820 restableciendo el Plan de estudios publicado en cédula de 12 de julio de 1807.
- Real Decreto de 29 de junio de 1821 aprobando el Reglamento General de Instrucción Pública. Creación de Bibliotecas públicas en cada Universidad.
- Real Decreto de 18 de febrero de 1824 restableciendo la junta de Ministros para que forme un plan general de estudios nombrando los miembros que la han de componer.
- Real Orden de 14 de octubre de 1824 aprobando el Plan literario de estudio y arreglo general de la Universidad del Reino.

- Real Decreto de 9 de noviembre de 1832 transfiriendo las competencias de Instrucción pública al Ministerio de Fomento.
- Real Orden de 20 de marzo de 1834 fijando las facultades de los subdelegados de Fomento en materias de instrucción pública.
- Real Decreto de 25 de septiembre de 1834 suprimiendo la Inspección General de Instrucción Pública y creando una Dirección General de Estudios. Las facultades de la Dirección general se fijarán por Decreto una vez aprobado el Plan de Estudios.
- Real Decreto de 4 de diciembre de 1835 mandando que el Ministerio de Interior se denomine en adelante Secretaría de Estado y del Despacho de la Gobernación del Reino. La Sección de Interior pasará a denominarse Sección de la Gobernación del Reino.
- Real Decreto de 4 de agosto de 1836 aprueba el Plan General de Instrucción Pública.
- Real Orden de 4 de septiembre de 1836 por la que se suspende la ejecución del nuevo Plan de Estudios anterior.
- Real Decreto de 8 de octubre de 1836 que restablece interinamente la Dirección general de Estudios según la Constitución.
- Real Orden de 29 de octubre de 1836 aprobando el nuevo Plan General de Estudios.
- Real Decreto de 1 de septiembre de 1838 dando nueva organización a la Dirección General de Estudios.
- Real Decreto de 1 de enero de 1841 creando un Boletín Oficial de Instrucción Pública.

- Real Decreto de 28 de enero de 1842 promoviendo circulación del Boletín Oficial de Instrucción Pública.
- Real Resolución de 31 de enero de 1842 dirigida a promover la circulación del Boletín Oficial de Instrucción pública.
- Real Resolución de 15 de julio de 1842 encargando la reorganización de las carreras literarias y reforma de las universidades.
- Real Resolución de 1 de junio de 1843 suprimiendo la Dirección general de Estudios.
- Real Resolución de 11 de junio de 1843 para que las órdenes del Gobierno relativas a instrucción pública se cumplan desde que aparezcan en la Gaceta.
- Real Resolución de 29 de diciembre de 1843 dando nueva organización a la Secretaría del ministerio de la Gobernación.
- Real Decreto de 17 de septiembre de 1845 aprobando el Plan de Estudios.
- Real Decreto de 22 de octubre de 1845 aprobando el Reglamento para la ejecución del plan de estudios de 17 de septiembre de 1845.
- Real Decreto de 28 de enero de 1847 creando el Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras Públicas.
- Real Decreto de 5 de febrero de 1847 designando las atribuciones y ramos que abraza el Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras Públicas.
- Real Decreto de 8 de julio de 1847 modificando el Plan de Estudios de 1845.

- Real Decreto de 19 de agosto de 1847 aprobando el Reglamento de ejecución del plan de estudios de 1847.
- Real Decreto de 7 de marzo de 1849 aprobando el Reglamento del Real Consejo de Instrucción Pública.
- Real Orden de 24 de diciembre de 1849 creando comisiones para el arreglo de la Biblioteca Nacional y de las Bibliotecas Universitarias.
- Real Orden de 21 de agosto de 1850 distribuyendo las asignaturas de las facultades de medicina, farmacia, jurisprudencia y teología con arreglo al plan vigente.
- Real Decreto de 28 de agosto de 1850 reformando el Plan de Estudios de 1847.
- Real Orden de 10 de septiembre de 1851 mandando observar y cumplir el reglamento para la ejecución del plan de estudios decretado en 28 de agosto de 1850.
- Real Decreto de 20 de octubre de 1851 estableciendo el Ministerio de Fomento e incorporando al de Gracia y Justicia el ramo de Instrucción Pública.
- Real Decreto de 12 de noviembre de 1851 suprimiendo la Dirección General de Instrucción Pública y encargando al Subsecretario del Ministerio de Gracia y Justicia las funciones que correspondían al Director General.
- Real Decreto de 5 de diciembre de 1851 poniendo en armonía el negociado de Instrucción Pública con los demás del Ministerio de Gracia y Justicia cuya planta se decretó en 10 de junio último.
- Real Decreto de 10 de septiembre de 1852 aprobando el Reglamento de estudios de 1851.

- Real Decreto de 17 de junio de 1855 determinando que el ramo de Instrucción Pública que dependía del Ministerio de Gracia y Justicia, dependa en adelante del Ministerio de Fomento. Pasan a este Ministerio los negociados de Instrucción Pública, la Dirección y el Consejo de Instrucción Pública.
- Real Decreto de 1 de agosto de 1855 mandando se incluya en la planta del Ministerio de Fomento el personal de que constaba la Dirección General de Instrucción Pública.
- Ley de 17 de julio de 1857 autorizando al Gobierno para formar y promulgar una ley de instrucción pública.
- Real Orden de 22 de julio de 1857 nombrando las personas que han de componer la Junta encargada de examinar la Ley de Instrucción Pública.
- Ley de 9 de septiembre de 1857 de Instrucción Pública.
- Real Decreto de 10 de septiembre de 1857 suprimiendo el Real Consejo de Instrucción Pública para reorganizarlo según lo previsto en la Ley de Instrucción Pública de 9 de septiembre de 1857.
- Real Decreto de 23 de septiembre de 1857 aprobando las disposiciones provisionales para la ejecución de la Ley de Instrucción Pública. Contempla los programas de las carreras de Diplomática y Notariado.
- Real Decreto de 24 de diciembre de 1857 aprobando el Reglamento del Real Consejo de Instrucción Pública.
- Real Decreto de 20 de septiembre de 1958 aprobando los programas generales de estudios de las carreras universitarias y Escuelas como la de Diplomática.
- Real Decreto de 22 de mayo de 1859 aprobando el Reglamento de la Universidad del Reino.

- Real Decreto de 20 de julio de 1859 aprobando el Reglamento General para la administración y régimen de la Instrucción Pública.
- Real Decreto de 4 de noviembre de 1863 disponiendo que algunos Directores Generales, entre otros el de Instrucción Pública, ejerzan en los asuntos de sus Direcciones respectivas las atribuciones que competen a los Subsecretarios de los demás Ministerios.
- Real Orden de 20 de julio de 1866 prescribe el exacto cumplimiento de la Ley de Instrucción Pública.
- Real Decreto de 9 de octubre de 1866 reorganizando el Consejo de Instrucción Pública.
- Real Decreto de 14 de octubre de 1866 aprobando el Reglamento de desarrollo del Real Consejo de Instrucción Pública.
- Real Decreto de 17 de junio de 1868 reorganizando las secciones del Real Consejo de Instrucción Pública.
- Decreto de 10 de octubre de 1868 disolviendo el Consejo de Instrucción Pública modificado en 9 de octubre de 1866.
- Decreto de 15 de enero de 1869 suprimiendo la plantilla administrativa del Consejo de

Instrucción Pública y creando una sección en la Dirección General del ramo para el despacho de los expedientes relativos al extinguido Consejo.

- Decreto de 13 de julio de 1871 creando una Junta Consultiva de Instrucción Pública.

- Real Decreto de 16 de febrero de 1872 aprobando Reglamento de la Junta Consultiva de Instrucción Pública.
- Real Decreto de 18 de julio de 1872 derogando el Real Decreto de 13 de julio de 1871 y disolviendo la Junta Consultiva de Instrucción Pública.
- Decreto de 2 de junio de 1873 reorganizando la enseñanza de las actuales Facultades de Filosofía y Letras y de Ciencias exactas, físicas y naturales.
- Orden de 21 de junio de 1873 aplazando la aplicación de los decretos sobre reorganización de las Facultades de Filosofía y Letras y Ciencias y de la segunda enseñanza.
- Decreto de 10 de septiembre de 1873 declarando en suspenso la ejecución de los Decretos de 2 y 3 de junio último, relativos a la nueva organización de los estudios de la segunda enseñanza, de las Facultades de Filosofía y Letras y de Ciencias exactas, físicas y naturales.
- Decreto de 12 de junio de 1874 restableciendo el Consejo de Instrucción Pública.
- Decreto de 29 de julio de 1874 regulando el ejercicio de la libertad de enseñanza.
- Orden de 6 de agosto de 1874 mandando llevar a efecto el decreto de 29 de julio último para regularizar el ejercicio de la libre enseñanza.
- Orden de 23 de octubre de 1874 determinando el modo de aprobar los estudios de Paleografía que se exigen a los alumnos del Notariado.
- Real Orden de 16 de agosto de 1876 disponiendo que los establecimientos libres de enseñanza no pueden usar las denominaciones de Instituto y Universidad.

- Real Decreto de 29 de diciembre de 1876 autorizando al Ministro de Fomento para que presente a las Cortes un proyecto de Ley de bases para la formación de una Ley de Instrucción Pública.
- Real Decreto 13 de abril de 1877 aprobando el Reglamento del Consejo de Instrucción Pública.
- Real Decreto de 11 de julio de 1877 refundiendo en dos las tres Direcciones que dependen del Ministerio de Fomento.
- Real Decreto de 30 de mayo de 1879 disponiendo que los profesores de las Escuelas Superiores constituyan 3 categorías en la misma forma, proporción y condiciones que las Facultades, en base a lo estipulado en la Ley 9 de septiembre de 1857.
- Real Decreto de 10 de diciembre de 1880 restableciendo las tres Direcciones Generales dependientes del Ministerio de Fomento que, por Real Decreto de 11 de julio de 1877, se redujeron a dos.
- Real Orden de 31 de diciembre de 1881 declarando que los profesores de la Escuela de Diplomática tienen opción al aumento de haber de 500 pesetas por cada cinco años de servicio en la enseñanza.
- Real Decreto de 2 de septiembre de 1883 disponiendo que las enseñanzas de la Facultad de Derecho serán comunes a las dos Secciones que hoy comprende y determinando las asignaturas que han de constituir las.
- Real Orden de 12 de septiembre de 1883 dictando disposiciones de las nuevas asignaturas comprendidas en la Facultad de Derecho.
- Real Decreto de 22 de noviembre de 1883 dictando reglas para dar validez académica a todos los estudios dependientes del ramo de Instrucción Pública conforme a un mismo reglamento de exámenes.

- Real Decreto de 16 de enero de 1884 reorganizando los estudios de la Facultad de Derecho.
- Real Decreto de 25 de enero de 1884 suspendiendo la ejecución de los Decretos de 16 de este mes sobre organización de los estudios de las Facultades de Derecho, Medicina y Farmacia.
- Real Decreto de 14 de agosto de 1884 disponiendo que constituyan la Facultad de Derecho las asignaturas que se determinan.
- Real Decreto de 24 de septiembre de 1886 reformando los estudios de la Facultad de Farmacia.
- Real Decreto de 2 de agosto de 1886 concediendo a los Consejeros de Instrucción Pública categoría de Jefes Superiores de la Administración Civil.
- Real Orden de 31 de agosto de 1889 interpretando el artículo 178 de la Ley de Instrucción Pública.
- Ley de 27 de julio de 1890 reorganizando el Consejo de Instrucción Pública.
- Real Decreto de 26 de julio de 1892 reduciendo las plantillas del personal y los créditos de material de los establecimientos dependientes de la Dirección de Instrucción pública, a cuyo fin se suprimen cátedras de varias asignaturas en las Facultades de Derecho, Filosofía y Letras y Ciencias. Se mantiene la cátedra de Bibliografía jurídicas.
- Circular de 25 de febrero de 1895 de la Dirección general de Instrucción Pública dando reglas para que los catedráticos de Ciencias Históricas, en unión de sus alumnos, practiquen excursiones de estudio e investigación a los Museos o Bibliotecas de la localidad o de otras localidades en donde puedan visitarse monumentos históricos.

- Real Orden de 3 de mayo de 1895 reformando el cuadro de analogías de las asignaturas de la Facultad de Derecho aprobado por Real orden de 17 de marzo de 1895.
- Real Decreto de 30 de septiembre de 1898 reformando los estudios de la Facultad de Filosofía y Letras.
- Real Decreto de 11 de octubre de 1898 reorganizando el Consejo de Instrucción Pública.

2.2.5. La Escuela Superior de Diplomática

- Real Decreto de 16 de enero de 1852 encomendando al Ministerio de Fomento el Colegio de Sordo-mudos y las Cátedras de Paleografía.
- Real Decreto de 7 de octubre de 1856 creando la Escuela de Diplomática y enseñanzas de Paleografía.
- Real Orden de 5 noviembre de 1856 disponiendo lo conveniente para la próxima apertura de la Escuela de Diplomática creada por el Real Decreto de 7 de octubre de 1856.
- Real Decreto de 11 de febrero de 1857 aprobando el reglamento para la Escuela de Diplomática.
- Ley de 17 de julio de 1857 autorizando al Gobierno para formar y promulgar una ley de instrucción pública.
- Ley de 9 de septiembre de 1857 de Instrucción Pública.

- Real Decreto de 23 de septiembre de 1857 dictando disposiciones necesarias para la adaptación de la Ley de Instrucción Pública.
- Real Decreto de 17 de julio de 1858 sobre clasificación de Archivos y Bibliotecas.
- Real Decreto de 20 de septiembre de 1858 regulando los programas generales de estudios de las carreras universitarias y Escuelas como la de Diplomática.
- Real Decreto de 16 de mayo de 1859 dictando varias disposiciones para la formación de escalafón de los catedráticos de las Escuelas Superiores como la de Diplomática.
- Real Decreto de 22 de mayo de 1859 aprobando el Reglamento de la Universidad del Reino.
- Real Decreto de 20 de julio de 1859 aprobando el Reglamento General para la administración y régimen de la Instrucción Pública.
- Real Decreto de 31 de mayo de 1860 aprobando el Reglamento de la Escuela Superior de Diplomática.
- Real Orden de 7 de julio de 1863 declarando competente a la Dirección general de Instrucción pública para nombrar profesores encargados de auxiliar a los Catedráticos.
- Real Decreto de 15 de julio de 1863 ampliando los estudios de la Escuela Superior de Diplomática y señalando las circunstancias que se requieren para ingresar en la misma.
- Orden de 29 de septiembre de 1863 disponiendo que la enseñanza de la Bibliografía se impartiese por los Bibliotecarios de la Nacional.

- Real Orden de 9 de mayo de 1865 resolviendo que para las pruebas periciales en cualquiera de los ramos que abraza la enseñanza de la Escuela de Diplomática sean llamados los que posean el título de aptitud para Archiveros Bibliotecarios salvo los derechos que en materias paleográficas puedan asistir a los Revisores y Lectores de letra antigua.
- Real Decreto de 9 de octubre de 1866 que reforma las Escuelas del Notariado, Diplomática, Ingeniería Industrial, Profesores mercantiles, Real Conservatorio de Música y Declamación, Bellas Artes, Náutica y Veterinaria.
- Real Orden de 10 de abril de 1867 incorporando a los Catedráticos de la Escuela Superior de Diplomática al Escalafón del Cuerpo Facultativo de Archiveros-Bibliotecarios.
- Real Decreto de 12 de junio de 1867 organizando las Bibliotecas públicas, los Archivos generales y los Museos arqueológicos.
- Decreto de 10 de noviembre de 1868 derogando el Real Decreto de 12 de junio de 1867 e incorporando a los Catedráticos de la Escuela como miembros del Cuerpo Facultativo.
- Decreto de 21 de noviembre de 1868 reformando la enseñanza de la Diplomática.
- Decreto de 21 de diciembre de 1868 facultando al Director de la Escuela de Diplomática para expedir el título de Bibliotecario Archivero y Anticuario.
- Real Orden de 13 de febrero de 1871 declarando que los Bibliotecarios, Archiveros y Anticuarios tengan la misma aptitud legal que los Revisores de letra antigua tenían por la Novísima recopilación para declarar en los Tribunales como peritos.
- Real Decreto de 5 de julio de 1871 aprobando el Reglamento orgánico del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios y establecimientos de él dependientes.

- Real Decreto de 18 de julio de 1871 estableciendo que para ascender en categoría se requiere el título de la Escuela de Diplomática o de la Facultad de Filosofía y Letras con la asignatura de Bibliografía o Arqueología.
- Decreto de 12 de marzo de 1873 suprimiendo el Cuerpo de Hijos-dalgo de la Nobleza de Madrid y disponiendo que el Archivo y todos los demás documentos de dicho Cuerpo pasen al Ayuntamiento de Madrid.
- Decreto de 2 de junio de 1873 reorganizando la enseñanza de las Facultades de Filosofía y Letras y de Ciencias exactas, Físicas y naturales.
- Real Decreto de 13 de agosto de 1880 ampliando la enseñanza en todos sus grados.
- Real Decreto de 25 de marzo de 1881 aprobando el Reglamento orgánico del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios.
- Real Orden de 17 de mayo de 1882 aprobando el Reglamento para las oposiciones a Cátedras de la Escuela Superior de Diplomática.
- Real Orden de 23 de febrero de 1883 disponiendo que los alumnos de la Escuela Superior de Diplomática que hayan hecho ejercicios para obtener el certificado de aptitud para Archivero, Bibliotecario y Anticuario, con posterioridad al decreto-ley de 21 de noviembre de 1868, se les expida, dicho título, libre de derechos.
- Real Decreto de 22 de noviembre de 1883 dictando disposiciones para la validez académica de los estudios privados de Diplomática.
- Real Decreto de 25 de septiembre de 1884 reorganizando los estudios de la Escuela Superior de Diplomática.
- Real Decreto de 19 de julio de 1885 aprobando el Reglamento del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios.

- Real Decreto de 18 de noviembre de 1887 aprobando el Reglamento del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios.
- Ley de 29 de julio de 1894 reconociendo el título de Archivero, Bibliotecario y Anticuario como uno de los dos válidos para ingresar por oposición en el Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios.
- Real Decreto de 12 de marzo de 1897 reorganizando los estudios de la Escuela Superior y especial de Diplomática, y disponiendo que el título profesional de la carrera se denomine de Archivero, Bibliotecario y Anticuario.
- Real Orden de 30 de julio de 1897 aprobando los cuadros de asignaturas de la carrera de Diplomática en las secciones de Archivos, Bibliotecas y Museos.
- Real Decreto de 20 de julio de 1900 regulando la supresión de la Escuela Superior de Diplomática.

2.2.6. Archivos y bibliotecas en el siglo XIX

- Decreto de 26 de agosto de 1809 publicado por José Napoleón para el traslado de la actual Biblioteca Nacional al convento de los Trinitarios Calzados.
- Resolución de 12 de marzo de 1811 mandando que los impresores remitieran los ejemplares de todas las obras y papeles que se impriman para colocarlos en el archivo y Biblioteca de las Cortes.
- Orden de 28 de agosto de 1812 mandando la remisión, a la Biblioteca de las Cortes, de listas de libros y manuscritos resultantes de represalias y confiscos.

- Decreto CCLIV de 23 de abril de 1813 mandando entregar a la Biblioteca de las Cortes dos ejemplares de todos los impresos de la Monarquía.
- Decreto CCCV de 13 de septiembre de 1813 concediendo a la Biblioteca de las Cortes la facultad de imprimir la Constitución con su tabla analítica.
- Decreto de 7 de marzo de 1814 por el que se crea las Bibliotecas públicas encomendándolas a la Dirección general de Estudios.
- Circular de 22 de junio de 1814 del Ministerio de la Gobernación de Ultramar advirtiendo a los Virreyes, Gobernadores y Capitanes generales suspender el envío de obras que se publiquen para la Biblioteca de las Cortes y continuando con lo previsto en el Decreto de 23 de abril de 1813.
- Real Orden de 4 de marzo de 1815 por la que la Real Biblioteca pasó a depender de la Mayordomía mayor de la Casa Real.
- Real Orden de 2 de junio de 1815 expedida por el Ministerio de la Guerra mandando formar en la Dirección de Ingenieros un archivo general de trabajos topográficos militares que suministre cuantas noticias se ofrezcan y convengan al bien del servicio y defensa de la Nación.
- Real Orden de 23 de febrero de 1819 comunicada por el Mayordomo mayor de S.M. al Ministro de Gracia y Justicia mandando que de todas las obras que se impriman y publiquen en todos los dominios de S.M. se entregue un ejemplar encuadernado a la Real Biblioteca.
- Real Decreto de 5 de octubre de 1819 por el que Fernando VII traslada la Biblioteca a lo que actualmente es la plaza Marina Española.
- Real Orden de 15 de noviembre de 1819 comunicada por el Ministerio de Hacienda a la Dirección General de Rentas donde se manda que los archivos y papeles que procedan de las Reales Fábricas de salitre, pólvora y azufre se entreguen para su custodia a los Administradores de rentas estancadas.

- Orden de 25 de julio de 1820 resolviendo que el archivo de la Diputación de Millones sea entregado al Archivero de la Secretaría de Cortes bajo el correspondiente inventario.
- Decreto LXXXVIII de 8 de noviembre de 1820 aprobando la planta del Archivo de la Secretaría del Despacho de Hacienda.
- Orden de 2 de mayo de 1821 del Secretario de Estado y del Despacho de Gracia y Justicia pidiendo al Gobierno que interviniera para tomar medidas y establecer archivos de protocolos y pleitos fenecidos.
- Orden de 11 de mayo de 1821 encargando al Gobierno que tome las más enérgicas y eficaces providencias para recoger y resguardar varios papeles interesantes de los distintos archivos del Reino.
- Decreto de 29 de junio de 1821 aprobando el Reglamento General de Instrucción Pública y recogiendo las Bibliotecas públicas en los centros de enseñanza.
- Orden de 29 de junio de 1822 autorizando al bibliotecario de las Cortes para activar la observancia de las ordenes y decretos relativos a la biblioteca de las mismas y reclamar los efectos de su pertenencia.
- Decreto XXX de 7 de febrero de 1823 aprobando el reglamento para la secretaría y archivo de las Cortes.
- Real Decreto de 19 de noviembre de 1823 creando el Archivo de la Presidencia de Gobierno llamado también de la Presidencia del Consejo de Ministros.
- Real Orden de 14 de octubre de 1824 aprobando el Plan literario de estudios y arreglo general de las Universidades del Reino.
- Real Decreto de 24 de marzo de 1836 aprobando el Reglamento sobre la organización de los fondos de los bienes desamortizados.

- Real Decreto de 29 de octubre de 1836 acordando el traslado a Madrid de la Universidad de Alcalá.
- Real Decreto de 25 de noviembre de 1836 y Real Orden de 26 de noviembre de 1836 por las cuales la Reina Gobernadora dispone que la Biblioteca Real, como todos los demás establecimientos literarios, estuviesen bajo la dirección y gobierno del Ministerio de la Gobernación de la Península.
- Real Decreto de 9 de febrero de 1837 restableciendo el Decreto que dispuso que se entregase a la Biblioteca de las Cortes dos ejemplares de cada obra que se imprima.
- Real orden de 22 de marzo de 1837 con el acuerdo de las Cortes para que se entregue a la Biblioteca Nacional un ejemplar de cada obra que se imprima.
- Real Orden de 27 de mayo de 1837 mandando establecer Bibliotecas públicas con fondos de los conventos suprimidos por la desamortización.
- Real Orden de 22 de marzo de 1838 mandando formar Bibliotecas en las capitales de provincia para utilizar riquezas literarias que contenían los conventos suprimidos.
- Ley de 21 de mayo de 1838 suprimiendo la Biblioteca de Cortes.
- Real Orden de 28 de junio de 1838 mandando que no se exija a los autores o editores los dos ejemplares que estaban designados para la biblioteca de las Cortes actualmente suprimida.
- Real Orden de 22 de septiembre de 1838 mandando formar bibliotecas públicas en las capitales de provincia para utilizar las riquezas literarias que contenían los conventos suprimidos.

- Real Decreto de 5 de agosto de 1841 mandando prevenir que se cumpla lo ordenado a libreros y autores con respecto al envío a la Biblioteca Nacional de un ejemplar de las obras que se publiquen.
- Real Resolución de 13 de julio de 1842 para que los jefes políticos remitan los inventarios de los efectos de literatura y artes que existan de los conventos y monasterios.
- Real Resolución de 27 de mayo de 1843 estableciendo en Cádiz una junta para la creación de un museo de pinturas y biblioteca.
- Orden de 30 de septiembre de 1843 mandando entregar, a la Biblioteca Nacional, un ejemplar de las obras que se impriman.
- Real Resolución de 28 de septiembre de 1843 sobre las bibliotecas públicas.
- Orden Circular de 20 de abril de 1844 sobre apertura de los Archivos del Reino a los investigadores.
- Real resolución de 20 de abril de 1844 sobre las licencias solicitadas por nacionales y extranjeros para registrar los archivos del reino.
- Real Orden de 20 de abril de 1844 dictando reglas referentes al franqueo de los documentos de los archivos.
- Real Resolución de 16 de mayo de 1844 del Ministerio de Gracia y Justicia encargando la reunión, custodia y conservación de todos los libros de registro, copiadore y Reales órdenes, para dar principio a la formación del archivo del ministerio fiscal.
- Real Orden de 2 de diciembre de 1845 acordando varias reglas para que los tribunales y archivos dependientes del Ministerio de Gracia y Justicia permitan reconocer y sacar copias de causas y otros documentos judiciales.

- Real Decreto de 12 de septiembre de 1847 creando un Archivo General del Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras Públicas.
- Real Orden de 20 de octubre de 1847 mandando que en las bibliotecas de provincias se forme un departamento especial para el uso de los militares.
- Real Decreto de 5 de noviembre de 1847 creando una Junta superior directiva de archivos del Ministerio de Gracia y Justicia y disponiendo la formación de otras subalternas.
- Real Orden de 6 de noviembre de 1847 dictando reglas sobre organización de la Junta superior directiva para la conservación de archivos.
- Real orden de 24 de diciembre de 1849 creando comisiones para el arreglo de las Bibliotecas Nacional y de las Universidades.
- Real Orden de 6 de enero de 1849 dictando disposiciones sobre entrega de ejemplares de las obras que se publiquen para la Biblioteca Nacional.
- Real Orden de 4 de enero de 1849 mandando que se remita a este Ministerio una noticia de las bibliotecas que existan en cada provincia.
- Real Orden de 12 de julio de 1849 dictando reglas referentes a la asistencia al cotejo de documentos en el Archivo de la Corona de Aragón.
- Real orden de 25 de junio de 1850 mandando llevar a efecto la formación de un solo archivo general del Ministerio de Hacienda.
- Real Orden de 18 de agosto de 1850 disponiendo que pasasen a la Academia de la Historia la documentación de los Archivos de las Ordenes Monásticas.
- Real Decreto de 26 de agosto de 1850 creando el Archivo Histórico Nacional.

- Real Decreto de 28 de agosto de 1850 dando a la Universidad de Madrid el título de Central.
- Real orden de 20 de marzo de 1851 pidiendo noticias a los Gobernadores acerca de las bibliotecas públicas de sus respectivas provincias.
- Real Decreto de 4 de julio de 1851 determinando las personas autorizadas para dar copias o certificaciones de documentos que existan en los archivos del Ministerio de Gracia y Justicia.
- Real Orden de 25 de enero de 1852 disponiendo que en lo sucesivo no se libre por los jefes de los archivos generales del reino copia ni testimonio de las escrituras depositadas en ellos sino en virtud de la oportuna Real Cédula.
- Real Orden de 30 de mayo de 1852 sobre exhibición de los documentos para practicar cotejos o compulsas de los documentos en las Oficinas del Estado.
- Real Orden de 27 de septiembre de 1852 dictando disposiciones para el arreglo de los archivos de las provincias que se han encomendado a las Contadurías de Hacienda.
- Real Decreto de 23 de febrero de 1853 dictado para reformar la plantilla del personal del Archivo de Indias de Sevilla.
- Real Orden de 20 de abril de 1853 acordando varias disposiciones para el arreglo de los Archivos generales de Hacienda de las provincias.
- Real Orden de 28 de diciembre de 1853 aprobando el adjunto Reglamento para las Secretarías de gobierno y archivos de las Audiencias.
- Real Orden de 15 de enero de 1854 aprobando la Instrucción para el régimen de los Archivos generales de la Hacienda pública de las provincias.

- Real Orden de 15 de febrero de 1854 mandando que se remitan al Ministerio estados semestrales de los trabajos practicados en los Archivos de cada Audiencia.
- Real Decreto de 12 de mayo de 1854 disponiendo que se proceda a hacer un arreglo en los Archivos de las Audiencias y creando, al efecto, una Comisión en cada una de ellas.
- Real Orden de 20 de mayo de 1854 mandando formar un índice de impresos y manuscritos de la Biblioteca Nacional.
- Real Decreto de 27 de septiembre de 1854 reorganizando la plantilla de la Biblioteca Nacional.
- Ley de 1 de mayo de 1855 de desamortización.
- Real Orden de 13 de junio de 1855 resolviendo que en los archivos de las Audiencias se agregue, a propuesta de la Academia de la Historia, un socio correspondiente que pueda facilitar a la misma los datos que necesite para enriquecer la historia de nuestro país.
- Real Orden de 10 de agosto de 1855 disponiendo puedan darse copias y testimonios de las escrituras depositadas en los archivos generales en virtud de orden del Director general de instrucción pública y sin necesidad de la Real Cédula que exigía la circular de 25 de enero de 1852.
- Circular de 8 de diciembre de 1855 adoptando varias disposiciones para la formación de los archivos de las Inspecciones de Instrucción primaria.
- Circular de 10 de julio de 1856 disponiendo lo que haya de practicarse para el arreglo de los Archivos generales de Hacienda Pública.
- Real Decreto de 14 de octubre de 1856 suspendiendo la ejecución de la ley de desamortización de 1 de mayo de 1855.

- Real Orden de 12 de noviembre de 1856 dictando varias disposiciones para evitar las dudas que puedan darse en la ejecución de los Reales decretos de 23 de septiembre y 14 de octubre últimos, sobre la venta de bienes el primero y el segundo sobre la ley de desamortización de 1 de mayo de 1856.
- Real Decreto de 3 de diciembre de 1856 reorganizando la Biblioteca Nacional.
- Real Decreto de 7 de enero de 1857 aprobando el nuevo Reglamento para el régimen de la Biblioteca Nacional.
- Real Orden de 8 de enero de 1857 disponiendo lo que se ha de observar por los Gobernadores de provincia, respecto al autor o editor de cualquier obra nueva para cumplir con lo previsto en el Reglamento de la Biblioteca Nacional sobre la publicación de un Boletín bibliográfico.
- Real Orden de 24 de enero de 1857 dictando reglas referentes a las medidas que deben tomarse para la conducción de los documentos de los Archivos.
- Ley de 9 de septiembre de 1857 de Instrucción pública.
- Circular de 1 de octubre de 1857 fijando los medios con que deben ser dotadas las corporaciones y personas que han sido privadas de parte o del todo de las rentas que les producían los bienes que han dejado de pertenecerles a consecuencia de la desamortización.
- Real Orden de 15 de noviembre de 1857 mandando que no se provea plaza vacante en los archivos y bibliotecas dependientes del Ministerio de Fomento hasta que no se dicten las disposiciones oportunas para el buen servicio de estos ramos y arreglo de su personal.
- Real Decreto de 17 de julio de 1858 disponiendo que las bibliotecas y archivos sujetos al Ministerio de Fomento dependan inmediatamente de la Dirección General de Instrucción Pública y dando las reglas convenientes para la organización del personal de Bibliotecas y Archivos. Se crea el Archivo general de la Administración en Alcalá de Henares.

- Real Decreto de 2 de octubre de 1858 restableciendo en su fuerza y vigor, para los efectos de la desamortización civil, la ley de 1 de mayo de 1855.
- Real Decreto de 8 de mayo de 1859 aprobando las bases para la organización de los

Archivos y Bibliotecas públicas del Reino.

- Real Orden de 10 de agosto de 1859 disponiendo lo conveniente respecto a la recaudación y empleo de las cantidades con que han de contribuir las provincias para gastos de personal y material de las bibliotecas públicas del reino.
- Circular de 8 de julio de 1861 mandando que las Bibliotecas universitarias, las de instituto y las provinciales estén abiertas todos los días del año, excepto los domingos.
- Real Orden de 25 de agosto de 1862 dando nueva redacción al artículo 17 de la real Instrucción de 15 de enero de 1854, sobre expedición de certificaciones por los Archiveros de Hacienda.
- Real Orden de 6 de febrero de 1865 disponiendo que los Notarios y Archiveros expidan a los investigadores de Propiedades y Derechos del Estado las copias, testimonios y certificaciones que soliciten cumpliendo con las formalidades que se prefijan.
- Real Orden de 15 de marzo de 1865 dictando varias reglas para organizar los archivos de las Direcciones generales de todas las armas del ejército.
- Real Orden de 9 de mayo de 1865 resolviendo que para las pruebas periciales, en cualquiera de los ramos que abraza la enseñanza de la Escuela de Diplomática, sean llamados los que posean el título de aptitud para Archiveros Bibliotecarios, salvando los derechos que en materias paleográficas puedan asistir a los Revisores y Lectores de letra antigua.

- Real Orden de 21 de febrero de 1866 disponiendo que los Jueces de primera instancia remitan a la Dirección del Registro de la Propiedad los datos que se expresan relativos a los depósitos de escrituras públicas existentes en poder de particulares y corporaciones.
- Real Decreto de 28 de marzo de 1866 organizando un Archivo Histórico Nacional. Se crea el Archivo General del Reino bajo la denominación de Archivo Histórico Nacional.
- Real Orden de 22 de septiembre de 1866 disponiendo que se abra al público la Biblioteca del Ministerio de Marina con arreglo a las prescripciones del adjunto reglamento.
- Real Decreto de 12 de junio de 1867 organizando las Bibliotecas Públicas, Archivos Generales y Museos Arqueológicos.
- Real Orden de 31 de diciembre de 1867 dictando varias disposiciones previas para la formación del reglamento orgánico de los archivos notariales.
- Real Decreto de 20 de marzo de 1867 mandando establecer un Museo Arqueológico nacional y varios provinciales.
- Decreto de 1 de enero de 1869 disponiendo que el Estado se incautase de todos los Archivos, Bibliotecas que estuviesen a cargo de las Catedrales, Cabildos, Monasterios u Ordenes Militares.
- Decreto-Ley de 8 de enero de 1869 disponiendo la creación de un Archivo general de protocolos en cada distrito notarial y dictando reglas para su formación y establecimiento.
- Orden de 18 de enero de 1869 dictando varias disposiciones para llevar a efecto lo mandado en el decreto de primero del corriente sobre incautación por el Estado de los objetos de ciencias, letras y artes que posea el clero y creando las Bibliotecas populares.

- Orden de 18 de septiembre de 1869 disponiendo la fundación de 20 Bibliotecas populares; dos en cada distrito universitario, y destinando, como base, el donativo de los libros que se expresan.
- Orden de 28 de septiembre de 1869 dictando varias disposiciones provisionales para la instalación, régimen y servicio de las bibliotecas populares.
- Orden de 4 de mayo de 1870 reorganizando y creando plazas en el Archivo del Ministerio de Fomento.
- Orden de 19 de octubre de 1870 determinando las formalidades para sellar y numerar los documentos del Archivo del Ministerio de Fomento.
- Orden de 18 de abril de 1873 mandando entregar a los Notarios-Archiveros, del respectivo partido judicial, los protocolos que fueron de la Corona y que correspondan a las Bailías y Administraciones del Patrimonio.
- Ley de 25 de junio de 1873 agregando, definitivamente, al Archivo de las Cortes el Archivo del Palacio que en Madrid ocupaban los Reyes de España.
- Decreto de 8 de julio de 1873 disponiendo que se establezca una Biblioteca popular en cada presidio.
- Orden de 5 de agosto de 1873 modificando las plantas del persona de la Secretaría y Archivo del Ministerio.
- Decreto de 12 de noviembre de 1873 disponiendo que se establezca en la Secretaría del Ministerio de Gracia y Justicia un Negociado especial de Archivo y Biblioteca que comprenda el Archivo general del Ministerio.
- Orden de 25 de noviembre de 1873 acordando la provisión de las plazas de Jefe del Archivo y las de Oficiales primero y segundo de la Biblioteca del Ministerio de Gracia y Justicia, y aprobando las reglas para los ejercicios de oposición a dichas plazas en la forma que se consignan.

- Decreto de 30 de septiembre de 1874 concediendo un suplemento del presupuesto vigente con destino a formar una Biblioteca en el Consejo de Estado.
- Real Orden de 29 de marzo de 1875 resolviendo que el cargo de Archivero de protocolos es obligatorio si recae el nombramiento en el Notario único de la cabeza del partido o en el más moderno si fuesen dos o más los residentes en ella.
- Real Orden de 23 de junio de 1876 dictando medidas para la adquisición de libros para las Bibliotecas populares.
- Real Orden de 16 de agosto de 1876 disponiendo que por la Dirección general de Agricultura, Industria y Comercio se proceda a la creación de la Biblioteca agrícola del Ministerio de Fomento.
- Real Decreto de 7 de noviembre de 1876 disponiendo que los protocolos de las Escribanías especiales de Marina pasen en su totalidad y bajo inventario a los Archivos generales de protocolos de los distritos notariales.
- Orden circular de 28 de agosto de 1878 haciendo varias prevenciones a los Jefes económicos para llevar a efecto el arreglo de Archivos provinciales.
- Real Decreto de 8 de noviembre de 1879 creando Bibliotecas militares en cada uno de los puntos donde existan conferencias de Oficiales.
- Real Orden de 12 de septiembre de 1881 creando dos Bibliotecas para las Direcciones generales de Instrucción Pública y Obras Públicas.
- Real Decreto de 28 de junio de 1882 autorizando al Ministro de Fomento para que presente a las Cortes un proyecto de ley concediendo un crédito permanente para la construcción del edificio destinado a Ministerio, Biblioteca y Museos Nacionales.
- Real Decreto de 12 de febrero de 1884 creando en el Ministerio de Gracia y Justicia una Biblioteca especial de Códigos, textos legales y jurisprudencia de países extranjeros y de España y constituyendo una Comisión permanente para el fomento de la expresada Biblioteca que se llamará de Legislación extranjera.

- Ley de 14 de agosto de 1884 autorizando al Ministerio de Fomento para adquirir la Biblioteca de los Duques de Osuna y del Infantado para cuyo objeto se concede un suplemento de 900.000 pesetas al crédito del artículo 1 del cap.15 de la Sección 7ª de las obligaciones de los departamentos ministeriales del presupuesto del año económico de 1884 a 1885.
- Real Decreto de 6 de octubre de 1885 creando una Biblioteca de Códigos y de textos legales en las Audiencias territoriales y de lo criminal.
- Real Decreto de 26 de noviembre de 1885 disponiendo que con motivo del fallecimiento del Rey D. Alfonso XII se publiquen todos los actos de Gobierno a nombre de S. M. la Reina Regente Dª María Cristina.
- Real Decreto de 6 de octubre de 1885 creando una Biblioteca de Códigos y de textos legales en cada una de las Audiencias territoriales y de lo criminal de la Península e Islas adyacentes que en la actualidad carezcan de esta institución.
- Real Decreto de 31 de julio de 1888 reorganizando los Archivos de Hacienda de las provincias y el servicio de los mismos al Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios.
- Real Decreto de 1 de septiembre de 1888 incorporando a la Dirección general de Instrucción pública los Archivos de Hacienda.
- Real Decreto de 5 de agosto de 1893 confiando al Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios la reorganización y servicios del Archivo general del Ministerio de Hacienda, cuyo personal dependerá del Ministerio de Fomento.
- Orden de 5 de marzo de 1894 disponiendo el traslado del Archivo Histórico Nacional al Palacio de Biblioteca y Museos.
- Ley de 30 de junio de 1894 encomendando todos los Archivos de la Administración central al Cuerpo de Archiveros y Bibliotecarios.
- Real Orden de 4 de agosto de 1894 creando el Museo de Arte contemporáneo.

- Real Decreto de 29 de agosto de 1895 disponiendo la forma de adquirir por cuenta del Estado obras con destino a las Bibliotecas públicas y a los Depósitos de libros.
- Real Decreto de 25 de octubre de 1895 disponiendo que el Museo de Arte Contemporáneo se denomine Museo de Arte moderno.
- Real Orden de 28 de febrero de 1896 para la creación de los Depósitos de libros en el Ministerio de Fomento.
- Real Orden de 4 de diciembre de 1896 dictando reglas encaminadas a mejorar la Biblioteca Nacional y disponiendo la obligación de remitir las obras literarias.
- Real Decreto de 8 de enero de 1897 aprobando el Reglamento del Museo de Arte moderno.
- Real Decreto de 22 de junio de 1898 creando un Archivo general militar.
- Real Decreto de 23 de junio de 1899 regulando reglas para la adquisición de libros.